LAICIDAD Y LIBERTADES
ESCRITOS JURÍDICOS

Nº 15
DICIEMBRE 2015

VOLUMEN II. CRÓNICAS LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES

EDITOR. Asociación Derecho, Laicidad y Libertades

tirant lo blanch

LAICIDAD Y LIBERTADES
ESCRITOS JURÍDICOS

LAICIDAD Y LIBERTADES
ESCRITOS JURÍDICOS

EDITOR. Asociación Derecho, Laicidad y Libertades
(Nº Registro Nacional 16613 de la Sección 1ª)

DIRECTOR

Dionisio Llamazares Fernández
Catedrático Emérito de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad Complutense de Madrid

SECRETARIA

Ana Fernández-Coronado González
Catedrática de D. Eclesiástico del Estado - Universidad Complutense de Madrid

CONSEJO DE REDACCIÓN

José María Contreras Mazarío
Catedrático de D. Eclesiástico del Estado - Universidad Pablo Olavide de Sevilla

Ana Fernández-Coronado González
Catedrática de D. Eclesiástico del Estado - Universidad Complutense de Madrid

Dionisio Llamazares Fernández
Catedrático Emérito de Derecho Eclesiástico del Estado - UCM

Gustavo Suárez Pertierra
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado - UNED

CONSEJO ASESOR EVALUADOR EXTERNO

Rafael de Asís Roig
Catedrático de Filosofía del Derecho - Universidad Carlos III de Madrid

Gregorio Cámara Villar
Catedrático de Derecho Constitucional - Universidad de Granada

Francesco Margiotta Broglio
Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico - Universidad de Florencia

Luciano Parejo Alfonso
Catedrático de Derecho Administrativo - Universidad Carlos III de Madrid

Alfonso Pérez-Agote
Catedrático de Sociología - Universidad Complutense de Madrid

José Manuel Pérez Prendes
Catedrático de Historia del Derecho - Universidad Complutense de Madrid

Manuel Puelles Benítez
Catedrático de Política de la Educación - Universidad de Educación a Distancia

José Antonio Souto Paz
Catedrático de D. Eclesiástico del Estado - Universidad Complutense de Madrid

Juan Terradillos Basoco
Catedrático de Derecho Penal - Universidad de Cádiz

LAICIDAD Y LIBERTADES
ESCRITOS JURÍDICOS

NÚMERO 15
VOLUMEN II. CRÓNICAS LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES

tirant lo blanch
Valencia, 2016

EDITA
ASOCIACIÓN "DERECHO, LAICIDAD Y LIBERTADES"
Comisión Directiva de la Asociación "Derecho, Laicidad y Libertades"

PRESIDENTE

Dionisio Llamazares Fernández
Catedrático Emérito de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad Complutense de Madrid

VICEPRESIDENTE

Gustavo Suárez Pertierra
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad Nacional de Educación a Distancia

SECRETARIA

Mª Cruz Llamazares Calzadilla
Catedrática Habilitada de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad Carlos III de Madrid

VICESECRETARIO

Alejandro Torres Gutiérrez
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad Pública de Navarra

ENVÍO DE ORIGINALES, CRÓNICAS LEGISLATIVAS Y JURISPRUDENCIALES Y RECENSIONES:

Ana Fernández-Coronado González
Facultad de Derecho. Despacho 307
Universidad Complutense
28040 Madrid
E-mail: afercor@der.ucm.es
Teléfono: 913945549

Los autores que firman sus colaboraciones expresan libremente sus opiniones, sin que miembro alguno del Consejo de Redacción las impida, censure, las modifique o se haga responsable de ellas

Número II. Marzo de 2016

ISSN: 1696-6937

"Laicidad y libertades. Escritos jurídicos" es una Revista científica anual editada por la Asociación "Derecho, Laicidad y libertades". En ella se publican trabajos científicos, inéditos y originales, que pretenden dar a conocer, tanto a la comunidad científica como a los profesionales del mundo del Derecho y todo aquel interesado en estas cuestiones, los avances más relevantes que se han producido en el campo de la libertad de conciencia, la laicidad y la protección de los derechos y libertades fundamentales. Además, se da cuenta de las novedades legislativas, jurisprudenciales y doctrinales, tanto del ámbito nacional como internacional, que estén relacionadas con estas cuestiones. Todo ello se realiza con la intención de abrir cauces de debate y análisis crítico y de estimular la investigación.

LAICIDAD Y LIBERTADES
ESCRITOS JURÍDICOS

NORMAS RELATIVAS A LA PUBLICACIÓN DE COLABORACIONES EN LA REVISTA

Los trabajos, que deberán ser originales, serán remitidos en formato Word, **antes del 1 de julio** a la Secretaria de la Revista:

Ana Fernández-Coronado González
E-mail: afercor@der.ucm.es
Facultad de Derecho. Despacho 307
Universidad Complutense
28040 Madrid.
Teléfono: 913945549

1. La *extensión* de los trabajos será la siguiente:
   * **Artículos**: un máximo de 30 páginas;
   * **Crónicas legislativas y jurisprudenciales**: un máximo 10 páginas. Junto con las crónicas se introducirá en Anexo la norma correspondiente, indicando la fuente, y en su caso, el nombre del traductor;
   * **Recensiones**: un máximo 10 páginas.
2. *Requisitos técnicos y formales*: los originales, no serán aceptados trabajos publicados en otras Revistas ni que se encuentren en proceso de evaluación en otras publicaciones, deberán ser enviados cumpliendo las siguientes indicaciones técnicas.

Tipo de archivo:	Word o formato compatible
Texto:	Tipo de letra Times New Roman (15 p.).
Interlineado:	sencillo.
Sangría:	primera línea, 1,25
Notas al pie:	Times New Roman (12 p.)
Interlineado:	sencillo

   En el caso de artículos (no será necesario en crónicas y recensiones) el autor debe introducir, tras el título del trabajo, un breve

sumario (de tres o cuatro líneas) incluyendo, únicamente, hasta dos niveles de epígrafe (p.e., 1.xxxxxxxx. 1.1xxxxxxx. 1.2.xxxxxxx. 2.xxxxxx, etc.; pero los apartados en que en su caso se subdividan los epígrafes 1.1 y 1.2 ya no deben reproducirse en el sumario).

Además en el caso de artículos, éstos deberán incluir:

- Traducción al inglés del título del trabajo.
- Bajo el título, firma de los trabajos por el autor con nombre y apellidos, indicando a continuación el nombre de la institución donde trabaja el autor o autores de los artículos.
- Resumen de unas quince líneas sobre el contenido del trabajo en idioma original y otro en inglés.
- Palabras clave en el idioma original del trabajo y en inglés.

El/la autor/a debe abstenerse de aplicar al título del artículo y a los epígrafes del mismo estilos de título recogidos en los procesadores de texto y que sirven para generar índices o tablas de contenido.

3. *Sistema de citas*: utilizar la función de notas al pie en el procesador de texto. Aplicar a los títulos de revistas o de monografías el formato de cursivas y no de subrayado.

Ejemplos:

Libros y monografías

LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., *Derecho de la libertad de conciencia (I). Libertad de conciencia y laicidad*, Civitas, 2ª ed., Madrid, 2002, p. xx.

Aportaciones en obras colectivas

SUÁREZ PERTIERRA, G., "Acuerdos y Convenios. Crisis de un modelo", en VVAA, *Libertad de conciencia, Laicidad y Derecho. Liber discipulorum en Homenaje al Prof. Dr. Dionisio Llamazares*, Civitas, Cizur Menor, 2014, pp. 225 a 253, vid. p.

Colaboraciones en publicaciones periódicas:

FERNÁNDEZ CORONADO, A., "La tutela penal de la libertad religiosa", en *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. II, 1983, pp. xx-xx.

Documentos de trabajo obtenidos en internet:

CONTRERAS MAZARIO, J. M., *Gestión Pública del hecho religioso en España*, Documento de Trabajo 181/2013, Fundación Alternativas (http://www.falternativas.org/publicaciones visitada Día/Mes/Año), vid. p.

4. *Criterios y forma de evaluación*: todos los artículos publicados en la Revista serán sometidos a una evaluación externa por pares. **Antes del 1 de julio**, el autor/a deberá remitir en formato WORD (o compatible) dos archivos:
   1. **uno de ellos** con todos los requisitos exigidos para la publicación y, como Anexo, una página con los datos autor, institución en la que desarrolla su actividad profesional y un CV breve;
   2. **un segundo** archivo similar pero donde NO DEBE CONSTAR EL NOMBRE DEL AUTOR, para garantizar el anonimato en la evaluación externa.

   El archivo anónimo será remitido a los evaluadores externos que en el plazo de 2 meses (fecha máxima: 9 de septiembre) evacuarán un informe donde podrán: a) proponer directamente su publicación; b) Identificar las deficiencias formales y materiales para que en un plazo de 1 mes sean subsanadas por el/la autor/a (fecha máxima 15 de octubre) y proponer su publicación una vez comprobado que se han subsanado los defectos encontrados por el Consejo de redacción; c) desaconsejar su publicación.

   Laicidad y Libertades emitirá un informe donde se publicarán las estadísticas de años anteriores sobre artículos publicados, rechazados y artículos que han sido publicados tras su subsanación.

   La evaluación se hará siguiendo el siguiente INFORME:

INFORME DE EVALUACIÓN

Revista Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos

(Por favor, cuando cumplimente le informe le rogamos que sea remitido a la Secretaria de la Revista: Ana Fernández-Coronado, en formato Word a: afercor@der.uned.es; y el original: Facultad de Derecho. Despacho 307. Universidad Complutense. 28040 Madrid)

TÍTULO DEL TRABAJO:

1. **A su juicio, ¿el trabajo supone una aportación científica original?:**

   A) Si ☐ B) No ☐

   Explique sus motivos:

2. **Respecto a la metodología utilizada, el uso de la fuentes doctrinales, jurisprudenciales y legislativas considera que:**

A) El manejo de las fuentes doctrinales, de la legislación y de la jurisprudencia más relevantes sobre la materia es:	1. Excelente ..... ☐ 2. Satisfactorio ..... ☐ 3. Escaso ..... ☐ Observaciones:
B) ¿Considera que la estructura, desarrollo argumental del trabajo y las conclusiones son?:	1. Brillantes ..... ☐ 2. Correctos..... ☐ 3 Insuficientes .... ☐ Observaciones:
C) ¿El trabajo es claro y está bien presentado?	1. Sí..... ☐ 2. No ..... ☐ Observaciones:

3. Según su valoración el trabajo debe:

a. Ser publicado..... ☐

b. No ser publicado..... ☐

c. Ser publicado tras subsanar el autor algunas carencias y defectos .. ☐

En caso de ser necesario, resuma los requisitos más importantes a subsanar:

ÍNDICE GENERAL

LAICIDAD Y LIBERTADES
ESCRITOS JURÍDICOS

CRONICA LEGISLATIVA

ESPAÑA. LEGISLACIÓN
Fernando Amérigo

FRANCIA. SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA
Mª Ángeles Félix Ballesta

GRECIA. CRÓNICA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL DE GRECIA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL HELENO (LEY 4055/2012) EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS, PARA ADECUARLO A LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH (DIMITRAS VS. GRECIA DE 2010, 2011 Y 2013)
Salvador Tarodo Soria

IRLANDA. REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA LEGALIZACIÓN DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO
Mercedes Vidal Gallardo

ITALIA
Paulino César Pardo Prieto

PAÍSES BAJOS. MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE LOS PAÍSES BAJOS PARA ABOLIR EL DELITO DE BLASFEMIA
Yolanda García Ruiz

PAÍSES DEL ESTE
Almudera Rodríguez Moya
Salvador Pérez Álvarez
José Daniel Pelayo Olmedo

PORTUGAL. CRÓNICA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL DE PORTUGAL (2013-1015)
Salvador Tarodo Soria

REINO UNIDO. CRÓNICA LEGISLATIVA
Mª Cruz Llamazares Calzadilla

CRONICA JURIPRUDENCIAL

ESPAÑA
Fernando Amérigo

IRLANDA. SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN QUE VINCULA A UN CAPELLÁN/PROFESOR DE RELIGIÓN CON EL CENTRO DOCENTE EN QUE PRESTA SERVICIOS: Caso Conroy —v— Board of Management of Gorey Community School
Mercedes Vidal Gallardo

ITALIA
Paulino César Pardo Prieto

REINO UNIDO. CRÓNICA JURISPRUDENCIAL
Mª Cruz Llamazares Calzadilla

USA. LA SECULARIZACIÓN DEL MATRIMONIO Y EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL MATRIMONIO A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO
Óscar Celador Angón

CRONICA LEGISLATIVA

ESPAÑA
LEGISLACIÓN

Fernando Amérigo
(IUCCRR-UCM)

CONCESIÓN DE NACIONALIDAD A LOS SAFARDÍES

Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España[1]

PREÁMBULO

I

Se denomina sefardíes a los judíos que vivieron en la Península Ibérica y, en particular, a sus descendientes, aquéllos que tras los Edictos de 1492 que compelían a la conversión forzosa o a la expulsión tomaron esta drástica vía. Tal denominación procede de la voz "Sefarad", palabra con la que se conoce a España en lengua hebrea, tanto clásica como contemporánea. En verdad, la presencia judía en tierras ibéricas era firme y milenaria, palpable aún hoy en vestigios de verbo y de piedra. Sin embargo, y por imperativo de la historia, los judíos volvieron a emprender los caminos de la diáspora, agregándose o fundando comunidades nuevas sobre todo en el norte de África, en los Balcanes y en el Imperio Otomano.

Los hijos de Sefarad mantuvieron un caudal de nostalgia inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones. Como soporte conservaron el ladino o la haketía, español primigenio enriquecido con los préstamos de los idiomas de acogida. En el lenguaje de sus ancestros remedaban los rezos y las recetas, los juegos y los romances. Mantuvieron los usos, respetaron los nombres que tantas veces invocaban la horma de su origen, y aceptaron sin rencor el silencio de la España mecida en el olvido.

La memoria y la fidelidad han permanecido a lo largo de los tiempos en una numerosa comunidad que mereció el honor de recibir su recono-

---

[1] BOE núm.

cimiento con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1990. Fue una decisión animada por el deseo de contribuir, después de casi cinco siglos de alejamiento, a un proceso de concordia que convoca a las comunidades sefardíes al reencuentro con sus orígenes, abriéndoles para siempre las puertas de su antigua patria. El otorgamiento de este premio había sido precedido, poco antes por un acontecimiento histórico: la primera visita de un Rey de España a una sinagoga. Fue el 1 de octubre de 1987 en el templo sefardí Tifereth Israel de Los Ángeles, California.

En los albores del siglo XXI, las comunidades sefardíes del mundo se enfrentan a nuevos desafíos: algunas quedaron maltrechas bajo la furia de los totalitarismos, otras optaron por los caminos de retorno a su añorada Jerusalén; todas ellas vislumbran una identidad pragmática y global en las generaciones emergentes. Palpita en todo caso el amor hacia una España consciente al fin del bagaje histórico y sentimental de los sefardíes. Se antoja justo que semejante reconocimiento se nutra de los oportunos recursos jurídicos para facilitar la condición de españoles a quienes se resistieron, celosa y prodigiosamente, a dejar de serlo a pesar de las persecuciones y padecimientos que inicuamente sufrieron sus antepasados hasta su expulsión en 1492 de Castilla y Aragón y, poco tiempo después, en 1498, del reino de Navarra. La España de hoy, con la presente Ley, quiere dar un paso firme para lograr el reencuentro de la definitiva reconciliación con las comunidades sefardíes.

La formación en España de una corriente de opinión favorable a los sefardíes proviene de tiempos de Isabel II, cuando las comunidades judías obtuvieron licencias para poseer cementerios propios, por ejemplo, en Sevilla y, más tarde, la autorización para abrir algunas sinagogas.

Siendo Ministro de Estado Fernando de los Ríos se estudió por la Presidencia del Gobierno la posibilidad de conceder, de manera generalizada, la nacionalidad española a los judíos sefardíes de Marruecos, pero se abandonó la idea por la oposición que se encontró en algunos medios magrebíes. También es de justicia reconocer que en 1886, a impulsos de Práxedes Mateo Sagasta, y en 1900 bajo la promoción del senador Ángel Pulido, se inició un acercamiento hacia los sefardíes, fruto del cual el Gobierno autorizó la apertura de sinagogas en España, la fundación de la Alianza Hispano-Hebrea en Madrid en 1910 y la constitución de la Casa Universal de los Sefardíes en 1920. Todo ello reforzó los vínculos entre los sefardíes y España.

Históricamente, la nacionalidad española también la adquirieron los sefardíes en circunstancias excepcionales. Ejemplo de ello fue el Real Decreto de 20 de diciembre de 1924, en cuya exposición de motivos se alude a los "antiguos protegidos españoles o descendientes de éstos y, en general, a los individuos pertenecientes a familias de origen español que en alguna ocasión han sido inscritas en registros españoles y estos elementos hispanos, con sentimientos arraigados de amor a España, por desconocimiento de la ley y por otras causas ajenas a su voluntad de ser españoles, no han logrado obtener nuestra nacionalidad". Se abría así un proceso de naturalización que permitía a los sefardíes obtener la nacionalidad española dentro de un plazo que se prolongó hasta 1930. Apenas tres mil sefardíes ejercitaron ese derecho. Sin embargo, después de finalizado el plazo, muchos recibieron la protección de los Cónsules de España incluso sin haber obtenido propiamente la nacionalidad española.

El transcurso de la II Guerra Mundial situó bajo administración alemana a aproximadamente doscientos mil sefardíes. Florecientes comunidades de Europa Occidental y, sobre todo, de los Balcanes y Grecia padecieron la barbarie nazi con cifras sobrecogedoras como los más de cincuenta mil muertos de Salónica, una ciudad de profunda raíz sefardí. El sacrificio brutal de miles de sefardíes es el vínculo imperecedero que une a España con la memoria del Holocausto.

El Real Decreto de 20 de diciembre de 1924 tuvo una utilidad inesperada en la que probablemente no pensaron sus redactores: fue el marco jurídico que permitió a las legaciones diplomáticas españolas, durante la Segunda Guerra Mundial, dar protección consular a aquellos sefardíes que habían obtenido la nacionalidad española al amparo de ese Decreto. El espíritu humanitario de estos diplomáticos amplió la protección consular a los sefardíes no naturalizados y, en último término, a muchos otros judíos. Es el caso, entre otros, de Ángel Sanz Briz en Budapest, de Sebastián de Romero Radigales en Atenas, de Bernardo Rolland de Miotta en París, de Julio Palencia en Sofía, de José de Rojas y Moreno en Bucarest, de Javier Martínez de Bedoya en Lisboa, o de Eduardo Propper de Callejón en Burdeos. Miles de judíos escaparon así del Holocausto y pudieron rehacer sus vidas.

III

En la actualidad existen dos cauces para que los sefardíes puedan obtener la nacionalidad española. Primero, probando su residencia legal en

España durante al menos dos años, asimilándose ya en estos casos a los nacionales de otros países con una especial vinculación con España, como las naciones iberoamericanas. Y, en segundo lugar, por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente, cuando en el interesado concurran circunstancias excepcionales. Como corolario, la Ley concreta ahora que concurren aquellas circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 21 del Código Civil, en los sefardíes originarios de España, que prueben dicha condición y su especial vinculación con España. Asimismo determina los requisitos y condiciones a tener en cuenta para la justificación de aquella condición. Con ello se satisface una legítima pretensión de las comunidades de la diáspora sefardí cuyos antepasados se vieron forzados al exilio. Entre la documentación solicitada adquiere singular relevancia el certificado expedido por la Federación de Comunidades Judías de España, en coherencia con el contenido del Acuerdo de Cooperación con el Estado aprobado por la Ley 25/1992, de 10 de noviembre.

Asimismo, es necesario proceder también, como complemento de lo anterior, a la reforma del artículo 23 del Código Civil para evitar que al adquirir la nacionalidad española deban renunciar a la previamente ostentada. Hasta el momento, los sefardíes son los únicos a quienes, concediéndoseles la nacionalidad con dos años de residencia se les obliga a esta renuncia.

En definitiva, la presente Ley pretende ser el punto de encuentro entre los españoles de hoy y los descendientes de quienes fueron injustamente expulsados a partir de 1492, y se justifica en la común determinación de construir juntos, frente a la intolerancia de tiempos pasados, un nuevo espacio de convivencia y concordia, que reabra para siempre a las comunidades expulsadas de España las puertas de su antiguo país.

IV

La norma se estructura en dos artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria y seis disposiciones finales.

Artículo 1. ***Concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes originarios de España***

1. A los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 21 del Código Civil, en cuanto a las circunstancias excepcionales que se exigen para adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza, se entiende que tales circunstancias concurren en los sefardíes originarios de España

que prueben dicha condición y una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país.

2. La condición de sefardí originario de España se acreditará por los siguientes medios probatorios, valorados en su conjunto:

a) Certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España.

b) Certificado expedido por el presidente o cargo análogo de la comunidad judía de la zona de residencia o ciudad natal del interesado.

c) Certificado de la autoridad rabínica competente, reconocida legalmente en el país de la residencia habitual del solicitante.

   El interesado podrá acompañar un certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España que avale la condición de autoridad de quien lo expide. Alternativamente, para acreditar la idoneidad de los documentos mencionados en las letras b) y c) el solicitante deberá aportar:

   1º Copia de los Estatutos originales de la entidad religiosa extranjera.

   2º Certificado de la entidad extranjera que contenga los nombres de quienes hayan sido designados representantes legales.

   3º Certificado o documento que acredite que la entidad extranjera está legalmente reconocida en su país de origen.

   4º Certificado emitido por el representante legal de la entidad que acredite que el Rabino firmante ostenta, efectiva y actualmente, tal condición conforme a los requisitos establecidos en sus normas estatutarias.

   Además, los documentos a que hacen referencia los párrafos anteriores, excepción hecha del certificado expedido por el Presidente de la Comisión Permanente de la Federación de Comunidades Judías de España, se encontrarán, en su caso, debidamente autorizados, traducidos al castellano por traductor jurado y en los mismos deberá figurar la Apostilla de La Haya o el sello de la legalización correspondiente.

d) Acreditación del uso como idioma familiar del ladino o "haketía", o por otros indicios que demuestren la tradición de pertenencia a tal comunidad.

e) Partida de nacimiento o la "ketubah" o certificado matrimonial en el que conste su celebración según las tradiciones de Castilla.

f) Informe motivado, emitido por entidad de competencia suficiente, que acredite la pertenencia de los apellidos del solicitante al linaje sefardí de origen español.

g) Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su condición de sefardí originario de España.

3. La especial vinculación con España se acreditará por los siguientes medios probatorios, valorados en su conjunto:

a) Certificados de estudios de historia y cultura españolas expedidos por instituciones oficiales o privadas con reconocimiento oficial.

b) Acreditación del conocimiento del idioma ladino o "haketía".

c) Inclusión del peticionario o de su ascendencia directa en las listas de familias sefardíes protegidas por España, a que, en relación con Egipto y Grecia, hace referencia el Decreto-ley de 29 de diciembre de 1948, o de aquellos otros que obtuvieron su naturalización por la vía especial del Real Decreto de 20 de diciembre de 1924.

d) Parentesco de consanguinidad del solicitante con una persona de las mencionadas en la letra c) anterior.

e) Realización de actividades benéficas, culturales o económicas a favor de personas o instituciones españolas o en territorio español, así como aquellas que se desarrollen en apoyo de instituciones orientadas al estudio, conservación y difusión de la cultura sefardí.

f) Cualquier otra circunstancia que demuestre fehacientemente su especial vinculación con España.

4. En todo caso, se deberá aportar un certificado de nacimiento debidamente legalizado o apostillado y, en su caso, traducido.

5. Asimismo, la acreditación de la especial vinculación con España exigirá la superación de dos pruebas.

La primera prueba acreditará un conocimiento básico de la lengua española, nivel A2, o superior, del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas del Consejo de Europa, mediante la superación de un

examen para la obtención de un diploma español como lengua extranjera DELE de nivel A2 o superior.

En la segunda prueba se evaluará el conocimiento de la Constitución Española y de la realidad social y cultural españolas.

Estas pruebas serán diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Los solicitantes nacionales de países o territorios en los que el español sea idioma oficial estarán exentos de la prueba de dominio del español pero no de la de conocimientos constitucionales y socioculturales.

Solo deberán realizar el examen DELE y la prueba de conocimiento de la Constitución Española y la realidad social y cultural españolas, los mayores de dieciocho años y personas que no tuvieran capacidad modificada judicialmente. Los menores y personas con capacidad modificada judicialmente quedan exentos y deberán aportar certificados de sus centros de formación, residencia, acogida, atención o educación especial en los que, en su caso, hubieran estado inscritos.

Artículo 2. ***Procedimiento***

1. El procedimiento de concesión de nacionalidad regulado en esta Ley será electrónico. La solicitud se formulará en castellano e irá dirigida a la Dirección General de los Registros y del Notariado. En el acto se facilitará al solicitante un número identificador de su solicitud.

2. La solicitud se remitirá telemáticamente al Consejo General del Notariado. Este Consejo, a través de los cauces que establezca, le dará curso teniendo en cuenta las preferencias manifestadas por el interesado, y determinará el notario competente para valorar la documentación aportada.

3. Examinados los documentos, cuando se estime inicialmente justificada la condición de sefardí originario de España así como la especial vinculación con España del solicitante, el notario concertará con este su comparecencia de la que se levantará acta. A esta se incorporarán los documentos originales probatorios aportados por el interesado a los que se refiere el artículo anterior, debidamente traducidos en su caso, y, para los solicitantes mayores de edad, el certificado o certificados de antecedentes penales correspondientes a su país de origen y de aquellos donde hubiera residido en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a la solicitud. Todos estos documentos deberán presentarse debidamente

autorizados y apostillados o legalizados y, en su caso, traducidos, debiendo ser la traducción jurada. En la comparecencia personal o a través de su representante legal el requirente deberá aseverar bajo su responsabilidad ante el notario autorizante la certeza de los hechos en que se funda su solicitud de nacionalización.

Realizada la comparecencia del interesado, y examinados todos los documentos probatorios aportados, el notario considerará si estima o no justificada la condición de sefardí originario de España y la especial vinculación con España del solicitante, expresando su juicio acerca del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1 y lo expresará mediante acta.

Dicha acta estará sujeta a lo dispuesto en el Reglamento Notarial con las siguientes particularidades:

a) El requerimiento para la instrucción del acta y la declaración por el notario acerca del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 1 se realizarán en un mismo instrumento, que se incorporará al protocolo en la fecha y bajo el número correspondientes al requerimiento inicial.

b) El notario valorará las pruebas documentales pertinentes de entre las previstas en el artículo 1 y, a la vista de los documentos aportados y de la declaración del requirente, hará constar si se cumplen o no, a su juicio, los requisitos legales.

c) Una vez autorizada, el notario remitirá copia electrónica del acta, en el formato uniforme que determinará mediante resolución la Dirección General de los Registros y del Notariado, que será remitida telemáticamente a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

4. Recibida el acta de notoriedad, que dará fe de los hechos acreditados, la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitará preceptivamente informes de los órganos correspondientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Presidencia, resolviendo de manera motivada y declarando, en su caso, la estimación de la solicitud.

5. La resolución dictada será título suficiente para la práctica de la correspondiente inscripción en el Registro Civil, previo cumplimiento del requisito del juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes exigido en la letra a) del artículo 23 del Código Civil, junto con los demás que se establecen en el apartado siguiente. La

Dirección General de los Registros y del Notariado remitirá de oficio una copia de la resolución al Encargado del Registro Civil competente para la inscripción del nacimiento.

6. La eficacia de la resolución de concesión quedará supeditada a que, en el plazo de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de la resolución al interesado, este cumpla con las siguientes condiciones ante el Registro Civil competente por razón de su domicilio:

a) Solicitar la inscripción.

b) Aportar un nuevo certificado vigente acreditativo de la ausencia de antecedentes penales, legalizado o apostillado y, en su caso traducido.

c) Realizar ante el Encargado del Registro Civil las manifestaciones legalmente procedentes, relativas al juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.

El incumplimiento por el interesado de las anteriores condiciones en el plazo establecido producirá la caducidad del procedimiento.

Disposición adicional primera. *Plazos*

1. Los interesados deben formalizar su solicitud en el plazo de tres años desde la entrada en vigor de la presente Ley. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo del Consejo de Ministros un año más.

2. Las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española reguladas en la presente Ley habrán de ser resueltas en el plazo máximo de doce meses desde que hubiera tenido entrada en la Dirección General de los Registros y del Notariado el expediente junto con los informes previstos en el apartado 4 del artículo 2.

3. Transcurrido el plazo anterior sin que hubiera recaído resolución expresa, las solicitudes habrán de entenderse desestimadas por silencio administrativo.

Disposición adicional segunda. *Procedimiento electrónico y tasa por tramitación de expedientes*

1. El Ministerio de Justicia regulará el procedimiento electrónico para la tramitación de los procedimientos de obtención de la nacionalidad española por residencia, carta de naturaleza o dispensa.

2. El procedimiento para la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a que se refiere la presente Ley devengará una tasa

de 100 euros por la tramitación administrativa de cada solicitud. Constituye el hecho imponible de la tasa la solicitud de iniciación del procedimiento para obtener la nacionalidad española y estará sujeto a ella quien la solicite, con independencia del resultado del procedimiento.

La gestión de la tasa corresponderá al Ministerio de Justicia, que regulará cómo ha de efectuarse el pago de la misma.

Disposición adicional tercera. ***Circunstancias excepcionales y razones humanitarias***

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado 1 de la disposición adicional primera, cuando se acrediten circunstancias excepcionales o razones humanitarias, los sefardíes que cumplan con los requisitos de la presente Ley y acogiéndose a su procedimiento, podrán solicitar la obtención de la nacionalidad española, cuyo otorgamiento corresponderá al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Justicia.

Disposición adicional cuarta. ***Inscripciones en el Registro Civil***

Para las inscripciones que deban practicarse en el Registro Civil como consecuencia de la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a los sefardíes de origen español que acrediten especial vinculación con España, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, será competente el Encargado del Registro Civil que lo fuera para la inscripción del nacimiento.

Disposición transitoria única. ***Concurrencia de procedimientos***

1. Quienes por cumplir los requisitos previstos en la presente Ley estén incluidos en su ámbito subjetivo de aplicación y, con anterioridad a su entrada en vigor, hayan solicitado la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a través del procedimiento ordinario e individualizado sin haber recibido notificación de la correspondiente resolución, podrán optar por la continuación de la tramitación de su expediente de acuerdo con el procedimiento que se regula mediante esta Ley y a tal fin lo solicitarán expresamente y aportarán la documentación que se requiera conforme a lo previsto en el artículo 2 que no hubieran ya aportado.

2. El ejercicio de la opción deberá realizarse a través de la plataforma electrónica establecida en la disposición adicional segunda durante el plazo señalado en el apartado 1 de la disposición adicional primera. Realizada la opción, la tramitación del correspondiente expediente de nacio-

nalidad por carta de naturaleza, ya incoado, continuará su tramitación con arreglo a las previsiones sustantivas y procedimentales contenidas en esta Ley, si bien el interesado, personalmente o por medio de persona autorizada, podrá solicitar de la Dirección General de los Registros y del Notariado el desglose de los documentos aportados en su momento al expediente para incorporarlos ahora al acta de notoriedad y podrá también, personalmente o por medio de persona autorizada, completar el expediente con la documentación que se requiera conforme a lo previsto en el artículo 2 que no haya sido aportada previamente u otorgar nueva acta notarial si fuera necesario. Todas las solicitudes, incluidas las de opción, serán tramitadas por el orden de recepción de los documentos e informes exigidos.

Disposición final primera. *Modificación del Código Civil*

El artículo 23 del Código Civil queda redactado de la siguiente forma:

> "**Artículo 23**.
>
> Son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia:
>
> a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
>
> b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España.
>
> c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español".

Disposición final segunda. *Modificación del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre*

Se añade una nueva disposición adicional duodécima al Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, con la siguiente redacción:

> "**Disposición adicional duodécima**. ***Acceso a la nacionalidad española en condiciones de igualdad***
>
> Las personas con discapacidad accederán en condiciones de igualdad a la nacionalidad española. Será nula cualquier norma que provoque la discriminación, directa o indirecta, en el acceso de las personas a la nacionalidad por residencia por razón de su discapacidad. En los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española, las personas con discapacidad que lo

precisen dispondrán de los apoyos y de los ajustes razonables que permitan el ejercicio efectivo de esta garantía de igualdad".

Disposición final tercera. ***Supletoriedad***

En todo lo no previsto en la presente Ley será de aplicación con carácter supletorio lo dispuesto en la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y, en su defecto, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Disposición final cuarta. ***Habilitación***

Se habilita al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones que sean necesarias para la ejecución de lo establecido en esta Ley.

Disposición final quinta. ***Título competencial***

La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.2ª de la Constitución Española en lo relativo a nacionalidad.

Disposición final sexta. ***Entrada en vigor***

La presente Ley entrará en vigor el 1 de octubre de 2015.

NOTORIO ARRAIGO

Real Decreto 593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España[2]

La Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, en su artículo 7.1, se refiere a la declaración de notorio arraigo en España de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro del Ministerio de Justicia.

El procedimiento para la declaración de notorio arraigo que se ha venido aplicando se articulaba mediante la intervención e informe de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en virtud de lo dispuesto en el artí-

[2] BOE núm. 183 de 1 de agosto de 2015.

culo 8 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, y del artículo 3.e) del Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

Tras la declaración de notorio arraigo en España del Protestantismo (1984), el Judaísmo (1984) y de la Religión Islámica (1989) y la firma de los Acuerdos de cooperación del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España, aprobados respectivamente por la Ley 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, se ha declarado el notorio arraigo en España de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (2003), de la Iglesia de los Testigos de Jehová (2006), del Budismo (2007) y de la Iglesia Ortodoxa (2010), lo que ha suscitado la necesidad de objetivar las condiciones para su obtención.

A esta cuestión intenta responder la regulación contenida en este real decreto estableciendo unos requisitos precisos para obtener la declaración de notorio arraigo en España y un procedimiento público con todas las garantías, con lo que se reduce el margen de la discrecionalidad de la Administración y se aumenta el grado de certidumbre de los solicitantes de esta declaración.

La declaración de notorio arraigo debe abarcar unas notas comunes que caractericen a cualquier iglesia, confesión, comunidad religiosa o federación de las mismas que deben conocerse con carácter previo por parte de los diversos grupos religiosos, pero también por parte de la sociedad. Debe permitir acreditar que goza de una presencia estable y acreditada en el tiempo en España mediante su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, o bien en algún país extranjero, pero que en todo caso aporte la nota de estabilidad y permanencia en el tiempo. Asimismo, el arraigo debe asociarse a la presencia activa en la sociedad española y su implantación en el territorio de varias comunidades autónomas y con un número representativo de entidades y lugares de culto inscritos en el Registro de Entidades Religiosas. Igualmente, debe contar con una estructura interna y representación adecuada a su propia organización.

El real decreto regula un procedimiento para acreditar tales requisitos que finaliza con una resolución controlable judicialmente, lo que representa un indudable avance en las garantías de los solicitantes. También regula el procedimiento administrativo por el cual puede perderse la con-

dición de notorio arraigo por modificación sustancial de las circunstancias requeridas para la obtención de la misma.

En la elaboración de este real decreto se ha tenido en cuenta el informe del Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, por lo que se ha dado audiencia a las confesiones religiosas que tienen reconocido notorio arraigo en España, a los representantes de la Administración General del Estado y a los vocales de reconocida competencia en el ámbito de la libertad religiosa que forman parte de la Comisión.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de julio de 2015,

DISPONGO:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto*

Este real decreto tiene por objeto regular el procedimiento para la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en España, de conformidad con el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. Asimismo regula el procedimiento por el cual puede perderse la declaración de notorio arraigo por modificación sustancial de las circunstancias requeridas para la obtención de la misma.

Artículo 2. *Ámbito de aplicación*

Este real decreto es de aplicación a las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como a las Federaciones de las mismas, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.

CAPÍTULO II
Procedimiento para la declaración de notorio arraigo en España

Artículo 3. *Requisitos*

Para la declaración de notorio arraigo en España a que se refiere el artículo 7.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, las iglesias, confesiones o comunidades religiosas deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Llevar inscritas en el Registro de Entidades Religiosas treinta años, salvo que la entidad acredite un reconocimiento en el extranjero de, al menos, sesenta años de antigüedad y lleve inscrita en el citado Registro durante un periodo de quince años.
b) Acreditar su presencia en, al menos, diez comunidades autónomas y/o ciudades de Ceuta y Melilla.
c) Tener 100 inscripciones o anotaciones en el Registro de Entidades Religiosas, entre entes inscribibles y lugares de culto, o un número inferior cuando se trate de entidades o lugares de culto de especial relevancia por su actividad y número de miembros.
d) Contar con una estructura y representación adecuada y suficiente para su organización a los efectos de la declaración de notorio arraigo.
e) Acreditar su presencia y participación activa en la sociedad española.

Artículo 4. ***Procedimiento de declaración de notorio arraigo***

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la entidad interesada dirigida al titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, en la que deberán constar los siguientes datos:

a) Identificación de la entidad solicitante con indicación de su número de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas.
b) Identificación de los representantes legales de la entidad.
c) Memoria explicativa que acredite el cumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo anterior.
d) Domicilio a efectos de notificaciones.

Si la entidad solicitante formara parte de una federación o existiera un órgano superior inscrito de ámbito nacional, deberán ser estos últimos quienes presenten la solicitud.

La solicitud, junto con la documentación que deba acompañarse, podrá presentarse en formato y con firma electrónica en el Registro Electrónico del Ministerio de Justicia.

La instrucción y propuesta de resolución del procedimiento corresponderá a la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones.

Si la solicitud no reúne los requisitos que señala el artículo anterior y los apartados 1 y 2 de este artículo, se requerirá a la entidad solicitante

para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El encargado de la instrucción del procedimiento podrá requerir a la entidad solicitante para que aporte la información o la documentación complementaria que considere necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto.

A efectos de la resolución del procedimiento, y de conformidad con lo previsto en el artículo 3.e) del Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, se solicitará a esta Comisión Asesora que emita informe, que tendrá carácter de preceptivo y no vinculante.

Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a la entidad solicitante para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Si antes del vencimiento del plazo la entidad solicitante manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

Artículo 5. *Resolución*

El órgano competente para resolver el procedimiento es el Ministro de Justicia, mediante Orden ministerial. En ésta se expresará si se acuerda conforme con el informe de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa o si se aparta de él. En el primer caso, se usará la fórmula "de acuerdo con la Comisión Asesora de Libertad Religiosa"; en el segundo, la de "oída la Comisión Asesora de Libertad Religiosa".

La resolución en la que se declare el notorio arraigo de la confesión religiosa en España se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", sin perjuicio de que toda resolución que ponga fin al procedimiento sea debidamente notificada a la entidad solicitante.

Transcurrido el plazo de seis meses, a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de

Justicia, si no se hubiese dictado y notificado la resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Justicia en los términos establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

Artículo 6. ***Alcance de la declaración de notorio arraigo instado por federaciones***

Cuando la solicitud de declaración de notorio arraigo haya sido presentada por una federación de iglesias, confesiones o comunidades religiosas, el notorio arraigo será reconocido a favor de la religión o creencia religiosa, pero los efectos derivados de la declaración serán atribuidos a aquellas entidades que formen parte de la federación como garante de la continuidad del cumplimiento de los requisitos exigidos para su declaración.

CAPÍTULO III
Procedimiento para la pérdida de la condición de notorio arraigo en España

Artículo 7. ***Supuestos de pérdida***

La pérdida de la condición de notorio arraigo en España se produce por la modificación sustancial de alguna de las circunstancias requeridas para la obtención de la misma previstas en los apartados b), c), d) y e) del artículo 3.

Artículo 8. ***Procedimiento para la pérdida de notorio arraigo***

El procedimiento para la pérdida de notorio arraigo se iniciará de oficio por acuerdo del titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones.

Con anterioridad al acuerdo de iniciación del procedimiento, se podrá abrir un período de información previa con audiencia al interesado, con el

objeto de determinar las circunstancias concretas, su alcance y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

A la vista de lo actuado, el titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones podrá acordar la iniciación del procedimiento para la pérdida de la condición de notorio arraigo en España.

La instrucción y propuesta de resolución del procedimiento corresponderá a la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones.

A efectos de la resolución del procedimiento, y de conformidad con lo previsto en el artículo 3.e) del Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, se solicitará a esta Comisión Asesora que emita informe, que tendrá carácter de preceptivo y no vinculante.

Instruido el procedimiento, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a la entidad solicitante para que, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, pueda alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Si antes del vencimiento del plazo la entidad solicitante manifiesta su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

Artículo 9. *Resolución*

El órgano competente para resolver el procedimiento es el Ministro de Justicia, mediante Orden ministerial. En ésta se expresará si se acuerda conforme con el informe de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa o si se aparta de él. En el primer caso, se usará la fórmula "de acuerdo con la Comisión Asesora de Libertad Religiosa"; en el segundo, la de "oída la Comisión Asesora de Libertad Religiosa".

La resolución en la que se declare la pérdida del notorio arraigo de la confesión religiosa en España se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", sin perjuicio de que toda resolución que ponga fin al procedimiento sea debidamente notificada a la entidad interesada.

Transcurrido el plazo de seis meses, a partir de la fecha en que se haya acordado el inicio del procedimiento, sin que se hubiese dictado y notificado la resolución, se producirá la caducidad del procedimiento. La resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones,

con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Contra la resolución del procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministro de Justicia en los términos establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en los términos establecidos en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Artículo 10. ***Alcance de la pérdida de notorio arraigo***

Cuando la solicitud de declaración de notorio arraigo hubiera sido presentada por una federación de iglesias, confesiones o comunidades religiosas, la declaración de pérdida del notorio arraigo será extendida a la religión o creencia religiosa, y los efectos derivados de la declaración serán atribuidos a aquellas entidades que formen parte de la federación.

Disposición adicional única. ***Comunicación y publicidad electrónica***

fin de dar cumplimiento a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en la solicitud de notorio arraigo así como en la tramitación del procedimiento se promoverá la utilización de los medios electrónicos previstos en la misma.

Disposición transitoria única. ***Régimen aplicable a las solicitudes en trámite***

Las solicitudes para la declaración de notorio arraigo en España que estuvieran en trámite en la fecha de entrada en vigor de este real decreto se regirán por el procedimiento vigente en el momento de su inicio.

Disposición final primera. ***Normativa supletoria***

Las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se aplicarán supletoriamente a lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposición final segunda. ***Título competencial***

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la

igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimento de los deberes constitucionales.

Disposición final tercera. ***Entrada en vigor***

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

Registro de Entidades Religiosas

REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS

Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas[3]

I

El Registro de Entidades Religiosas es un instrumento jurídico cualificado al servicio del ejercicio colectivo del derecho fundamental de libertad religiosa, garantizado en el artículo 16 de la Constitución española de 27 de diciembre de 1978, por cuanto la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa dispuso que "las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente registro público que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia".

La constitución y funcionamiento de dicho Registro se reguló mediante el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas. Esta norma fue completada, en algunos aspectos, por otras de igual o inferior rango, como fueron el Real Decreto 589/1984, de 8 de febrero, sobre Fundaciones religiosas de la Iglesia Católica, y la Orden de 11 de mayo de 1984, sobre Publicidad del Registro de Entidades Religiosas.

Con posterioridad se han incorporado al ordenamiento jurídico otras normas que han afectado al funcionamiento del Registro como han sido, entre otras, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento

3 BOE Núm. 183 de 1 de agosto de 2015.

de la Administración General del Estado, o la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, modificadas a su vez por diversas leyes. También, las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre, por las que se aprobaron, respectivamente, los Acuerdos de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión Islámica de España.

El presente real decreto viene a modificar la regulación jurídica del Registro de Entidades Religiosas después de más de 30 años de vigencia. La regulación actual ha quedado superada y no responde adecuadamente a las necesidades actuales del Registro. El carácter específico de muchas de las actuaciones solicitadas al Registro de Entidades Religiosas no puede encontrar siempre una respuesta eficiente con la aplicación supletoria de la normativa sobre procedimiento administrativo común.

Este nuevo marco jurídico tiene como referencia la doctrina derivada de la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2001, de 15 de febrero, y la aplicación que de la misma han venido haciendo los Tribunales a partir de la interpretación de la naturaleza de la función del Registro de Entidades Religiosas como de "mera constatación, que no de calificación", que se extiende a la comprobación de que la entidad no es alguna de las excluidas por el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 7/1980, de 7 de julio, ni excede de los límites previstos en el artículo 3.1 de la misma ley, sin que pueda realizar un control de la legitimidad de las creencias religiosas.

Igualmente, la reforma se inscribe en las directrices que marcara la OSCE/ODHIR en su cincuenta y nueve sesión plenaria, celebrada en junio de 2004, actualizadas en la sesión que tuvo lugar el pasado 13 y 14 de junio de 2014, en la cual se reconoce la importancia del derecho a adquirir y mantener la personalidad jurídica y la imposibilidad de que los diferentes Estados puedan imponer sanciones o limitaciones a los grupos religiosos que impidan la adquisición de personalidad jurídica mediante su acceso al Registro. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido en numerosas sentencias que el registro es uno de los más importantes aspectos del derecho de asociación. Esto es, que las restricciones al derecho a obtener la personalidad jurídica por parte de los grupos religiosos son contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto, por violación del derecho de asociación y del derecho a la libertad religiosa. La adquisición de personalidad jurídica constituye un

derecho para las entidades religiosas según expresa el Tribunal Constitucional en la mencionada Sentencia 46/2001 siendo que, en nuestro sistema, dicha adquisición se produce por el acceso al Registro de Entidades Religiosas, tal como se ha señalado más arriba. La nueva normativa se enmarca, igualmente, en las Orientaciones de la Unión Europea sobre el fomento y la protección de la libertad de religión y creencias aprobadas por el Consejo de la Unión Europea el 24 de junio de 2013 cuando afirma que el requisito del registro se ha de configurar como un medio para facilitar el ejercicio de la libertad de religión o creencias.

Finalmente, resulta necesario abordar la introducción de las nuevas tecnologías en la gestión del Registro que, además de las mejoras que supone en su organización, permite incorporar este Registro al reto de la Administración Electrónica.

II

El presente real decreto se divide en cuatro títulos. El título I se dedica a las entidades y actos inscribibles; el título II, a los procedimientos de inscripción que se tramitan en el Registro de Entidades Religiosas; el título III se refiere a la estructura y funcionamiento del Registro y el título IV regula la publicidad del Registro. El real decreto cuenta, además, con cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y cinco finales.

El título I define el objeto del real decreto y enumera las entidades y actos inscribibles introduciendo una mayor precisión en la regulación. Con ello se persigue la correspondencia de la norma con la realidad de las confesiones que adoptan formas de organización que no siempre era posible encajar en la relación de entes inscribibles contenida en la normativa anterior. En cuanto a los actos susceptibles de acceder al Registro, contiene la enumeración de los mismos atendida la práctica habitual del Registro, explicitando aquellos actos que se venían anotando a instancia de las entidades, como es el caso de lugares de culto o de la adhesión a las federaciones, o introduciendo algunos que no eran objeto de anotación hasta ahora, como el caso de los ministros de culto.

El título II se dedica a la regulación de los distintos procedimientos registrales supliendo las lagunas de la normativa anterior. En general, la regulación clarifica los requisitos que han de cumplimentar las entidades que acceden al Registro, se incorpora la presentación de la documenta-

ción en soporte informático y la tramitación de los nuevos procedimientos.

Respecto del procedimiento de inscripción de Iglesias, Confesiones o Comunidades religiosas, se ha incorporado con carácter potestativo que la fundación o establecimiento en España sea avalada por un número mínimo de personas. Esta posibilidad, que se ofrece a las entidades que acceden al Registro, tiene su antecedente en las directrices internacionales citadas de la OSCE/ODHIR que considera adecuado, para proceder a dicha inscripción, la existencia de un número de miembros que acredite una cierta estabilidad siempre que no se obstaculice el ejercicio del derecho. Con ello, las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán expresar la existencia de una mínima comunidad de creyentes que constituye la entidad y asume los derechos y obligaciones derivados de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y, en los casos de confesiones que hayan firmado Acuerdo con el Estado, los previstos en el mismo. Dicho requisito no se extiende, en cambio, a aquellas otras entidades susceptibles de inscripción, erigidas o constituidas por las Iglesias, Confesiones o Comunidades religiosas.

Otra novedad importante es la obligación de inscribir a los titulares de los órganos de representación de las entidades religiosas que en la normativa anterior era potestativo para las entidades. La realidad es que, mayoritariamente, las entidades presentaban al Registro la relación nominal de sus representantes legales dada la eficacia probatoria que dicha normativa otorgaba a la certificación del Registro.

Entre los nuevos desarrollos contenidos en el presente real decreto, destaca el que se refiere al procedimiento para inscribir la incorporación o separación de una comunidad a una federación o el procedimiento para anotar a los ministros de culto de aquellas Iglesias, confesiones o comunidades religiosas inscritas que lo soliciten salvo que tengan capacidad de celebrar o certificar actos con efectos civiles, en cuyo caso la anotación es obligatoria, opción ésta que ha venido siendo reclamada por las propias entidades religiosas que querían disponer de la seguridad que, a efectos de la aplicación del régimen legal previsto para los ministros de culto, ofrece la anotación registral.

En general, la nueva regulación pretende clarificar los requisitos que han de cumplimentar las entidades que acceden al Registro e incorporar

la presentación de la documentación en soporte y por medios electrónicos.

El título III se dedica a la "Estructura y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas" que mantiene su estructura actual por secciones añadiendo una nueva sección histórica a la que se trasladarán los asientos de las entidades canceladas o denegadas. La regulación mejora la descripción de la ficha registral que se elaborará conforme a procedimientos electrónicos y se refiere, por primera vez, a las anotaciones marginales que se harán en caso de que existan procedimientos judiciales pendientes que afecten al nombramiento de los representantes legales de la entidad, o a la falta de declaración de funcionamiento que se prevé en el propio real decreto, anotaciones que tendrán efectos informativos.

El título IV contempla la "Publicidad del Registro de Entidades Religiosas" incorporando tanto el uso de las nuevas tecnologías y los medios electrónicos como las exigencias derivadas de la normativa sobre protección de datos de carácter personal y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Finalmente, entre las disposiciones adicionales, transitorias y finales, además de los contenidos habituales cabe destacar algunos otros. Es el caso de la posibilidad de firmar convenios de colaboración con las comunidades autónomas que tengan en sus Estatutos de Autonomía previstas competencias en la materia a fin de determinar su participación en la gestión del Registro; la previsión de que las entidades inscritas presenten una declaración de hallarse en situación de funcionamiento a fin de permitir al Registro una mayor correspondencia con la realidad, mejorando el servicio público que presta; o la disposición que mantiene la vigencia de la inscripción de fundaciones erigidas por la Iglesia Católica en tanto no se proceda a la regulación general de las fundaciones de las entidades religiosas.

En la elaboración de este real decreto se ha tenido en cuenta el informe del Pleno de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa emitido en su reunión de 26 de noviembre de 2014 y el informe de la Agencia Española de Protección de Datos de 18 de marzo de 2015.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 3 de julio de 2015,

TÍTULO I
Entidades y actos inscribibles

Artículo 1. ***Objeto***

El presente real decreto tiene por objeto regular el Registro de Entidades Religiosas, creado de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, las entidades y actos susceptibles de inscripción, los procedimientos de inscripción y los efectos jurídicos derivados de la misma. El Registro de Entidades Religiosas radicará en el Ministerio de Justicia con carácter de registro general y público.

Artículo 2. ***Entidades inscribibles***

En el Registro de Entidades Religiosas podrán inscribirse:

1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones.

Los siguientes tipos de entidades religiosas, siempre que hayan sido erigidas, creadas o instituidas por una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa o Federaciones de las mismas inscritas en el Registro:

a) Sus circunscripciones territoriales.
b) Sus congregaciones, secciones o comunidades locales.
c) Las entidades de carácter institucional que formen parte de su estructura.
d) Las asociaciones con fines religiosos que creen o erijan, así como sus federaciones.
e) Los seminarios o centros de formación de sus ministros de culto.
f) Los centros superiores de enseñanza que impartan con exclusividad enseñanzas teológicas o religiosas propias de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa inscrita.
g) Las comunidades monásticas o religiosas y las órdenes o federaciones en que se integren.
h) Los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sus provincias y casas, así como sus federaciones.

i) Cualesquiera otras entidades que sean susceptibles de inscripción de conformidad con los Acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas.

Artículo 3. Actos con acceso al Registro

Tendrán acceso al Registro, de acuerdo con el procedimiento que se establece en este real decreto, los siguientes actos:

a) La fundación o establecimiento en España de la entidad religiosa.
b) Las modificaciones estatutarias.
c) La identidad de los titulares del órgano de representación de la entidad.
d) La incorporación y separación de las entidades a una federación.
e) La disolución de la entidad.
f) Los lugares de culto.
g) Los ministros de culto.
h) Cualesquiera otros actos que sean susceptibles de inscripción o anotación conforme los Acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas.

TÍTULO II
Procedimientos registrales

CAPÍTULO I
Inscripción de la fundación o establecimiento en España de las entidades religiosas

Artículo 4. *Derecho de inscripción*

1. Las entidades inscribibles al amparo del artículo 2, gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el Registro de Entidades Religiosas.

2. Solo podrá denegarse la inscripcion cuando no se reúnan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa o en el presente real decreto.

Artículo 5. *Solicitud de inscripción*

1. La solicitud de inscripción se dirigirá al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia y se podrá presentar ante las oficinas y registros a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o por medios electrónicos en los términos previstos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

2. La solicitud deberá especificar qué tipo de entidad de las enumeradas en el artículo 2 se pretende inscribir y adjuntar los documentos que se especifican en los artículos siguientes, según el tipo de entidad cuya inscripción se solicite. Los documentos fehacientes que deban aportarse podrán ser originales o copias compulsadas de los mismos en los términos previstos por el artículo 46 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 6. ***Inscripción de Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas***

1. La inscripción de Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas se iniciará por sus representantes legales o personas debidamente autorizadas mediante solicitud que deberá acompañarse de documento elevado a escritura pública en el que consten los siguientes datos:

a) Denominación, que no podrá incluir términos que induzcan a confusión sobre su naturaleza religiosa. No serán admisibles las denominaciones que incluyan expresiones contrarias a las leyes. Tampoco podrá coincidir o asemejarse, de manera que pueda crear confusión, con ninguna otra previamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas. Los solicitantes aportarán su traducción al castellano o a alguna de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas para el caso de que la denominación de la entidad no figure en castellano o en alguna de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Dicha traducción no formará parte de la denominación de la entidad. En todo caso, las denominaciones deberán estar formadas con letras del alfabeto en castellano o en cualquiera de las lenguas cooficiales.

b) Domicilio.

c) Ámbito territorial de actuación.

d) Expresión de sus fines religiosos y de cuantos datos se consideren necesarios para acreditar su naturaleza religiosa. A estos efectos pueden considerarse como tales, sus bases doctrinales, la ausencia de ánimo de lucro y sus actividades religiosas específicas representadas por el ejercicio y fomento del culto, el mantenimiento de

lugares y objetos de culto, la predicación, la intervención social, la difusión de información religiosa, la formación y enseñanza religiosa y moral, la asistencia religiosa, la formación y sustento de ministros de culto, y otros análogos.

e) Régimen de funcionamiento, órganos representativos y de gobierno, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación.

f) Relación nominal de los representantes legales. En el caso de que éstos fuesen extranjeros deberán acreditar su residencia legal en España en los términos establecidos por la legislación vigente.

2. Será necesario presentar, además, el acta de la fundación o establecimiento en España en documento elevado a escritura pública. En dicha acta se podrá hacer constar la relación nominal de, al menos, veinte personas mayores de edad y con residencia legal en España que avalan la fundación o establecimiento de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa.

Artículo 7. ***Inscripción de entidades creadas por una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa inscrita***

1. Para la inscripción de entidades creadas por una Iglesia, Confesión, Comunidad religiosa o Federación inscrita deberán aportarse, en escritura pública, los datos previstos en el apartado 1 del artículo anterior.

2. Además, se requerirá la aportación del testimonio literal, debidamente autenticado, del acta de constitución, así como del documento de la Iglesia, Confesión, Comunidad religiosa o Federación, por la que se erige, constituye o aprueba y, si lo hubiere, la conformidad del órgano supremo de la entidad en España.

Artículo 8. ***Inscripción de Federaciones***

1. Será de aplicación a la inscripción de Federaciones lo establecido en los artículos 5 y 6.1 de este real decreto respecto de la inscripción de Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas.

2. Será necesario aportar, además, los siguientes documentos:

a) Acta fundacional en la que deberá constar la denominación, domicilio y número registral de cada una de las entidades fundadoras, salvo que estén pendientes de inscripción, así como los datos de identificación de los representantes legales de cada una de éstas.

b) Cada una de las entidades que se integren en la Federación deberán acreditar en la escritura pública de fundación de la misma, la certificación del acuerdo adoptado para su integración, expedido por las personas o cargos con facultad para certificar, en el que se expresará la aceptación de los estatutos de la Federación y la designación de la persona o personas que represente a la entidad religiosa en el acto constitutivo de la Federación.

Artículo 9. ***Inscripción de entidades de origen extranjero***

1. Para la inscripción de una entidad religiosa dependiente de otra establecida en el extranjero se deberá aportar, además de los requisitos previstos en los artículos 5 y 6, los siguientes:

a) Copia de los estatutos vigentes de la entidad extranjera.

b) Certificado de la entidad extranjera que contenga la identidad de sus representantes legales o de los titulares de sus órganos de representación en el país de origen y de quienes hayan sido designados como tales en España.

c) Certificado o documento que acredite que la entidad extranjera está legalmente reconocida en su país de origen.

2. Los documentos a que hace referencia el apartado anterior deberán estar debidamente legalizados y traducidos, en su caso, de acuerdo con los convenios internacionales sobre la materia que sean aplicables.

Artículo 10. ***Instrucción de los expedientes de inscripción***

1. La instrucción de los expedientes de inscripción corresponderá a la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones.

2. El órgano competente podrá recabar informe a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa así como cualquier otro que considere necesario acerca de la solicitud de inscripción.

Artículo 11. ***Resolución***

1. El Ministro de Justicia dictará la resolución procedente en la que se indicará a los interesados, si ésta es favorable, los datos de identificación de la inscripción practicada.

2. Transcurrido el plazo de seis meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y notificado resolución, se entenderá

estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO II
Inscripción de la modificación de los estatutos

Artículo 12. *Solicitud de inscripción*

1. La modificación de los datos de la entidad a que se refiere el artículo 6.1, deberá ser comunicada al Registro de Entidades Religiosas en el plazo de tres meses desde que se haya adoptado el acuerdo de modificación en la forma prevista por los estatutos de la entidad.

2. Junto con la solicitud deberán aportarse los siguientes documentos:

a) Documento público que contenga, bien el acta de la reunión, bien la certificación del acuerdo del órgano competente para adoptar dicha modificación. En todo caso, el documento deberá recoger el acuerdo adoptado por el que se modifican los estatutos, los artículos modificados, el quórum de asistencia cuando sea exigido por los estatutos, el resultado de la votación y la fecha de su aprobación.

b) En las modificaciones de estatutos que afecten a los fines o al régimen de funcionamiento, órganos representativos y de gobierno de la entidad, será preciso aportar el texto íntegro de los nuevos estatutos en documento público que incluya las modificaciones aprobadas, haciendo constar, en diligencia extendida al final del documento, la relación de artículos modificados y la fecha del acuerdo en que se adoptó su modificación.

3. No se tramitarán las solicitudes de modificaciones estatutarias que se presenten transcurrido el plazo de tres meses desde la adopción del acuerdo correspondiente sin perjuicio de que, reiterada la modificación por los órganos competentes de la entidad, se vuelva a presentar la solicitud en plazo.

Artículo 13. *Procedimiento*

1. La inscripción de las modificaciones estatutarias se sujetará a los mismos requisitos que para su inscripción, salvo la relativa al cambio de los representantes legales que se hará en la forma prevista en el artículo siguiente.

2. Las modificaciones serán inscritas por resolución del titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones y producirán los oportunos efectos legales desde el momento de su inscripción.

3. Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 14. ***Inscripción de la identidad de los titulares de los órganos de representación***

1. La modificación de los titulares de los órganos de representación, deberá comunicarse al Registro de Entidades Religiosas en el plazo de tres meses desde que se haya adoptado el acuerdo de modificación.

2. La solicitud de inscripción de dicha modificación deberá acompañarse del documento público que contenga bien el acta de la reunión, bien la certificación del acuerdo adoptado por el órgano competente en los que deberá constar, además de la fecha en que se hubiera adoptado el acuerdo, los siguientes datos:

a) Los nombres, apellidos, DNI o NIE y domicilio de los nombrados.
b) La fecha del nombramiento y, en su caso, de la ratificación y aceptación por los titulares.
c) La fecha de la revocación y del cese, en su caso, de los titulares salientes.
d) Las firmas de los titulares y de los titulares salientes. Si no pudieran o no quisieran firmar se hará constar esta circunstancia en el documento.

CAPÍTULO III
Anotación y cancelación de la adhesión de entidades religiosas a una Federación

Artículo 15. ***Solicitud de adhesión de entidades religiosas a una Federación***

1. La solicitud de anotación en el Registro de la adhesión de una entidad religiosa a una Federación se presentará por el representante legal

de la Federación o persona debidamente autorizada en el plazo de tres meses desde que se haya adoptado el acuerdo.

2. Para la anotación de la adhesión de entidades religiosas a una Federación deberá aportarse, junto con la solicitud, bien el acta de la reunión, bien el certificado del acuerdo de la entidad federativa, según el procedimiento que se haya determinado en sus estatutos, en los que deberá constar, además de la fecha en que se haya adoptado, los siguientes datos:

a) La denominación y el domicilio de la entidad federativa que representa el solicitante.

b) La denominación y número registral, salvo que esté pendiente de inscripción, de la entidad que se incorpora a la Federación.

c) Por cada una de las entidades religiosas que se incorporen a la Federación, una certificación, expedida por las personas o cargos con facultad para certificar, del acuerdo adoptado por la entidad para su integración en la Federación.

3. Las adhesiones serán anotadas por resolución del titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 16. ***Solicitud de cancelación de la adhesión de entidades religiosas a una Federación***

1. La solicitud de cancelación de la adhesión de una entidad a una Federación se presentará por el representante legal de la entidad o persona debidamente autorizada en el plazo de tres meses desde que se haya adoptado el acuerdo en la forma establecida estatutariamente. La entidad aportará, junto con la solicitud, bien el acta de la reunión, bien el certificado del acuerdo, haciendo constar la fecha en que se haya adoptado y la comunicación realizada a la Federación respectiva de la formalización de su baja o de haber cumplimentado los requisitos establecidos en los estatutos de la Federación para la baja de sus miembros.

2. Cuando la solicitud de cancelación de la adhesión de una entidad se produzca a instancia de la propia Federación, la solicitud se presentará

por el representante legal de la Federación o persona debidamente autorizada en el plazo de tres meses desde que se haya adoptado el acuerdo en la forma establecida estatutariamente. Junto a la solicitud deberá aportarse, bien el acta de la reunión, bien certificado de dicho acuerdo, haciendo constar la fecha en que se haya adoptado, así como la comunicación a la entidad afectada de la formalización de su baja.

3. La resolución de cancelación de la adhesión a una Federación se dictará por el titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones. Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia si no se hubiese dictado y notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO IV
Anotación de lugares de culto

Artículo 17. ***Solicitud de anotación y cancelación de lugares de culto***

1. Las entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas podrán solicitar la anotación de sus lugares de culto. Dicha anotación no conferirá personalidad jurídica propia.

2. La solicitud de anotación se presentará por el representante de la entidad o persona debidamente autorizada a la que se acompañará:

a) Copia del título de disposición.

b) Certificado que acredite su condición de lugar de culto por su dedicación principal y permanente al culto y la asistencia religiosa, con la conformidad, en su caso, del órgano competente en España de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa a la que pertenece.

3. La solicitud de cancelación de lugares de culto se presentará por el representante legal de la entidad o persona debidamente autorizada acompañada del certificado que acredite su desafección como lugar de culto de dicha entidad.

4. La resolución sobre la anotación o cancelación de lugares de culto se dictará por el titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y notificado resolución, se

entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO V
Anotación de la condición de ministro de culto

Artículo 18. ***Solicitud de anotación y documentación que debe aportarse***

1. Las entidades religiosas inscritas podrán anotar en el Registro de Entidades Religiosas a sus ministros de culto que ostenten residencia legal en España. En todo caso, deberán anotarse aquellos ministros de culto que estén habilitados para realizar actos religiosos con efectos civiles.

2. Para efectuar dicha anotación los representantes legales de la entidad deberán presentar certificación de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa a que pertenezcan que acredite tal condición y, si lo hubiere, el visto bueno del órgano supremo en España de la entidad conforme a sus propias normas. Cuando se trate de entidades integradas en una Federación inscrita, será necesario también el visto bueno del órgano competente de la respectiva Federación cuando así se disponga en sus estatutos, sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos de Cooperación con el Estado respecto de las entidades o Federaciones firmantes de los mismos.

3. Las entidades deberán comunicar al Registro las bajas de sus ministros de culto y solicitar su cancelación en el plazo de un mes desde que la baja tuvo lugar.

4. La resolución de la anotación y cancelación de ministros de culto de las entidades religiosas se dictará por el titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. La certificación registral de la anotación del ministro de culto será prueba suficiente para acreditar dicha cualidad. El certificado tendrá una vigencia de dos años pudiendo ser renovado por iguales periodos.

CAPÍTULO VI
Cancelación de la inscripción de entidades religiosas

Artículo 19. ***Cancelación de la inscripción***

1. La cancelación de la inscripción de una entidad sólo podrá efectuarse:

a) A petición de sus representantes legales debidamente facultados.

b) En cumplimiento de sentencia judicial firme.

2. La cancelación producirá efectos desde la fecha de su resolución y dará lugar al traslado de la entidad a la Sección Histórica del Registro.

Artículo 20. ***Procedimiento de cancelación solicitada por la entidad***

1. En el plazo de tres meses desde que se haya producido la causa que determine la disolución de la entidad, deberá dirigirse la solicitud de cancelación de su inscripción al Registro de Entidades Religiosas.

2. La solicitud de cancelación, en la que deberá constar el número registral de la entidad, deberá acompañarse de los documentos siguientes:

a) Si la disolución es consecuencia de la decisión de los miembros de la entidad adoptada por el órgano competente según sus estatutos, documento público que contenga bien el acta de la reunión, bien el certificado de aquélla expedido por las personas o cargos con facultad para certificar, en que conste la fecha en la que se ha adoptado, el quórum de asistencia y el resultado de la votación.

b) Si la disolución ha tenido lugar por sentencia judicial firme, testimonio de la resolución judicial por la que se dicta la disolución de la entidad.

3. Examinada la solicitud, el Ministro de Justicia dictará la resolución procedente. Transcurrido el plazo de tres meses a partir de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los Registros del Ministerio de Justicia, si no se hubiese dictado y notificado resolución, se entenderá estimada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO VII
Disposiciones comunes

Artículo 21. ***Documentación en formato electrónico***

Las solicitudes de inscripción o anotación en el Registro, junto a la documentación que deba acompañarse, podrán presentarse en formato y con firma electrónicos, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional tercera.

Artículo 22. ***Subsanación de errores***

Cuando se adviertan defectos formales en la solicitud se requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa la correspondiente resolución, conforme a lo previsto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre.

Artículo 23. ***Facultad de certificar***

1. La facultad de certificar las actas y los acuerdos de los órganos de las entidades religiosas corresponde al representante legal de la entidad y, si estuviera previsto en sus estatutos, al secretario de la misma, en cuyo caso, se emitirán siempre con el visto bueno del representante legal de la entidad.

2. Para la inscripción de los acuerdos contenidos en la certificación deberá haberse inscrito, previa o simultáneamente, el cargo del certificante.

Artículo 24. ***Recursos***

1. Las resoluciones del Ministro de Justicia agotan la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado o ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

2. Contra las resoluciones del titular de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones que no pongan fin a la vía administrativa, procederá el correspondiente recurso de alzada en los términos establecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Contra las resoluciones del titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones procederá el correspondiente recurso de alzada en los términos establecidos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

TÍTULO III
Estructura y funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas

Artículo 25. *Ubicación y dependencia orgánica del Registro de Entidades Religiosas*

El Registro de Entidades Religiosas radica en Madrid y tiene carácter de Registro general y unitario para todo el territorio nacional. Está bajo la dependencia del Ministerio de Justicia como unidad administrativa adscrita a la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones.

Artículo 26. *Secciones del Registro de Entidades Religiosas*

El Registro constará de las siguientes Secciones:

a) Sección General, en la que se inscribirán las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como las entidades instituidas por las mismas.

b) Sección Especial, en la que se inscribirán las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas que hayan firmado o a las que sea de aplicación un Acuerdo o Convenio de cooperación con el Estado, así como el resto de entidades instituidas por las mismas.

c) Sección Histórica, a la que se trasladarán con sus protocolos anejos, los asientos de las entidades que hayan sido cancelados así como aquellas solicitudes que hayan sido denegadas.

Artículo 27. *Fichas registrales*

1. El Registro de Entidades Religiosas practicará las inscripciones y anotaciones correspondientes en fichas registrales que, elaboradas por procedimientos electrónicos, contendrán unidades independientes de archivo.

2. A cada entidad se le asignará un número registral correlativo e independiente, único para todo el Registro. En su respectiva ficha registral se dispondrá de campos para la inscripción o anotación de, al menos, los siguientes extremos:

a) Denominación.

b) Sección.
c) Fecha de fundación.
d) Domicilio.
e) Reproducción literal de las normas estatutarias.
f) Identidad de los titulares de los órganos de gobierno y representación.
g) Lugares de culto.
h) Dependencia de otras entidades inscritas.
i) Incorporación a una Federación inscrita.

3. Anejo al Registro existirá un Archivo en el que se conservará un expediente o protocolo por cada una de las entidades inscritas, y en el que se archivarán cuantos documentos se produzcan en relación con la entidad, así como los títulos que hayan servido para realizar la inscripción de los actos inscritos o anotados. Estos expedientes se considerarán parte integrante del Registro.

Artículo 28. *Anotaciones marginales*

Cuando se acredite ante el Registro de Entidades Religiosas el inicio de acciones judiciales de impugnación del nombramiento de los representantes legales de la entidad o por falsedad en el acta o en la certificación, se hará constar esta circunstancia al margen de la inscripción de los representantes legales de la entidad. En dichas anotaciones se harán constar los datos de referencia de los asuntos y diligencias que se sustancien, así como el carácter meramente informativo de la anotación.

La anotación será cancelada una vez se inscriban en el registro los asientos que fueran consecuencia de la resolución judicial.

Artículo 29. *Declaración de funcionamiento*

Las entidades inscritas están obligadas a mantener actualizados sus datos registrales. En todo caso, cada dos años deberán aportar declaración de funcionamiento mediante la presentación telemática del formulario que el Registro apruebe a tal fin.

La falta de presentación de la declaración de funcionamiento dará lugar a su anotación marginal a efectos informativos.

TÍTULO IV
Publicidad del Registro de Entidades Religiosas

Artículo 30. *Publicidad del Registro*

1. El Registro de Entidades Religiosas es público y los ciudadanos tienen derecho a acceder al mismo en los términos establecidos en la normativa vigente.

2. Los interesados podrán realizar su consulta a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia o por escrito dirigido al Registro de Entidades Religiosas en el que, además de los requisitos establecidos en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, deberán especificar los documentos concretos a los que se pretenda acceder, siempre que correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud.

3. No se admitirá, salvo para su consideración con carácter potestativo, la solicitud de consulta genérica de los expedientes que, en todo caso, se ajustará a lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.

4. La publicidad formal del Registro se efectúa mediante certificaciones o copias del contenido de los asientos, en la forma establecida en la normativa vigente que se ajustará, en todo caso, a los requisitos establecidos en materia de protección de datos de carácter personal.

5. En el traslado de las certificaciones o copias de los asientos a los que se refieren los artículos siguientes se hará constar a los destinatarios la prohibición de crear ficheros con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la religión o creencias, en los términos previstos en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 31. *Certificaciones*

1. La certificación será el medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y de los documentos depositados en el Registro de Entidades Religiosas.

2. Las certificaciones pueden ser positivas o negativas. Las certificaciones positivas son totales o parciales.

3. La certificación total del Registro reproduce íntegramente todos los asientos practicados en la ficha registral abierta a cada entidad.

4. La certificación total del protocolo anejo al Registro contiene la reproducción íntegra de todos los documentos archivados presentados por los particulares y relativos a una entidad determinada. En este caso, el acceso estará limitado a la propia entidad o persona autorizada por esta, sin perjuicio de las competencias que corresponden a las autoridades judiciales y administrativas.

5. En las certificaciones parciales ha de expresarse siempre obligatoriamente que en lo omitido no hay nada que amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto según se desprende de los asientos del Registro.

Artículo 32. ***Copia de los asientos***

La copia de los asientos, que constituirá un mero traslado de los asientos y datos que figuren en el Registro, se expedirá con indicación del número de hojas y de la fecha en que se extienden, y llevará su sello.

Artículo 33. ***Obtención de certificados y copias de los asientos***

1. El solicitante de la certificación o copia de los asientos deberá suministrar todas las circunstancias que conozca, a fin de facilitar la búsqueda del asiento o del documento. Si los datos proporcionados no permiten su localización, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, aporte los datos imprescindibles con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose ésta previa resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de diciembre.

2. Las certificaciones y las copias de los asientos serán expedidas por el Jefe de Servicio del Registro. La obtención de copias de los asientos estará condicionada a la eficacia del funcionamiento del Servicio de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. La denegación del acceso a la información solicitada deberá adoptarse mediante resolución motivada del titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones en el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

4. Contra las resoluciones de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones procederá el correspondiente recurso de alzada en los términos establecidos en el artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 34. ***Certificaciones sobre la condición de representante legal***

En las certificaciones que se expidan para acreditar la representación legal de una entidad habrá de constar la fecha de inscripción del representante o representantes, indicando expresamente que, con posterioridad a esa fecha, no se ha recibido en el Registro ninguna comunicación que modifique la representación de la entidad.

Disposición adicional primera. ***Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas***

El Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas, en el marco de lo dispuesto en sus respectivos Estatutos de Autonomía, podrán firmar convenios de colaboración con el objeto de permitir la participación de la comunidad autónoma en la gestión del Registro de Entidades Religiosas.

Disposición adicional segunda. ***Protección de datos de carácter personal***

El tratamiento y archivo electrónico de los datos contenidos en el Registro de Entidades Religiosas se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En la anotación de la condición de ministro de culto, la solicitud deberá incorporar el consentimiento expreso y por escrito del interesado para la inclusión de sus datos en el Registro y la comunicación derivada de la publicidad del mismo. En los formularios de inscripción o anotación que a tal efecto se aprueben, constará que los solicitantes y los titulares de los órganos de representación consienten la inclusión de sus datos personales en el Registro y la comunicación derivada de la publicidad del mismo.

Disposición adicional tercera. ***Gestión electrónica de los procedimientos administrativos y depósito de documentación***

En el plazo de dos años, desde la entrada en vigor de este real decreto, se habilitarán los recursos necesarios para la gestión electrónica de los procedimientos administrativos regulados. En tanto se completan los procesos necesarios para la presentación en formato y con firma electrónicos de la documentación que ha de acompañar a las solicitudes dirigidas al Registro, se presentarán en formato no electrónico.

El Registro de Entidades Religiosas sustituirá la conservación material de documentación por su almacenamiento mediante medios electróni-

cos, dotados de garantías suficientes, conforme a lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Disposición adicional cuarta. ***Adecuación del Registro a lo dispuesto en este real decreto***

1. El Registro de Entidades Religiosas dispondrá de dos años, desde la entrada en vigor de este real decreto, para adecuar su organización interna a lo dispuesto en el mismo. En todo caso, la comunicación a las entidades inscritas de los nuevos números registrales que se produzcan como consecuencia de la informatización del Registro se hará a través del Portal corporativo del Ministerio de Justicia.

2. A estos efectos y en el mismo plazo, las entidades inscritas deberán, en su caso, actualizar su situación registral conforme a los procedimientos previstos en este real decreto, en particular, en lo que se refiere a la inscripción obligatoria de los representantes legales.

3. Aquellas entidades inscritas que hubieran adaptado su estructura a la enumeración de entidades inscribibles en el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, podrán solicitar la modificación de su naturaleza jurídica conforme a lo previsto en este real decreto cumplimentando los requisitos que en cada caso correspondan sin que ello implique la cancelación de la entidad que conservará su número y ficha registral.

Disposición adicional quinta. ***Declaración de funcionamiento***

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la norma, se pondrá a disposición de las entidades inscritas el formulario electrónico al que se refiere el artículo 29 de este real decreto, a fin de proceder a la primera declaración de funcionamiento y comunicar al Registro los datos siguientes: domicilio a efectos de notificaciones, ámbito territorial, teléfono y correo electrónico. Transcurrido el plazo sin haber realizado dicha comunicación, se procederá, por parte del Registro, a practicar la anotación marginal correspondiente sin perjuicio de su posterior cancelación una vez comunicados dichos datos.

Disposición transitoria primera. ***Normativa aplicable en el período transitorio***

Las solicitudes de inscripción en el Registro de Entidades Religiosas que estuvieren pendientes de resolución en el momento de la entrada en

vigor de este real decreto se tramitarán y resolverán según lo dispuesto por el Real Decreto 142/1981 de 9 de enero, de Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas.

Disposición transitoria segunda. *Fundaciones religiosas de la Iglesia Católica*

Las fundaciones religiosas de la Iglesia Católica seguirán rigiéndose por el Real Decreto 589/1984, de 8 de febrero, de Fundaciones de la Iglesia Católica, en tanto no se regulen con carácter general las fundaciones de las entidades religiosas. Hasta entonces, el Registro mantendrá la Sección de Fundaciones prevista en dicho real decreto.

Disposición derogatoria única

Quedan derogadas las siguientes normas:

a) El Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre Organización y Funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas.
b) El artículo 5 del Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia de Justicia e Interior.
c) La Orden de 11 de mayo de 1984 sobre publicidad del Registro de Entidades Religiosas.

Disposición final primera. *Título competencial*

El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1ª que atribuye al Estado la competencia sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales.

Disposición final segunda. *Normativa supletoria*

Lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se aplicará con carácter supletorio respecto de los procedimientos regulados en este real decreto.

Disposición final tercera. ***Gastos de organización y funcionamiento***

Las medidas incluidas en esta norma serán atendidas con las disponibilidades presupuestarias y no podrán suponer incremento de dotaciones ni de otros gastos de personal.

Disposición final cuarta. ***Aplicación y desarrollo del real decreto***

Se autoriza al Ministro de Justicia para dictar las disposiciones precisas para la aplicación y desarrollo de este real decreto.

Disposición final quinta. ***Entrada en vigor***

Este real decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el "Boletín Oficial de Estado".

DERECHO A LA EDUCACIÓN

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria[4]

Artículo 8. ***Organización***

1. La etapa de Educación Primaria comprende seis cursos académicos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los doce años de edad, y se organiza en áreas, que tendrán un carácter global e integrador.

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas troncales en cada uno de los cursos:

a) Ciencias de la Naturaleza.

b) Ciencias Sociales.

c) Lengua Castellana y Literatura.

d) matemáticas.

e) Primera Lengua Extranjera.

3. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:

a) Educación Física.

---

4 BOE núm. 52 de 1 de marzo de 2014.

b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, madres o tutores legales.

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos una de las siguientes áreas del bloque de asignaturas específicas:

   1º Educación Artística.

   2º Segunda Lengua Extranjera.

   3º. Religión, solo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la opción indicada en el apartado 3 b)

   4º Valores Sociales y Cívicos, solo si los padres, madres o tutores legales no la han escogido en la elección indicada en el apartado 3.b).

4. Los alumnos y alumnas deben cursar el área Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha área en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. El área Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al del área Lengua Castellana y Literatura.

Además, los alumnos y alumnas podrán cursar una o varias áreas más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, que podrán ser áreas del bloque de asignaturas específicas no cursadas, áreas de profundización o refuerzo de las áreas troncales, u otras áreas a determinar.

Entre las áreas a determinar, las Administraciones educativas y en su caso los centros podrán ofrecer, entre otras, asignaturas relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal y las lenguas de signos.

5. El horario lectivo mínimo correspondiente a las asignaturas del bloque de asignaturas troncales, computado de forma global para toda la Educación Primaria, no será inferior al 50% del total del horario lectivo fijado por cada Administración educativa como general para dicha etapa.

En este cómputo no se tendrán en cuenta posibles ampliaciones del horario que se puedan establecer sobre el horario general.

6. Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación entre ambas etapas para salvar las diferencias pedagógicas y organizativas y los desajustes que se puedan producir en el progreso académico del alumnado, para lo que se tendrá en cuenta, entre otros mecanismos, el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa.

(...)

Disposición adicional segunda. *Enseñanzas de religión*

Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de acuerdo con lo establecido en este real decreto.

Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales y en su caso el alumnado puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión.

La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.

La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará de acuerdo con lo indicado en el artículo 12 de este real decreto.

(...)

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato[5]

(...)

---

5 BOE núm. 3 de 3 de enero de 2015.

CAPÍTULO II
Educación Secundaria Obligatoria

(...)

Artículo 13. ***Organización del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria***

1. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales en los cursos primero y segundo:

a) Biología y Geología en primer curso.

b) Física y Química en segundo curso.

c) Geografía e Historia en ambos cursos.

d) Lengua Castellana y Literatura en ambos cursos.

e) Matemáticas en ambos cursos.

f) Primera Lengua Extranjera en ambos cursos.

2. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales en el curso tercero:

a) Biología y Geología.

b) Física y Química.

c) Geografía e Historia.

d) Lengua Castellana y Literatura.

e) Primera Lengua Extranjera.

Como materia de opción, en el bloque de asignaturas troncales deberán cursar, bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas, o bien Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas.

3. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas en cada uno de los cursos:

a) Educación Física.

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o, en su caso, del alumno o alumna.

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso,

de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y un máximo de cuatro de las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada uno de los cursos:

1º) Cultura Clásica.

2º) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

3º) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

4º) Música.

5º) Segunda Lengua Extranjera.

6º) Tecnología.

7º) Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b).

8º) Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o, en su caso, el alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b).

4. Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.

Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar. Estas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica podrán ser diferentes en cada uno de los cursos.

Entre las materias a determinar, las Administraciones educativas y en su caso los centros podrán ofrecer, entre otras, materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía perso-

nal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral y las lenguas de signos.

5. El horario lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales, computado de forma global para el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, no será inferior al 50% del total del horario lectivo que establezca cada Administración educativa como general para dicho primer ciclo.

Artículo 14. ***Organización de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria***

1. Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos y alumnas podrán escoger cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las dos siguientes opciones:

a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.

A estos efectos, no serán vinculantes las opciones cursadas en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcanzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes tanto por la opción de enseñanzas académicas como por la de enseñanzas aplicadas.

2. En la opción de enseñanzas académicas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

a) Geografía e Historia.

b) Lengua Castellana y Literatura.

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.

d) Primera Lengua Extranjera.

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

1º) Biología y Geología.

2º) Economía.

3º) Física y Química.

4º) Latín.

3. En la opción de enseñanzas aplicadas, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

a) Geografía e Historia.

b) Lengua Castellana y Literatura.

c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.

d) Primera Lengua Extranjera.

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

1º) Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.

2º) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.

3º) Tecnología.

4. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:

a) Educación Física.

b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o tutores legales o en su caso del alumno o alumna.

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y en su caso de la oferta de los centros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas:

1º) Artes Escénicas y Danza.

2º) Cultura Científica.

3º) Cultura Clásica.

4º) Educación Plástica, Visual y Audiovisual.

5º) Filosofía.

6º) Música.

7º) Segunda Lengua Extranjera.

8º) Tecnologías de la Información y la Comunicación.

9º) Religión, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b).

10º) Valores Éticos, sólo si los padres, madres o tutores legales o en su caso el alumno o alumna no la han escogido en la elección indicada en el apartado 4.b).

11º) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna.

5. Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas Comunidades Autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.

Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar.

Entre las materias a determinar, las Administraciones educativas y en su caso los centros podrán ofrecer, entre otras, materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral y las lenguas de signos.

El horario lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales, computado de forma global para el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no será inferior al 50% del total del horario lectivo que establezca cada Administración educativa como general para dicho curso.

Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de opción.

(...)

Artículo 21. ***Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria***

1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada por la opción de enseñanzas académicas o por la de enseñanzas aplicadas, en la que se comprobará el logro de los objetivos de la etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias:

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales, salvo Biología y Geología y Física y Química, de las que el alumno o alumna será evaluado si las escoge entre las materias de opción, según se indica en el párrafo siguiente.

b) Dos de las materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cuarto curso.

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física, Religión, o Valores Éticos.

2. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido bien evaluación positiva en todas las materias, o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean simultáneamente Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas. A estos efectos:

1º) La materia Lengua Cooficial y Literatura tendrá la misma consideración que la materia Lengua Castellana y Literatura en aquellas Comunidades Autónomas que posean lengua cooficial.

2º) Sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques.

3º) En relación con aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que dichos alumnos y alumnas puedan cursar más materias de dicho bloque.

4º) Las materias con la misma denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria se considerarán como materias distintas.

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema Educativo Español las características de las pruebas, y las diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria.

4. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

5. Los alumnos y alumnas podrán realizar la evaluación por cualquiera de las dos opciones de enseñanzas académicas o de enseñanzas aplicadas, con independencia de la opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o por ambas opciones en la misma convocatoria. En el caso de que realicen la evaluación por una opción no cursada, se les evaluará de las materias requeridas para superar la evaluación final por dicha opción que no tuvieran superadas, elegidas por el propio alumno dentro del bloque de asignaturas troncales.

6. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por la opción escogida, o que deseen elevar su calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación por la otra opción si lo desean, y, de no superarla en primera convocatoria, podrán repetirla en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno o alumna haya superado. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

No será necesario que se evalúe de nuevo al alumnado que se presente en segunda o sucesivas convocatorias de las materias que ya haya superado, a menos que desee elevar su calificación final.

7. Las Administraciones educativas podrán establecer medidas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que, habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado.

Los centros docentes, de acuerdo con los resultados obtenidos por sus alumnos y en función del diagnóstico e información proporcionados por dichos resultados, establecerán medidas ordinarias o extraordinarias en relación con sus propuestas curriculares y práctica docente. Estas me-

didas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o individuales que permitan, en colaboración con las familias y empleando los recursos de apoyo educativo facilitados por las Administraciones educativas, incentivar la motivación y el esfuerzo de los alumnos para solventar las dificultades.

(...)

CAPÍTULO III
Bachillerato

(...)

Artículo 27. ***Organización del primer curso de Bachillerato***

En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

a) Filosofía.

b) Lengua Castellana y Literatura I.

c) Matemáticas I.

d) Primera Lengua Extranjera I.

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

1º) Biología y Geología.

2º) Dibujo Técnico I.

3º) Física y Química.

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

a) Filosofía.

b) Lengua Castellana y Literatura I.

c) Primera Lengua Extranjera I.

d) Para el itinerario de Humanidades, Latín I. Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el tránsito a la educación superior.

1º) Economía.

2º) Griego I.

3º) Historia del Mundo Contemporáneo.

4º) Literatura Universal.

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

a) Filosofía.

b) Fundamentos del Arte I.

c) Lengua Castellana y Literatura I.

d) Primera Lengua Extranjera I.

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

1º) Cultura Audiovisual I.

2º) Historia del Mundo Contemporáneo.

3º) Literatura Universal.

4. Los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias del bloque de asignaturas específicas:

a) Educación Física.

b) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, un mínimo de dos y máximo de tres materias de entre las siguientes:

1º) Análisis Musical I.

2º) Anatomía Aplicada.

3º) Cultura Científica.

4º) Dibujo Artístico I.

5º) Dibujo Técnico I, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan escogido Dibujo Técnico I en el apartado 1.e).2º).

6º) Lenguaje y Práctica Musical.

7º) Religión.

8º) Segunda Lengua Extranjera I.

9º) Tecnología Industrial I.

10º) Tecnologías de la Información y la Comunicación I.

11º) Volumen.

12º) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna, que será considerada específica a todos los efectos.

5. Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas comunidades autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.

Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar. Estas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica podrán ser diferentes en cada uno de los cursos.

Entre las materias a determinar, las Administraciones educativas y en su caso los centros podrán ofrecer, entre otras, materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las lenguas de signos.

6. El horario lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales, computado de forma global para 1º de Bachillerato, no será inferior al 50% del total del horario lectivo que establezca cada Administración educativa como general para dicho curso.

Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de opción.

Artículo 28. ***Organización del segundo curso de Bachillerato***

1. En la modalidad de Ciencias, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

a) Historia de España.

b) Lengua Castellana y Literatura II.

c) Matemáticas II.

d) Primera Lengua Extranjera II.

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias más de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

1º) Biología.

2º) Dibujo Técnico II.

3º) Física.

4º) Geología.

5º) Química.

2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

a) Historia de España.

b) Lengua Castellana y Literatura II.

c) Primera Lengua Extranjera II.

d) Para el itinerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales, organizadas, en su caso, en bloques que faciliten el tránsito a la educación superior:

1º) Economía de la Empresa.

2º) Geografía.

3º) Griego II.

4º) Historia del Arte.

5º) Historia de la Filosofía.

3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:

a) Fundamentos del Arte II.

b) Historia de España.

c) Lengua Castellana y Literatura II.

d) Primera Lengua Extranjera II.

e) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, al menos dos materias de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

1º) Artes Escénicas.

2º) Cultura Audiovisual II.

3º) Diseño.

4. En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas cursarán un mínimo de dos y máximo de tres materias de las siguientes del bloque de asignaturas específicas:

a) Análisis Musical II.

b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.

c) Dibujo Artístico II.

d) Dibujo Técnico II, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan escogido Dibujo Técnico II en el apartado 1.e).2º).
e) Fundamentos de Administración y Gestión.
f) Historia de la Filosofía, salvo que los padres, madres o tutores legales o el alumno o alumna ya hayan escogido Historia de la Filosofía en el apartado 2.e).5º).
g) Historia de la Música y de la Danza.
h) Imagen y Sonido.
i) Psicología.
j) Religión.
k) Segunda Lengua Extranjera II.
l) Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica.
m) Tecnología Industrial II.
n) Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
ñ) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el alumno o alumna, que será considerada específica a todos los efectos.

5. Los alumnos y alumnas deben cursar la materia Lengua Cooficial y Literatura en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica en aquellas comunidades autónomas que posean dicha lengua cooficial, si bien podrán estar exentos de cursar o de ser evaluados de dicha materia en las condiciones establecidas en la normativa autonómica correspondiente. La materia Lengua Cooficial y Literatura recibirá un tratamiento análogo al de la materia Lengua Castellana y Literatura.

Además, en función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, los alumnos y alumnas podrán cursar alguna materia más en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, que podrán ser materias del bloque de asignaturas específicas no cursadas, materias de ampliación de los contenidos de alguna de las materias de los bloques de asignaturas troncales o específicas, u otras materias a determinar. Estas materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica podrán ser diferentes en cada uno de los cursos.

Entre las materias a determinar, las Administraciones educativas y en su caso los centros podrán ofrecer, entre otras, materias relacionadas con el aprendizaje del sistema braille, la tiflotecnología, la autonomía personal, los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, incluidos los productos de apoyo a la comunicación oral, y las lenguas de signos.

6. El horario lectivo mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales, computado de forma global para 2º de Bachillerato, no será inferior al 50% del total del horario lectivo que establezca cada Administración educativa como general para dicho curso.

Las Administraciones educativas y, en su caso, los centros podrán elaborar itinerarios para orientar al alumnado en la elección de las materias troncales de opción.

(...)

Artículo 31. *Evaluación final de Bachillerato*

1. Los alumnos y alumnas realizarán una evaluación individualizada al finalizar Bachillerato, en la que se comprobará el logro de los objetivos de esta etapa y el grado de adquisición de las competencias correspondientes en relación con las siguientes materias:

a) Todas las materias generales cursadas en el bloque de asignaturas troncales. En el supuesto de materias que impliquen continuidad, se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso.

b) Dos materias de opción cursadas en el bloque de asignaturas troncales, en cualquiera de los cursos. Las materias que impliquen continuidad entre los cursos primero y segundo sólo computarán como una materia; en este supuesto se tendrá en cuenta sólo la materia cursada en segundo curso.

c) Una materia del bloque de asignaturas específicas cursada en cualquiera de los cursos, que no sea Educación Física ni Religión.

2. Sólo podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido evaluación positiva en todas las materias. A estos efectos, sólo se computarán las materias que como mínimo el alumno o alumna debe cursar en cada uno de los bloques. Además, en relación con aquellos alumnos y alumnas que cursen Lengua Cooficial y Literatura, sólo se computará una materia en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica, con independencia de que los alumnos y alumnas puedan cursar más materias de dicho bloque.

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá para todo el Sistema Educativo Español las características de las pruebas, y las diseñará y establecerá su contenido para cada convocatoria.

4. La superación de esta evaluación requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, o que deseen elevar su calificación final de Bachillerato, podrán repetir la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud.

Se tomará en consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias a las que se haya concurrido.

5. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.

6. En el caso de alumnos y alumnas que deseen obtener el título de Bachillerato por más de una modalidad, podrán solicitar que se les evalúe de las materias generales y de opción de su elección del bloque de asignaturas troncales, correspondientes a las modalidades escogidas.

(...)

Disposición adicional tercera. *Enseñanzas de religión*

1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato de acuerdo con lo establecido en los artículos 13, 14, 27 y 28 de este real decreto.

2. Las Administraciones educativas garantizarán que, al inicio del curso, los padres, madres o tutores legales y en su caso el alumnado puedan manifestar su voluntad de que éstos reciban o no reciban enseñanzas de religión.

3. La determinación del currículo de la enseñanza de religión católica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado español ha suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las correspondientes autoridades religiosas.

4. La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará de acuerdo con lo indicado en los artículos 20 y 30 de este real decreto.

(...).

RÉGIMEN ECONÓMICO

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo[6]

PREÁMBULO

(…)

IV

(…)

El artículo 206 se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público. Es destacable la desaparición de la posibilidad que la legislación de 1944-1946 otorgó a la Iglesia Católica de utilizar el procedimiento especial que regulaba aquel artículo. La autorización para que la Iglesia Católica utilizara aquel procedimiento ha de situarse en un contexto socioeconómico muy diferente del actual, influenciado aún por los efectos de las Leyes Desamortizadoras —a las que el Reglamento Hipotecario dedica todavía cuatro artículos— y la posterior recuperación de parte de los bienes por la Iglesia Católica, en muchos casos sin una titulación auténtica. Pero la desaparición progresiva de las circunstancias históricas a las que respondió su inclusión, así como el transcurso de un tiempo suficiente desde la reforma del Reglamento Hipotecario de 1998 que ya permitió la inscripción de los templos destinados al culto católico, proscrita hasta entonces, unida a la facilidad y normalidad actual, en una sociedad desarrollada, con una conciencia exacta del valor de los inmuebles y de su inscripción en el Registro de la Propiedad, que posibilita la obtención de una titulación adecuada para la inmatriculación de bienes, hacen que se considere que la utilización de este procedimiento especial por la Iglesia Católica, teniendo su razón de ser indiscutible en el pasado, sea hoy innecesaria.

(…)

---

6 BOE núm. 151 de 25 de junio de 2015.

Artículo primero. ***Modificación de la Ley Hipotecaria en su redacción aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946***

La Ley Hipotecaria, en su redacción aprobada por decreto de 8 de febrero de 1946, queda modificada como sigue:

(...)

Doce. El artículo 206 queda redactado del siguiente modo:

> "1. Las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de aquéllas podrán inmatricular los bienes de su titularidad, mediante la aportación de su título escrito de dominio, cuando dispongan de él, junto con certificación administrativa librada, previo informe favorable de sus servicios jurídicos, por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la administración de los mismos, acreditativa del acto, negocio o modo de su adquisición y fecha del acuerdo del órgano competente para su inclusión en el inventario correspondiente o, caso de no existir, fecha del acuerdo de aprobación de la última actualización del inventario de la que resulte la inclusión del inmueble objeto de la certificación con indicación de la referencia o indicador que tenga asignado en el mismo, así como de su descripción, naturaleza patrimonial o demanial y su destino en el primer caso o su eventual afectación, adscripción o reserva, en el segundo.

Asimismo, las entidades referidas deberán aportar certificación catastral descriptiva y gráfica de la parcela o parcelas catastrales, que se corresponda con la descripción literaria y la delimitación geográfica de la finca cuya inmatriculación se solicita en la forma establecida en la letra b) del artículo 9. Solo en caso de que la finca careciese de certificación catastral descriptiva y gráfica, podrá aportarse una representación gráfica georreferenciada alternativa, la cual deberá corresponderse con la descripción literaria realizada y respetar la delimitación de los colindantes catastrales y registrales. A la representación gráfica alternativa deberá acompañarse informe del Catastro.

2. En todo caso, será preciso que el Registrador compruebe la falta de previa inmatriculación de todo o parte del inmueble. Si advirtiera la existencia de fincas inscritas coincidentes en todo o en parte, denegará la inmatriculación solicitada, previa expedición de certificación de las referidas fincas, que remitirá al organismo interesado junto con la nota de calificación.

3. Practicada la inmatriculación, el Registrador expedirá el edicto a que se refiere la regla séptima del apartado 1 del artículo 203 con el mismo régimen en ella previsto, incluido el sistema de alertas.

4. Junto al procedimiento registral ordinario, cuando se trate de fincas propiedad de alguna de las entidades referidas en el apartado 1, podrá obtenerse la reanudación del tracto sucesivo interrumpido a través de certificación administrativa, expedida con los requisitos señalados en el presente artículo, que ponga fin al procedimiento regulado en el apartado 3 del artículo 37 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

5. Además de ello, mediante certificación administrativa del acto en que así se disponga, podrán practicarse, en los bienes de titularidad de las Administraciones Públicas y de las entidades de Derecho público a que refiere el apartado 1 de este artículo, operaciones registrales de agrupación, división, agregación, segregación, declaración de obra nueva, división horizontal, constitución de conjuntos inmobiliarios, rectificación descriptiva o cancelación, siempre que tales actos no afecten a terceros que no hubieran sido citados en el expediente, se cumplan los requisitos establecidos por la legislación sectorial y se aporte la representación gráfica catastral de la finca o representación alternativa, en los términos previstos en el artículo 10".

Trece. El artículo 207 queda redactado del siguiente modo:

> "Si la inmatriculación de la finca se hubiera practicado con arreglo a lo establecido en los números 1.°, 2.°, 3.° y 4.° del artículo 204, el artículo 205 y el artículo 206, los efectos protectores dispensados por el artículo 34 de esta Ley no se producirán hasta transcurridos dos años desde su fecha. Esta limitación se hará constar expresamente en el acta de inscripción, y en toda forma de publicidad registral durante la vigencia de dicha limitación".

DERECHO MATRIMONIAL

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria[7]

(...)

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. ***Objeto y ámbito de aplicación***

1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales.

2. Se consideran expedientes de jurisdicción voluntaria a los efectos de esta Ley todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba sustanciarse en un proceso contencioso.

Artículo 2. ***Competencia en materia de jurisdicción voluntaria***

1. Los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, según el caso, tendrán competencia objetiva para conocer y resolver los expedientes de jurisdicción voluntaria.

2. En los expedientes de jurisdicción voluntaria la competencia territorial vendrá fijada por el precepto correspondiente en cada caso, sin que quepa modificarla por sumisión expresa o tácita.

3. El impulso y la dirección de los expedientes corresponderá a los Secretarios judiciales, atribuyéndose al Juez o al Secretario judicial, según el caso, la decisión de fondo que recaiga sobre aquellos y las demás resoluciones que expresamente se indiquen por esta Ley.

Cuando no venga atribuida la competencia expresamente a ninguno de ellos, el Juez decidirá los expedientes que afecten al interés público, al estado civil de las personas, los que precisen la tutela de normas sustantivas o puedan deparar actos de disposición, reconocimiento, creación o extinción de derechos subjetivos, así como cuando afecten a los derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente. El resto de expedientes serán resueltos por el Secretario judicial.

---

7 BOE núm. 158 de 3 de julio de 2015.

Artículo 3. ***Legitimación y postulación***

1. Podrán promover expedientes de jurisdicción voluntaria e intervenir en ellos quienes sean titulares de derechos o intereses legítimos o cuya legitimación les venga conferida legalmente sobre la materia que constituya su objeto, sin perjuicio de los casos en que el expediente pueda iniciarse de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.

2. Tanto los solicitantes como los interesados deberán actuar defendidos por Letrado y representados por Procurador en aquellos expedientes en que así lo prevea la presente Ley. No obstante, aun cuando no sea requerido por la ley, las partes que lo deseen podrán actuar asistidas o representadas por Abogado y Procurador, respectivamente.

En todo caso, será necesaria la actuación de Abogado y Procurador para la presentación de los recursos de revisión y apelación que en su caso se interpongan contra la resolución definitiva que se dicte en el expediente, así como a partir del momento en que se formulase oposición.

Artículo 4. ***Intervención del Ministerio Fiscal***

El Ministerio Fiscal intervendrá en los expedientes de jurisdicción voluntaria cuando afecten al estado civil o condición de la persona o esté comprometido el interés de un menor o una persona con capacidad modificada judicialmente, y en aquellos otros casos en que la ley expresamente así lo declare.

Artículo 5. ***Prueba***

El Juez o el Secretario judicial, según quien sea el competente para el conocimiento del expediente, decidirá sobre la admisión de los medios de prueba que se le propongan, pudiendo ordenar prueba de oficio en los casos en que exista un interés público, se afecte a menores o personas con capacidad modificada judicialmente, lo estime conveniente para clarificar algún elemento relevante y determinante de la cuestión o expresamente lo prevea la ley.

Artículo 6. ***Tramitación simultánea o posterior de expedientes o procesos***

1. Cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriormente incoados.

El régimen jurídico contemplado en el presente apartado para los expedientes de jurisdicción voluntaria será aplicable también a los expedientes tramitados por Notarios y Registradores en aquellas materias en las que la competencia les venga atribuida concurrentemente con la del Secretario judicial.

2. No se podrá iniciar o continuar con la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria que verse sobre un objeto que esté siendo sustanciado en un proceso jurisdiccional. Una vez acreditada la presentación de la correspondiente demanda, se procederá al archivo del expediente, remitiéndose las actuaciones realizadas al tribunal que esté conociendo del proceso jurisdiccional para que lo incorpore a los autos.

3. Se acordará la suspensión del expediente cuando se acredite la existencia de un proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pudiese afectarle, debiendo tramitarse el incidente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Artículo 7. *Gastos*

Los gastos ocasionados en los expedientes de jurisdicción voluntaria serán a cargo del solicitante, salvo que la ley disponga otra cosa.

Los gastos ocasionados por testigos y peritos serán a cargo de quien los proponga.

Artículo 8. *Carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil*

Las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil serán de aplicación supletoria a los expedientes de jurisdicción voluntaria en todo lo no regulado por la presente Ley.

(...)

TÍTULO III
De los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia

CAPÍTULO I
De la dispensa del impedimento matrimonial

Artículo 81. *Competencia, legitimación y postulación*

1. El Juez de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de cualquiera de los contrayentes será competente para conocer de la solicitud de dispensa de los impedimentos de muerte dolosa del

cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal y de parentesco para contraer matrimonio del grado tercero entre colaterales, previstos en el artículo 48 del Código Civil.

2. Deberá promover este expediente el contrayente en quien concurra el impedimento para el matrimonio.

3. En la práctica de estas actuaciones no será preceptiva la intervención de Abogado ni Procurador.

Artículo 82. ***Solicitud***

El expediente se iniciará mediante solicitud dirigida al Juzgado que expresará los motivos de índole particular, familiar o social en la que se basa, y a la que se acompañarán los documentos y antecedentes necesarios que acrediten la concurrencia de la justa causa exigida por el Código Civil para que proceda la dispensa y, en su caso, la proposición de prueba, cuya práctica se acordará por el Juez. Si se tratara del impedimento de parentesco, en la solicitud se expresará, con claridad el árbol genealógico de los contrayentes.

Artículo 83. ***Tramitación y resolución***

1. Admitida a trámite por el Secretario judicial la solicitud, citará a la comparecencia a los contrayentes y a aquellos que pudieran estar interesados, quienes serán oídos. Para la dispensa del impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior deberá citarse, además, al Ministerio Fiscal. En la comparecencia se practicarán las pruebas que hubieren sido propuestas y acordadas.

2. El Juez, teniendo en cuenta la justificación ofrecida, resolverá concediendo o denegando la dispensa del impedimento para el matrimonio.

Artículo 84. ***Testimonio***

En el caso de concesión de la dispensa para el matrimonio, el Secretario judicial expedirá testimonio que se entregará al solicitante para el uso que corresponda.

CAPÍTULO II
De la intervención judicial en relación con la patria potestad

Sección 1ª
Disposición común

Artículo 85. ***Tramitación***

1. En los expedientes a que se refiere este Capítulo, una vez admitida la solicitud por el Secretario judicial, éste citará a la comparecencia al solicitante, al Ministerio Fiscal, a los progenitores, guardadores o tutores cuando proceda, a la persona con capacidad modificada judicialmente, en su caso o al menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de 12 años. Si el titular de la patria potestad fuese un menor no emancipado, se citará también a sus progenitores y, a falta de éstos, a su tutor. Se podrá también acordar la citación de otros interesados.

2. El Juez podrá acordar, de oficio o a instancia del solicitante, de los demás interesados o del Ministerio Fiscal, la práctica durante la comparecencia de las diligencias que considere oportunas. Si estas actuaciones tuvieran lugar después de la comparecencia, se dará traslado del acta correspondiente a los interesados para que puedan efectuar alegaciones en el plazo de cinco días.

3. No será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador para promover y actuar en estos expedientes.

Sección 2ª
De la intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad

Artículo 86. ***Ámbito de aplicación, competencia y legitimación***

1. Se aplicarán las disposiciones de esta sección cuando el Juez deba intervenir en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad ejercitada conjuntamente por los progenitores. También serán de aplicación en los casos en que esté legalmente prevista la autorización o intervención judicial cuando el titular de la patria potestad fuere un menor de edad no emancipado y hubiere desacuerdo o imposibilidad de sus progenitores o tutor.

2. Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del hijo. No obstante, si el ejercicio con-

junto de la patria potestad por los progenitores hubiera sido establecido por resolución judicial, será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que la hubiera dictado.

3. Están legitimados para promover este expediente ambos progenitores, individual o conjuntamente. Si el titular de la patria potestad fuese un menor no emancipado, también estarán legitimados sus progenitores y, a falta de éstos, su tutor.

Sección 3ª
De las medidas de protección relativas al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada judicialmente

Artículo 87. *Ámbito de aplicación, competencia y legitimación*

1. Se aplicarán las disposiciones de esta Sección para adoptar medidas en relación al ejercicio inadecuado de la potestad de guarda de menores o personas con capacidad modificada judicialmente o a la administración de sus bienes en los casos a que se refieren los artículos 158, 164, 165, 167 y 216 del Código Civil. Y en concreto:

a) Para la adopción de las medidas de protección de los menores y de las personas con capacidad modificada judicialmente establecidas en el artículo 158 del Código Civil.

b) Para el nombramiento de un administrador judicial para la administración de los bienes adquiridos por el hijo por sucesión en la que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, y no se hubiera designado por el causante persona para ello, ni pudiera tampoco desempeñar dicha función el otro progenitor.

c) Para atribuir a los progenitores que carecieren de medios la parte de los frutos que en equidad proceda de los bienes adquiridos por el hijo por título gratuito cuando el disponente hubiere ordenado de manera expresa que no fueran para los mismos, así como de los adquiridos por sucesión en que el padre, la madre o ambos hubieran sido justamente desheredados o no hubieran podido heredar por causa de indignidad, y de aquellos donados o dejados a los hijos especialmente para su educación o carrera.

d) Para la adopción de las medidas necesarias para asegurar y proteger los bienes de los hijos, exigir caución o fianza para continuar los progenitores con su administración o incluso nombrar un Administrador cuando la administración de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo.

2. Será competente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente. No obstante, si el ejercicio conjunto de la patria potestad por los progenitores o la atribución de la guarda y custodia de los hijos hubiera sido establecido por resolución judicial, así como cuando estuvieran sujetos a tutela será competente para conocer del expediente el Juzgado de Primera Instancia que hubiera conocido del inicial.

3. Las medidas a que se refiere este Capítulo se adoptarán de oficio o a instancia del propio afectado, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal. Cuando se soliciten respecto de una persona con capacidad modificada judicialmente, podrán adoptarse asimismo a instancia de cualquier interesado.

Artículo 88. ***Resolución***

Si el Juez estimare procedente la adopción de medidas, resolverá lo que corresponda designando persona o institución que, en su caso, haya de encargarse de la custodia del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, adoptará las medidas procedentes en el caso conforme a lo establecido en los artículos 158 y 167 del Código Civil, y podrá nombrar, si procediere, un defensor judicial o un administrador.

Artículo 89. ***Actuación en casos de tutela***

En los casos de tutela del menor o persona con capacidad modificada judicialmente, el Juez que haya conocido del expediente remitirá testimonio de la resolución definitiva al que hubiese conocido del nombramiento de tutor.

CAPÍTULO III
De la intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales

Artículo 90. ***Ámbito de aplicación, competencia, postulación y tramitación***

1. Se seguirán los trámites regulados en las normas comunes de esta Ley cuando los cónyuges, individual o conjuntamente, soliciten la intervención o autorización judicial para:

a) Fijar el domicilio conyugal o disponer sobre la vivienda habitual y objetos de uso ordinario, si hubiere desacuerdo entre los cónyuges.

b) Fijar la contribución a las cargas del matrimonio, cuando uno de los cónyuges incumpliere tal deber.

c) Realizar un acto de administración respecto de bienes comunes por ser necesario el consentimiento de ambos cónyuges, o para la realización de un acto de disposición a título oneroso sobre los mismos, por hallarse el otro cónyuge impedido para prestarlo o se negare injustificadamente a ello.

d) Conferir la administración de los bienes comunes, cuando uno de los cónyuges se hallare impedido para prestar el consentimiento o hubiere abandonado la familia o existiere separación de hecho.

e) Realizar actos de disposición sobre inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente, si el cónyuge tuviera la administración y, en su caso, la disposición de los bienes comunes por ministerio de la ley o por resolución judicial.

2. En los expedientes sobre atribución de la administración y disposición de los bienes comunes a uno sólo de los cónyuges, el Juez podrá acordar asimismo cautelas y limitaciones, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal cuando haya de intervenir en el expediente.

3. En los expedientes a que se refieren los dos apartados anteriores será competente el Juzgado de Primera Instancia del que sea o hubiera sido el último domicilio o residencia de los cónyuges.

No será preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador para promover y actuar en estos expedientes, salvo que la intervención judi-

cial fuera para la realización de un acto de carácter patrimonial con un valor superior a 6.000 euros, en cuyo caso será necesario.

4. El Juez oirá en la comparecencia al solicitante, al cónyuge no solicitante, en su caso, y a los demás interesados, sin perjuicio de la práctica de las demás diligencias de prueba que estime pertinentes.

5. En estos expedientes se dará audiencia al Ministerio Fiscal cuando estén comprometidos los intereses de los menores o personas con capacidad modificada judicialmente.

(...)

Disposición adicional primera. *Referencias contenidas en la legislación*

1. Las referencias que efectúen leyes de fecha anterior a la presente a las competencias del Juez en relación con los asuntos de jurisdicción voluntaria, se entenderán hechas al Juez o al Secretario judicial con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 2 de esta Ley.

Asimismo, las referencias que figuren en normas de fecha anterior a esta Ley relativas a la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a asuntos de jurisdicción voluntaria, se entenderán hechas a la presente Ley.

2. Las referencias que figuren en normas de fecha anterior a esta Ley a separación o divorcio judicial se entenderán hechas a separación o divorcio legal. En el mismo sentido las referencias existentes a "separación de hecho por mutuo acuerdo que conste fehacientemente" deberán entenderse a la separación notarial.

3. Las referencias realizadas en esta Ley al Código Civil o a la legislación civil deberá entenderse realizada también a las leyes civiles forales o especiales allí donde existan.

(...)

Disposición transitoria cuarta. *Expedientes de adopción y matrimoniales*

1. Las adopciones que se inicien hasta la entrada en vigor de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se regirán por las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.

2. Los expedientes matrimoniales que se inicien antes del 30 de junio de 2017 se seguirán tramitando por el Encargado del Registro Civil con-

forme a las disposiciones del Código Civil y de la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957.

Resuelto favorablemente el expediente matrimonial por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio se podrá celebrar, a elección de los contrayentes, ante:

1º El Juez Encargado del Registro Civil y los Jueces de Paz por delegación de aquél.

2.º El Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue.

3º El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración.

4º El funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero.

La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el Código Civil y en la Ley del Registro Civil de 8 de junio de 1957, con las especialidades que se establecen en esta disposición.

El matrimonio celebrado ante el Encargado del Registro Civil, Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue o ante el Secretario judicial se hará constar en acta; el que se celebre ante Notario constará en escritura pública. En ambos casos deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del Encargado del Registro Civil.

Disposición transitoria quinta. ***Matrimonios celebrados por las confesiones religiosas evangélicas, judías e islámicas y por las que hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España***

1. Hasta la entrada en vigor de las disposición final quinta de esta ley, al matrimonio religioso evangélico será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 24/1992, de 10 noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Reli-

giosas Evangélicas de España, salvo el apartado 5, que quedará redactado de la forma siguiente:

> "5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente previo que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto".

2. Hasta la entrada en vigor de las disposición final sexta de esta ley, al matrimonio religioso judío será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, salvo el apartado 5 del artículo 7, que queda redactado de la forma siguiente:

> "5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa que representa como ministro de culto".

3. Hasta la entrada en vigor de las disposición final séptima de esta ley, al matrimonio religioso islámico será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de Espa-

ña, salvo el apartado 3 del artículo 7, que queda redactado de la forma siguiente:

> "3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído aquel extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de las circunstancias del expediente que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la capacidad del representante de la Comunidad Islámica para celebrar matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo de la Comunidad".

4. Hasta la entrada en vigor del artículo 58 bis de la Ley 20/2011, de 22 de julio, del Registro Civil, la celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, requerirán la resolución previa de capacidad matrimonial. Cumplido este trámite, el Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que haya intervenido expedirá dos copias de la resolución que incluirá, en todo caso, certificación acreditativa del juicio de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio.

El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deberá prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses desde la expedición del certificado de capacidad matrimonial.

A estos efectos se consideran ministros de culto a las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España con la

conformidad de la Federación que, en su caso, hubiera solicitado dicho reconocimiento.

Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias de la resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto.

(...)

Disposición final primera. *Modificación de determinados artículos del Código Civil*

El Código Civil queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 47 queda redactado del siguiente modo:

> "**Artículo 47**. *Tampoco pueden contraer matrimonio entre sí:*
> 1. (...)
> 2. (...)
> 3. Los condenados por haber tenido participación en la muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal".

Dos. Se modifica el artículo 48:

> "El Juez podrá dispensar, con justa causa y a instancia de parte, mediante resolución previa dictada en expediente de jurisdicción voluntaria, los impedimentos de muerte dolosa del cónyuge o persona con la que hubiera estado unida por análoga relación de afectividad a la conyugal y de parentesco de grado tercero entre colaterales. La dispensa ulterior convalida, desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no haya sido instada judicialmente por alguna de las partes".

Tres. El artículo 49 queda redactado de la forma siguiente:

"Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de España:
1º En la forma regulada en este Código.
2º En la forma religiosa legalmente prevista.
También podrá contraer matrimonio fuera de España con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración".

Cuatro. Se modifica la rúbrica de la sección segunda del Capítulo III del Título IV del Libro I, que pasa a tener la siguiente redacción:

"*Sección segunda. De la celebración del matrimonio*"

Cinco. El artículo 51 queda redactado del siguiente modo:

"**Artículo 51.**
La competencia para constatar mediante acta o expediente el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio corresponderá al Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil del lugar del domicilio de uno de los contrayentes o al funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil si residiesen en el extranjero.
Será competente para celebrar el matrimonio:
1º El Juez de Paz o Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue.
2º El Secretario judicial o Notario libremente elegido por ambos contrayentes que sea competente en el lugar de celebración.
3º El funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil en el extranjero".

Seis. El artículo 52 queda redactado del siguiente modo:

"Podrán celebrar el matrimonio del que se halle en peligro de muerte:
1º El Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien delegue, Secretario judicial, Notario o funcionario a que se refiere el artículo 51.
2º El Oficial o Jefe superior inmediato respecto de los militares en campaña.
3º El Capitán o Comandante respecto de los matrimonios que se celebren a bordo de nave o aeronave.
El matrimonio en peligro de muerte no requerirá para su celebración la previa tramitación del acta o expediente matrimonial, pero sí la presencia, en su celebración, de dos testigos mayores de edad y, cuando el peligro de muerte derive de enfermedad o estado físico de alguno de los contrayentes, dictamen médico sobre su capacidad para la prestación del consentimiento y la gravedad de la situación, salvo imposibilidad acreditada, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65".

Siete. El artículo 53 queda redactado del siguiente modo:

"La validez del matrimonio no quedará afectada por la incompetencia o falta de nombramiento del Juez de Paz, Alcalde, Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien se celebre, siempre que al menos uno de los cónyuges hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente".

Ocho. El artículo 55 queda redactado del siguiente modo:

"Uno de los contrayentes podrá contraer matrimonio por apoderado, a quien tendrá que haber concedido poder especial en forma auténtica, siendo siempre necesaria la asistencia personal del otro contrayente.

En el poder se determinará la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio, con expresión de las circunstancias personales precisas para establecer su identidad, debiendo apreciar su validez el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente matrimonial previo al matrimonio.

El poder se extinguirá por la revocación del poderdante, por la renuncia del apoderado o por la muerte de cualquiera de ellos. En caso de revocación por el poderdante bastará su manifestación en forma auténtica antes de la celebración del matrimonio. La revocación se notificará de inmediato al Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente previo al matrimonio, y si ya estuviera finalizado a quien vaya a celebrarlo".

Nueve. El artículo 56 queda redactado del siguiente modo:

"Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código.

Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento".

Diez. El artículo 57 queda redactado del siguiente modo:

"El matrimonio tramitado por el Secretario judicial o por funcionario consular o diplomático podrá celebrarse ante el mismo u otro distinto, o ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue, a elección de los contrayentes. Si se hubiere tramitado por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio deberá celebrarse ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue, que designen los contrayentes.

Finalmente, si fuera el Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo Notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue".

Once. El artículo 58 queda redactado del siguiente modo:

"El Juez de Paz, Alcalde, Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario, después de leídos los artículos 66, 67 y 68, preguntará a cada uno de los contrayentes si consiente en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae en dicho acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio y extenderá el acta o autorizará la escritura correspondiente".

Doce. El artículo 60 queda redactado del siguiente modo:

"1. El matrimonio celebrado según las normas del Derecho canónico o en cualquiera de otras formas religiosas previstas en los acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas produce efectos civiles.

2. Igualmente, se reconocen efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España.

En este supuesto, el reconocimiento de efectos civiles requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) La tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial con arreglo a la normativa del Registro Civil.

b) La libre manifestación del consentimiento ante un ministro de culto debidamente acreditado y dos testigos mayores de edad.

La condición de ministro de culto será acreditada mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, con la conformidad de la federación que, en su caso, hubiere solicitado dicho reconocimiento.

3. Para el pleno reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio celebrado en forma religiosa se estará a lo dispuesto en el Capítulo siguiente".

Trece. El artículo 62 queda redactado del siguiente modo:

"La celebración del matrimonio se hará constar mediante acta o escritura pública que será firmada por aquél ante quien se celebre, los contrayentes y dos testigos.

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se remitirá por el autorizante copia acreditativa de la celebración del matrimonio al Registro Civil competente, para su inscripción, previa calificación por el Encargado del mismo".

Catorce. El artículo 63 queda redactado del siguiente modo:

"La inscripción del matrimonio celebrado en España en forma religiosa se practicará con la simple presentación de la certificación de la iglesia, o confesión, comunidad religiosa o federación respectiva, que habrá de expresar las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil.

Se denegará la práctica del asiento cuando de los documentos presentados o de los asientos del Registro conste que el matrimonio no reúne los requisitos que para su validez se exigen en este Título".

Quince. El artículo 65 queda redactado del siguiente modo:

"En los casos en que el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el Secretario judicial, Notario, o el funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitación del acta o expediente al que se refiere este artículo.

Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas en el párrafo anterior, el acta de aquélla se remitirá al Encargado del Registro Civil del lugar de celebración para que proceda a la comprobación de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobación, el Encargado del Registro Civil procederá a su inscripción".

Dieciséis. Se modifica el número 3º del artículo 73 que queda redactado del siguiente modo:

"3º El que se contraiga sin la intervención del Juez de Paz, Alcalde o Concejal, Secretario judicial, Notario o funcionario ante quien deba celebrarse, o sin la de los testigos".

Diecisiete. El párrafo primero del artículo 81 queda redactado del siguiente modo:

"Se decretará judicialmente la separación cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio".

Dieciocho. El artículo 82 queda redactado del siguiente modo:

"1. Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio mediante la formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura

pública ante Notario, en el que, junto a la voluntad inequívoca de separarse, determinarán las medidas que hayan de regular los efectos derivados de la separación en los términos establecidos en el artículo 90. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de separación.

Los cónyuges deberán intervenir en el otorgamiento de modo personal, sin perjuicio de que deban estar asistidos por Letrado en ejercicio, prestando su consentimiento ante el Secretario judicial o Notario. Igualmente los hijos mayores o menores emancipados deberán otorgar el consentimiento ante el Secretario judicial o Notario respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar.

2. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores".

Diecinueve. El artículo 83 queda redactado del siguiente modo:

"La sentencia o decreto de separación o el otorgamiento de la escritura pública del convenio regulador que la determine producen la suspensión de la vida común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

Los efectos de la separación matrimonial se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así la declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 82. Se remitirá testimonio de la sentencia o decreto, o copia de la escritura pública al Registro Civil para su inscripción, sin que, hasta que esta tenga lugar, se produzcan plenos efectos frente a terceros de buena fe".

Veinte. El artículo 84 queda redactado del siguiente modo:

"La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo resuelto en él, pero ambos cónyuges separadamente deberán ponerlo en conocimiento del Juez que entienda o haya entendido en el litigio. Ello no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.

Cuando la separación hubiere tenido lugar sin intervención judicial, en la forma prevista en el artículo 82, la reconciliación deberá formalizase en escritura pública o acta de manifestaciones.

La reconciliación deberá inscribirse, para su eficacia frente a terceros, en el Registro Civil correspondiente".

Veintiuno. El artículo 87 queda redactado del siguiente modo:

"Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la formulación de un convenio regulador ante el Secretario judicial o en escritura pública ante Notario, en la forma y con el contenido regulado en el artículo 82, debiendo concurrir los mismos requisitos y circunstancias exigidas en él. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de divorcio".

Veintidós. El artículo 89 queda redactado del siguiente modo:

"Los efectos de la disolución del matrimonio por divorcio se producirán desde la firmeza de la sentencia o decreto que así lo declare o desde la manifestación del consentimiento de ambos cónyuges otorgado en escritura pública conforme a lo dispuesto en el artículo 87. No perjudicará a terceros de buena fe sino a partir de su respectiva inscripción en el Registro Civil".

Veintitrés. Se modifica el artículo 90, que queda redactado de la siguiente manera:

"1. El convenio regulador a que se refieren los artículos 81, 82, 83, 86 y 87 deberá contener, al menos y siempre que fueran aplicables, los siguientes extremos:

a) El cuidado de los hijos sujetos a la patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta y, en su caso, el régimen de comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva habitualmente con ellos.

b) Si se considera necesario, el régimen de visitas y comunicación de los nietos con sus abuelos, teniendo en cuenta, siempre, el interés de aquéllos.

c) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

d) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos, así como sus bases de actualización y garantías en su caso.

e) La liquidación, cuando proceda, del régimen económico del matrimonio.

f) La pensión que conforme al artículo 97 correspondiere satisfacer, en su caso, a uno de los cónyuges.

2. Los acuerdos de los cónyuges adoptados para regular las consecuencias de la nulidad, separación y divorcio presentados ante el órgano judicial serán aprobados por el Juez salvo si son dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.

Si las partes proponen un régimen de visitas y comunicación de los nietos con los abuelos, el Juez podrá aprobarlo previa audiencia de los abuelos en la que estos presten su consentimiento. La denegación de los acuerdos habrá de hacerse mediante resolución motivada y en este caso los cónyuges deberán

someter, a la consideración del Juez, nueva propuesta para su aprobación, si procede.

Cuando los cónyuges formalizasen los acuerdos ante el Secretario judicial o Notario y éstos considerasen que, a su juicio, alguno de ellos pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirán a los otorgantes y darán por terminado el expediente. En este caso, los cónyuges sólo podrán acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio regulador.

Desde la aprobación del convenio regulador o el otorgamiento de la escritura pública, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio.

3. Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges judicialmente, podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio aprobado por el Juez, cuando así lo aconsejen las nuevas necesidades de los hijos o el cambio de las circunstancias de los cónyuges. Las medidas que hubieran sido convenidas ante el Secretario judicial o en escritura pública podrán ser modificadas por un nuevo acuerdo, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código.

4. El Juez o las partes podrán establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio".

Veinticuatro. Se modifica el primer párrafo del artículo 95, que pasa a quedar redactado de la siguiente manera:

"La sentencia firme, el decreto firme o la escritura pública que formalicen el convenio regulador, en su caso, producirán, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución o extinción del régimen económico matrimonial y aprobará su liquidación si hubiera mutuo acuerdo entre los cónyuges al respecto.

Si la sentencia de nulidad declarara la mala fe de uno solo de los cónyuges, el que hubiere obrado de buena fe podrá optar por aplicar en la liquidación del régimen económico matrimonial las disposiciones relativas al régimen de participación y el de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte".

Veinticinco. El último párrafo del artículo 97 queda redactado del siguiente modo:

"En la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o el Notario se fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y las garantías para su efectividad".

Veintiséis. El artículo 99 queda redactado del siguiente modo:

"En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente o por convenio regulador formalizado conforme al artículo 97 por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero".

Veintisiete. El artículo 100, queda redactado del siguiente modo:

"Fijada la pensión y las bases de su actualización en la sentencia de separación o de divorcio, sólo podrá ser modificada por alteraciones en la fortuna de uno u otro cónyuge que así lo aconsejen.

La pensión y las bases de actualización fijadas en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o Notario podrán modificarse mediante nuevo convenio, sujeto a los mismos requisitos exigidos en este Código".

Veintiocho. El apartado 2 del artículo 107 queda redactado del siguiente modo:

"2. La separación y el divorcio legal se regirán por las normas de la Unión Europea o españolas de Derecho internacional privado".

Veintinueve. El párrafo segundo del artículo 156 queda redactado del siguiente modo:

"En caso de desacuerdo, cualquiera de los dos podrá acudir al Juez, quien, después de oír a ambos y al hijo si tuviera suficiente madurez y, en todo caso, si fuera mayor de doce años, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad, podrá atribuirla total o parcialmente a uno de los padres o distribuir entre ellos sus funciones. Esta medida tendrá vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de dos años".

Treinta. El último párrafo del artículo 158 queda redactado de la forma siguiente:

"Todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un expediente de jurisdicción voluntaria".

Treinta y uno. El artículo 167 queda redactado de la forma siguiente:

"Cuando la administración de los progenitores ponga en peligro el patrimonio del hijo, el Juez, a petición del propio hijo, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del menor, podrá adoptar las medidas que estime necesa-

rias para la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la administración o incluso nombrar un Administrador".

(...)

Disposición final cuarta. ***Modificación de la Ley 20/2011, de 21 de julio, de Registro Civil***

Uno. Los apartados 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 del artículo 58 quedan redactados de la forma siguiente:

"1. El matrimonio en forma civil se celebrará ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue, Secretario judicial, Notario, o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil.

2. La celebración del matrimonio requerirá la previa tramitación o instrucción de un acta o expediente a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obstáculo, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil. La tramitación del acta competerá al Notario del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes. La instrucción del expediente corresponderá al Secretario judicial o Encargado del Registro Civil del domicilio de uno de los contrayentes.

5. El Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, se podrán solicitar los informes y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado, capacidad o domicilio de los contrayentes o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio. Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

De la realización de todas estas actuaciones se dejará constancia en el acta o expediente, archivándose junto con los documentos previos a la inscripción de matrimonio.

Pasado un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrarse éste sin nueva publicación o diligencias.

6. Realizadas las anteriores diligencias, el Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil que haya intervenido finalizará el acta o dictará resolución haciendo constar la concurrencia o no en los contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la determinación del régimen económico matrimonial que resulte aplicable y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes, entregando copia a éstos. La actuación o

resolución deberá ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento que concurra.

7. Si el juicio del Secretario judicial, Notario o Encargado del Registro Civil fuera desfavorable se procederá al cierre del acta o expediente y los interesados podrán recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, sometiéndose al régimen de recursos previsto por esta Ley.

8. Resuelto favorablemente el expediente por el Secretario judicial, el matrimonio se podrá celebrar ante el mismo u otro Secretario judicial, Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue, a elección de los contrayentes. Si se hubiere tramitado por el Encargado del Registro Civil, el matrimonio deberá celebrarse ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue, que designen los contrayentes. Finalmente, si fuera el Notario quien hubiera extendido el acta matrimonial, los contrayentes podrán otorgar el consentimiento, a su elección, ante el mismo Notario u otro distinto del que hubiera tramitado el acta previa, el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue. La prestación del consentimiento deberá realizarse en la forma prevista en el Código Civil.

El matrimonio celebrado ante Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue o ante el Secretario judicial se hará constar en acta; el que se celebre ante Notario constará en escritura pública. En ambos casos deberá ser firmada, además de por aquel ante el que se celebra, por los contrayentes y dos testigos.

Extendida el acta o autorizada la escritura pública, se entregará a cada uno de los contrayentes copia acreditativa de la celebración del matrimonio y se remitirá por el autorizante, en el mismo día y por medios telemáticos, testimonio o copia autorizada electrónica del documento al Registro Civil para su inscripción, previa calificación del Encargado del Registro Civil.

9. La celebración del matrimonio fuera de España corresponderá al funcionario consular o diplomático Encargado del Registro Civil en el extranjero. Si uno o los dos contrayentes residieran en el extranjero, la tramitación del expediente previo podrá corresponder al funcionario diplomático o consular Encargado del registro civil competente en la demarcación consular donde residan. El matrimonio así tramitado podrá celebrarse ante el mismo funcionario u otro distinto, o ante el Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien éste delegue, a elección de los contrayentes.

10. Cuando el matrimonio se hubiere celebrado sin haberse tramitado el correspondiente expediente o acta previa, si éste fuera necesario, el Secretario judicial, Notario, o el funcionario Encargado del Registro Civil que lo haya celebrado, antes de realizar las actuaciones que procedan para su inscripción, deberá comprobar si concurren los requisitos legales para su validez, mediante la tramitación del acta o expediente al que se refiere este artículo.

Si la celebración del matrimonio hubiera sido realizada ante autoridad o persona competente distinta de las indicadas en el párrafo anterior, el acta de aquélla se remitirá al Encargado del Registro Civil del lugar de celebración

para que proceda a la comprobación de los requisitos de validez, mediante el expediente correspondiente. Efectuada esa comprobación, el Encargado del Registro Civil procederá a su inscripción.

12. Si los contrayentes hubieran manifestado su propósito de contraer matrimonio en el extranjero, con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración o en forma religiosa y se exigiera la presentación de un certificado de capacidad matrimonial, lo expedirá el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario consular o diplomático del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, previo expediente instruido o acta que contenga el juicio del autorizante acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes".

Dos. El apartado 1 del artículo 58 bis queda redactado del siguiente modo:

"1. Para la celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos y en los Acuerdos de cooperación del Estado con las confesiones religiosas se estará a lo dispuesto en los mismos.

2. En los supuestos de celebración del matrimonio en la forma religiosa prevista por las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, requerirán la tramitación de un acta o expediente previo de capacidad matrimonial conforme al artículo anterior. Cumplido este trámite, el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil que haya intervenido expedirá dos copias del acta o resolución, que incluirá, en su caso, el juicio acreditativo de la capacidad matrimonial de los contrayentes, que éstos deberán entregar al ministro de culto encargado de la celebración del matrimonio.

El consentimiento deberá prestarse ante un ministro de culto y dos testigos mayores de edad. En estos casos, el consentimiento deberá prestarse antes de que hayan transcurrido seis meses desde la fecha del acta o resolución que contenga el juicio de capacidad matrimonial. A estos efectos se consideran ministros de culto a las personas físicas dedicadas, con carácter estable, a las funciones de culto o asistencia religiosa y que acrediten el cumplimiento de estos requisitos mediante certificación expedida por la iglesia, confesión o comunidad religiosa que haya obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en España, con la conformidad de la federación que en su caso hubiera solicitado dicho reconocimiento.

Una vez celebrado el matrimonio, el oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario

diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto".

Tres. El artículo 59 pasa a tener la siguiente redacción:

"**Artículo 59.** ***Inscripción del matrimonio***

1. El matrimonio cuyos requisitos se hayan constatado y celebrado según el procedimiento previsto en el artículo 58 se inscribirá en los registros individuales de los contrayentes.

2. El matrimonio celebrado ante autoridad extranjera accederá al Registro Civil español mediante la inscripción de la certificación correspondiente, siempre que tenga eficacia con arreglo a lo previsto en la presente Ley.

3. El matrimonio celebrado en España en forma religiosa accederá al Registro Civil mediante la inscripción de la certificación emitida por el ministro de culto, conforme a lo previsto en el artículo 63 del Código Civil.

4. Practicada la inscripción, el Encargado del Registro Civil pondrá a disposición de cada uno de los contrayentes certificación de la inscripción del matrimonio.

5. La inscripción hace fe del matrimonio y de la fecha y lugar en que se contrae y produce el pleno reconocimiento de los efectos civiles del mismo frente a terceros de buena fe".

Cuatro. Se modifica el artículo 60.

"**Artículo 60.** ***Inscripción del régimen económico del matrimonio***

1. Junto a la inscripción de matrimonio se inscribirá el régimen económico matrimonial legal o pactado que rija el matrimonio y los pactos, resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo.

2. Cuando no se presenten escrituras de capitulaciones se inscribirá como régimen económico matrimonial legal el que fuera supletorio de conformidad con la legislación aplicable. Para hacer constar en el Registro Civil expresamente el régimen económico legal aplicable a un matrimonio ya inscrito cuando aquél no constase con anterioridad y no se aporten escrituras de capitulaciones será necesaria la tramitación de un acta de notoriedad.

Otorgada ante Notario escritura de capitulaciones matrimoniales, deberá éste remitir en el mismo día copia autorizada electrónica de la escritura pública al Encargado del Registro Civil correspondiente para su constancia en

la inscripción de matrimonio. Si el matrimonio no se hubiera celebrado a la fecha de recepción de la escritura de capitulaciones matrimoniales, el Encargado del Registro procederá a su anotación en el registro individual de cada contrayente.

3. En las inscripciones que en cualquier otro Registro produzcan las capitulaciones y demás hechos que afecten al régimen económico matrimonial, se expresarán los datos de su inscripción en el Registro Civil.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1333 del Código Civil, en ningún caso el tercero de buena fe resultará perjudicado sino desde la fecha de la inscripción del régimen económico matrimonial o de sus modificaciones".

Cinco. El artículo 61 queda redactado del siguiente modo:

"**Artículo 61.** ***Inscripción de la separación, nulidad y divorcio***

El Secretario judicial del Juzgado o Tribunal que hubiera dictado la resolución judicial firme de separación, nulidad o divorcio deberá remitir en el mismo día o al siguiente hábil y por medios electrónicos testimonio de la misma a la Oficina General del Registro Civil, la cual practicará de forma inmediata la correspondiente inscripción. Las resoluciones judiciales que resuelvan sobre la nulidad, separación y divorcio podrán ser objeto de anotación hasta que adquieran firmeza.

La misma obligación tendrá el Notario que hubiera autorizado la escritura pública formalizando un convenio regulador de separación o divorcio.

Las resoluciones judiciales o las escrituras públicas que modifiquen las inicialmente adoptadas o convenidas también deberán ser inscritas en el Registro Civil. Las resoluciones sobre disolución de matrimonio canónico, dictadas por autoridad eclesiástica reconocida, se inscribirán si cumplen los requisitos que prevé el ordenamiento jurídico".

(...)

Diez. La disposición final quinta de la Ley del Registro Civil queda redactada como sigue:

"**Disposición final quinta**. ***Tasas municipales***

Se añade un apartado 5 al artículo 20 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, con la siguiente redacción:

5. Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los matrimonios en forma civil".

Once. Se añade una disposición final quinta bis, con la siguiente redacción:

"**Disposición final quinta bis.** ***Aranceles notariales***

El Gobierno aprobará los aranceles correspondientes a la intervención de los Notarios en la tramitación de las actas matrimoniales previas y por la celebración de matrimonios en forma civil con la autorización de las escrituras públicas correspondientes".

(...)

Disposición final quinta. *Modificación de Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España*

Los apartados 2 y 5 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente:

"2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista en el párrafo anterior promoverán acta o expediente previo al matrimonio ante el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil correspondiente conforme a la Ley del Registro Civil".

"5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del acta o expediente previo que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa a la que representa como ministro de culto".

Disposición final sexta. *Modificación de la Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España*

Uno. Se modifica el Título de esta Ley que pasa a ser "Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Judías de España".

Dos. Los apartados 2 y 5 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente:

"2. Las personas que deseen contraer matrimonio en la forma prevista en el párrafo anterior promoverán acta o expediente previo al matrimonio ante el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular Encargado del Registro Civil correspondiente conforme a la Ley del Registro Civil".

"5. Una vez celebrado el matrimonio, el ministro de culto oficiante extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de identidad de los testigos y de las circunstancias del expediente acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la condición de ministro de culto, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo del oficiante o de la entidad religiosa que representa como ministro de culto".

Tres. Se añade una nueva disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:

"**Disposición adicional cuarta.** ***Denominación de la Federació***.

Por acuerdo de las partes se procede a sustituir el nombre de Federación de Comunidades Israelitas de España por el de Federación de Comunidades Judías de España, que será utilizado en lo sucesivo.

Las referencias realizadas a la Federación de Comunidades Israelitas de España en este Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Comunidades Israelitas de España, así como las que figuren en otras normas deberán entenderse hechas a la Federación de Comunidades Judías de España".

Disposición final séptima. *Modificación de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España*

Los apartados 2 y 3 del artículo 7 quedan redactados de la forma siguiente:

"2. Las personas que deseen inscribir el matrimonio celebrado en la forma prevista en el número anterior, deberán acreditar previamente su capacidad matrimonial, mediante copia del acta o resolución previa expedida por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomá-

tico o consular Encargado del Registro Civil conforme a la Ley del Registro Civil y que deberá contener, en su caso, juicio acreditativo de la capacidad matrimonial. No podrá practicarse la inscripción si se hubiera celebrado el matrimonio transcurridos más de seis meses desde la fecha de dicho acta o desde la fecha de la resolución correspondiente.

3. Una vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído aquel extenderá certificación expresiva de la celebración del mismo, con los requisitos necesarios para su inscripción y las menciones de las circunstancias del expediente o acta previa que necesariamente incluirán el nombre y apellidos del Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario diplomático o consular que la hubiera extendido, la fecha y número de protocolo en su caso. Esta certificación se remitirá por medios electrónicos, en la forma que reglamentariamente se determine, junto con la certificación acreditativa de la capacidad representante de la Comunidad Islámica para celebrar matrimonios, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 3, dentro del plazo de cinco días al Encargado del Registro Civil competente para su inscripción. Igualmente extenderá en las dos copias del acta o resolución previa de capacidad matrimonial diligencia expresiva de la celebración del matrimonio, entregando una a los contrayentes y conservará la otra como acta de la celebración en el archivo de la Comunidad".

(...)

Disposición final undécima. *Modificación de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado*

(...)

CAPÍTULO II
De las actas y escrituras públicas en materia matrimonial

Sección 1ª
Del acta matrimonial y de la escritura pública de celebración del matrimonio

Artículo 51

1. Los que vayan a contraer matrimonio para el que se precise acta en la que se constate el cumplimiento de los requisitos de capacidad de ambos contrayentes, la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier género de obstáculos para contraer matrimonio, deberán instar previamente su tramitación ante el Notario que tenga su residencia en el lugar del domicilio de cualquiera de ellos.

2. La solicitud, tramitación y autorización del acta se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil y, en lo no previsto, en esta Ley.

Artículo 52

1. Si el acta fuera favorable a la celebración del matrimonio, este se llevará a cabo ante el Notario que haya intervenido en la tramitación de aquélla mediante el otorgamiento de escritura pública en la que hará constar todas las circunstancias establecidas en la Ley del Registro Civil y su reglamento.

2. Cuando los contrayentes, en la solicitud inicial o durante la tramitación del acta, hayan solicitado que la prestación del consentimiento se realice ante Juez de Paz, Alcalde o Concejal en quien este delegue u otro Notario, se remitirá copia del acta al oficiante elegido, el cual se limitará a celebrar el matrimonio y levantará acta u otorgará escritura pública, según proceda, con todos los requisitos legalmente exigidos.

3. Si el matrimonio se celebrase en peligro de muerte, el Notario otorgará escritura pública donde se recoja la prestación del consentimiento matrimonial, previo dictamen médico sobre su aptitud para prestar éste y sobre la gravedad de la situación cuando el riesgo se derive de enfermedad o estado físico de alguno de los contrayentes, salvo imposibilidad acreditada. Con posterioridad, el Notario procederá a la tramitación del acta de comprobación de los requisitos de validez del matrimonio.

Sección 2ª
Del acta de notoriedad para la constancia del régimen económico matrimonial legal

Artículo 53

1. Quienes deseen hacer constar expresamente en el Registro Civil el régimen económico matrimonial legal que corresponda a su matrimonio cuando este no constare con anterioridad deberán solicitar la tramitación de un acta de notoriedad al Notario con residencia en cualquiera de los domicilios conyugales que hubieran tenido, o en el domicilio o residencia habitual de cualquiera de los cónyuges, o donde estuvieran la mayor parte de sus bienes o donde desarrollen su actividad laboral o empresarial, a elección del requirente. También podrá elegir a un Notario de un distrito colindante a los anteriores.

2. La solicitud de inicio del acta deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de identidad y domicilio del requirente. Deberá acreditarse con información del Registro Civil la inexistencia de un régimen económico matrimonial inscrito.

Los solicitantes deberán aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos en que se deba fundar el acta, aportarán la documentación que estimen conveniente para la determinación de los hechos y deberán acompañar los documentos acreditativos de su vecindad civil en el momento de contraer matrimonio y, en caso de no poder hacerlo, deberán ofrecer información de, al menos, dos testigos que aseguren la realidad de los hechos de los que se derive la aplicación del régimen económico matrimonial legal.

3. Ultimadas las anteriores diligencias, el Notario hará constar su juicio de conjunto sobre si quedan acreditados por notoriedad los hechos y, si considera suficientemente acreditado el régimen económico legal del matrimonio, remitirá, en el mismo día y por medios telemáticos, copia electrónica del acta al Registro Civil correspondiente. En caso contrario, el Notario cerrará igualmente el acta y los interesados no conformes podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda.

Sección 3ª
De la escritura pública de separación matrimonial o divorcio

Artículo 54

1. Los cónyuges, cuando no tuvieren hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de ellos, podrán acordar su separación matrimonial o divorcio de mutuo acuerdo, mediante la formulación de un convenio regulador en escritura pública. Deberán prestar su consentimiento ante el Notario del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes.

2. Los cónyuges deberán estar asistidos en el otorgamiento de la escritura pública de Letrado en ejercicio.

3. La solicitud, tramitación y otorgamiento de la escritura pública se ajustarán a lo dispuesto en el Código Civil y en esta ley.

(...)

FRANCIA
SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA

Mª Ángeles Félix Ballesta
Catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad Pompeu Fabra

ORDEN Nº 2015-1288, DE 15 DE OCTUBRE DE 2015, RELATIVA A LA SIMPLIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA[1]

Comunicado de prensa del Consejo de Ministros

El 14 de octubre de 2015, el Ministro de Justicia[2] presentó una Orden sobre la simplificación y modernización del derecho de familia.

Esta Orden, tomada sobre la base de la Ley nº 2015-177 relativa a la modernización y simplificación de la legislación y los procedimientos en las áreas de justicia y asuntos interiores tiende a simplificar tres ámbitos del derecho de familia: la administración de los bienes de los hijos menores de edad; el derecho a la protección de los adultos; y el divorcio.

En los dos primeros ámbitos, se evita el excesivo control judicial por la delimitación de la intervención del juez únicamente a las situaciones de riesgo, al volver a ser la regla la confianza en las familias.

Esto se refleja, en cuanto a las disposiciones relativas a la gestión de los bienes de los menores, por la supresión de un sistema estigmatizante para las familias monoparentales que, a través del mecanismo de la administración legal de control judicial, se encontraban sometidas sistemá-

---

1 Vid. ORDONNANCE n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille. *JORF* nº 0240 du 16 octobre 2015, page 19304. Texte nº 10. NOR: JUSC1518093R.

2 Versión castellana de la Exposición de motivos de la "Orden nº 2015-1288, de 15 de octubre de 2015, relativa a la simplificación y modernización del derecho de familia", traducida del original francés, por Mª Ángeles Félix Ballesta.

ticamente a control judicial. Esta reforma ofrece ahora, en este sentido, igualdad de trato cualquiera que sea el modo de organización familiar. Sobre la base de una presunción de buena gestión de los bienes del menor por sus representantes legales, el juez sólo intervendrá en situaciones de riesgo.

En cuanto al derecho a la protección de los adultos, se ha introducido un mecanismo de mandato judicial familiar llamado "habilitación familiar", que permite a los allegados de una persona incapaz de dar su consentimiento, que la representen sin tener que someterse a la todos los formalismos de las medidas de protección judicial como son la salvaguarda de la justicia, la curatela y la tutela. Este nuevo dispositivo, que estará abierto a aquellas situaciones en las que exista consenso familiar sobre los mecanismos de apoyo de la familia de la persona vulnerable, hacía tiempo que era esperado por las familias y recomendado por los médicos. Inicialmente beneficiará a los descendientes, ascendientes, hermanos y hermanas, parejas de hecho o concubinos que deseen ser nombrados para representar a su allegado o pariente en estado de vulnerabilidad.

La orden también aporta clarificaciones que favorecerán la reducción de los plazos procesales, en materia de divorcio, en cuanto al papel del juez encargado de la liquidación del régimen matrimonial. Se especifica la posibilidad para los cónyuges de solicitar la división de sus bienes en la instancia del divorcio cuando ya se considere imposible una solución amistosa.

Esta reforma entrará en vigor el primero de enero de 2016.

ANEXO

ORDEN nº 2015-1288, de 15 de octubre 2015, relativa a la simplificación y modernización del derecho de familia[3]

NOR: JUSC1518093R[4]
El Presidente de la República,
Sobre el informe del Primer Ministro y del Ministro de Justicia,

---

3 JORF nº 0240 de 16 de octubre de 2015, p. 19304. Texto nº 10.

4 Versión castellana de "La Orden nº 2015-1288 de 15 de octubre de 2015, relativa a la simplificación y modernización del derecho de familia", traducida del original francés, por Mª Ángeles Félix Ballesta.

Vista la Constitución, en particular su artículo 38;
Visto el Código Civil;
Visto el Código Monetario y Financiero, especialmente su artículo L. 211-1;
Visto el Código de la Organización Judicial, en particular su artículo L. 221-9;
Visto el Código de Procedimiento Civil;
Vista la Ley n° 2015-177 de 16 de febrero de 2015 relativa a la modernización y simplificación de la legislación y procedimientos en las áreas de justicia y de asuntos interiores, en particular sus artículos 1 y 3;
Oído el Consejo de Estado;
Oído el Consejo de Ministros,

Ordena:

Artículo 1

El Código Civil se modifica de conformidad con los artículos 2 a 14 de la presente Orden.

CAPÍTULO I
Disposiciones relativas al divorcio

Artículo 2

I.– El artículo 267 se sustituye por las siguientes disposiciones:

"**Art. 267**.– En ausencia de capitulaciones matrimoniales entre los esposos, el juez dictamina sobre sus demandas de mantener la propiedad conjunta, de asignación preferencial y de anticipo sobre una parte de la comunidad o de los bienes indivisos.

Él se pronuncia sobre las demandas de liquidación y partición de intereses patrimoniales, conforme a lo dispuesto en los artículos 1361 a 1378 del Código de Procedimiento Civil, si está justificada por todos los medios de desacuerdos subsistentes entre las partes, especialmente al producir:

– una declaración conjunta de aceptación de una partición judicial, que indique los puntos de desacuerdo entre los esposos;

– el proyecto elaborado por el notario designado sobre el fundamento del apartado 10 del artículo 255.

Él puede, incluso de oficio, pronunciarse sobre la determinación del régimen matrimonial aplicable a los esposos".

II.– Queda derogado el artículo 267-1.

Capítulo II: Disposiciones relativas a la administración legal

Artículo 3

El Capítulo II del Título IX del Libro I se sustituye por las siguientes disposiciones:

CAPÍTULO II
De la patria potestad en relación con los bienes del hijo

Sección 1
De la administración legal

"**Art. 38**2.– La administración legal corresponde a los padres. Si la patria potestad es ejercida conjuntamente por ambos padres, cada uno de ellos es administrador legal. En los otros casos, la administración legal corresponde al padre que ejerce la patria potestad".

"Art. 382-1.– Cuando la administración legal es ejercida conjuntamente por ambos padres, cada uno de ellos se considera, en relación a terceros, que ha recibido del otro el poder para hacer solo los actos de administración relativos a los bienes del menor.

La lista de actos que se consideran actos de administración se define en los términos del artículo 496".

"Art. 383.– Cuando los intereses del único administrador legal o, en su caso, de los dos administradores legales estén en conflicto con los del menor, éstos últimos soliciten la designación de un administrador ad hoc por el juez tutelar. Ante la falta de diligencia de los administradores legales, el juez puede proceder a dicho nombramiento a petición del ministerio fiscal, del propio menor o de oficio.

Cuando los intereses de uno de los dos administradores legales estén en conflicto con los del menor, el juez tutelar puede autorizar al otro administrador legal que represente al menor en uno o varios actos determinados".

"**Art. 384**.– No están sujetos a la administración legal los bienes donados o legados al menor bajo la condición de que sean administrados por un tercero.

El tercer administrador tiene las facultades que le son conferidas por la donación, el testamento o, en su defecto, las de un administrador legal.

Cuando el tercer administrador rehúsa esta función o se encuentra en una de las situaciones previstas en los artículos 395 y 396, el juez tutelar designa un administrador ad hoc para que lo sustituya".

"**Art. 385.**– El administrador legal está obligado a aportar en la gestión de los bienes del menor cuidados prudentes, diligentes y aconsejados, en el exclusivo interés del menor".

"Art. 386.– El administrador legal es responsable de todo perjuicio resultante de cualquier error cometido por él en la gestión de los bienes del menor.

Si la administración legal es ejercida en común, ambos padres son solidariamente responsables.

El Estado es responsable de los perjuicios susceptibles de ser ocasionados por el juez tutelar y el jefe de la secretaría judicial de la jurisdicción de derecho común de primer grado en el ejercicio de sus funciones en materia de administración legal, en las condiciones previstas en el artículo 412.

La acción de responsabilidad prescribe a los cinco años contados a partir de la mayoría de edad del interesado o de su emancipación".

Sección 2
Del derecho de usufructo

"**Art. 386-1**.– El derecho de usufructo está ligado a la administración legal: pertenece a ambos padres conjuntamente, o a aquél a cuyo cargo está la administración".

"Art. 386-2.– El derecho de usufructo cesa:
1°. Tan pronto como el menor cumpla dieciséis años, o incluso antes cuando contraiga matrimonio;
2º. Por las causas que finalizan la patria potestad o por las que terminan la administración legal;
3º. Por las causa que conllevan la extinción de cualquier usufructo".

"Art. 386-3.– Las cargas de este usufructo son:
1º. Aquéllas que son obligatorias a los usufructuarios;
2º. La alimentación, mantenimiento y educación del menor, según su fortuna;
3º. Las deudas que gravan la sucesión recogida por el menor en tanto que éstas deberían ser pagadas sobre los ingresos".

"Art. 386-4.– El derecho de usufructo no se extiende a los bienes:
1º. Que el menor puede adquirir por su trabajo;
2º Que le son donados o legados bajo la condición expresa de que los padres no los disfrutarán;
3º. Que los reciba a título de indemnización por un perjuicio extrapatrimonial del que ha sido víctima".

Sección 3
De la intervención del juez tutelar

"Art. **387**.– En caso de desacuerdo entre los administradores legales, el juez tutelar es el encargado de la aprobación del acto".

"Art. 387-1.– El administrador legal no puede, sin la autorización previa del juez tutelar:
1º. Vender de común acuerdo un inmueble o negocio comercial perteneciente al menor;
2º. Aportar en sociedad un inmueble o negocio comercial perteneciente al menor;
3º. Contraer un empréstito en nombre del menor;
4º. Renunciar por el menor a un derecho, transigir o comprometer en su nombre;
5º. Aceptar puramente y simplemente una sucesión que revierta en el menor;
6º. Comprar los bienes del menor, tomarlos en arrendamiento; para la conclusión del acto, el administrador legal se considera que está en conflicto de intereses con el menor;
7º. Constituir gratuitamente una garantía en nombre del menor para garantizar la deuda de un tercero;

8º. Proceder a la realización de un acto relativo a valores mobiliarios o instrumentos financieros en el sentido del artículo L. 211-1 del Código Monetario y Financiero, si éste compromete el patrimonio del menor en el presente o el futuro por un cambio significativo en su contenido, una depreciación significativa de su valor de capital o una alteración duradera de las prerrogativas del menor.

La autorización determina las condiciones del acto y, en su caso, el precio o precio establecido por el cual el acto es aprobado".

"Art. 387-2.– El administrador legal no puede, ni con autorización:

1º. Enajenar gratuitamente los bienes o derechos del menor;

2º. Adquirir de un tercero un derecho o un crédito en contra del menor;

3º. Ejercer el comercio o una profesión liberal en nombre del menor;

4º. Transferir a un patrimonio fiduciario los bienes o derechos del menor".

"Art. 387-3.– Con motivo de la revisión de los actos mencionados en el artículo 387-1, el juez puede, si lo estima indispensable para salvaguardar los intereses del menor, teniendo en cuenta la composición o el valor del patrimonio, la edad del menor o de su situación familiar, decidir que un acto o una serie de actos de disposición estarán sujetos a su autorización previa.

El juez es instado para los mismos fines por los padres o uno de ellos, el ministerio público o cualquier tercero con conocimiento de actos u omisiones que comprometan manifiestamente y sustancialmente los intereses patrimoniales del menor, o de una situación portadora de graves perjuicios para éste.

Los terceros que han informado al juez de la situación no son garantes de la gestión de los bienes del menor hecha por el administrador legal".

"Art. 387-4.– Con motivo del control que ejerce de conformidad con los artículos 387-1 y 387-3, el juez puede pedir al administrador legal que le sea transmitido un inventario del patrimonio del menor así como, cada año, un inventario actualizado.

Una copia del inventario se entrega al menor de edad de dieciséis años".

"Art. 387-5.– Con motivo del control mencionado en el artículo precedente, el juez puede pedir al administrador legal que someta al jefe de la secretaría judicial de la jurisdicción de derecho común de primer grado una cuenta de gestión anual, acompañada de los documentos justificativos, para su verificación.

Cuando se pidan las cuentas, el administrador legal debe remitir al jefe de la secretaría judicial, al final de su misión, una contabilidad final de las transacciones habidas desde la última cuenta anual.

El jefe de la secretaría judicial puede ser asistido en su misión de control de cuentas conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil. Asimismo, puede solicitar de las instituciones en las que las cuentas están abiertas a nombre del menor una declaración anual de éstas sin que puedan oponer el secreto profesional o el secreto bancario.

Si rehúsa aprobar la cuenta, el jefe de la secretaría judicial debe preparar un informe sobre las dificultades encontradas, que le transmite al juez. Éste decide sobre la conformidad de la cuenta.

Si la importancia y la composición del patrimonio del menor lo justifican, el juez puede decidir que la misión de verificación y aprobación será ejercida, a expensas del menor y bajo el procedimiento que él fije, por un técnico.

Una copia de las cuentas de gestión se remite al menor de edad de dieciséis años.

La acción de rendición de cuentas, en reivindicación o en pago se prescribe por cinco años a contar desde la mayoría de edad del interesado".

"Art. 387-6.– El administrador legal está obligado a cumplir con las citaciones del juez tutelar y del fiscal y de proporcionarles toda la información que le requieran.

El juez puede pronunciar en su contra interdictos y condenarle a la multa civil prevista por el Código de Procedimiento Civil si no ha cumplido".

Artículo 4

El Título X del Libro I queda modificado como sigue:

1º. Su título es sustituido por el encabezamiento: "De la minoría de edad, de la tutela y de la emancipación";

2º. Consta de tres capítulos:

– el Capítulo Iº: "De la minoría de edad", que comprende los artículos 388 a 388-2;
– el Capítulo II: "De la tutela", que comprende los artículos 390 a 413;
– el Capítulo III: "De la emancipación", que comprende los artículos 413-1 a 413-8;

3º. En el Capítulo Iº:

a) La sección 1: "De la administración legal", que comprende los artículos 389 a 389-8, ha sido derogada;
b) El título: "Sección 2: De la tutela" ha sido suprimido y las sub-secciones 1 y 2 de esta sección convertidas respectivamente en las secciones 1 y 2 del Capítulo II.

Artículo 5

El Capítulo I del Título X del Libro I queda modificado como sigue:

1º. Después del artículo 388-1, se insertan dos artículos redactados así:

"**Art. 388-1-1.**– El administrador legal representa al menor en todos los actos de la vida civil, salvo en los casos en que la ley o la costumbre autoriza a los menores de edad a actuar a ellos mismos".

"Art. 388-1-2.– Un menor de edad de dieciséis años puede ser autorizado, por su o sus administradores legales, para llevar a cabo él solo los actos administrativos necesarios para la creación y gestión de una empresa individual de responsabilidad limitada o de una sociedad unipersonal. Los actos de disposición sólo pueden ser realizados por su o sus administradores legales.

La autorización mencionada en el párrafo primero reviste la forma de una escritura privada o de un acta notarial y contiene la lista de los actos administrativos que pueden ser realizados por el menor";

2º. En el artículo 388-2, la referencia al artículo 389-3 se sustituye por la referencia al artículo 383;

3º. El artículo 388-3 queda derogado.

Artículo 6

El nuevo Capítulo II del Título X del Libro I queda modificado como sigue:

1º. El artículo 391 se sustituye por las siguientes disposiciones:

"**Art. 391**.– En caso de administración legal, el juez tutelar puede, en todo momento y por causa grave, sea de oficio, sea a petición de parientes o allegados o del ministerio público, decidir la apertura de la tutela después de haber escuchado o llamado, excepto en caso de urgencia, al administrador legal. Éste no puede hacer ningún acto de disposición a partir de la demanda y hasta la sentencia definitiva salvo en caso de urgencia.

Si se abre la tutela, el juez tutelar convoca al consejo de familia, que puede ser denominado como tutor el administrador legal, o designar a otro tutor";

2º. En el artículo 392, las palabras: "en los términos del artículo 389-2" son suprimidas;

3º. Se elimina el párrafo tercero del artículo 411;

4°. A continuación del artículo 411, se añade un artículo redactado así:

"**Art. 411-1.**– El juez tutelar y el fiscal ejercen una supervisión general de las tutelas de su jurisdicción.

Los tutores y otros órganos tutelares están obligados a comparecer a su convocatoria y a comunicar toda información que les requieran.

El juez puede pronunciar contra ellos interdictos y condenar a la multa civil prevista en el Código de Procedimiento Civil para aquéllos que no han comparecido".

Artículo 7

El artículo 413-5 se sustituye por las siguientes disposiciones:

"**Art. 413-5.**– La cuenta de la administración, en su caso, o de la tutela es entregada al menor emancipado en las condiciones previstas respectivamente por los artículos 387-5 y 514".

Artículo 8

La segunda frase del tercer párrafo del artículo 17-3 se sustituye por el siguiente:

"El impedimento es comprobado por un certificado expedido por un médico especialista elegido de una lista elaborada por el fiscal. Este certificado se adjunta a la demanda".

Artículo 9

En el artículo 113, las palabras: "en la administración legal bajo control judicial tal como está prevista para los menores" se sustituyen por las palabras: "a la tutela de los mayores sin consejo de familia".

CAPÍTULO III
Disposiciones relativas a los mayores protegidos por la ley

Artículo 10

El Capítulo II del Título XI del Libro I se completa por una sección redactada así:

Sección 6
De la habilitación familiar

"**Art. 494-1**.– Cuando una persona es incapaz de expresar su voluntad por una de las causas previstas en el artículo 425, el juez tutelar puede habilitar una o más personas elegidas de entre sus parientes en el sentido del 2° apartado, del punto I, del artículo 1º, de la Ley nº 2015-177 de 16 de febrero de 2015, para representarla o para pasar uno o varios actos en su nombre en las condiciones y según las modalidades previstas en esta sección y en las del Título XIII del Libro III que no le sean contrarias, a fin de garantizar la protección de sus intereses.

La persona habilitada debe reunir las condiciones para ejercer las cargas tutelares. Ésta desempeña su misión a título gratuito".

"**Art. 494-2**.– La habilitación familiar no puede ser ordenada por el juez más que en caso de necesidad y cuando no se puede prever suficientemente a los intereses de la persona por la aplicación de normas del derecho común de la representación o por los términos del mandato de protección futura firmados por el interesado".

"Art. 494-3.– La demanda de designación de una persona habilitada puede ser presentada al juez por una de las personas mencionadas en el artículo 494-1 o por el fiscal, a petición de uno de ellos.

La demanda es introducida, instruida y juzgada conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 429 y 431".

"Art. 494-4.– La persona respecto de la cual se solicita la habilitación es escuchada o llamada conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 432. Sin embargo, el juez puede, mediante resolución motivada y sobre aviso del médico mencionado en el artículo 431, decidir que no es necesario proceder a su audiencia si ésta puede perjudicar su salud o si la persona es incapaz de hablar.

El juez se asegure de la adhesión o, en su defecto, de la ausencia de oposición legítima ante la medida de la habilitación y la elección de la persona habilitada de los cercanos mencionados en el artículo 494-1, que mantienen vínculos estrechos y estables con la persona o que manifiestan su interés al respecto y de los cuales él es consciente en el momento en que se pronuncia".

"**Art. 494-5**.– El juez se pronuncia sobre la elección de la persona habilitada y la extensión de la habilitación asegurándose que el arreglo o dispositivo propuesto es conforme a los intereses patrimoniales y, en su caso, personales del interesado".

"Art. 494-6.– La habilitación puede referirse a:

– uno o varios de los actos que el tutor tiene la facultad de realizar, sólo o con una autorización, sobre los bienes del interesado;

– uno o más actos relativos a la persona protegida. En este caso, la habilitación se ejerce de conformidad con lo dispuesto en los artículos 457-1 a 459-2 del Código Civil.

La persona habilitada no puede cometer un acto de disposición a título gratuito más que con la autorización del juez tutelar.

Si el interés de la persona protegida lo implica, el juez puede emitir una habilitación general que cubra todos los actos o una de las dos categorías de actos mencionados en los párrafos segundo y tercero.

La persona habilitada en virtud de una habilitación general no puede realizar un acto en el que estuviera en conflicto de intereses con la persona protegida. Sin embargo, a título excepcional y cuando el interés de ésta lo imponga, el juez puede autorizar a la persona habilitada a llevar a cabo este acto.

En caso de habilitación general, el juez fija una duración a lo dispuesto que no puede exceder de diez años. Resolviendo a petición de una de las personas mencionadas en el artículo 494-1 o del fiscal consultado a petición de una de ellas, él puede renovar la habilitación si las condiciones establecidas en los artículos 431 y 494-5 se cumplen. La renovación puede ser pronunciada por el mismo período; sin embargo, cuando la alteración de las facultades personales de la persona respecto de la cual se emitió la habilitación, no parece probable que se vea claramente una mejora según los datos obtenidos por la ciencia, el juez puede, por resolución especialmente motivada y con el dictamen del médico mencionado en el artículo 431, renovar el dispositivo por un período más largo que él determine, que no exceda de veinte años.

Las decisiones de concesión, modificación o renovación de una habilitación general, son objeto de una mención en el margen de la partida de nacimiento según las condiciones establecidas en el artículo 444. Lo mismo sucede cuando finaliza la habilitación por alguna de las causas previstas en el artículo 494-12".

"**Art. 494-7**.– La persona habilitada puede, salvo decisión contraria del juez, proceder sin autorización a los actos mencionados en el párrafo primero del artículo 427".

"Art. 494-8.– La persona respecto de la cual se concedió la habilitación se reserva el ejercicio de sus derechos distintos de aquéllos cuyo ejercicio fue confiado a la persona habilitada conforme a esta sección.

Sin embargo, no puede, en caso de habilitación general, concluir un mandato de protección futura durante la duración de la habilitación".

"Art. 494-9.– Si la persona respecto de la cual se emitió la habilitación extiende sola un acta cuya realización ha sido confiada a la persona habilitada, es nula de pleno derecho sin necesidad de justificar un perjuicio.

Las obligaciones derivadas de los actos realizados por una persona, respecto a la cual una medida de habilitación familiar ha sido pronunciada menos de dos años antes de la sentencia concediendo la habilitación, pueden ser reducidos o anulados de conformidad con el artículo 464.

La persona habilitada puede, con la autorización del juez tutelar, promover sola la acción de nulidad o de reducción prevista en el párrafo anterior.

Si la persona habilitada acomete sola, como tal, un acto que no está comprendido en el ámbito de la habilitación que le ha sido concedida o que no se podía hacer sin el permiso del juez, el acto es nulo de pleno derecho sin que sea necesario justificar un perjuicio.

En cualquier caso, la acción de nulidad o reducción se ejerce en el plazo de cinco años previsto en el artículo 1304.

Durante este período y en tanto la medida de habilitación esté en curso, el acto impugnado puede ser confirmado con la autorización del juez tutelar".

"Art. 494-10.– El juez se pronuncia a petición de una de las personas mencionadas en el artículo 494-1 o del fiscal sobre las dificultades que puedan surgir en la aplicación de lo dispuesto.

Embargado para este fin en las condiciones previstas en el primer párrafo del artículo 494-3, el juez puede, en todo momento, modificar el alcance de la habilitación o ponerle fin, tras haber escuchado o llamado a la persona a la cual la habilitación le ha sido concedida, de acuerdo con las condiciones previstas en el primer párrafo del artículo 494-4 así como a la persona habilitada".

"Art. 494-11.– Además de la muerte de la persona respecto de la cual la habilitación familiar ha sido expedida, ésta finaliza:

1º. Por el ingreso del interesado bajo el régimen de protección de los incapacitados, bajo curatela o tutela;

2º. En caso de resolución de desembargo pasada a cosa juzgada pronunciada por el juez a petición de una de las personas mencionadas en el artículo 494-1 o del fiscal, cuando se demuestra que las condiciones establecidas en el presente artículo ya no se cumplen o cuando la ejecución de la habilitación familiar es probable que perjudique a los intereses de la persona protegida;

3°. De pleno derecho, en ausencia de renovación, cuando expire el plazo fijado;

4º. Después de realizar los actos por los que la habilitación fue concedida".

"**Art. 494-12.**– Las normas de desarrollo de esta sección se especifican por decreto del Consejo de Estado".

Artículo 11

En el apartado 3° del artículo 414-2, después de las palabras: "para la apertura de una curatela o tutela", se insertan las palabras: "o para la habilitación familiar".

Artículo 12

El artículo 424 se complementa con un párrafo que dice lo siguiente:

> "La persona habilitada en virtud de las disposiciones de la Sección 6 del Capítulo II de este Título será responsable con respecto a la persona representada por el ejercicio de la habilitación que le ha sido concedida, en las mismas condiciones".

Artículo 13

En los párrafos primero y tercero del artículo 477, después de las palabras: "de tutela" se insertan las palabras: "o de una habilitación familiar".

Artículo 14

En el tercer párrafo del artículo 1304, después de las palabras: "los herederos de la persona bajo tutela o bajo curatela" se insertan las palabras: "o de la persona sujeta a una habilitación familiar".

Artículo 15

El artículo L. 221-9 del Código de la Organización Judicial se complementa por un apartado 5º que dice lo siguiente:

> "5º. De la habilitación familiar prevista en la Sección 6 del Capítulo II del Título XI del Libro I del Código Civil".

CAPÍTULO IV
Disposiciones diversas y transitorias

Artículo 16

A los efectos de la aplicación de esta Orden en la Polinesia Francesa:

1°. En el primer párrafo del artículo 494-1 del Código Civil, las palabras: "y a las del Título XIII del Libro III que no sean contrarias a la misma" se suprimen;

2°. En el segundo párrafo del artículo 494-3 del Código Civil, la referencia al Código de Procedimiento Civil se sustituye por la referencia al Código de Procedimiento Civil aplicable a nivel local;

3º. En el quinto párrafo del artículo 494-9 del Código Civil, las palabras: "en el plazo de cinco años previsto en el artículo 1304" se sustituyen por las palabras: "en un plazo de cinco años".

Artículo 17

I.– La presente Orden entra en vigor el 1º de enero 2016.

II.– Su artículo 2 es aplicable a las demandas de divorcio presentadas antes de su entrada en vigor que, en la fecha de la misma, no han dado lugar a una demanda introductoria de instancia.

III.– Los artículos 3 a 9 de la Orden son aplicables en las administraciones legales en curso el día de su entrada en vigor.

Artículo 18

El Primer Ministro y el Ministro de la Justicia, Ministro de Justicia, son responsables, cada uno en lo que le concierne, de la aplicación de la presente Orden, que se publicará en el Diario Oficial de la República Francesa.

Hecha el 15 de octubre 2015.

Por el Presidente de la República: François Hollande

El Primer ministro, Manuel Valls

El Guardián de los Sellos, Ministro de Justicia, Christiane Taubira

GRECIA

CRÓNICA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL DE GRECIA. MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL HELENO (LEY 4055/2012) EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS, PARA ADECUARLO A LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH (DIMITRAS VS. GRECIA DE 2010, 2011 Y 2013)

Salvador Tarodo Soria
Universidad de León

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. MARCO CONSTITUCIONAL. 3. EL JURAMENTO PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS Y PRESTAR TESTIMONIO EN JUICIO. 4. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH) ANALIZANDO LA COMPATIBILIDAD DE LAS EXIGENCIAS DE LA FÓRMULA GRIEGA DEL JURAMENTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN (ART. 9 CEDH). 5. LA REFORMA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL HELENO (LEY 4055/2012) EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS.

1. INTRODUCCIÓN

Mediante la *Ley 4055/2012* se procedió a la reforma y derogación (respectivamente) de los *artículos 218* y *220* del *Código de Procedimiento Penal Heleno*, con la finalidad de hacer compatible la previsión legal de la fórmula alternativa al juramento para prestar testimonio en juicio, con la jurisprudencia del TEDH que establece el estándar mínimo europeo de protección del *derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión* del *artículo 9* del *Convenio Europeo de Protección de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas*.

Para desempeñar determinados cargos, acceder al desempeño de la función pública o prestar testimonio en juicio, el ordenamiento jurídico heleno exige una declaración solemne que expresa un compromiso (acatar la constitución, decir la verdad…). En ocasiones, la normativa prevé que la declaración revista la fórmula de un juramento religioso, previsión que puede plantear problemas desde el punto de vista de la protección del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 9 CEDH). El derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión incluye el derecho del individuo a no revelar su fe o sus creencias y a no ser obligado a actuar o abstenerse de actuar de tal manera que se vea obligado a revelar cuáles son sus creencias. La jurisprudencia del TEDH ha entendido que determinadas previsiones normativas que establecían el mecanismo para prestar juramento y sus posibles alternativas conculcaban este derecho, generando sentencias condenatorias que han obligado al estado heleno a adecuar su normativa a la protección europea del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

2. MARCO CONSTITUCIONAL

El ordenamiento jurídico griego, tomando como base la vigente Constitución helena de 1975, establece un delicado y complejo equilibrio entre ciertos rasgos de *confesionalidad del Estado* que derivan de la afirmación en su *artículo tercero* del carácter dominante de la Iglesia Ortodoxa, la unidad del dogma o la inmutabilidad de los santos cánones[1]; y el recono-

[1] *Artículo 3:* "1. La religión dominante en Grecia es la de la Iglesia Ortodoxa Oriental de Cristo. La Iglesia Ortodoxa de Grecia, que reconoce como cabeza a Nuestro Señor Jesucristo, está indisolublemente unida, en cuanto al dogma, a la Gran Iglesia de Constantinopla y a las demás Iglesias Cristianas ortodoxas, observando inmutablemente, como las demás iglesias, los santos cánones apostólicos y sinódicos, así como las tradiciones sagradas. Es autocéfala y es administrada por el Santo Sínodo, compuesto por todos los obispos en funciones y por el Santo Sínodo Permanente que, derivado de aquél, está constituido conforme a lo prescrito por la Carta Estatutaria de la Iglesia y con arreglo a las disposiciones del Tomo Patriarcal de 29 de junio de 1850 (mil ochocientos cincuenta) y del Acta Sinódica de 4 de septiembre de 1928 (mil novecientos veintiocho). 2. No se opone a las disposiciones del párrafo anterior el régimen eclesiástico establecido en ciertas regiones del Estado. 3. El texto de las Sagradas Escrituras es inalterable, y queda prohibida su traducción oficial en otra forma de lenguaje sin previo consentimiento de la Iglesia autocéfala del Constantinopla".

cimiento en su *artículo 13* del *derecho a la libertad de conciencia*[2]. Tensión que aparece mediada por la inequívoca primacía del *principio personalista* (arts. 2.1[3] y 5.1 CG)[4]; y, por los *principios de igualdad* (art. 4)[5], *no discriminación* (art. 5.2)[6] y *participación* (art. 5.1)[7].

3. EL JURAMENTO PARA EJERCER FUNCIONES PÚBLICAS Y PRESTAR TESTIMONIO EN JUICIO

La cuestión sobre la fórmula del juramento se proyecta sobre ámbitos muy diversos: presidencia de la república, diputados, funcionarios públicos, profesiones colegiadas, testimonios en juicio. En la vigente Constitución de la República helena de 1978 encontramos regulados dos de estos aspectos: el juramento del presidente de la república (artículo 33) y el de los diputados (artículo 59). Ambos artículos se encuentra en la tercera parte de la Constitución relativa a la *Organización y funciones del Estado*, y hacen referencia al juramento religioso previo a la asun-

---

2 *Artículo 13:* "1. La libertad de conciencia religiosa es inviolable. El goce de los derechos individuales y políticos no podrá estar condicionado a las creencias religiosas de la persona. 2. Será libre toda religión conocida, y las prácticas de culto podrán ejercerse sin restricciones bajo la salvaguardia de las leyes, si bien el ejercicio del culto no podrá atentar al orden público ni a las buenas costumbres, quedando prohibido todo proselitismo. 3. Los ministros de todas las religiones conocidas estarán sometidos a la misma vigilancia del Estado y a las mismas obligaciones ante él que los de la religión dominante. 4. Nadie podrá ser dispensado del cumplimiento de sus deberes frente al Estado o negarse a acatar las leyes, en razón de sus convicciones religiosas. 5. No se podrá imponer juramento sino en virtud de una ley que a la vez determine la fórmula del mismo".

3 *Artículo 2:* "El respeto y la protección del valor de la persona humana constituyen la obligación primordial del Estado".

4 *Artículo 5 [en parte]:* "1. Cada uno tendrá derecho a desarrollar libremente su personalidad".

5 *Artículo 4 [en parte]:* "1. Los helenos son iguales ante la ley. 2. Los hombres y las mujeres helenos tendrán los mismos derechos y obligaciones".

6 *Artículo 5 [en parte]:* "2. Todos los que se encuentren en el territorio helénico gozarán de la protección absoluta de sus vidas, de su honor y de su libertad sin distinción de nacionalidad, de raza, de lengua ni de convicciones religiosas o políticas, si bien se admitirán excepciones en los casos previstos por el derecho internacional".

7 *Artículo 5 [en parte]:* "1. Cada uno tendrá derecho a desarrollar libremente su personalidad y a participar en la vida social, económica y política del país con tal que no atente a los derechos de los demás ni viole la Constitución ni las buenas costumbres".

ción de funciones que deben prestar tanto el presidente de la república (*artículo 33*)[8] como los diputados (*artículo 59*)[9]. En el caso del presidente solo se contempla la fórmula del juramento, en el de los diputados se admite la posibilidad de que aquellos que tengan otra religión que no sea la ortodoxa, presten su juramento según la fórmula de su confesión. En ambos casos nada se dice de quiénes no tengan creencias religiosas, aunque una interpretación acorde con el alcance del artículo 13 no debería plantear problemas al respecto. Más complicada, desde el punto de vista jurídico, resulta la cuestión del juramento del presidente de la república que no admite alternativa[10], algo que ha sido interpretado por la doctrina como una forma indirecta de presionar para que los presidentes electos fueran cristianos. Los hechos recientes, sin embargo, han demostrado que esta presión, al menos socialmente, ha sido superada. El actual presidente Alexis Tsipras en su toma de posesión de 26 de enero de 2015 empleó la fórmula del compromiso y el hecho ha sido aceptado sin mayores polémicas. Convendría, no obstante, promover un cambio constitucional que hiciera más congruente con la plena efectividad del derecho a la libertad de conciencia y adecuara a los tiempos, una previsión que demuestra haber sido superada por la práctica socialmente admitida.

---

8 *Artículo 33 [en parte]:* "2. Antes de asumir sus funciones, el Presidente de la República prestará ante la Cámara de Diputados el juramento siguiente: «JURO, en nombre de la Santísima Trinidad Consustancial e Indivisible, observar la Constitución y las leyes, velar por la fiel interpretación de todas ellas, defender la independencia nacional y la integridad del país, salvaguardar los derechos y libertades de los helenos y servir al interés general y al progreso del pueblo griego»".

9 *Artículo 59:* "1. Antes de entrar en funciones, los diputados prestarán en el palacio de la Cámara de Diputados y en sesión pública el siguiente juramento: "JURO en nombre de la Santísima Trinidad Consustancial e Indivisible guardar fidelidad a la Patria y al régimen democrático, obedecer a la Constitución y a las leyes y cumplir con toda conciencia mis obligaciones". 2. Los diputados pertenecientes a otra religión o confesión prestarán juramento según la fórmula de su propia religión o confesión".

10 A pesar de esta carencia, la fórmula del artículo 33 de la vigente Constitución, es mucho más avanzada que la de la *Constitución de 1952*, que establecía la obligatoriedad de que el heredero al trono (art. 47), el tutor del heredero menor de edad (art. 51) o el virrey (art. 52), fueran ortodoxos. El rey estaba obligado, asimismo, a prometer protección a la religión dominante (art. 43.2).

En el caso de los funcionarios públicos, el procedimiento para prestar juramento o declaración de compromiso, está regulada en el *Código de los funcionarios*[11] que, en su artículo 19[12], estipula la fórmula del juramento. La norma contempla tres fórmulas: el juramento religioso, un juramento secular para los ciudadanos extranjeros y el compromiso para quienes "declaren que no tienen ninguna religión o que su religión no permite la toma de juramento". En Grecia, quienes desarrollan profesiones colegiadas reciben la consideración de funcionarios públicos no retribuidos[13], quedando también bajo la disciplina del Código de los funcionarios y viéndose, por tanto, obligados a prestar juramento o declaración de compromiso. Quienes prestan testimonio en juicio, por su parte, se sujetan al código de procedimiento penal que, con anterioridad a la última reforma, en sus artículos 228 y 230, establecía las fórmulas respectivas de juramento y declaración solemne[14].

---

11 *Ley 2683/1999, Código de los funcionarios.*

12 *Artículo 19 [en parte]:* "Toma de Juramento - Asunción de Funciones [...] a) El juramento es la siguiente: «Yo prometo lealtad a mi país, obedecer la Constitución y las leyes y ejercer mis funciones con honestidad y conciencia». b) Los ciudadanos extranjeros prestan el siguiente juramento: «Yo prometo mi lealtad a Grecia, obedecer sus Constituciones y leyes y ejercer mis funciones con honestidad y conciencia». c) Las personas que declaren que no tienen ninguna religión o que su religión no permite la toma de juramento, están obligados a ofrecer el siguiente compromiso, en lugar de un juramento: «Yo declaro, por mi honor y conciencia, que voy a ser leal a Grecia, obedecer la Constitución y las leyes y ejercer mis funciones con honestidad y conciencia»...".

13 Sirva como ejemplo, que además resulta útil para el caso que vamos a analizar a continuación, el *artículo 1 del código de la abogacía (Decreto legislativo nº 3026/1954) [en parte]:* "El abogado es un funcionario público no remunerado...".

14 *Artículo 218.1:* "Los testigos, bajo pena de nulidad del procedimiento, deberán prestar juramento públicamente antes de declarar en el juicio, poniendo su mano derecha sobre el Evangelio y diciendo: «Juro ante Dios decir toda la verdad y solo la verdad sin añadir ni ocultar nada»".
Artículo 220: "1. Si el testigo cree en una religión reconocida o meramente tolerada por el Estado, la forma conocida de juramento, si existiere, es válida en el contexto del proceso penal. 2. Si el testigo cree en una religión que no permite prestar juramento o si el Juez instructor o el Tribunal tuviera el convencimiento, tras la declaración del interesado, de que éste no cree en ninguna religión, el juramento será el siguiente: «Declaro, invocando mi honor y conciencia, que diré la verdad solo la verdad sin añadir ni ocultar nada»".

4. LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (TEDH) ANALIZANDO LA COMPATIBILIDAD DE LAS EXIGENCIAS DE LA FÓRMULA GRIEGA DEL JURAMENTO CON EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO, CONCIENCIA Y RELIGIÓN (ART. 9 CEDH)

El *Tribunal Europeo de Derechos Humanos* se ha manifestado en dos ocasiones sobre demandas de ciudadanos griegos en las que se cuestionaba la compatibilidad de la fórmula del juramento con el artículo 9 del *Convenio Europeo de Derechos Humanos*.

En *Alexandridis c. Grecia (2008)*[15], el Tribunal analiza el caso de un abogado (profesión colegiada que, como hemos indicado, se equipara a la función pública), que al iniciar su ejercicio se ve obligado a someterse al procedimiento de juramento contemplado en el *artículo 19* del *Código de los funcionarios*.

> Al Tribunal no le plantea ninguna duda la legitimidad de la exigencia establecida por el ordenamiento jurídico de una declaración expresa de acatamiento al orden constitucional y al sistema legal del país (§35), pero cuestiona la necesidad objetiva que deriva de la regulación, de tener que manifestar cuál es la opción religiosa personal, "el Tribunal advierte que el procedimiento de prestación del juramento de abogado [...], refleja la existencia de una presunción, de acuerdo con la cual, el abogado que se presenta ante el Tribunal es cristiano ortodoxo y desea prestar juramento. Lo que implica que a la hora de presentarse ante el Tribunal habrá debido declarar que no es cristiano ortodoxo, revelando en parte sus convicciones religiosas para poder hacer su declaración solemne" (§36). Como puede observarse, el problema radica en que al darse por supuesta una fórmula, "el juramento que todo funcionario debe prestar es, en principio el juramento religioso" (§37); se obliga, a quien escoja la otra, a tener que manifestar sus creencias, "el afectado, para ser autorizado a hacer la declaración solemne se ve forzado a declarar que es ateo o que su religión no le permite prestar juramento" (§37).

El Tribunal, entiende que este procedimiento vulnera el *artículo 9* del *Convenio*, pues considera que la libertad de manifestar las convicciones religiosas comporta igualmente un aspecto negativo: "el derecho del in-

---

[15] *Alexandridis c. Grecia, de 21 de febrero de 2008 (Demanda nº 19516/06).* Un estudio sobre esta sentencia puede verse en: Martín-Retortillo Baquer, L., *Estudios sobre libertad religiosa*, Editorial Reus, Madrid, 2011, pp. 231-236.

dividuo a no ser obligado a manifestar su confesión o sus convicciones religiosas y de no ser obligado a actuar de manera que trascienda que tiene —o no tiene— determinadas convicciones" (§38). En opinión del Tribunal, "las autoridades estatales no tienen derecho a intervenir en el dominio de la libertad de conciencia del individuo ni a indagar sus convicciones religiosas, ni a obligarle a manifestar sus convicciones en lo referente a la divinidad. Lo cual resulta especialmente aplicable en el caso de una persona a la que se le exige una tal actuación, en concreto el acto de prestar juramento, al objeto de poder ejercer determinada profesión" (§38).

El contenido negativo del derecho de libertad de conciencia religiosa genera un auténtico *derecho al silencio*[16], tal y como viene reconocido en la Constitución de Weimar, "nadie estará obligado a manifestar sus creencias religiosas" (art. 136.3). Martín-Retortillo pone de relieve el paralelismo existente en la argumentación del Tribunal con el *caso Sofianopulos c. Grecia (2002)*[17], en el que el Estado heleno fue condenado por obligar a los ciudadanos a incluir su pertenencia religiosa en el carnet de identidad. Si en ese caso el Tribunal Europeo dejaba patente que el documento de identidad no era el medio apropiado para manifestar las convicciones religiosas, tampoco parece que en el caso del juramento, el momento de declarar fidelidad al sistema constitucional y a las leyes, sea el más oportuno para dar cabida a una manifestación de la libertad religiosa personal o para dejar constancia de si hay pocos o muchos creyentes[18].

En *Dimitras et. al. c. Grecia (2013)*[19], el Tribunal sustancia un supuesto muy similar a *Alexandridis c. Grecia*. En este caso, se trata de la demanda presentada por ocho ciudadanos griegos que al participar en varios pro-

---

16 Martín Retortillo Baquer, L., *La afirmación de la libertad religiosa…*, cit., p. 114.

17 *D. Sofianopoulos et. al. c. Grecia, de 12 de diciembre de 2002 (Demandas nº 1988/02, 1997/02, 1977/02).* Un estudio sobre esta sentencia puede verse en: Martín Retortillo Baquer, L., "¿Hacer constar la religión en el carnet de identidad?", en *Revista Española de Derecho Administrativo*, núm. 128, 2005, pp. 683-694. reproducido en el capítulo II de Martín Retortillo Baquer, L., *Estudios sobre libertad religiosa*, Editorial Reus, Madrid, 2011. El caso también aparece comentado en: Martín Retortillo Baquer, L., *La afirmación de la libertad religiosa…*, cit., p. 45.

18 *Ibíd.*, p. 81.

19 *Dimitras y otros c. Grecia (nº 3)* Demanda nº 34207/08, 6365/09 y 41345/10. Un comentario a esta sentencia puede verse en: González Sánchez, M., "Mormones, Testigos de Jehová, budistas y ortodoxos en Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre libertad religiosa", en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, *Iustel*, núm. 37, enero (2015), p. 11.

cesos penales en calidad de testigos, se ven obligados a declarar que no pertenecen a la Iglesia ortodoxa, para poder acogerse a la fórmula del compromiso. El TEDH observó que ya se había pronunciado con anterioridad sobre cuestiones idénticas, que están en el origen de ese caso[20], y mantuvo la misma argumentación considerando que se había producido una violación del *artículo 9*, al entender que la injerencia prevista en la ley procesal griega no estaba justificada ni era proporcionada a la finalidad perseguida por la Administración de justicia. Como resultado del primer caso *Dimitras* de 2010, el gobierno griego promovió la modificación del *Código de procedimiento penal* en relación con la declaración de los testigos[21], para acomodarlo a la jurisprudencia de Estrasburgo.

5. LA REFORMA DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL HELENO (LEY 4055/2012) EN RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN DE TESTIGOS

La anterior redacción del *Código de Procedimiento Penal* heleno[22], en su artículo 218.1, establecía que las personas que debían prestar testimonio en juicio, debían hacerlo mediante una fórmula del juramento religioso adecuado a las convicciones de quienes eran ortodoxos: "Juro ante Dios decir toda la verdad y solo la verdad sin añadir ni ocultar nada"; bajo pena de nulidad del procedimiento[23]. En su artículo 220 contemplaba otras dos fórmulas alternativas para expresar válidamente el compromi-

---

20 *Cf.,* sentencia de 3 de junio de 2010, sobre el caso *Dimitras y otros c. Grecia*, y sentencia de 3 de noviembre de 2011, sobre el caso *Dimitras y otros c. Grecia (nº 2).* Un comentario a estas sentencias puede consultarse en: López-Sidro López, A., "Libertad religiosa y juramento en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El caso Dimitras y otros contra Grecia", en *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, nº 24, 2010; y, Otaduy, J., "*Crónica de jurisprudencia 2011. Derecho Eclesiástico español"*, en *Ius Canonicum*, vol. 52, 2012, p. 314.

21 *Ley 4055/2012, de 12 de marzo de 2012 (Boletín Oficial de la República Helénica,* ΦΕΚ Α' 51).

22 *Ley 1493/1950, de 17 de agosto de 1950 (Boletín Oficial de la República Helénica,* ΦΕΚ *Α'182).*

23 *Artículo 218.1:* "Los testigos, bajo pena de nulidad del procedimiento, deberán prestar juramento públicamente antes de declarar en el juicio, poniendo su mano derecha sobre el Evangelio y diciendo: «Juro ante Dios decir toda la verdad y solo la verdad sin añadir ni ocultar nada»".

so ante el Tribunal: (1) la posibilidad de pronunciar cualquier otra versión de juramento religioso, a la que podían acogerse quienes creyeran en otra religión reconocida o meramente tolerada por el Estado (art. 220.1); y, (2) la fórmula del compromiso sin connotaciones religiosas, prevista para quienes no creían en ninguna religión o en una que no les permitiera prestar juramento: "Declaro, invocando mi honor y conciencia, que diré la verdad y solo la verdad sin añadir ni ocultar nada" (art. 220.2)[24].

Como puede observarse, la anterior fórmula estaba basaba en la presunción de la condición cristiana-ortodoxa de quien iba a prestar juramento, obligando a quien deseaba acogerse a otra fórmula a desvelar, al menos parcialmente, sus creencias, produciéndose, por tanto, un menoscabo al derecho del individuo a no ser obligado a manifestar su confesión o sus convicciones religiosas y a no ser obligado a actuar de manera que trascienda que tiene —o no tiene— determinadas convicciones.

La reciente *Ley 4055/2012*, que entró en vigor el 2 de abril, mediante su *artículo 39* modificó este procedimiento, cambiando el *artículo 218* y derogando el *artículo 220* del *Código de Procedimiento Penal*, con la finalidad de adecuar la fórmula legal de juramento o compromiso de los testigos con los criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La nueva redacción del *artículo 218* establece que el testigo que comparezca ante un Tribunal puede elegir, a su discreción y sin formalidades, entre tomar un juramento religioso o hacer una declaración solemne[25].

---

[24] *Artículo 220*: "1. Si el testigo cree en una religión reconocida o meramente tolerada por el Estado, la forma conocida de juramento, si existiere, es válida en el contexto del proceso penal. 2. Si el testigo cree en una religión que no permite prestar juramento o si el Juez instructor o el Tribunal tuviera el convencimiento, tras la declaración del interesado, de que éste no cree en ninguna religión, el juramento será el siguiente: «Declaro, invocando mi honor y conciencia, que diré la verdad y solo la verdad sin añadir ni ocultar nada»".

[25] *Artículo 218.1 [en parte]:* "1. Antes de la audiencia, el testigo debe prestar juramento. Por tanto, se le preguntará si prefiere tomar juramento religioso o hacer una declaración solemne (...)". En idéntico sentido, la parte correspondiente del *artículo 408 del Código de Procedimiento Civil* heleno establece que: "Antes de la audiencia, el testigo debe prestar juramento. Por tanto, se le preguntará si prefiere tomar juramento religioso o hacer una declaración solemne".

IRLANDA
REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA LEGALIZACIÓN DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO*

Mercedes Vidal Gallardo
Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de Valladolid

La vigente Constitución irlandesa data del año 1937. Es por ello que muchas de sus disposiciones han devenido obsoletas y han precisado de sucesivas reformas para acomodarlas a las demandas plateadas por la sociedad irlandesa. Es el artículo 46 de esta carta Magna el que establece el procedimiento a seguir para reformar la Constitución y prevé que cualquier precepto de la misma puede ser objeto de modificación, adición o derogación, siempre que se observe el procedimiento previsto en este artículo (art. 46.1). En virtud de lo establecido en este precepto, toda reforma constitucional debe ser iniciada en la Cámara de los representantes como un Proyecto de Ley y una vez haya sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento, debe ser sometida a referéndum popular, de acuerdo con la Ley sobre referéndum en vigor en ese momento.

La última reforma llevada a cabo en la Constitución de Irlanda trae su origen en el compromiso asumido por el gobierno de modificar la regulación de algunas materias a través de un órgano deliberativo creado a tal efecto, como es la Convención Constitucional[1]. Es una Resolución

* Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D DER2013-42261-P, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, bajo el título "Solidaridad, participación y convivencia en la diversidad".

1 La Convención Constitucional es un organismo formado por un presidente nombrado por el Gobierno, 29 miembros del Parlamento irlandés (elegidos de forma proporcional), 4 representantes de los partidos políticos de Irlanda del Norte (territorio irlandés bajo soberanía británica) y 66 ciudadanos elegidos aleatoriamente de forma ponderada a la edad, origen geográfico y sexo de la población irlandesa. Se trata de un órgano que viene debatiendo diversas reformas, como la modificación del siste-

del Parlamento quien establece la agenda de esta Convención[2] que, una vez oficializadas sus propuestas de reforma, son remitidas al gobierno y debatidas por el Parlamento. En el caso de la propuesta de reforma en materia de matrimonio aprobada el 14 de abril de 2013, la Convención Constitucional va más allá del mero hecho de recomendar que la Constitución sea modificada para hacer posible el matrimonio entre personas del mismo sexo y que, efectuada la modificación, ésta sea aprobada por el Parlamento, sino que propone que la norma constitucional autorice este tipo de uniones matrimoniales de forma expresa. En definitiva, lo que la Convención somete a aprobación es la reforma del artículo 41 de la Constitución, bajo el título "de la familia". La pretendida modificación supone introducir, tras el apartado tercero de este precepto[3], la siguiente cláusula "el matrimonio puede ser contraído de acuerdo con la ley por dos personas sin distinción de su sexo".

La propuesta de reforma fue sometida a referéndum el 22 de mayo de 2015, y fue aprobada por más del 60% de los votantes irlandeses. Una vez aprobada la enmienda constitucional, el ejecutivo tiene que desarrollar la legislación para hacerla efectiva, lo cual llevará aparejada la reforma del Código Civil de 2004, que en la actualidad sólo permite el matrimonio entre parejas heterosexuales. Con la incorporación de Irlanda a los países europeos que han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo, el número de Estados que admiten este tipo de matrimonios asciende a catorce: Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia (entrada en vigor en el año 2017), Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido (excepción de Irlanda del Norte) y Suecia.

La particularidad de Irlanda radica en que es el único de los países mencionados en que el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo ha sido corroborado a través de un referéndum, de manera que la igualdad ante la institución del matrimonio no queda reflejada únicamente en una Ley, sino que consta en la propia Carta Magna que, de acuerdo

---

ma electoral, la reducción de la duración del mandato presidencial, la eliminación de las referencias a la blasfemia, la disminución de la edad legal para tener derecho al voto o la apertura del matrimonio civil a las parejas del mismo sexo.

2 https://www.constitution.ie/Documents/Terms_of_Reference.pdf.

3 El art. 41.3.1 establece que "El Estado garantiza preservar con especial cuidado la institución del matrimonio, en el que se funda la familia, y protegerlo contra cualquier ataque".

con la legislación irlandesa, exige que la reforma del texto constitucional sea convalidada mediante consulta popular vinculante.

Sin embargo, es significativo que la reforma de la Constitución en esta materia sólo afecte a la definición de matrimonio, en cuanto especifica que la unión de las personas del mismo sexo pasa a denominarse a partir de esta reforma matrimonio. En cambio, no altera la legalidad vigente sobre otras cuestiones. Así por ejemplo, no afecta a los conceptos y definiciones empleados por algunos de los preceptos, lógicamente obsoletos, al tratarse de una Constitución redactada en 1937, como el que se refiere a que el lugar de una mujer es el hogar y que debe ser mantenida, se supone que por su esposo, para que pueda permanecer en casa. En este sentido, dispone el art. 41.2.1º que "en particular, el Estado reconoce que, con su vida dentro del hogar, la mujer otorga al Estado un apoyo sin el cual no puede alcanzarse el bien común". En parecidos términos se pronuncia el art. 41.2.2º, según el cual "(...) el Estado tenderá a asegurar que las madres no estén obligadas, por necesidades económicas, a dedicarse al trabajo con descuido de sus obligaciones en el hogar".

Salvado este escollo, a mi juicio de evidente trascendencia, lo que es incuestionable es que la población irlandesa ha puesto de manifiesto su determinación a favor de la igualdad ante la ley de todos sus ciudadanos, independientemente de su orientación sexual, a los efectos de contraer matrimonio. Lo cual representa un avance significativo en un país donde la homosexualidad estaba castigada con penas privativas de libertad hasta fechas muy recientes, el año 1993, fecha en la cual, la legislación irlandesa finalmente se adaptó a lo establecido en la Convención Europea de Derechos Humanos. Sin embargo, ya en el año 2010 el Parlamento aprueba la Ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo[4], aunque éstas no tenían la consideración de matrimonio, pero irán sentando los precedentes hacia la definitiva aprobación constitucional del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Trascurridos cinco años, podemos considerar que esta ley representó el punto de partida en la lucha a favor del matrimonio igualitario, que ha culminado en la legalización de estas uniones matrimoniales por vía de referéndum popular.

---

[4] Un estudio más detallado de esta ley puede verse en VIDAL GALLARDO, M., "Unión Civil entre las parejas del mismo sexo", en *Revista Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos*. Vol II, Nº 11, 2011, pp. 83-122.

Los sectores más conservadores, reacios a esta reforma constitucional, han utilizado distintas razones en defensa de sus tesis para oponerse a la modificación propuesta. Así entienden que el nuevo artículo 41 de la Constitución podría llevar aparejado la incoherencia de aportar un concepto falso de igualdad subyacente al matrimonio entre personas del mismo sexo. Además, supondría la ruptura de los vínculos biológicos entre los niños y sus padres debido a la imposición de una nueva teoría del género. Por otro lado, denuncian la ausencia de catalogación del derecho al matrimonio homosexual como uno de los derechos humanos. Tampoco faltan argumentos más pragmáticos que se ocupan de cuestiones economicistas y que se detienen a valorar el elevado coste que supondría para las arcas públicas los tratamientos de fertilidad junto a los problemas derivados de los procesos de subrogación gestacional[5].

Sin embargo, hasta la consecución de este logro, el camino recorrido no ha sido nada fácil y ha exigido de sucesivas reformas legales previas para ir atajando las objeciones que se han ido planteando a esta legislación igualitaria en materia de matrimonio. Una de las más persistentes objeciones utilizaba como argumento la protección del menor, en referencia a la adopción homoparental. Y ello ha dado lugar a una reforma legislativa que regula esta cuestión en una ley de abril de 2015, que aborda el tema de las relaciones paterno-filiales[6]. En esta norma se establece la elegibilidad para adoptar a un niño en igualdad de condiciones para las uniones de personas del mismo sexo respecto a aquéllas que hubieran celebrado una unión civil o bien se tratara de una pareja de hecho que hubiera convivido durante al menos tres años, fueran del mismo o de distinto sexo. En otras palabras, aunque el matrimonio entre las personas del mismo sexo no se hubiese aprobado, estas parejas hubieran tenido igualmente derecho a adoptar en virtud de lo establecido en esta Ley[7].

---

5 Vid., http://mothersandfathersmatter.org/.

6 *Children and Family Relationships Act 2015*, No. 9 of 2015. Esta norma modifica importantes aspectos de las relaciones paterno-filiales. Así, entre otras cuestiones, modifica la ley de familia en Irlanda para extender los derechos y responsabilidades parentales también a las familias no tradicionales. Simplifica los derechos de adopción para el cónyuge o pareja de hecho de un padre biológico, y por una pareja de hecho trascurridos determinados plazos. También se ocupa de las relaciones paterno-filiales derivadas de técnicas de reproducción asistida mediante la intervención de donantes (donación de esperma y la donación de óvulos).

7 Vid., arts. 26, 49, 56 y 102 de la Ley 9/2015.

ITALIA

Paulino César Pardo Prieto
Universidad de León

En la anterior crónica legislativa nos hacíamos eco del apercibimiento que la Corte Costituzionale había dirigido al legislador italiano para que procediera a regular la situación de las parejas de hecho en Italia. A pesar de ello, el legislador no ha procedido a cumplir ese mandato e, incidiendo en lo manifestado por la Corte, ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien en julio de 2015 ha concluido que, al desatender la protección jurídica de esas uniones, el Gobierno y el Parlamento italianos sobrepasan el margen de apreciación que el Convenio Europeo de Derechos Humanos concede a los Estados, violando de ese modo el artículo 8 del mismo. En consecuencia, el Tribunal ha condenado a Italia a implementar bajo la supervisión del Comité de Ministros una legislación "...que salvaguarde el reconocimiento y protección de las uniones (...) y asegure su derecho a la vida privada y familiar"[1].

En cuanto a la normativa promulgada en este año sobre las materias propias de nuestro estudio, destacamos la reforma de la Ley nº. 898, de 1 de diciembre de 1970, sobre disolución y cesación de efectos del matrimonio, operada mediante Ley nº. 55, de 6 de mayo de 2015; así como la Ley nº. 107, de 13 de julio de 2015, mediante la que se reforma el sistema nacional de instrucción y formación y se delega la reordenación de las disposiciones legislativas vigentes.

Un extracto de ambas normas se incorpora en sendos Anexos.

---

[1] Véase PARDO PRIETO, P. C., *Italia, Crónica jurisprudencial*, en este mismo número.

ANEXO I

Ley nº. 55, de 6 de mayo de 2015 (G.U. 11/05/2015, nº 107)

Normas en materia de disolución o cesación de los efectos civiles del matrimonio así como de la comunión entre los cónyuges

Artículo 1

1. En el artículo 3, número 2, letra b), segundo inciso, de la Ley nº. 898, de 1 de diciembre de 1970, son sustituidas las palabras "tres años desde el acaecimiento de la comparecencia de los cónyuges ante el presidente del tribunal en el procedimiento de separación personal, incluso cuando el juicio contencioso se haya transformado en consensual" por las siguientes: "doce meses desde el acaecimiento de la comparecencia de los cónyuges ante el presidente del tribunal, en el procedimiento de separación personal, y de seis meses en el caso de separación consensual, incluso cuando el juicio contencioso se haya transformado en consensual".

Artículo 2

En el artículo 191 del Código civil, después del primer inciso se añade lo siguiente: "En el caso de separación personal, la comunión entre los cónyuges se rompe en el momento en que el presidente del tribunal autoriza a los cónyuges a vivir separados o bien desde la fecha de la firma de los cónyuges ante el presidente en el proceso verbal de separación consensual, siempre que haya sido homologada. El auto con el que los cónyuges son autorizados a vivir separados se comunica al oficial del estado civil a fin de proceder a la anotación de la ruptura de la comunión".

(...)

ANEXO II

Ley nº. 107, de 13 de julio de 2015 (G.U. 15/07/2015, nº. 162)

Reforma del sistema nacional de instrucción y formación

Artículo 1

1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare

l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.

2. Per i fini di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e' orientata alla massima flessibilita', diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonche' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l'apertura della comunita' scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realta' locali.

3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle potenzialita' e degli stili di apprendimento nonche' della comunita' professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta' di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilita' dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso:

a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attivita' e insegnamenti interdisciplinari;
b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 201, nonche' della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili.

5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e' istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attivita' di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attivita' curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonche' di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita', nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita';

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali;

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;

g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva agonistica;

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio;

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014;

m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

s) definizione di un sistema di orientamento.

8. In relazione a quanto disposto dalla lettera c) del comma 7, le scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue della regione Friuli-Venezia Giulia possono sottoscrivere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(...)

10. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sono realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale "118" del Servizio sanitario nazionale e con il contributo delle realta' del territorio.

(...)

14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e' sostituito dal seguente:

"**Art. 3** (Piano triennale dell'offerta formativa).– 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identita' culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realta' locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalita' e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilita', nonche' del numero di alunni con disabilita', ferma restando la possibilita' di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

> 3. Il piano indica altresi' il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonche' i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.
>
> 4. Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attivita' della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano e' approvato dal consiglio d'istituto.
>
> 5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realta' istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresi' conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti".

(...)

16. Il piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunita' promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parita' tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 93 de 2013.

(...)

20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonche' docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualita' di specialisti, ai quali e' assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 124.

(...)

24. L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilita' e' assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalita' di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta for-

mativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identita' digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

(...)

29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, puo' individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonche' la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

30. Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

31. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attivita' di cui al comma 28.

32. Le attivita' e i progetti di orientamento scolastico nonche' di accesso al lavoro sono sviluppati con modalita' idonee a sostenere anche le eventuali difficolta' e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. All'attuazione delle disposizioni del primo periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

33. Al fine di incrementare le opportunita' di lavoro e le capacita' di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

(...)

35. L'alternanza scuola-lavoro puo' essere svolta durante la sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo e le modalita' di

verifica ivi stabilite nonche' con la modalita' dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si puo' realizzare anche all'estero.

(...)

PAÍSES BAJOS
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DE LOS PAÍSES BAJOS PARA ABOLIR EL DELITO DE BLASFEMIA

Yolanda García Ruiz
Derecho eclesiástico del Estado
Universitat de València

El treinta de enero de 2014, el Boletín Oficial del Reino de los Países Bajos publicaba la *Ley, de 23 de enero de 2014, por la que se modifica el Código Penal con el objeto de derogar el delito de blasfemia*[1]. Dos meses después, la citada Ley entraba en vigor y hacía realidad una reivindicación demandada, desde hace más de una década, por algunos sectores en los Países Bajos. Dicha demanda no se había materializado con anterioridad, principalmente, por razones ligadas a la conformación de mayorías y a la obtención de consensos políticos al respecto en el país[2]. Sin embargo, los resultados de las últimas elecciones generales, de septiembre de 2012, posibilitaron una mayoría política[3] que ha sido favorable a la derogación del delito de blasfemia.

---

1 El texto original en holandés de la Ley se puede consultar en la siguiente dirección: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-39.html (Última consulta 30/10/2015).

2 Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/12/actualidad/1347431914_469511.html.

3 Las elecciones generales celebradas en septiembre de 2012 en los Países Bajos dieron la victoria a partidos de tendencia liberal. El partido más votado fue el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD); tras ellos, en segundo lugar, quedó el Partido del Trabajo (PvdA) de tendencia política socialdemócrata y, en tercer lugar, el Partido por la Libertad (PVV) que tiene un discurso de tendencia ultraderechista y que fue creado por el controvertido político Geert Wilders, conocido por sus ataques contra el Islam. Los partidos de tendencia democristiana obtuvieron menos representantes.
Fuente: http://internacional.elpais.com/internacional/2012/09/12/actualidad/1347431914_469511.html.

La Ley referida, por la que —según lo señalado— se modifica el Código Penal holandés, cuenta únicamente con tres artículos y, en el primero de ellos, dispone la derogación de los artículos 147, 147a y 429bis del Código Penal de los Países Bajos. En dichos artículos se tipificaban, como delito, la blasfemia y la posesión, divulgación o exhibición de material, información o documentos blasfemos. En concreto, el artículo 147[4] castigaba, con pena de prisión no superior a tres meses o multa de segunda categoría[5], a toda persona que en público, a través de la palabra, por escrito o con imágenes, ofendiera los sentimientos religiosos mediante la blasfemia. El artículo 147a[6] establecía una pena de prisión no superior a dos meses o multa de segunda categoría para quien difundiera, mostrara abiertamente, exhibiera o tuviera en stock un escrito o una imagen que ofendiera los sentimientos religiosos a través de la blasfemia. Y el artículo 429bis[7] preveía la posibilidad de castigar con pena de prisión no superior a un mes o multa de segunda categoría a aquel que exhibiera material blasfemo en lugares visibles de la vía pública.

Una de las razones aducidas a favor de la abolición del delito de blasfemia, a lo largo del debate que ha precedido a la decisión, ha sido la ausencia de uso de este tipo penal durante más de cincuenta años en los Países Bajos. Sí se han planteado, sin embargo, y de manera reiterada en los últimos años, casos en los que los Tribunales holandeses se han tenido que pronunciar respecto de la posible comisión de delitos relacionados con el denominado discurso del odio (*hate speech*), en concreto, contra determinados grupos religiosos.

La crónica jurisprudencial de los Países Bajos del año 2009[8], daba cuenta de un caso, que llegó hasta el Tribunal Supremo holandés, en el

---

4 Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/geldigheidsdatum_wijkt_af_van_zoekvraag/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2002 (Última consulta 30/10/2015).

5 El artículo 23 del Código Penal de los Países Bajos establece que la multa de segunda categoría es de 4050 euros desde el 1 de enero de 2014. Con anterioridad, la cantidad establecida era de 3350 euros. Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/EersteBoek/TitelII/Artikel23/geldigheidsdatum_28-10-2015.

6 Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/geldigheidsdatum_wijkt_af_van_zoekvraag/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2002 (Última consulta 30/10/2015).

7 *Ibídem*.

8 Vid. GARCÍA RUIZ, Y.: "Países Bajos: Ofensa a los sentimientos religiosos *vs.* libertad de expresión en la sentencia del Tribunal Supremo holandés, de 10 de marzo de 2009", *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos*, vol II, 2009, pp. 453 a 477.

que se discutió la posible comisión de un delito de ofensa contra un grupo de personas pertenecientes a una determinada confesión religiosa; delito que sigue estando tipificado en el artículo 137c del Código Penal holandés y que está castigado con una pena de prisión de hasta un año o una multa de tercera categoría[9]. Como se recordará, en aquel caso los hechos se produjeron tras el asesinato del cineasta holandés Theo van Gogh, el 2 de noviembre de 2004, a manos de un fundamentalista islámico. Este hecho supuso un punto de inflexión en la sociedad holandesa que pasó de ser una sociedad abierta y multicultural a convertirse en una sociedad recelosa de la diversidad cultural y religiosa, especialmente en lo que afecta al Islam. Un hecho que confirma lo señalado es el progresivo crecimiento, desde aquel momento, del Partido por la Libertad (PVV), fundado en el año 2004 por Geert Wilders, de tendencia ultraderechista y que defiende una ideología xenófoba contraria a la presencia del Islam en Holanda.

Los hechos que dieron lugar a la referida Sentencia del Tribunal Supremo holandés se produjeron en un contexto de cierta conmoción social en el país. Tras el asesinato de Theo van Gogh, el acusado había colgado en el balcón de su casa un cartel que decía:

> "Parad el tumor llamado Islam. Theo murió por nosotros, quién será el próximo? Sublevémonos AHORA. Alianza Nacional, no nos inclinamos ante Alá. ¡Afíliate!"[10].

Uno de los delitos de los que se le acusó fue el delito de ofensa a un grupo de personas por razón de su religión, tipificado —según se ha señalado— en el artículo 137c del Código Penal holandés. La Corte de apelación de 's-Hertogenbosh le condenó por dicho delito en una Sentencia de 10 de noviembre de 2006. Sin embargo, el Tribunal Supremo consideró que la Corte de apelación había realizado una interpretación demasiado amplia de dicho delito y que no resultaba aplicable al caso[11].

---

9 Según el artículo 23 del Código Penal de los Países Bajos la multa de tercera categoría, antes del 1 de enero de 2014, se correspondía con la cantidad de 6700 euros, con posterioridad a dicha fecha, la cantidad es de 8100 euros.
Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/EersteBoek/TitelII/Artikel23/geldigheidsdatum_28-10-2015.

10 Vid. GARCÍA RUIZ, Y.: "Países Bajos: Ofensa a los sentimientos religiosos *vs.* libertad de expresión en la sentencia del Tribunal Supremo holandés, de 10 de marzo de 2009", *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos*, op. cit., p. 471.

11 *Ibid.*, pp. 462-464.

El supuesto referido tuvo, en su momento, una gran repercusión jurídica y mediática pero lo cierto es que no ha sido el único de estas características que se ha suscitado en los Países Bajos tras la conmoción que supuso el asesinato de Theo van Gogh.

El líder del Partido por la Libertad, el político Geert Wilders, se ha visto implicado en un caso similar al mencionado. Expresiones como: "El núcleo del problema es el Islam fascista, la ideología enfermiza de Alá y Mahoma, tal y como queda fijada en el Mein Kampf islamista: el corán" o "Estoy harto del Islam en Holanda: que no entren más inmigrantes musulmanes (...) estoy harto del Corán en Holanda: que se prohíba ese libro fascista"[12], son utilizadas habitualmente en sus intervenciones públicas y dieron lugar a una denuncia en su contra. El Fiscal, sin embargo, decidió no proceder contra él, tras estudiar el caso y analizar los límites de la libertad de expresión y la aplicación de los delitos del Código Penal holandés que condenan el discurso del odio; es decir, las expresiones públicas ofensivas emitidas contra un grupo de personas, en este caso, por su religión.

En opinión del Fiscal, este tipo de declaraciones, aún cuando puedan resultar discriminatorias y ofensivas, no son punibles si se producen dentro del marco de un debate social. Las declaraciones —afirmaba— "... pueden resultar chocantes, severas o hirientes, pero meramente por eso no son punibles"[13]. A favor de dicha conclusión, jugó, en efecto, el hecho de que Wilders es un político que formula este tipo de declaraciones en el seno de un debate político y social que está abierto en el país respecto del Islam. Este hecho y la relevancia que tiene la libertad de expresión en las sociedades democráticas y en el debate político influyeron, decisivamente, en la decisión del Fiscal. No obstante, el caso terminó finalmente en los tribunales.

La Corte de Amsterdam, a instancia de un grupo de musulmanes que afirmaban que las declaraciones de Wilders habían incrementado la violencia y la discriminación contra su comunidad[14], dictaminó que era necesario conocer del asunto judicialmente para determinar si se había cometido algún delito. El juicio, sin embargo, terminó con la absolución

---

12 *Ibid.*, p. 468.

13 *Ibíd.*, p. 469.

14 Fuente: http://www.bbc.com/news/world-europe-13883331.

de Wilders. El juez utilizó los mismos argumentos que, en su momento, había utilizado el Fiscal para no proceder contra él, esto es, que dichas expresiones, por duras que fueran, se producían en el seno de un debate político y en una sociedad democrática y que, en consecuencia, no eran constitutivas de delito.

Pese a los ataques abiertos proferidos contra el Islam, contra Alá y contra el profeta Mahoma en los casos comentados, no se planteó, en ninguno de ellos, la posible comisión de un delito de blasfemia. No obstante, la distinción entre el delito de blasfemia, abolido por la Ley objeto de la presente crónica legislativa, y los delitos que tipifican el discurso del odio en el Código Penal holandés es bastante sutil.

La blasfemia implica una manifestación pública contra la divinidad o contra los preceptos de una determinada religión de manera que se ofenda a sus fieles, mientras los delitos vinculados al discurso del odio se centran en el ataque explícito *a un grupo de personas* con el objeto de discriminar y dañar por el mero hecho de pertenecer a un determinado colectivo que, por lo que aquí interesa, sería de carácter religioso. Estos delitos, al contrario que la blasfemia, continúan estando tipificados en los Países Bajos y a ellos hace referencia también la *Ley, de 23 de enero de 2014, por la que se modifica el Código Penal con el objeto de derogar el delito de blasfemia*. El artículo dos de dicha Ley menciona los artículos relativos al discurso del odio, al hacer referencia a una Ley del año 2009 que modifica parcialmente el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otras leyes conexas relacionadas con la colaboración y el adiestramiento de terroristas. La ofensa pública intencionada contra un grupo religioso, cualquiera que sea el medio de difusión utilizado, o la incitación al odio contra un grupo religioso siguen siendo actuaciones constitutivas de delito. Ahora bien, su comisión, llegado el caso, deberá ser analizada teniendo en cuenta el contexto, tal y como ha sucedido en los supuestos comentados.

Los ataques contra el Islam, pronunciados en público por el político Geert Wilders, no fueron considerados como una ofensa a los miembros del grupo religioso, esto es, a los musulmanes, ni se barajó la posibilidad de que fueran constitutivos de un delito de blasfemia. Se consideraron como una mera manifestación realizada en el marco del debate político y social sobre el Islam en Holanda. Es decir, como una manifestación de la libertad de expresión en una sociedad democrática; si bien es cierto

que —como precisó el juez— se hallaban en el límite de la protección que confiere el ejercicio de dicha libertad.

TEXTO DE LA LEY[15]

Ley, de 23 de enero de 2014, por la que se modifica el Código Penal con el objeto de derogar la prohibición de la blasfemia

Nos, Guillermo Alejandro, por la Gracia de Dios, Rey de los Países Bajos, Príncipe de Oranje-Nassau, etc. etc. etc.

A todos los que la presente vieren o entendieren, sabed:

Puesto que consideramos que se estima conveniente derogar la prohibición legal de la blasfemia;

Así es que nos, oído el Consejo del Estado y tras deliberación con los Estados Generales, aprobamos y promulgamos por la presente:

ARTÍCULO I

El Código Penal se modificará como sigue:

Los artículos 147[16], 147a[17] y 429bis[18] se derogan.

ARTÍCULO II

1. Si el artículo I, letra I, de la Ley de 12 de junio de 2009, por la que se modifican el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y algunas

---

15 La traducción al castellano de la Ley y de los artículos referenciados en la misma ha sido realizada, del texto original en holandés, por Margriet Janet Oostenbrink.

16 El artículo 147 del Código Penal holandés castigaba, con pena de prisión no superior a tres meses o multa de segunda categoría, a toda persona que en público, a través de la palabra, por escrito o mediante imágenes, ofendiera los sentimientos religiosos mediante la blasfemia. El texto en holandés en: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/geldigheidsdatum_wijkt_af_van_zoekvraag/volledig/geldigheidsdatum_01-05-2002 (Última consulta 30/10/2015).

17 El artículo 147a del Código Penal holandés establecía una pena de prisión no superior a dos meses o multa de segunda categoría para quien difundiera, mostrara abiertamente, exhibiera o tuviera en stock un escrito o una imagen que ofendiera los sentimientos religiosos a través de la blasfemia. *Ibídem.*

18 El artículo 429bis del Código Penal holandés castigaba con pena de prisión no superior a un mes o multa de segunda categoría a aquel que exhibiera material blasfemo en lugares visibles de la vía pública. *Ibídem*.

leyes conexas en relación con la tipificación penal de la participación y la colaboración en el adiestramiento de terroristas, que amplia las posibilidades de inhabilitación de la profesión con penas accesorias y establece otras modificaciones, hubiere entrado o entrara en vigor antes o en el mismo momento que la presente ley, la frase "los artículos 131 a 134[19],

---

[19] Los artículos 131 a 134 del Código Penal holandés disponen:
Artículo 131. "1. El que, oralmente, por escrito o mediante imagen, instigue en público a cualquier hecho punible o a la actuación violenta contra la autoridad pública será castigado con una pena de prisión de hasta cinco años o una multa de cuarta categoría.
2. Si el hecho punible al que se instiga implica una delito terrorista o bien un delito para la preparación o facilitación de un delito terrorista, la pena de prisión, impuesta por el hecho descrito en el apartado primero, será agravada en un tercio".
Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel131/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).
Artículo 132. "1. El que difunda, muestre abiertamente, exhiba o tenga en stock con el fin de ser difundido, mostrado abiertamente o exhibido, un escrito o una imagen en que se instigue a cualquier hecho punible o a la actuación violenta contra la autoridad pública, en caso de que sepa o tenga serios motivos para sospechar que en dicho escrito o dicha imagen aparece tal instigación, será castigado con una pena de prisión de hasta tres años o una multa de cuarta categoría.
2. El que, con dicho conocimiento o motivo para sospechar, exprese públicamente el contenido de semejante escrito, será castigado con la misma pena.
3. Si el hecho punible al que se instiga por escrito o mediante la imagen implica un delito terrorista o bien un delito para la preparación o facilitación de un delito terrorista, la pena de prisión impuesta por el hecho descrito en el apartado primero será agravada en un tercio".
Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel132/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).
Artículo 133. "El que, oralmente, por escrito o mediante imagen ofrezca en público información, oportunidad o medios para cometer cualquier hecho punible, será castigado con una pena de prisión de hasta seis meses o una multa de tercera categoría".
Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel133/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).
Artículo 134. "1. El que difunda, muestre abiertamente o tenga en stock con el fin de ser difundido, mostrado abiertamente o exhibido, un escrito o una imagen en que se ofrezca información, oportunidad o en que se ofrezcan medios para cometer cualquier hecho punible, en caso de que sepa o tenga motivos serios para sospechar que en dicho escrito o dicha imagen aparece tal oferta, será castigado con una pena de prisión de hasta tres meses o una multa de segunda categoría.
2. El que, con dicho conocimiento o motivo para sospechar, exprese públicamente el contenido de semejante escrito, será castigado con la misma pena".

137c a 137g[20] y 147a[21]", del artículo 137h de dicha ley se sustituirá por: los artículos 131 a 134[22] y 137c a 137g[23].

Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel134/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).

[20] Los artículos 137c a 137g del Código Penal holandés establecen:
Artículo 137c. "1. El que, oralmente, por escrito o mediante imagen, se pronuncie en público de forma intencionadamente ofensiva sobre un grupo de personas por razones de su raza, su religión o sus convicciones, su orientación heterosexual u homosexual o su discapacidad física, psíquica o intelectual, será castigado con una pena de prisión de hasta un año o una multa de tercera categoría.
2. Si el hecho es cometido por una persona que lo convierta en profesión o práctica habitual o por dos o más personas asociadas, se impone una pena de prisión de hasta dos años o una multa de cuarta categoría".
Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel137c/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).
Artículo 137d. "1. El que, oralmente, por escrito o mediante imagen incite en público al odio o a la discriminación de personas o la actuación violenta contra personas o sus bienes por razones de su raza, su religión o sus convicciones, su orientación heterosexual u homosexual o su discapacidad física, psíquica o intelectual, será castigado con una pena de prisión de hasta un año o una multa de tercera categoría.
2. Si el hecho es cometido por una persona que lo convierta en profesión o práctica habitual o por dos o más personas asociadas, se impone una pena de prisión de hasta dos años o una multa de cuarta categoría".
Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel137d/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).
Artículo 137e. "1. El que, salvo a los efectos de la comunicación profesional:
1° publique una declaración que, según su conocimiento o según debe sospechar razonablemente, resulte ofensiva para un grupo de personas por razones de su raza, su religión o sus convicciones, su orientación heterosexual u homosexual o su discapacidad física, psíquica o intelectual, o incite al odio o a la discriminación de personas o a la actuación violenta contra una persona o sus bienes por razones de su raza, su religión o sus convicciones, su sexo, orientación heterosexual u homosexual o su discapacidad física, psíquica o intelectual;
2° haga llegar a otra persona, sin que sea a petición de ésta, o bien difunda para ser publicado o tenga en stock con el fin de ser difundido o publicado, cualquier objeto que, según su conocimiento o según debe sospechar razonablemente, contenga semejante declaración;
será castigado con una pena de prisión de hasta seis meses o una multa de tercera categoría.
2. Si el hecho es cometido por una persona que lo convierta en profesión o práctica habitual o por dos o más personas asociadas, se impone una pena de prisión de hasta un año o una multa de cuarta categoría".

2. Si el artículo I, letra I, de la Ley de 12 de junio de 2009 por la que se modifican el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y algunas leyes conexas en relación con la tipificación penal de la participación y la colaboración en el adiestramiento de terroristas, que amplia las posibilidades de inhabilitación de la profesión con penas accesorias y establece otras modificaciones, entra en vigor con posterioridad a la presente ley, la frase "los artículos 131 al 134[24], 137c al 137g[25] y 147a[26]" del artículo I, letra I, artículo 137h de dicha ley, se sustituirá por: los artículos 131 al 134[27] y 137c al 137g[28].

ARTÍCULO III

La presente ley entrará en vigor a partir del primer día del segundo mes natural tras la fecha de publicación en el Boletín del Estado en el que se publique la misma.

Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel137e/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).

Artículo 137f. "El que participe o preste ayuda financiera o de otra índole tangible a actividades destinadas a la discriminación de personas por razones de su raza, su religión o sus convicciones, su orientación heterosexual u homosexual o su discapacidad física, psíquica o intelectual, será castigado con una pena de prisión de hasta tres meses o una multa de segunda categoría".

Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel137f/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).

Artículo 137g. "1. El que, en el ejercicio de un cargo, una profesión o una empresa, discrimine intencionadamente a personas por razones de su raza, será castigado con una pena de prisión de hasta seis meses o una multa de tercera categoría.

2. Si el hecho es cometido por una persona que lo convierta en profesión o práctica habitual o por dos o más personas asociadas, se impone una pena de prisión de hasta un año o una multa de cuarta categoría".

Fuente: http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/TweedeBoek/TitelV/Artikel137g/geldigheidsdatum_28-10-2015 (Última consulta 30/10/2015).

21 Vid. Nota 13.

22 Vid. Nota 15.

23 id. Nota 16.

24 Vid. Nota 15.

25 Vid. Nota 16.

26 Vid. Nota 13.

27 Vid. Nota 15.

28 Vid. Nota 16.

Ordenamos su publicación en el Boletín del Estado, para que todos los ministros, autoridades, colegios y funcionarios a quiénes corresponda, vigilen su correcta ejecución.

Emitido en Wassenaar el 23 de enero de 2014
Guillermo Alejandro
El ministro de Seguridad y Justicia,
I.W. Opstelten
Publicado el día *treinta* de enero de 2014
El ministro de Seguridad y Justicia

PAÍSES DEL ESTE

Almudera Rodríguez Moya
Profesora Titular de Universidad de Derecho eclesiástico del Estado
Salvador Pérez Álvarez
Profesor Titular Acreditado de Derecho eclesiástico del Estado
José Daniel Pelayo Olmedo
Profesor Contratado Doctor de Derecho eclesiástico del Estado
Facultad de Derecho. UNED

SUMARIO: 1. MONTENEGRO. 1.1. Ley sobre prohibición de la discriminación, Montenegro, abril de 2014. 2. LETONIA. 2.1. Ley de reforma de la Ley sobre Registro Mercantil de Letonia de 16 de enero de 2014. ANEXOS.

1. MONTENEGRO

1.1. Ley sobre prohibición de la discriminación, Montenegro, abril de 2014

La normativa que se presenta tiene como objeto fundamental fijar los términos en los que se regula el principio de igualdad y no discriminación. En ella se contienen las disposiciones generales y, además, el propio texto de la Ley advierte que también deberá tenerse en cuenta la aplicación de las normas que regulan la protección frente a la discriminación en determinadas materias o aspectos, así como aquellas que regulan derechos específicos (art. 1 de la Ley), como es el caso de la libertad religiosa.

Esta Ley se distribuye en 8 apartados: I. Disposiciones generales; II. Formas especiales de discriminación; III. Defensor de los derechos humanos y libertades; IV. Protección jurisdiccional; V. Inspección; VI. Registros; VII. Disposiciones penales; VIII. Disposiciones Finales y Transitorias. Al considerarse la religión o las creencias personales uno de los motivos por los que se puede producir la discriminación, le será de aplicación todo lo dispuesto en estos apartados y, más específicamente, cuando se trata de medidas, instrumentos, órganos o regulación dispuestos para evitar la discriminación por causa de la profesión religiosa.

Así, el artículo 2 de la Ley prohíbe la discriminación en cualquier materia o por cualquier motivo, definiéndola como cualquier distinción o tratamiento desigual e injusto, de hecho o de derecho, que se produce de forma directa o indirecta a una persona o grupo de personas en comparación con otras personas. En el término discriminación se incluye la exclusión, la restricción, o el tratamiento preferencial de una persona sobre otra por causa de su raza, color de piel, nacionalidad, origen étnico o social, su pertenencia a una minoría nacional, su lengua, religión o creencias religiosas, opiniones políticas, género, identidad de género, orientación sexual, salud, discapacidad, edad, estatus material, familiar o marital, pertenencia a un grupo o partido político u otra organización, así como cualquier otra característica personal.

La discriminación directa se produce cuando una persona en las mismas condiciones o situación que otra es tratada o situada en una posición desigual, ya sea por ley o por actos, en función los motivos de discriminación expresados en el artículo 2 de la Ley. La discriminación indirecta se produce cuando una norma aparentemente neutral, una práctica habitual o criterio común puede situar o sitúan a una persona en una posición desigual respecto a otra, siempre que esa previsión o criterio no estén justificados objetivamente por un fin legítimo y alcanzable a través de la disposición de las medidas apropiadas, necesarias, aceptables y proporcionadas con el fin que se persigue (art. 2 de la Ley).

La incitación, colaboración, dar instrucciones o expresar la intención de discriminar a una persona o grupo de personas específicos también será considerado discriminación (art. 2 de la Ley).

La Ley prevé expresamente a las personas físicas y jurídicas como sujetos del derecho a la protección frente a la discriminación y, en todo caso, la normativa será de aplicación tanto al sector público como al privado (art. 3 de la Ley). En su artículo 4 protege a aquellas personas que informan de la existencia de una discriminación y en el siguiente artículo fija la necesidad de que las autoridades públicas y otras personas físicas y jurídicas adopten medidas especiales para crear las condiciones necesarias que permitan obtener un tratamiento igual de todas las personas así como la protección frente a la discriminación (art. 5 de la Ley).

Finalmente, en este primer apartado de previsiones generales, el artículo 6 advierte que el consentimiento de una persona para ser discriminada no exime de la responsabilidad a quien ejerce la discriminación.

Es dentro de las disposiciones que regulan las formas especiales de discriminación, donde se regula la discriminación por motivos religiosos. En estas disposiciones vienen regulados el acoso y acoso sexual (art. 7), la segregación (art. 9), el discurso de odio (art. 9a), la discriminación en el uso de edificios e instalaciones públicas (art. 10 de la Ley), la discriminación en la entrega de bienes y servicios (art. 11), la discriminación por las condiciones de salud (art. 12); la discriminación por la edad (art. 13), la discriminación política (art. 14), la discriminación en la actividad educativa y de formación profesional (art. 15), la discriminación en el ámbito laboral (art. 16), la discriminación a las personas con discapacidad (art. 18), la discriminación por razón de género o identidad sexual (art. 19) y, finalmente, las formas graves de discriminación (art. 20).

En la mayoría de ellos, las causas del artículo 2.2 de la Ley, entre los que se incluye la religión o creencias personales, se aplican de forma transversal como motivos de discriminación. En otros casos, como en el discurso de odio, se hace una referencia expresa al prohibir los discursos anti-semitas o basados en cualquier forma de intolerancia. Pero será expresamente el artículo 17 quien regula la discriminación racial y la basada en las creencias religiosas. La discriminación basada en la religión se concibe como cualquier tratamiento contrario al derecho de libertad ideológica y religiosa, considerando que se refiere a cualquier tratamiento desigual, cualquier diferenciación o cualquier actuación que suponga un tratamiento desigual o sitúe en una posición desigual a una persona o grupo de personas por su religión o creencias personales, así como aquellas que derivan de su pertenencia o no pertenencia a una comunidad religiosa.

También entre las disposiciones penales, el artículo 34 recoge expresamente la imposición de una multa de entre 500 € a 20,000 € para quien a través de la expresión de sus ideas, información, declaraciones, expresiones, opiniones, etc. justifique o aliente el odio, la discriminación y la violencia contra una persona, o grupo de personas, por sus características personales, por xenofobia, odio racial, antisemitismo u otras formas de intolerancia.

Finalmente, resulta interesante resaltar la regulación que la norma hace de las formas graves de discriminación, como son: a) la discriminación múltiple, considerada aquella que se realiza sobre la misma persona por múltiples motivos de entre los recogidos en el artículo 2. 2 de esta

Ley; b) la discriminación reiterada, aquella que se realiza varias veces sobre la misma persona; c) la discriminación de larga duración; d) la discriminación que es difundida a través de medios de comunicación públicos o a través de la exposición de materiales y símbolos discriminatorios en espacios públicos; o, por último, e) aquella discriminación que tiene graves consecuencias para la persona o grupo de personas discriminadas, o su propiedad.

2. LETONIA

2.1. Ley de reforma de la Ley sobre Registro Mercantil de Letonia de 16 de enero de 2014

La Ley del Registro Mercantil de la República de Letonia, ha sufrido diversas modificaciones desde su publicación en 1990. En lo que respecta a las entidades religiosas la más reciente es de 2014. Debemos comenzar el análisis de esta norma aclarando que la organización registral letona implica la incardinación del Registro de Entidades Religiosas en el Registro Mercantil, cuya actividad se regirá por la ley que hoy comentamos, la Orden del Registro Mercantil aprobada por el Consejo de Ministros y demás leyes y reglamentos a que aluda la normativa vigente.

El objeto del Registro Mercantil de la República de Letonia, viene recogido en el capítulo primero de la ley. Así, el registro deberá llevar a cabo la inscripción de las entidades que determina la presente ley, a fin de establecer el estatus legal de las mismas, y garantizar la fiabilidad de la información prevista por las normas. De igual manera la ley garantiza la accesibilidad a la información que establezca el ordenamiento jurídico. El Registro Mercantil es una institución administrativa que depende del Ministerio de Justicia y cuya actuación quedará bajo su supervisión. Todos los asuntos referentes al registro de entidades están encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado.

En el capítulo segundo se recogen las funciones del registro: llevar a cabo la inscripción y el mantenimiento de los asientos relevantes de, entre otros, las organizaciones religiosas e instituciones de las mismas; proporcionar información con respecto a las entidades registradas; proporcionar el funcionamiento y desarrollo del sistema de información del

registro y aquellas otras funciones establecidas por las leyes y reglamentos.

Como parte de las funciones que la ley otorga al Registro, encontramos en el apartado diecisiete de la sección segunda, el mantenimiento del Registro de Entidades Religiosas, que, a su vez, dependerá del Registro Mercantil, de acuerdo con lo preceptuado por esta ley, la Ley sobre Organizaciones religiosas y otras leyes y reglamentos.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones, el Registro llevará a cabo las siguientes tareas: aceptar y examinar los documentos establecidos en las leyes y reglamentos para la inscripción de entidades y actos jurídicos; los documentos relativos a los cambios en los registros pertinentes o a las modificaciones de los documentos de constitución y funcionamiento; custodiar los documentos establecidos legal y reglamentariamente; adoptar decisiones sobre la inscripción de entidades y hechos jurídicos susceptibles de ser inscritos, sobre los cambios o enmiendas a los documentos de constitución y los de funcionamiento y generar el asiento correspondiente en los casos previstos por la Ley; denegar o aplazar la inscripción de forma motivada, indicando el plazo para la subsanación de las deficiencias; proveer un identificador fiscal para la zona única de pagos en euros; registrar las resoluciones de autoridades o funcionarios competentes, que resuelvan reclamaciones dentro de sus competencias. Deberá notificar a las autoridades pertinentes la posible vulneración de las normas, fomentar la elaboración de protocolos administrativos que detecten el quebrantamiento de leyes y reglamentos, y corresponderá al encargado del registro examinar y sancionar el incumplimiento de las normas. Deberá examinar y responder a las solicitudes que reciba, así como a las peticiones de información, respondiendo y proporcionando ayuda a las personas interesadas para la inscripción y familiarización con el proceso registral.

Resulta relevante la obligación de comprobar las firmas de conformidad con los procedimientos establecidos por la Ley. Mantener actualizada la información para su incorporación a los registros dependientes del Registro Mercantil. Es preceptivo verificar que el nombre de una empresa, comerciante, agrupación europea de interés económico, oficina de representación, asociación, fundación, sindicato, partido político, u organización religiosa y las entidades creadas por ella, no coincida con ninguna otra previamente inscrita en cualquiera de los registros que que-

dan enumerados en el apartado 5.3. de la presente ley, entre los que cita al Registro de Entidades Religiosas.

De igual manera señala el deber de mantener y mejorar el sistema de información del registro y asegurar su interoperabilidad con otros sistemas de información estatales, garantizando, en los casos previstos por las normas, el acceso on line a los datos del registro.

Corresponde al registro, garantizar la transformación de los archivos en formato electrónico, así como proporcionar información sobre el mismo, atendiendo a las previsiones legales y reglamentarias. Es competencia del registro emitir un certificado de registro de la entidad inscrita cuando aquella lo solicite por escrito, una vez abonado el pago de la tasa establecida legalmente.

El Registro Mercantil, velará por que la siguiente información esté disponible en su página web:

- El tipo de la entidad;
- El domicilio legal;
- La denominación actual y las anteriormente registradas;
- El número de registro;
- El identificador fiscal de la zona única de pagos en euros;
- La fecha de registro;
- La fecha en que la entidad fue excluida del registro (o la fecha de reorganización si el motivo de la exclusión es la reorganización);
- El plazo de inscripción de las organizaciones religiosas que realicen su reinscripción.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 12 del art. 18 de la Ley las organizaciones o instituciones de las entidades o confesiones religiosas deberán ser inscritas en la Sección Especial del registro mercantil. A efectos de registro, la institución interesada deberá presentar en el Registro la certificación de pertenencia a la entidad religiosa de que se trate expedida conforme a lo dispuesto en la Ley sobre organizaciones religiosas vigentes y cuando se trata de instituciones de la Iglesia católica a lo dispuesto a tal efecto en el Acuerdo Marco celebrado entre Letonia y la Santa Sede. Junto a este documento la institución interesada deberá presentar todos los demás documentos exigidos por la presente

Ley para el acceso al Registro Mercantil de cualquier tipo de organización empresarial (Art. 18. Ap. 13).

Según lo dispuesto en el apartado 14 del art. 18 de la Ley, una vez presentada la solicitud por la organización de que se trate, el funcionario encargado del registro dispone de un plazo máximo de 7 días para inscribir a la entidad interesada en el registro. Las inscripciones practicadas deberán ser comunicadas a las instituciones interesadas en el plazo máximo de tres días hábiles. También es posible que el encargado del Registro podrá posponer la inscripción y requerir a la entidad de que se trate que subsane su solicitud en el plazo que fije a tal efecto cuando no haya presentado toda la documentación requerida a tal efecto, cuando la documentación presentada no se ajuste a los requisitos contemplados en la normativa vigente o si la entidad solicitante tenga un nombre o denominación social similar o idéntico a la de otra institución del mismo tipo inscrita que pueda inducir a equívocos a terceros. O que deniegue la inscripción a una organización religiosa si:

- Sus funciones y/o objetivos son contrarios al ordenamiento jurídico;
- El Ministerio de Justicia ha emitido un Dictamen donde consten motivos para creer que la actividad de la organización es contraria a la ley o suponen una amenaza para los derechos humanos, el Estado de Derecho y la seguridad, la salud o la moral públicas;
- No ha sido constituida conforme a los procedimientos contemplados a tal efecto en la Ley sobre organizaciones religiosas vigente;
- No ha subsanado los defectos formales de la solicitud en el plazo fijado a tal efecto por el juez encargado del registro.

Las organizaciones o instituciones religiosas inscritas en el Registro Mercantil recibirán la notificación permitente con el número del asiento registral correspondiente. El encargado del Registro también notificará a la entidad inscrita los posibles errores materiales que pudiera adolecer su inscripción de los que sean de la responsabilidad del propio Registro. En dicha comunicado quedará constancia del procedimiento que va a ser observado para corrgir dicho defecto para que puedan, asimismo, elevar las objeciones que estimen pertinentes en el plazo fijado a tal efecto. En el supuesto de que la organización afacetada no presente objeción alguna el encargado del registro efectuará la corrección de los errores materiales de inscripción detectados de oficio (Art. 18. Ap. 15-16)

ANEXO I

Unofficial translation

Courtesy of the OSCE Mission to Montenegro The Law was adopted in April 2014

THE LAW

ON PROHIBITION OF DISCRIMINATION

I. GENERAL PROVISIONS

Subject of the Law

Article 1

The prohibition of and protection from discrimination shall be achieved, and the promotion of equality shall be carried out in accordance with this Law.

The prohibition of and protection from discrimination, as well as the promotion of equality shall be, also, exercised pursuant provisions of other laws regulating prohibition of and protection from discrimination on particular grounds or related to exercise of particular rights, as well as the promotion of equality if they are not contrary to this law.

Prohibition of Discrimination

Article 2

Any form of discrimination, on any ground, shall be prohibited.

Discrimination is any unjustified, legal or actual, direct or indirect distinction or unequal treatment, or failure to treat a person or a group of persons in comparison to other persons, as well as exclusion, restriction or preferential treatment of a person in comparison to other persons, based on race, colour of skin, national affiliation, social or ethnic origin, affiliation to the minority nation or minority national community, language, religion or belief, political or other opinion, gender, gender identity, sexual orientation, health conditions, disability, age, material status, marital or family status, membership in a group or assumed membership in a group, political party or other organisation as well as other personal characteristics.

Direct discrimination exists if a person or a group of persons, in the same or similar situation in respect to other person or group of persons, is brought

or were brought, or may be brought in an unequal position by an act, action or failure to act, on any ground referred to in paragraph 2 of this Article.

Indirect discrimination exists if apparently neutral provision of a regulation or general act, criterion or practice is bringing or can bring a person or a group of persons into unequal position in respect to other person or group of persons, on any ground referred to in paragraph 2 of this Article, unless the provision, criterion or practice are objectively and reasonably justified by a legitimate purpose and achievable with the means appropriate and necessary to use for achieving that purpose, and when they are acceptable and proportionate in relation to the purpose to be achieved.

Inciting, helping, giving instructions as well as announced intent to discriminate specific person or group of persons on any ground referred to in paragraph 2 of this Article, shall be as well considered to be discrimination.

Protection from discrimination

Article 3

The right on protection from discrimination belongs to all natural

and legal persons to which the Montenegrin legislation is applicable, if they are discriminated against on any ground referred to in Article 2, paragraph 2 of this Law.

This Law shall apply to public and private sector.

Persons reporting discrimination

Article 4

No one shall suffer adverse consequences for reporting the

case of discrimination, giving deposition before a competent authority or offering evidence in the proceedings investigating a case of discrimination.

Persons are protected from any adverse treatment or effect as a reaction to reporting or a proceeding conducted for violation of the principle of non-discrimination.

Regulations and Special Measures

Article 5

Regulations and special measures aimed at creating conditions for the realisation of national, gender and overall equality and protection of persons being in unequal position on any ground, may be adopted, that is introduced and implemented, within its competences, by authorised state authorities, authorities of the state administration, authorities of the units of local self-gov-

ernment, public enterprises and other legal persons performing public powers (hereinafter referred to as: authorities), as well as other legal and natural persons.

The measures referred to in this Article shall be applied in proportion to the needs and possibilities and shall last until the goals established by those measures are achieved.

Consent

Article 6

Consent of a person to be discriminated against shall not

relieve from responsibility the person exercising discrimination, giving instruction to discriminate or inciting discrimination.

II. SPECIAL FORMS OF DISCRIMINATION

Harassment and Sexual Harassment

Article 7

Harassment of a person or group of persons on one or more grounds referred to in Article 2, paragraph 2 of this Law, when such behaviour has the purpose of or which consequence is violation of personal dignity, or causes intimidation, feelings of humiliation or offensiveness or creates hostile or degrading environment, shall be considered as discrimination in the sense of Article 2 of this Law.

Any unwanted verbal, nonverbal or physical behaviour of sexual nature which has the purpose to violate dignity of a person or group of persons, or which achieves such effect, and especially which causes intimidation, creates hostile and degrading environment, and produces feelings of humiliation or offensiveness, shall also be considered as discrimination.

Mobbing

Article 8

Article removed

Segregation

Article 9

Segregation shall also be considered as discrimination in the sense of Article 2 of this Law.

Segregation is every act, activity or failure to perform an activity, whereby forced or systemic separation or differentiation of persons is carried out on any of the grounds from paragraph 2 of Article 2 of this Law.

Hate speech

Article 9a

Hate speech is any form of expression of ideas, statements,

information and opinions that spreads, stirs up, encourages or justifies discrimination, hatred or violence against a person or group of persons because of their personal characteristics, xenophobia, racial hatred, anti-Semitism or other forms of hatred based on intolerance, including intolerance expressed in form of nationalism, discrimination and hostility against minorities.

Discrimination in use of facilities/buildings and areas in public use

Article 10

Restricting or disabling the use of facilities/buildings and areas in public use to a person or a group of persons, on any ground referred to in Article 2, paragraph 2 of this Law, shall be deemed to be discrimination.

The right to use the facilities/buildings and areas in public use may be restricted only in accordance with the law.

Discrimination in goods and service delivery

Article 11

Discrimination in the area of public and private goods and service delivery, on any ground referred to in Article 2, paragraph 2 of this Law shall be deemed to be:

1) Making goods and service delivery difficult or impossible,
2) Refusing goods and service delivery,
3) Conditioning of goods and service delivery with the conditions that are not required from other persons or group of persons,
4) Intentional delay or postponement of goods and service delivery, even though the person or group of persons requested and met the requirements for timely goods and service delivery before the other person or group of persons.

Discrimination based on health conditions

Article 12

Disabling, restricting or making difficult for a person or a group of persons to get employment, to work, to get education or any other unjustified differentiation or unequal treatment based on health conditions, shall be deemed to be discrimination.

Discrimination based on age

Article 13

Disabling or restricting the exercise of the rights or any other

unjustified differentiation or unequal treatment of a person or a group of persons on the bases of age, shall be deemed to be discrimination.

Political discrimination

Article 14

The discrimination of individuals or groups of persons because of political belief, because of belonging or not belonging to a political party or other organization is prohibited.

Discrimination in the field of education and vocational training

Article 15

Discrimination in the field of education and vocational training is considered to be making difficult or denying the enrolment into educational institution and institution of high education and the choice of educational programme at all levels of education, expelling from these institutions, making difficult or denying the possibility to attend classes and participate in other educational activities, classification of children, pupils, participants in education and students, abusing or otherwise making unjustified differentiation or unequally treating them, on any ground referred to in Article 2, paragraph 2 of this Law.

Discrimination in field of labour

Article 16

In addition to the cases of discrimination prescribed by the law regulating the field of labour and employment, discrimination in work shall also refer to the payment of unequal salary or remuneration for work of equal value to a person or a group of persons, on any ground referred to in Article 2, paragraph 2 of this Law.

Persons performing temporary or seasonal work or working under special agreement, students and pupils on practice, as well as other persons participating on any ground in the work for an employer, shall also have the right on the protection from discrimination referred to in paragraph 1 of this Article.

Distinction, exclusion or giving preference is not considered to be discrimination if so require the peculiarities of the particular work in which personal characteristic of a person represent real and decisive condition of doing the work, if the purpose to be achieved that way is justified and if the condition is proportionate, as well as taking measures of protection according to certain criteria of persons referred to in paragraph 2 of this Article.

Racial discrimination and discrimination based on religion and belief

Article 17

Racial discrimination is any differentiation, unequal treatment or bringing in unequal position of persons with the belief that race, skin colour, language, nationality or national or ethnic origin, justify depreciation of person or group of persons, or justify the idea on superiority of a person or group of persons towards those who are not members of that group.

Discrimination on the basis of religion or belief is any treatment which is against the principle of freedom of religion, that is every unequal treatment, differentiation, or bringing in unequal position of persons on the basis of religion or personal belief, as well as on the basis of belonging or not belonging to a certain religious community.

Discrimination of persons with disability

Article 18

Entrance in facilities/buildings and areas in public use which are

inaccessible to the persons with reduced mobility and persons with disability, that is making impossible, restricting or making difficult the use of mentioned facilities, in a way which is not disproportionate burden for a legal or natural person who is obliged to provide for that, shall be deemed to be discrimination within the meaning of Article 2 of this Law.

Discrimination against person with disability exists also in the case when special measures to remedy limitations or unequal position this person is facing are not taken.

Discrimination on the basis of gender identity and sexual orientation

Article 19

Any differentiation, unequal treatment or bringing a person in an unequal position based on gender identity or sexual orientation, shall be deemed to be discrimination.

Everyone has the right to express its gender identity and sexual orientation.

No one may be called upon to publicly declare his/her gender identity and sexual orientation.

Gender identity refers to our own gender experience that does not have to depend on a sex given by birth. Gender identity is relevant to every person and does not imply only a binary concept of male or female.

Sexual orientation refers to emotional and/or physical attraction or sympathy towards persons of the same and/or different sex.

Grave form of discrimination

Article 20

Grave form of discrimination, on any ground referred to in Article 2, paragraph 2 of this Law shall be deemed to be discrimination:

1) committed against the same person or the group of persons on multiple grounds referred to in the Article 2, paragraph 2 of this Law (multiple discrimination);
2) committed several times against the same person or the group of persons (repeated discrimination);
3) committed during longer period of time against the same person or the group of persons (extended discrimination);
4) by dissemination through public media, as well as by writing and displaying the materials and symbols of discriminatory content in public places;
5) which has particularly grave consequences for discriminated person, group of persons or their property.

III. PROTECTOR OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS

Competency of the Protector

Article 21

The Protector of Human Rights and Freedoms of Montenegro (hereinafter referred to as: the Protector) is competent to:

5) act on complaints relating to discriminatory treatment committed by authority, business entity, other legal person, entrepreneur and natural person, and undertake measures and actions to eliminate discrimination and protect the rights of discriminated person, if the court proceeding is not initiated;
6) provide required information to the complainant who believes to be discriminated by authority, business entity, other legal person, entrepreneur and natural person, about his/her rights and duties, as well as about possibilities of court and other protection;
7) conduct the conciliation proceeding between the person who believes to be discriminated, with his/her consent, and authority, business entity, other legal person, entrepreneur and natural person, referred to in the complaint on discrimination;
8) initiate the procedure for protection against discrimination in court or appear in that proceeding as an intervener if the party makes probable, and the Protector assess that respondent performed discrimination by the treatment on the same ground toward a group of persons with the same personal characteristics;
9) warn the public on appearances of severe forms of discrimination;
10) keep separate records of submitted complaints with regard to discrimination;
11) collect and analyse data on cases of discrimination;
12) undertake activities for promotion of equality;
13) submit to the Parliament of Montenegro, in a separate section within the annual report, the report on the activities conducted regarding protection from discrimination and promotion of equality;
14) perform other tasks related to protection from discrimination prescribed by the separate law governing the competences, powers, manner of operation and acting of the Protector.

Submitting a complaint

Article 22

Anyone who considers to be discriminated against by an act,

action or failure to act made by an authority and other legal and natural persons, may address the Protector with a complaint.

The complaint referred to in paragraph 1 of this Article can be submitted to the Protector also by organisations or individuals dealing with the protection of human rights, with the consent of the person or the group of persons discriminated against.

Acting upon the complaints referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article, shall be conducted in compliance with regulations setting up the manner of operation of the Protector, unless this law provides otherwise.

Reports of the Protector

Article 23

Article removed

IV. COURT PROTECTION

Proceeding before the court

Article 24

Anyone who considers to be damaged by discriminatory treatment of an authority, business entity, other legal person, entrepreneur and natural person shall be entitled to the court protection, in accordance with the law.

The proceeding shall be initiated by filing a lawsuit.

The provisions of the law regulating civil proceeding shall be accordingly applied on the proceeding referred to in paragraph 2 of this Article, unless this law provides otherwise.

The proceeding referred to in the paragraph 2 of this Article is urgent.

In the dispute for protection from discrimination the revision shall be always allowed.

Territorial jurisdiction

Article 25

In the proceeding for protection from discrimination, beside the

court of general territorial jurisdiction, the court on whose territory is the residence or office of the plaintiff shall also have the territorial jurisdiction.

Lawsuit

Article 26

By lawsuit referred to in Article 24, paragraph 2 of this Law can be claimed also:

1) establishment of the fact that the respondent has acted discriminatory against the plaintiff;
2) prohibition of exercising the activity that bears potential treat of discrimination, i.e. prohibition of repetition of discrimination activity;

2a) elimination of the consequences of discriminatory treatment;

3) compensation of damage, in accordance with the law;

4) publication in the media of the judgement establishing discrimination on the expenses of respondent.

In the cases referred to in paragraph 1, items 1 and 2 and 2a of this Article, the lawsuit ~~shall~~ may be exert together with the claim for protection of the right of which is decided in a civil proceeding, if those claims are correlated and based on the same factual and legal ground.

Deadline for filing the lawsuit

Article 27

The lawsuit referred to in Article 24, paragraph 2 of this Law may be filed within one year from the day of cognition about the commission of discrimination and no later than three years from the day on which the discrimination was committed.

Temporary measures

Article 28

Prior to initiation or during the lawsuit proceeding referred to in Article 24 of this Law, upon the proposal of the party, the court may pass temporary measures.

The proposal for passing a temporary measure must prove the likelihood of the necessity of such measure in order to prevent the danger of irreparable damage, particularly serious violation of the right to equal treatment or prevent violence.

On a proposal for passing a temporary measure the court is obliged to deliver a decision without delay.

On the proceeding referred to in paragraph 1 of this Article shall be accordingly applied the provisions of the Law on Executive Procedure.

Burden of proof

Article 29

If the plaintiff proved the likelihood of respondent committing an act of discrimination, the burden of proving that due to that act the violation of equality in rights and equality before the law did not occurred, passes on the respondent.

The provision of paragraph 1 of this Article shall not apply to misdemeanour and criminal proceedings.

Other persons who may file a lawsuit

Article 30

The lawsuit referred to in Article 26, paragraph 1 items 1, 2 and 4 of this Law may be filed, on behalf of discriminated person or group of persons, also by organizations or individuals who are dealing with the protection of human rights.

The lawsuit referred to in paragraph 1 of this Article may be filed only with the written consent of a discriminated person or a group of persons.

The lawsuit under Article 26 of this Law may also be filed by a person who, with intention to directly verify the application of the rules on non-discrimination, introduces him/herself as a person, or put in the position of a person who may be discriminated on the grounds referred to Article 2 of this Law.

Informing the Protector

Article 31

Plaintiff referred to in Articles 24 and 30 of this Law, who filed

the complaint with the Protector, shall notify the Protector in writing about initiation of the court proceeding.

V. INSPECTION CONTROL

The role of inspection

Article 32

Inspection control with respect to discrimination in the field of labour and employment, occupational safety, health care, education, building and construction, traffic, tourism and other fields, shall be performed by inspections competent for those fields, in accordance with the law.

Special Powers

Article 32a

When during an inspection control is found that the law or other

regulation is violated, in addition to the powers prescribed by the law, inspector has the power to, on the request of a person who believes to be discriminated and who initiated the proceeding for protection from discrimination before the competent court, temporarily postpone the enforcement of the decision, other act or action of the subject of control, until the final court decision.

The request referred to in paragraph 1 of this Article may be filed within eight days as of the initiation of the proceeding for the protection from discrimination before the competent court.

The inspector is obliged to decide on the request referred to in paragraph 1 of this Article within eight days as of the date of filing the request.

VI. RECORDS

Keeping the records

Article 33

The courts, the state prosecutor's offices, misdemeanour authorities, the authority responsible for police affairs and inspection authorities are obliged to keep separate records on filed complaints, initiated proceedings and decisions taken within their own jurisdiction in relation to discrimination (hereinafter referred to as: separate records).

The authorities referred to in paragraph 1 of this Article shall deliver data from the separate records to the Protector not later than 31st January of the current year for the previous year, and at the request of the Protector they shall deliver the data from these records as well for a certain shorter period during the year.

Detailed content and manner of keeping the records referred to in paragraph 1 of this Article shall be prescribed by the state authority competent for human and minority rights.

VII. PENAL PROVISIONS

Misdemeanours

Article 34

A fine of 500 EUR to 20,000 EUR shall be imposed for misdemeanour on a legal person, if:

1) by expression of ideas, statements, information, opinions, encourages or justifys discrimination, hatred or violence against a person or group of persons because of their personal characteristics, xenophobia, racial hatred, anti-Semitism, or other forms of hatred based on intolerance, including intolerance expressed in the form nationalism, discrimination and hostility against minorities (Article 9a);
2) refuses provision of public services, it conditions provision of services with conditions which are not asked to be met by other persons or a group of persons or it is purposefully late or postpones provision of services, although a person or a group of persons requested and met

all conditions for timely provision of services before other persons (Article 11);

3) unjustifiably differentiates or treats unequally, prevents, restricts or hinders employment, work, education or unjustifiably denies other rights to a person or a group of persons, based on health conditions (Article12);
4) prevents or restricts the exercise of the rights, unreasonably differentiates or treats unequally the person or group of persons, based on age (Article 13);
5) hinders or prevents enrolment in educational institution and institution for university education and choice of educational program at all levels of education, excludes from these institutions, hinder or deny the possibility of attendance and participation in other educational activities, classifies children, pupils, attendants of education and students, abuses or otherwise unduly makes difference or unequaly treats them, on any of the grounds referred to in Article 2 paragraph 2 of this Law (Article 15);
6) pays unequal salary or remuneration for work of equal value to a person or a group of persons, on any of the grounds referred to in Article 2 paragraph 2 of this Law (Article 16);
7) prevents, restricts or hinders the use of access to facilities and areas in public use to persons with reduced mobility and persons with disability (Article 18);
8) files a lawsuit without the written consent of discriminated person or group of persons (Article 30 paragraph 2);

For misdemeanour referred to in paragraph 1 of this Article the responsible person in the legal person, state authority, authority of local self-government and authority of local government shall also be fined in the amount of 100 EUR to 2,000 EUR.

For misdemeanour referred to in paragraph 1 of this Article the entrepreneur shall also be fined in the amount of 300 EUR to 6,000 EUR.

Article 34a

A fine of 100 EUR to 2,000 EUR shall be imposed on the responsible person in the state authority, authority of state administration and authority of the local self-government if:

1) it does not keep separate records on filed complaints, initiated proceedings and decisions taken within its own jurisdiction in relation to discrimination (Article 33 paragraph 1);

2) it fails to deliver the data from the separate records to the Protector within the deadlines referred to in Article 33, paragraph 2 of this Law.

Article 34b

For misdemeanours referred to in Article 34, paragraph 1 and 34a of this Law, individually or with a fine or a warning measure, one or more protective measures may be imposed as follows:

1) seizure of objects;
2) prohibition to carry out the occupation, activity or duty;
3) public announcement of a decision.

Protective measure of seizure of objects shall be obligatorily imposed whenever a misdemeanour is committed using the object which is under seizure, or when the object was designated for commitment of the misdemeanour or when the object which is under seizure was made because of committing the misdemeanour.

Protective measure of prohibition to carry out the occupation, activity or duty may be applied for a period which may not be shorter than 30 days or longer than six months.

Protective measure of public announcement of a decision shall be enforced by publishing such a decision in the media available on the entire territory of Montenegro.

VIII. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Proceedings on complaints

Article 35

Proceedings on complaints related to discrimination submitted prior to the entry into force of this Law shall be completed in accordance with the regulations that were applied until the entry into force of this Law.

Secondary legislation

Article 36

Secondary legislation referred to in Article 33, paragraph 3 of this Law shall be delivered within six months from the day of entry into force of this Law.

Entering into force

Article 37

This Law shall enter into force on the eighth day as of the day of publication in the "Official Gazette of Montenegro".

ANEXO II

TEXT CONSOLIDATED OF THE LAW ON THE ENTERPRISE REGISTER OF THE REPUBLIC OF LATVIA (16th JANUARY 2014)

CHAPTER ONE
General Provisions

The objective of the operation of the Enterprise Register of the Republic of Latvia (hereinafter - Enterprise Register) shall be to carry out registration of the entities determined by this Law, in order to establish the legal status of entities and to ensure the public reliability of the information laid down in laws and regulations (regarding the entities to be registered and legal facts), as well as ensure accessibility of the information laid down in laws and regulations.

The Enterprise Register is a direct administration authority which shall act under the supervision of the Minister for Justice.

Registration of the entities and legal facts laid down in this Law shall be carried out by State notaries of the Enterprise Register.

[17 February 2005]

CHAPTER TWO
Functions and Tasks of the Enterprise Register

[17 February 2005]

Section 1
Functions of the Enterprise Register

The Enterprise Register shall have the following functions:

1) to perform the registration and the keeping of the relevant registers for merchants and their branches, representations of foreign merchants and organisations and representatives thereof, co-operative societies, European economic interest groupings, European commercial companies, European co-operative societies, political parties and associ-

ations thereof, administrators, insolvent entities, legal protection and measures of insolvency proceedings, associations and foundations, religious organisations and the institutions thereof, trade unions, mass media, public and private partnership contracts, decisive influences, commercial pledges, spousal property relations and arbitrage;

2) to provide information regarding the registered entities and legal facts;

2.1) to provide the operation and development of the information system of the Enterprise Register;

3) to perform other functions laid down in laws and regulations.

[15 June 2006 /see Clauses 8 and 10 of Transitional Provisions/; 8 November 2007; 18 December 2008; 15 October 2009; 6 November 2013]

Section 2
Registration of Enterprises (Business Companies)

Enterprises (companies), branches and representations shall be registered according to their location in the relevant department of the Enterprise Register.

The activity territory of an Enterprise Register department shall be determined by the Chief State Notary of the Enterprise Register, whose order shall be published in the official gazette Latvijas Vēstnesis [the official Gazette of the Government of Latvia].

Registration of the branches of enterprises (companies) may also be performed in the relevant department of the Enterprise Register according to the legal address of the main enterprise (company).

Registration of amendments to basic documents shall be performed in that Enterprise Register department, in which the enterprise (company), branch or representation has been registered. These provisions shall also be applied in all cases of reorganisation.

[6 March 2008]

[16 January 2014]

[14 May 1991; 7 April 1992; 5 October 1995; 14 June 2001; 6 March 2008; 2 May 2013; 16 January 2014]

Section 2.1
Registration of Mass Media

Registration of mass media shall be performed by State notaries of the Enterprise Register in accordance with the Law On the Press and Other Mass Media and other laws and regulations.

[14 June 2001]

Section 2.2
Keeping of the Register of Public Organisations

The State notaries of the Enterprise Register shall keep the Register of Public Organisations (including political parties) in accordance with the Law On Public Organisations and their Associations, the provisions of this Law regarding the keeping of the Register of Associations and Foundations, the Law On Procedures for the Coming into Force of the Law On Associations and their Establishment, the Law On Procedures for the Coming into Force of the Law On Political Parties and other laws and regulations.

[15 June 2006/ see Clause 10 of Transitional Provisions/]

Section 2.3
Registration of Commercial Pledges

The Enterprise Register shall keep the Register of Commercial Pledges in accordance with the procedures laid down in the Commercial Pledge Law.

[14 June 2001]

Section 2.4
Registration of Concession Contracts

[15 October 2009]

Section 2.5
Registration of a Decisive Influence

The State Notary of the Enterprise Register shall perform registration of a decisive influence in accordance with the Group of Companies Law and other laws and regulations.

[14 June 2001]

Section 2.6
Registration of Spousal Property Relations

The Spousal Property Relations Register shall be kept by the Enterprise Register in accordance with the procedures stipulated by the Cabinet in accordance with the Civil Law and other laws and regulations.

A State fee shall be paid for the making of entries regarding carrying out registration of spousal property relations, and the amount, procedures for payment and relief of such fee shall be determined by the Cabinet.

[5 March 2009]

Section 2.7
Keeping the Commercial Register

The Commercial Register shall be kept by the Enterprise Register in accordance with this Law, the Civil law and other laws and regulations.

[16 July 2001]

Section 2.8
Registration of Representations and Representatives of Foreign Merchants and Organisations

The registration of representations and representatives of foreign merchants and organisations shall be carried out by the Enterprise Register in accordance with the procedures stipulated by the Cabinet.

A State fee shall be paid for carrying out registration of the representations and representatives of foreign merchants and organisations, and the amount, procedures for payment and relief of such fee shall be determined by the Cabinet.

[5 March 2009]

Section 2.9
Keeping of the Register of Trade Unions

[16 January 2014]

Section 2.10
Keeping of the Register of Associations and Foundations

The Register of Associations and Foundations shall be kept by the Enterprise Register in accordance with this Law, the Associations and Foundation Law and other laws and regulations.

[18 March 2004]

Section 2.11
Keeping of the Register of European Economic Interest Groupings

The Register of European Economic Interest Groupings shall be kept by the Enterprise Register in accordance with laws and regulations.

[18 March 2004]

Section 2.12
Registration of European Commercial Companies

Entries in the Commercial Register regarding European commercial companies shall be performed by the Enterprise Register in accordance with the laws and regulations governing commercial activities.

The tasks specified in Article 8(8), Article 25(2), Article 26(1), Article 54(2), Article 55(3) and Article 64 of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE) shall be fulfilled by the Enterprise Register.

[28 October 2004]

Section 2.13
Keeping of the Arbitrage Register

The Arbitrage Register shall be kept by the Enterprise Register in accordance with the procedures stipulated by the Cabinet.

[17 February 2005]

Section 2.14
Keeping of the Register of Political Parties

The Register of Political Parties shall be kept by the Enterprise Register in accordance with this Law, the Law On Political Parties and other laws and regulations.

[15 June 2006/ see Clause 10 of Transitional Provisions/]

Section 2.15
Registration of European Co-operative Societies

The Enterprise Register shall make entries in the Enterprise Register Journal regarding European co-operative societies in accordance with the laws and regulations governing the activities of European co-operative societies.

The tasks laid down in Article 7(8), Article 29(2), Article 30(1), Article 54(2), and Article 73(1) of Council Regulation (EC) No 1435/2003 of 22 July 2003 on the statutes for European co-operative societies (SCE) shall be fulfilled by the Enterprise Register.

[15 June 2006/see Clause 8 of Transitional Provisions/]

Section 2.16
Keeping of the Insolvency Register

The Insolvency Register shall be kept by the Enterprise Register in accordance with this Law, the Insolvency Law and other laws and regulations.

[8 November 2007]

Section 2.17
Keeping of the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof

The Register of Religious Organisations and Institutions Thereof shall be kept by the Enterprise Register in accordance with this Law, the Law On Religious Organisations and other laws and regulations.

[18 December 2008]

Section 2.18
Registration of Public and Private Partnership Contracts

A public and private partnership contract shall be entered in the Register of Public and Partnership Contracts.

The Register of Public and Partnership Contracts shall be kept by the Enterprise Register in accordance with the procedures laid down in laws and regulations.

[15 October 2009]

Section 3
The Legal Basis of the Activities of the Enterprise Register

The activities of the Enterprise Register shall be governed by this Law, the By-law of the Enterprise Register approved by the Cabinet and other laws and regulations.

[14 June 2001]

Section 4
Tasks of the Enterprise Register

In order to ensure the fulfilment of the functions, the Enterprise Register shall carry out the following tasks:

1) accept and examine the documents laid down in laws and regulations for registration of entities and legal facts in the Enterprise Register, the documents regarding changes in the relevant registers or regarding amendments to the documents of incorporation and documents of operation and store the documents laid down by laws and regulations;
2) take a decision on the entities and legal facts to be registered in the Enterprise Register, on changes in the relevant register or amendments to documents of incorporation and documents of operation and make the relevant entry or in the cases laid down in laws and regulations

take a decision with a substantiated refusal or on postponing of registration, indicating the term for rectification of deficiencies;

2.1) upon registering the entities to be registered in the Enterprise Register as taxpayers in accordance with the procedures laid down in the laws and regulations governing the field of taxes, assign each of them an individual identifier of the recipient of payment of the Single Euro Payments Area;

3) register the decisions and orders of competent authorities or officials, with which claim enforcement has been applied;

3.1) ensure the execution of an adjudication rendered in criminal procedure, by which a person has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, as well as an adjudication rendered in criminal procedure or administrative violation procedure, by which a person has been withdrawn the right to take up specific offices, and notify the relevant authorities or officials, as well as the relevant merchant regarding violations of conditions for execution;

4) notify the relevant authorities regarding possible violations of laws and regulations, draw up administrative violation protocols regarding the detected violations of laws and regulations, examine administrative violation cases and impose punishments;

5) examine and prepare answers to submissions received and requests for information, prepare the registration file and derivatives of official Enterprise Register documents, as well as provide the interested persons with an opportunity to become acquainted with registration files;

5.1) confirm signatures in accordance with the procedures laid down in laws and regulations;

5.2) update the information to be entered in the registers kept by the Enterprise Register in the cases laid down in laws and regulations;

5.3) verify whether the name (firm name) of an enterprise (company), merchant, European economic interest grouping, representative office, association and foundation, trade union, political party, arbitrage, religious organisation and institution thereof is different from the names (firm names) entered in or applied for entering in the Enterprise Register Journal, Commercial Register, Register of European Economic Interest Groupings, Register of Representative Offices, Register of Associations and Foundations, Register of Political Parties, Register of Political Organisations (Parties), Arbitrage Register, Register of Public Organisations and Register of Religious Organisations and Institutions Thereof (hereinafter in

Sections 5, 8, 14, 18.1, 18.6, 18.14 of this Law - registers kept by the Enterprise Register);

5.4) maintain and improve the information system of the Enterprise Register and ensure its interoperability with other State information systems;

5.5) in the cases laid down in laws and regulations shall ensure access to the data maintained by the Enterprise Register to the public in online data transmission mode;

5.6) ensure transformation of registration files in electronic form for storage in electronic environment in accordance with the laws and regulations regarding management of archives;

5.7) in accordance with the procedures laid down in laws and regulations prepare and provide information from the information system of the Enterprise Register;

5.8) issue a registration certificate to the entity registered in registers kept by the Enterprise Register, if the entity has requested it in writing, as well as paid the fee laid down in laws and regulations for the services provided by the Enterprise Register;

6) perform other tasks laid down in laws and regulations.

[15 June 2006; 6 March 2008; 28 October 2010; 29 November 2012; 6 November 2013; 16 January 2014]

Section 4.1
Confirmation of the Signature of a Person

An official of the Enterprise Register shall confirm the signature of a person in the cases laid down in laws and regulations.

Prior to confirming the signature of the person, the official of the Enterprise Register shall verify the status of a natural person in the Population Register and the status of the personal identification document - in the Invalid Document Register.

The official of the Enterprise Register shall confirm the signature of a person only for natural persons registered in Latvia and the representatives of those legal persons, the rights of representation of which are registered in public registers of Latvia.

When confirming the signature of a person, the official of the Enterprise Register shall verify the identity and right of representation of the signer. The certification shall be written on the relevant document, specifying that the person has signed it or has acknowledged the signature as theirs in the presence of the official of the Enterprise Register.

The official of the Enterprise Register who certifies the signature of the person shall not assume responsibility for the content of the document.

After confirmation of the signature of the person the official of the Enterprise Register shall indicate the following in the signature certification register journal:

1) the sequence number (starting a new numeration every year);
2) the month and day when the signature of the person was certified or certification of the signature of the person was refused;
3) that the person has paid for the service;
4) the given name, surname, personal identity number of such person, the signature of which was certified, for the representative of a legal person - also the registration number, date and place of the legal person;
5) to whom and when the document was issued.

An official of the Enterprise Register may refuse to certify a signature, if the person is not of legal age, if it cannot verify its identity and authenticity of intent or also the official is not convinced regarding the identity or authenticity of intent of the person. An official of the Enterprise Register shall refuse to certify a signature, if the person is acting in contradiction to the extent of restriction of the capacity to act stipulated by the court or if the court has restricted the capacity to act for the person and it is laid down in laws and regulations that only a person who has reached legal age and whose capacity to act has not been restricted by the court is entitled to perform specific actions.

[15 June 2006; 6 November 2013; 16 January 2014]

Section 4.2
Imposing Sanctions Specified by International Organisations

On the basis of the order of a bailiff regarding imposition of sanctions specified by international organisations on a specific person, the State notary of the Enterprise Register has a duty to refuse:

1) to enter a commercial company in the Commercial Register or a European economic interest grouping - in the Register of European Economic Interest Groupings, if its founder or member is a person, to which sanctions specified by international organisations have been applied;
2) to enter a person into the Commercial Register as an individual merchant if such person has been applied the sanctions specified by international organisations;

3) to make an entry in the Commercial Register regarding amendments to partnership documents or in the Register of European Economic Interest Groupings - regarding amendments to the documents of a European economic interest grouping, if they are related to involvement of such person in the particular partnership or European economic interest group in the membership status, to which sanctions specified by international organisations have been applied;
4) to make an entry in the Commercial Register, the Register of European Economic Interest Groupings or the Enterprise Register Journal regarding the appointment of such board or council member or in the Register of Associations and Foundations - regarding the appointment of such member to an executive body or supervisory institution, to which sanctions specified by international organisations have been applied;
5) to enter a co-operative society or European co-operative society in the Enterprise Register Journal, to the founder of which the sanctions specified by international organisations have been applied.

If the sanctions specified by international organisations are applied to a person, which has gained membership status in a limited liability company, and the limited liability company submits an updated membership list to the Enterprise Register, the Enterprise Register shall append the membership list to the registration file of the limited liability company and shall inform the limited liability company and competent authorities regarding the application of the sanctions specified by international organisations to the relevant person.

If the sanctions specified by international organisations are applied to a person that has been entered in the Commercial Register - as an individual merchant, a member of the board or council of a capital company or in the Register of European Economic Interest Groupings - as a member of the board or council of a European economic interest grouping, or in the Register of Associations and Foundations - as a member of an executive body or supervisory authority, an entry regarding exclusion of such person from the register shall be made in the relevant register.

If sanctions specified by international organisations are applied to a person that has been entered into the Commercial Register as a member of a partnership, the Enterprise Register shall inform such partnership and competent authorities regarding the application of the sanctions specified by international organisations to the relevant person. If sanctions specified by international organisations are applied to a member of a partnership, which has the right of representation, the Enterprise Register shall make an entry regarding the exclusion of the right of representation of such person.

If sanctions specified by international organisation are applied to a person, regarding which an application has been submitted regarding entering in the Commercial Pledge Register or the Spousal Property Relations Register, the Enterprise Register shall make the relevant entry and inform such person and competent authorities regarding the application of the sanctions specified by international organisations. If sanctions specified by international organisations are applied to a person that has been entered into the Commercial Pledge Register or the Spousal Property Relations Register, the Enterprise Register shall inform such person and competent authorities regarding the application of the sanctions specified by international organisations.

[15 June 2006]

Section 4.3
Cross-border Merger of Capital Companies

If after the cross-border merger it is intended to register the acquiring capital company in another Member State, the Enterprise Register in accordance with the provisions of Section 14 of this Law shall examine, whether the acquiring capital company registered in Latvia has fulfilled all the activities laid down in this Law, which are required for completion of the cross-border merger, and shall issue a pre-merger certificate, if the activities laid down in this Law have been fulfilled. The pre-merger certificate shall be issued within the deadlines laid down in the Administrative Procedure Law.

If after the cross-border merger the acquiring capital company is registered in Latvia, the Enterprise Register in accordance with the provisions of Section 14 of this Law shall examine the legality of the cross-border merger in relation to the completion of the cross-border merger or the foundation of a new cross-border capital company.

If after the cross-border merger the acquiring capital company is registered in Latvia, the Enterprise Register shall without delay inform that register, in which the relevant acquired company registered in another Member State had to submit documents, regarding the coming into effect of the cross-border merger.

Within the meaning of this Section, a Member State is a European Union Member State, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway and the Principality of Liechtenstein.

[6 March 2008]

Section 4.4
Legal Basis for Making Entries

An official of the Enterprise Register shall make entries in the registers kept by the Enterprise Register, on the basis of an application of the interested person, a court adjudication or a decision of a State administrative institution. Entries, on the basis of the decision of the State administrative institution, shall be made in the event of the suspension, renewal or termination of activity for an entity.

An official of the Enterprise Register, on the basis of the information from the Population Register, has the right to update information in the registers kept by the Enterprise Register regarding natural persons (given name, surname, personal identity number), if an application or a court adjudication regarding entering of the relevant changes has not been received within the deadline specified by this Law. The Enterprise Register, on the basis of the information from the Population Register, has the right to update information regarding the death of a person in the registers kept by the Enterprise Register, without taking a special decision.

The Enterprise Register, on the basis of the information from the State Register of Addresses, has the right, without taking a special decision, to update information regarding addresses in the registers kept by the Enterprise Register, if the relevant address has been changed in accordance with the Law On Administrative Territories and Populated Areas.

An official of the Enterprise Register, on the basis of an adjudication rendered in criminal procedure, by which a person has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, as well as an adjudication rendered in criminal procedure or administrative violation procedure, by which a person has been withdrawn the right to take up specific offices, shall, in accordance with the conditions of Section 4.5 or 4.6 of this Law, make an entry in the Commercial Register or the Enterprise Register journal or take a decision to suspend the making of an entry or to refuse to make an entry in the Commercial Register or the Enterprise Register journal.

The Enterprise Register shall use data of other State information systems necessary for its operation in order to verify the correctness of the data provided thereto.

[5 March 2009; 29 November 2012; 6 November 2013]

Section 4.5
Provision of Execution of an Adjudication by which a Person has been Withdrawn the Right to Perform Commercial Activities of All Types

On the basis of an adjudication rendered in criminal procedure, by which a person has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to:

1) suspend the making of an entry in the Commercial Register, if an application regarding entering of a commercial company or a European commercial company in the Commercial Register has been submitted and the founder or member thereof, member of the executive body or supervisory body, or a proctor has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types. If a company is founded by one founder, which has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to refuse to make an entry in the Commercial Register;
2) suspend the making of an entry in the Commercial Register, if an application regarding entering of a branch of a foreign merchant in the Commercial Register has been submitted and the person who is authorised to represent the foreign merchant in activities related to the branch has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types;
3) refuse to make an entry in the Commercial Register or the Enterprise Register journal regarding appointing of a member of the executive body or supervisory body, a person who is authorised to represent a foreign merchant in activities related to the branch, a proctor or a liquidator, if the relevant person has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types;
4) refuse to make an entry in the Commercial Register regarding an individual merchant, if an application regarding entering of the individual merchant in the Commercial Register has been submitted and the relevant person has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types;
5) suspend the making of an entry in the Commercial Register or the Enterprise Register journal, if an application regarding entering of reorganisation of a commercial company or co-operative society in the Commercial Register has been submitted and a member of the executive body or supervisory thereof, or a proctor has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types;
6) suspend the making of an entry in the Commercial Register or the Enterprise Register journal, if an application regarding entering of

liquidation of a commercial company or co-operative society in the Commercial Register has been submitted and the liquidator thereof has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types;

7) suspend the making of an entry in the Enterprise Register journal, if an application regarding entering of a co-operative society or a European co-operative society in the Enterprise Register journal has been submitted and the founder thereof, a member of the executive body or supervisory, or a proctor has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types;

8) refuse to make an entry in the Enterprise Register journal, if an application regarding entering of an individual undertaking, farm or fishing undertaking in the Enterprise Register journal has been submitted and the founder thereof has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types;

9) refuse to make an entry regarding a member of a partnership, if an application regarding entering of the member of the partnership in the Commercial Register has been submitted and the relevant person has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, except the case when investment (capital) shares of the member are inherited;

10) refuse to add a participant register section to the registration file of a limited liability company, if an application regarding adding of a participant register section to the registration file has been submitted and the participant thereof has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, except the case when the fixed capital shares of the member are inherited.

If a person who has been entered in the Commercial Register as a member of the executive body or supervisory body of a commercial company or European commercial company, a liquidator or a proctor thereof, or who has been entered in the Enterprise Register journal as a member of the executive body or supervisory body of a co-operative society or a European co-operative society, a liquidator or a proctor thereof, has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, the State notary of the Enterprise Register shall make an entry in the relevant register regarding deletion of the person from the register.

If a person who has been entered in the Commercial Register as an individual merchant has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, the State notary of the Enterprise Register shall make an entry in the Commercial Register regarding suspending the economic activity of the individual merchant.

If a member of a partnership who has the right of representation has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, the State notary of the Enterprise Register shall make an entry regarding deletion of the right of representation of such person from the Commercial Register.

If an owner of an individual undertaking, farm or fishing undertaking who has the right of representation has been withdrawn the right to perform commercial activities of all types, the State notary of the Enterprise Register shall make an entry in the Enterprise Register journal regarding non-existence of the right to represent the individual undertaking, farm or fishing undertaking.

[29 November 2012; 2 May 2013]

Section 4.6
Provision of Execution of an Adjudication by which a Person has been Withdrawn the Right to Take up Specific Offices

On the basis of an adjudication rendered in criminal procedure, by which a person has been withdrawn the right to take up specific offices, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to:

1) suspend the making of an entry in the Commercial Register, if an application regarding entering of a commercial company or a European commercial company in the Commercial Register has been submitted and the member thereof, member of the executive body or supervisory body, or a proctor has been withdrawn the right to take up specific offices;
2) suspend the making of an entry in the Enterprise Register journal, if an application regarding entering of a co-operative society or a European co-operative society in the Enterprise Register journal has been submitted and a member of the executive body or supervisory body thereof or a proctor has been withdrawn the right to take up specific offices;
3) refuse to make an entry in the Commercial Register or the Enterprise Register journal regarding appointing of a member of the executive body or supervisory body, a person who is authorised to represent a foreign merchant in activities related to the branch, a proctor or a liquidator, if the relevant person has been withdrawn the right to take up specific offices;
4) suspend the making of an entry in the Commercial Register, if an application regarding entering of a branch of a foreign merchant in the Commercial Register has been submitted and the person who is authorised to represent the foreign merchant in activities related to the branch has been withdrawn the right to take up specific offices;

5) suspend the making of an entry in the Commercial Register or the Enterprise Register journal, if an application regarding entering of reorganisation of a commercial company or co-operative society in the Commercial Register has been submitted and a member of the executive body or supervisory thereof or a proctor has been withdrawn the right to take up specific offices;

6) suspend the making of an entry in the Commercial Register or the Enterprise Register journal, if an application regarding entering of liquidation of a commercial company or co-operative society in the Commercial Register has been submitted and the liquidator thereof has been withdrawn the right to take up specific offices.

If a person who has been entered in the Commercial Register as a member of the executive body or supervisory body of a commercial company or European commercial company, a liquidator or a proctor thereof, or who has been entered in the Enterprise Register journal as a member of the executive body or supervisory body of a co-operative society or a European co-operative society, a liquidator or a proctor thereof, has been withdrawn the right to take up specific offices, the State notary of the Enterprise Register shall make an entry in the relevant register regarding deletion of the person from the register.

If a member of a partnership who has the right of representation has been withdrawn the right to take up specific offices, the State notary of the Enterprise Register shall make an entry regarding deletion of the right of representation of such person from the Commercial Register.

[29 November 2012]

Section 4.7
Notification Regarding Applications Received

An official of the Enterprise Register shall send a notification to a person for a fee regarding each application received in the registration file of the entity, if the person has submitted a request for sending such notification.

An official of the Enterprise Register shall send the notification on the day when the application was received.

The essence of the application received at the Enterprise Register and the date of receipt thereof shall be indicated in the notification.

The Cabinet shall determine the type and procedures for sending a notification, as well as the amount of the fee.

[2 May 2013]

Section 4.8
Information System of the Enterprise Register

The information system of the Enterprise Register is a State information system the manager and keeper of which is the Enterprise Register.

The software of the information system of the Enterprise Register and its hardware which ensures the operation of such system are State property.

The legal entities and legal facts referred to in this Law shall be registered in electronic form, the registers laid down in this Law shall be kept, the documents laid down in the laws and regulations regarding registration of legal entities and legal facts shall be kept, as well as registration files shall be kept in the information system of the Enterprise Register.

The Enterprise Register shall ensure, with the aid of its information system, access to the information laid down in laws and regulations regarding registered legal entities and legal facts, as well as carry out other tasks laid down in this Law.

The latest (current) data shall be registered in the information system of the Enterprise Register, saving the previously registered (historical) data concurrently.

Entries in the information system of the Enterprise Register shall me made according to the legal grounds for making entries laid down in this Law.

The norms of this Law, as well as the norms which are laid down in the laws and regulations regarding registration of legal entities and legal facts in the Enterprise Register shall apply to making entries in the information system of the Enterprise Register.

[6 November 2013]

Section 4.9
Legal Status of Entries in Registers of the Information System of the Enterprise Register

Entries in registers of the information system of the Enterprise Register have public credibility, unless laid down otherwise in laws and regulations.

[6 November 2013]

Section 4.10
Rights of Persons to Use the Information of the Enterprise Register

Upon request of the Saeima, the Cabinet, State institutions of direct administration, law enforcement and control authorities and local governments, as well as upon request of other such State administration institutions, which have been laid down such rights in law, and upon request of bailiffs the En-

terprise Register shall provide the information necessary for the performance of their functions from registers free of charge, conforming to the restrictions laid down in laws and regulations. Administrators of insolvency proceedings have the right to receive the information necessary for the performance of their functions from registers free of charge to the extent laid down in the Insolvency Law.

Upon submitting a respective written application (in printed form or electronically) to the Enterprise Register, anyone has the right to request and receive information from registers, including information for re-use for commercial and non-commercial purposes. Information shall be provided, used and processed in conformity with the restrictions laid down in the laws and regulations regarding freedom of information and personal data protection and in accordance with the laws and regulations regarding registration of legal entities and legal facts in the Enterprise Register.

The Enterprise Register shall issue the derivatives existing in the registration file, if a written (also electronic) request of the interested person is received. Anyone may request a statement from the Enterprise Register regarding whether specific information has not been recorded in the registers kept by the Enterprise Register, whether it has been amended or whether specific documents have not been submitted to the Enterprise Register. The accuracy of derivatives of the documents to be issued shall be certified in accordance with the procedures laid down in laws and regulations, unless the person requesting such documents does not refuse such certification. The accuracy of an electronic derivative of printed documents shall be certified in accordance with the procedures laid down in the Electronic Documents Law. A derivative of an electronic document in printed form shall be certified in accordance with the procedures laid down in laws and regulations in such case if the person requesting the document has clearly requested the provision of such certification.

[16 January 2014]

The Enterprise Register shall provide the information referred to Paragraphs one and two of this Section (except derivatives of the documents existing in the registration file) in standardised amount and form.

The Enterprise Register may agree with the person requesting information on permanent co-operation in provision of the information at the disposal of the Register. The Enterprise Register and the person requesting information shall enter into a co-operation agreement, interdepartmental agreement or administrative contract on regular provision of information from registers kept by the Enterprise Register, including on regular issuance of updated information. An administrative contract shall be entered into without co-ordination with the institution, in which the respective administrative act may be con-

tested. The Cabinet shall determine the procedures and conditions for entering into an administrative contract.

The requester shall pay for the preparation, provision or ensuring of accessibility and use of the information in the registers kept by the Enterprise Register (except the cases laid down in Paragraphs one and four of this Section), including re-use for commercial and non-commercial purposes, in the amount laid down in the laws and regulations regarding paid services provided by the Enterprise Register.

The Cabinet shall determine the amount of information to be provided from registers, the procedures for requesting and issuing it, as well as the payment procedures for provision of information.

The Enterprise Register may refuse to carry out a request for information in the cases laid down in the laws and regulations regarding freedom of information, as well as if such requirements are not conformed to which are laid down in the laws and regulations regarding requesting and provision of information from the registers kept by the Enterprise Register.

A decision of the Chief State Notary to refuse to carry out a request for information or on action of the Enterprise Register, which has manifested as non-provision or inadequate provision of information, may be appealed in accordance with the procedures laid down in Section 19 of this Law. A judgment of the Administrative District Court may be appealed in accordance with the procedures laid down in Section 15, Paragraph two of the Freedom of Information Law.

[6 November 2013; 16 January 2014]

Section 4.11
Information to be Published on the Website of the Enterprise Register

The Enterprise Register shall ensure that the following information is available on the website of the Enterprise Register regarding entities registered in registers kept by the Enterprise Register:

1) the type of the entity;
2) the legal address;
3) the new (current) name (firm name) and previously registered (historic) name (firm name);
4) the registration number;
5) identifier of the recipient of payment of the Single Euro Payments Area (if such is assigned);
6) the registration date;

7) the date when the entity was excluded from the register (or the date of reorganisation if the reason for excluding the entity is reorganisation);
8) the term of registration of such religious organisations which perform re-registration.

The Enterprise Register shall ensure that all entries of the insolvency register laid down in the Insolvency Law, as well as the agenda of the meeting of creditors and a notification of the administrator to creditors on a meeting of creditors are available on its website free of charge.

[16 January 2014]

Section 4.12
Provision of Execution of a Legal Barrier Registered with the State Revenue Service

On the basis of a decision of the State Revenue Service to include a person in the list of risk persons, the Enterprise Register shall take a decision to:

1) refuse to make an entry in the Commercial Register if an application regarding appointing of a member of the executive body or supervisory body of a commercial company, a proctor, a liquidator or a person who is authorised to represent a foreign merchant in activities related to the branch, has been submitted and the person has been included in the list of risk persons;
2) refuse to make an entry in the Commercial Register if an application regarding entering of a member with the right to represent a partnership in the Commercial Register has been submitted and the person has been included in the list of risk persons;
3) suspend the making of an entry in the Commercial Register, if an application regarding entering of a commercial company has been submitted and its member with the right of representation, member of the executive body or supervisory body, or a proctor has been included in the list of risk persons;
4) suspend the making of an entry in the Commercial Register, if an application regarding entering of a foreign branch in the Commercial Register has been submitted and the person who is authorised to represent the branch of the merchant in activities related to the branch has been included in the list of risk persons;
5) suspend the making of an entry in the Commercial Register, if an application regarding entering of reorganisation of a commercial company in the Commercial Register or appointing of a member of its executive body or supervisory body or a proctor has been submitted

and the respective member of the executive body or supervisory body or proctor has been included in the list of risk persons;

6) suspend the making of an entry in the Commercial Register, if an application regarding entering of liquidation of a commercial company in the Commercial Register has been submitted and the respective liquidator has been included in the list of risk persons.

[6 November 2013; 16 January 2014]

CHAPTER THREE

Procedures for the Registration of an Enterprise (Company) and Information to be Entered in the Enterprise Register Journal

Section 5
Name of an Enterprise (Company)

[28 October 2010]

The name of an enterprise (company) shall be formed in accordance with this Law and the laws regarding different forms of entrepreneurial activities.

The name of an enterprise (company) may not include misleading information regarding important circumstances in the entrepreneurship, particularly regarding the legal form of the enterprise (company) or the volume of entrepreneurship.

The name of an enterprise (company) shall be written using the letters of the Latvian or Latin alphabet only. The name of an enterprise (company) may not be in conflict with morals.

The name of an enterprise (company) shall not be translated.

The name of an enterprise (company) shall be clearly and definitely different from the names (firm names) previously entered or applied for entering in the Enterprise Register Journal and other registers kept by the Enterprise Register.

The name of an enterprise (company) may not include names of State and local government institutions (authorities), as well as the words "state" and "local government". The name of an enterprise (company) may not include the words "Republic of Latvia" and its translation into a foreign language.

If the name of an enterprise (company) includes the name of an administrative territory or populated area, the name of the enterprise (company) may not coincide with the name of the relevant administrative territory or populated area, except for the names of farmsteads.

The name of an enterprise (company) may be used in entrepreneurial activity (in commercial contracts, advertising, etc.) from the moment when it has been registered in the Enterprise Register Journal.

Each registration number in the Enterprise Register Journal shall correspond to a file (document collection) with the same number. The file shall contain all the documents, on the basis of which the entry into the Enterprise Register Journal was made, as well as other documents laid down in the Law. The annual report and the documents to be attached thereto shall be kept in the file only in electronic form.

The Enterprise Register Journal shall be a document to be stored permanently.

[28 October 2010]

Section 6
Information to be Entered in the Enterprise Register Journal

The following information shall be entered in the Enterprise Register Journal regarding each enterprise (company):

1) the name, registration number and date of the enterprise (company);
2) the main type of activity and additional types of activity of the enterprise (company);
3) the term for which the enterprise (company) has been established;
4) the date when the statutes (partnership contract) of the enterprise (company) was signed;
5) the legal address of the enterprise (company);
6) upon registering a branch and a representation, the legal address of the main enterprise (company) shall be indicated;
7) the fixed capital (statutory fund), shares or the number of participation shares (co-operative shares) of an incorporated company and the nominal value thereof;
8) the given name, surname, personal identity number and nationality of the council and board members, as well as the managing directors (presidents) of the incorporated company;
9) the given name, surname, personal identity number and position held of the officials and shareholders of a partnership, who have been granted the right to sign [the right to represent the enterprise (company)];
10) [14 May 1991].

Additionally the following information has to be indicated with respect to foreign enterprises (companies), their branches and agencies to be registered:

1) the legal address outside of Latvia for the main enterprise (company);
2) the capital share planned for the performance of entrepreneurial activities in Latvia;
3) the given name, surname, personal identity number and nationality of the responsible and authorised representatives in Latvia;
4) [14 June 2001];
5) [14 June 2001].

The following information shall be entered in the Enterprise Register Journal regarding an individual enterprise and a farm:

1) the name, the given name, surname and personal identity number of the owner;
2) the legal address of the enterprise (farm);
3) the nature of the enterprise's activities;
4) the area and location of the farm;
5) the number and date of issuance of the land ownership or use deed.

In addition to that referred to in Paragraph one, Clauses 1-8 of this Section the following information shall be entered in the Enterprise Register regarding co-operative societies:

1) the right of board members to represent the co-operative society individually, jointly or jointly with a proctor;
2) the given name, surname and personal identity number of the proctor, as well as a reference to the total procuration or branch procuration, if such has been issued, and a reference to the granting of rights referred to in Section 34, Paragraph two of the Commercial Law, if such have been granted.

The following information shall be entered in the Enterprise Register regarding the suspension, renewal or termination of activities of the enterprise (company):

1) the decision by the court to appoint an insolvency proceedings administrator, indicating his or her given name, surname and personal identity number (if the person does not have a personal identity number - the date of birth, the number and date of issue of the personal identification document, the state and institution which issued the document);

2) the court judgment regarding the declaration of the insolvency proceedings for the enterprise (company) and the court judgment regarding termination of the insolvency proceedings;
3) the decision to terminate activities of the enterprise (company) and to commence liquidation thereof, as well as the given name, surname, personal identity number and the right to sign of liquidators, however, if the liquidator is a legal person - the name, registration number and legal address, as well as the abovementioned information regarding the representatives of the liquidator in the liquidation proceedings;
4) [29 November 2012];
5) the given name, surname and personal identity number of the guardians (if the person does not have a personal identity number - the date of birth, the number and date of issue of the personal identification document, the state and institution which issued the document), as well as information regarding establishment of guardianship, if the court has determined a restriction of the capacity to act to the person;
6) the decision of a State administrative institution to suspend or renew activities of the enterprise (company).

If the court, by a judgment, prohibits the enterprise (company) from operating or shuts down such enterprise or branch or representation thereof, the enterprise (company) shall apply for registration within seven days after the court judgment entering into effect.

The following information shall be entered in the Enterprise Register regarding decisive influence on the basis of participation:

1) the basis of the decisive influence;
2) the name of the dominant company and the dependent company.

The following information shall be entered in the Enterprise Register regarding decisive influence on contractual basis:

1) the type of the group of companies contract;
2) the name of the dominant company and the dependent company.

If a natural person does not have a personal identity number, the date of birth of the natural person, the number of the personal identification document and the date of issue thereof, the state and authority that has issued the document shall be entered in the Enterprise Register Journal.

The date when the amendments to basic documents were registered or when the registration entry was made in the Enterprise Register Journal shall be entered in the Enterprise register, as well as the reason for making the registration entry shall be indicated.

The Enterprise Register shall exclude enterprises (companies), their branches, divisions or representations from the Enterprise Register, making a relevant entry regarding that in the Enterprise Register Journal.

A State fee shall be paid for making of entries in the Enterprise Register Journal and registration of documents (adding to a file), and the amount, procedures for payment and relief of such fee shall be determined by the Cabinet.

[14 May 1991; 5 October 1995; 14 June 2001; 31 October 2002; 5 June 2003; 17 February 2005; 15 June 2006; 6 March 2008; 5 March 2009; 28 October 2010; 29 November 2012; 16 January 2014]

Section 7
Documents to be Submitted for Registration

An application, all the documents indicated in the Law On Entrepreneurial Activity and laws governing the forms and types of entrepreneurial activity, as well as the signature samples of the persons to whom the right to sign has been granted in the enterprise (company) and, if the founder of the enterprise (company) is a legal person registered in a foreign country, a document certifying registration of the legal person in the respective foreign country shall be submitted for registration of an enterprise (company). The signature sample of the person laid down in the law shall also be submitted on occasions when amendments are made. If a legal person registered in a foreign country becomes a shareholder of a limited liability company or partnership, a copy of the registration certificate of such person shall be attached to the documents to be submitted.

An application regarding the registration of an enterprise (company) shall be signed by all founders, except for cases where the application is signed by another person on the basis of an authorisation issued according to notarial procedures or where the founders have signed the minutes of the foundation meeting (decision to found) submitted to the Enterprise Register, in which an authorisation for another person to sign the registration application is included. The authorisation issued according notarial procedures shall be attached to the registration application.

An application regarding registration of amendments to basic documents and making of registration entries in the Enterprise Register shall be signed by officials, who have been granted the right to sign in the enterprise (company), or a person authorised by the meeting (decision), taking into account the particulars laid down in Paragraphs four and five of this Section.

The following persons have a duty to sign the registration application in person:

1) a member who discontinues membership in the company;
2) the previous owner of a single-owner enterprise, if a change of ownership has been applied for in the registration;
3) members who have taken a decision on amendments to the fixed capital;
4) members, who have taken a decision on amendments to the composition of the persons with the right to sign or to their right to sign (right of representation), except those members of companies who operate in accordance with the Law On Privatisation of Agricultural Undertakings and Collective Fisheries.

The provisions of Paragraph four of this Section shall not be applied, if:

1) the person referred to therein signs the minutes (decision) of the meeting or a derivative thereof submitted to the Enterprise Register, in which the relevant decision is included; or
2) another person signs the application instead of the referred to person on the basis of an authorisation issued in accordance with notarial procedures and this authorisation is attached to the application.

Derivatives of the documents to be submitted to the Enterprise Register have to be certified in accordance with the procedures laid down in laws and other laws and regulations. The signature samples of such persons who have been granted the right to sign in the enterprise (company), must be certified in accordance with the procedures laid down in the Law On Orphan's Courts, by a sworn notary or by an official of the Enterprise Register. The right to act of such persons shall also be certified. Public documents issued in foreign states shall be legalised accordingly, unless otherwise provided for by international agreements, attaching a notarially certified translation in the Latvian language.

When registering a branch or representation of an enterprise (company), all provisions of this Law shall be observed.

Persons, who sign the registration application or submit documents to the Enterprise Register, shall be liable for the veracity of the submitted documents and the information included therein in accordance with the procedures laid down in laws. The person submitting documents to the Enterprise Register or receiving documents from the Enterprise Register shall present his or her passport or other personal identification document.

All the documents necessary for making of an entry and other documents specified by this Law shall be submitted to the Enterprise Register in printed form or electronically. If the application is submitted electronically, the special online form available on the website of the Enterprise Register shall be used.

When registering the decisive influence, the provisions of the Group of Companies Law and of this Law shall be observed.

The person may indicate address where he or she may be reached in the application to the Enterprise Register. If the person does not have a declared place of residence according to the data of the Population Register or does not have the address indicated in the foreign country, the person shall indicate such address in the application to the Enterprise Register where he or she can be reached. The Enterprise Register shall provide information regarding the address indicated in the application upon justified request of the person requesting information.

[20 November 1997; 14 June 2001; 31 October 2002; 6 March 2008; 5 March 2009; 2 May 2013; 6 November 2013; 16 January 2014]

Section 7.1
Approval of Sample Registration Certificates and Registration Applications

Sample registration certificates and registration forms of enterprises (companies), their representations and branches, mass media, public organisations, their associations and trade unions shall be approved by the Cabinet.

[5 June 2003]

Section 8
Activities of the Enterprise Register

When examining the submitted documents, a State notary of the Enterprise Register shall examine whether:

1) the jurisdiction of the registration has been observed;
2) all the documents provided for by the laws, which are being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Enterprise Register Journal, have been submitted;
3) the documents, which are being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Enterprise Register Journal, have legal force and whether other form requirements conform to laws and regulations, as well as whether the amount of information and provisions included therein and content thereof conforms with laws and regulations and other documents in the registration file;
4) another lawful obstacle has not been registered in the Enterprise Register.

The competence of the Enterprise Register shall not include examination of the factual circumstances of the decision-making of the enterprise (company).

After examination of the conditions referred to in Paragraph one of this Section the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to:

1) make an entry in the Enterprise Register Journal or registration of documents (adding to a file), if obstacles have not been determined;
2) make an entry or postpone registration of documents (add to a file), if it is determined that the conditions of Paragraph one of this Section have not been observed, but these deficiencies can be rectified. The State notary of the Enterprise Register shall specify a reasonable period of time for rectifying the deficiencies. The abovementioned period of time shall not be less than one month. If documents, in which the deficiencies have been rectified, are submitted after the specified time period, the State fee shall be paid repeatedly;
3) refuse to register (add to a file) the submitted documents or make a registration entry in the Enterprise Register Journal, if the deficiencies determined in the documents are not rectifiable, the submitted information cannot be registered in the Enterprise Register Journal or unequivocal evidence has been submitted to the Enterprise Register, attesting to the fact that the a signature has been forged. In such cases State fee shall not be reimbursed.

The State notary of the Enterprise Register shall take a separate decision on each application and shall enter, date and sign such decision in the Enterprise Register Journal. A decision to make an entry shall come into effect at the time it is signed, unless a later date for coming into effect is specified in the decision or the coming into effect of this decision is dependent on another decision coming into effect. In such case a relevant note shall be made in the Enterprise Register Journal thereof. The date of coming into effect of the decision shall not be specified as more than one month from the day from taking of the decision. The Enterprise Register Journal may be administered in electronic form.

If the State notary of the Enterprise Register detects an error, which has occurred during the registration process, he shall inform the submitter of the application regarding the error and specify a seven day period of time for raising of objections. If objections are not raised or if the State notary of the Enterprise Register recognises the objections as unsubstantiated, he shall take a decision to correct the entry or decision. If the enterprise (company) itself has submitted a notification regarding an error in the registration process, the error may be corrected immediately.

If a non-profit-making organisation violates its statutes or makes a profit, the Enterprise Register shall, after a motivated submission from the State Revenue Service, reregister it as an enterprise or a company.

The Enterprise Register shall, not more than seven days from the day of taking the decision referred to in Paragraph four of this Section, publish in the official gazette Latvijas Vēstnesis information entered in the Enterprise Register Journal regarding the resources of the enterprise (company), if it has not already been published on the basis of other laws.

All amendments to be registered shall be notified to the Enterprise Register by enterprises (companies) within 15 days from the day of taking the decision. Amendments shall be effective against third parties from the time when they are registered in the Enterprise Register.

If the information entered in the Enterprise Register Journal has been published, it may be used as an official source.

In business relationships with an enterprise (company), branch or representation thereof the publication and the entry, which has been made by the State notary with respect to the relevant enterprise (company), branch and representation thereof, shall prevail.

A specific service fee shall be charged for document derivatives of the enterprise (company), branch and representation, fulfilment of other activities provided for in the legislation and for the issuance of information.

The activities of the Enterprise Register shall be financed from the State basic budget, as well as from the income which is obtained from paid services and is transferred to the basic budget account of the Ministry of Justice.

In verifying the circumstances specified in Section 5, Paragraph five of this Law, the State notary of the Enterprise Register is entitled to take a decision to postpone entry making in the cases when:

1) the name of an enterprise (company) coincides with a name (firm name) entered or applied for entering in the Enterprise Register Journal and other registers kept by the Enterprise Register; or
2) the only difference between the name of an enterprise (company) applied for entering and a name (firm name) already entered or applied for entering in the Enterprise Register Journal and other registers kept by the Enterprise Register is spacing and punctuation marks between the letters, figures, or the use of lower case and upper case letters in the name (firm name).

In verifying the conformity of a name applied for entering with the provisions of Section 5, Paragraph five of this Law, the State notary of the Enterprise Register shall assess the name of an enterprise (company) and the names (firm

names) registered in other registers kept by the Enterprise Register without a reference to the legal form thereof.

[14 May 1991; 7 April 1992; 5 October 1995; 30 January 1997; 11 November 1999; 14 June 2001; 31 October 2002; 5 June 2003; 17 February 2005; 15 June 2006; 6 March 2008; 28 October 2010; 2 May 2013; 6 November 2013]

Section 9
The Right of Persons to Use Information of the Enterprise Register

[6 November 2013]

Section 9.1
Restrictions on Issuance of Documents of the Enterprise Register

It is prohibited to issue journals of the Enterprise Register and the documents attached thereto for removal from premises of the Enterprise Register.

Individual documents may be withdrawn from the Enterprise Register:

1) by a court judgment;
2) as material evidence or for conducting an expert-examination in a criminal case, upon conducting pre-trial investigation;
3) by a forensic expert-examination institution for performing an expert-examination, if the expert-examination is requested from the forensic expert-examination institution by an entity registered in the Enterprise Register or a person whose rights have been or may be infringed.

If documents are removed, they shall be replaced with certified copies.

After performance of an expert-examination or adjudication of the matter at court, the withdrawn documents shall be returned immediately to the Enterprise Register.

[14 June 2001; 15 June 2006; 16 January 2014]

Section 10
Procedures for Adjudication of Disputes

[5 June 2003]

Section 11
Procedures for Compensation for the Losses Resulting from Illegal Actions of Officials of the Enterprise Register

[5 June 2003]

Section 12
Liability

[5 June 2003]

CHAPTER FOUR
Keeping of the Commercial Register

[14 June 2001]

Section 13
Jurisdiction of Registration

Merchants and their branches shall be entered in the Commercial Register according to their location in the relevant department of the Enterprise Register.

The activity territory of a department of the Enterprise Register shall be determined by the Chief State Notary of the Enterprise Register, whose order shall be published in the official gazette Latvijas Vēstnesis.

A branch of a merchant entered in the Commercial Register may also be entered in the relevant department of the Enterprise Register according to the legal address of the merchant.

Amendments to the documents of incorporation and other amendments in the Commercial Register shall be entered in the department of the Enterprise Register where the original registration was performed. These provisions shall also be applied in all cases of reorganisation.

[2 May 2013]

Section 14
Examination of the Submitted Documents

When examining the submitted documents, a State notary of the Enterprise Register shall examine if:

1) the jurisdiction of the registration has been observed;
2) all the documents provided for by the laws, which are being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Commercial Register, have been submitted;
3) the documents, which are being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Commercial Register, have legal force;
4) the form of the document, which is being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Commercial Register, conforms to that specified in laws and regulations or statutes,

if the regulatory enactment provides for a possibility of specifying a specific form of a document;

5) the amount and content of information and provisions included in the document, which is being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Commercial Register, comply with laws and regulations and other documents present in the registration file;

6) another lawful obstacle has not been registered in the Enterprise Register.

The competence of the Enterprise Register shall not include examination of the factual circumstances of the decision-making of the merchant.

If, upon examination of the circumstances referred to in Paragraph one of this Section, obstacles have not been determined, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to make the entry (Section 15) or register documents (add to the file).

If it is detected that the requirements of Paragraph one of this Section have not been observed, but these deficiencies can be rectified, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to postpone in relation to making of an entry or register documents (add to the file) and shall specify in the decision a reasonable period of time for rectification of the deficiencies. The abovementioned period of time shall not be less than one month. If documents, in which the deficiencies have been rectified, are submitted after the specified time period, the State fee shall be paid repeatedly.

In verifying the circumstances specified in Section 28 of the Commercial Law, the State notary of the Enterprise Register is entitled to take a decision to postpone entry making in the cases when:

1) the firm name applied for by a merchant coincides with a name (firm name) entered or applied for entering in the Commercial Register or other registers kept by the Enterprise Register; or

2) the only difference between the firm name applied for by a merchant and a name (firm name) already entered or applied for entering in the Commercial Register or other registers kept by the Enterprise Register is spacing and punctuation marks between the letters, figures, or the use of lower case and upper case letters in the name (firm name).

If the deficiencies determined in the documents are not rectifiable or the submitted information cannot be registered in the Commercial Register, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to refuse to register (add to the file) documents or to make an entry in the Commercial Register. In such cases the State fee shall not be reimbursed.

If unequivocal evidence has been submitted to the Enterprise Register, attesting to the fact that a signature has been forged, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to refuse to register (add to the file) documents or to make an entry in the Commercial Register.

In verifying the conformity of a firm name applied for entering with the provisions of Paragraph five of this Section, the State notary of the Enterprise Register shall assess the firm name of a merchant and the names of subjects registered in other registers kept by the Enterprise Register without a reference to the legal form thereof.

[6 March 2008; 28 October 2010; 2 May 2013]

Section 15
Making and Storage of Entries in the Commercial Register

State notaries of the Enterprise Register shall make entries in the Commercial Register electronically, taking a relevant written decision to make entries.

The decision to make an entry shall come into effect from the time when the State notary of the Enterprise Register has electronically certified the completeness and correctness of the entry (has authorised it), unless a later date for coming into effect has been provided for in the decision or the coming into effect of this decision is dependent on another decision coming into effect. In such case a relevant note shall be made in the Enterprise Register Journal.

The date of coming into effect of the decision shall not be specified as more than one month from the day of taking of the decision.

Section 16
Storage of Entries of the Commercial Register

Entries in the Commercial Register shall be stored in electronic form, and they shall have the same legal effect as the decision to make an entry.

If an entry in the Commercial Register does not conform to the decision to make an entry, the decision shall prevail.

Section 17
Documents to be Attached to the Registration File of a Merchant

The registration file of a merchant shall contain the documents, on the basis of which entries in the Commercial Register were made, as well as the other documents laid down in the law.

Section 18
Correction of Errors in Entries of the Commercial Register

If a clerical error has been determined in the entries in the Commercial Register, the State notary of the Enterprise Register shall send a notification to the legal address of the merchant, indicating:

1) what kind of error has been determined in entries in the Commercial Register;
2) how the entry in the Commercial Register will be corrected;
3) a reasonable period of time for raising an objection.

If the merchant does not raise an objection within the specified period of time, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to correct the Commercial Register entry and shall make a relevant note thereof in the entries of the Commercial Register.

The Enterprise Register shall, without delay, publish the decision to correct the Commercial Register entry in the official gazette Latvijas Vēstnesis, using its own resources.

The provisions of Paragraph one of this Section shall not be applied, if the clerical error in the Commercial Register entries have been determined by the merchant.

[2 May 2013]

CHAPTER FIVE
Keeping of the Register of Associations and Foundations

[18 March 2004]

Section 18.1
Examination of the Submitted Documents for the Keeping of the Register of Associations and Foundations

When examining the submitted documents, a State notary of the Enterprise Register shall examine if:

1) all documents provided for by the laws, which are being registered (added to a file) or on the basis of which the entry is being made in the Register of Associations and Foundations, have been submitted;
2) the documents, which are being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Register of Associations and Foundations, have legal force and if other form requirements conform to laws and regulations, as well as whether the amount and content of the information and provisions included therein conform to

laws and regulations and other documents present in the registration file;

3) another lawful obstacle has not been registered in the Register of Associations and Foundations.

The competence of the Enterprise Register shall not include examination of the factual circumstances of the decision-making of an association or foundation.

If, upon examination of the circumstances referred to in Paragraph one of this Section, obstacles have not been determined, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to make an entry (Section 15) or register documents (add to the file).

If it is determined that the requirements of Paragraph one of this Section have not been observed, but these deficiencies can be rectified, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to postpone with respect to making of an entry or registration of documents (adding to the file) (except the case when a decision must be taken to refuse to make an entry in accordance with the Associations and Foundations Law). In the decision to postpone making of an entry or register documents (add to the file) the State notary of the Enterprise Register shall specify a reasonable period of time for rectification of the deficiencies. The abovementioned period of time shall not be less than one month. If documents, in which the deficiencies have been rectified, are submitted after the specified period of time, the State fee shall be paid repeatedly.

In verifying the circumstances specified in Section 6, Paragraph three of the Associations and Foundations Law, the State notary of the Enterprise Register is entitled to take a decision to postpone entry making in the cases when:

1) the name applied for by an association or foundation coincides with a name (firm name) entered or applied for entering in the Register of Associations and Foundations or other registers kept by the Enterprise Register; or

2) the only difference between the name applied for by an association or foundation and a name (firm name) already entered or applied for entering in the Register of Associations and Foundations or other registers kept by the Enterprise Register is spacing and punctuation marks between the letters and figures, or the use of lower case and upper case letters in the name (firm name).

If the deficiencies determined in the documents are not rectifiable or the submitted information cannot be registered in the Register of Associations and Foundations, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to refuse to register (add to the file) documents or to make an entry in

the Register of Associations and Foundations. In such cases the State fee shall not be reimbursed.

If unequivocal evidence has been submitted to the Enterprise Register, attesting to the fact that a signature has been forged, the State notary of the Enterprise Register shall take decision to refuse to register (add to the file) documents or to make an entry in the Register of Associations and Foundations.

In verifying the conformity of a name applied for entering with the provisions of Paragraph five of this Section, the State notary of the Enterprise Register shall assess the firm name of the association and foundation and the names (firm names) registered in other registers kept by the Enterprise Register without a reference to the legal form thereof.

[15 June 2006; 28 October 2010; 2 May 2013]

Section 18.2
Making of Entries in the Register of Associations and Foundations

A State notary of the Enterprise Register shall make entries in the Register of Associations and Foundations electronically, taking a relevant written decision to make the entry.

The decision to make the entry shall come into effect from the time when the State notary of the Enterprise Register has electronically certified the completeness and correctness of the entry (has authorised it), unless a later date for coming into effect has been provided for in the decision or the coming into effect of this decision is dependent on another decision coming into effect. In such case a relevant note shall be made in the entries of the Register of Associations and Foundations.

The date of coming into effect of the decision shall not be specified as more than one month from the day from taking of the decision.

The State notary of the Enterprise Register shall register the decisions of competent State authorities to record a prohibition endorsement in the Register of Associations and Foundations.

Section 18.3 Storage of Entries of the Register of Associations and Foundations and the Documents to be Attached to the Registration File

Entries in the Register of Associations and Foundations shall be stored in electronic form, and they shall have the same legal effect as the decision to make an entry.

If an entry in the Register of Associations and Foundations does not conform to the decision to make an entry, the determinant shall be the decision.

The association and registration file shall contain all the documents, on the basis of which the entry into the Register of Associations and Foundations was made, as well as the other documents laid down in the Law.

Section 18.4
Correction of Errors in Entries of the Register of Associations and Foundations

If a clerical error has been detected in the entries in the Register of Associations and Foundations, a State notary of the Enterprise Register shall send a notification to the legal address of the association or foundation, indicating:

1) what kind of error has been detected in the entries in the Register of Associations and Foundations;
2) how the entry in the Register of Associations and Foundations will be corrected;
3) a reasonable period of time for raising of an objection.

If the association or foundation does not raise an objection within the specified period of time, the State notary of the Enterprise register shall take a decision to correct the entry of the Register of Associations and Foundations and shall make a relevant note thereof in the entries of the Register of Associations and Foundations.

The provisions of Paragraph one of this Section shall not be applied, if the clerical error in the entries of the Register of Associations and Foundations has been determined by the association or foundation.

CHAPTER SIX
Keeping the Register of Political Parties

[15 June 2006/ see Clause 10 of Transitional Provisions/]

Section 18.5
Provisions Applicable to the Keeping of the Register of Political Parties

The provisions of Chapter Five of this Law shall be applied to the keeping of the Register of Political Parties, if it is not provided for otherwise in this Chapter.

Section 18.6
Name of a Political Party or an Association of Political Parties

Carrying out examination of the circumstances referred to in Section 6, Paragraph one of the Law On Political Parties, the State notary of the Enter-

prise Register is entitled to take a decision to postpone entry making in the cases when:

1) the name applied for by a political party or an association of political parties clearly and definitely does not differ from the name of a political organisation (party) or an association of political organisations (parties) or abbreviation thereof previously registered in Latvia;
2) the name applied for by a political party or an association of political parties clearly and definitely does not differ from a name entered or applied for entering in the Register of Political Parties or coincides with a name (firm name) entered or applied for entering in other registers kept by the Enterprise Register; or
3) the only difference between the name applied for by a political party or an association of political parties and a name (firm name) already entered or applied for entering in other registers kept by the Enterprise Register is spacing and punctuation marks between the letters, figures, or the use of lower case and upper case letters in the name (firm name).

In verifying the conformity of a name applied for entering with the provisions of Paragraph one of this Section, the State notary of the Enterprise Register shall assess the name of a political party or an association of political parties and the names registered in other registers kept by the Enterprise Register without a reference to the legal form thereof.

[28 October 2010]

CHAPTER SEVEN
Keeping of the Insolvency Register

[8 November 2007]

Section 18.7
Documents to be Submitted to the Enterprise Register for the Keeping of the Insolvency Register

Information, on the basis of which new entries are to be made in the Insolvency Register, as well as the documents laid down in the Law On Insolvency shall be submitted to the Enterprise Register not more than within five days from the day when the relevant decision was taken or from the time of the relevant change, if it is not otherwise provided for in other laws and regulations.

An entry shall be made in the Insolvency Register on the basis of an application by the administrator, an application of the liquidator, if it fulfils the duties of an administrator in the cases provided for in the Law On Insolvency

and other laws and regulations, or a court adjudication. The Cabinet shall approve the sample application forms.

[6 March 2008]

Section 18.8
Procedures for Examination of the Submitted Documents

When examining the submitted documents, a State notary of the Enterprise Register shall examine if:

1) all the documents provided for by laws, which are being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Insolvency Register, have been submitted;
2) the documents, which are being registered (added to a file) or on the basis of which an entry is being made in the Insolvency Register, have legal force and if other form requirements conform to laws and regulations, as well as that the amount and content of the information and provisions included therein conforms to laws and regulations and other documents present in the registration file.

The competence of the Enterprise Register shall not include an obligation to verify the actual circumstances with respect to preparation of the documents submitted by an administrator and the conformity of any information indicated in decisions taken within the scope of the insolvency proceedings to the actual circumstances.

If, upon examination of the circumstances referred to in Paragraph one of this Section, obstacles have not been determined, the State notary of the Enterprise Register shall without delay, but not later than one day from the day of receiving the application, take a decision to make an entry in the Insolvency Register or register documents (add to the file). The State notary of the Enterprise Register shall, within the same time limit, take a decision to make an entry in the Insolvency Register on the basis of the adjudication of a court.

The entry shall be made in the Insolvency Register on the same day when a decision to make the entry was taken.

If it is determined that the requirements of Paragraph one of this Section have not been observed, but these deficiencies can be rectified, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision without delay, but not more than one day from the day of receiving the application regarding making of an entry or postponing to make an entry or registration of documents (adding to the file) and shall specify in the decision a reasonable period of time for rectification of the deficiencies. The abovementioned period of time shall not be less than five days.

If the deficiencies detected in the documents are not rectifiable or the submitted information cannot be registered in the Insolvency Register, the State notary of the Enterprise Register shall, within five days from the day of receiving the application, take a decision to refuse to register (add to the file) documents or to make an entry in the Insolvency Register.

The Enterprise Register shall send the decisions referred to in Paragraphs three, five and six of this Section to the submitter of the application within five days from the day they were taken.

If unequivocal evidence has been submitted to the Enterprise Register, attesting to the fact that a signature has been forged, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to refuse to register (add to the file) documents or to make an entry in the Insolvency Register.

Section 18.9
Information to be Entered in the Insolvency Register

A State notary of the Enterprise Register shall enter information regarding the administrator, the insolvent entity, the progress of legal protection proceedings, insolvency proceedings of a legal person or insolvency proceedings of a natural person.

Section 18.10
Storage of Entries in the Insolvency Register

Entries in the Insolvency Register shall be stored in electronic form, and they shall have the same legal effect as the decision to make an entry.

If an entry in the Insolvency Register does not conform to the decision to make the entry, the decision shall prevail.

An insolvency registration file shall contain all the documents, on the basis of which entries were made in the Insolvency Register, as well as the other documents laid down in law. The documents to be attached to the insolvency registration file shall be stored in the registration file of the relevant insolvent entity.

[6 March 2008]

Section 18.11
Correction of Errors in Entries of the Insolvency Register

If a clerical error has been determined in entries in the Insolvency Register, the State notary of the Enterprise Register shall send a notification to the legal address of the practice of the administrator, indicating:

1) what kind of error has been determined in entries of the Insolvency Register;

2) how the entry in the Insolvency Register will be corrected;

3) a reasonable period of time for raising of an objection.

If the administrator does not raise an objection in the specified period of time, the State notary of the Enterprise register shall take a decision to correct the entry of the Insolvency Register and shall make a relevant note thereof in the entries of the Insolvency Register.

The provisions of Paragraph one of this Section shall not be applied, if the clerical error in the entries of the Insolvency Register has been determined by the administrator or court or in the event if the determined error is obvious.

CHAPTER EIGHT
Keeping of the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof

[18 December 2008]

Section 18.12
Jurisdiction of the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof

Religious organisations and institutions thereof shall be registered by Riga Regional Department of the Enterprise Register.

Section 18.13
Documents to be Submitted to the Enterprise Register for the Keeping of the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof

Information, on the basis of which entries are to be made in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof, as well as the documents specified in the Law On Religious Organisations shall be submitted to the Enterprise Register not later than within 14 days after the relevant decision was taken.

An entry in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof shall be made on the basis of an application, the notification laid down in Section 1.2 of the Law On the Agreement between the Republic of Latvia and the Holy See (hereinafter-notification) or a court judgment. The Cabinet shall approve the sample application and notification forms.

[16 January 2014]

Section 18.14
Making of an Entry in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof

A State notary of the Enterprise Register shall, within two months from the day when the application was received, take a decision to enter a religious organisation and institutions thereof in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof. The State notary of the Enterprise Register shall, within seven days after receipt of the application or notification, take a decision to make another entry, to refuse to make an entry or to postpone making of an entry in the Register. The State notary of the Enterprise Register shall, within the same time limit, take a decision to make an entry in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof on the basis of the adjudication of a court.

The State notary of the Enterprise Register shall take a decision to postpone entry making in the cases when:

1) not all documents specified in the Law On Religious Organisations have been submitted;
2) the statutes (constitution, regulations) or other documents submitted to the Enterprise Register contain non-compliances with the requirements of laws and regulations that can be rectified;
3) another lawful obstacle has been registered in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof;
4) the name applied for by a religious organisation or institution thereof includes misleading information regarding the legal form, purpose and type of activity of the religious organisation or institution thereof;
5) the name applied for by a religious organisation or institution thereof clearly and definitely does not differ from the names entered or applied for entering in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof or coincides with a name (firm name) entered or applied for entering in other registers kept by the Enterprise Register;
6) the only difference between the name applied for by a religious organisation or institution thereof and a name (firm name) already entered or applied for entering in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof and other registers kept by the Enterprise Register is spacing and punctuation marks between the letters, figures, or the use of lower case and upper case letters in the name (firm name);
7) the notification does not conform to the requirements of laws and regulations.

The State notary of the Enterprise Register shall take a decision to refuse to make an entry, if:

1) the objectives and tasks set out in statutes (in the constitution, in a by-law) are in conflict with laws and regulations;
2) an opinion has been received from the Ministry of Justice that there are grounds for believing that the activity (teachings) of the religious organisation is in conflict with laws and regulations or threaten human rights, the democratic structure of the State, public safety, welfare and morals;
3) the procedures for founding specified in the Law On Religious Organisations have been contravened;
4) the non-compliances of the provisions of laws and regulations referred to in a decision to postpone making of an entry have not been rectified.

The decision to postpone making of an entry or to refuse to make an entry shall be justified. The time period for the rectification of deficiencies shall be indicated in a decision to postpone making of an entry.

The State notary of the Enterprise Register shall send the submitter of the application the decision to make the entry within three working days of receipt thereof.

Any entry shall be made in the Register on the same day when a decision to make the entry was taken.

In verifying the conformity of a name applied for entering with the provisions of Paragraph two of this Section, the State notary of the Enterprise Register shall assess the name of a religious organisation or institution thereof and the names (firm names) registered in other registers kept by the Enterprise Register without a reference to the legal form thereof.

The competence of the Enterprise Register shall not include examination of the factual circumstances of the decision-making of a religious organisation or institution thereof.

[28 October 2010; 16 January 2014]

Section 18.15
Registration Number and Registration File of a Religious Organisation or Institution

A religious organisation or institution thereof, which is entered in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof, shall be assigned a registration number.

[16 January 2014]

The documents submitted to the Enterprise Register shall be stored in the file of the relevant religious organisation or institution thereof.

[16 January 2014]

Section 18.16
Correction of Errors in Entries of the Register of Religious Organisations or Institutions Thereof

If a clerical error has been detected in the Register of Religious Organisations and Institutions Thereof, a State notary of the Enterprise Register shall send a notification to the legal address of the religious organisation or institution thereof, indicating:

1) what kind of error has been detected in entries in the register;

2) how the entry in the register will be corrected;

3) a reasonable period of time for raising of an objection.

If a religious organisation or institution thereof does not raise an objection within the period of time specified, the State notary of the Enterprise Register shall take a decision to correct entries of the religious organisation or institution thereof and shall make a relevant note thereof in the entries of the register.

The provisions of Paragraph one of this Section shall not be applied if the clerical error in entries of the religious organisation or institution thereof has been determined by the religious organisation or the institution thereof itself.

CHAPTER NINE
Final Provisions

[18 December 2008]

Section 19
Procedures for Contesting and Appealing the Decisions and Actions of State Notaries of the Enterprise Register

The decisions and actions of State notaries of the Enterprise Register of the Republic of Latvia may be contested in accordance with the procedures laid down in law by submitting a relevant submission to the Chief State Notary of the Enterprise Register of the Republic of Latvia. The Chief State Notary of the Enterprise Register shall take a decision within one month from the submission of an application. If due to objective reasons it is not possible to comply with the referred to deadline, the Chief State Notary of the Enterprise Register may extend it according to the procedures specified in the Administrative Procedure Law. Contesting of a decision of a State notary of the Enterprise Register or appealing a decision of the Chief State Notary of the Enterprise

Register, shall not suspend the application thereof. The decisions and actions of the Chief State Notary of the Enterprise Register of the Republic of Latvia may be appealed to a court in accordance with the procedures laid down in law.

[15 January 2004; 6 March 2008; 5 March 2009]

Section 20
Liability of Officials of the Enterprise Register

State notaries and other officials of the Enterprise Register shall be liable for violations of this Law in accordance with the procedures specified by this Law.

If it has been recognised in accordance with laws and other laws and regulations that the action of an Enterprise Register official has been illegal and such action has resulted in losses to an enterprise (company), merchant or group of companies, they shall be compensated.

Section 21
Liability

The responsible official of the Enterprise Register shall propose to hold the guilty persons liable in accordance with law for non-submission to the Enterprise Register of the information or documents laid down in the laws and regulations regarding enterprises (companies), merchants, European economic interest groupings, European commercial companies or European cooperative societies within the specified deadline or non-fulfilment of legal decisions of officials of the Enterprise Register within the specified deadline, or incomplete fulfilment or provision of false information.

The relevant persons shall be held liable in accordance with the law for non-submission of the information or documents specified in the Associations and Foundations Law or the Law On Political Parties within the time period laid down in the law, for non-provision of information upon the request of officials of the Enterprise Register, in accordance with the procedures laid down in the law, as well as for the provision of false information regarding associations or foundations, political parties, or their associations.

[28 October 2004; 15 June 2006]

Section 22
Exemption from Payment of Court Fees

The Enterprise Register shall be exempted from payment of court fees if it is bringing an action regarding the liquidation, termination of operation or recognition of nullity of an enterprise (company) or commercial company, as

well as in cases when the Enterprise Register brings an action in the interests of such person, which has been declared as insolvent.

TRANSITIONAL PROVISIONS

[30 January 1997]

1. Signature samples of such persons, who have been granted the right to sign in an enterprise (company), shall be replaceable with signature samples certified in accordance with the procedures laid down in the law, which by 31 December 1997 shall be submitted to the Enterprise Register similarly as diazo transparency copies of shareholder (stockholder) passports or registration certificates. If during this time period amendments to the basic documents of the enterprise (company) are submitted to the Enterprise Register, concurrently certified signature samples and diazo transparency copies of passports or registration certificates shall also be submitted.
2. [14 June 2001].
3. Amendments to Section 9, Paragraph one of this Law regarding the right of bailiffs to receive information free of charge from the Enterprise Register shall apply starting from 1 January 2003.

   [31 October 2002]
4. Until the day of coming into force of the Administrative Procedure Law the word "sūdzību" (complaint) shall be used instead of the word "iesniegumu" (submission) in Section 19 of this Law.

   [5 June 2003]
5. The provisions of this Law regarding registration of European economic interest groupings and their associated activities shall come into force on 1 May 2004.

   [18 March 2004]
6. Until the day of coming into force of the relevant law the Enterprise Register shall perform registration of individual enterprises and farming and fishing enterprises, to which the norms of this Law regarding registration of enterprises (companies) are applicable. The norms of this Law regarding registration of enterprises (companies) shall also be applicable to co-operative societies.

   [17 February 2005]
7. Provisions of this Law, which determine the function of the Enterprise Register to perform arbitrage registration (Section 1, Clause 1 and Section 2.13), shall apply starting from 1 April 2005.

   [17 February 2005]

8. Provisions of this Law, which determine the function of the Enterprise Register - to perform registration of European co-operative societies (amendments to Section 1, Clause 1, new revision of Section 2.15 and amendments to Section 21, Paragraph one) shall apply from 18 August 2006.

   [15 June 2006]

9. Section 4.2 of this Law shall come into force on 1 January 2007.

   [15 June 2006]

10. The norms of this Law, which determine the function of the Enterprise Register - to keep the Register of Political Parties (amendments to Section 1, Clause1, amendments to Section 2.2, the new revision of Section 2.14, the new Chapter Six, amendments to Section 21, Paragraph two), shall come into force concurrently with the Law On Political Parties.

    [15 June 2006]

11. The norms of this Law, which lay down the right of a person to receive information electronically from the Enterprise Register Journal and the documents present in the registration file of an enterprise (company), shall be applied to the information that has been registered in the Enterprise Register Journal after 1 January 1997.

    [6 March 2008]

12. The Enterprise Register shall, not later than until 20 November 2009, without taking a separate decision, include in the Register of Public and Partnership Contracts the entries of the Register of Concession Contracts which, pursuant to the Concessions Law, had been made prior to the day of coming into force of the Public and Private Partnership Law.

    [15 October 2009]

13. If a decision to transfer concession resources by way of concession has been taken and conditions for granting of concession have been approved pursuant to the provisions of the Concessions Law, the Enterprise Register shall register a concession contract in the Register of Public and Partnership Contracts, applying the provisions of the Public and Private Partnership Law for the registration.

    [15 October 2009]

14. The norms of this Law which regulate formation of a name (firm name) and lay down that a name (firm name) applied for registration may not coincide with a name (firm name) applied for entering or entered in the registers kept by the Enterprise Register (supplemen-

tation of Section 4 with Paragraph 5.3, the new revision of Section 5, supplementation of Section 8 with Paragraphs fifteen and sixteen, the new revision of Section 14, Paragraph five and supplementation of the Section with Paragraph eight, the new revision of Section 18.1, Paragraph five and supplementation of the Section with Paragraph eight, the new revision of Section 18.6, Clauses 2 and 3 and supplementation of the Section with Paragraph two, the new revision of Section 18.14, Paragraph two, Clauses 4 and 5 and supplementation of the Paragraph with Clause 6, as well as supplementation of the Section with Paragraphs 7 and 8) shall come into force on 1 December 2010.

[28 October 2010]

15. The amendments to Sections 5, 8, 14, 18.1, 18.6 and 18.14 of this Law regarding the difference of a name (firm name) from the names (firm names) entered or applied for entering in the registers kept by the Enterprise Register shall not affect the right of the subjects of rights to the name (firm name) which has been entered or applied for entering in the relevant register until 30 November 2010.

[28 October 2010]

16. Section 4.7 of this Law shall come into force on 1 January 2014.

[2 May 2013]

17. Amendments to Section 6, Paragraph one, Clauses 8 and 9, Paragraph two, Clause 3, Paragraph three, Clause 1 and Paragraph five, Clause 3 of this Law laying down that information regarding the place of residence of a person is not information to be entered in the Enterprise Register Journal shall come into force on 1 April 2014.

[16 January 2014]

18. Starting from 1 April 2014 when amendments to Section 6, Paragraph one, Clauses 8 and 9, Paragraph two, Clause 3, Paragraph three, Clause 1 and Paragraph five, Clause 3 of this Law laying down that information regarding the place of residence of a person is not information to be entered in the Enterprise Register Journal come into force, an official of the Enterprise Register, without taking a separate decision, shall make an entry in the Enterprise Register Journal regarding exclusion of such information from the Enterprise Register Journal which contains information regarding the place of residence of a person.

[16 January 2014]

19. Amendments to Section 6, Paragraph five, Clause 5 of this Law regarding establishment of guardianship shall come into force on 1 september 2014.

    [16 January 2014]

20. Until 1 October 2014 the Enterprise Register, without taking a separate decision, shall update the information entered in the Enterprise Register Journal until 31 August 2014, replacing the given name and surname of the guardian with information regarding establishment of guardianship.

    [16 January 2014]

21. The Enterprise Register shall, on 17 February 2014, assign the identifier of the recipient of payment of the Single Euro Payments Area to each entity registered in registers kept by the Enterprise Register which has been registered thereby as a taxpayer in accordance with the laws and regulations governing the field of taxes until 16 February 2014 (except such entities operation of which has been terminated in accordance with the procedures laid down in laws and regulations), without taking a separate decision thereon. Entries in which the name, registration number of the respective entity and the identifier of the recipient of payment of the Single Euro Payments Area is indicated shall be published free of charge in a single publication in the official gazette Latvijas Vēstnesis, if publishing of entries is provided for in laws and regulations.

    [16 January 2014]

22. Amendments regarding exclusion of Section 2.9, as well as amendments to Section 4, Clause 5.3 of this Law in relation to exclusion of verification of the name (firm name) of the entity and it being different from the names entered or applied for entering in the register of trade unions shall come into force concurrently with the coming into force of the Law On Trade Unions.

    [16 January 2014]

INFORMATIVE REFERENCE TO EUROPEAN UNION DIRECTIVES

[6 March 2008; 16 January 2014]

This Law contains legal norms arising from:

1) Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 september 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second

paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent;

2) European Parliament and Council Directive 2005/56/EC on cross-border mergers of limited liability companies.

Chairperson of the Supreme Council of the Republic of Latvia A. Gorbunovs
Secretary of the Supreme Council of the Republic of Latvia I. Daudišs
Riga, 20 November 1990

PORTUGAL
CRÓNICA NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL DE PORTUGAL (2013-1015)

Salvador Tarodo Soria
Universidad de León

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN. 2. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2001, DE LIBERTAD RELIGIOSA. **2.1.** Sentencia del Tribunal Constitucional portugués C 544/2014, que interpreta el artículo 14.1, párrafos a y c de la Ley 16/2001, de Libertad Religiosa. **2.2.** Ordenanza 298/2013, de 4 de octubre, que interpreta el artículo 32 de la Ley 16/2001, de Libertad Religiosa. 3. LEY 19/2013, DE 21 DE FEBRERO, QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL. 4. NORMATIVA DE DESARROLLO DEL CONCORDATO ENTRE EL ESTADO PORTUGUÉS Y LA SANTA SEDE, DE 18 DE MAYO DE 2004 (INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN: RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA Nº 74/2004, DE 16 DE NOVIEMBRE). **4.1.** Ley 19/2015, de 3 de febrero, que crea el Registro de Personas Jurídico-Canónicas. **4.2.** Decreto-Ley 70/2013, de 23 de mayo, que establece el régimen jurídico de la enseñanza y organización de la asignatura de Educación Moral y Religiosa Católica (EMRC), en los establecimientos públicos de enseñanza básica y secundaria. ANEXOS.

1. INTRODUCCIÓN

Por su relevancia, he seleccionado una sentencia del Tribunal Constitucional y cuatro iniciativas normativas, aunque durante el período analizado se han aprobado algunas normas más que indirectamente podrían afectan al ejercicio de pensamiento, conciencia y religión. Las he clasificado en tres grupos.

En primer lugar, abordaré una Sentencia del Tribunal Constitucional y una Ordenanza, que interpretan y desarrollan, respectivamente, sendos artículos de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*. La Sentencia del Tribunal Constitucional 544/2014 interpreta los apartados a) y c) del artículo 14.1, que establece los requisitos de dispensa de trabajo por motivos religiosos, y la Ordenanza 298/2013, que establece el procedimiento que

deben observar las entidades previstas en los apartados 4 y 6 del artículo 32, para beneficiarse de cuotas tributarias o exenciones fiscales.

En segundo lugar, me referiré a las novedades introducidas por la *Ley 19/2013, de 21 de febrero, que modifica el Código penal*, que afectan a la protección penal del derecho de libertad de conciencia.

Finalmente, haré referencia a dos normas que desarrollan dos aspectos, la creación del Registro de Personas Jurídico-Canónicas y el régimen jurídico de la enseñanza y organización de la asignatura de Educación Moral y Religiosa Católica (EMRC) en los establecimientos públicos de enseñanza básica y secundaria, del vigente *Concordato entre el Estado Portugués y la Santa Sede de 2004*.

2. JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y NORMATIVA DE DESARROLLO DE LA LEY 16/2001, DE LIBERTAD RELIGIOSA

Estudiaré, por orden de relevancia: (1) la *Sentencia del Tribunal Constitucional portugués C 544/2014*, que interpreta el artículo 14.1, párrafos a) y c), de la *Ley 16/2001 de Libertad Religiosa*, que establecen los requisitos que debe cumplir un trabajador para ejercitar el derecho a modular su horario de trabajo para cumplir con sus obligaciones religiosas; y, (2) la *Ordenanza 298/2013*, que establece el procedimiento que deben observar las entidades previstas en los números 4 y 6 del artículo 32 de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*, para poder beneficiarse de la consignación de la cuota equivalente al 0,5% del Impuesto sobre la renta de las personas singulares (IRS) liquidado y, en el caso de las personas colectivas religiosas, de los donativos de las personas singulares.

2.1. *Sentencia del Tribunal Constitucional portugués C 544/2014, que interpreta el artículo 14.1, párrafos a y c de la Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*

La Sentencia 544/2014 es de extraordinaria importancia, tanto por su contenido material, que defiende la aplicación de la técnica de la *acomodación razonable* (*reasonable accommodation*) al ejercicio del derecho de libertad religiosa en el ámbito laboral (& 8.4), como por la forma de interpretar la configuración constitucional del derecho de libertad religiosa,

que partiendo de la Constitución portuguesa, no solo analiza la protección regional e internacional del derecho a la libertad religiosa, sino que incorpora también la denominada protección constitucional transnacional, en aplicación del artículo 53 CDFUE, con la finalidad de encontrar en el plano interno de cada Estado la tutela más amplia y la solución más favorable a la mayor eficacia del derecho fundamental que se trata de aplicar, en este caso la libertad religiosa (& 8.3).

La cuestión se centra en la interpretación del artículo 14 de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*, que establece los requisitos para que los funcionarios, empleados públicos y trabajadores con contrato, tengan derecho a suspender su trabajo por motivos religiosos en el día de descanso semanal, las festividades y los horarios prescritos por las confesiones que profesan[1]. De los tres requisitos previstos en la norma, el b) ser miembros de una iglesia o comunidad religiosa inscrita que hubiera enviado en el año anterior a los miembros del Gobierno competente en razón de la materia los referidos días y períodos horarios del año en curso, se revela, en este caso, irrelevante, pues la decisión no depende de su aplicación. Las sucesivas instancias judiciales, ponen el foco, por tanto, en el análisis de si en el caso planteado se cumplen los requisitos a) trabajar en régimen de flexibilidad de horario, y c) que haya una compensación integral del respectivo trabajo. Detrás de esta cuestión, de alcance aparentemente

---

[1] Artigo 14º: "Dispensa do trabalho, de aulas e de provas por motivo religioso
1.– Os funcionários e agentes do Estado e demais entidades públicas, bem como os trabalhadores em regime de contrato de trabalho, têm o direito de, a seu pedido, suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam, nas seguintes condições:
a) Trabalharem em regime de flexibilidade de horário;
b) Serem membros de igreja ou comunidade religiosa inscrita que enviou no ano anterior ao membro do Governo competente em razão da matéria a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso;
c) Haver compensação integral do respectivo período de trabalho.
2.– Nas condições previstas na alínea b) do número anterior, são dispensados da frequência das aulas nos dias de semana consagrados ao repouso e culto pelas respectivas confissões religiosas os alunos do ensino público ou privado que as professam, ressalvadas as condições de normal aproveitamento escolar.
3.– Se a data de prestação de provas de avaliação dos alunos coincidir com o dia dedicado ao repouso ou ao culto pelas respectivas confissões religiosas, poderão essas provas ser prestadas em segunda chamada, ou em nova chamada, em dia em que se não levante a mesma objecção".

limitado, se esconden, como veremos, importantes consecuencias en orden a dotar de la mayor eficacia al derecho de libertad religiosa.

La STC 544/2014 analiza el recurso presentado por la trabajadora N.S. contra sentencia del *Tribunal de Apelación de Lisboa*[2], que confirma otra sentencia previa del *Tribunal de Trabajo de Loures*[3], que declaraba improcedente la impugnación judicial de la regularidad y licitud del despido de la trabajadora N.S. por parte de la empresa CODAN Portugal - Instrumentos médicos S.A.

El caso tiene su origen en la pretensión de N.S. de acogerse al artículo 14 de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*, para rechazar la prestación de su actividad laboral desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, lo que se traduce en el incumplimiento de su horario integral de trabajo los viernes cuando su turno de trabajo terminaba a las 24:00 y en la imposibilidad de prestar trabajo suplementario los sábados, cuando así era solicitado por la empresa demandada. Tras reiterados incumplimientos, la trabajadora es despedida, ante lo que presenta demanda por despido improcedente.

El *Tribunal de Trabajo de Loures* desestimó la demanda al entender que en este caso concreto no se cumplían dos de las condiciones de las establecidas por el artículo 14.1 de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*: a) trabajo en régimen de flexibilidad de horario y c) la compensación integral del respectivo período de trabajo. El Tribunal sostiene una interpretación muy restrictiva del *trabajo en régimen de flexibilidad horaria*[4], dentro del que no cabe incluir el *trabajo por turnos* que, en el caso objeto de análisis, era el que venía desempeñando la trabajadora. Aprovecha el Tribunal para subrayar que, a su juicio, los requisitos establecidos por el artículo 14 de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*: "tienen en común el propósito

---

2 *Sentencia del Tribunal da Relação de Lisboa, de 15/12/2011, folios 417 a 440.*

3 *Sentencia del Tribunal do Trabalho de Loures (2º Juízo), de 19 de junio de 2011, folios 245 a 287.*

4 "El trabajador prestará su actividad en régimen de flexibilidad de horario cuando, en interés de la entidad empleadora —basado en la organización de su funcionamiento, porque de ese modo proporciona una obtención de utilidad de fuerza de trabajo a disposición de aquella— haya sido establecido un esquema en que aquella prestación, conteniéndose en los límites legales del período normal de trabajo, pueda tener hora variable de entrada y salida, dependiendo tal de determinadas circunstancias o condiciones o siendo elegida por el trabajador, pero en cualquier caso dirigida a una mejor eficacia de su prestación" (traducción libre).

de limitar el perjuicio resultante del ejercicio del derecho por parte del trabajador para la actividad y utilización de los recursos humanos por la entidad empleadora. Se procura salvaguardar el derecho del trabajador, pero sin que su ejercicio imponga un perjuicio injustificado y desproporcionado para la entidad empleadora". Así, en la motivación del proyecto que dio origen a la Ley, recuerda el Tribunal, "se procura compatibilizar ambos derechos, en caso de conflicto".

N.S. interpuso recurso ante el *Tribunal de Apelación de Lisboa*, alegando la inconstitucionalidad del artículo 14 por violación de los principios de proporcionalidad e igualdad y por inexistencia de justa causa en el despido. El Tribunal confirma la sentencia recurrida, apoyándose fundamentalmente en tres argumentos: (1) el artículo 14 de la Ley de libertad religiosa no es inconstitucional, (2) el trabajo en régimen de dos turnos rotativos no puede considerarse integrado en el concepto de trabajo en régimen de flexibilidad horaria (art. 14.1.a); y (3) el comportamiento de la trabajadora constituye justa causa de despido, pues causa perjuicios considerables a su entidad empleadora (& 4.2).

La libertad religiosa, argumenta el Tribunal, lejos de ser un derecho absoluto, está sujeta a las restricciones necesarias para salvaguardar otros derechos o intereses constitucionalmente protegidos. Y uno de esos intereses constitucionalmente protegidos es la libertad de organización empresarial (art. 80 CRP) y, manifestación de éste, el poder de dirección, que incluye como corolario, establecer, dentro de los límites legales y la reglamentación colectiva en vigor, el horario de trabajo, como uno de los instrumentos a su alcance con vistas a una correcta organización técnico-productiva. La normativa, por tanto, persigue en el caso de la regulación del descanso semanal, alcanzar el necesario equilibrio entre el derecho de libertad religiosa y los legítimos derechos de la entidad empleadora. Las condiciones establecidas en el artículo 14 de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*, no establecen, concluye el Tribunal, una desproporción entre los intereses en potencial conflicto.

El *Tribunal de Apelación de Lisboa* considera que el ejercicio del derecho a la dispensa del horario de trabajo por motivos religiosos solo puede ser invocado por trabajadores a los que sea aplicable un régimen de horario flexible (art. 14.1.a), considerando la existencia de esta circunstancia indispensable para entrar a considerar el tercero de los requisitos, la compensación integral por parte del trabajador del periodo de trabajo que se

viera afectado por la suspensión (art. 14.1.c). En la aplicación del requisito de *flexibilidad de horario*, el Tribunal interpreta, secundando al Tribunal de 1ª Instancia, que el horario flexible únicamente se da en aquellos regímenes de organización del tiempo de trabajo en los que se delimita un periodo de presencia obligatoria del trabajador, junto a la posibilidad de escoger por parte de este, dentro de ciertos márgenes, las horas de entrada y salida.

El caso llega, finalmente, al Tribunal Constitucional que dicta la Sentencia objeto de estudio. Tras relatar los antecedentes (&1-4) y definir el objeto del recurso (&5), el Tribunal entra en el fondo del asunto (& 6-8). Primero, describe las bases normativas nacionales, regionales e internacionales del derecho de libertad de conciencia, religión y culto (& 6); para, en segundo lugar, ofrecer una configuración de los aspectos básicos del mismo, que le permiten determinar cuáles de estos se ven afectados en el caso objeto de análisis (& 7); finalmente, ofrece sus argumentos y adopta la decisión (& 8), concediendo la apelación al recurso y revocando la sentencia del Tribunal de Apelación de Lisboa recurrida. Se trata de una sentencia de carácter interpretativo, al abrigo de lo dispuesto en el art. 80.3 de la Ley del Tribunal Constitucional. El Tribunal entiende que la interpretación restrictiva que hacen las instancias anteriores de los mencionados apartados a) y c) del artículo 14.1 de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*, conlleva una inadmisible restricción desproporcionada de la libertad de religión consagrada en el artículo 41 de la Constitución de la República Portuguesa y defiende una interpretación que incluya dentro del concepto de *horario flexible*, el *trabajo en régimen de turnos* (& 8.4). En consecuencia, revoca la sentencia recurrida y devuelve el caso a la instancia anterior para que sea reformada de modo que aplique las referidas normas con este sentido interpretativo (*Decisión*).

Los argumentos del Tribunal toman como punto de partida el artículo 41 de la Constitución de la República de Portugal (CRP), garante de la *libertad de conciencia, religión y culto* en cuanto derecho fundamental (& 7), según la Corte Constitucional "uno de los núcleos más relevantes de los derechos fundamentales", calificado por el propio texto constitucional como "inviolable". Continúa el Tribunal analizando sucintamente la relación existente entre los tres términos conciencia, religión y culto que aparecen en el artículo 41 CRP, aclarando que con independencia de que sea "un solo derecho o un complejo de derechos que sea, desde cierto prisma, configurarse unitariamente" (& 7), conviene deslindar "la libertad

de conciencia —indisociable de la libertad de pensamiento—, que es la libertad de formar la conciencia, de decidir en conciencia y de actuar en conciencia. Y se revela más amplia que la libertad de religión, pues tiene por objeto tanto las creencias religiosas como cualesquiera convicciones morales y filosóficas" (& 7). En contrapartida, añade el Tribunal, la libertad de conciencia solo pide respeto al foro individual, mientras que la libertad de religión posee una fuerte dimensión colectiva e institucional, traducida en la libertad de las confesiones religiosas (& 7). En cuanto a la libertad de culto, no es sino una de las componentes de la libertad de religión (& 7).

Continúa el Tribunal aclarando que "corresponde ahora, sin perjuicio de lo que queda expuesto, encuadrar el derecho invocado en la libertad de religión, cuya alegada violación motiva el presente recurso de constitucionalidad" (& 8) y analizando las dimensiones asociadas a la protección constitucional de la *libertad religiosa*, que resume en las duplas: negativa —positiva; individual— colectiva (o institucional); y, subjetiva-objetiva (& 8.1).

Y, una vez encuadrado, comienza el Tribunal analizando la *doble dimensión negativa-positiva* de la libertad religiosa, poniendo de relieve que "sobresale en el artículo 41 de la Constitución una vertiente garantista de este derecho fundamental, colocado, como ya se ha dicho, a la par de la libertad de conciencia y de la libertad de culto, protegido de injerencias que puedan afectar —siendo por tanto vedado al Estado imponer o prohibir profesar una creencia— y extendiéndose la protección constitucional de la libertad religiosa a un deber del Estado de garantizar las condiciones para que la libertad sea ejercida, permitiendo o propiciando a quien quiere seguir una determinada religión el cumplimiento de los deberes que de ella derivan" (& 8.1.1). Más adelante en los argumentos del Tribunal será determinante esta dimensión positiva de la que se desprende un deber del Estado de garantizar las condiciones para que quienes profesen una determinada religión, puedan cumplir los deberes que de ella derivan y que ofrece una protección más amplia que la mera prohibición de no discriminación, criterio, éste último, que es el empleado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al determinar el estándar mínimo europeo de protección del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en el ámbito de las relaciones laborales.

Junto a estas dos dimensiones, existen también las *dimensiones individual y colectiva (o institucional)* de la libertad religiosa, de las que deriva que "la tutela constitucional de esta libertad implique no solo su ejercicio individual, sino también colectivo, comprendiendo una dimensión institucional de los derechos de las iglesias o confesiones religiosas" (& 8.1.2).

Es posible, finalmente, distinguir "una *dimensión objetiva y una dimensión subjetiva* de la libertad religiosa [...]. En términos objetivos, por un lado, la Constitución exige de los poderes públicos la neutralidad en materia religiosa, en un Estado laico y no confesional, como expresión del principio de separación entre las iglesias y otras comunidades religiosas y el Estado (art. 41.4 CRP)" (& 8.1.3); mientras que "en su vertiente subjetiva, la libertad de religión es consagrada como derecho fundamental, en la parte dedicada en el texto constitucional a los derechos, libertades y garantías, precisamente en el artículo 41.1 de la Constitución. Beneficiada, en cuando libertad fuerte, del régimen material de los derechos, libertades y garantías, previsto en el artículo 18 de la Constitución, resultando de aquí la aplicabilidad directa del artículo 41.1, y la vinculación de las entidades públicas y privadas a la libertad religiosa (art. 18.1 CRP), y, además, la observancia de un régimen restrictivo y garantista en cuanto a las restricciones eventualmente operadas por el legislador —y a este, en cualquier caso, reservadas (art. 18.2 y 3 CRP)—. Especialmente fuerte —subraya el Tribunal— pues no es susceptible de afectación (suspensión) en el caso de declaración de estado de sitio o de emergencia (art. 19.6 CRP)" (& 8.1.3).

En esta vertiente subjetiva se incluye, a su vez, otra "*doble dimensión* del derecho fundamental a la libertad religiosa: *interna y externa*. La primera garante de un espacio de autonomía individual —reservado, íntimo, personalísimo— de creencias, derivado de la dignidad de la persona humana (art. 1 CRP) y también asociado a la libertad de pensamiento y al desarrollo de la personalidad, libre de injerencias de los poderes públicos y de la coacción de terceros, inviolable en la terminología constitucional. La segunda faculta a las personas con el derecho de actuar en función de esas convicciones y creencias, en libertad, ante los poderes públicos y otros y la posibilidad de ejercicio, también en libertad, de las actividades que correspondan a las manifestaciones y expresiones de la religión profesada, como el derecho de culto, la reunión o manifestación pública con fines religiosos, la enseñanza confesional o la divulgación de la religión, incluso con finalidades proselitistas" (& 8.1.3 CRP).

El Tribunal, entiende que la cuestión de constitucionalidad objeto del recurso, está vinculada con esta última de las dimensiones señaladas, "el invocado derecho de ejercicio de culto y el derecho de observar lo impuesto por la religión profesada por la recurrente, en este caso, desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta de sol del sábado, de modo que le justifique la no permanencia en el local de trabajo en ese período" (& 8.2). "En esta dimensión externa, el ejercicio del derecho de actuar en conformidad con las convicciones religiosas, la libertad religiosa entra en conflicto con los deberes derivados de la situación laboral de la recurrente, coincidiendo temporalmente los períodos de observancia de los deberes de asiduidad y prestación del trabajo con los períodos de observancia para el ejercicio de la religión" (& 8.2).

Contrapone el Tribunal la protección que deriva de la configuración constitucional de la libertad religiosa en Portugal y que afecta a esta dimensión externa, con el estándar mínimo de protección fijado por la Comisión Europea de Derechos del Hombre y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al interpretar el art. 9 del Convenio Europeo.

"Para la Comisión Europea de los Derechos del Hombre, la protección dispensada por el artículo 9 de la Convención, no es suficiente para excluir la responsabilidad contractual —en el dominio laboral— del trabajador que justifica el incumplimiento de sus obligaciones con base en el ejercicio del derecho de libertad religiosa" (& 8.2). Esta es la doctrina que se desprende de los casos: *X v. Reino Unido* (nº 8160/78, decisión sobre la admisibilidad de la petición de 12 de marzo de 1981), *Tuomo Konttinen v. Finlândia* (TEDH, nº 24949/94), *Louise Stedman v. Reino Unido* (nº 29107/95, decisión de 9 de abril de 1997, de la Comisión Europea de los Derechos del Hombre), *Fancesco Sessa v. Italia* (TEDH, nº 28790/08).

No obstante —aclara el Tribunal— el ámbito de protección conferido al derecho de libertad religiosa por la citada jurisprudencia —que apuntaría solo a su dimensión negativa, de no discriminación en la cesación de las relaciones laborales en causa— no puede dejar de ser tomado en consideración que la protección de la libertad religiosa tiene hoy un encuadramiento multinivel, nacional, regional universal, en el cual *debe prevalecer la protección más elevada*" (& 8.3). Y, la protección garantizada por la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fija tan solo el *estándar mínimo* de protección Europea que no impide "una tutela más amplia que pueda ser dispensada al derecho en causa en el plano interno

de cada Estado, en el nivel más alto de protección que derive de las respectivas Constituciones (art. 53 CDFUE). Por eso, el entendimiento dispensado al ámbito de tutela internacional regional de la libertad religiosa respecto a su invocación para la observancia de períodos de observancia del trabajador, por aplicación del art. 9 CEDH, no perjudica la tutela constitucional más amplia de la libertad religiosa requerida por el artículo 41 de la Constitución de la República Portuguesa (& 8.3).

Para la Comisión Europea de los Derechos del Hombre y para el Tribunal Europeo de los Derechos del Hombre —señala el Tribunal Constitucional portugués—, el despido de un trabajador que se ausenta de su local de trabajo para respetar el Sabbath o para ir a la mezquita a rezar junto con otros creyentes en determinados periodos del día, no corresponde con una violación del derecho de libertad religiosa, ni consecuentemente una discriminación basada en las creencias o en la religión del trabajador, ya que se entiende que el despido no viene motivado por las convicciones religiosas del trabajador, sino por el simple incumplimiento de sus obligaciones contractuales, voluntariamente asumidas por este, pudiendo, en todo caso, dimitir o hacer cesar la relación laboral y así retomar el pleno ejercicio de la libertad religiosa (& 8.3).

Sin embargo, "a la luz de la Constitución portuguesa, la tutela del trabajador que ejerce su libertad religiosa se configura de forma más amplia que la mera protección contra las discriminaciones infundadas o, si se prefiere, fundadas en razones religiosas, y así prohibidas como causa de despido, correspondiendo al legislador asegurar, no solo la igualdad de los trabajadores (creyentes y no creyentes), contra injerencias discriminatorias, sino también el ejercicio de la libertad religiosa del que no pueden ni deben abdicar simplemente por el hecho de ser trabajadores o, más precisamente, por el hecho de ser trabajadores subordinados [...] no es esperable que se pueda exigir la desaparición o neutralización sin más de esa faceta de la persona solo por trabajar (añádase, "para otros"), considerando, siempre y en cualquier caso, prevalentes los deberes resultantes de las obligaciones contractuales" (& 8.3).

El derecho del trabajador a reservar los períodos de observancia impuestos por la religión profesada, deriva, de esta forma, de la protección normativa de la libertad de religión (en su dimensión externa) consagrada en el artículo 41 de la Constitución Portuguesa. Y es, por tanto, la tutela dispensada por el Derecho interno portugués —a nivel constitucional— lo

que, según la Corte Constitucional, corresponde ponderar (& 8.3). Y, en este sentido, como hemos adelantado, "no puede dejar de concederse relevancia al papel del Estado en la efectividad de las libertades protegidas por el artículo 41 CRP, en especial de la libertad de religión. Teniendo el mismo por referencia, se considera que corresponde principalmente al Estado proteger las conductas dictadas por las creencias, no solo con el cumplimiento de un deber de abstención (no injerencia), sino también por vía de la remoción de los obstáculos y de la creación de las condiciones —en el plano social— más favorables al ejercicio de la libertad religiosa" (& 8.3)[5].

Finaliza, este apartado de su argumentación el Tribunal, recordando que la eficacia y garantías de los derechos fundamentales, en este caso la libertad religiosa, también poseen efectos vinculantes para las entidades privadas —eficacia de los derechos fundamentales frente a terceros—, y en el caso concreto objeto de análisis, se manifiesta en que la regulación de los requisitos para dispensar al trabajador de sus obligaciones por motivos religiosos, afecta a todas las entidades empleadoras, sean públicas o privadas: "la situación objeto de análisis —en la que está en causa el encuadramiento normativo, infraconstitucional de las relaciones laborales frente al ejercicio de la libertad religiosa de los trabajadores—, no convoca autónomamente el régimen de vinculación de las entidades privadas a los derechos, libertades y garantías. De hecho, el legislador previó un régimen de suspensión de la actividad laboral justificado por el ejercicio de la libertad de religión, creando así un deber específico de respeto para las entidades empleadoras, sean públicas (en las cuales se incluye el propio Estado en cuanto empleador) o privadas, plasmando ese régimen en

---

5 Cita aquí el Tribunal Constitucional otras dos Sentencias de su jurisprudencia: Sentencia nº 174/93, "[…] el Estado no confesional debe respetar la libertad religiosa de los ciudadanos. Pero él solo respeta esta libertad si crea las condiciones para que los ciudadanos creyentes puedan observar sus deberes religiosos permitiéndoles el ejercicio del derecho de vivir en la realidad temporal según su propia fe y de regular las relaciones sociales de acuerdo con su propia visión de la vida en conformidad con la escala de valores que para ellos resulta de la fe profesada". Y el Sentencia 423/87: "[…] la dimensión real de la libertad religiosa depende fundamentalmente de las situaciones sociales que permiten o impiden su disfrute existencial como opciones reales, competiendo al Estado, en cuanto instrumento al servicio de los valores e intereses de la sociedad, asumir la obligación de garantizar la formación y el desarrollo libre de las conciencias, especialmente en el plano de su vivencia religiosa".

los requisitos fijados en los tres apartados del artículo 14.1 de la Ley de Libertad Religiosa" (& 8.3).

A pesar de su innegable relevancia jurídico-constitucional, no es, sin embargo, la libertad religiosa —sobre todo en su vertiente externa— un derecho absoluto, que permita afirmar su carácter preferencial sobre todos los demás. En este sentido, es necesario ponderarlo con los otros derechos e intereses constitucionalmente protegidos, que será la tarea que abordará el Tribunal Constitucional en el último de los apartados de los que se compone la sentencia, el 8.4. Anticipando, la Corte que de esa ponderación no resultarán las mismas conclusiones alcanzadas por los Tribunales *a quo* (& 8.3).

Comienza el Tribunal introduciendo un nuevo elemento que no había sido contemplado por las anteriores instancias judiciales, al subrayar que la iniciativa del legislador de reconocer el derecho a suspender las obligaciones laborales por motivos religiosos, contemplada en el art. 14.1 de la Ley de Libertad Religiosa, responde fundamentalmente a la preocupación del Estado por garantizar el ejercicio efectivo de la libertad religiosa a personas pertenecientes a organizaciones religiosas minoritarias, "a pesar de configurar el derecho en causa como un derecho que asiste a todos los creyentes independientemente de la religión profesada, el régimen legal no puede dejar de corresponder a una preocupación de tratamiento de organizaciones religiosas minoritarias en lo que respecta a la organización del tiempo. Dato relevante, sino determinante, es el hecho de que hoy en día el descanso semanal de los trabajadores en Portugal —a pesar de su evidente secularización— corresponde al domingo, día de culto para la religión católica. La elección del domingo no es determinante, pero es importante por coincidir con un día de culto religioso. Los feriados religiosos en Portugal, coinciden también con los días como tal entendidos por la religión mayoritaria" (& 8.4).

"En este encuadramiento se comprende mejor la finalidad del régimen normativo en causa, cuya importancia mayor se verifica en la realización de la libertad religiosa en una comunidad plural" (& 8.4).

Contrasta este planteamiento con el de las instancias judiciales anteriores, "basado en la idea de que el derecho de observancia de períodos reservados para el culto impuestos por la religión profesada solo puede ser ejercitado si, en la organización del funcionamiento de la unidad empresarial —en interés de la entidad empleadora y con vista a la mejor

eficacia de la prestación laboral— se ha establecido un régimen que contemple una posibilidad de variación de la hora de entrada o salida de los trabajadores", entendiendo los requisitos legalmente establecidos como "ajenos a cualquier conformación que pudiese nacer de la situación de los trabajadores que invocan el derecho, correspondiendo tan solo a un régimen de organización del tiempo de trabajo previamente establecido por la entidad empleadora, de la que pueda eventualmente disfrutar el trabajador creyente (y los demás)" (& 8.4); juicio de ponderación entre los derechos e intereses en presencia, que "apunta a la prevalencia del derecho de libre iniciativa económica (y de la libertad de organización empresarial) sobre el derecho de libertad religiosa, con un claro sacrificio de esta, siempre que se vislumbre que de algún modo pueda ser afectada la organización empresarial del tiempo de trabajo y la libertad del empleador, siempre y en cualquier caso en el que esa organización no tenga contemplada la posibilidad de que los trabajadores tengan un horario variable de entrada y salida, [...] lo que reduce el universo de trabajadores afectados a una ínfima parte del universo de los trabajadores subordinados a un horario de trabajo (siendo este un elemento determinante de la propia relación laboral subordinada) (& 8.4). "Así interpretados —añade el Tribunal Constitucional— los requisitos previstos en las líneas a) y c) del artículo 14.1 de la *Ley de Libertad Religiosa*, se revelan de limitadísima aplicación, alcanzando apenas las situaciones en que el trabajador ejerce su actividad en una organización en que haya sido establecido un régimen flexible para el horario de trabajo (esto es, con variación en la hora de entrada y salida) por razones estrictamente de gestión, de acuerdo con los derechos e intereses (de esta forma entendidos como prevalentes) de la entidad empleadora" (& 8.4).

"A partir del momento en que se entiende que el derecho a la libertad religiosa del trabajador no se muestra limitado a su dimensión interna y que la protección constitucional es más amplia que una mera garantía contra tratamientos discriminatorios" (& 8.4); tomando en consideración, además, "que la protección constitucional del derecho a la libertad religiosa se procura concretar en una posibilidad real —y no meramente virtual— del ejercicio de ese derecho" (& 8.4). No cabe interpretar que el legislador al crear las condiciones de ejercicio del derecho de libertad religiosa frente a esos otros derechos —libertad de organización empresarial y poder de dirección—, no ha podido querer establecer una prevalencia incondicionada de estos en las situaciones de posible conflicto

con el ejercicio de la libertad religiosa, sin observar el principio de proporcionalidad en las restricciones al derecho de libertad religiosa de los trabajadores que se entiende que deben ser necesarias y justificadas para la realización de esos otros derechos, aquí traducidos en la libertad de iniciativa económica privada. (& 8.4).

"Del cuadro constitucional de tutela de la libertad religiosa se desprenden los principios de tolerancia y de acomodación, dos derechos derivados del ejercicio de la religión en el ámbito social como vectores del propio programa normativo constitucional, que no se limita a la afirmación de que el reconocimiento de la libertad religiosa en el mundo laboral se efectúa tan solo a través del principio de igualdad y no discriminación" (& 8.4). Cabría afirmar, por tanto, que "del programa constitucional portugués de tutela de los derechos religiosos resulta un deber, para las entidades empleadoras, de acomodarse a la libertad religiosa de los trabajadores". (& 8.4).

"En esta línea, el mandato constitucional dirigido al legislador en la regulación del derecho en causa es el de conferir la máxima efectividad al derecho manifestación de la libertad religiosa, sin prejuicio de la debida ponderación de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos por los artículos 61 y 80 de la Constitución" (& 8.4), aunque no estableciendo una primacía apriorística casi incondicionada, sino medido el conflicto según juicios de razonabilidad y proporcionalidad (& 8.4).

"Una interpretación del requisito de la *flexibilidad horaria* (del que dependería también el requisito de la compensación del período de trabajo no prestado) enteramente condicionada a una modalidad de determinación de horario (con variación en la hora de entrada y salida) totalmente en disponibilidad del empleador y sin ninguna relación con la posibilidad de que el trabajador creyente observe los dictámenes de su religión que puedan de algún modo entrar en conflicto con el esquema de organización del tiempo de trabajo al que se subordina, desfigura la amplia protección conferida por la Constitución a la libertad religiosa, en varias de las dimensiones señaladas, más cuando está reforzada por imperativos de conciencia, también protegidos a nivel constitucional" (& 8.4).

"De este modo, la interpretación conferida a las líneas a) y c) (en la medida en que el requisito de la compensación del tiempo de trabajo solo se verifica en régimen de flexibilidad de horario) el sesgo reductor de la dimensión normativa a la que el Tribunal las confina, se hace evidente. De

hecho, la dificultad de cumplir el primer requisito resulta desde luego de la cobertura tan escasa conferida al concepto de flexibilidad de horario laboral que, al contrario de lo que podría resultar de una lectura apresada, no se revela flexible, sino dotado de una enorme rigidez. Al aplicarse apenas a los trabajadores que desempeñen su actividad en un esquema de establecimiento de un periodo de presencia obligatoria, con un consentido margen de variación de horas de entrada y salida, no se debe ignorar que, frente a los elementos de derecho positivo infraconstitucional, tal régimen apenas se muestra expresamente consagrado en el Decreto-Ley 259/98, de 18 de agosto, y, de forma mucho más limitada en el dominio de las relaciones laborales privadas, y para las situaciones específicas de trabajadores con responsabilidades familiares, a que pueda ser autorizado un horario de trabajo flexible, en el cual el trabajador puede escoger, dentro de ciertos límites, las horas de inicio y término del periodo normal de trabajo diario. En otros, resultará eventualmente de la conformación de las relaciones de trabajo en el ámbito de la autonomía privada de las partes que se ejerce contractualmente" (& 8.4).

En definitiva, a juicio del Tribunal Constitucional, la interpretación de los requisitos acumulativos previstos en el artículo 14.1, de la *Ley de Libertad Religiosa*, contenidos en los apartados a) y c), que establecen los requisitos de flexibilidad del horario de trabajo y da compensación integral del período de suspensión, restringida únicamente al caso en que la entidad empleadora haya establecido un régimen con variación de hora de entrada y salida de los trabajadores, "determinaría una restricción no razonable y excesiva de la libertad de religión (prevista y tutelada por el artículo 41.1 de la Constitución), en parámetros no consentidos por el principio de proporcionalidad, también constitucional" (& 8.4).

"Una interpretación de la Ley en consonancia con la Constitución —que protege, en los términos expuestos, la libertad religiosa de los individuos— no puede dejar de considerar incluidas en el concepto de *flexibilidad de horario* (salvaguarda la posibilidad de compensación del trabajo no prestado en cierto periodo) todas las situaciones en que sea posible compatibilizar la duración del trabajo con la dispensa del trabajador para fines religiosos, operándose, así, una acomodación a los derechos fundamentales del trabajador" (& 8.4). Esta "lectura abierta" de la norma legal en causa, "en línea con la amplia protección conferida por el legislador constitucional al derecho de libertad religiosa, no puede dejar de comprender la organización del *trabajo en turnos*, que, por su configuración

rotativa y configuración variable, en particular, en cuanto a los trabajadores afectados por cada turno, posibilitaría, en el caso, una acomodación de las prácticas religiosas de los trabajadores a efectos de la dispensa del trabajo en ciertos periodos o días dictados por las creencias profesadas, sin perjuicio de la compensación debida (por vía de prestación efectiva del trabajo)" (& 8.4).

"Una interpretación constitucionalmente conforme de la Ley de Libertad Religiosa, en cuanto a su artículo 14, propiciada por la falta de una definición rígida y cerrada del concepto de flexibilidad de horario, frente a la libertad fundamental prevista en el artículo 41 de la Constitución, no podría dejar de apuntar a una más elevada protección de este derecho fundamental, irradiando su efecto para las relaciones laborales, de modo que se extiende también a los empleadores la búsqueda de soluciones de gestión de la organización laboral que garanticen el ejercicio de los derechos fundamentales por los trabajadores, en este caso, el derecho a la libertad religiosa" (& 8.4).

Por cierto —añade el Tribunal—, no se trataría de una situación excepcional, pues también en otras situaciones ha previsto el legislador el deber de la entidad empleadora de acomodarse a otros derechos fundamentales de los trabajadores, como sucede con la previsión específica de la obligación de ajustar el horario de los trabajadores-estudiantes (artículo 90 Código de Trabajo), o con una formulación más genérica por vía de la obligación de ponderación de derechos de los trabajadores y de circunstancias relevantes al fijar los horarios de trabajo (en los términos establecidos por el artículo 212.2 Código de Trabajo), o a los dirigentes de la Administración Pública (artículo 22 del Decreto-Ley 259/98) (& 8.4).

2.2. *Ordenanza 298/2013, de 4 de octubre, que interpreta el artículo 32 de la Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*

La *Ordenanza 298/2013*, regula el procedimiento que deben observar las entidades previstas en los números 4 y 6 del artículo 32 de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa*, para poder beneficiarse de la consignación de la cuota equivalente al 0,5% del Impuesto sobre la renta de las personas singulares (IRS) liquidado y, en el caso de las personas colectivas religiosas, de los donativos de las personas singulares. La norma deroga las anteriores *Ordenanzas 80/2003, de 22 de enero*, y *362/2004, de 8 de abril*, simplificando el procedimiento.

Básicamente tienen que verificar el cumplimiento de dos requisitos: (1) acreditar, ante la *Autoridad Tributaria y Aduanera (AT)*, su condición de entidades beneficiarias en cualquiera de las modalidades que da lugar a las exenciones, desgravaciones o percepción de la cuota del IRS, por estar inscritas en el registro de personas colectivas religiosas (RPCR), estar registradas como instituciones particulares de solidaridad social o haber obtenido el reconocimiento gubernamental de la persecución de los fines relevantes para los efectos de la aplicación de la *Ley 16/2001, de Libertad Religiosa* (art. 1.a.); y (2), solicitar el beneficio fiscal correspondiente (art. 1.b.), antes del 31 de diciembre del año fiscal anterior a la percepción del donativo o de aquel en el que corresponde la consignación tributaria (art. 2).

Las entidades beneficiarias que se hayan beneficiado de la consignación tributaria del IRS del año inmediatamente anterior, quedan dispensadas de requerir el beneficio en los años subsiguientes (art. 3), en el caso de que dejen de cumplir las condiciones requeridas para la percepción, tienen la obligación de comunicar esa circunstancia a la *Autoridad Tributaria y Aduanera (AT)* (art. 4).

La Ordenanza establece la obligación que recae en las entidades inscritas en el Registro de personas colectivas religiosas (RPCR), de presentar una relación anual del destino dado a los montantes recibidos al abrigo del artículo 32.4, antes del último día útil del mes de junio del año siguiente al de su recepción (art. 5). La diferencia entre la consignación percibida a la que se tiene derecho de acuerdo con la normativa y los gastos justificados, daría lugar a una liquidación correctiva de acuerdo con el procedimiento definido por despacho ministerial (art. 6). La norma afecta a los procedimientos en ella previstos que se produzcan después de su entrada en vigor, el 5 de octubre de 2013.

3. LEY 19/2013, DE 21 DE FEBRERO, QUE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL

La *Ley 19/2013, de 21 de febrero,* ha modificado el Código penal portugués vigente (*Decreto-Ley 400/82, de 23 de septiembre*). En materia de protección penal de la libertad religiosa las modificaciones han afectado al artículo 240 que tipifica el delito de *discriminación racial, religiosa o sexua*l.

La nueva redacción del artículo 240 penaliza la fundación o constitución "de una organización que desarrolle o anime a desarrollar actividades de propaganda organizada que incite a la discriminación, el odio o la violencia contra personas o grupos de personas por causa de su raza, color, origen étnico o nacional, religión, sexo, orientación sexual o identidad de género" (art. 240.1.a); y las conductas de "quién en una reunión pública, por escrito, destinado a la divulgación o a través de cualquier medio de comunicación social o sistema informático destinado a la divulgación" "con la intención de incitar a la discriminación racial religiosa o sexual" (art. 240.2): "provoque actos de violencia contra personas o grupos de personas por causa de su raza, color, origen étnico o nacional, religión, sexo, orientación sexual o identidad de género" (apartado a.); "difame o injurie a personas o grupos de personas por causa de su raza, color, origen étnico o nacional, religión, sexo, orientación sexual o identidad de género, en particular a través de la negación de crímenes de guerra o contra la paz y la humanidad" (apartado b.); o, "amenacen a personas o grupos de personas por causa de su raza, color, origen étnico o nacional, religión, sexo, orientación sexual o identidad de género" (apartado c.).

La reforma entró en vigor el 21 de marzo de 2013, a los 30 días de su publicación (art. 6).

4. NORMATIVA DE DESARROLLO DEL CONCORDATO ENTRE EL ESTADO PORTUGUÉS Y LA SANTA SEDE, DE 18 DE MAYO DE 2004 (INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN: RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA REPÚBLICA Nº 74/2004, DE 16 DE NOVIEMBRE)

Analizaré, de la más reciente a la más antigua, dos normas: (1) la *Ley 19/2015 de 2015* que crea el Registro de Personas Jurídico-Canónicas y; (2) el *Decreto Ley 70/2013*, que establece el régimen jurídico de la enseñanza y organización de la asignatura de Educación Moral y Religiosa Católica (EMRC), en los establecimientos públicos de enseñanza básica y secundaria.

4.1. *Ley 19/2015, de 3 de febrero, que crea el Registro de Personas Jurídico-Canónicas*

La Ley 19/2015, de 3 de febrero crea el Registro de Personas Jurídicas Canónicas, dando cumplimiento a una de las previsiones del vigente *Concordato de 2004 entre Portugal y la Santa Sede*. La norma asume como objetivo organizar y tener actualizada la información sobre la identificación de las entidades canónicas, así como dar publicidad a su situación jurídica para que cualquier interesado pueda tener un conocimiento sistemático de la situación jurídica relativa a estas entidades (art. 2).

El Registro de Personas Jurídicas Canónicas (RPJC), se integra en el ámbito competencial del ya existente Registro Nacional de personas Colectivas (RNPC) (art. 1).

La inscripción en el RPJC tiene como efecto jurídico la atribución de personalidad jurídica a las entidades inscritas (art. 4). Pueden inscribirse los institutos de vida consagrada, las sociedades de vida apostólica y las restantes personas jurídico-canónicas reconocidas por la autoridad eclesiástica competente (art. 3.1). La autoridad eclesiástica competente es el Obispo diocesano, para las personas jurídico-canónicas con sede y ámbito diocesano y, la Conferencia Episcopal Portuguesa, para las personas jurídico-canónicas de ámbito estatal (art. 3.2).

La solicitud de inscripción debe ser formalizada por escrito, en formulario propio, por la autoridad eclesiástica competente, acompañado de un documento auténtico que pruebe y permita inscribir: el establecimiento como persona jurídica canónica en Portugal, la denominación de persona jurídico canónica, que debe permitir distinguirla de cualquier otra persona jurídico canónica existente en Portugal, la dirección de su sede en Portugal, los fines de la persona jurídico canónica, los órganos representativos con sus respectivas competencias y la autoridad eclesiástica que propone a la persona jurídico canónica (art. 5).

La inscripción en el Registro es un acto reglado que solo puede ser denegado por falta de los requisitos legales o por manifiesta falta de autenticidad de documento (art. 7). A la persona jurídica canónica inscrita se le atribuye un número de identificación (art. 12) y se le expide una tarjeta de persona colectiva jurídico canónica inscrita en el RPJC (art. 13).

La norma ha entrado en vigor el 3 de junio de 2015, a los 120 días de su publicación (art. 22).

4.2. *Decreto-Ley 70/2013, de 23 de mayo, que establece el régimen jurídico de la enseñanza y organización de la asignatura de Educación Moral y Religiosa Católica (EMRC), en los establecimientos públicos de enseñanza básica y secundaria*

La enseñanza en las escuelas públicas de la asignatura de Educación Moral y Religiosa Católica en Portugal, estaba regulada por el Decreto-Ley 323/83, que cumplía el compromiso adquirido por el Estado portugués en el artículo XXI del Concordato con la Santa Sede de 1940. Actualmente está en vigor el Concordato de 18 de mayo de 2004 (Instrumento de ratificación 74/2004, de 16 de noviembre), cuyo artículo 19.1 consagra el deber de la República portuguesa de garantizar "*las condiciones necesarias para asegurar, en la legislación portuguesa, la enseñanza de la religión y moral católicas en los establecimientos de enseñanza pública no superior, sin ninguna forma de discriminación*" (traducción libre). Así, el Decreto-Ley 70/2013, de 23 de mayo, tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la enseñanza y organización de la asignatura de Educación Moral y Religiosa Católica (EMRC), en los establecimientos públicos de enseñanza básica y secundaria, de acuerdo con el Concordato de 2004 (art. 1).

En este contexto, el Estado adquiere el compromiso de garantizar las condiciones necesarias para asegurar la enseñanza de la asignatura de EMRC en los centros públicos de enseñanza básica y secundaria, que considera una manifestación del principio de cooperación con los padres en la educación de los hijos (art. 2).

La orientación de la enseñanza de la asignatura de EMRC, es competencia exclusiva de la Iglesia Católica que, a través de la Conferencia Episcopal portuguesa, procederá: (1) a elaborar y revisar los programas de la asignatura y (2) a elaborar, actualizar y divulgar los manuales y el resto de material didáctico de la asignatura (art. 3.1).

La materia de EMRC es una componente del currículo nacional (art. 4.1), salvaguardando su carácter específico sujeta al régimen aplicable al resto de asignaturas y áreas disciplinares (art. 4.2), de oferta obligatoria para todos los centros públicos de enseñanza no superior y de asistencia facultativa (art. 4.1). La Ley sitúa en los 16 años la posibilidad del menor de ejercitar el derecho a elegir la educación moral y religiosa por sí mismo (art. 5.2), siendo, por encima de esta edad, competencia de los encargados de su educación (art. 5.1). En ambos casos, el ejercicio del derecho requiere de una declaración de voluntad en el acto de matrícula (arts. 5.1 y

5.3). Un aspecto controvertido es que en conformidad con el régimen en vigor para el resto de asignaturas, en la enseñanza básica no se permite la anulación de la matrícula (art. 5.4) y en la enseñanza secundaria, incluso cuando con 16 años cumplidos lo ejercita el propio menor, requiere de la aprobación del Director del centro (art. 5.5). Como puede observarse se trata de una limitación al derecho a cambiar de convicciones, difícilmente justificable. Se subordina el ejercicio de un derecho fundamental de carácter personalísimo (por cuanto respecta al cambio de creencias durante el curso o por parte del menor que alcanza los 16 años durante el mismo), a la organización del centro (enseñanza básica) o a una decisión administrativa (enseñanza secundaria). No parece que la asignatura EMRC, tan íntimamente ligada a la libertad de conciencia y al libre desarrollo la propia personalidad, pueda ser, en este punto, equiparable al resto de disciplinas.

Las clases de EMRC requieren de un número mínimo de 10 alumnos (art. 6.1 a), permitiéndose, para alcanzar este número mínimo, juntar alumnos de diversos cursos, en el caso de la educación de primer ciclo (art. 6.1 b); y, en el caso de la educación de segundo ciclo, previa solicitud de la autoridad religiosa y autorización del responsable competente del gobierno (art. 6.1.d). Finalmente, de forma excepcional, se contempla la posibilidad de crear grupos por debajo de este número de alumnos, a propuesta del Director del centro y mediante autorización del Ministerio de Educación y Ciencia (art. 6.2).

La asignatura de EMRC, al igual que el resto de disciplinas, es evaluable (art. 7.1), pero los resultados no son considerados para repetir curso o para el cálculo de la nota media del alumno (art. 7.2), ni será tampoco objeto de pruebas o exámenes de ámbito nacional que determinen la progresión o la candidatura a estudios superiores (art. 7.3). Constará, sin embargo, en el certificado de estudios, la asistencia y los resultados obtenidos (art. 7.4).

El proceso de reclutamiento y selección de docentes se somete al régimen general establecido por el Decreto-Ley 132/2012, de 27 de junio, de reclutamiento de personal docente de enseñanza básica y secundaria y de formadores y técnicos especializados, con las siguientes especificidades (art. 8.1). Para la validación de las candidaturas a los concursos en los que el candidato es opositor, será necesaria una declaración de idoneidad de Obispo de la diócesis correspondiente (art. 8.2). La competencia para

certificar la idoneidad de los docentes de la disciplina está reservada en exclusiva a la Iglesia católica (art. 3.2). Obtenido el empleo, se establece una relación jurídica de empleo público de acuerdo con el Decreto-Ley 132/2012 (art. 8.6), celebrándose un contrato de trabajo firmado por el Director del centro en representación del Estado (art. 8.7). La renovación del contrato, está sujeta al parecer favorable del Obispo de la diócesis respectiva (art. 8.8).

La norma entró en vigor, el 24 de mayo de 2013, día siguiente a su publicación (art. 13).

ANEXOS

ANEXO Nº 1: *Acórdão del Tribunal Constitucional nº 544/2014*.
ANEXO Nº 2: *Portaria nº 298/2013, de 4 de outubro.*
ANEXO Nº 3: *Lei nº 19/2013, de 21 de fevereiro, 29ª alteração ao Código Penal (aprovado pelo Decreto-Lei nº 400/82, de 23 de setembro).*
ANEXO Nº 4: *Decreto-Lei nº 19/2015, de 03 de fevereiro, que institui o Registo de Pessoas Jurídicas Canónicas*.
ANEXO Nº 5: *Decreto-Lei nº 70/2013, de 23 de maio, que estabelece o regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católicas (EMRC), nos estabelecimentos públicos dos ensinos básico e secundário*.

ANEXO Nº 1

Acórdão del Tribunal Constitucional nº 544/2014

(Diário da República nº 183/2014, Série II de 23 de septiembre de 2014)

Processo nº 53/12
Acordam na 3ª Secção do Tribunal Constitucional

I.– Relatório

1.– Nos presentes autos, vindos do Tribunal da Relação de Lisboa, em que é recorrente Natália da Silva Alves e Silva e recorrida CODAN Portugal - Instrumentos Médicos S. A., a primeira vem interpor recurso ao abrigo da alínea b) do nº 1 do artigo 70º da Lei nº 28/82, de 15 de novembro, na sua atual versão (LTC), do acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa, em 15/12/2011 (cf. fls. 417 a 440-verso), que negou provimento à apelação, confirmando a sentença do Tribunal do Trabalho de Loures (2º Juízo), de 19/06/2011, que julgou improcedente a impugnação judicial da regulari-

dade e licitude do despedimento deduzida pela ora recorrente contra a ora recorrida (cf. fls. 245 a 287).

2.– Tendo o recurso de constitucionalidade sido admitido por despacho do Tribunal recorrido de 16/01/2012 (cf. fls. 453) e prosseguido neste Tribunal (cf. fls. 457), a recorrente apresentou alegações (cf. fls. 459-507).

3.– A recorrida, notificada para o efeito (cf. fls. 508), apresentou contra -alegações (fls. 533 a 557).

4.– Dos documentos juntos aos autos, tem-se por assente, com relevância para a decisão, o seguinte:

4.1.– Em sentença proferida pelo Tribunal do Trabalho de Loures, no âmbito do processo nº 449/10.OTTLRS.L1, foi julgada improcedente a impugnação judicial da regularidade e licitude do despedimento deduzida pela ora recorrente e, assim, lícito o despedimento promovido pela ora Recorrida.

Nessa sentença (fls. 245-287) é feita aplicação do disposto no artigo 14º, nº 1, da Lei da Liberdade Religiosa, tendo o Juiz concluido pela não verificação in casu dos requisitos expressos nas alíneas que o compõem, termos em que baseou a decisão desfavorável à ora Recorrente. Como se pode ler no citado aresto:

> "[...] o que está aqui em causa passa exclusivamente por saber se ao abrigo do disposto no artigo 14º da Lei nº 16/2001, de 22 de junho, mas atendendo essencialmente ao disposto nas alíneas a) e c), assistia à A. o direito a recusar a prestação da sua atividade a partir do pôr do sol de sexta-feira até ao pôr do sol de sábado, em virtude de a religião que professa observar esse período como dia de descanso, o que se traduziu no não cumprimento do horário integral às sextas-feiras, quando o seu turno terminava às 24h00, ou em não prestar trabalho suplementar ao sábado, quando solicitado pela Requerida.
>
> [...]
>
> A primeira ideia que se pode retirar relativamente a ambos, é que têm em comum o propósito de limitar o prejuízo resultante do exercício daquele direito pelo trabalhador para a atividade e utilização dos recursos humanos pela entidade empregadora. Procura-se salvaguardar o direito do trabalhador, mas sem que tal imponha prejuízo injustificado e desproporcionado para a entidade empregadora.
>
> Como se menciona na motivação do projeto que deu origem à lei, procura-se compatibilizar os direitos esses direitos, em caso de conflito".

4.2.– Inconformada, a ora Recorrente interpôs recurso da decisão judicial que lhe foi desfavorável para o Tribunal da Relação de Lisboa, que veio a confirmar a sentença recorrida, negando provimento à apelação. Acordaram os juízes, em 15/11/2011, como sintetizado no sumário elaborado pelo relator (I.– Não é inconstitucional o artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa - LLR (Lei nº 16/2001, de 22/6); II.– Não se pode considerar o trabalho em regime de dois turnos rotativos como integrando o conceito, contido na alínea a) do nº 1 do artigo 14º da LLR, de trabalho em regime de flexibilidade

de horário; III.– Constitui justa causa de despedimento o comportamento da trabalhadora, que professando um confissão religiosa cujos membros observam o sábado como dia de guarda e não integrando a sua situação a previsão, cumulativa, das als. a) e c) do nº 1 do referido artigo 14º, persiste em se recusar a trabalhar a partir do pôr do sol de sexta-feira, quando o seu turno terminava muito tempo depois desse momento, causando, assim, prejuízos consideráveis à sua entidade empregadora, e a prestar trabalho suplementar ao sábado, sendo que, pelos mesmos motivos, já havia sido objeto de 4 sanções disciplinares), o seguinte (fls. 428-verso a 440):

> "a alegada inconstitucionalidade do artigo 14º da Lei nº 16/2001, de 22/6:
>
> Entende a Autora - apelante que tal disposição legal é inconstitucional, por violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da igualdade.
>
> Estamos, como é natural, perante uma questão essencial para a apreciação da justa causa de despedimento, já que foi precisamente com base na não verificação dos pressupostos estabelecidos na mesma disposição legal que a Ré considerou as ausências ao serviço da Autora a partir do pôr do sol de sexta-feira como faltas injustificadas e como desobediência a ordens expressas a não prestação de trabalho ao sábado.
>
> A Ré entendeu que não se verificavam os requisitos cumulativos previstos nesse citado artigo 14º da Lei nº 16/2011 (que passaremos a designar por LLR), já que a Autora não tinha flexibilidade de horário nem era possível a compensação integral do respetivo período de ausência, pelo que não poderia haver dispensa de prestação de trabalho.
>
> Ao que a Autora contrapôs, logo na contestação ao articulado de motivação, a inconstitucionalidade dessa norma legal, posição que continua a sustentar no presente recurso.
>
> Vejamos:
>
> O direito à liberdade religiosa está expressamente consagrado no artigo 41º da Constituição:
>
> "1.– A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável
>
> 2.– Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa
>
> 3.– Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder
>
> [...]".
>
> Como muito bem se refere na sentença recorrida, sendo um preceito constitucional relativo a um direito fundamental, a sua interpretação e integração deve ser feita de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (nº 2 do artigo 16º da CRP).
>
> A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 18 de dezembro de 1948, trata a questão relativa à liberdade religiosa no seu artigo 18º, nos termos seguintes:
>
> "Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos".

A declaração da ONU de 25/11/1981, citada por Júlio Gomes, in Direito do Trabalho, vol. I, Relações Individuais de Trabalho, p. 295, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação e intolerância fundadas na religião e nas crenças, refere, no seu artigo 6º, a liberdade de observar os dias de repouso e de celebrar as festas e cerimónias segundo os preceitos da própria religião ou culto.

E não esquecendo, porque também aqui deverá ser o mesmo chamado à liça, o princípio da igualdade consagrado no artigo 13º da CRP, segundo o qual "1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual".

Assim, a todo o cidadão deverá ser reconhecida a faculdade de ter ou não ter religião, professar esta ou aquela, mudar de crença, praticá-la só ou acompanhado de outras pessoas, agrupar-se com outros crentes formando confissões ou associações de caráter religioso, etc. Nessa sua faculdade deverá estar ausente todo o tipo de coação, injustificada, exercida por qualquer pessoa ou autoridade pública.

E se o culto pode ser meramente interno, quando se confina ao pensamento e à vontade de cada individuo —e que tornará mais difícil, para não dizer impossível, a sua restrição de ordem externa, precisamente por dizer respeito ao for intimo do ser humano—, o que nos interessa para aqui será o culto externo, aquele que se manifesta externamente pelas formas mais variadas. Culto esse que poderá ser particular ou privado, quando celebrado pelos indivíduos, sós ou acompanhados, em nome próprio, ou público ou oficial, quando realizado em nome da comunidade e por ela, geralmente com a intervenção de ministro autorizado.

Por esse artigo 41º da CRP dizer respeito aos direitos, liberdades e garantias, ele é diretamente aplicável, vinculando as entidades públicas e privadas (nº 1 do artigo 18º da CRP), só podendo a sua restrição ser feita através de lei, limitada ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, não podendo diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial daquele preceito (n.os 2 e 3 do mesmo artigo 18º).

Pese embora a consagração, logo em 1976, na nossa Constituição, só com a designada Lei da Liberdade Religiosa —Lei nº 16/2001 de 22 de junho— é que o legislador veio concretizar, em termos de lei ordinária, estes princípios de opção religiosa, bem como os critérios de organização e funcionamento.

Entre esses princípios encontra-se, como não poderia deixar de ser, o da liberdade de religião e de culto, o qual compreende, além do mais, o direito de adesão à igreja ou comunidade religiosa que se escolher e o direito de participar na vida interna e nos ritos religiosos.

Daí o artigo 10º da LLR dispor o seguinte:

"A liberdade de religião e de culto compreende o direito de, de acordo com os respetivos ministros do culto e segundo as normas da igreja ou comunidade religiosa escolhida:

a) Aderir à igreja ou comunidade religiosa que escolher, participar na vida interna e nos ritos religiosos praticados em comum e receber a assistência religiosa que pedir;

b) Celebrar casamento e ser sepultado com os ritos da própria religião;

c) Comemorar publicamente as festividades religiosas da própria religião".

Mas ainda que a Constituição o não refira expressamente, parece-nos manifesto e indiscutível, tal como se decidiu no Ac. da Relação do Porto de 19/2/2008,

in www.dgsi.pt. que a liberdade religiosa e de culto terá necessariamente de ter limites impostos pela ordem jurídica e constitucional vigentes numa comunidade civilizacional e pelos valores fundamentais nela consagrados e defendidos, como sejam —na comunidade em que nos inserimos— a liberdade, os direitos alheios, a ordem pública e a realização da justiça. Valores e objetivos estes que não podem ser violados ou impedidos por motivos de cariz religioso. Na verdade, os fundamentos ético-jurídicos de cariz humanista e racional em que a nossa comunidade de cidadãos se alicerça não podem ser postergados por princípios e práticas religioso/as, como sejam, vg., a admissão de certas mutilações físicas ou da poligamia —cf. António Leite, A Religião no Direito Constitucional Português in Estudos sobre a Constituição, 1978, 2º, p. 265 e segs. Nesta vertente ao Estado já assiste o poder/dever de, através da função jurisdicional, garantir proteção jurídica a todo aquele que vir os seus direitos ou interesses juridicamente relevantes questionados ou violados por opções, atitudes ou cultos religiosos iníquos e intoleráveis, de forma a preveni-los ou repará-los, constituindo este um direito fundamental com assento constitucional— artigo 20º, nº 1, da CRP.

Ou seja, não estamos, contrariamente ao que acontece com o direito à vida, perante um direito absoluto, podendo e devendo, se for o caso e dentro dos limites constitucionais, ser objeto de restrições.

É o que decorre não só do nº 2 do artigo 18º da CRP, mas também do artigo 6º da LLR, onde expressamente se salvaguardou que a liberdade de religião e de culto "[...] admite as restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos" - nº 1 desse artigo 6º.

No particular campo das relações laborais, e com vista a encontrar o necessário equilíbrio e proporcionalidade entre esse direito de liberdade religiosa e outros com consagração constitucional, veio reger o artigo 14º da LRR, nos seguintes termos e que para aqui relevam:

"1.– Os funcionários e agentes do estado e demais entidades públicas, bem como os trabalhadores em regime de contrato de trabalho, têm o direito de, a seu pedido, suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias de festividade e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam, nas seguintes condições:

a) Trabalharem em regime de flexibilidade de horário;

b) Serem membros de igreja ou comunidade religiosa inscrita que enviou no ano anterior ao membro do Governo competente em razão da matéria a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso;

c) Haver compensação integral do respetivo período de trabalho"

[...].

Por forma a justificar a inclusão desta norma, escreveu-se, a propósito desta disposição, no Projeto de Lei nº 27/VII (disponível em http://app.parlamento.pt), que veio a dar lugar à LRR, o seguinte:

"O direito de suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam [...] deve compatibilizar-se com os direitos da entidade empregadora e com o princípio da igualdade. Seguiu-se o modelo de alguns acordos italianos [artigo 17º da Lei n. o 516, de 22 de novembro de 1988 (adventistas), artigo 4º da Lei nº 102, de março de 1989 (comunidades hebraicas)], aplicável em regime de flexibilidade de horário. É certo que o Estado francês concede aos seus funcionários e agentes autorização de ausência por ocasião das festas próprias das confissões ou comunidades arménia, israelita ou muçulmana a que pertençam, em três dias por

ano em cada caso (circular de 9 de janeiro de 1991). Mas esta solução não resolve os problemas de igualdade referidos".

Ou seja, foi nítido propósito do legislador encontrar aquele necessário equilíbrio entre o direito de liberdade religiosa e os legítimos direitos da entidade empregadora, não esquecendo, como não poderia deixar de ser, o princípio constitucional da igualdade.

Citando aqui a sentença (refira-se, por ser de elementar justiça, que a mesma se encontra doutamente elaborada) "como decorre desta exposição de motivos, ao procurar salvaguardar e assegurar o direito de liberdade de consciência, de religião e de culto, a que se refere o artigo 1º, articulando-o com o princípio da igualdade, este consagrado no art. 2, o legislador procurou nesta matéria alcançar uma solução equilibrada, no sentido de conseguir compatibilizar os direitos potencialmente em conflito, ou seja, de um lado, os do trabalhador que professa determinada religião e pretende observar o "descanso semanal", os "dias das festividades" e os "períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam"; e, de outro lado, os da entidade empregadora, desde logo, ao livre exercício da iniciativa económica privada "nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral" [nº 1 do artigo 61º CRP], bem como de "Liberdade de [...] organização empresarial" [artigo 80º al. d), da CRP], a que acrescem, como expressão daqueles, os poderes que a lei ordinária lhe confere, nessa qualidade de empregador, de "estabelecer os termos em que o trabalho deve ser prestado, dentro dos limites decorrentes do contrato e das normas que o regem" [artigo 97º do CT], e, para além de outros, os de "determinar o horário de trabalho do trabalhador, dentro dos limites da lei" [nº 1 do artigo 212º do CT]".

Como corolário do seu poder de direção, ínsito à celebração do contrato de trabalho, cabe à entidade empregadora, dentro dos limites legais e da regulamentação coletiva em vigor, estabelecer o horário de trabalho, como um dos instrumentos ao seu alcance com vista a uma correta organização técnico-produtiva. Objetivo este que só numa análise muito simplista pode ser encarado como sendo do interesse exclusivo da entidade empregadora: é que uma correta gestão terá como uma das facetas decisivas a manutenção do emprego dos seus trabalhadores e a otimização das suas condições de trabalho.

O próprio estabelecimento de um horário de trabalho acarreta inegáveis vantagens do ponto de vista do trabalhador: para além de tal determinação ser uma exigência da proteção da vida e da integridade física e psíquica do trabalhador, definindo os espaços de repouso e lazer necessários à salvaguarda da sua integração familiar e social, permite-lhe, conhecendo-o antecipadamente, orientar a sua própria vida pessoal e familiar de harmonia com o mesmo.

E chegados aqui a resposta à questão que nos ocupa terá de ser necessariamente negativa: não se verifica a inconstitucionalidade invocada - o direito à liberdade religiosa não é um direito absoluto, estando sujeito, com já vimos, "às restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos" (nº 1 do artigo 6º da CRP).

E um dos interesses constitucionalmente protegidos é a "liberdade de [...] organização empresarial"(artigo 80º, al. d), da CRP], interesse esse que não se limita, como aflorámos, ao ponto de vista do empregador - o sucesso da empresa acarretará, em condições normais, a manutenção dos contratos de trabalho dos seus trabalhadores e das condições de laboração destes e contribuirá, certamente, para o desenvolvimento da economia de um país. Por isso se entende que na base desta

consagração constitucional não esteve, exclusivamente, a preocupação da salvaguarda dos interesses económicos do empregador.

E não se deve perder de vista que o princípio constitucional da igualdade acarreta que se trate de forma igual o que é igual e de forma desigual aquilo que se apresenta como desigual: e que, por articulação com o artigo 41º da CRP, se ninguém poder ser prejudicado em função exclusivamente da sua religião ou credo, também não poderá ser beneficiado por mor das mesmas convicções, nomeadamente em confronto com outros trabalhadores de outras religiões ou sem religião alguma.

É certo que nem sempre será fácil encontrar um ponto de equilíbrio entre o direito à liberdade religiosa e os interesses tutelados da entidade empregadora. Mas certamente que o critério não poderá residir, única e exclusivamente, na circunstância de o primeiro ser um direito de caráter pessoal, como defende a apelante.

E é nosso modesto entendimento o que o referido artigo 14º da LLR não estabelece uma desproporção entre os interesses em potencial conflito.

Como refere Paula Meira Lourenço, in Os Deveres de Informação no Contrato de Trabalho, REDS 2003, Ano XLIV, n.os 1 e 2, pp. 29 e ss (citada, e relacionando esse ensinamento com o artigo 14º da LLR, por Júlio Gomes, ob. cit., pago 299, nota 803) "a atuação dos dois direitos fundamentais no direito privado não pode legitimar situações de incumprimento de obrigações, necessitando de se compaginar com a autonomia privada".

Tal disposição veio criar digamos uma solução de compromisso —que se não nos afigura desequilibrada— entre o direito do trabalhador em obedecer às suas convicções religiosas e em praticar o respetivo culto e o interesse empresarial do empregador, estabelecendo as 3 condições cumulativas para que se verifique a suspensão do contrato de trabalho.

E nem sequer alinhamos por algum "radicalismo" revelado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, quando, por decisão de 3/12/1996 (também citada por Júlio Gomes, ob. cit., pago 309), considerando que o despedimento não se devia às convicções religiosas do trabalhador, mas sim à inobservância dos horários, e que o trabalhador teria de cumprir as regras respeitantes aos horários e não tinha sido impedido de manifestar a sua religião, entendeu que o trabalhador, se considerasse incompatíveis as condições de trabalho com a sua religião, teria sempre a liberdade de se demitir, liberdade essa que era "a garantia fundamental do seu direito à liberdade de religião".

Salvo o devido respeito por tal decisão, essa "liberdade de demissão" está fortemente condicionada nos tempos que correm, atentos a crise económico-financeira de caráter mundial e o desemprego daí decorrente.

Mas se é certo que, como refere Júlio Gomes, ob. cit, pago 300, "a liberdade religiosa tem custos e que um crente tem consciência de que uma fé digna desse nome comporta sacrifícios", também o é que haverá casos em que, dentro do respeito de boa-fé que deve nortear os contratos, incluindo, naturalmente, o contrato de trabalho, será possível harmonizar os interesses em conflito, designada, mas não exclusivamente, através de um acordo entre o trabalhador e o empregador, no sentido do estabelecer de um regime de trabalho a tempo parcial, que exclua o período destinado ao culto.

E no que toca à alínea b) do nº 1 do artigo 14º da LLR, cuja inconstitucionalidade específica residirá, segundo a apelante, em não ser clara quanto ao membro do governo competente para se enviar a declaração em causa e por ser excessiva ao exigir o envio de uma nova declaração que já foi enviada para o registo das pessoas

coletivas religiosas, remetemos para o decidido no Ac. de 08/02/2007 do Tribunal Central Administrativo Norte (citado pela sentença recorrida e disponível em www.dgsi.pt). onde se afirma que o requisito formal contido em tal alínea introduz "[...] um fator de objetividade e de segurança fáctico-jurídica [...] evitando que uma parte importante do direito à liberdade religiosa (direito ao culto e à comemoração pública das festividades religiosas da própria religião), uma matéria e área tão sensível, ficasse na disponibilidade e à mercê da interpretação e entendimento subjetivo ou mesmo arbitrário da entidade empregadora ou da entidade diretiva do estabelecimento escolar, visando-se o evitar o apelo aos factos de "conhecimento público" e, assim, introduzir mais rigor e objetividade nesta sede. [...] Esta limitação ou restrição ao direito ter-se-ia, assim, como adequada, necessária e proporcional face aos outros interesses conflituantes em termos, desde logo, do reconhecimento e do respeito dos direitos e liberdades dos outros no confronto com aqueles, e, bem assim, do satisfazer de justas exigências e interesses em matéria de segurança e de disciplina pública em termos da relação de emprego, seja ele público ou privado, e do funcionamento do sistema escolar numa sociedade democrática".

E quanto ao "membro do Governo competente em razão da matéria" não será difícil descortinar, face à composição em cada momento do mesmo Governo, qual será - à data o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social (comunicação essa que até foi dada como provada na providência cautelar, conforme fls. 71).

Por fim, refira-se que, em face do que se dispõe no nº 2 do artigo 18º da CRP e a tudo o que se acabou de explanar, carece de razão a apelante quando afirma, na conclusão 25ª do recurso, que a LLR não é uma lei restritiva de previsão constitucional.

Assim improcedendo as conclusões do recurso, nesta parte.

– a existência de infração disciplinar e a justa causa:

  Atenta a data de ocorrência dos factos, encontra aqui aplicação o Código do Trabalho (CT) aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12/2.

  A justa causa de despedimento está definida no artigo 351º, nº 1, do CT como o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho.

  É necessário que haja um comportamento culposo do trabalhador; a justa causa tem a natureza de uma infração disciplinar, supondo uma ação ou omissão imputável ao trabalhador a título de culpa, violadora dos deveres a que o trabalhador, como tal, está sujeito, isto é, dos deveres emergentes do vínculo contratual.

  Enuncia o legislador, no nº 2 do mesmo preceito e a título meramente exemplificativo (nomeadamente), diversos comportamentos suscetíveis de constituírem justa causa do despedimento de um trabalhador pela sua entidade patronal.

Não basta, porém, a demonstração de qualquer dos referidos comportamentos, para que se possa ter por verificada a justa causa para despedimento. Com efeito e conforme decorre daquele conceito, a justa causa de despedimento exige a verificação cumulativa de três requisitos ou pressupostos:

– a existência de um comportamento culposo do trabalhador (requisito subjetivo);
– a verificação da impossibilidade de manutenção da relação laboral entre o trabalhador e o empregador (requisito objetivo);

– a existência de um nexo de causalidade entre aquele comportamento e esta impossibilidade.

A justa causa de despedimento, pressupõe, portanto, a existência de uma determinada ação ou omissão imputável ao trabalhador a título de culpa, violadora de deveres emergentes do vínculo contratual estabelecido entre si e o empregador e que pela sua gravidade e consequências torne imediata e praticamente impossível a manutenção desse vínculo.

Como tal, importa desde já averiguar da existência de infração disciplinar que possa ser assacada à Autora, tal como concluiu a Ré e a sentença recorrida confirmou.

Quanto a isto, e contrariamente ao que a Autora - apelante aflora, por diversas vezes, ao longo da sua alegação de recurso, é bom que se esclareça que nada indicia que o despedimento tenha ocorrido unicamente por motivos religiosos, em razão da crença religiosa adotada pela trabalhadora.

Fosse esse o caso, e quedar-nos-íamos por aqui, considerando, sem mais, o despedimento como ilícito.

O que a Ré imputou à Autora, e a sentença considerou como tal, foi a existência de faltas injustificadas da Autora —desde o pôr do sol até ao termo do turno de sexta-feira— e desobediência a ordens legítimas, que lhe impunham a prestação de trabalho suplementar ao sábado.

Ficou provado, com relevância para esta matéria:

– no setor de produção, ao qual se encontrava adstrita a Autora, a Ré tem instituido, desde 20 de agosto de 2007, um regime de trabalho por turnos rotativos;
– em 2009, até 31 de agosto, os turnos a que a Autora se encontrava adstrita eram os das 07h00 às 15h00, ou das 15h00 às 23h00;
– a partir de 1 de setembro de 2009, os turnos a que a Autora estava adstrita passaram a ser das 07h30 às 15h30 ou das 15h30 às 23h30;
– desde 01 de janeiro até 31 de agosto de 2009, quando se encontrava adstrita ao turno das 15h00 às 23h.00 a Autora faltou ao serviço nos dias e horas discriminados no ponto H. e L, num total de 66h e 17 m, equivalendo a oito dias e mais 2h e 17 m;
– todas estas faltas, com exceção das dadas nos dias 26 de fevereiro (14 minutos) e 07 de maio (10 minutos), correspondem a períodos de trabalho às sextas-feiras;
– nessas sextas-feiras, encontrando-se escalada no segundo turno, assim que atingia a hora do pôr do sol, a Autora abandonava o seu posto de trabalho, bem sabendo que não estava autorizada para o fazer e consciente que o não podia fazer;
– o processo disciplinar que conduziu ao seu despedimento foi o quinto processo disciplinar instaurado à Autora com fundamento em faltas injustificadas, por abandonar o seu posto de trabalho no decurso do seu período normal de trabalho;
– na sequência dos anteriores processos disciplinares foram-lhe aplicadas, respetivamente, as sanções de repreensão registada de 2, 15 e 30 dias de suspensão do trabalho com perda de retribuição e de antiguidade.
– o último processo disciplinar, anterior a este que conduziu ao seu despedimento, já havia sido instaurado com intenção de despedimento, tendo tal sanção sido convolada numa sanção de 30 dias de suspensão e alertada a Autora que a empresa lhe estava a dar uma última oportunidade;

- a atividade da empresa está organizada por turnos, usando o sábado para trabalho suplementar, estando a empresa encerrada ao domingo;
- a Autora não pretende prestar trabalho aos sábados;
- a partir de 2007, por mais do que uma vez, a Autora foi chamada à atenção, nomeadamente pela responsável pelos recursos humanos da Ré e pela chefe de produção da Ré, suas superiores hierárquicas, de que não podia abandonar o seu posto de trabalho às sextas-feiras, antes do termo do período normal de trabalho;
- a falta da Autora no decurso do seu período normal de trabalho, e na linha de montagem onde está colocada, afetava a execução do trabalho, interrompendo a sequência de tarefas, originando um decréscimo na produção;
- no mês de agosto do ano de 1995, a Autora converteu-se à fé cristã, tendo integrado a Igreja Adventista do Sétimo Dia;
- entre outras doutrinas adotadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, e observadas pelos seus membros, o dia de guarda é ao sábado, considerando-se o período desde o pôr do sol de sexta-feira até ao pôr do sol de sábado;
- quando era solicitada para realizar trabalho em dia de sábado, a Autora informava a chefe de produção de que não estaria disponível para realizar trabalho nesse dia, por professar religião cujo período de descanso era desde o pôr do sol de sexta-feira até ao pôr do sol de sábado, o que a impedia de trabalhar naquele período;
- nas vezes em que foi chamada à atenção pela responsável de recursos humanos e pela chefe de produção, no sentido de que não podia abandonar o seu posto de trabalho às sextas-feiras, antes do termo do período normal de trabalho, a Autora invocava professar religião cujo período de descanso era desde o pôr do sol de sexta-feira até ao pôr do sol de sábado, o que a impedia de trabalhar naquele período.

O que está aqui em causa é se tal comportamento da Autora foi justificado, à luz do referido nº 1 do artigo 14º da LLR.

Já vimos que esta norma estabelece requisitos cumulativos, de modo a poder considerar-se suspenso o contrato de trabalho, designadamente para a prática do culto inerente à religião professada pelo trabalhador.

Salientando, e bem, que tal ausência, permitida por essa norma, consubstancia um suspensão do contrato de trabalho, e não qualquer situação de faltas justificadas, a sentença recorrida enuncia, mais uma vez acertadamente, as condições cumulativas para o exercício pela Autora do direito consagrado no artigo 14º da LLR:

a) Ser a A. membro de igreja ou comunidade religiosa inscrita;
b) Que esta tenha feito a comunicação a que se refere a al. b), do nº 1, indicando os dias de festividade e períodos horários que sejam prescritos pela sua confissão, cuja observância colida com o horário definido para a prestação de trabalho;
c) Que previamente apresente pedido junto da entidade empregadora para suspensão da prestação de trabalho, naqueles dias de festividade ou/e nos períodos horários que sejam prescritos pela sua confissão e cuja observância colida com o seu horário de trabalho;
d) Que trabalhe em regime de flexibilidade de horário de trabalho;
e) Que seja possível a compensação integral do respetivo período de trabalho e que a tal se disponha.

Estando verificada essa primeira condição, e não tendo a Ré levantado qualquer objeção quanto a uma eventual comunicação nos termos da al. b), que aliás, e como já dissemos, ficou provada na providência cautelar, temos que, pese embora não tivesse ficado provado que a Autora o tenha invocado sempre, para as suas ausências, dúvidas não há, face ao conjunto do circunstancialismo provado e ao próprio fundamento dos processos disciplinares anteriormente movidos contra a Autora, e que resultaram, na sua totalidade, em sanções disciplinares, que a Ré tinha a perfeita noção de que as ausências da Autora à sexta-feira e a recusa em prestar trabalho ao sábado estavam relacionadas com a observância, por parte da trabalhadora, como dia de guarda, do sábado, compreendendo-se o período desde o pôr do sol de sexta-feira até ao pôr do sol de sábado.

As dificuldades residem em saber o que quis o legislador da LLR dizer com a adoção do conceito de horário de trabalho flexível, a que se refere a alínea a) do nº 1 do artigo 14º de tal lei. É que este diploma legal nada diz a esse respeito.

Relembrando tudo quanto já se disse a propósito da alegada inconstitucionalidade daquela disposição legal, o que se pretendeu com esta foi harmonizar dois direitos potencialmente em conflito: o direito do trabalhador à liberdade religiosa e o direito do empregador à correta gestão dos meios humanos ao seu dispor. Sempre com a preocupação que o exercício do direito do trabalhador não acarrete, para um empregador, um prejuízo injustificado e desproporcionado.

Procurando a melhor interpretação para esse "regime de flexibilidade", em relação ao qual o CT de 2009 também nada define expressamente, o Sr. Juiz socorre-se do que neste Código se estabelece quanto à duração e organização do tempo de trabalho, constante dos arts. 197º a 231º, e conclui que o legislador "não tinha em mente um determinado esquema preciso de distribuição das horas do período normal de trabalho, antes querendo deixar um conceito aberto, de modo a abranger qualquer regime de trabalho que se distancie dos esquemas em que a característica seja a fixidez. Essa solução impôs-se como uma necessidade para possibilitar a condição a que se refere a al. c), ou seja, a compensação integral do respetivo período de trabalho durante o qual ocorra a suspensão, para exercício do direito de liberdade religiosa. Na verdade, não se descortina a possibilidade prática de assegurar a compensação por parte de alguém que trabalhe diariamente sujeito a um horário fixo".

Concordamos em absoluto com tal asserção, tanto mais que ela vai de encontro ao que Monteiro Fernandes, in Direito do Trabalho, 12ª edição, pago 336, define como "horário flexível": "em que estão delimitados períodos de presença obrigatória do trabalhador, mas podendo este, com respeito por esses períodos, escolher, dentro de certas margens, as horas de entrada e saída do trabalho, e modo a cumprir o PNT [...] a que está obrigado (ex: o PNT é de 40 horas semanais; o período de presença obrigatória diária é das 10 h às 12h.30 m. e das 15 h às 17h.30 m.; o trabalhador pode, em cada dia, entrar ao serviço entre as 8 e as 10h, interromper para almoço entre as 12h30 m e as 15h, e escolher a hora de saída entre as 17h 30 m. e as 19h. 30 m.; mas terá de cumprir as 40 horas de trabalho por semana)".

E devendo compatibilizar-se esse regime de trabalho flexível com a possibilidade de compensação prevista na alínea c) do nº 1 do artigo 14º, facilmente se compreende que neste exemplo dado por aquele Ilustre Autor seja mais do que viável o trabalhador compensar o período de ausência para a prática do culto religioso.

Também a sentença recorrida dá dois exemplos felizes de situações de flexibilidade de horário (os assistentes de bordo e os delegados de propagando médica). E refere que "Assim, o trabalhador prestará a sua atividade em regime de flexibi-

lidade de horário quando, no interesse da entidade empregadora —radicado na organização do seu funcionamento, porque desse modo proporciona a obtenção da utilidade da força de trabalho à disposição daquela— tenha sido estabelecido um esquema em que aquela prestação, contendo-se nos limites legais do período normal de trabalho, possa ter hora variável de entrada e saída, dependendo tal de determinadas circunstâncias ou condições ou sendo gerido pelo trabalhador, em qualquer caso tendo em vista uma melhor eficácia da sua prestação".

Concluindo, temos que o trabalhador, em ordem a ver observado o direito consagrado no artigo 14º da LLR, e assim poder professar, com toda a sua amplitude, a sua confissão religiosa, terá que estar sujeito a um regime de flexibilidade de horário [al. a)], exigindo-se, cumulativamente, que proceda à "compensação integral do respetivo período de trabalho" [al. b)] que deixou de prestar para poder comemorar as festividades ou observar o período de culto prescritos por aquela confissão.

No caso que nos ocupa, ficou provado que, a partir de 20 de agosto de 2007, a Ré organizou o funcionamento do setor de produção onde a Autora exercia funções em regime de turnos rotativos; até 31 de agosto de 2009, os turnos a que a Autora se encontrava adstrita eram das 07h00 às 15h00 ou das 15h00 às 23h00; e, a partir de 1 de setembro de 2009, passaram a ser das 07h30 às 15h30 ou das 15h30 às 23h30.

De acordo com a conceitualização que se considerou adequada do "regime de trabalho flexível", temos por certo que não era esse o caso da prestação do trabalho da Autora.

Com efeito, não é por trabalhar em regime de turnos que se verifica essa flexibilidade. As horas de início e termo do período normal diário estavam perfeitamente determinados e eram fixos, apenas alternando em função da rotação do turno. E esse caráter fixo é precisamente o oposto de flexibilidade de horário.

Por outro lado, não era de todo possível a "compensação": estando o regime de trabalho organizado por turnos, utilizando-se o sábado —precisamente o dia em que a Autora estava "impedida" pela sua opção religiosa— para trabalho suplementar e não laborando a Ré ao domingo, não haveria qualquer hipótese de a Autora trabalhar em outro qualquer período. E a compensação, como adverte o Sr. Juiz, não pressupõe apenas que o trabalhador se disponibilize ou a ela fique obrigado, mas também que seja possível à entidade empregadora receber essa compensação, sem prejuízo da sua normal organização de recursos.

Não se verificam assim, esses requisitos das als. a) e c), por forma a conferir à Autora o direito, por virtude da sua confissão religiosa, de se ausentar do trabalho à sexta-feira, a partir do pôr do sol, e de se recusar a prestar trabalho suplementar ao sábado.

A conclusão idêntica se chegaria mesmo que se considerasse —e não é o caso, reafirma-se— que o regime de trabalho por turnos cabia dentro daquele conceito de flexibilidade de horário.

Segundo Júlio Gomes, ob. cit., pago 299, que não reporta este seu entendimento ao regime legal da LLR, a solução ideal de compatibilizar os interesse em conflito, em situações como a que nos ocupa seria a seguinte:

"[...] a boa-fé pode impor ao empregador que faça um esforço razoável para adaptar o funcionamento da empresa às necessidades religiosas dos seus trabalhadores, atendendo ao caso concreto e evitando fazer ao empregador exigências excessivas. Queremos, com isto, destacar que numa pequena empresa, com um número reduzido de trabalhadores, pode revelar-se muito difícil —e não exigível—

garantir ao um trabalhador judeu ou adventista que não trabalhe ao sábado, mas o mesmo poderá não ser verdade numa empresa com centenas de trabalhadores".

Ou seja, poder-se-ia equacionar, no caso concreto, a possibilidade de troca do segundo turno (que terminava às 23 horas e, a partir de setembro de 2009, às 23h30 horas) da sexta-feira, quando a Autora para ele estivesse escalada, com outro trabalhador, e a dispensa sistemática da Autora do trabalho suplementar ao sábado, para assim dar satisfação ao seu direito de observar o período de culto da sua religião.

Isso mesmo é defendido pela apelante quando invoca o disposto no artigo 570º do Cod. Civil, para avaliação da responsabilidade disciplinar da Autora, sustentando que a culpa da Ré existiria, concorrendo com a dela, já que a Ré sempre teve turnos que podia ter atribuido à Autora que não a impediriam de cumprir o período de guarda religiosamente ditado, ou seja, os turnos das 07h às 15h, entre 2007 e 2009 e os turnos das 07h30 às 15h30min, a partir de 2009.

Só que, nestas hipóteses, estaríamos perante um clara violação do princípio constitucional da igualdade: com efeito, a troca de turnos implicaria que fosse afetado um qualquer outro trabalhador, onerando-o com obrigatoriedade de prestar trabalho nesse período em que a Autora seria dispensada.

Como é sabido, existe uma especial penosidade no regime de trabalho por turnos, que mais se acentua quando o turno coincide com período noturno. Daí que, no regime de turnos rotativos do género do que observava a Ré, a entidade empregadora proceda a uma alternância entre os seus trabalhadores, normalmente semanal, por forma a que, em cada semana, o trabalhador preste serviço num primeiro turno e na semana seguinte no outro turno. Atender a pretensão da Autora implicaria que um qualquer outro trabalhador que na sexta-feira anterior tivesse prestado trabalho no último turno tivesse que o fazer novamente na sexta-feira seguinte.

E conceder a dispensa do trabalho suplementar ao sábado à Autora implicaria que a Ré adotasse uma regra em contrário dos demais, que a ele estavam obrigados.

Estaríamos claramente perante uma discriminação negativa, em que o trabalhador que professasse religião diferente ou não professasse religião alguma era inequivocamente penalizado por confronto com a situação da Autora. E não é difícil descortinar, porque vulgares, situações em que o trabalhador, professando a religião católica, presta trabalho suplementar ao domingo, que é dia de culto de tal religião, já para não falar dos feriados de caráter religioso.

Também não tem razão a Autora quando invoca (nada dizendo em termos de o fundamentar juridicamente) que a Ré ignorou um" direito adquirido", já que, e segundo ela, durante onze dos dezoito anos de relação laboral com a Ré, isto é, entre 1995 e 2007, a Autora nunca trabalhou ao serviço da Ré em horário de trabalho que entrasse em confronto com a observância do dia de guarda da sua religião, à qual se converteu em 1995, e, durante todo esse tempo, nunca foi levantada pela Ré qualquer questão de ordem técnica ou disciplinar que estivesse relacionada com a observação do dia de guarda da religião por si professada.

Esquece-se, todavia, a Autora que só a partir de 20 de agosto de 2007 é que a Ré instituiu, no setor de produção, ao qual se encontrava adstrita a Autora, um regime de trabalho por turnos rotativos. Assim, mesmo que a Ré tivesse mostrado, antes dessa data, alguma tolerância em permitir que a Autora saísse mais cedo, antes do pôr do sol de sexta-feira, tal nunca poderia constitui uma expectativa juridicamente tutelada, precisamente porque as condições de trabalho, no que respeito ao período de prestação do mesmo, se alteraram substancialmente.

Finalmente, e no que respeita à alegação do conflito de interesses, dando a lei civil preferência aos valores pessoais sobre os patrimoniais, estribando-se a Autora no disposto no artigo 335º do Cód. Civil, limitamo-nos a remeter para o que já foi dito, a esse respeito, aquando da abordagem da inconstitucionalidade invocada.

Chegados aqui, não podem restar dúvidas da existência de infração disciplinar por banda da Autora.

Entre os deveres impostos ao trabalhador, e elencados no artigo 128º do CT, estão os de "Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade" [al. b) do nº 1], de "Realizar o trabalho com zelo e diligência" [al. e) do nº 1] e de "Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes à execução ou disciplina do trabalho [...] que não sejam contrárias aos seus direitos e garantias" [al. e) do nº 1].

Por outro lado, estabelece o artigo 227º, nº 3, que "o trabalhador é obrigado a realizar a prestação de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos atendíveis, expressamente solicite dispensa".

Como resultou provado, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2009, quando o turno às sextas-feiras se iniciava à tarde e tinha o seu termo à noite, a Autora ausentava-se do trabalho, assim que atingia a hora do pôr do sol, perfazendo o somatório dos períodos de ausência de cada um desses dias o total de 65 horas e 53 minutos.

Sendo que, em relação à situação da Autora, está, como vimos, excluida a possibilidade de aplicação do regime previsto no artigo 14º da lei de Liberdade Religiosa, essas ausências, não autorizada nem justificadas, constituem faltas injustificadas, com a inerente violação dos deveres de assiduidade e pontualidade.

E não tendo apresentado, nem existindo, motivo atendível para a recusa de prestação de trabalho suplementar, verifica-se a violação, por parte da Autora e reiteradamente, do dever de obediência, sendo que desde 2007 que vinha sendo chamada à atenção pelas suas superiores hierárquicas por recusar prestar trabalho suplementar ao sábado —prestação a que estava obrigada— e que lhe foram movidos quatro processos disciplinares e aplicadas sanções sucessivamente mais graves.

Mas como se disse, não basta a singela existência de uma infração disciplinar por banda do trabalhador para que se possa concluir pela impossibilidade prática e imediata da subsistência do contrato, que consubstancia a justa causa de despedimento.

Sendo o despedimento a mais grave das sanções, para que a atuação do trabalhador integre justa causa é ainda necessário que seja grave em si mesma e nas suas consequências.

O comportamento culposo do trabalhador só integrará justa causa de despedimento quando determine a impossibilidade prática da subsistência da relação de trabalho, o que acontecerá sempre que a rutura seja irremediável, isto é, sempre que nenhuma outra sanção seja suscetível de sanar a crise contratual grave aberta com aquele comportamento.

Daí que não basta que o comportamento se integre numa das hipóteses exemplificativas do nº 2 desse artigo 351º, não basta a prova da materialidade dos factos, sendo necessário que os mesmos, pela sua gravidade e consequências, tornem imediata e praticamente impossível a relação de trabalho.

Quanto à impossibilidade prática de subsistência da relação laboral e citando, entre outros, o Ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 30/04/2003, Proc. nº 02S568, disponível em www.dgsi.pt. a mesma verifica-se "quando ocorra uma situação de absoluta quebra de confiança entre a entidade patronal e o trabalhador, suscetível de criar no espírito da primeira a dúvida, sobre a idoneidade futura da conduta do

último, deixando de existir o suporte psicológico mínimo para o desenvolvimento dessa relação laboral".

Ainda de acordo com o mesmo aresto, citando, aliás, Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, Almedina, 11a Edição, pago 540-541., "Não se trata, evidentemente, de uma impossibilidade material, mas de uma inexigibilidade, determinada mediante um balanço in concreto dos interesses em presença - fundamentalmente o da urgência da desvinculação e o da conservação do vínculo [...]. Basicamente preenche-se a justa causa com situações que, em concreto (isto é, perante a realidade das relações de trabalho em que incidam e as circunstâncias específicas que rodeiam tais situações), tornem inexigível ao contraente interessado na desvinculação o respeito pelas garantias de estabilidade do vínculo".

Acresce ainda que, sendo o despedimento a sanção disciplinar mais grave, a mesma só deve ser aplicada nos casos de real gravidade, isto é, quando o comportamento culposo do trabalhador for de tal forma grave em si e pelas suas consequências que se revele inadequada para o caso a adoção de uma sanção corretiva ou conservatória da relação laboral.

E porque não basta um comportamento culposo, sendo também necessário que ele seja grave em si mesmo e nas suas consequências, gravidade que deverá ser apreciada em termos objetivos e concretos, no âmbito da organização e ambiente da empresa, e não com base naquilo que o empresário subjetivamente considere como tal, é que o nº 3 do artigo 351º do CT determina que: "Na apreciação da justa causa deve atender-se, no quadro da gestão da empresa, ao grau de lesão dos interesses do empregador, ao caráter das relações entre as partes ou entre o trabalhador e seus companheiros e às demais circunstâncias que no caso se mostrem relevantes".

Para além desta ideia básica de justa causa, o artigo 351º do CT consagra um elenco exemplificativo de justas causas típicas, no seu nº 2, mas em que os diversos termos nele compreendidos devem, todavia, preencher os requisitos subjacentes à ideia básica de justa causa a que alude o seu nº 1.

Entre os comportamentos do trabalhador suscetíveis de integrar o conceito de justa causa temos a "Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierarquicamente superiores", o "Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, de obrigações inerentes ao exercício do cargo ou do posto de trabalho a que está afeto" e as "Faltas não justificadas ao trabalho que determinem diretamente prejuízos ou riscos graves para a empresa" - als. a), d) e g) do nº 2 do artigo 351º Posto é, contudo, e como se disse, que tais práticas tornem imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho, não bastando a verificação de um desses comportamentos, pois esse nº 2 apenas se reporta ao primeiro elemento (comportamento culposo), sendo necessário que se verifiquem os restantes pressupostos referidos no nº 1 para que se conclua pela existência de justa causa de despedimento.

Não esquecendo que, como já se referiu, a justa causa postula sempre uma infração, ou seja, uma ação ou omissão, de deveres legais ou contratuais. Esse ato ilícito culposo, que pode assentar em ação ou omissão do prestador de trabalho, será necessariamente derivado da violação de deveres obrigacionais principais, secundários ou de deveres acessórios de conduta, relacionados com a boa fé no cumprimento do contrato.

E o que é certo é que, no caso concreto, e como se decidiu na sentença, a factualidade provada é no sentido de concluir que a conduta da Autora abriu tal crise contratual grave.

Como se disse, assumiu um comportamento reiterado de ausência ao trabalho, a partir do pôr do sol da sexta-feira em que teria de cumprir o turno que terminava às 23 ou às 23h30 horas, e de desobediência a ordens legítimas da entidade empregadora de prestar trabalho ao sábado, sendo que a justificação apresentada não tem acolhimento legal no citado artigo 14º, nº 1, da LLR.

A partir de 2007, por mais do que uma vez, a Autora foi chamada à atenção, nomeadamente pela responsável pelos recursos humanos e pela chefe de produção da Ré, suas superiores hierárquicas, de que não podia abandonar o seu posto de trabalho às sextas-feiras, antes do termo do período normal de trabalho.

A Autora estava inserida numa linha de montagem, na fase de embalagem, a qual funcionava de uma forma sequencial, e cujo normal funcionamento depende do trabalho de todas as trabalhadoras que a integram.

A falta da Autora no decurso do seu período normal de trabalho e na linha de montagem onde estava colocada afetava a execução do trabalho, interrompendo a sequência de tarefas, originando um decréscimo na produção, causando, assim, um claro prejuízo à Ré, circunstâncias que a Autora bem conhecia.

Pelos mesmos motivos, havia já sido alvo de 4 anteriores processos disciplinares, que culminaram com sanções progressivamente mais gravosas. Apesar disso, não se coibiu de continuar esse seu comportamento de faltas injustificadas e de desobediência.

Não se tratou, pois, de uma conduta pontual, antes se repetindo, sendo certo que a Autora bem sabia que não estava autorizada a agir assim.

Sendo que o comportamento do trabalhador tem de ser analisado na perspetiva da sua projeção sobre o vínculo laboral, em atenção às funções que ele exerce e à possibilidade de estas subsistirem sem lesão irremediável dos deveres fundamentais inerentes, não era exigível à Ré, face ao passado disciplinar da Autora e às circunstâncias de facto, exatamente as mesmas em que fundou o despedimento, que estiveram na base dos procedimentos disciplinares anteriores, que optasse por sanção conservatória do vínculo laboral.

Improcedendo, assim e também nesta parte, as conclusões do recurso.

Decisão:

Nesta conformidade, acorda-se em negar provimento à apelação, confirmando-se a douta sentença recorrida".

4.3.– Deste acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa veio interposto o presente recurso de constitucionalidade, ao abrigo da alínea b) do nº 1 do artigo 70º da LTC, formulado nos seguintes termos (cf. fls. 446 a 452):

"Natália da Silva Alves e Silva, A. e Recorrente nos autos supra referidos em que é R. e Recorrida Codan Portugal - Instrumentos Médicos, S. A., notificada a 19 de dezembro de 2011, na pessoa do seu Mandatário, do Acórdão proferido nos presentes autos, que negou provimento à apelação por si apresentada, confirmando a sentença do Tribunal do Trabalho de Loures, por si recorrida, vem, por com ela não se conformar, expor e requerer o seguinte:

1º Têm os presentes autos origem na decisão de 1ª instância, tomada pelo Mmo. Juiz do Tribunal do Trabalho de Loures, que considerou existir justa causa para o despedimento da A. e Recorrente, promovido pela R. e Recorrida Codan;

2º Dando como improcedentes as alegações feitas no processo, não acompanhando a posição da A. no que respeita à violação, por parte da entidade empregadora, do seu direito constitucional de liberdade religiosa, consagrado no artigo 41º

da Constituição da República Portuguesa (CRP) diretamente aplicável, e, naturalmente, do princípio da igualdade, previsto no artigo 13º da CRP, que prevê que a todo o cidadão é reconhecida, entre outras, a possibilidade de ter ou não religião, mudar de religião e praticá-la, devendo o seu exercício ser livre de qualquer pressão, coação ou impedimento;

3º Sendo certo que com a alusão feita pela R. e Recorrida ao não preenchimento dos requisitos legais cumulativos previstos no artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa (Lei nº 16/2001 de 22 de junho, de ora em diante LLR), que é lei ordinária, para se negar à Recorrente o exercício da sua liberdade religiosa não se pode a mesma conformar, pois considera tal normativo legal inconstitucional;

4º O que, desde logo, foi referido na contestação ao articulado de motivação apresentado pela antiga entidade empregadora, bem como nas alegações apresentadas a este Tribunal a quo.

5º Com efeito, o artigo 14º da LLR, ao prever requisitos cumulativos para o exercício de um direito fundamental constitucionalmente consagrado, restringe e condiciona —a nosso ver— de forma ilícita, à luz da CRP., cartilha essencial para a sua interpretação, o seu exercício pois:

6º Atendendo a que a A. e Recorrente considera o nº 1 do artigo 14º e as suas alíneas da LLR inconstitucionais, não pode deixar de concluir que a ordem dada pela sua antiga entidade empregadora de negar o exercício do seu período de guarda era uma ordem ilegítima e, logo, a sua desobediência era lícita e legítima, não havendo, portanto, a justa causa alegada pela R. e confirmada pelo Tribunal de 1ª Instância e Tribunal da Relação de Lisboa.

7º Exatamente por inconformada com o seu despedimento, recorreu a A. do mesmo judicialmente, tendo desde logo sido levantada a questão, e referida, como fundamentação, a inconstitucionalidade material da citada norma 14º da LLR, conforme contestação articulada ao articulado motivador da R. e Recorrida.

8º No entanto, foi proferida sentença que deu como improcedente o seu pedido, sentença esta da qual a A. recorreu, tendo voltado a alegar a dita inconstitucionalidade do nº 1 do artigo 14º da LLR, por violação do princípio da igualdade e da liberdade religiosa, constitucionalmente consagrados 13º e 41º da CRP, conforme alegações apresentadas junto deste Tribunal, e condensadas nas conclusões, mormente, as numeradas de 15 a 46.

9º Contudo, o Tribunal a quo decidiu manter a decisão do Mmo. Juiz de 1ª Instância, não reconhecendo a existência da invocada inconstitucionalidade.

10º Pelo exposto, e face ao que dita o nº 2 do artigo 70º da lei do Tribunal Constitucional (de ora em diante, LTC, aprovada pela Lei nº 28/82 de 15 de novembro, atualizada consecutivamente pelas Lei nº 143/85, de 26/11, Lei nº 85/89, de 07/09, Declaração de 3/11 de 1989, Lei nº 88/95, de 01/09, Lei nº 13-A/98, de 26/02, Retificação nº 10/98, de 23/05 e Lei Orgânica nº 1/2011, de 30/11;

11º Encontra-se a Recorrente face a uma situação irremediável onde, nos presentes autos, já estão completamente esgotados todos os meios e recursos jurisdicionais ordinários, atentos às alterações impostas pelo Decreto-Lei nº 303/2007, de 24 de agosto, que veio reformular a arquitetura do sistema de recursos cíveis, sendo que tal matéria, e respetivas alterações, são aplicáveis, ex vi artigo 11º deste diploma, a todos os processos que não estivessem pendentes à data da sua entrada em vigor, 1 de janeiro de 2008, conforme artigo 12º do mesmo decreto-lei - o que é, manifestamente, o caso do processo sub judice;

12º Pelo que não pode a A. Recorrente apelar da decisão deste Tribunal da Relação, conforme artigo 691º do C.P.C., de 2ª instância, pois atualmente só são

admitidos recursos para o Supremo Tribunal de Justiça que sejam recursos de revista, nos termos do artigo 721º do CPC;

13º E, mesmo dentro deste âmbito, apenas são admitidos recursos em circunstâncias excecionais, não sendo admitidos recursos de acórdãos do Tribunal da Relação que confirmem a decisão proferida em 1ª instância, sem votos de vencido —que é o caso— não se aplicando, sequer, qualquer uma das exceções admitidas por lei, e previstas no artigo 721º-A do CPC.

14º Não há, portanto, recurso ordinário que possibilite à A. Recorrente, atendendo ao disposto no artigo 280º da Constituição, reagir contra a decisão da aplicação da supra referida norma da LLR com a qual continua a não poder conformar-se;

15º E de cuja inconstitucionalidade continua inabalavelmente persuadida, quer não só do ponto de vista material, mas também da que resulta da desconformidade com a intenção do legislador constitucional, bem como da própria LLR, artigo 1º, onde estão estabelecidos os elementos interpretativos da dita lei da liberdade religiosa (primeiro, a CRP e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, bem como o direito internacional aplicável e a própria lei), fugindo ainda a interpretação que não a considere inconstitucional ao respeito pelo princípio constitucional da igualdade, já referido.

16º Posto isto, e porque a Recorrente continua inconformada com a decisão proferida por este Tribunal da Relação de Lisboa, que decidiu julgar conforme com o texto constitucional —nomeadamente, artigos 13º e 41º da CRP— a norma constante do artigo 14º, nº 1 da LLR e suas alíneas cumulativas;

17º Vem agora a mesma, porque em tempo, e porque para tal tem legitimidade, nos termos da alínea b) do nº 1 do artigo 72º da LTC, interpor recurso para o Tribunal Constitucional;

18º Recurso este que deverá subir imediatamente e nos próprios autos, com efeito meramente devolutivo, nos termos dos artigos 79º, alínea a), 79º-A, nº 1 do C.P.T. ex vi nº 4 do artigo 78º da LTC.

19º Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 75º-A da LTC, desde já se esclarece que, com o presente recurso, pretende a Recorrente que o Tribunal Constitucional aprecie a inconstitucionalidade e a desconformidade do nº 1 do artigo 14º da LLR e suas alíneas cumulativas:

Artigo 14º

Dispensa do trabalho, de aulas e de provas por motivo religioso

1.– Os funcionários e agentes do Estado e demais entidades públicas, bem como os trabalhadores em regime de contrato de trabalho, têm o direito de, a seu pedido, suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam, nas seguintes condições:

a) Trabalharem em regime de flexibilidade de horário;

b) Serem membros de igreja ou comunidade religiosa inscrita que enviou no ano anterior ao membro do Governo competente em razão da matéria a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso;

c) Haver compensação integral do respetivo período de trabalho.

20º Com os mais básicos princípios constitucionais, nos termos do disposto nas alíneas b), e f) do nº 1 do artigo 70º da LTC, ao abrigo das quais o presente recurso é interposto;

21º Nomeadamente, por manifesta violação do disposto no artigo 13º, nº 1 da CRP, no que toca ao princípio da igualdade nele previsto estabelecido, especialmente no que respeita ao igual tratamento dos trabalhadores, no que toca a

gozar do direito constitucional previsto no artigo 41º da lei fundamental, ou seja, a liberdade religiosa, assim também ilicitamente debulhado pela previsão legal;

22º Deparando-se a Recorrente com interpretação da antiga entidade empregadora e dos Tribunais de 1ª e 2ª Instância com interpretações ao arrepio do mandato constitucional previsto no artigo 16º, nº 2 da CRP, que dita que os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais —como é o caso— devem ser do Homem.

23º Ademais, considera-se também assim violado o disposto nos nº 1 e nº 3 do artigo 18º da CRP, cuja previsão sobre a força jurídica dos preceitos constitucionais, obriga a que os cânones constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias sejam diretamente aplicáveis, mais referindo que vinculam igualmente as entidades públicas e privadas, sendo certo que as leis restritivas dos direitos, liberdades e garantias não podem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.

24º Finalmente, e em consequência do já exposto nas alegações nas instâncias anteriores, há na decisão da Codan, confirmada pelos Tribunais de 1ª e 2ª Instância, manifesta violação do disposto no artigo 26º da Constituição, que estabelece no nº 1, a garantia constitucional de que a todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal e a proteção legal contra quaisquer formas de discriminação.,

25º Em suma, e porque a inconstitucionalidade material do nº 1 do artigo 14º da LLR é a génese do inconformismo da Recorrente com a decisão da sua antiga entidade empregadora e, depois, com as decisões jurisdicionais que se lhe seguiram;

26º E porque foi, desde logo, suscitada quer na contestação apresentada no Tribunal do Trabalho de Loures, quer nas suas alegações do recurso interposto para este Tribunal da Relação de Lisboa, referindo a violação das normas constitucionais supra referidas, mormente, o princípio da liberdade religiosa e todas com ela e com o seu exercício conexas;

27º Estão observados os formalismos legais previstos para o presente recurso, tem a Recorrente legitimidade, estando em tempo e estando representada por Advogado, nos termos e para efeitos dos artigos 72º nº 1 alínea b), 75º, nº 1, 75º A, nº 1 e nº 2 e 83º da LTC;

Requer-se a V. Exas. que desde já considerem validamente interposto recurso da decisão deste Tribunal da Relação de Lisboa para o Tribunal Constitucional, seguindo-se os ulteriores termos, indo as respetivas alegações que o motivarão ser produzidas já no Tribunal ad quem, de acordo com o disposto no artigo 79º da LTC e no prazo aí previsto, após notificação nos termos do artigo 78º-A, nº 5 do referido diploma legal".

4.4.– Notificada para apresentar alegações, faculdade exercida pela recorrente, foram desenvolvidos os fundamentos do seu pedido de julgamento de inconstitucionalidade da interpretação normativa do preceito invocado, ali se concluindo (cf. Alegações, Conclusões, fls. 498-507):

"Conclusões:

1.– O presente recurso tem por base a decisão de despedimento da Recorrente fundamentada na impossibilidade de a mesma poder exercer o seu direito de liberdade religiosa, na vertente de prestação de culto e respeitar o período de guarda da sua religião, com base numa leitura dos requisitos do nº 1 do artigo 14º da LLR que só se pode considerar violadora do princípio constitucional previsto no artigo 41º

da CRP (reforçado por via do nº 1 do artigo 8º da CRP e pela integração do mesmo direito fundamental do Homem no nosso ordenamento jurídico) e do princípio constitucional da igualdade, previsto no artigo 13º da CRP.

2.– Considera a Recorrente que ao prever requisitos cumulativos para o exercício de um direito fundamental constitucionalmente consagrado, o artigo 14º da LLR, restringe e condiciona —a se ver— de forma ilícita, à luz da CRP, cartilha essencial para a sua interpretação, o exercício do direito constitucional à liberdade religiosa e à igualdade entre trabalhadores, não podendo deixar de concluir que a ordem dada pela sua antiga entidade empregadora de negar o exercício do seu período de guarda era uma ordem ilegítima e, logo, a sua desobediência era lícita e legítima, não havendo, portanto, a justa causa alegada pela Recorrida e confirmada, a seu ver, mal, pelo Tribunal de 1ª Instância e pelo Tribunal da Relação de Lisboa;

3.– Mormente, entende a Recorrente que as alíneas do nº 1 do artigo 14º da LLR, em especial, a alínea a), são contrárias ao disposto no artigo 41º, no artigo 13º, nº 1, nos artigos 8º, nº 1 e nº 2 2 e 16º, nº 2, nos nº 1 a 3 do artigo 18º e no nº l do artigo 26º da CRP.

4.– Com efeito, a Recorrente —que trabalhou por conta da Recorrida desde o dia 11 de setembro de 1989— converteu-se no ano de 1995 à fé cristã, tendo integrado a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que, entre outras doutrinas adotadas e observadas pelos seus membros, tem como dia de guarda o Sábado, considerando-se este período o tempo entre o pôr do sol de Sexta-feira até ao pôr do sol de Sábado: é uma das 28 crenças basilares desta religião e a aceitação e cumprimento das mesmas é pré-requisito para integrar este credo.

5.– Ora, a partir de 20 de agosto de 2007, foi instituido na Recorrente um regime de trabalho por turnos rotativos, um de manhã, outro à tarde, sendo que, quando a Recorrente era solicitada para realizar trabalho ao Sábado, definido nos termos supra expostos (mormente, o turno da tarde de Sexta-feira que se prolongasse após o pôr do sol), insistentemente, durante anos, informou a chefe de produção de que não estaria disponível para realizar trabalho após essa hora, por professar religião cujo período de guarda era desde o pôr do sol de Sexta-feira até ao pôr-do-sol de Sábado, impedindo-a de trabalhar naquele período.

6.– Não obstante, a Recorrida sempre negou à Recorrente o exercício do seu direito à liberdade religiosa, por alusão ao não preenchimento dos requisitos legais cumulativos previstos no artigo 14º da Lei nº 16/2001 de 22 de junho, a LLR, e que é lei ordinária, tendo-se, enfim, por a Recorrente não trabalhar em regime de horário flexível negado à mesma o exercício da sua liberdade religiosa, despedindo-a após processo disciplinar, posição da entidade empregadora confirmada, ao arrepio da CRP, pela primeira e segunda instância.

7.– Efetivamente, a Recorrente entende ser diretamente atingido, no seu âmago, e com atuação da entidade empregadora e com as decisões dos tribunais, o seu direito constitucionalmente tutelado, desde logo, no artigo 41º da CRP, respeitante à liberdade de consciência, de religião e de culto, que é inviolável e que também está consagrado expressamente no artigo 9º da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, no artigo 18º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e no artigo 18º do Pacto internacional dos Direitos Civis e Políticos, preceitos por si só obrigatórios para o Estado Português, por via dos nº 1 dos artigos 8º e 16º da mesma CRP.

8.– Este direito fundamental é de tal modo importante que a CRP lhe dá proteção reforçada, outorgando-lhe o cunho de inviolável —apenas a par do que faz

para o direito à vida— e não permitindo a sua restrição, nem sequer em situações de estado de exceção constitucional, conforme artigo 26, nº 9 da CRP;

9.– É portanto inviolável a liberdade de consciência, a liberdade de religião e a liberdade de culto, encaradas tanto na vertente individual, como na vertente coletiva, e tanto dizendo respeito a condutas privadas, como a condutas públicas, nº 1 do artigo 18º da CRP, não sendo permitido qualquer constrangimento, tanto por entidades públicas (o legislador, os tribunais ordinários), como por entidades privadas (como a entidade empregadora) ao seu exercício, que inclui, naturalmente, a liberdade de observar dias de descanso e de celebrar as festas e cerimónias segundo os preceitos da própria religião em determinados dias.

10.– A proteção dada pela CRP a este direito tem tanto uma dimensão positiva, como negativa, no sentido de, por um lado, o Estado dever, à luz da CRP, assegurar que ninguém, nem o próprio, impede alguém de professar a sua fé, como no sentido de, por outro lado, o Estado dever propiciar e permitir a quem é crente de determinada religião o cumprimento dos deveres que dela decorram em termos de rituais, de família e de ensino.

11.– Assim, se o Estado, apesar de reconhecer aos cidadãos o direito de professarem uma religião, os puser em condições que os impeçam de a praticar, aí não haverá liberdade de religião, o mesmo sucedendo se não tratar de forma igualitária (assegurando a sua neutralidade religiosa) todas as confissões religiosas.

12.– Exatamente para proteger e dar uma dimensão concreta à proteção constitucional consagrada no artigo 41º da CRP, o legislador ordinário elaborou a LLR, pela Lei nº 16/2001 de 22 de junho: só que esta falha em respeitar o artigo 41º e 13º da CRP, no campo da previsão da sua aplicação prática, nomeadamente, no artigo 14º da LLR, respeitante às dispensas do trabalho, de aulas e de provas por motivo religioso.

13.– Na realidade, e antes da análise concreta, há que ter em atenção que a própria LLR pretende ser uma concretização do princípio prescrito na CRP, não se esquecendo sequer de repetir os princípios pelos quais se guia, mormente, liberdade de consciência, de religião e de culto —tanto em circunstâncias públicas como privadas, e de modo individual ou coletivo— o princípio da igualdade, o princípio da separação, o princípio da não confessionalidade do Estado e o princípio da tolerância, sublinhando a própria a não diminuição da proteção e validade e eficácia plena do direito à liberdade religiosa mesmo em estados constitucionais de sítio ou emergência.

14.– O problema surge quanto o nº 1 do artigo 14º da LLR prevê, para o exercício desse direito, três requisitos cumulativos cuja necessidade (e dificuldade) de preenchimento compromete seriamente os princípios constitucionais aqui em análise, por se entenderem postos em cheque por esta mesma norma ordinária.

15.– Na realidade, permitir apenas a funcionários e agentes do Estado e demais entidades públicas, bem como a trabalhadores em regime de contrato de trabalho o direito ao gozo de dias religiosos se e só quanto (a) trabalharem em regime de flexibilidade de horário, e quanto (b) a igreja ou comunidade religiosa inscrita tenha enviado no ano anterior ao membro do Governo competente em razão da matéria a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso e só quando (c) puder haver compensação integral do respetivo período de trabalho.

16.– Ora, tenha-se em mente que o dia de descanso semanal obrigatório para a religião da Recorrente é o Sábado e não o Domingo, como acontece para a maioria religiosa de Portugal, católica: daí se aplaudir a previsão expressa da possibilidade de dispensa do trabalho para crentes doutras fés que outro dia que não o Domingo

prevejam para o culto; o que já não se pode aplaudir é a restrição marcante, feita pela previsão legal, à possibilidade de gozar dessa dispensa, que, em termos práticos, fica vedada à maioria dos indivíduos trabalhadores e crentes praticantes, que não pode deixar de ser considerada inconstitucional.

17.– Com efeito, a restrição feita pela lei ordinária em discussão é inadmissível à luz da CRP, e, mesmo que assim não fosse, seria uma solução francamente desproporcional, cuja qualificação de inconstitucional também adviria por meio dessa interpretação.

18.– O artigo 41º da CRP não admite qualquer restrição, porque este direito não faz parte dos casos previstos constitucionalmente que admitam a criação de limites, conforme artigo 18º, nº 2 da CRP; pelo contrário, prevê-se expressamente o seu caráter inviolável, e a insusceptibilidade da sua suspensão em situação de estado de sítio ou emergência.

19.– Além disso, é diretamente aplicável e vincula imediatamente, tanto entidades públicas como privadas (nº 1 do mesmo artigo 18º da CRP), pelo que as alíneas do nº 1 do artigo 14º da LLR ao estabelecerem a restrição do direito em causa, sem a necessária autorização constitucional, padecem, imediatamente, de inconstitucionalidade material.

20.– Para além disto, mesmo que se previsse lei restritiva, esta nunca poderia atingir o seu conteúdo essencial, nem tão pouco diminuir a extensão e alcance do mesmo, pois tal equivaleria a negar-se a liberdade de religião; pelo contrário, ao Estado compete legislar para proteger com medidas concretas —e não para restringir— o direito previsto.

21.– Ora, o conteúdo essencial do direito à liberdade religiosa é atingido quando a limitação imposta não lhe deixa sentido útil, quando impede o seu exercício, que é exatamente a questão aqui em causa: a vedação à Recorrente de prestar culto no seu dia santo, tendo sido despedida por o fazer, com base no não preenchimento dos requisitos do nº 1 do artigo 14º da LLR.

22.– A questão foi, aliás, posta em torno do sacrifício do direito da entidade empregadora, mormente, o direito à autonomia privada e liberdade de empresa, também com assento constitucional, e é verdade é que qualquer lei restritiva só se justifica quanto serve para salvaguardar outros direitos ou interesses legalmente protegidos.

23.– Mas mesmo as restrições legais, nos termos do nº 3 do artigo 18º da CRP, e tanto mais em relação a um direito fundamentalmente protegido, como o direito à liberdade religiosa, teriam que respeitar os requisitos constitucionais para a sua validade, e teriam de ser fruto de lei geral e abstrata, o que, atentos os requisitos do nº 1 do artigo 14º da LLR, patentemente não aconteceu aqui:

24.– O legislador ordinário ao tentar prever legalmente a regulamentação de situações em que o exercício destes direitos implicasse prestações positivas ou negativas dos empregadores, deu ao exercício deste direito uma conotação subjetiva, no sentido de se estar a exercer um direito subjetivo no sentido restrito, regulado e concretizado por lei ordinária, no sentido de ser um direito a uma prestação, dependendo esse direito do reconhecimento da parte que tem cumprir a obrigação, o que não se pode admitir; a primazia e a aplicabilidade direta do direito à liberdade religiosa não se poderia ter olvidado no ato legislativo que coarta assim o exercício do núcleo essencial deste direito, pondo nas mãos de terceiros a possibilidade do seu gozo, se, por hipótese, for eventualmente reconhecido;

25.– Ignorou a sua substancialidade própria, delimitável independentemente de eventual colisão de direitos, verificada no caso concreto.

26.– Além disso, o requisito da alínea a) do nº 1 do artigo 14º da LLR exige que o candidato à dispensa seja trabalhador com horário flexível: ora, para além de este conceito ser indeterminado e francamente complicado de preencher, a dificuldade aumenta quando o mesmo foi decalcado de outro ordenamento jurídico —o italiano— onde os conceitos legais que podem ajudar à sua concretização subjazem em premissas totalmente diferentes; a incongruência, plurissignificância e lapso legal subjacente a este preenchimento conceptual ditam, desde logo, a sua inconstitucionalidade quando é tentada uma interpretação conforme a CRP, não contrária ao texto e ao programa constitucional.

27.– De facto, há no ordenamento laboral português trabalho por turnos, trabalho com isenção de horário, trabalho suplementar, e, apenas em alguns casos —pais, para assistência a filhos— há horário flexível, o que, na prática, impede quase toda a população laboral de gozar o direito previsto na LLR com a restrição da alínea a) do nº 1 do artigo 14º da LLR, e torna a sua aplicação limitada, concreta e não generalizada, ao arrepio do nº 3 do artigo 18º da CRP, penalizando ainda a maioria dos trabalhadores, o que viola, só por si, o direito constitucional à igualdade.

28.– E, nem mesmo do ponto de vista da proporcionalidade é possível justificar o preceito infraconstitucional limitativo, pois a restrição a fazer ao princípio em causa teria de ser a menos agressiva e intensa possível, do ponto de vista material, espacial, temporal e pessoal, e não é:

29.– Em primeiro lugar, materialmente, está em jogo um interesse de relevância supraconstitucional e com primado sobre os outros direitos a proteger com a restrição legal: o contrabalanço valorativo daquele direito pessoal com o interesse social da autonomia privada e direito à empresa resulta na conclusão da sobrelevação do direito pessoal sobre o direito patrimonial, que, ao contrário daquele, até admite restrições legais autorizadas constitucionalmente (e não são poucas);

30.– Em segundo lugar, temporalmente, a lei também não respeita os ditames da proporcionalidade, que exigem que permita, de forma ampla e abrangente, o gozo do direito que restringe: o horário flexível tem limite temporal legal, que é o atingir dos 12 anos por parte do filho de quem o goza.

31.– Mesmo a nível pessoal, e como já se referiu, também sob esta análise da proporção, devendo preferir-se restrição que atinja um número reduzido de trabalhadores, o que aqui se verifica é uma restrição alargada, pois a janela de utilidade do preceito, o preenchimento da alínea a) é apenas possível a um número muito reduzido de trabalhadores.

32.– E, no caso concreto, convém também frisar a atuação da entidade empregadora, que, alegando-se lesada, culpa teve nessa lesão, pois sempre teve e deteve o poder de escalar a Recorrente para turnos da manhã, à Sexta-feira, quando o turno da tarde se prolongasse para lá do pôr do sol: da análise à luz do princípio da necessidade e da exigibilidade, da adequação, enfim, da proporcionalidade, não sobrevivem argumentos de valor para a posição da Recorrida.

33.– Pelo contrário, a Recorrida sempre insistiu, durante três anos, e após onze anos de paz social entre as partes, relativamente ao exercício desse direito religioso, em por a Recorrente a trabalhar em turnos à Sexta-feira à tarde, cujo término era após o pôr do sol, bem sabendo que esta iria abandonar o posto de trabalho, por motivos religiosos (constitucionalmente protegidos) e assim prejudicar a empresa a sua própria folha disciplinar e subsistência, colocando-a sempre perante um enorme confronto dilema moral e religioso, para além de pressão psicológica sobre optar pelas suas convicções religiosas e cumprimento das suas funções com assiduidade.

34.– O peso e sacrifício pedido à Recorrente, na ótica da proporção, na avaliação da necessidade, maior era do que o apresentado à Recorrida, pois a Recorrente é que viu os seus direitos laborais legalmente consagrados, e adquiridos, serem gratuitamente violentados pela Recorrida, sem sequer ter necessidade de exigir à Recorrente esse sacrifício, por ser opção sua escalá-la para os turnos da tarde de Sexta-feira, em vez dos turnos da manhã, havendo meio mais adequado e menos penoso, aliás, sem penosidade para qualquer das partes, de respeitar o direito da Recorrente.

35.– Em suma, as faltas dadas pela Recorrente, dadas como provadas nos autos, aconteceram no período das festividades e observância do período de guarda da sua convicção religiosa, exercendo a Recorrente o legítimo direito protegido pela Lei Fundamental do nosso país, pelo que o processo disciplinar em mérito e as suas consequências, como o despedimento, só poderiam ter sido —porque são— julgados nulos e sem produção de efeitos, o mesmo se dizendo das decisões judiciais ordinárias que lhe reconheceram validade, por cercearem inconstitucionalmente um direito pessoal e fundamental, com proteção da Lei Fundamental, que é primária e que se impõe à LLR e quaisquer restrições por ela criadas ao exercício deste direito.

36.– Com efeito, a interpretação feita da redação da alínea a) do nº 1 do artigo 14º da LLR não é aceitável, pois nem sequer seria a solução possível capaz de garantir um justo equilíbrio de interesses em conflito com dignidade constitucional, até porque aquele que é mais prejudicado possui uma indiscutível supremacia hierárquica formal e material na ordem de valores da CRP.

37.– Foi portanto violada a CRP, nomeadamente, atendendo ao previsto nos artigos 41º, 13º, nº 2, 18º nº 1 a 3 e 8º, nº 2, em concreto, o direito à liberdade religiosa, o princípio da igualdade, o princípio da proporcionalidade e o primado do Direito Internacional.

Termos em que a alusão feita pela Recorrida ao não preenchimento dos requisitos legais cumulativos previstos no nº 1 do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa (Lei nº 16/2001 de 22 de junho, de ora em diante LLR), que é lei ordinária, para negar à Recorrente o exercício da sua liberdade religiosa não se pode deixar de considerar inconstitucional —tal como as decisões dos tribunais de primeira e segunda instância, que confirmaram a posição daquela— pois restringe e condiciona de forma ilícita, à luz da CRP, o exercício do direito constitucionalmente consagrado e especialmente protegido pela CRP, só assim se fazendo Justiça".

4.5.– Por seu turno, a Recorrida apresentou contra-alegações, concluindo (cf. 547-556):

"A) Pretende a Recorrente com o presente recurso ver reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa/LLR (Lei nº 16/2001, de 22 de junho), na medida em que no seu entender, impede o exercício da sua liberdade religiosa, restringindo e condicionando de forma ilícita, à luz da CRP, o exercício de um direito constitucionalmente consagrado.

B) Salvo o devido respeito e sempre salvo melhor opinião, não assiste razão à Recorrente, inexistindo qualquer inconstitucionalidade do preceito em questão.

C) O direito à liberdade religiosa encontra-se consagrado, como direito fundamental, na CRP de abril de 1976, nomeadamente no seu artigo 41º, dele resultando que a todo o cidadão deverá ser reconhecida a faculdade de ter ou não ter religião, professar esta ou aquela, mudar de crença, praticá-la só ou acompanhado de ou-

tras pessoas, agrupar-se com outros crentes formando confissões ou associações de caráter religioso, sempre sem que tal possa ser objeto de qualquer tipo de coação injustificada, exercida por qualquer pessoa ou autoridade pública.

D) O direito à liberdade religiosa, consagrado no artigo 41º da CRP, diz respeito aos direitos, liberdades e garantias, pelo que é diretamente aplicável, vinculando as entidades públicas e privadas (nº 1 do artigo 18º da CRP), sendo que a sua restrição só pode ser feita através de lei, limitada ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, não podendo diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial daquele direito (n.os 2 e 3 do artigo 18º da CRP).

E) Conforme ensinam os Professores Gomes Canotilho e Vital Moreira, in Constituição da República Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, 4ª Edição, p. 382, o facto de ser diretamente aplicável não significa que as normas garantidoras de direitos, liberdades e garantias configurem, desde logo, direitos subjetivos absolutos e autónomos suscetíveis de poderem valer como alicerce jurídico necessário e suficiente para a demanda de posições jurídicas individuais.

F) Por outro lado, ainda segundo ensinam os aludidos Professores, na citada obra, p. 391, para além das restrições previstas na Constituição, há que acrescentar as restrições não expressamente autorizadas pela Constituição para captar aquelas restrições que são criadas por lei sem habilitação constitucional, mas que não podem deixar de admitir-se para resolver problemas de ponderação de conflitos entre bens ou direitos constitucionais.

G) Ainda segundo o entendimento dos Professores Gomes Canotilho e Vital Moreira, consideração particular neste contexto exige o caso em que a lei pretende revelar limites que não se encontram previstos ou mencionados na Constituição, mas que hajam de entender-se implicitamente decorrentes do seu texto, designadamente por efeito de colisão de direitos: são as restrições não expressamente autorizadas pela Constituição, tradicionalmente conhecidas como limites imanentes".

H) Quanto à questão da Liberdade Religiosa, também o Acórdão da Relação do Porto de 19 de fevereiro de 2008, concluiu que a liberdade religiosa e de culto terá necessariamente de ter limites impostos pela ordem jurídica e constitucional vigentes numa comunidade civilizacional e pelos valores fundamentais nela consagrados e defendidos, como sejam —na comunidade em que nos inserimos— a liberdade, os direitos alheios a ordem pública e a realização da justiça. Valores e objetivos estes que não podem ser violados ou impedidos por motivos de cariz humanista e racional em que a nossa comunidade de cidadãos se alicerça não podem ser postergados por princípios e práticas religioso/as, como sejam, vg., a admissão de certas mutilações físicas ou da poligamia - cf. António Leite, A Religião no Direito Constitucional Português in estudos sobre a Constituição, 1978, 2º, pp. 265 e segs. Nesta vertente ao Estado já assiste o poder/dever de, através da função jurisdicional, garantir proteção jurídica a todo aquele que vir os seus direitos ou interesses juridicamente relevantes questionados ou violados por opções, atitudes ou cultos religiosos iníquos e intoleráveis, de forma a preveni-los ou repará-los, constituindo este um direito fundamental com assento constitucional - artigo 20º, nº 1, da CRP.

I) A LLR, no seu artigo 6º nº 1, estabelece precisamente que a liberdade de consciência, de religião e de culto, só admite as restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos".

J) O próprio Projeto de Lei nº 27/VIII, do qual resultou a LRR, refere a necessidade desta lei face à existência de limites imanentes aos direitos fundamentais que

resultam da possibilidade de conflitos entre eles ou deles com interesses constitucionalmente protegidos.

L) Destarte, contrariamente ao pretendido pela Recorrente, seguindo o ensinamento dos Professores Gomes Canotilho e Vital Moreira e na esteira do entendimento vertido no acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 19 de fevereiro de 2008, na medida em que se revela indispensável para resolver problemas de ponderação de conflitos entre bens ou direitos constitucionais, ter-se-á de concluir que a LRR consubstancia uma verdadeira lei restritiva de direitos, liberdades e garantias, conforme previsto na própria CRP.

M) Não assumindo, portanto, o direito de liberdade de religião consagrado no artigo 41º da CRP a natureza de um direito absoluto, admite as restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.

N) Com a LLR foi propósito do legislador, precisamente, o de encontrar o necessário equilíbrio entre o direito à liberdade religiosa e outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos, nomeadamente, no que concerne ao seu artigo 14º, os legítimos direitos das entidades empregadoras, não esquecendo, como não poderia deixar de ser, o princípio constitucional da igualdade.

O) Conforme se disse, a LLR resultou do Projeto de Lei nº 27/VIII, no qual, com referência ao artigo 14º da LLR, pode ler-se o seguinte:

"o direito de suspender o trabalho nos dias de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam [...] deve compatibilizar-se com os direitos da entidade empregadora e com o princípio da igualdade".

P) Conforme bem refere o Acórdão recorrido, citando o entendimento vertido na douta sentença proferida em primeira instância, decorre claramente desta exposição de motivos, que ao procurar salvaguardar e assegurar o direito de liberdade de consciência, religião e de culto previsto no artigo 1º da LRR (que, por sua vez, pretende dar concretização ao artigo 41º da CRP), articulando-o com o princípio da igualdade consagrado no seu artigo 2º, pretendeu o legislador alcançar nesta matéria uma solução equilibrada, no sentido de conseguir compatibilizar os direitos potencialmente em conflito, de um lado, os direitos do trabalhador que professa determinada religião e pretende observar o "descanso semanal", os dias de festividades e os períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam e, por outro lado, os direitos da entidade empregadora, desde logo, ao livre exercício da iniciativa económica privada nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral (nº 1 do artigo 61º da CRP), bem como de Liberdade de [...] de organização empresarial (artigo 80º alínea d) da CRP).

Q) A que acrescem, como expressão destes, entre outros, os poderes que a lei ordinária confere à entidade empregadora, nessa qualidade, de estabelecer os termos em que o trabalho deve ser prestado, dentro dos limites decorrentes do contrato e das normas que o regem (artigo 97º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro) e, de determinar o horário de trabalho do trabalhador dentro dos limites da lei (cf. nº 1 do artigo 212º do CT).

R) No que concerne ao artigo 14º da LLR, com o regime aí estatuido, pretendeu o legislador limitar o prejuízo resultante do exercício do direito do trabalhador para a atividade e utilização dos recursos humanos pela entidade empregadora, pretendendo, portanto, salvaguardar o direito de liberdade religiosa do trabalhador mas sem que tal imponha um prejuízo desproporcionado para a entidade empregadora, tentando, assim, compatibilizar os direitos em caso de conflito.

S) Ora, ao usar na alínea a), do nº 1, do artigo 14º da LLR a expressão "regime de flexibilidade de horário", o legislador não tinha em mente um determinado esquema preciso de distribuição das horas do período normal de trabalho, antes querendo deixar um conceito aberto, de modo a abranger qualquer regime de trabalho que se distancie dos esquemas em que a característica seja a rigidez.

T) E tal solução impôs-se como uma necessidade para possibilitar a condição a que se refere a alínea c), ou seja, a compensação integral do respetivo período de trabalho durante o qual ocorra a suspensão para o exercício do direito de liberdade religiosa.

U) Assim, a solução encontrada pelo legislador procurou, precisamente, compatibilizar de forma equilibrada, os direitos em confronto, nomeadamente atendendo ao princípio da igualdade consagrado na CRP e aos direitos constitucionalmente consagrados da entidade empregadora.

V)Pretendeu-se possibilitar que o trabalhador observe as práticas religiosas da sua convicção, não se distingue quanto à religião, permitindo a suspensão da obrigação do trabalhador prestar trabalho, obrigação a que se vinculou com a celebração do contrato de trabalho, mas desde que tal não redunde em oneração injustificada para o direito do empregador em ver cumprida aquela obrigação de prestação de atividade.

X) De tudo o exposto decorre, de forma inequívoca, conforme bem concluiu o douto Acórdão da Relação de Lisboa, a inexistência de qualquer inconstitucionalidade do artigo 14º da LLR.

Termos em que deverá improceder o recurso interposto pela Recorrente, com o que se fará inteira justiça".

Cumpre pois apreciar e decidir.

II.– Fundamentação

A) Do objeto do recurso

5.– Em face dos elementos trazidos aos autos, e a partir do requerimento de interposição de recurso (de fls. 442 a 456, cf. supra 4.3), verifica-se que a Recorrente pretende ver apreciada por este Tribunal a constitucionalidade das normas contidas no artigo 14º, nº 1, da Lei da Liberdade Religiosa "ao prever requisitos cumulativos para o exercício de um direito fundamental constitucionalmente consagrado", considerando, do mesmo passo, inconstitucionais as suas alíneas, na interpretação que lhes foi dada pelos Tribunais a quo, invocando o desrespeito pelos artigos 13º, 18º e 41º da Constituição da República Portuguesa (CRP).

Estabelece o artigo 14º, nº 1 da Lei da Liberdade Religiosa, o seguinte:

"Artigo 14º

Dispensa do trabalho, de aulas e de provas por motivo religioso

1.– Os funcionários e agentes do Estado e demais entidades públicas, bem como os trabalhadores em regime de contrato de trabalho, têm o direito de, a seu pedido, suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam, nas seguintes condições:

a) Trabalharem em regime de flexibilidade de horário;
b) Serem membros de igreja ou comunidade religiosa inscrita que enviou no ano anterior ao membro do Governo competente em razão da matéria a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso;
c) Haver compensação integral do respetivo período de trabalho".

5.1.– Para a delimitação da questão de constitucionalidade objeto do presente processo, cumpre ter em conta que, no requerimento de interposição de recurso, a Recorrente sustenta a sua posição remetendo frequentemente para a suscitação das questões de constitucionalidade já feita perante o Tribunal que proferiu a decisão ora recorrida.

Ora decorre do teor das suas alegações de recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa (a fls. 295-329) que a Recorrente entende que "o artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa, ao tentar regulamentar a dispensa de trabalho em dia de descanso semanal, nos dias de festividades e nos períodos horários que sejam prescritos pela religião [...] contém uma série de condições e requisitos cumulativos que não podem deixar de ser vistos como violadores da Lei Fundamental [...]" (fls. 314), considerando "inegável o perigo da indeterminação dos conceitos apresentados como requisitos de execução nestas três alíneas" e "notória a violação dos princípios constitucionais da igualdade e proporcionalidade que a precipitada interpretação dos mesmos permite" (fls. 317).

A suscitação da questão de inconstitucionalidade das várias alíneas do nº 1 do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa é reportada à sua interpretação, "na medida em que os requisitos previstos no artigo 14º da L.L.R. constituem restrições e condicionamentos para o exercício de um direito fundamental do cidadão, têm de ser interpretados de acordo com a C.R.P. [...].

Por isto mesmo, relativamente às alíneas a) e c) estas só podem ser interpretadas no sentido do funcionário prestar trabalho efetivo; de facto, a verdade é que a nossa lei laboral não fala em regime de flexibilidade de horário, senão aquando das disposições sobre a maternidade. Qualquer outra interpretação e conclusão [...] é inconstitucional por flagrantemente violar o princípio da igualdade entre trabalhadores religiosos praticantes, impondo a não aplicação, e penalizando, portanto, o direito à liberdade religiosa da maioria dos trabalhadores - que não trabalham em regime de flexibilidade de horário.

Do mesmo modo, a compensação deste trabalho poder ter uma duração e ou penosidade semelhantes, podendo mesmo traduzir-se numa soma pecuniária, é questão cuja aplicação não pode estar na dependência de um mero juízo da entidade empregadora, sob pena de esvaziamento completo da norma e da sua proteção e eficácia.

Quanto à alínea b), por falta de densificação, não se mostra possível qualquer interpretação que respeite a Constituição, por representar um limite em desrespeito pelo princípio da proporcionalidade, ao ser excessiva, por o artigo 35º da L.L.R. já exigir uma comunicação a efetuar para o registo nacional de pessoas coletivas —o qual é público— não ser claro quanto ao membro do Governo competente [...] e por ser excessivo o envio de uma nova declaração que já foi enviada para o registo das pessoas coletivas religiosas.

[...] Assim, por a interpretação normativa das alíneas do nº 1 do artigo 14º da L.L.R. não ser compatível com nenhuma das exigências do princípio da proporcionalidade e do princípio da igualdade, isto é necessidade, adequação ao fim e proibição do excesso, e da discriminação, são inconstitucionais estas alíneas [...].

Mesmo que assim não se entendesse, e se considerasse alguma das alíneas livre desse juízo negativo do espartilho constitucional, por os requisitos do nº 1 do artigo 14º da L.L.R. serem cumulativos, todos são afetados pela inconstitucionalidade. (cf. fls. 318-319).

5.2.– A apreciação do Tribunal Constitucional, em sede de recurso de constitucionalidade interposto ao abrigo da alínea b) do nº 1 do artigo 70º da LTC, ou seja, enquanto órgão de recurso das decisões de tribunais que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada durante o processo, incide assim sobre a decisão de constitucionalidade adotada no tribunal a quo, de que relevam as seguintes passagens:

> "a alegada inconstitucionalidade do artigo 14º da Lei nº 16/2001, de 22/6:
> Entende a Autora - apelante que tal disposição legal é inconstitucional, por violação dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da igualdade.
> Estamos, como é natural, perante uma questão essencial para a apreciação da justa causa de despedimento, já que foi precisamente com base na não verificação dos pressupostos estabelecidos na mesma disposição legal que a Ré considerou as ausências ao serviço da Autora a partir do pôr do sol de sexta-feira como faltas injustificadas e como desobediência a ordens expressas a não prestação de trabalho ao sábado.

A Ré entendeu que não se verificavam os requisitos cumulativos previstos nesse citado artigo 14º da Lei nº 16/2011 (que passaremos a designar por LLR), já que a Autora não tinha flexibilidade de horário nem era possível a compensação integral do respetivo período de ausência, pelo que não poderia haver dispensa de prestação de trabalho.

> Ao que a Autora contrapôs, logo na contestação ao articulado de motivação, a inconstitucionalidade dessa norma legal, posição que continua a sustentar no presente recurso.
> Vejamos:
> O direito à liberdade religiosa está expressamente consagrado no artigo 41º da Constituição:

[...]

Como muito bem se refere na sentença recorrida, sendo um preceito constitucional relativo a um direito fundamental, a sua interpretação e integração deve ser feita de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (nº 2 do artigo 16º da CRP).

[...]

A declaração da ONU de 25/11/1981, citada por Júlio Gomes, in Direito do Trabalho, vol. I, Relações Individuais de Trabalho, p. 295, sobre a eliminação de todas as formas de discriminação e intolerância fundadas na religião e nas crenças, refere, no seu artigo 6º, a liberdade de observar os dias de repouso e de celebrar as festas e cerimónias segundo os preceitos da própria religião ou culto.

E não esquecendo, porque também aqui deverá ser o mesmo chamado à liça, o princípio da igualdade consagrado no artigo 13º da CRP, segundo o qual "1. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual".

Assim, a todo o cidadão deverá ser reconhecida a faculdade de ter ou não ter religião, professar esta ou aquela, mudar de crença, praticá-la só ou acompanhado de outras pessoas, agrupar-se com outros crentes formando confissões ou associações de caráter religioso, etc. Nessa sua faculdade deverá estar ausente todo o tipo de coação, injustificada, exercida por qualquer pessoa ou autoridade pública.

E se o culto pode ser meramente interno, quando se confina ao pensamento e à vontade de cada individuo —e que tornará mais difícil, para não dizer impossível, a sua restrição de ordem externa, precisamente por dizer respeito ao for intimo do ser humano—, o que nos interessa para aqui será o culto externo, aquele que se manifesta externamente pelas formas mais variadas. Culto esse que poderá ser particular ou privado, quando celebrado pelos indivíduos, sós ou acompanhados, em nome próprio, ou público ou oficial, quando realizado em nome da comunidade e por ela, geralmente com a intervenção de ministro autorizado.

Por esse artigo 41º da CRP dizer respeito aos direitos, liberdades e garantias, ele é diretamente aplicável, vinculando as entidades públicas e privadas (nº 1 do artigo 18º da CRP), só podendo a sua restrição ser feita através de lei, limitada ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos, não podendo diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial daquele preceito (n.os 2 e 3 do mesmo artigo 18º).

Pese embora a consagração, logo em 1976, na nossa Constituição, só com a designada Lei da Liberdade Religiosa —Lei nº 16/2001 de 22 de junho— é que o legislador veio concretizar, em termos de lei ordinária, estes princípios de opção religiosa, bem como os critérios de organização e funcionamento.

Entre esses princípios encontra-se, como não poderia deixar de ser, o da liberdade de religião e de culto, o qual compreende, além do mais, o direito de adesão à igreja ou comunidade religiosa que se escolher e o direito de participar na vida interna e nos ritos religiosos.

Daí o artigo 10º da LLR dispor o seguinte:

"A liberdade de religião e de culto compreende o direito de, de acordo com os respetivos ministros do culto e segundo as normas da igreja ou comunidade religiosa escolhida:

a) Aderir à igreja ou comunidade religiosa que escolher, participar na vida interna e nos ritos religiosos praticados em comum e receber a assistência religiosa que pedir;

b) Celebrar casamento e ser sepultado com os ritos da própria religião;

c) Comemorar publicamente as festividades religiosas da própria religião".

Mas ainda que a Constituição o não refira expressamente, parece-nos manifesto e indiscutível, tal como se decidiu no Ac. da Relação do Porto de 19/2/2008, in www.dgsi.pt. que a liberdade religiosa e de culto terá necessariamente de ter limites impostos pela ordem jurídica e constitucional vigentes numa comunidade civilizacional e pelos valores fundamentais nela consagrados e defendidos, como sejam —na comunidade em que nos inserimos— a liberdade, os direitos alheios, a ordem pública e a realização da justiça. Valores e objetivos estes que não podem ser violados ou impedidos por motivos de cariz religioso. Na verdade, os fundamentos ético-jurídicos de cariz humanista e racional em que a nossa comunidade de cidadãos se alicerça não podem ser postergados por princípios e práticas religioso/as, como sejam, vg., a admissão de certas mutilações físicas ou da poligamia - cf. António Leite, A Religião no Direito Constitucional Português in Estudos sobre a Constituição, 1978, 2º, p. 265 e segs. Nesta vertente ao Estado já assiste o poder/dever de, através da função jurisdicional, garantir proteção jurídica a todo aquele que vir os seus direitos ou interesses juridicamente relevantes questionados ou violados por opções, atitudes ou cultos religiosos iníquos e intoleráveis, de forma a preveni-los ou repará-los, constituindo este um direito fundamental com assento constitucional - artigo 20º, nº 1, da CRP.

Ou seja, não estamos, contrariamente ao que acontece com o direito à vida, perante um direito absoluto, podendo e devendo, se for o caso e dentro dos limites constitucionais, ser objeto de restrições.

É o que decorre não só do nº 2 do artigo 18º da CRP, mas também do artigo 6º da LLR, onde expressamente se salvaguardou que a liberdade de religião e de culto "[...] admite as restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos"- nº 1 desse artigo 6º

No particular campo das relações laborais, e com vista a encontrar o necessário equilíbrio e proporcionalidade entre esse direito de liberdade religiosa e outros com consagração constitucional, veio reger o artigo 14º da LRR, nos seguintes termos e que para aqui relevam:

"1.– Os funcionários e agentes do estado e demais entidades públicas, bem como os trabalhadores em regime de contrato de trabalho, têm o direito de, a seu pedido, suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias de festividade e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam, nas seguintes condições:

a) Trabalharem em regime de flexibilidade de horário;

b) Serem membros de igreja ou comunidade religiosa inscrita que enviou no ano anterior ao membro do Governo competente em razão da matéria a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso;

c) Haver compensação integral do respetivo período de trabalho"

[...].

Por forma a justificar a inclusão desta norma, escreveu-se, a propósito desta disposição, no Projeto de Lei nº 27/VII (disponível em http://app.parlamento.pt), que veio a dar lugar à LRR, o seguinte:

"O direito de suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que

professam [...] deve compatibilizar-se com os direitos da entidade empregadora e com o princípio da igualdade. Seguiu-se o modelo de alguns acordos italianos [artigo 17º da Lei n. o 516, de 22 de novembro de 1988 (adventistas), artigo 4º da Lei nº 102, de março de 1989 (comunidades hebraicas)], aplicável em regime de flexibilidade de horário. É certo que o Estado francês concede aos seus funcionários e agentes autorização de ausência por ocasião das festas próprias das confissões ou comunidades arménia, israelita ou muçulmana a que pertençam, em três dias por ano em cada caso (circular de 9 de janeiro de 1991). Mas esta solução não resolve os problemas de igualdade referidos".

Ou seja, foi nítido propósito do legislador encontrar aquele necessário equilíbrio entre o direito de liberdade religiosa e os legítimos direitos da entidade empregadora, não esquecendo, como não poderia deixar de ser, o princípio constitucional da igualdade.

Citando aqui a sentença (refira-se, por ser de elementar justiça, que a mesma se encontra doutamente elaborada) "como decorre desta exposição de motivos, ao procurar salvaguardar e assegurar o direito de liberdade de consciência, de religião e de culto, a que se refere o artigo 1º, articulando-o com o princípio da igualdade, este consagrado no art. 2, o legislador procurou nesta matéria alcançar uma solução equilibrada, no sentido de conseguir compatibilizar os direitos potencialmente em conflito, ou seja, de um lado, os do trabalhador que professa determinada religião e pretende observar o "descanso semanal", os "dias das festividades" e os "períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam"; e, de outro lado, os da entidade empregadora, desde logo, ao livre exercício da iniciativa económica privada "nos quadros definidos pela Constituição e pela lei e tendo em conta o interesse geral" [nº 1 do artigo 61º CRP], bem como de "Liberdade de [...] organização empresarial" [artigo 80º al. d), da CRP], a que acrescem, como expressão daqueles, os poderes que a lei ordinária lhe confere, nessa qualidade de empregador, de "estabelecer os termos em que o trabalho deve ser prestado, dentro dos limites decorrentes do contrato e das normas que o regem" [artigo 97º do CT], e, para além de outros, os de "determinar o horário de trabalho do trabalhador, dentro dos limites da lei" [nº 1 do artigo 212º do CT]".

Como corolário do seu poder de direção, ínsito à celebração do contrato de trabalho, cabe à entidade empregadora, dentro dos limites legais e da regulamentação coletiva em vigor, estabelecer o horário de trabalho, como um dos instrumentos ao seu alcance com vista a uma correta organização técnico-produtiva. Objetivo este que só numa análise muito simplista pode ser encarado como sendo do interesse exclusivo da entidade empregadora: é que uma correta gestão terá como uma das facetas decisivas a manutenção do emprego dos seus trabalhadores e a otimização das suas condições de trabalho.

O próprio estabelecimento de um horário de trabalho acarreta inegáveis vantagens do ponto de vista do trabalhador: para além de tal determinação ser uma exigência da proteção da vida e da integridade física e psíquica do trabalhador, definindo os espaços de repouso e lazer necessários à salvaguarda da sua integração familiar e social, permite-lhe, conhecendo-o antecipadamente, orientar a sua própria vida pessoal e familiar de harmonia com o mesmo.

E chegados aqui a resposta à questão que nos ocupa terá de ser necessariamente negativa: não se verifica a inconstitucionalidade invocada-o direito à liberdade religiosa não é um direito absoluto, estando sujeito, com já vimos, "às restrições necessárias para salvaguardar direitos ou interesses constitucionalmente protegidos" (nº 1 do artigo 6º da CRP).

E um dos interesses constitucionalmente protegidos é a "liberdade de [...] organização empresarial"(artigo 80º, al. d), da CRP], interesse esse que não se limita, como aflorámos, ao ponto de vista do empregador - o sucesso da empresa acarretará, em condições normais, a manutenção dos contratos de trabalho dos seus trabalhadores e das condições de laboração destes e contribuirá, certamente, para o desenvolvimento da economia de um país. Por isso se entende que na base desta consagração constitucional não esteve, exclusivamente, a preocupação da salvaguarda dos interesses económicos do empregador.

E não se deve perder de vista que o princípio constitucional da igualdade acarreta que se trate de forma igual o que é igual e de forma desigual aquilo que se apresenta como desigual: e que, por articulação com o artigo 41º da CRP, se ninguém poder ser prejudicado em função exclusivamente da sua religião ou credo, também não poderá ser beneficiado por mor das mesmas convicções, nomeadamente em confronto com outros trabalhadores de outras religiões ou sem religião alguma.

É certo que nem sempre será fácil encontrar um ponto de equilíbrio entre o direito à liberdade religiosa e os interesses tutelados da entidade empregadora. Mas certamente que o critério não poderá residir, única e exclusivamente, na circunstância de o primeiro ser um direito de caráter pessoal, como defende a apelante.

E é nosso modesto entendimento o que o referido artigo 14º da LLR não estabelece uma desproporção entre os interesses em potencial conflito.

Como refere Paula Meira Lourenço, in Os Deveres de Informação no Contrato de Trabalho, REDS 2003, Ano XLIV, n.os 1 e 2, pp. 29 e ss (citada, e relacionando esse ensinamento com o artigo 14º da LLR, por Júlio Gomes, ob. cit., pago 299, nota 803) "a atuação dos dois direitos fundamentais no direito privado não pode legitimar situações de incumprimento de obrigações, necessitando de se compaginar com a autonomia privada".

Tal disposição veio criar digamos uma solução de compromisso —que se não nos afigura desequilibrada— entre o direito do trabalhador em obedecer às suas convicções religiosas e em praticar o respetivo culto e o interesse empresarial do empregador, estabelecendo as 3 condições cumulativas para que se verifique a suspensão do contrato de trabalho" (fls. 428-verso a 432).

E, mais à frente, o Acórdão recorrido retoma a questão da constitucionalidade das normas contidas nas alíneas do nº 1 do artigo 14º da lei aplicável, dedicando especial atenção às alíneas a) e c). Deste modo:

"As dificuldades residem em saber o que quis o legislador da LLR dizer com a adoção do conceito de horário de trabalho flexível, a que se refere a alínea a) do nº 1 do artigo 14º de tal lei. É que este diploma legal nada diz a esse respeito.

Relembrando tudo quanto já se disse a propósito da alegada inconstitucionalidade daquela disposição legal, o que se pretendeu com esta foi harmonizar dois direitos potencialmente em conflito: o direito do trabalhador à liberdade religiosa e o direito do empregador à correta gestão dos meios humanos ao seu dispor. Sempre com a preocupação que o exercício do direito do trabalhador não acarrete, para um empregador, um prejuízo injustificado e desproporcionado.

Procurando a melhor interpretação para esse "regime de flexibilidade", em relação ao qual o CT de 2009 também nada define expressamente, o Sr. Juiz socorre-se do que neste Código se estabelece quanto à duração e organização do tempo de trabalho, constante dos arts. 197º a 231º, e conclui que o legislador "não

tinha em mente um determinado esquema preciso de distribuição das horas do período normal de trabalho, antes querendo deixar um conceito aberto, de modo a abranger qualquer regime de trabalho que se distancie dos esquemas em que a característica seja a fixidez. Essa solução impôs-se como uma necessidade para possibilitar a condição a que se refere a al. c), ou seja, a compensação integral do respetivo período de trabalho durante o qual ocorra a suspensão, para exercício do direito de liberdade religiosa. Na verdade, não se descortina a possibilidade prática de assegurar a compensação por parte de alguém que trabalhe diariamente sujeito a um horário fixo".

Concordamos em absoluto com tal asserção, tanto mais que ela vai de encontro ao que Monteiro Fernandes, in Direito do Trabalho, 12ª edição, p. 336, define como "horário flexível": "em que estão delimitados períodos de presença obrigatória do trabalhador, mas podendo este, com respeito por esses períodos, escolher, dentro de certas margens, as horas de entrada e saída do trabalho, e modo a cumprir o PNT [...] a que está obrigado (ex: o PNT é de 40 horas semanais; o período de presença obrigatória diária é das 10 h às 12h.30 m. e das 15 h às 17h.30 m.; o trabalhador pode, em cada dia, entrar ao serviço entre as 8 e as 10h, interromper para almoço entre as 12h30 m e as 15h, e escolher a hora de saída entre as 17h 30 m. e as 19h. 30 m.; mas terá de cumprir as 40 horas de trabalho por semana)".

E devendo compatibilizar-se esse regime de trabalho flexível com a possibilidade de compensação prevista na alínea c) do nº 1 do artigo 14º, facilmente se compreende que neste exemplo dado por aquele Ilustre Autor seja mais do que viável o trabalhador compensar o período de ausência para a prática do culto religioso.

Também a sentença recorrida dá dois exemplos felizes de situações de flexibilidade de horário (os assistentes de bordo e os delegados de propagando médica). E refere que "Assim, o trabalhador prestará a sua atividade em regime de flexibilidade de horário quando, no interesse da entidade empregadora —radicado na organização do seu funcionamento, porque desse modo proporciona a obtenção da utilidade da força de trabalho à disposição daquela— tenha sido estabelecido um esquema em que aquela prestação, contendo-se nos limites legais do período normal de trabalho, possa ter hora variável de entrada e saída, dependendo tal de determinadas circunstâncias ou condições ou sendo gerido pelo trabalhador, em qualquer caso tendo em vista uma melhor eficácia da sua prestação".

Concluindo, temos que o trabalhador, em ordem a ver observado o direito consagrado no artigo 14º da LLR, e assim poder professar, com toda a sua amplitude, a sua confissão religiosa, terá que estar sujeito a um regime de flexibilidade de horário [al. a)], exigindo-se, cumulativamente, que proceda à "compensação integral do respetivo período de trabalho" [al. b)] que deixou de prestar para poder comemorar as festividades ou observar o período de culto prescritos por aquela confissão. (Cfr. fls. 435 e ss).

Tendo sido a partir desta interpretação que o Tribunal a quo reitera a decisão de 1ª instância, considerando que a situação da ora recorrente (trabalho por turnos rotativos) não se enquadra na interpretação normativa das alíneas a) e c) do nº 1 do artigo 14º, pelo que não teve por verificados os requisitos cumulativos dessa disposição legal com vista ao exercício do direito de suspensão dos deveres laborais da recorrente nos períodos horários ditados pela confissão professada. A dimensão normativa conferidas àquelas alíneas as-

senta no conceito de trabalho flexível (de horário flexível), reportado pelo Tribunal às situações em que que estão delimitados períodos de presença obrigatória do trabalhador, mas podendo este, com respeito por esses períodos, escolher, dentro de certas margens, as horas de entrada e saída do trabalho, de modo a cumprir o período normal de trabalho, socorrendo-se também da sentença de 1ª instância quando considera contempladas as situações em que "no interesse da entidade empregadora —radicado na organização do seu funcionamento, porque desse modo proporciona a obtenção da utilidade da força de trabalho à disposição daquela— tenha sido estabelecido um esquema em que aquela prestação, contendo-se nos limites legais do período normal de trabalho, possa ter hora variável de entrada e saída, dependendo tal de determinadas circunstâncias ou condições ou sendo gerido pelo trabalhador, em qualquer caso tendo em vista uma melhor eficácia da sua prestação", assim se possibilitando a compensação integral do respetivo período de trabalho, tal como previsto na alínea c) do preceito legal em causa.

5.3.– Afastado, pelo Tribunal recorrido, qualquer juízo de censura às normas (interpretações normativas) aplicadas, na medida em que, como se viu, o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 15/12/2011 não sufraga o sustentado pela recorrente quanto à alegada violação da garantia de liberdade religiosa (artigo 41º, CRP), do respetivo regime (artigo 18º, nº 1) e, bem assim, dos princípios da igualdade (artigo 13º) e da proporcionalidade (artigo 18º, nº 2), cumpre apreciar as questões de constitucionalidade oportunamente suscitadas, tendo por parâmetro normativo as pertinentes disposições da Constituição.

Fica ainda clarificado que, em face da natureza do recurso interposto para este Tribunal, não pode relevar autonomamente a invocação do disposto no artigo 8º (e 16º), da CRP, cujo alegado desrespeito só poderia ser aferido de forma indireta, por via da alegada desconformidade das normas legais em causa com princípios e normas de fonte internacional - que não cabe aqui sindicar.

B) Do mérito

6.– Deste modo, atentemos primeiramente no direito fundamental cujo desrespeito motiva o presente recurso - a liberdade de religião, prevista no artigo 41º da Constituição da República Portuguesa ("Liberdade de consciência, de religião e de culto"), no qual se dispõe:

> "1.– A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.
>
> 2.– Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa.
>
> 3.– Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder.

> 4.– As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto.
>
> 5.– É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticada no âmbito da respetiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das suas atividades.
>
> 6.– É garantido o direito à objeção de consciência, nos termos da lei".

Para além da sua consagração constitucional, a liberdade de religião não deixa de ter expressivo acolhimento no ordenamento jurídico internacional, universal e regional, enquanto direito do Homem, e no ordenamento jurídico da União Europeia no respetivo catálogo de direitos fundamentais —a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (CDFUE)—, hoje beneficiando da força vinculativa do direito originário da União Europeia (artigo 6º/1 do Tratado da União Europeia).

Desde logo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem (adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948) estabelece, no seu artigo 18º, que

> "Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos".

Também no seu artigo 18º, o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos expressamente tutela a liberdade religiosa, e fá-lo nos seguintes termos:

> "1.– Toda e qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de ter ou de adotar uma religião ou uma convicção da sua escolha, bem como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua convicção, individualmente ou conjuntamente com outros, tanto em público como em privado, pelo culto, cumprimento dos ritos, as práticas e o ensino.
>
> 2.– Ninguém será objeto de pressões que atentem à sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou uma convicção da sua escolha.
>
> 3.– A liberdade de manifestar a sua religião ou as suas convicções só pode ser objeto de restrições previstas na lei e que sejam necessárias à proteção de segurança, da ordem e da saúde públicas ou da moral e das liberdades e direitos fundamentais de outrem.
>
> 4.– Os Estados Partes no presente Pacto comprometem-se a respeitar a liberdade dos pais e, em caso disso, dos tutores legais a fazerem assegurar a educação religiosa e moral dos seus filhos e pupilos, em conformidade com as suas próprias convicções".

Em 1981, foi adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intole-

rância e de Discriminação Baseadas na Religião ou na Crença (Resolução nº 36/55, de 25 de novembro de 1981), na qual se proclama:

> "ARTIGO I
>
> §1. Toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito inclui a liberdade de ter uma religião ou qualquer convicção a sua escolha, assim como a liberdade de manifestar sua religião ou suas convicções individuais ou coletivamente, tanto em público como em privado, mediante o culto, a observância, a prática e o ensino.
>
> §2. Ninguém será objeto de coação capaz de limitar a sua liberdade de ter uma religião ou convicções de sua escolha.
>
> 3. A liberdade de manifestar a própria religião ou as próprias convicções estará sujeita unicamente às limitações prescritas na lei e que sejam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral pública ou os direitos e liberdades fundamentais dos demais.
>
> [...]
>
> ARTIGO VI
>
> Conforme o "artigo 1º" da presente Declaração e sem prejuízo do disposto no "§3 do artigo 1º", o direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião ou de convicções compreenderá especialmente as seguintes liberdades:
>
> a) A de praticar o culto e o de celebrar reuniões sobre a religião ou as convicções, e de fundar e manter lugares para esses fins.
>
> b) A de fundar e manter instituições de beneficência ou humanitárias adequadas.
>
> c) A de confecionar, adquirir e utilizar em quantidade suficiente os artigos e materiais necessários para os ritos e costumes de uma religião ou convicção.
>
> d) A de escrever, publicar e difundir publicações pertinentes a essas esferas.
>
> e) A de ensinar a religião ou as convicções em lugares aptos para esses fins.
>
> f) A de solicitar e receber contribuições voluntárias financeiras e de outro tipo de particulares e instituições;
>
> g) A de capacitar, nomear, eleger e designar por sucessão os dirigentes que correspondam segundo as necessidades e normas de qualquer religião ou convicção.
>
> h) A de observar dias de descanso e de comemorar festividades e cerimónias de acordo com os preceitos de uma religião ou convicção.
>
> i) A de estabelecer e manter comunicações com indivíduos e comunidades sobre questões de religião ou convicções no âmbito nacional ou internacional".

Refira-se ainda a Declaração das Nações Unidas Sobre os Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, aprovada pela Resolução 47/135 da Assembleia Geral, de 18 de dezembro de 1992, de que releva o artigo 2º:

> "Artigo 2º
>
> 1.– As pessoas pertencentes a minorias nacionais ou étnicas, religiosas e linguísticas (doravante denominadas "pessoas pertencentes a minorias") têm o direito de fruir a sua própria cultura, de professar e praticar a sua própria religião, e de utilizar a sua própria língua, em privado e em público, livremente e sem interferência ou qualquer forma de discriminação.
>
> 2.– As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de participar efetivamente na vida cultural, religiosa, social, económica e pública.

3.– As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de participar efetivamente nas decisões adotadas a nível nacional e, sendo caso disso, a nível regional, respeitantes às minorias a que pertencem ou às regiões em que vivem, de forma que não seja incompatível com a legislação nacional.

4.– As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de criar e de manter as suas próprias associações.

5.– As pessoas pertencentes a minorias têm o direito de estabelecer e de manter, sem qualquer discriminação, contactos livres e pacíficos com os restantes membros do seu grupo e com pessoas pertencentes a outras minorias, bem como contactos transfronteiriços com cidadãos de outros Estados com os quais tenham vínculos nacionais ou étnicos, religiosos ou linguísticos".

No seio do Conselho da Europa, prevê expressamente a Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), de 4 de novembro (1950) que:

"Artigo 9º

(Liberdade de pensamento, de consciência e de religião)

1.– Qualquer pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião; este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de crença, assim como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua crença, individual ou coletivamente, em público e em privado, por meio do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.

2.– A liberdade de manifestar a sua religião ou convicções, individual ou coletivamente, não pode ser objeto de outras restrições senão as que, previstas na lei, constituírem disposições necessárias, numa sociedade democrática, à segurança pública, à protecão da ordem, da saúde e moral públicas, ou à proteção dos direitos e liberdades de outrem".

Também no âmbito do Conselho da Europa prevê a Convenção - Quadro para a Proteção das Minorias Nacionais de 1 de fevereiro de 1995 que:

"Artigo 7º

As Partes assegurarão o respeito pelos direitos de qualquer pessoa pertencente a uma minoria nacional à liberdade pacífica, liberdade de associação, liberdade de expressão e liberdade de pensamento, consciência e religião".

"Artigo 8º

As partes comprometem-se a reconhecer a qualquer pessoa pertencente a uma minoria nacional o direito de manifestar a sua religião ou convicção, bem como o direito de criar instituições religiosas, organizações e associações".

Também a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia consagra a liberdade religiosa como direito fundamental de todas as pessoas (que não apenas os cidadãos europeus):

"Artigo 10º

Liberdade de pensamento, de consciência e de religião

1.–Todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção,

bem como a liberdade de manifestar a sua religião ou a sua convicção, individual ou coletivamente, em público ou em privado, através do culto, do ensino, de práticas e da celebração de ritos.

2.– O direito à objeção de consciência é reconhecido pelas legislações nacionais que regem o respetivo exercício".

7.– Partamos do artigo 41º da Constituição da República Portuguesa (sob a epígrafe "Liberdade de consciência, de religião e de culto"), o qual garante a liberdade de consciência, religião e culto, enquanto direito fundamental.

É que a invocação da ofensa à liberdade de religião —alegadamente operada neste caso pelo disposto no artigo 14º, nº 1, da Lei da Liberdade Religiosa— coloca o juiz constitucional perante um dos núcleos mais relevantes dos direitos fundamentais, desde logo resultante da sua expressiva valoração constitucional no artigo 41º da Lei Fundamental como direito inviolável (adjetivo que, como assinalam Jorge Miranda e Pedro Garcia Marques, na anotação ao artigo 41º da Constituição, in Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2ª edição, Wolters Kluwer Portugal/Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 893, "apenas se encontra também no artigo 24º sobre o direito à vida e no artigo 25º sobre a integridade física e moral").

Colocada a par da liberdade de consciência e da liberdade de culto (cf. artigo 41º, nº 1, CRP), a liberdade de religião forma com a primeira um núcleo de direitos pessoais garantidos pela Constituição, mesmo em caso de estado de exceção constitucional (artigo 19º, nº 6). Para além dos elementos confluentes entre as três liberdades, pode autonomizar-se a liberdade que nos ocupa. Escrevem Jorge Miranda e Pedro Garcia Marques (ainda na anotação ao artigo 41º da Constituição, in Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, cit., loc. cit.) que "conquanto seja direito ou complexo de direitos que possa, de certo prisma, configurar-se unitariamente, importa deslindar.

A liberdade de consciência —indissociável da liberdade de pensamento— é a liberdade de formar a consciência, de decidir em consciência e de agir em consciência. E revela-se mais ampla do que a liberdade de religião, pois tem por objeto tanto as crenças religiosas como quaisquer convicções morais e filosóficas.

Em contrapartida, ela só diz respeito ao foro individual, ao passo que a liberdade de religião possui uma forte dimensão coletiva e institucional, traduzida na liberdade das confissões religiosas.

Quanto à liberdade de culto, não é senão uma das componentes da liberdade de religião".

De todo o modo, a invocação de imperativos religiosos para a determinação da conduta do crente nas suas obrigações laborais não deixa de convocar as várias liberdades tuteladas pelo artigo 41º, da Constituição. Com efeito, estamos perante direitos conexos, como assinala a doutrina: "[...] este preceito reconhece não um mas três direitos distintos, embora conexos, já que o segundo é uma especificação do primeiro, sendo o terceiro uma especificação do segundo". (Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, cit., p. 609).

Assim, a jusante, a liberdade de culto, de participação individual ou coletiva em atos cultuais, como as liturgias, a oração ou a meditação, religiosamente motivada, no período temporal determinado pela religião professada. Corresponderá a final ao próprio exercício da liberdade religiosa, no sentido de "liberdade de praticar as cerimónias e ritos da religião, tanto em público como em privado" (Raquel Tavares dos Reis, Liberdade de Consciência e de Religião e Contrato de Trabalho do Trabalhador de Tendência - que equilíbrio do ponto de vista das relações individuais de trabalho?, Coimbra Editora, Coimbra, 2004, p. 88).

A montante, a liberdade de consciência, não apenas tomada como liberdade de formação das próprias convicções (religiosas ou outras), mas também, e para o que aqui releva, como a "liberdade de agir, seja por ação, seja por omissão, de acordo com a consciência. Aqui o indivíduo atua de determinado modo, por se considerar vinculado a um dever imposto por um imperativo de consciência" (Cfr. Jorge Miranda e Pedro Garcia Marques, in Jorge Miranda/Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, 2ª edição, cit., p. 896), o que se reveste de especial acuidade "quando o indivíduo, ao atuar de acordo com a consciência assume uma posição de objeção ao cumprimento de imposição constitucional ou legal por se entender vinculado a um impreterível imperativo imposto pela sua consciência" (idem).

A liberdade de consciência, enquanto liberdade forte (na expressão de José Lamego, Sociedade Aberta e Liberdade de Consciência - O Direito Fundamental de Liberdade de Consciência, Edição AAFDL, Lisboa, 1985, pp. 68-69), não significa apenas proteção do "fórum interno", "significa também liberdade de agir segundo a consciência implicando a estruturação dos sistemas de decisão segundo um modelo de "sociedade aberta", não fundada em qualquer visão do mundo particular, mas onde as decisões sejam legitimadas numa perspetiva de universalismo e criticismo, que postulam como únicos conteúdos axiologicamente necessários ao sistema político a salvaguarda da liberdade e autonomia individuais" (Cfr. José Lamego, ob. cit., p. 71).

Pode aqui relevar-se que os fundamentos de um direito fundamental geral à objeção de consciência —não confinado à objeção de consciência ao serviço militar (artigos 41º, nº 6 e 276º, nº 4, CRP) e, seguramente, não apenas

ditado por convicções religiosas, mas também políticas, filosóficas ou ideológicas— derivam do reconhecimento e respeito pela dignidade da pessoa, na formação da sua integridade moral. Foi essa a perspetiva defendida por José de Sousa Brito (cf. voto de vencido no Acórdão do Tribunal Constitucional nº 681/95 - também no Acórdão nº 5/96), e assim desenvolvida nos (votos de vencido nos) acórdãos agora citados:

> "Ora, se o reconhecimento do direito à objeção de consciência na Constituição implica a distinção entre os casos em que o direito é reconhecido e aqueles em que não é, esse reconhecimento não se faz em função dos fundamentos invocados para a objeção, mas sim em função do caráter fundamental da mesma. Com efeito, o direito à objeção de consciência decorre da basilar dignidade da pessoa humana (artigo 1º da Constituição) apenas quando o não reconhecimento do imperativo de consciência implica a violação da integridade moral da pessoa, que a Constituição considera inviolável (artigo 25º, nº 1). Não se trata, portanto, do conflito entre a vontade da minoria e a vontade da maioria, que é interno ao princípio democrático, e que se resolve, sem prejuízo do pluralismo de expressão e de organização política democráticas, pelo dever geral de obediência à lei, a que estão subordinadas as minorias. Trata-se do conflito entre os dois princípios basilares da Constituição, o da vontade popular e o da dignidade da pessoa humana, que se verifica quando a lei democrática entra em conflito com a norma estruturante da integridade moral da pessoa, que se considera ditada pela consciência individual.
>
> Ora o caráter estruturante da integridade moral não depende da conformidade com o conteúdo da Constituição e das leis, mas da formação da personalidade individual. A Constituição reconhece o direito de objeção de consciência ao "fundamentalista", religioso ou outro, não por causa da compatibilidade constitucional das normas que ele invoca, mas por considerar estas estruturantes da sua integridade moral. Este fundamento do direito à objeção de consciência não impede que esteja sujeito às restrições aos direitos fundamentais permitidas pela Constituição (artigo 18º)".

Há, pois, pontos de contacto entre esta vertente externa da liberdade de consciência (liberdade de agir em consciência) e a invocação da liberdade de religião manifestada no direito de guarda (por exemplo, ao sábado) em respeito pelos ditames religiosos aqui entendidos como imperativos de consciência.

Deste contacto parecem sair reforçadas as posições tuteladas pela liberdade religiosa, aqui traduzida no direito de observância dos dias de culto ou de guarda determinados pela religião professada, pese embora a tutela da liberdade de consciência não se confinar às convicções do foro religioso. Escreve Jónatas Machado ("A Jurisprudência Constitucional Portuguesa Diante das Ameaças à Liberdade Religiosa", cit., nota 110, pp. 108-109):

> "Em nosso entender, a construção da liberdade de consciência a partir da ideia de integridade moral do indivíduo tem o mérito de estender a proteção da consciência à objeção de caráter não religioso. No entanto, a mesma pode suscitar questões difíceis, como no caso de duas pessoas que objetam ao trabalho ao sába-

> do, sendo porque uma o faz porque em consciência acredita que o fim de semana deve ser inteiramente dedicado à família, ao passo que outra o faz porque considera que o sábado é um dia sagrado reservado ao culto. A avaliar pela jurisprudência constitucional nacional, nem razões autónomas, nem razões teónomas podem legitimar um direito absoluto à objeção de consciência insuscetível de ponderação com outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos".

8.– Cumpre agora, e sem prejuízo do que fica exposto, enquadrar o direito invocado na liberdade de religião - cuja alegada violação motiva o presente recurso de constitucionalidade.

8.1.– Numa aproximação à tutela conferida pela Constituição portuguesa à liberdade de religião podem assinalar-se as várias dimensões associadas a este direito, negativas e positivas, individuais, coletivas e institucionais, subjetivas e objetivas. Comecemos pela dupla vertente negativa e positiva da liberdade religiosa.

8.1.1.– Sobressai do artigo 41º da Constituição a vertente garantística deste direito fundamental, colocado, como já se disse, a par da liberdade de consciência e da liberdade de culto, protegido de ingerências que o possam afetar —sendo pois vedado ao Estado impor ou proibir o professar de uma crença—, e estendendo-se a proteção constitucional da liberdade religiosa ao dever de o Estado garantir as condições para que a liberdade seja exercida, permitindo ou propiciando "a quem seguir uma determinada religião o cumprimento dos deveres que dela decorrem" (Jorge Miranda e Pedro Garcia Marques, ob. cit., p. 909).

Esta dupla dimensão —negativa e positiva— da liberdade de religião mereceu entre nós desenvolvimento jurisprudencial, socorrendo-nos das seguintes passagens do Acórdão do Tribunal Constitucional nº 423/87, pese embora centrado em questão diversa da que nos ocupa - o ensino da religião e moral católicas na escola pública:

> "[...] A liberdade de religião traduz-se na liberdade de adotar ou não uma religião, de escolher uma determinada religião, de fazer proselitismo num sentido ou noutro, de não prejudicado por qualquer posição ou atitude religiosa ou antirreligiosa.
>
> [...]
>
> Para além de um esquema de separação aparentemente rígido, a Constituição consagra também a garantia da igualdade da capacidade jurídica, civil e política, independentemente das convicções ou prática religiosas (artigo 13º, nº 2, e 41º, nº 2).
>
> Como corolário do regime de separação apresentam-se os princípios da não confessionalidade do Estado e da liberdade de organização e independência das igrejas e confissões religiosas. E em matéria de ensino, aquela que especialmente importa ter presente, afirma-se a não confessionalidade do ensino público.
>
> [...]

> [...] a conceção da liberdade religiosa com um mero conteúdo formal, entendida como esfera de autonomia frente ao Estado e reduzida ao livre jogo da espontaneidade social, parece não satisfazer, por insuficiência, as consciências dos nossos dias.
>
> Porque a dimensão real da liberdade, de todas as liberdades, e por isso também da liberdade religiosa, depende fundamentalmente das situações sociais que permitem ou impedem o seu desfrute existencial como opções reais, a questão deve centrar-se na transformação do conceito de liberdade autonomia em liberdade situação, isto é, no significado positivo de liberdade enquanto poder concreto de realizar determinados fins que constituem o seu objeto, não só pela remoção dos entraves que impedem o seu exercício como também pela prestação positiva das condições e meios indispensáveis à realização (cf. A. Fernandez-Miranda Campoamor, "Estado laico y libertad religiosa", Revista de Estúdios Políticos, nº 6, p. 68).
>
> Contudo, se a liberdade religiosa deve entender-se não como uma mera independência, mas como uma autêntica situação social, a separação e a não confessionalidade implicam a neutralidade religiosa do Estado, mas não já o seu desconhecimento do facto religioso enquanto facto social. O Estado não é um ente alheio aos valores e interesses da sociedade, antes constitui um instrumento ao seu serviço, assumindo a obrigação de garantir a formação e o desenvolvimento livre das consciências (católicas ou ateias) e assume esta obrigação em função da procura social.
>
> [...]
>
> Não se trata de proteger ou privilegiar uma qualquer confissão religiosa, mas sim de garantir o efetivo exercício da liberdade religiosa, como consequência de uma situação e de uma exigência social".

A mesma linha de argumentação foi retomada no Acórdão 174/93, aí se defendendo que:

> "[...] O artigo 41º, nº 1, da Constituição consagra a liberdade de religião como um direito fundamental do cidadão, a qual se caracteriza como a liberdade de ter uma religião, de escolher uma determinada religião e de a praticar só ou acompanhado por outras pessoas, de mudar de religião e de não aderir a religião alguma (cf. J. J. Gomes Canotilho/Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Vol. I, 2ª ed., Coimbra Editora, 1984, p. 250; António Leite, A Religião no Direito Constitucional Português, in Estudos sobre a Constituição, Vol. II, Lisboa, Petrony, 1978, pp. 265 ss.; José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 9ª ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1992, p. 226; e Luis Vicente Cantín, Naturaleza, Contenido y Extensión del Derecho de Libertad Religiosa, Madrid, Civitas, 1990, p. 18).
>
> A liberdade de religião comporta simultaneamente uma dimensão negativa e uma dimensão positiva (cf. Jorge Miranda, Direitos Fundamentais - Liberdade Religiosa e Liberdade de Aprender e Ensinar, in Direito e Justiça, Vol. III, 1987-1988, p. 50).
>
> Na primeira dimensão, a liberdade de religião implica uma superação do poder que o príncipe detinha de definir a religião dos súbditos, de acordo com a máxima «cuius regio eius religio», a qual constituía uma característica do Estado absolutista dos séculos XVII e XVIII (cf. Reinhold Zippelius, Teoria Geral do Estado, trad. portuguesa, Lisboa, 1974, p. 136), e caracteriza-se, acima de tudo, por uma

"imunidade de coação", no sentido de que nenhuma entidade pública ou privada pode impor a outrem a adesão e a prática de uma qualquer religião.

Na sua componente negativa, a liberdade religiosa garante ao cidadão uma "esfera de autonomia frente ao «Estado» e implica que este não pode arrogar-se o direito de impor ou de impedir a profissão e a prática em público da religião de uma pessoa ou de uma comunidade.

Da garantia constitucional da liberdade de religião decorre que o Estado deve assumir-se, em matéria religiosa, como um Estado neutral (princípio da separação entre as igrejas e o Estado - artigo 41º, nº 4, da Constituição). Aquele não pode arvorar-se em Estado doutrinal, nem atribuir-se o direito de programar a educação e a cultura de acordo com diretrizes religiosas (artigo 43º, nº 2, da Lei Fundamental) ou de organizar e manter um ensino público confessional (princípio da não confessionalidade do ensino público - artigo 43º, nº 3, da Constituição). Com efeito, qualquer forma de dirigismo cultural fere o bem comum e mina os alicerces do Estado de direito. O Estado não pode, pois, impor aos cidadãos quaisquer formas de conceção do homem, do mundo e da vida.

O facto, porém, de o Estado dever observar quanto às igrejas uma regra de separação e, quanto ao ensino público, uma postura de a - confessionalidade não significa que ele não possa —e deva— colaborar com as igrejas na ministração de ensino religioso nas escolas públicas.

A circunstância de o Estado ser um Estado não confessional (princípio da laicidade) não implica que este, sob pena de vestir a roupagem de um Estado doutrinal, haja de ser um Estado agnóstico ou de professar o ateísmo ou o laicismo. O Estado não confessional deve respeitar a liberdade religiosa dos cidadãos. Mas ele só respeita esta liberdade se criar as condições para que os cidadãos crentes possam observar os seus deveres religiosos —permitindo-lhes o exercício do direito de viverem na realidade temporal segundo a própria fé e de regularem as relações sociais de acordo com a sua visão da vida e em conformidade com a escala de valores que para eles resulta da fé professada (cf. Guiseppe Dalla Torre, La Questione Scolastica nei Rapporti fra Stato e Chiesa, 2ª ed., Bologna, Pàtron Editore, 1989, p. 79)— e as confissões religiosas possam cumprir a sua missão.

Significa isto que a liberdade religiosa, enquanto dimensão da liberdade de consciência (artigo 41º, nº 1, da Constituição), assume também, como já foi referido, um valor positivo, requerendo do Estado não uma pura atitude omissiva, uma abstenção, um non facere, mas um facere, traduzido num dever de assegurar ou propiciar o exercício da religião. Como vincou este Tribunal no seu Acórdão nº 423/87, «...a conceção da liberdade religiosa com um mero conteúdo formal, entendida como esfera de autonomia frente ao Estado e reduzida ao livre jogo da espontaneidade social, parece não satisfazer, por insuficiência, as consciências dos nossos dias. Porque a dimensão real da liberdade, de todas as liberdades e por isso também da liberdade religiosa, depende fundamentalmente das situações sociais que permitem ou impedem o seu desfrute existencial como opções reais, a questão deve centrar-se na transformação do conceito de liberdade autonomia em liberdade situação, isto é, no significado positivo de liberdade enquanto poder concreto de realizar determinados fins que constituem o seu objeto, não só pela remoção dos entraves que impedem o seu exercício, como também pela prestação positiva das condições e meios indispensáveis à sua realização [cf. A. Fernandez-Miranda Campoamor, Estado Laico y Libertad Religiosa, in Revista de Estudios Politicos, 6 (1978), p. 68]»".

Como refere Jónatas Machado a este propósito, "o Tribunal Constitucional sublinhou a noção de que, do ponto de vista estrutural, o direito à liberdade religiosa comporta uma dimensão negativa, de abstenção e defesa perante o Estado, a par de uma dimensão positiva, de natureza prestacional e regulatória" (Cfr. "A Jurisprudência Constitucional Portuguesa Diante das Ameaças à Liberdade Religiosa", in Boletim da Faculdade de Direito, Vol. LXXXXII, Coimbra, 2006, p. 110).

8.1.2.– Para além destas dimensões, é ainda de assinalar as dimensões individual, coletiva e institucional da liberdade religiosa, relevando, neste caso, a primeira. Daqui decorre, fundamentalmente, que a tutela constitucional desta liberdade comporta não apenas o seu exercício individual como coletivo, aqui se compreendendo a dimensão institucional dos direitos das igrejas e confissões religiosas. Acompanha-se Gomes Canotilho e Vital Moreira na análise destas dimensões à luz da Constituição portuguesa (anotação ao artigo 41º da CRP, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, 4ª edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p. 611), quando, detalhadamente, consideram que "a liberdade religiosa engloba, no seu âmbito normativo, direitos individuais e direitos coletivos de liberdade religiosa [...]. Os direitos individuais relacionam-se com as dimensões negativas (ter, não ter, deixar de ter religião, escolher, manter ou abandonar a religião). Mas, o leque de direitos integradores da liberdade religiosa individual é mais amplo pois inclui o direito de informar e ser informado sobre a religião, o direito de transmitir a religião a outras pessoas, o direito de produzir obras científicas, literárias e artísticas em matéria de religião, o direito de proceder ou não em conformidade com as normas da respetiva religião sem proibições nem imposições oficiais, o direito de escolher para os filhos nomes com referência à religião professada, o direito de expressar externamente as crenças religiosas [...], o direito de educar os filhos de acordo com a sua religião, o direito de se casar segundo os ritos religiosos [...].

Por sua vez, os direitos coletivos de liberdade religiosa, cujos titulares são as igrejas e outras confissões religiosas (e ainda as pessoas coletivas por elas criadas) incluem o direito à auto-organização (...), o direito à autodeterminação [...] e o direito à organização do culto e à assistência religiosa dos crentes [...]. Como direito coletivo, aponta-se ainda o direito ao ensino religioso escolar pelas várias religiões, mesmo em espaços escolares públicos, e o direito à utilização dos meios de comunicação próprios nos serviços públicos de televisão e de radiodifusão [...]".

8.1.3.– Podemos, por fim, distinguir uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva da liberdade religiosa, relevando nesta última as dimensões internas e externas do próprio direito.

Em termos objetivos, por um lado, a Constituição exige dos poderes públicos a neutralidade em matéria religiosa, num Estado laico e não confessional, com expressão no princípio da separação entre as igrejas e outras comunidades religiosas e o Estado (artigo 41º, nº 4), sendo que, por outro lado, uma leitura não rígida desse princípio pode "proteger uma robusta presença do fenómeno religioso na esfera pública, sem oficializar qualquer confissão religiosa nem pôr em causa os princípios básicos do Estado Constitucional" (Jónatas Machado, "a Jurisprudência Constitucional Portuguesa Diante das Ameaças à Liberdade Religiosa", cit. p. 133). Aqui se compreende o reconhecimento da religião —das religiões— e da sua importância social., como sublinhado na seguinte passagem do Acórdão nº 174/93:

> "Com efeito, o Estado não pode fechar os olhos à dimensão social do fenómeno religioso (cf. Juan Calvo Otero, La Mencion Especifica de la Iglesia Catolica en la Constitucion Española, in E. Garcia de Enterria/L. Sanchez Agesta e outros, El Desarollo de la Constitucion Española de 1978, Zaragoza, Pórtico, 1982, p. 152). Ultrapassada, no nosso país, a fase em que a separação entre o Estado e a Igreja significou um viver de costas voltadas e reconhecida que foi a necessidade de cooperação entre aquelas duas entidades, já que o crente é, simultaneamente, um cidadão, as necessidades religiosas converteram-se num bem jurídico que ao Estado cabe garantir e a liberdade religiosa, em critério básico orientador da ação dos poderes públicos face ao fenómeno religioso".

Na sua vertente subjetiva, a liberdade de religião é consagrada como direito fundamental, na parte dedicada no texto constitucional aos direitos, liberdades e garantias, precisamente no artigo 41º, da Constituição.

Beneficia, enquanto liberdade forte, do regime material dos direitos, liberdades e garantias, previsto no artigo 18º da Constituição, daqui resultando a aplicabilidade direta do artigo 41º e a vinculação das entidades públicas e privadas à liberdade religiosa (artigo 18º/1), e, bem assim, a observância de um regime restritivo e garantístico quanto às restrições eventualmente operadas pelo legislador - e a este, em qualquer caso, reservadas (artigo 18º/2 e 3). Especialmente forte, sublinhamos nós, pois insuscetível de afetação (vg. suspensão) em caso de declaração do estado de sítio ou de emergência (artigo 19º/6, também da CRP).

Nesta vertente subjetiva releva a dupla dimensão do direito fundamental à liberdade religiosa: interna e externa. A primeira garante um espaço de autonomia individual —reservado, íntimo, pessoalíssimo— de crenças, decorrente da dignidade da pessoa humana (artigo 1º) e ainda associado à liberdade de pensamento e ao desenvolvimento da personalidade, livre das ingerências dos poderes públicos e da coação de terceiros, inviolável na terminologia constitucional. A segunda faculta às pessoas o direito de agir em função dessas convicções e crenças, em liberdade, perante os poderes públicos e os outros e a possibilidade de exercício, também em liberdade,

das atividades que correspondam a manifestações e expressões da religião professada, como o direito de culto, a reunião e manifestação pública com fins religiosos, o ensino confessional ou a divulgação da religião, mesmo com finalidades prosélitas.

Assim, na síntese feita por Manuel Pires ("Liberdade Religiosa e Benefícios Fiscais", in Liberdade Religiosa - Realidades e Perspetivas, Centro de Estudos de Direito Canónico, Universidade Católica Portuguesa, Lisboa, 1999, pp. 119-147, p. 123): "a liberdade religiosa traduz-se "no direito de toda a pessoa humana ao livre exercício da religião, segundo as exigências da sua consciência" (maneira positiva) ou "é a ausência de qualquer coação externa nas relações pessoais com Deus, que a consciência reivindica" (maneira negativa). E, por último, a liberdade religiosa implica [...] a autonomia do indivíduo não ad intra —"o Homem não está livre de obrigações no domínio das questões religiosas"— mas ad extra —"a sua liberdade é lesada quando ele não pode obedecer às exigências da sua consciência em matéria religiosa"—".

8.2.– A questão de constitucionalidade objeto do presente recurso prende-se essencialmente com a última dimensão assinalada do direito fundamental à liberdade religiosa. Com efeito, é invocado o direito de exercício do culto e o direito de guarda imposto pela religião professada pela Recorrente, in casu, desde o pôr do sol de sexta-feira até ao pôr do sol de sábado, de modo a justificar a não permanência no local de trabalho nesse período. A decisão recorrida expressamente afirma que "como resultou provado, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2009, quando o turno às sextas-feiras se iniciava à tarde e tinha o seu termo à noite, a Autora ausentava-se do trabalho, assim que atingia a hora do pôr do sol, perfazendo o somatório dos períodos de ausência de cada um desses dias o total de 65 horas e 53 minutos".

Nesta dimensão externa, no exercício do direito de agir em conformidade com as convicções religiosas, a liberdade religiosa conflitua com os deveres decorrentes da situação laboral da Recorrente, coincidindo temporalmente os períodos de observância dos deveres de assiduidade e prestação do trabalho com os períodos de guarda para o exercício da religião.

Em face da invocação da liberdade de religião e de crenças —e dos imperativos por estas ditados— conflituantes com outras obrigações, em especial as contratualmente assumidas no domínio laboral, pronunciaram-se já a Comissão e o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Considerando a jurisprudência produzida por estas instâncias internacionais, a partir de situações diversas mas que resultaram na demissão ou despedimento de trabalhadores que invocaram o seu direito à liberdade de religião para justificar a ausência do local de trabalho em dias ou períodos reservados pela religião professada

ao seu culto, resulta que a proteção conferida pelo artigo 9º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem tem sido essencialmente entendida como a proibição de despedimentos ou demissões fundados em razões religiosas.

Com efeito, para a Comissão Europeia dos Direitos do Homem, a proteção conferida pelo artigo 9º da Convenção não é de molde a excluir a responsabilidade contratual —no domínio laboral— do trabalhador que justifica o incumprimento das suas obrigações com base no exercício do direito à liberdade religiosa. No caso Tuomo Konttinen v. Finlândia (nº 24949/94), um funcionário dos Caminhos de Ferro Estatais finlandeses (Finnish State Railways) que passou a professar a religião Adventista do Sétimo Dia foi demitido por se ter recusado a prestar trabalho às sextas-feiras a partir do pôr do sol, invocando um conflito com as obrigações decorrentes da religião professada que determina a guarda do Sabbath (o sábado, entendido como o período desde o pôr do sol de sexta-feira até ao pôr do sol de sábado) para os crentes. A Comissão decidiu, em 3/12/1996, que a alegação do exercício do direito de liberdade religiosa não habilitava a justificação do incumprimento das obrigações laborais, sublinhando que o âmbito de proteção do artigo 9º da CEDH primariamente se dirige à esfera das convicções pessoais e crenças religiosas, só adicionalmente protegendo os atos intimamente ligados com essas atitudes, como, por exemplo, os atos de culto ou devoção que respeitem à prática de uma religião ou crença nas formas habitualmente reconhecidas. Nas particulares circunstâncias do caso, a Comissão entendeu que a demissão não tinha sido determinada pelas convicções religiosas do apelante mas por se ter recusado a respeitar o seu horário de trabalho, também não havendo qualquer indicação de ter sido pressionado para mudar as suas crenças religiosas ou impedido de as manifestar. Deste modo, a pretensão do apelante, para a Comissão, não era tutelada pela proteção da liberdade religiosa conferida pelo artigo 9º da CEDH. Na medida em que o recorrente, em face do conflito entre o horário de trabalho e as suas convicções religiosas, era livre de se demitir, concluiu a Comissão que o mesmo tinha ainda esta última garantia do exercício do seu direito à liberdade religiosa, pelo que a sua demissão não interferiu com o direito invocado. Daí concluir pela não violação do artigo 9º da Convenção.

Já anteriormente, a Comissão havia desatendido a pretensão de um professor do ensino básico britânico, muçulmano, que invocara o desrespeito do artigo 9º da Convenção em face da recusa da escola em que lecionava de organização de um horário letivo que lhe permitisse cumprir a obrigação de se deslocar a uma mesquita para fazer as suas orações em conjunto com outros crentes, todas as sextas-feiras, por um período de quarenta e cinco minutos (caso X v. Reino Unido, nº 8160/78, Decisão sobre a admissibilidade da petição de 12/03/1981). O recorrente alegou ter sido assim forçado a apresentar a sua demissão (tendo aceitado mais tarde trabalhar em regime de

tempo parcial, mas com prejuízo da sua situação remuneratória, progressão na carreira e benefícios sociais), o que seria equivalente a um despedimento. Não obstante a Comissão ter considerado que o direito a manifestar a religião em comunidade (e não apenas individualmente) se incluía na proteção da liberdade religiosa, foi determinante para o juízo de não violação (naquele caso) do artigo 9º o facto de o recorrente ter aceitado exercer as suas funções em tempo integral, e tê-las desempenhado por um período de seis anos, sem ter informado atempadamente o empregador da necessidade de se ausentar num determinado período do dia, aceitando as condições contratuais em regime de tempo integral. Numa passagem da decisão, a Comissão observara já que o recorrente era livre de se demitir a partir do momento em que achasse que as suas obrigações letivas conflituavam com os seus deveres religiosos e que, aliás, o recorrente exercera essa liberdade ao resignar a um regime de trabalho de cinco dias por semana para aceitar um trabalho de quatro dias por semana, assim deixando as sextas-feiras para cumprir os seus deveres como muçulmano. Em face da complexidade de organização do sistema de educação britânico, concluiu a Comissão não ter ocorrido o desrespeito do direito do recorrente à liberdade de religião sob o artigo 9º da Convenção, pela recusa de alteração do seu horário de trabalho com vista à prática da religião, se previamente aceitou exercer as funções de professor em tempo integral sem fazer qualquer reserva a esse respeito.

Pode ainda referir-se o caso que opôs uma cidadã britânica ao Reino Unido, invocando que o exercício da sua fé cristã, manifestado na sua recusa em trabalhar aos domingos, resultou na cessação do seu contrato de trabalho, por determinação da empresa onde trabalhava (caso Louise Stedman v Reino Unido, n. 29107/95, decisão da Comissão Europeia dos Direitos do Homem de 9/04/1997). Citando o caso Tuomo Konttinen v. Finlândia, e para ele remetendo, a Comissão considerou que também na situação da recorrente o despedimento não se ficara a dever às suas convicções religiosas mas ao facto de se ter recusado a respeitar o seu horário de trabalho, pelo que não estaria tutelada pelo artigo 9º da CEDH. A invocação feita pela recorrente que a imposição de trabalho aos domingos afetava ainda o seu direito a uma vida familiar (artigo 8º, da Convenção) também não foi atendida pela Comissão, que entendeu não ser este direito desrespeitado com a fixação de um horário de cinco dias incluindo o domingo de forma rotativa, como era o caso.

Mais recentemente, no julgamento do caso Francesco Sessa v. Itália (nº 28790/08), o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, em acórdão datado de 3/12/2012, apreciou uma questão diversa —estranha às obrigações derivadas de uma relação laboral— mas ainda próxima da jurisprudência anteriormente citada. Estava em causa a marcação por um juiz de um ato processual incidental no âmbito de um processo criminal em data coincidente com um feriado religioso judaico. O advogado dos queixosos (assistentes),

professando a religião judaica, havia informado o tribunal sobre a coincidência com dois feriados religiosos judaicos (o Yom Kippur e o Sukkot) em face das datas alternativas (13 e 18 de outubro de 2005) propostas pelo juiz para a realização daquele ato, requerendo a marcação noutra data, de modo a poder cumprir as suas obrigações religiosas. Marcado o ato para um dos dias referidos, foi indeferido pelo juiz de instrução o pedido de adiamento formulado pelo advogado, sendo a causa presente ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem como uma situação de violação da liberdade de religião do recorrente. O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem atendeu às razões que tinham determinado a recusa do adiamento —ditadas designadamente pelos interesses de celeridade processual e pelo facto de se tratar do advogado dos assistentes e não dos arguidos, pelo que não estaria expressamente previsto o adiamento na lei processual penal italiana— e considerou que não tinha ocorrido qualquer ingerência no direito de liberdade religiosa do recorrente, até porquanto podia ter-se feito substituir na comparência ao ato processual em causa. Neste aresto, houve ainda a oportunidade para o Tribunal recordar a jurisprudência anterior, considerando que nos casos Konttinen v. Finlândia e Stedman v. Reino Unido as medidas tomadas pelas autoridades não se basearam nas convicções religiosas dos então recorrentes, mas foram antes justificadas pelas específicas obrigações contratuais assumidas entre as pessoas implicadas e os respetivos empregadores.

8.3.– Não obstante o âmbito de proteção conferido ao direito de liberdade religiosa pela citada jurisprudência da Comissão Europeia dos Direitos do Homem e do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem —que apontaria apenas para a dimensão (negativa) de não discriminação a observar na cessação das relações laborais em causa— não pode deixar de ser tido em consideração que a proteção da liberdade religiosa tem hoje um enquadramento multinível, nacional, regional e universal, no qual deve prevalecer a proteção mais elevada. Assim, por um lado, alguns dos catálogos e respetivos sistemas de garantia transnacionais configuram-se como subsidiários relativamente à proteção do direito fundamental pelas ordens jurídicas nacionais - como é o caso do sistema de proteção da Convenção Europeia dos Direitos do Homem; por outro lado, tais sistemas de proteção transnacionais, em especial regionais, realizam os direitos tutelados enquanto standards mínimos, com vista à sua máxima efetividade, prevendo inclusivamente (e é o caso do sistema de proteção da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia) que não é prejudicada uma tutela mais ampla que possa ser conferida ao direito em causa no plano interno de cada Estado, no nível mais alto de proteção que decorra das respetivas Constituições (cf. artigo 53º da CDFUE).

Por isso, o entendimento conferido ao âmbito da tutela internacional regional da liberdade religiosa em face da sua invocação para a observância de períodos de guarda do trabalhador, por aplicação do artigo 9º da Convenção

Europeia dos Direitos do Homem, não prejudica a tutela constitucional que agora é requerida da liberdade religiosa prevista no artigo 41º da Constituição.

Ilustrativo é o exemplo que se recolhe, também em matéria de liberdade religiosa, das diferentes soluções jurisprudenciais encontradas pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e pelo Tribunal Constitucional alemão em face da pretensão, fundada em convicções religiosas muçulmanas e judaicas, de serem exercidos rituais de abate e corte de carne de animais sem observância das regras gerais que regem a atividade dos talhantes de carne para consumo humano. O Tribunal Constitucional alemão, em decisão datada de 15 de janeiro de 2002, considerou que ao abrigo da liberdade religiosa e da liberdade de profissão, um talhante muçulmano (à semelhança do já permitido nos talhos judeus) poderia beneficiar da exceção às regras gerais, de modo a seguir os ritos islâmicos de corte da carne de animais, seguindo a ideia da necessidade de acomodação das práticas religiosas compaginadas com os objetivos de proteção dos animais. Esta decisão afasta-se do sentido do acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem proferido no âmbito do caso Associação Litúrgica Judaica Cha'are Shalom ve Tsedek v. França (nº 27417/95). Aqui, não obstante o Tribunal ter considerado que o ritual de corte de carne correspondia a uma das manifestações da liberdade religiosa tutelada pelo artigo 9º da CEDH, considerou que a recusa de autorização àquela associação religiosa para o exercício desse ritual não desrespeitava o artigo 9º (isoladamente ou em conjunto com a proibição de discriminação prevista no artigo 14º, também da Convenção), já que não ficavam os membros daquela associação privados do direito de consumir carne tratada segundo os rituais da religião por outras associações religiosas a quem fora concedida a respetiva autorização, adotando uma posição mais restritiva do que a seguida pela justiça constitucional alemã (cf. Christine Langerfeld, Developments - Germany, in International Journal of Constitutional Law, Vol. I, nº 1, janeiro, 2003, pp. 141 e ss., pp. 143-145).

Ora, da jurisprudência internacional regional relevante para a questão que nos ocupa importa sublinhar que, para a Comissão Europeia dos Direitos do Homem e para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o despedimento de um trabalhador que se ausenta do seu local de trabalho para respeitar o Sabbath ou para ir à mesquita rezar em conjunto com outros crentes, em determinados períodos do dia, não corresponde a uma violação do direito de liberdade religiosa nem consequentemente uma discriminação baseada nas crenças ou na religião do trabalhador, já que se entendeu não ser aquele despedimento motivado pelas convicções religiosas do trabalhador, mas sim pelo incumprimento de obrigações contratuais, por este voluntariamente assumidas, podendo, a todo o tempo, demitir-se ou fazer cessar a relação laboral e assim retomar de pleno o exercício da liberdade religiosa.

Contudo, à luz da Constituição portuguesa, a tutela do trabalhador que exerce a sua liberdade religiosa afigura-se mais ampla do que a mera proteção contra as discriminações infundadas ou, se se quiser, fundadas em razões religiosas, e assim proibidas como causas de despedimento, cabendo ao legislador assegurar não apenas a igualdade dos trabalhadores (crentes e não crentes) contra ingerências discriminatórias, mas também o exercício da liberdade religiosa de que não podem nem devem abdicar simplesmente enquanto trabalhadores ou, mais precisamente, enquanto trabalhadores subordinados. Com efeito, sendo a dimensão religiosa do indivíduo uma das mais importantes dimensões da sua autonomia e personalidade, não é expectável que se possa exigir o apagamento ou neutralização sem mais dessa faceta da pessoa só e enquanto trabalha (acrescente-se, para outrem), tomando-se sempre e em qualquer caso prevalecentes os deveres resultantes das obrigações contratuais.

Considera-se que o direito em presença —o direito de o trabalhador reservar períodos de guarda impostos pela religião professada— decorre da proteção normativa da liberdade de religião (na sua dimensão externa) consagrada no artigo 41º da Constituição portuguesa. Assim, em face da tutela conferida pelo Direito interno português —ao nível constitucional— o que cumpre ponderar é se das normas contidas no artigo 14º, nº 1, da Lei da Liberdade Religiosa resulta um nível adequado de proteção do direito em presença.

Esta preocupação tanto mais se justifica quanto se entenda que uma tutela jurídica adequada da liberdade religiosa não pode deixar de contemplar a proteção da sua dimensão externa. Como escreve Jónatas Machado (Liberdade Religiosa numa Comunidade Constitucional Inclusiva - Dos direitos de verdade aos direitos dos cidadãos, Coimbra Editora, Coimbra, 1996, pp. 222-223), esclarecendo o sentido da unidade essencial entre crença e conduta, "[...] a liberdade religiosa não seria adequadamente tutelada se admitisse uma tão estrita como simplificadora bipolaridade entre crença (belief) e conduta (action), que resultasse numa generosa proteção da primeira e na desvalorização da segunda [...].

Compreende-se que as condutas coloquem mais problemas jurídicos do que as crenças em si. No entanto, a construção dogmática de uma teoria das restrições à liberdade religiosa com base na distinção entre umas e outras teria como consequência a descaracterização do fenómeno religioso e a subversão completa, ou o esvaziamento, do programa normativo que a Constituição lhe faz corresponder. Este encara a religião como uma unidade incindível entre convicções e práticas religiosas (cf. 41º-2). [...]

As convicções religiosas, como também as convicções de outra natureza, encerram, frequentemente, a assunção íntima e vital de um compromisso

existencial e ético, com significativas repercussões comportamentais nos planos político, social, cultural, económico, etc. Se assim é, tais convicções não podem ser artificialmente desligadas da ação humana em que se concretizam e manifestam, juntamente com a qual se subsumem a uma realidade incindível: o fenómeno religioso. Daqui deriva, em boa parte, o relevo jurídico-constitucional que este apresenta. Compreensivelmente, em nome da proteção do indivíduo, da unidade e integridade da sua personalidade moral, a liberdade religiosa deve proteger a conduta religiosa, a liberdade de atuação e autoconformação com as próprias convicções, numa medida tão ampla quanto o permita uma ponderação de bens constitucionalmente saudável".

Por quanto fica exposto, não pode deixar de se conferir relevo ao papel do Estado na efetivação das liberdades protegidas pelo artigo 41º, da Lei Fundamental, em especial da liberdade de religião. Tendo o mesmo por referência, considera-se que cabe primacialmente ao Estado proteger as condutas ditadas por crenças, não apenas no cumprimento de um dever de abstenção (não ingerência), mas também por via da remoção dos obstáculos e da criação das condições —no plano social— mais favoráveis ao exercício da liberdade religiosa. Retomando o Acórdão nº 174/93, "[...] o Estado não confessional deve respeitar a liberdade religiosa dos cidadãos. Mas ele só respeita esta liberdade se criar as condições para que os cidadãos crentes possam observar os seus deveres religiosos - permitindo-lhes o exercício do direito de viverem na realidade temporal segundo a própria fé e de regularem as relações sociais de acordo com a sua visão da vida e em conformidade com a escala de valores que para eles resulta da fé professada". Assim também o Acórdão 423/87: "[...] a dimensão real da liberdade religiosa depende fundamentalmente das situações sociais que permitem ou impedem o seu desfrute existencial como opções reais, competindo ao Estado, enquanto instrumento ao serviço dos valores e interesses da sociedade, assumir a obrigação de garantir a formação e o desenvolvimento livre das consciências, nomeadamente no plano da sua vivência religiosa".

Na dimensão externa da liberdade de religião —o direito de agir em conformidade com as próprias convicções religiosas —o fenómeno religioso não deixa de ter impacto no âmbito social, não se confinando à relação estabelecida entre o indivíduo e os poderes públicos e assim a tutela constitucional da liberdade religiosa não fica confinada à proteção do crente relativamente a ingerências ou ameaças dos poderes públicos. Uma tutela constitucional ampla dos direitos liberdades e garantias —e da liberdade de religião em especial— seria coartada de uma significativa parte da proteção conferida pela Constituição se compreendida apenas na vertente da defesa dos titulares do direito de liberdade religiosa contra o Estado. Enquanto valor constitucionalmente consagrado, com eficácia irradiante, a liberdade de religião informa

também as relações sociais. Nesta sequência, é frequente a invocação do regime específico dos direitos liberdades e garantias previsto no artigo 18º, nº 1, da Constituição, ao estabelecer a vinculação das entidades públicas e privadas a estes direitos fundamentais. Nem sempre é necessário, quando, neste domínio das relações laborais, há opções normativas tendo por destinatários entidades privadas (ou também entidades privadas) que decorrem diretamente da Constituição, seja a proibição de discriminação do trabalhador em função da religião (artigo 59º, nº 1, CRP), seja a proteção relativa a perguntas sobre as convicções religiosas, mormente aquando da seleção e contratação dos futuros trabalhadores (artigo 41º, nº 3, CRP, com as necessárias adaptações), o que não deixa de estar relacionado com a proibição da discriminação por motivos religiosos, também especificada no nº 2 do artigo 41º da Constituição. A proibição de discriminação abrange não apenas a fase da contratação dos trabalhadores, mas está presente na relação laboral até à sua cessação, aqui se tendo por constitucionalmente ilícitos os despedimentos fundados em razões religiosas (o que também decorre da proibição constitucional plasmada no artigo 53º, CRP).

A presente situação —em que está em causa o enquadramento normativo, infraconstitucional, das relações laborais em face do exercício da liberdade religiosa dos trabalhadores— não convoca autonomamente o regime de vinculação das entidades privadas aos direitos, liberdades e garantias. Com efeito, o legislador previu um regime de suspensão da atividade laboral justificado pelo exercício da liberdade de religião, assim criando um dever específico de respeito para as entidades empregadoras, sejam públicas (nas quais se inclui o próprio Estado empregador) ou privadas, plasmado esse regime nos requisitos fixados nas três alíneas do nº 1 do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa cuja inconstitucionalidade foi suscitada nos autos e sendo esse o objeto do presente recurso de constitucionalidade.

De todo o modo, a eficácia irradiante do direito fundamental de liberdade religiosa não pode deixar de ser tida em conta na apreciação da intervenção do legislador. Isto, porquanto, por um lado, a liberdade de religião por parte do seu titular convoca, mesmo na sua dimensão menos exigente, um dever geral de respeito (que, neste domínio, podemos concretizar como uma obrigação de tolerância nas palavras de Jónatas Machado, Liberdade Religiosa Numa Comunidade Constitucional Inclusiva - Dos Direitos de Verdade aos Direitos dos Cidadãos, cit., p. 255), assim se dirigindo a todos, pelo que sempre caberia ao legislador criar as condições para o efeito e, por outro lado, relevando a invocação do direito no plano social (laboral), a atividade do legislador não poderá deixar de ponderar também os direitos e interesses eventualmente colidentes que assistam aos empregadores.

É que já foi assinalado não se tratar a liberdade religiosa —sobretudo na sua vertente externa— de um direito absoluto, que habilite a sobreposição a todos os demais, não obstante a sua inegável relevância jurídico-constitucional. Nesse sentido, a ponderação de outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos não pode deixar de pesar na análise das normas legais agora postas em crise. Contudo, poderá desde já antecipar-se não se retirar dessa ponderação in casu as mesmas conclusões já alcançadas pelos Tribunais a quo.

Vejamos, porquê.

8.4.– O artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa veio prever o direito de dispensa do trabalho, de aulas e de provas por motivo religioso, estabelecendo, no seu nº 1, que os funcionários e agentes do Estado e demais entidades públicas, bem como os trabalhadores em regime de contrato de trabalho, têm direito, a seu pedido, de suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhes sejam prescritos pela confissão que professam, nas seguintes condições:

a) trabalharem em regime de flexibilidade de horário;

b) serem membros de igreja ou comunidade religiosa inscrita que enviou no ano anterior ao membro do Governo competente em razão da matéria a indicação dos referidos dias e períodos horários no ano em curso;

c) haver compensação integral do respetivo período de trabalho.

Não obstante configurar o direito em causa como um direito que assiste a todos os crentes, independentemente da religião professada, o regime legal em causa não pode deixar de corresponder a uma preocupação de tratamento de organizações religiosas minoritárias no que respeita à organização do tempo. Dado relevante, embora não determinante, é o facto de o dia de descanso semanal dos trabalhadores em Portugal —não obstante a sua evidente secularização— corresponder ao domingo, dia de culto para a religião católica.

Foi aliás por considerar que se mostrava acautelado o direito ao descanso nos domingos e que esta escolha do legislador não consubstanciava um tratamento desigualitário das várias confissões religiosas que o Tribunal Constitucional espanhol decidiu desfavoravelmente um recurso de amparo interposto por uma cidadã espanhola, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para as práticas sabatistas no âmbito de uma relação laboral. Entendeu aquele Tribunal ("Sentencia 19/1985", de 13 de fevereiro de 1985, in BOE núm. 55, de 5 de março de 1985, disponível em www. tribunalconstitucional.es) que o descanso semanal correspondia, em Espanha, "como nos povos de civilização cristã", ao domingo, sendo a escolha desse dia decorrente de

mandato religioso e da tradição. Contudo, sublinhou o Tribunal não se poder daí retirar que se trata da manutenção de una "instituição com origem causal única religiosa", sendo inequívoco, no seu acolhimento na legislação laboral, tratar-se de uma instituição "secular e laboral", que, "se compreende o domingo como regra geral de descanso, é porque é este o dia da semana consagrado pela tradição". Acentuando a secularização da escolha desse dia, até pela "aconfessionalidade" proclamada no artigo 16º da Constituição espanhola de 1978, e o facto de se tratar de regra dispositiva, podendo ser outro o dia de descanso dos trabalhadores, a estabelecer em acordo individual ou coletivo de trabalho, entendeu o Tribunal ser essa escolha indiferente para o legislador. Negando o recurso, concluiu o Tribunal Constitucional espanhol que "a tese da demandante conduz a configurar o descanso semanal como instituição marcadamente religiosa - que não é, [...] o que obviamente, não é possível, por muito respeitáveis que sejam —e são— as suas convicções religiosas".

Todavia, esta perspetiva não se afigura adequada para resolver as questões de constitucionalidade colocadas.

É que a escolha do domingo não será determinante, por se dirigir à realização de outros direitos constitucionalmente consagrados, como in casu, o direito ao descanso (artigo 59º, nº 1, alínea d), da Constituição) —o que não é o caso que nos ocupa, aliás prevendo-se mesmo a compensação do tempo de ausência do trabalhador para o cumprimento dos seus deveres religiosos—, mas será relevante por coincidir com um dia de culto religioso. Bem assim, os feriados religiosos em Portugal correspondem também aos dias como tal entendidos pela religião maioritária. A este respeito, e por não se dirigirem os feriados à realização de um direito subjetivo do trabalhador ao descanso (fundado no citado artigo 59º, nº 1, alínea d), CRP), mas sim à realização de interesses coletivos em articulação com os direitos subjetivos do trabalhador de participar nessas festividades (em sentido mais próximo da realidade que nos ocupa), vale a pena mencionar a seguinte passagem do Acórdão do Tribunal Constitucional nº 602/13:

> "Os dias de feriado obrigatório relevam no âmbito das relações laborais, na medida em que, em tais dias, é obrigatório o encerramento ou suspensão da laboração de todas as atividades que não sejam permitidas aos domingos (cf. o artigo 236º do Código do Trabalho). A paragem da prestação de trabalho é, assim, uma consequência da suspensão da laboração e destina-se a possibilitar a celebração coletiva de datas ou eventos considerados relevantes no plano político, religioso ou cultural. Ou seja, neste âmbito, não há um direito do trabalhador perante o empregador (direito ao descanso ou ao repouso), mas sim um dever das entidades empregadoras perante o Estado que se articula com um direito subjetivo público dos trabalhadores, traduzido num direito a tempo livre para participar na comemoração (neste sentido, António Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, cit., pp. 345 e 346). Ou seja, os feriados "não visam propriamente conceder repouso ao

> trabalhador, mas antes permitir-lhe participar nas festividades organizadas nesses dias" (assim, Luís Menezes Leitão, Direito do Trabalho, 3ª ed., Almedina, Coimbra, 2012, p. 275; v. no mesmo sentido, María do Rosário Palma Ramalho, Tratado de Direito do Trabalho. Parte II..., cit., p. 508), ainda que indiretamente possa haver uma relação entre os feriados e o repouso do trabalhador, uma vez que este está eximido de prestar atividade no dia feriado (Pedro Romano Martinez, Direito do Trabalho, 6ª ed., Almedina, Coimbra, 2013, pp. 525 e 526)".

Neste enquadramento, melhor se compreende o escopo do regime normativo em causa, cuja importância mais se verifica na realização da liberdade religiosa numa comunidade plural. Nas palavras de Jónatas Machado, "a liberdade religiosa constitui um mecanismo de proteção do pluralismo religioso, com base no reconhecimento de que numa ordem constitucional livre e democrática os cidadãos tenderão, naturalmente, a adotar diferentes convicções religiosas e a reunir-se em múltiplas confissões religiosas. O Tribunal Constitucional sublinhou que o dever estadual de proteção negativa e positiva da liberdade religiosa abrange as diferentes confissões religiosas, sem prejuízo da tomada de consideração, em termos razoáveis, das diferenças fácticas existentes entre elas e do modo como as mesmas podem justificar diferenciações normativas constitucionalmente adequadas" (Cfr. "A Jurisprudência Constitucional Portuguesa Diante das Ameaças à Liberdade Religiosa", cit., p. 111).

Questionada a constitucionalidade da aplicação cumulativa das três alíneas do nº 1 do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa, como requisitos para o exercício do direito de o trabalhador, a seu pedido, suspender o trabalho no dia de descanso semanal, nos dias das festividades e nos períodos horários que lhe sejam prescritos pela confissão que professam, a partir da interpretação que lhes foi conferida na decisão recorrida, importa centrar a análise na ratio dessa decisão, para a qual foi determinante a aplicação das alíneas a) e c) do nº 1 do preceito legal citado, de sentido desfavorável à recorrente. Com efeito, o requisito estabelecido na alínea b) desse preceito legal não se revelou determinante para a decisão, sendo que, em qualquer caso, da sua aplicação não derivaria uma decisão desfavorável à recorrente.

Para o efeito, o Tribunal da Relação do Porto (secundando o entendimento do Tribunal de 1ª instância) considerou que o exercício daquele direito só poderia ser invocado por trabalhadores a que fosse aplicável um regime de horário flexível (alínea a), do nº 1, do artigo 14º, da Lei), considerado indispensável para a observância do requisito de compensação integral por parte do trabalhador do respetivo período de trabalho no qual ocorra a suspensão (alínea c), do nº 1 do artigo 14º, da Lei). Na aplicação do requisito da flexibilidade de horário, como qualquer regime de trabalho que se distancie dos esquemas em que a característica seja a fixidez, o Tribunal perfilha uma interpretação segundo a qual o horário flexível se verifica apenas nos regimes

de organização do tempo do trabalho em que estão delimitados períodos de presença obrigatória do trabalhador e a possibilidade de escolha por este, dentro de certas margens, das horas de entrada e de saída, socorrendo-se da interpretação formulada pelo Tribunal de 1ª instância: "o trabalhador prestará a sua atividade em regime de flexibilidade de horário quando, no interesse da entidade empregadora —radicado na organização do seu funcionamento, porque desse modo proporciona a obtenção da utilidade da força de trabalho à disposição daquela— tenha sido estabelecido um esquema em que aquela prestação, contendo-se nos limites legais do período normal de trabalho, possa ter hora variável de entrada e saída, dependendo tal de determinadas circunstâncias ou condições ou sendo gerido pelo trabalhador, em qualquer caso tendo em vista uma melhor eficácia da sua prestação". Assim, considerou excluida da previsão da norma o regime de horário por turnos rotativos.

A interpretação normativa conferida pelo Tribunal a quo aos requisitos estabelecidos na Lei da Liberdade Religiosa para o exercício da liberdade religiosa do trabalhador assenta na ideia de que o direito de guarda de períodos reservados para o culto impostos pela religião professada pode ser exercido se, na organização do funcionamento da unidade empresarial —no interesse da entidade empregadora e com vista à melhor eficácia da prestação do trabalho—, for estabelecido um regime que contemple a possibilidade de variação da hora de entrada e de saída dos trabalhadores. A partir desta interpretação, verifica-se que os requisitos legalmente estabelecidos para o exercício do direito, na parte em que respeitam ao tempo da prestação do trabalho (e à compensação da ausência do trabalhador, pois, segundo aquele Tribunal, apenas possível num regime de flexibilidade de horário), são entendidos como alheios a qualquer conformação que pudesse decorrer da situação dos trabalhadores que invocam o direito em causa, correspondendo tão só a um regime de organização do tempo de trabalho (previamente) estabelecido pela entidade empregadora, de que possa eventualmente usufruir o trabalhador crente (e os demais).

O Tribunal justifica esta asserção, ao considerar, a propósito da intenção do legislador, que "o que se pretendeu [...] foi harmonizar dois direitos potencialmente em conflito: o direito do trabalhador à liberdade religiosa e o direito do empregador à correta gestão dos meios humanos ao seu dispor. Sempre com a preocupação que o exercício do direito do trabalhador não acarrete, para um empregador, um prejuízo injustificado e desproporcionado".

O juízo de concordância dos direitos e interesses em presença —de um lado, a liberdade religiosa do trabalhador, de outro lado, o direito de iniciativa económica do empregador, aqui incluido o direito de organização do tempo de trabalho (também contido no princípio da liberdade de organi-

zação empresarial previsto no artigo 80º, alínea c), da CRP) e, bem assim, do estabelecimento de um horário de trabalho— não pode deixar de ser feito pelo legislador. Com efeito, já o dissemos, a liberdade religiosa (na sua vertente externa) não é um direito absoluto e irrestrito, mesmo que, acrescente-se agora, da letra do nº 1 do artigo 41º nada resulte a esse respeito. Quando exercida no âmbito de uma relação laboral, a liberdade religiosa do trabalhador poderá sofrer alguma compressão justificada pelos direitos e interesses em presença.

Contudo, a partir do momento em que se entende que o direito à liberdade religiosa do trabalhador não se mostra confinado à sua dimensão interna e que a proteção constitucional é mais ampla do que a mera garantia contra tratamentos discriminatórios, a ponderação in casu da estrita configuração do exercício daquela faculdade contida no direito de liberdade religiosa do trabalhador em face dos outros direitos e interesses constitucionalmente relevantes revela-se desconforme com o programa constitucional de proteção da liberdade de religião.

Desde logo, o juízo de ponderação feito pelo Tribunal recorrido entre os direitos e interesses em presença —previstos, respetivamente, nos artigos 41º e 61º (e 80º, alínea c)) da Constituição— aponta para a prevalência do direito de livre iniciativa económica (e da liberdade de organização empresarial) sobre o direito de liberdade religiosa, com o claro sacrifício desta, sem que se vislumbre de que modo possa ser afetada a organização empresarial do tempo de trabalho e a liberdade do empregador sempre e em qualquer caso em que essa organização não tenha contemplado a possibilidade de os trabalhadores terem um horário variável na entrada e saída. Depois, sendo esta a interpretação conferida ao requisito da flexibilidade de horário, conclui-se que só nestas circunstâncias possa ser exercida a liberdade religiosa do trabalhador nos termos do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa, o que reduz o universo dos trabalhadores abrangidos a uma ínfima parte do universo dos trabalhadores subordinados a um horário de trabalho (sendo este um elemento determinante da própria relação laboral subordinada). Ainda, e na medida em que a organização do tempo de trabalho e a fixação de um horário se compreendem nos direitos gestionários da entidade empregadora, esta configuração em concreto dos requisitos para o exercício do direito em causa apenas contempla o exercício daqueles direitos da entidade empregadora, naturalmente estranhos e não dirigidos à liberdade religiosa dos trabalhadores - pois determinados pelos objetivos de produtividade e eficácia na prestação do trabalho.

Assim interpretados os requisitos previstos nas alíneas a) e c) do nº 1 do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa, revelam-se de limitadíssima aplicação, abrangendo apenas as situações em que o trabalhador exerce a sua ati-

vidade numa organização em que haja sido estabelecido um regime flexível para o horário de trabalho (isto é, com variação na hora de entrada e de saída) por razões estritamente gestionárias, de acordo com os direitos e interesses (desta forma entendidos como prevalecentes) da entidade empregadora.

Com efeito, o caminho formulado pelo legislador, ao configurar (como fez) os requisitos cumulativos do nº 1 do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa para o trabalhador poder exercer o seu direito de observância do tempo ditado pela sua confissão religiosa no âmbito das relações laborais, não se compadece com os restritíssimos termos da interpretação normativa que foi dada às alíneas a) e c) daquele preceito.

Ora, a proteção constitucional do direito à liberdade religiosa procura realizar-se na possibilidade real —e não apenas virtual— de o exercício desse direito ter lugar também perante entidades empregadoras (aqui se incluindo o Estado, na posição de Estado empregador e as entidades privadas), não podendo ignorar-se que desse exercício possa resultar a colisão com outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos - como é o caso. A ponderação do legislador na criação das condições para a realização do direito de liberdade religiosa em face desses outros direitos não poderá contudo consubstanciar a prevalência destes nas situações de possível conflito que daquela resultem. Isto, sem que observe o princípio da proporcionalidade nas restrições que se entendam necessárias e justificadas ao direito de liberdade religiosa dos trabalhadores para a realização desses outros direitos, aqui traduzidos na liberdade de iniciativa económica privada.

Do quadro constitucional de tutela da liberdade de religião decorrem os princípios de tolerância e de acomodação dos direitos derivados do exercício da religião no âmbito social como vetores do próprio programa normativo constitucional, que não se limita à afirmação de que o reconhecimento da liberdade religiosa no mundo laboral se efetua tão só através do princípio da igualdade e não discriminação. Como escreve Jónatas Machado, "a eficácia externa da liberdade religiosa implica mais do que a observância do princípio da igualdade, vinculando positivamente a entidade empregadora a proceder a uma medida determinada de acomodação da religião" (Cfr. Liberdade Religiosa numa Comunidade Constitucional Inclusiva, cit. p. 265; no mesmo sentido, Susana Sousa Machado, "Liberdade Religiosa e Contrato de Trabalho", in Questões Laborais, Ano XIX, nº 39, janeiro-junho 2012, Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pp. 79 e ss., pp. 91-93).

A ideia de acomodação da liberdade religiosa numa comunidade plural, com amplo desenvolvimento na jurisprudência norte-americana, encontra eco no voto de vencido dos juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem Tulkens, Popovic e Keller (caso Sessa v. Itália, supra referido), ao considerarem violado o direito de liberdade religiosa no caso, entre outras

razões, pelo facto de considerarem que a medida adotada se revelou desproporcionada, não acolhendo as razões da necessidade de manutenção da data fixada e coincidente com um feriado judaico para a realização de interesses de celeridade processual e de organização dos trabalhos como determinantes para a restrição operada ao direito de liberdade religiosa. Isto, porquanto, para estes juízes teria sido possível encontrar uma "acomodação razoável" (reasonable accommodation) da situação, sem comprometer o interesse de uma adequada administração da justiça.

E Jónatas Machado, na esteira da jurisprudência constitucional norte-americana dedicada ao tema da religião no seio das relações laborais, defende mesmo que do programa constitucional português de tutela dos direitos religiosos resulta um dever, para as entidades empregadoras, de acomodar a liberdade religiosa dos trabalhadores. Sobre a Constituição portuguesa, escreve o Autor que "aqui, a ideia de acomodação razoável da religião assume as vestes de uma concordância prática entre direitos e interesses em colisão, atenta à especial centralidade que o fator religioso assume como elemento constitutivo da identidade e autocompreensão do indivíduo. O direito à liberdade religiosa do trabalhador deverá ser equacionado, de acordo com critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com os direitos de propriedade e iniciativa económica privada do empregador, no sentido que garanta a sua máxima efetividade, isto é, que possibilite a obtenção do equilíbrio menos restritivo entre os bens em colisão. Deve notar-se, todavia, que o aparente tratamento preferencial do trabalhador por causa das suas convicções religiosas, não é realmente mais do que a única solução logicamente possível para o problema da acomodação da religião" (Cfr. Liberdade Religiosa Numa Comunidade Constitucional Inclusiva, cit., p. 269).

Nesta linha, o comando constitucional dirigido ao legislador na regulação do direito em causa é o de conferir a máxima efetividade ao direito decorrente da liberdade religiosa, sem prejuízo da devida ponderação dos direitos e bens constitucionalmente protegidos pelo artigo 61º (e 80º) da Constituição. Estes não poderão deixar de ser pesados, segundo juízos de razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, uma interpretação do requisito da flexibilidade do horário de trabalho (de que dependeria também o requisito da compensação do período de trabalho não prestado) inteiramente reportada a uma modalidade de determinação de horário (com variação na hora de entrada e saída), inteiramente na disponibilidade da entidade empregadora e sem qualquer relação com a possibilidade de o trabalhador crente observar os ditames da sua religião que possam de algum modo conflituar com o esquema de organização do tempo de trabalho a que se subordina, descaracteriza a ampla proteção conferida pela Constituição à liberdade religiosa, em várias das dimensões assinaladas,

para mais quando reforçada por imperativos de consciência, também eles protegidos ao nível constitucional.

Deste modo, na interpretação conferida às alíneas a) e c) (e na medida em que o requisito da compensação do tempo de trabalho apenas se verificará em regime de flexibilidade de horário), o pendor redutor da dimensão normativa a que o Tribunal as confina torna-se evidente.

Com efeito, a dificuldade de preenchimento do primeiro requisito resulta desde logo da escassa abrangência conferida ao conceito de flexibilidade de horário laboral que, ao contrário do que poderia resultar de uma leitura apressada, não se revela flexível, mas dotado de uma enorme rigidez. Ao aplicar-se apenas aos trabalhadores que desenvolvam a sua atividade num esquema de estabelecimento de um período de presença obrigatória, com uma consentida margem de variação das horas de entrada e saída, não será de ignorar que, em face dos elementos do direito positivo infraconstitucional, tal regime apenas se mostra expressamente consagrado no regime aplicável aos trabalhadores da Administração Pública consagrado no Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de agosto (cf. sobre os "horários flexíveis" os artigos 15º, nº 1, a) e 16º) ou, ainda mais limitadamente no domínio das relações laborais privadas, e para as específicas situações de trabalhadores com responsabilidades familiares, a que possa ser autorizado um horário de trabalho flexível, no qual o trabalhador pode escolher, dentro de certos limites, as horas de início e termo do período normal de trabalho diário (cf. artigo 56º, do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de fevereiro, com a última alteração operada pela Lei nº 27/2014, de 8 de maio). No demais, resultará eventualmente da conformação das relações de trabalho no âmbito da autonomia privada das partes a exercer contratualmente. Deste modo, se compreende a advertência feita por Susana Sousa Machado quanto à "tímida abertura da Lei da Liberdade Religiosa" ao fenómeno da religião no seio das relações laborais, escrevendo, a propósito da interpretação do disposto no artigo 14º, nº 1, alínea a) dessa lei que "[...]parece-nos que o regime em análise apenas se aplica a trabalhadores cujo empregador seja uma entidade de natureza pública, ou seja, apesar de restrito, terá ainda um âmbito de aplicação subjetivo muito limitado" ("Liberdade religiosa e contrato de trabalho", cit., p. 98).

Nesta limitação do âmbito de aplicação subjetivo da norma, ficam os trabalhadores não abrangidos por um regime de "horário flexível" (tal como definido no aresto recorrido) —e com isto se quer dizer: a grande generalidade das situações— perante o dilema de opção entre o cumprimento dos deveres laborais e o cumprimento dos deveres religiosos, caindo-se a final na solução apresentada pelo Tribunal de Estrasburgo, quando propõe como opção do trabalhador a cessação, por sua iniciativa, da relação laboral, para assim exercer livremente os deveres religiosos com esta conflituantes. Ora,

reconheça-se que essa opção não existe —ou muito dificilmente existirá— nem de facto nem de direito. Isto, não apenas tendo presente o atual estado do mercado laboral, relevando a conjuntura de subemprego, como, sobretudo, e mesmo na eventualidade de vir o trabalhador a encontrar outro posto de trabalho, não se afigurar de que forma seria então livremente exercida a sua religião se ainda no âmbito do mesmo enquadramento normativo e sob o mesmo nível de tutela do direito.

Sublinhe-se ainda que o requisito assim interpretado representaria a clara prevalência dos interesses empresariais e gestionários, a quem se comete desde logo a própria definição do horário (estranho à ponderação da situação do trabalhador crente), sem que seja necessário sobrevir prejuízo ou encargo indevido ou excessivo para a entidade empregadora que pudesse legitimamente justificar a restrição do direito de liberdade religiosa do trabalhador. Pelo que a ponderação dos valores em presença revela-se fortemente restritiva do direito à liberdade religiosa, sacrificando-a em face da tutela de interesses e direitos que permanecem intocados.

Deste modo, a interpretação conferida aos requisitos cumulativos previstos no nº 1 do artigo 14º, nº 1, da Lei da Liberdade Religiosa, contidos nas alíneas a) e c), que estabelecem os requisitos da flexibilidade do horário de trabalho e da compensação integral do período de suspensão, aquele reportado às situações em que seja estabelecido pela entidade empregadora um regime com variação da hora de entrada e saída dos trabalhadores, este só possível se verificado o primeiro, determinaria uma compressão desrazoável e excessiva da liberdade de religião (prevista e tutelada pelo artigo 41º, nº 1 da Constituição), em moldes não consentidos pelo princípio da proporcionalidade, também da Constituição.

Nesta sequência, é de ponderar, no âmbito do programa constitucional amplo de proteção da liberdade religiosa, que não pode decorrer da interpretação da alínea a) do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa, ao referir-se a "flexibilidade de horário", a consideração tão só de uma modalidade de "horário flexível" (como previsto no Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de agosto ou, muito limitadamente, no artigo 56º do Código do Trabalho), que, ao permitir uma variação nas horas de entrada e saída do trabalhador, se toma por paradigma de um regime com flexibilidade de horário, não se compaginando o valor constitucional que informa o direito previsto no artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa com as definições ou regimes estabelecidos no plano infraconstitucional pelo legislador ordinário —de aplicação limitada ou circunscrita—, para mais prosseguindo estes, as mais das vezes, direitos e interesses diversos (como, designadamente, a maternidade, as responsabilidades familiares, a educação e formação do trabalhador) dos protegidos no artigo 41º da Constituição portuguesa.

É que uma interpretação da lei consentânea com a Constituição —que protege, nos termos expostos, a liberdade religiosa dos indivíduos— não pode deixar de considerar incluidas no conceito de flexibilidade de horário (salvaguardada a possibilidade de compensação do trabalho não prestado em certo período) todas as situações em que seja possível compatibilizar a duração do trabalho com a dispensa do trabalhador para fins religiosos, operando-se, assim, a acomodação dos direitos fundamentais do trabalhador.

Nesta abertura da leitura da norma legal em causa, em linha com a ampla proteção conferida pelo legislador constitucional ao direito de liberdade religiosa, não pode deixar de se compreender a organização do trabalho em turnos, que, pela sua configuração rotativa e variável designadamente quanto à afetação de trabalhadores a cada turno, possibilitaria, in casu, a acomodação das práticas religiosas dos trabalhadores para efeitos da dispensa do trabalho em certos períodos ou dias ditados pelas crenças professadas, sem prejuízo da compensação devida (por via da prestação efetiva do trabalho). É que a configuração rotativa e variável do regime de horário por turnos (e, assim, "flexível") habilita soluções que vão ao encontro da letra e do espírito da lei, com vista à criação, sempre que possível, das condições favoráveis ao exercício da liberdade religiosa dos trabalhadores, pelo que, diversamente dos limitados termos da interpretação normativa feita no aresto recorrido, não se considera aquele regime excluido da previsão da norma.

Outros regimes poder-se-iam considerar abrangidos por aquela previsão legal, designadamente, os regimes de horários desfasados, de tempo parcial, de jornada contínua ou de isenção de horário, previstos no Decreto-Lei nº 259/98, de 18 de agosto, para a Administração Pública, ou, no âmbito das relações jurídico-laborais privadas, o trabalho a tempo parcial para os trabalhadores com responsabilidades familiares (artigo 55º, do Código do Trabalho) ou o regime de isenção de horário previsto no artigo 218º (também do Código do Trabalho), não se esgotando nestes exemplos.

Uma interpretação constitucionalmente conforme da Lei da Liberdade Religiosa, quanto ao seu artigo 14º, para mais propiciada pela falta de uma definição rígida e fechada do conceito de flexibilidade de horário, em face da liberdade fundamental prevista no artigo 41º da Constituição, não pode deixar de apontar para uma mais elevada proteção deste direito fundamental, irradiando o seu efeito para as relações laborais, de modo a entender-se caber também aos empregadores a procura de soluções gestionárias de organização laboral que acautelem o exercício de direitos fundamentais pelos trabalhadores, neste caso, o direito à liberdade religiosa.

Aliás, também noutras situações previu o legislador o dever de a entidade empregadora proceder à acomodação de outros direitos fundamentais dos trabalhadores, como ilustrado com a previsão específica de obrigação de

ajustamento do horário dos trabalhadores-estudantes (artigo 90º do Código do Trabalho), ou com a formulação mais genérica por via da obrigação de ponderação de direitos dos trabalhadores e de circunstâncias relevantes aquando da fixação dos horários de trabalho, nos termos cometidos ao empregador pelo artigo 212º, nº 2, do Código do Trabalho ou aos dirigentes (da Administração Pública) pelo artigo 22º do citado Decreto-Lei nº 259/98.

Entende-se decorrer da ampla proteção constitucional da liberdade de religião que, no presente caso, o "regime de horário flexível" não deixe de incluir os horários por turnos, habilitando a compatibilização do horário de trabalho (e da sua compensação devida) com o exercício da liberdade religiosa do trabalhador, sendo essa interpretação —e não a interpretação restritiva seguida pelo Tribunal a quo quanto às alíneas a) e c) do nº 1, do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa (a primeira interpretada no sentido de o regime de flexibilidade de horário se reportar apenas a regimes de organização do tempo do trabalho em que estão delimitados períodos de presença obrigatória do trabalhador e a possibilidade de escolha por este, dentro de certas margens, das horas de entrada e de saída, e a segunda interpretada no sentido de a compensação do período de trabalho apenas se verificar em regime de flexibilidade de horário com aquele sentido)— a que se mostra adequada a fazer respeitar a nossa Constituição.

Assim, por que não seria constitucionalmente admissível a interpretação normativa conferida às alíneas a) e c) do nº 1 do artigo 14º da Lei da Liberdade Religiosa, ao consubstanciar uma compressão desproporcionada da liberdade de religião consagrada no artigo 41º da Constituição da República Portuguesa, justifica-se proferir uma decisão interpretativa, ao abrigo do disposto no artigo 80º, nº 3, da lei do Tribunal Constitucional, devendo o Tribunal recorrido adotar a interpretação que se julgou conforme à Constituição e, assim, reformular em conformidade a solução encontrada para o caso concreto ali em julgamento nos termos da legislação aplicável.

III.– Decisão

9.– Pelo exposto, decide-se:

a) Interpretar, ao abrigo do disposto no artigo 80º, nº 3, da LTC as normas do artigo 14º, nº 1, alíneas a) e c), da Lei da Liberdade Religiosa, no sentido de que incluem também o trabalho prestado em regime de turnos;

b) Conceder provimento ao recurso, e, em consequência, revogar o acórdão recorrido para que seja reformado de modo a aplicar as referidas normas com aquele sentido interpretativo.

Sem custas.

Lisboa, 15 de julho de 2014. - María José Rangel de Mesquita - Carlos Fernandes Cadilha - Catarina Sarmento e Castro - María Lúcia Amaral - Tem voto de conformidade do Conselheiro Lino Ribeiro, que não assina por não poder estar presente. María José Rangel de Mesquita.

ANEXO Nº 2

Portaria nº 298/2013, de 4 de outubro

(Diário da República, 1ª série - nº 192 - 4 de outubro de 2013)

O artigo 32º da Lei nº 16/2001, de 22 de junho (Lei da Liberdade Religiosa), contém um conjunto de disposições em matéria fiscal que compreende isenções e desagravamentos pela entrega de donativos com fins religiosos a igrejas e demais comunidades religiosas radicadas no País e, ainda, a possibilidade de uma percentagem do imposto que for liquidado a pessoas singulares, sujeitos passivos de IRS, ser destinado, por indicação expressa destes, às mesmas entidades ou a outras identificadas no diploma que prossigam fins de beneficência ou de assistência ou humanitários.

As Portarias nºs 80/2003, de 22 de janeiro, e 362/2004, de 8 de abril, vieram fixar os procedimentos a observar pelas entidades previstas nos nºs 4 e 6 do artigo 32º da Lei nº 16/2001, de 22 de junho, para poderem beneficiar da consignação da quota do IRS liquidado, e no caso de pessoas coletivas religiosas, dos donativos atribuidos pelas pessoas singulares.

O período de tempo entretanto decorrido, bem como a experiência adquirida no âmbito dos procedimentos instituidos, justificam a sua revisão de forma a torná-los mais simples e, consequentemente, mais céleres.

Assim:

Manda o Governo, pela Ministra de Estado e das Finanças, ao abrigo do disposto nos artigos 68º e 69º da Lei da Liberdade Religiosa, o seguinte:

Artigo 1º– Procedimento

As entidades inscritas no registo de pessoas coletivas religiosas (RPCR) ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 134/2003, de 28 de junho, que queiram beneficiar dos donativos fiscalmente relevantes, as instituições particulares de solidariedade social e as pessoas coletivas de utilidade pública que prossigam fins de beneficência ou de assistência ou humanitários, que em qualquer dos casos, queiram beneficiar da consignação da quota equivalente a 0,5% do IRS liquidado aos sujeitos passivos deste imposto, nos termos dos nºs 3 a 6 do artigo 32º da Lei nº 16/2001, de 22 de junho (Lei da Liberdade Religiosa), deverão, junto da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT):

a) Fazer prova da sua inscrição no RPCR, do seu registo como instituição particular de solidariedade social ou da obtenção do reconhecimento, pelo membro do Governo que tutela a respetiva atividade, da prossecução dos fins relevantes para o efeito da aplicação da Lei da Liberdade Religiosa ou do reconhecimento da isenção de IRC, com fundamento no exercício de atividade com os mesmos fins, com caráter exclusivo, nos termos do artigo 10º do Código do IRC, consoante a sua natureza;

b) Requerer o benefício fiscal correspondente, nos termos da parte final do nº 4 do artigo 32º da mesma lei.

Artigo 2º– Prazo

As obrigações referidas no artigo anterior devem ser cumpridas até 31 de dezembro do ano fiscal anterior ao da atribuição do donativo ou daquele a que respeita a coleta a consignar.

Artigo 3º– Dispensa de requerimento

1.– Quando as entidades a que se refere o artigo 1º tenham beneficiado da consignação da coleta de IRS do ano imediatamente anterior, ficam dispensadas de requerer o benefício nos anos subsequentes, salvo se a sua atribuição vier a ser interrompida por não se verificar alguma das condições legalmente exigidas para o efeito.

2.– Havendo interrupção do benefício, deve a entidade voltar a requerê-lo no prazo fixado no artigo anterior.

Artigo 4º– Obrigação de comunicação

Caso as entidades beneficiárias da consignação não reúnam em qualquer dos anos subsequentes ao do requerimento inicial as condições exigidas para poderem beneficiar da consignação da coleta do IRS, devem comunicar esse facto à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) até 31 de dezembro do ano a que respeita a coleta a consignar.

Artigo 5º– Apresentação de relatório anual

As entidades inscritas no registo de pessoas coletivas religiosas (RPCR) devem apresentar relatório anual do destino dado aos montantes recebidos ao abrigo do nº 4 do artigo 32º, até ao último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao do seu recebimento.

Artigo 6º– Correção dos valores consignados

Em caso de liquidação corretiva do IRS respeitante à consignação referida no nº 1, o valor consignado será corrigido para mais ou para menos

de acordo com os procedimentos que vierem a ser definidos por despacho ministerial.

Artigo 7º– Norma revogatória

São revogadas as Portarias nºs 80/2003, de 22 de janeiro, e 362/2004, de 8 de abril.

Artigo 8º– Entrada em vigor

O disposto na presente portaria aplica-se aos procedimentos nela previstos que devam ser cumpridos no ano da sua entrada em vigor.

A Ministra de Estado e das Finanças, María Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque, em 16 de setembro de 2013.

ANEXO Nº 3

Lei nº 19/2013, de 21 de fevereiro, 29ª alteração ao Código Penal, aprovado pelo Decreto -Lei nº 400/82, de 23 de setembro

(Diário da República, 1ª série —Nº 37— 21 de fevereiro de 2013)

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea *c*) do artigo 161º da Constituição, o seguinte:

Artigo 1º– Objeto

A presente lei altera o Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 400/82, de 23 de setembro, e alterado pela Lei nº 6/84, de 11 de maio, pelos Decretos-Leis n.os 101-A/88, de 26 de março, 132/93, de 23 de abril, e 48/95, de 15 de março, pelas Leis n.os 90/97, de 30 de julho, 65/98, de 2 de setembro, 7/2000, de 27 de maio, 77/2001, de 13 de julho, 97/2001, 98/2001, 99/2001 e 100/2001, de 25 de agosto, e 108/2001, de 28 de novembro, pelos Decretos-Leis n.os 323/2001, de 17 de dezembro, e 38/2003, de 8 de março, pelas Leis n.os 52/2003, de 22 de agosto, e 100/2003, de 15 de novembro, pelo Decreto-Lei nº 53/2004, de 18 de março, e pelas Leis n.os 11/2004, de 27 de março, 31/2004, de 22 de julho, 5/2006, de 23 de fevereiro, 16/2007, de 17 de abril, 59/2007, de 4 de setembro, 61/2008, de 31 de outubro, 32/2010, de 2 de setembro, 40/2010, de 3 de setembro, 4/2011, de 16 de fevereiro, e 56/2011, de 15 de novembro, e a Lei nº 112/2009, de 16 de setembro.

Artigo 2º– Alteração ao Código Penal

Os artigos 69º, 120º, 132º, 152º, 204º, 207º, 213º, 224º, 231º, 240º, 347º e 359º do Código Penal passam a ter a seguinte redação:

[...]

"Artigo 240º

[...]

1.–.....

a) Fundar ou constituir organização ou desenvolver atividades de propaganda organizada que incitem à discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género, ou que a encorajem; ou

2.–.....

a) Provocar atos de violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género; ou

b) Difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género, nomeadamente através da negação de crimes de guerra ou contra a paz e a humanidade; ou

c) Ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, religião, sexo, orientação sexual ou identidade de género;

[...]"

Artigo 3º– Aditamento ao Código Penal

É aditado à secção I do capítulo II do título V do livro II do Código Penal o artigo 348º-A, com a seguinte redação:

[...]

Artigo 4º– Alteração sistemática ao Código Penal

A secção I do capítulo II do título V do livro II do Código Penal passa a ter a epígrafe "Da resistência, desobediência e falsas declarações à autoridade pública" e a ser composta pelos artigos 347º, 348º e 348º-A.

Artigo 5º– Alteração à Lei nº 112/2009, de 16 de setembro

Os artigos 35º e 36º da Lei nº 112/2009, de 16 de setembro, passam a ter a seguinte redação:

[...]

Artigo 6º– Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação.

Aprovada em 11 de janeiro de 2013.

A Presidente da Assembleia da República, *María da Assunção A. Esteves*.

Promulgada em 13 de fevereiro de 2013.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendada em 13 de fevereiro de 2013.

O Primeiro-Ministro, *Pedro Passos Coelho*.

ANEXO Nº 4

Decreto-Lei nº 19/2015, de 03 de fevereiro, que institui o Registo de Pessoas Jurídicas Canónicas

(Diário da República, 1ª série - nº 23 - 3 de fevereiro de 2015)

O presente decreto-lei institui o Registo de Pessoas Jurídicas Canónicas, dando cumprimento a uma das obrigações constantes da Concordata celebrada entre a República Portuguesa e a Santa Sé, em 18 de maio de 2004.

Com este registo pretende-se organizar e manter atualizada a informação sobre a identificação das entidades canónicas, bem como dar publicidade à sua situação jurídica, por forma a que todos os interessados possam ter um conhecimento sistemático da informação atinente a estas entidades.

A instituição deste registo aproveita toda a informação relativa às entidades canónicas já inscrita no Registo Nacional de Pessoas Coletivas, garantindo-se consequentemente a manutenção dos atos jurídicos já praticados até à presente data e o regular funcionamento das instituições desta natureza.

Foi promovida a consulta da Santa Sé, em conformidade com o artigo 32º da Concordata, e foram ouvidas a Conferência Episcopal Portuguesa e a Comissão Paritária, nos termos do artigo 29º do mesmo diploma. Foi ouvido o Conselho Superior de Magistratura. Foi promovida a audição do Conselho Superior do Ministério Público.

Assim:

Nos termos da alínea *a*) do nº 1 do artigo 198º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I
Disposições gerais

Artigo 1º– Objeto

O presente decreto-lei cria, no âmbito da competência funcional do Registo Nacional de Pessoas Coletivas (RNPC), o Registo de Pessoas Jurídicas Canónicas (RPJC).

Artigo 2º– Função do registo

O RPJC é constituido por uma base de dados informatizados, contendo informação organizada e atualizada destinada à identificação das entidades canónicas e à publicitação da sua situação jurídica.

Artigo 3º– Âmbito pessoal do registo

1.– Nos termos do artigo 10º da Concordata celebrada entre a República Portuguesa e a Santa Sé, em 18 maio de 2004, podem inscrever-se no RPJC os institutos de vida consagrada, as sociedades de vida apostólica e as restantes pessoas jurídicas canónicas assim reconhecidas pela autoridade eclesiástica competente.

2.– Para efeitos do presente decreto-lei são autoridade eclesiástica competente o Bispo Diocesano, para as pessoas jurídicas canónicas com sede na Diocese e de âmbito diocesano, e a Conferência Episcopal Portuguesa, para as pessoas jurídicas canónicas de âmbito nacional.

Artigo 4º– Efeitos do registo

Sem prejuízo do disposto no nº 1 do artigo 21º, a inscrição no RPJC tem por efeito a atribuição de personalidade jurídica às entidades nele inscritas.

CAPÍTULO II
Requisitos e formalidades de inscrição no registo

Artigo 5º– Requisitos gerais de inscrição no registo

O pedido de inscrição no RPJC é formalizado por escrito, em formulário próprio, pela autoridade eclesiástica competente e instruido com documento autêntico que comprove e permita inscrever:

a) A constituição como pessoa jurídica canónica em Portugal;

b) A denominação da pessoa jurídica canónica, que deve permitir distingui-la de qualquer outra pessoa jurídica canónica existente em Portugal;

c) A morada da sede da pessoa jurídica canónica em Portugal;

d) Os fins da pessoa jurídica canónica;

e) Os órgãos representativos da pessoa jurídica canónica e respetivas competências;

f) A autoridade eclesiástica proponente da pessoa jurídica canónica.

Artigo 6º– Diligências instrutórias complementares

Caso o documento referido no artigo anterior não contenha elementos suficientes que permitam o registo, o RNPC, no prazo de 10 dias, notifica a

autoridade eclesiástica proponente da pessoa jurídica canónica para suprir as faltas no prazo de 30 dias.

Artigo 7º– Recusa de inscrição

1.– A inscrição no RPJC só pode ser recusada por:

Falta dos requisitos legais;

Manifesta falta de autenticidade do documento.

2.– A intenção de recusa de inscrição acompanhada dos respetivos fundamentos é comunicada, pelo RNPC, à autoridade eclesiástica proponente da pessoa jurídica canónica, para efeitos de esclarecimento e de eventual retificação, a fim de que esta se pronuncie, querendo, no prazo de 30 dias.

3.– Sem prejuízo do disposto no número anterior, a inscrição definitiva depende sempre da indicação dos elementos previstos no artigo 5º.

Artigo 8º– Modificação dos elementos da inscrição

1.– A modificação dos elementos da inscrição de pessoa jurídica canónica é comunicada ao RPJC pela autoridade eclesiástica competente, através de requerimento escrito, em formulário próprio, no prazo de dois meses a contar da sua ocorrência ou, quando exista, no prazo de validade do certificado de admissibilidade.

2.– O RNPC pode averbar oficiosamente os elementos da inscrição que não lhe tenham sido comunicados no prazo referido no número anterior.

3.– Da intenção de averbamento oficioso é dado conhecimento à autoridade eclesiástica competente a fim de que esta se possa pronunciar, querendo, no prazo de 30 dias.

Artigo 9º– Extinção das pessoas jurídicas canónicas

1.– A extinção de pessoa jurídica canónica implica o cancelamento da inscrição no respetivo registo.

2.– A extinção é comunicada no prazo de dois meses a contar da sua ocorrência, ao RPJC pela autoridade eclesiástica competente, através de formulário próprio, o qual é instruido com o documento comprovativo do facto.

CAPÍTULO III
Atos de registo

Artigo 10º– Termos em que são feitos os registos

1.– As inscrições e os averbamentos são efetuados por extrato.

2.– Sempre que a extensão das menções a efetuar o justifique, o extrato do registo pode remeter, parcial ou totalmente, para os documentos depositados que servem de base àquele.

3.– Quando estiverem reunidas as condições técnicas para o efeito, o arquivo dos documentos referidos nos números anteriores é efetuado em suporte eletrónico.

Artigo 11º– Depósito

1.– Nenhum ato sujeito a registo pode ser efetuado sem que os respetivos documentos se encontrem depositados na pasta própria.

2.– A omissão ou a deficiência da inscrição ou averbamento não prejudicam os efeitos atribuidos por lei ao registo desde que o depósito dos respetivos documentos tenha sido efetuado.

CAPÍTULO IV
Identificação e denominação

Artigo 12º– Número de identificação

À pessoa jurídica canónica inscrita no RPJC é atribuido pelo RNPC um número de identificação próprio, aplicando-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 13º a 15º do Decreto-Lei nº 129/98, de 13 de maio, doravante regime do RNPC.

Artigo 13º– Cartão de identificação

A emissão de cartão de pessoa coletiva das pessoas jurídicas canónicas inscritas no RPJC rege-se, com as necessárias adaptações, pelo disposto nos artigos 1º a 16º, 39º e 40º do Decreto-Lei nº 247-B/2008, de 30 de dezembro.

Artigo 14º– Admissibilidade de denominações

1.– A admissibilidade das denominações das pessoas jurídicas canónicas rege-se, com as necessárias adaptações, pelos princípios gerais e pelas regras especiais constantes dos artigos 32º a 35º e do nº 3 do artigo 36º do regime do RNPC.

2.– Para efeitos do disposto no número anterior, deve entender-se como referido ao RPJC o registo previsto no nº 1 do artigo 35º do regime do RNPC.

3.– São igualmente aplicáveis, com as necessárias adaptações, as regras do regime do RNPC relativas à informação sobre viabilidade de denominação, bem como, nos casos de entidades cuja constituição seja formalizada em ato público previamente ao registo no RPJC, as regras do mesmo regime que regulam o certificado de admissibilidade de denominação.

4.– O uso da denominação por parte das pessoas jurídicas canónicas inscritas no RPJC fica sujeito, com as necessárias adaptações, aos artigos 60º e 62º do regime do RNPC.

5.– A decisão tomada no âmbito do processo de perda de denominação é comunicada à autoridade eclesiástica proponente da pessoa jurídica canónica.

CAPÍTULO V
Proteção e comunicação dos dados

Artigo 15º– Certidão permanente

Quando estiverem reunidas as condições técnicas para o efeito, a informação referente às entidades registadas no RPJC pode ser disponibilizada em suporte eletrónico e permanentemente atualizada, em termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça.

Artigo 16º– Proteção e comunicação de dados

1.– Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os dados constantes do RPJC ficam sujeitos, com as necessárias adaptações, aos artigos 21º a 31º do regime do RNPC.

2.– Sem prejuízo do acesso, para efeitos fiscais, à informação nos termos da alínea *a*) do nº 1 do artigo 21º do regime do RNPC, os dados comunicados não podem ser transmitidos a terceiros, salvo existindo interesse especialmente atendível e mediante autorização escrita do presidente do conselho diretivo do Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN, I.P.), ouvida a autoridade eclesiástica proponente da pessoa jurídica canónica.

3.– A autoridade eclesiástica proponente da pessoa jurídica canónica beneficia de especial prioridade na comunicação de dados constantes do RPJC que sejam requeridos no cumprimento das atribuições daquela entidade, através do estabelecimento de linha de comunicação de dados.

4.– O estabelecimento de linha de comunicação de dados depende da celebração de protocolo entre o IRN, I.P., e a autoridade eclesiástica proponente da pessoa jurídica canónica, e do envio de cópia deste, por via eletrónica, à Comissão Nacional de Proteção de Dados.

5.– A informação sobre o Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC), a denominação e o concelho da sede das pessoas jurídicas canónicas é de acesso público e gratuito, através do sítio na Internet com o endereço www.irn.mj.pt, mantido pelo IRN, I P., ou através de outro sítio que venha a ser designado em portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça.

CAPÍTULO VI
Disposições complementares, transitórias e finais

Artigo 17º– Formulários

Os formulários referidos nos artigos 5º e 8º e no nº 2 do artigo 9º são aprovados por despacho do presidente do conselho diretivo do IRN, I.P., e são disponibilizados gratuitamente no sítio na Internet com o endereço www.irn.mj.pt.

Artigo 18º– Direito subsidiário

São aplicáveis ao RPJC, com as necessárias adaptações e na medida do indispensável ao preenchimento das lacunas da regulamentação própria, as disposições do regime do RNPC e as normas aplicáveis ao registo comercial que não sejam contrárias aos princípios enformadores do presente decreto -lei.

Artigo 19º– Alteração ao Decreto-Lei nº 322-A/2001, de 14 de dezembro

O artigo 8º do Decreto-Lei nº 322-A/2001, de 14 de dezembro, que aprova o Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, passa a ter a seguinte redação:

"**Artigo 8º**
[...]
1.– [...].
2.– [...].
3.– [...].
4.– [...].
5.– É gratuito o acesso pela autoridade eclesiástica proponente à base de dados do registo de pessoas jurídicas canónicas.
6.– [Anterior nº 5]".

Artigo 20º– Alteração ao Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado

O artigo 23º do Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado, aprovado pelo Decreto-Lei nº 322-A/2001, de 14 de dezembro, passa a ter a seguinte redação:

"**Artigo 23º**
[...]
1.– [...].
2.– [...].
3.– [...].
4.– [...].
5.– [...].
6.– Registo de pessoas coletivas religiosas e de pessoas jurídicas canónicas:

6.1.– [...].
6.2.– [...].
6.3.– [...].
6.4.– [...].
6.5.– Pela urgência na realização do registo é devido o valor do emolumento correspondente ao ato.
6.6.– [...].
7.– [...].
8.– [...]:
8.1.– Acesso eletrónico, cópias totais ou parciais e informação para fins de investigação estatística da base de dados do ficheiro central de pessoas coletivas (FCPC), do registo de pessoas coletivas religiosas (RPCR) e do registo de pessoas jurídicas canónicas (RPJC).
8.1.1.– [...].
8.2.– Cópia total em suporte eletrónico da base de dados do FCPC, do RPCR ou do RPJC:
8.2.1.– [...];
8.2.2.– [...];
8.2.3.– Cópia parcial em suporte eletrónico da base de dados do FCPC, do RPCR ou do RPJC:
8.2.3.1.– [...];
8.2.3.2.– [...];
8.3.– [...];
8.4.– Por cada informação estatística disponível do FCPC, do RPCR ou do RPJC:
8.4.1.– [...];
8.4.2.– [...];
8.4.3.– [...].
9.– [...].
10.– [...]".

Artigo 21º– Disposição transitória

1.– As pessoas jurídicas canónicas já constituidas e participadas pelo Bispo da Diocese onde tenham a sua sede, ou pelo seu legítimo representante, à autoridade competente mantêm a sua personalidade jurídica.

2.– Todas as pessoas jurídicas canónicas que se encontrem atualmente inscritas no Ficheiro Central de Pessoas Coletivas são oficiosamente registadas no RPJC, devendo a autoridade eclesiástica competente enviar, para o efeito, a informação ou documentação a que se refere o artigo 5º, no prazo de um ano a contar da data de entrada em vigor do presente decreto-lei.

3.– Decorrido o prazo previsto no número anterior, o registo pode ainda ser efetuado pela autoridade eclesiástica competente, mediante exposição devidamente fundamentada.

Artigo 22º– Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no prazo de 120 dias a contar da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 31 de dezembro de 2014. *Pedro Passos Coelho - Paula María von Hafe Teixeira da Cruz*.

Promulgado em 23 de janeiro de 2015.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 27 de janeiro de 2015.

O Primeiro-Ministro, *Pedro Passos Coelho*.

ANEXO Nº 5

Decreto-Lei nº 70/2013, de 23 de maio, que estabelece o regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católicas (EMRC), nos estabelecimentos públicos dos ensinos básico e secundário

(Diário da República, 1ª série- nº 99 - 23 de maio de 2013)

O Decreto-Lei nº 323/83, de 5 de julho, regulou, até agora, a lecionação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católicas nas escolas públicas, consagrando o ensino desta disciplina em obediência à diretriz estabelecida no artigo XXI da Concordata, assinada entre o Estado Português e a Santa Sé, em 7 de maio de 1940 e confirmada pelo artigo II do Protocolo Adicional de 15 de fevereiro de 1975, que o Decreto nº 187/75, de 4 de abril, seguidamente, aprovou para o efeito da sua ratificação.

O referido Decreto-Lei deu início a uma regulação mais sistematizada daquilo que veio a ser o regime jurídico desta disciplina. Neste contexto, assumem particular importância as proclamações de princípios emanadas da Declaração dos Direitos do Homem, na qual expressamente se afirma que "*aos pais pertence a prioridade do direito de escolherem o género de educação a dar aos filhos*" e ainda os pactos das Nações Unidas, designadamente, o nº 3 do artigo 13º do Pacto sobre os Direitos Económico-Sociais e Culturais e o nº 4 do artigo 18º do Pacto sobre os Direitos Cívicos e Políticos.

As profundas transformações ocorridas nos planos nacional e internacional, bem como a realidade do ordenamento jurídico português resultante da nova Constituição democrática, aberta a normas do direito comunitário

e do direito internacional contemporâneo, determinaram a necessidade de celebração de uma nova Concordata entre o Estado Português e a Santa Sé. Tendo presente, ainda, que no âmbito da Igreja Católica, a evolução das suas relações com a comunidade política é, de igual modo, um fator de ponderação desta realidade sociojurídica.

Atualmente, está em vigor a Concordata celebrada entre o Estado Português e a Santa Sé, assinada em 18 de maio de 2004 na Cidade do Vaticano, aprovada, por ratificação, pela Resolução da Assembleia da República nº 74/2004, de 16 de novembro.

É neste contexto que a regulação da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católicas se impõe. Com efeito, o nº 1 do artigo 19º da Concordata consagra o dever da República Portuguesa em garantir "*as condições necessárias para assegurar, nos termos do direito português, o ensino da religião e moral católicas nos estabelecimentos de ensino público não superior, sem qualquer forma de discriminação*". Deste modo e na esteira das soluções encontradas para a regulação da disciplina, o Estado Português assume a sua responsabilidade na cooperação e na criação das condições necessárias para que os pais possam livremente optar, sem agravamento injustificado de encargos, pelo modelo educativo que mais convenha à formação integral dos seus filhos.

Foi promovida a consulta da Santa Sé, em conformidade com o artigo 32º da Concordata. Foram ouvidas a Conferência Episcopal Portuguesa e a Comissão Paritária, nos termos do artigo 29º da Concordata.

Assim:

No desenvolvimento do disposto no nº 3 do artigo 2º da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei nº 46/86, de 14 de outubro, e alterada pelas Leis nºs 115/97, de 19 de setembro, 49/2005, de 30 de agosto, e 85/2009, de 27 de agosto, e nos termos da alínea *c)* do nº 1 do artigo 198º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1º– Objeto

O presente decreto-lei estabelece o regime jurídico da lecionação e da organização da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católicas (EMRC), nos estabelecimentos públicos dos ensinos básico e secundário, nos termos da Concordata celebrada entre a República Portuguesa e a Santa Sé, assinada em 18 de maio de 2004, na Cidade do Vaticano, e aprovada, por ratificação, pela Resolução da Assembleia da República nº 74/2004, de 16 de novembro.

Artigo 2º– Garantia do Estado

O Estado garante as condições necessárias para assegurar o ensino da disciplina de EMRC nos estabelecimentos públicos dos ensinos básico e se-

cundário, no âmbito do dever de cooperação com os pais na educação dos filhos.

Artigo 3º– Responsabilidade da Igreja Católica

1.– A orientação do ensino da disciplina de EMRC nos estabelecimentos públicos dos ensinos básico e secundário, atento o seu caráter específico, é da exclusiva responsabilidade da Igreja Católica competindo-lhe, nomeadamente através da Conferência Episcopal Portuguesa, proceder:

À elaboração e revisão dos programas da disciplina de EMRC, que são enviados ao Ministério da Educação e Ciência, antes da sua entrada em vigor, para publicação conjunta com os programas das restantes disciplinas e áreas disciplinares;

À elaboração e sequente edição e divulgação dos manuais de ensino da disciplina de EMRC, bem como de outros suportes didáticos destinados a alunos e a professores.

2.– Constitui, igualmente, responsabilidade exclusiva da Igreja Católica, através das autoridades diocesanas, a certificação da idoneidade dos docentes da disciplina de EMRC nos estabelecimentos públicos dos ensinos básico e secundário.

Artigo 4º– Currículo escolar

1.– A disciplina de EMRC é uma componente do currículo nacional integrando todas as matrizes curriculares, de oferta obrigatória por parte dos estabelecimentos de ensino e de frequência facultativa, nos termos do disposto no artigo seguinte.

2.– Salvaguardado o seu caráter específico, a disciplina de EMRC está sujeita ao regime aplicável às restantes disciplinas e áreas disciplinares.

Artigo 5º– Direito à frequência da disciplina de EMRC

1.– Compete ao encarregado de educação, no caso de o seu educando ser menor de 16 anos, exercer o direito de o mesmo frequentar a disciplina de EMRC, procedendo, para o efeito, à sua declaração de vontade no ato de matrícula no respetivo estabelecimento de ensino.

2.– Tendo o educando idade igual ou superior a 16 anos, compete ao próprio aluno exercer o direito referido no número anterior.

3.– O direito referido nos números anteriores é exercido anualmente no ato de matrícula.

4.– Em conformidade com o regime em vigor para as restantes disciplinas e áreas disciplinares, no ensino básico não é permitida a anulação da matrícula na disciplina de EMRC.

5.– No ensino secundário, a anulação da matrícula na disciplina de EMRC depende de pedido expresso, a efetuar pelo encarregado de educação ou pelo aluno com idade igual ou superior a 16 anos e a decidir pelo diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada.

Artigo 6º– Constituição de turmas

1.– Sem prejuízo do disposto nas alíneas e nos números seguintes, a constituição de turmas da disciplina de EMRC obedece aos seguintes critérios gerais:

a) As turmas são constituidas com o número mínimo de 10 alunos;

b) Na constituição das turmas do 1º ciclo, a escola pode integrar alunos dos diversos anos desse ciclo de escolaridade;

c) Nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário, sempre que necessário, as turmas integram alunos provenientes de diversas turmas do mesmo ano de escolaridade;

d) Nos 2º e 3º ciclos e ensino secundário, por solicitação da autoridade religiosa dirigida ao membro do Governo responsável pela área da educação, podem ser constituidas turmas com alunos provenientes dos diversos anos que integram o mesmo ciclo de escolaridade;

e) Da aplicação das alíneas *b*) a *d*) não podem resultar turmas da disciplina de EMRC com um número de alunos superior ao estabelecido na lei.

2.– A constituição, a título excecional, de turmas com um número de alunos inferior ao estabelecido no número anterior, carece de autorização dos serviços competentes do Ministério da Educação e Ciência, mediante proposta fundamentada do diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada.

Artigo 7º– Assiduidade e avaliação

1.– À disciplina de EMRC é aplicável o disposto na lei para as demais disciplinas e áreas disciplinares.

2.– Os resultados obtidos na avaliação da disciplina de EMRC não são considerados para efeito de retenção nem para efeito de cálculo de média dos resultados dos alunos.

3.– Não se aplica à disciplina de EMRC a realização de provas e exames de âmbito nacional para efeitos de progressão ou de candidatura ao ensino superior.

4.– Nas certidões de estudos, quando requerido, consta a frequência e os resultados obtidos na avaliação da disciplina de EMRC.

Artigo 8º– Recrutamento e seleção

1.– O processo de recrutamento e seleção de docentes da disciplina de EMRC obedece ao disposto no Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, que estabelece o novo regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e secundário e de formadores e técnicos especializados, com as especificidades constantes dos números seguintes.

2.– Para efeitos de validação das candidaturas aos concursos a que o candidato é opositor, deve o mesmo apresentar, dentro do prazo estabelecido para a candidatura, na entidade de validação, declaração de concordância do bispo da diocese correspondente à área territorial do agrupamento de escolas ou escola não agrupada a que se candidata.

3.– Para efeitos do disposto no número anterior, sempre que o candidato concorra a agrupamentos de escolas que abranjam mais do que uma diocese, deve apresentar declaração de concordância do bispo da diocese em que se situa a sede do agrupamento a que concorre.

4.– Caso o candidato concorra a vários agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas, situadas em dioceses diferentes, deve o mesmo apresentar declaração de concordância dos bispos das respetivas dioceses em que se encontrem os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas a que concorre.

5.– A violação do disposto nos números anteriores determina a invalidade da candidatura e a consequente exclusão do candidato do concurso a que é opositor.

6.– A relação jurídica de emprego público dos docentes da disciplina de EMRC, a constituir em resultado de uma colocação obtida nos termos do nº 1, é efetuada nos termos do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho.

7.– O contrato de trabalho abrangido pelo número anterior é celebrado pelo diretor do agrupamento de escolas ou escola não agrupada em representação do Estado.

8.– A renovação da colocação, pela escola, nos termos gerais aplicáveis, carece de parecer favorável do bispo da diocese respetiva.

Artigo 9º– Habilitações profissionais

As habilitações profissionais para a lecionação da disciplina de EMRC, bem como as suas alterações, são fixadas por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação, sob proposta da Conferência Episcopal Portuguesa, nos termos do disposto no nº 3 do artigo 2º do Decreto-Lei nº 43/2007, de 22 de fevereiro, no prazo de 120 dias a contar da data da entrada em vigor do presente decreto-lei.

Artigo 10º– Cessação de funções docentes

A perda de idoneidade para a lecionação da disciplina de EMRC, exige comunicação fundamentada do facto, a efetuar pelo bispo da diocese, à autoridade escolar competente.

Artigo 11º– Norma transitória

Enquanto não for regulamentado o artigo 9º do presente decreto-lei, mantém-se em vigor toda a regulamentação relativa à matéria em causa.

Artigo 12º– Norma revogatória

1.– São revogados os Decretos-Leis nºs 323/83, de 5 de julho e 407/89, de 16 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 329/98, de 2 de novembro, bem como a Portaria nº 344-A/88, de 31 de maio.

2.– Mantém-se em vigor a Portaria nº 333/86, de 2 de julho, em tudo o que não contrariar as disposições do presente decreto-lei.

Artigo 13º– Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 21 de março de 2013. *Pedro Passos Coelho - Luís Filipe Bruno da Costa de Morais Sarmento - Nuno Paulo de Sousa Arrobas Crato.*

Promulgado em 17 de maio de 2013.

Publique-se.

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.

Referendado em 20 de maio de 2013.

O Primeiro-Ministro, *Pedro Passos Coelho.*

REINO UNIDO
CRÓNICA LEGISLATIVA*

Mª Cruz Llamazares Calzadilla
Profesora Titular de la Universidad Carlos III de Madrid
Catedrática habilitada

LEY DE GOBIERNO LOCAL (PRÁCTICAS RELIGIOSAS, ETC.)

Local Government (Religious etc. Observances) Act 2015[1]

Antecedentes:

En 2012 el Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales dictaminó que el artículo 111 de la Ley de Gobierno Local de 1972[2] no amparaba la celebración de actos de oración durante las reuniones del pleno de los ayuntamientos[3]. Poco después entraron en vigor una serie de disposiciones contenidas en la Ley de Localismo[4] (aprobada en 2011 con el fin de delegar poderes a los municipios de Inglaterra y Gales[5] y así dotar a las comunidades locales de mayor control sobre las decisiones que más directamente les incumben) que otorgaban a las principales autoridades locales la facultad de incluir actos de oración en las reuniones formales de los órganos colegiados. Sin embargo, la Ley no era de aplicación a las

---

* Cualquier traducción es mía.

1 2015 (c. 27). Promulgada el 26 de marzo de 2015. Se aplica a Inglaterra y Gales. Entró en vigor el 25 de mayo de 2015.

2 *Local Government Act 1972* (c. 70), s. 111 (1): "Without prejudice to any powers exercisable apart from this section but subject to the provisions of this Act and any other enactment passed before or after this Act, a local authority shall have power to do any thing which is calculated to facilitate, or is conducive or incidental to, the discharge of any of their functions".

3 *R (on the application of) National Secular Society and Bone v Bideford Town Council* [2012] EWHC 175 (Admin) (10 February 2012).

4 *Localism Act 2011* (c. 20).

5 Agunos de sus extremos se aplican también a Escocia e Irlanda del Norte.

comunidades pequeñas, ni a determinadas autoridades encargadas de competencias concretas (bomberos, transporte, protección civil...) o a autoridades mancomunadas, con lo que carecían de tal facultad.

Contenido:

La Ley de Gobierno Local de 2015 viene a cubrir esa laguna incluyendo tres nuevos artículos (138A, 138B y 138C) en la Ley de Gobierno local de 1972 con una doble finalidad:

a) Extender a todas las autoridades locales, sean éstas del tipo que sean y sea cual sea el territorio al que sirven, la facultad de incluir en sus reuniones gestos de *observancia religiosa o vinculados a un sistema de creencias filosóficas*.

b) Permitir que las autoridades locales del tipo que sean apoyen o faciliten actos o eventos religiosos o conectados con creencias religiosas o filosóficas o adopten medidas a fin de ser representados en ellos.

A fin de evitar que esa implicación entre lo público y lo religioso vulnere el principio de no discriminación por motivos religiosos, se equiparan las creencias religiosas con los sistemas de creencias filosóficos, y tanto si se trata de actos de observancia, como si se trata participación de la autoridad en determinados eventos.

Extractos:

"In Part 7 of the Local Government Act 1972 (miscellaneous powers of local authorities) after section 138 insert—

138A. Prayers and other observances

(1) The business at a meeting of a local authority in England may include time for—

(a) prayers or other religious observance, or

(b) observance connected with a religious or philosophical belief.

(2) Subsection (1) also applies in relation to meetings of—

(a) a committee of a local authority in England,

(b) a joint committee of two or more such authorities, whether appointed or established under Part 6 of this Act or any other enactment, or

(c) a sub-committee of such a committee or joint committee.

(3) Subsections (1) and (2) do not limit other powers.

138B. Involvement with religious events and events connected with a belief

(1) A local authority in England may support or facilitate, or make arrangements to be represented at, any of the following—

(a) a religious event,

(b) an event with a religious element,

(c) an event connected with a religious or philosophical belief, or

(d) an event with an element connected with such a belief.

(2) Subsection (1) does not limit other powers.

(3) Any powers of a local authority in England that are given otherwise than under subsection (1) may be exercised—

(a) for the purpose of supporting or facilitating any event mentioned in subsection (1), or

(b) for purposes that include that purpose.

(4) Subsection (3) does not limit the generality of those powers".

LEY DE LOS LORES ESPIRITUALES (MUJERES)
Lords Spiritual (Women) Act 2015[6]

Antecedentes:

Como es sabido, la Cámara de los Lores cuenta entre sus miembros con veintiséis obispos diocesanos de la Iglesia de Inglaterra, conocidos como Lores Espirituales. Cinco de ellos son miembros natos en atención a la diócesis o archidiócesis que regentan (Canterbury, York, Londres, Durham y Winchester) mientras los demás son llamados a la Cámara por orden de su antigüedad cuando alguno de los restantes veintiún puestos queda vacante, tal y como establece la Ley del Obispado de 1878[7]. Cuan-

---

6 2015 (c. 18). Promulgada el 26 de marzo de 2015. Se aplica a Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte, pero sólo a los obispos de la Iglesia de Inglaterra y no al resto de Iglesias anglicanas de Reino Unido. Entró en vigor el 9 de mayo de 2015, día en que se celebró la Solemne Ceremonia de Apertura del Parlamento tras las elecciones generales de7 de mayo de 2015.

7 *Bishoprics Act 1878*, c. 68 (Regnal. 41 and 42 Vict).

do a finales de 2014 el Sínodo General de la Iglesia de Inglaterra aprobó el acceso de las mujeres al obispado[8], surgió el problema de que el criterio de la antigüedad para el acceso a la Cámara de los Lores negaría a las nuevas obispas esa posibilidad durante un periodo de tiempo demasiado largo como para ser aceptable desde el principio constitucional de igualdad y no discriminación por razón de género (artículo 14 CEDH). La aprobación de la Ley de los Lores Espirituales (Mujeres) que tiene lugar poco después, viene a poner remedio a esta cuestión.

Contenido:

La Ley establece la obligación de cubrir con obispas las vacantes que se produzcan entre los Lores Espirituales durante los diez años siguientes a su entrada en vigor, aun cuando entre los elegibles hubiera obispos (hombres) de mayor antigüedad. De entre ellas, será llamada a cubrir la vacante, la obispa de mayor antigüedad. Las vacantes sólo podrán ser ocupadas por obispos en ausencia de obispas elegibles.

Extractos:

1. Vacancies among the Lords Spiritual:

(1) This section applies where

(a) a vacancy arises among the Lords Spiritual in the House of Lords in the 10 years beginning with the day on which this Act comes into force,

(b) at the time the vacancy arises there is at least one eligible bishop who is a woman, and

(c) the person who would otherwise be entitled to fill the vacancy under section 5 of the Bishoprics Act 1878 is a man.

(2) If at the time the vacancy arises there is only one eligible bishop who is a woman, the vacancy is to be filled by the issue of writs of summons to her.

(3) If at the time the vacancy arises there are two or more eligible bishops who are women, the vacancy is to be filled by the issue of writs of summons to the one whose election as a bishop of a diocese in England was confirmed first.

---

8 *Bishops and Priests (Consecration and Ordination of Women) Measure 2014* (No. 2).

(4) In this section "eligible bishop" means a bishop of a diocese in England who is not yet entitled in that capacity to the issue of writs of summons.

(5) The reference in subsection (1) to a vacancy does not include a vacancy arising by the avoidance of the see of Canterbury, York, London, Durham or Winchester.

LEY DE FINANZAS DE 2015
Finance Act 2015[9]

Antecedentes:

En el Presupuesto de 2014 se anunció un paquete de medidas destinadas a la simplificación tributaria de las retribuciones en especie (*benefits in kind*) de los trabajadores por cuenta ajena. Una de ellas era la eliminación del umbral de tributación de tales retribuciones para quienes ocupan los denominados "empleos peor pagados" (*lower-paid employments*), es decir, aquellos cuya remuneración no alcance las 8.500 £ al año. La medida fue finalmente fue introducida por la Ley de Finanzas de 2015. Se justificó por el Gobierno en la necesidad de simplificar la administración y gestión de los empleadores, que ya no necesitarán distinguir entre sus empleados en función de que sus salarios superen ese umbral o no, para incluir los beneficios en especie en los correspondientes cálculos fiscales y de contribución a la Seguridad Social.

Contenido[10]:

La Ley deroga el Capítulo 11 de la Parte 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Sueldos y Pensiones) de 2003[11] (conocida por el acrónimo inglés ITEPA) que establecía las exenciones indicadas, de manera que todas las

---

9 2015 (c. 11). Promulgada el 26 de marzo de 2015. Se aplica a todo Reino Unido. Las medidas que introduce entrarán en vigor para el ejercicio fiscal 2016-17 y siguientes. Aunque también es de carácter anual y está relacionada con los presupuestos del Estado, no equivale plenamente a la Ley española de Presupuestos Generales del Estado, sino que su contenido es eminentemente fiscal.

10 Artículo 13, completado por el Anexo 1.

11 *Income Tax (Earnings and Pensions) Act (ITEPA)* 2003 (c.1).

retribuciones en especie[12] estarán sujetas al correspondiente impuesto sobre la renta y contabilizarán para el cálculo de las contribuciones a la Seguridad Social a partir del ejercicio 2016-2017.

Ahora bien, como excepción al régimen general aplicable al conjunto de la población, la Ley añade varios preceptos a la ITEPA destinados mantener vigente para los ministros de culto el umbral de 8.500 £ por debajo del cual las retribuciones en especie permanecen exentas. Así, los ministros que no superen ese umbral conservarán los beneficios fiscales existentes con carácter previo a la reforma, pudiendo recibir retribuciones en especie exentas de tributación, con las siguientes condiciones:

- Tienen que estar directamente contratados por la confesión religiosa que los tiene empleados, sin intermediarios.
- La norma se aplica también a aquellos ministros de culto que ocupan puestos públicos.
- Si el ministro tiene más de un empleo, se tendrá en cuenta la suma de todos sus salarios a efectos de calcular si alcanza el umbral de ingresos que da derecho a la exención.
- La norma se aplica por igual a los ministros de todas las confesiones religiosas.

Extractos:

13. Extension of benefits code except in relation to certain ministers of religion

(1) Omit Chapter 11 of Part 3 of ITEPA 2003 (taxable benefits: exclusion of lower-paid employments from parts of benefits code).

(2) In Part 4 of that Act (employment income: exemptions), after section 290B insert—

"**290C. Provisions of benefits code not applicable to lower-paid ministers of religion**

(1) This section applies where a person is in employment which is lower-paid employment as a minister of religion in relation to a tax year.

---

[12] La Ley contempla algunas excepciones en función de la naturaleza o destino del bien recibido en concepto de remuneración en especie, como el alojamiento y la pensión completa de los cuidadores que personas dependientes que vivan en su casa.

(2) No liability to income tax arises in respect of the person in relation to the tax year by virtue of any of the following Chapters of the benefits code—

(a) Chapter 3 (taxable benefits: expenses payments);

(b) Chapter 6 (taxable benefits: cars, vans and related benefits);

(c) Chapter 7 (taxable benefits: loans);

(d) Chapter 10 (taxable benefits: residual liability to charge).

(3) Subsection (2)—

(a) means that in any of those Chapters a reference to an employee does not include an employee whose employment is within the exclusion in that subsection, if the context is such that the reference is to an employee in relation to whom the Chapter applies, but

(b) does not restrict the meaning of references to employees in other contexts.

(4) Subsection (2) has effect subject to—

(a) section 188(2) (discharge of loan: where employment becomes lower-paid), and

(b) section 290G (employment in two or more related employments).

290D. Meaning of "lower-paid employment as a minister of religion"

(1) For the purposes of this Part an employment is "lower-paid employment as a minister of religion" in relation to a tax year if—

(a) the employment is direct employment as a minister of a religious denomination, and

(b) the earnings rate for the employment for the year (calculated under section 290E) is less than £8,500.

(2) An employment is not "direct employment" for the purposes of subsection (1)(a) if—

(a) it is an employment which is treated as existing under—

(i) section 56(2) (deemed employment of worker by intermediary), or

(ii) section 61G(2) (deemed employment of worker by managed service company), or

(b) an amount counts as employment income in respect of it by virtue of section 554Z2(1) [treatment of relevant step under Part 7A (employment income provided through third parties)].

(3) Subsection (1) is subject to section 290G.

(…)

290G. Related employments

(1) This section applies if a person is employed in two or more related employments.

(2) None of the employments is to be regarded as lower-paid employment as a minister of religion in relation to a tax year if—

(a) the total of the earnings rates for the employments for the year (calculated in each case under section 290E) is £8,500 or more, or

(b) any of them is an employment falling outside the exclusion contained in section 290C(2) (provisions of benefits code not applicable to lower-paid ministers of religion).

(3) For the purposes of this section two employments are "related" if—

(a) both are with the same employer, or

(b) one is with a body or partnership ("A") and the other is either—

(i) with an individual, partnership or body that controls A ("B"), or

(ii) with another partnership or body also controlled by B.

(…)

(3) Schedule 1 contains amendments relating to subsections (1) and (2).

(4) The amendments made by this section and Schedule 1 have effect for the tax year 2016-17 and subsequent tax years.

LEY DE INMIGRACIÓN DE 2014
Inmigration Act 2014[13]

Antecedentes:

Los matrimonios y uniones civiles tradicionalmente llamados de conveniencia son comunes en el contexto de la inmigración y plantean al Reino Unido serias dificultades para el control de la inmigración. Pese a los esfuerzos legislativos llevados a cabo, el Ministerio del Interior estima que pueden ser hasta 10.000 las solicitudes anuales para permanecer en Reino Unido realizadas al amparo de las normas de inmigración[14] sobre la base de un matrimonio o unión de hecho simulados[15]. Pese a los esfuerzos legislativos para solucionar el problema, éste no ha conseguido erradicarse, lo que hace necesaria una nueva reforma.

Contenido:

Muy resumidamente, la Ley[16] modifica los procedimientos relativos a la notificación de matrimonios y uniones civiles a fin de crear un nuevo esquema de investigación de los matrimonios y uniones civiles en que uno de los miembros de la pareja no sea nacional de un país perteneciente al Espacio Económico Europeo y esté por tanto sometido los controles de inmigración:

– amplía las facultades de comunicación e información entre administraciones y funcionarios encargados de estos trámites previos con el fin de evitar el fraude de Ley en este campo y facilitar su investigación desde el Ministerio del Interior;

---

13 2014 c. 22. Promulgada el 14 de mayo de 2014. Se aplica a todo Reino Unido. La Ley regula algunos de los aspectos más importantes de la inmigración, como los relacionados con el acceso de los inmigrantes a los servicios públicos y al empleo o la adquisición de la ciudadanía en algunos casos concretos, pero para nosotros es especialmente interesante la Parte 4, destinada a regular los matrimonios y uniones civiles (uniones de hecho) celebrados en fraude de ley en el contexto de la inmigración.

14 *Immigration Rules* e *Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (Statutory Instrument 2006/1003)* enmendado.

15 *Sham Marriages and Civil Partnerships. Background Information and Proposed Referral and Investigation Scheme*, Home Office, November 2013, (puede consultarse en https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/256257/Sham_Marriage_and_Civil_Partnerships.pdf), p. 3.

16 Artículos 48 a 58 y Anexos 4 y 5.

- obliga a ambos contrayentes a notificar la propuesta de matrimonio o unión de hecho al Registro; y
- exige la instrucción del expediente previo matrimonial ante el registrador civil aun cuando se trate de un matrimonio celebrado en la Iglesia Anglicana, creando así una excepción en el procedimiento común de amonestaciones y obtención de licencia previa ante la propia Iglesia para quienes opten por este rito (artículo 57).

Extractos:

55. Meaning of "sham marriage" and "sham civil partnership"

(1) The Immigration and Asylum Act 1999 is amended in accordance with this section.

(2) In section 24 (duty to report suspicious marriages), for subsection (5) substitute—

"(5) A marriage (whether or not it is void) is a "sham marriage" if—

(a) either, or both, of the parties to the marriage is not a relevant national,

(b) there is no genuine relationship between the parties to the marriage, and

(c) either, or both, of the parties to the marriage enter into the marriage for one or more of these purposes—

(i) avoiding the effect of one or more provisions of United Kingdom immigration law or the immigration rules;

(ii) enabling a party to the marriage to obtain a right conferred by that law or those rules to reside in the United Kingdom.

(6) In subsection (5) —"relevant national" means—

(a) a British citizen,

(b) a national of an EEA State other than the United Kingdom, or

(c) a national of Switzerland;

"United Kingdom immigration law" includes any subordinate legislation concerning the right of relevant nationals to move between and reside in member States".

(3) In section 24A (duty to report suspicious civil partnerships), for subsection (5) substitute—

"(5) A civil partnership (whether or not it is void) is a "sham civil partnership" if—

(a) either, or both, of the parties to the civil partnership is not a relevant national,

(b) there is no genuine relationship between the parties to the civil partnership, and
(c) either, or both, of the parties to the civil partnership enter into the civil partnership for one or more of these purposes—
(i) avoiding the effect of one or more provisions of United Kingdom immigration law or the immigration rules;
(ii) enabling a party to the civil partnership to obtain a right conferred by that law or those rules to reside in the United Kingdom.
(5A) In subsection (5) —"relevant national" means—
(a) a British citizen,
(b) a national of an EEA State other than the United Kingdom, or
(c) a national of Switzerland;

"United Kingdom immigration law" includes any subordinate legislation concerning the right of relevant nationals to move between and reside in member States".

57. Solemnization of marriage according to rites of Church of England

(1) The Marriage Act 1949 is amended in accordance with this section.

(2) In section 5 (methods of authorising marriages)—

(...)

(c) at the end insert—

"(3) In a case where one or both of the persons whose marriage is to be solemnized is not a relevant national—
(a) subsection (1)(a) shall not apply unless the banns are published in accordance with section 14 (whether or not the banns are also published otherwise);
(b) subsection (1)(c) shall not apply".

(3) In section 8 (notice to clergy before publication of banns)—

(...)

(4) In section 16 (provisions as to common licences), before subsection (2) insert—

"(1C) A common licence shall not be granted unless the persons to be married deliver to the person granting the licence specified evidence that both of the persons are relevant nationals.

(1D) For that purpose "specified evidence" means evidence that is in accordance with regulations made under section 28G".

CRONICA JURIPRUDENCIAL

ESPAÑA

Fernando Amérigo
(IUCCRR-UCM)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN

Sentencia 130/2014, de 21 de julio de 2014[1]

Recurso de amparo 6051-2012. Promovido por Radio Castellón, S.A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Castellón, desestimatorias de su demanda de protección de derechos fundamentales frente a la asignación de publicidad institucional por el Ayuntamiento de Castellón de La Plana.

En igual sentido que esta Sentencia, véase: la *Sentencia 160/2014, de 6 de octubre de 2014*[2].

En ambas Sentencias, se reitera la doctrina establecida en sentencias anteriores como la STC 104/2014, FJ 9[3].

Sentencia 18/2015, de 16 de febrero de 2015[4]

Recurso de amparo 3571-2012. Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero respecto de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda sobre protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen.

Se reitera la conocida doctrina jurisprudencial en esta materia.

---

1 BOE núm. 199 de 16 de agosto de 2014.
2 BOE núm. 262 de 29 de octubre de 2014.
3 Cfr. *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos. Nº 14*, Vol. II, pp. 389 y ss.
4 BOE núm. 64 de 16 de marzo de 2015.

Sentencia 65/2015 de 13 de abril[5]

Recursos de amparo 1485-2013 y 1486-2013 (acumulados). Promovidos por don Ivo Aragón Iñigo Fernández y don Sergio Benítez Moriana en relación con las Sentencias de la Audiencia Provincial de Teruel y de un Juzgado de lo Penal que les condenaron por un delito de injurias graves con publicidad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1 (...)

2. Aducen los recurrentes, vale reiterar, que las Sentencias que impugnan violaron sus libertades tanto de expresión como de información. Lo primero que hemos de determinar, por tanto, es si fueron efectivamente ambos derechos fundamentales los que vinieron a ejercerse —ya se dirá si con exceso o no— mediante la carta pública a resultas de la cual fueron acusados y condenados, o si sólo fue puesto en práctica, o lo fue de modo preponderante, uno de tales derechos fundamentales. La Constitución, y nuestra jurisprudencia con ella (por todas STC 79/2014, de 28 de mayo, FJ 4), distinguen, como es bien conocido, entre el derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, de una parte, y el que tiene por objeto, de otra, la libre comunicación de información veraz por cualquier medio de difusión [apartados a) y d), respectivamente, del art. 20.1 CE]. Por más que, como no hemos dejado de observar en ocasiones anteriores, una libertad y otra pueden llegar a entreverarse en los supuestos reales que la vida ofrece (STC 41/2011, FJ 2, y resoluciones allí citadas), este distingo entre derechos es de capital importancia, pues mientras el segundo de los citados se orienta, sobre todo, a la transmisión o comunicación de lo que se tienen por hechos —susceptibles, entonces, de contraste, prueba o mentís—, la libertad de expresión tiene su campo de proyección más propio en la manifestación de valoraciones o juicios que, es evidente, quedan al margen de toda confirmación o desmentido fácticos. Se trata de una diferencia relevante, como es obvio, para identificar el ámbito y los límites propios de cada una de estas libertades.

Aunque la carta pública que los demandantes suscribieron no deja de mostrar un cierto carácter informativo —dar noticia del dictado de una

---

5 BOE núm. 122 de 22 de mayo de 2015.

sentencia de posible interés para los lectores del "Diario de Teruel"—, es indudable que ese alcance es en ella del todo marginal, pues la carta, sencillamente, no describe el pleito; ni tan siquiera lo resume. Su componente primordial fue, más bien, el de fijar la posición y valoración sobre tal resolución judicial de la asociación por la que, en calidad de portavoces, suscribieron dicha carta los actores, manifestaciones de opinión y juicios de valor, muy patentes y reiterados en aquel texto, que fueron además —en parte, al menos— los que se tuvieron en cuenta a la hora de dictar la condena penal aquí recurrida. Siendo esto así, como sin duda es, no hay sino que coincidir, en cuanto a este extremo, con lo alegado por el Ministerio Fiscal en orden a que la libertad *ex* art. 20 CE cuyo ejercicio, legítimo o no, está aquí en juego es la garantizada en el apartado 1 a) de dicho precepto, esto es, la libertad de expresión.

3. Como cualquier otro derecho fundamental de libertad, el enunciado en el art. 20.1 a) CE hace posible y garantiza la autodeterminación del individuo y, a su través, de los grupos sociales en los que por libre decisión pueda integrarse. Tiene también este derecho, y con reiteración lo hemos dicho, una dimensión trascendente u objetiva (por todas, SSTC 107/1988, de 8 de junio, FJ 2; y 216/2013, de 19 de diciembre, FJ 5), pues mediante su ejercicio —sin más restricciones que las que puedan fundamentarse en la preservación de otros derechos o bienes constitucionales— se construye un espacio de libre comunicación social, de continuo abierto, y se propicia con ello la formación tanto de opinión pública como de una ciudadanía activa, sin cuya vitalidad crítica no son posibles, o no lo son en plenitud, ni la democracia ni el pluralismo políticos (art. 1.1 CE). Esta libertad de expresión, ya queda dicho, no está exenta, como cualquiera otra, de límites fijados o fundamentados en la Constitución y con ellos ha de ser consecuente su ejercicio, pues si bien el Ordenamiento no ha de cohibir sin razón suficiente la más amplia manifestación y difusión de ideas y opiniones, su expresión conlleva siempre, como todo ejercicio de libertad civil, deberes y responsabilidades y así lo viene recordando, justamente para este preciso ámbito, el Tribunal de Estrasburgo (por todas, Sentencia de 24 de febrero de 2015, caso *Haldimann y otros c. Suiza*, párrafo 46). Figura entre estos límites, por lo que ahora hace al caso, el que viene dado por el necesario respeto al honor ajeno (art. 20.4 CE), bien constitucional éste que tiene, además, la condición de derecho fundamental en sí mismo (art. 18.1 CE y STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4), siendo procedente recordar ahora que los derechos de este carácter no

consienten abstractas ordenaciones de valor entre unos y otros (en este sentido, STC 11/2000, de 17 de enero, FJ 7), aunque sí sea preciso, llegado el caso, la determinación jurisdiccional concreta de cuál sea la situación jurídica de derecho fundamental que, en colisión con otra de la misma condición, deba prevalecer al cabo. Como concepto constitucional, el de honor ha sido también objeto, según se sabe, de identificación por una jurisprudencia constitucional ya muy arraigada y a la que aquí procede remitirse, no sin recordar que, en general, este derecho fundamental proscribe el "ser escarnecido o humillado ante sí mismo o ante los demás" (STC 127/2004, de 19 de julio, FJ 5) y garantiza, ya en términos positivos, "la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a expresiones o mensajes" que la hagan "desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas" (STC 216/2013, FJ 5). Es preciso también puntualizar, porque así lo requiere el correcto encuadramiento constitucional del actual caso, que el honor que la Constitución protege es también el que se expone y acredita en la vida profesional del sujeto, vertiente ésta de la actividad individual que no podrá ser, sin daño para el derecho fundamental, menospreciada sin razón legítima, con temeridad o por capricho [respecto al "prestigio profesional" a estos efectos, STC 223/1992, de 14 de diciembre, FJ 3; en términos no diferentes, SSTC 9/2007, de 15 de enero, FJ 3; 41/2011, FJ 5 c); y 216/2013, FJ 5]. La simple crítica a la pericia profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse, sin más, con un atentado al honor, cierto es, pero la protección del art. 18.1 CE sí defiende de "aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido" (STC 9/2007, FJ 3 y jurisprudencia allí citada).

El juez que conozca de pretensiones enfrentadas y basadas, respectivamente, en la defensa del honor y en la afirmación, frente a ella, de la propia y legítima libertad de expresión debe, como ha quedado dicho, sopesar una y otra situación jurídica en atención a las circunstancias del caso; al contenido y contexto de las manifestaciones proferidas o puestas por escrito; a su intensidad aflictiva, mayor o menor, sobre el honor aje-

no; al posible interés público del objeto sobre el que se hicieron aquellas manifestaciones; a la condición pública (como personaje de notoriedad social o como autoridad pública) o privada de quien haya visto afectado su derecho *ex* art. 18.1 CE; al carácter genérico o, por el contrario, individualizado de las referencias que, en uso de la libertad *ex* art. 20.1 a), puedan causar daño en el bien tutelado por aquel derecho; a la distinción, capital, entre criticar un acto o comportamiento, en sí mismo, o hacerlo sólo a resultas de la censura *ad personam* de quien lo llevó a cabo y, en fin, a cualesquiera otros elementos significativos que permitan la mejor identificación y reconocimiento del respectivo valor que tuvieron, en el caso, los derechos así en liza. De todo ello hay referencias en nuestra jurisprudencia, a la que aquí, de nuevo, procede remitirse (por todas, SSTC 46/1998, de 2 de marzo, FFJJ 2 a 5; 174/2006, de 5 de junio, FJ 4, y 9/2007, FJ 4). Importa también ahora, con todo, recordar expresamente dos de los criterios o pautas que al respecto figuran de modo constante, desde el principio, en nuestra doctrina. De una parte, que las expresiones que puedan inicialmente afectar al honor ajeno, por afrentosas o ultrajantes, sólo podrían decirse legítimas, en su caso, si fueron, atendido el contexto, necesarias o pertinentes para el discurso en que se integraron, pues es patente que si esas expresiones acaso afectantes al honor se realizan al margen de dicha relación con el discurso en que se inscriben o, en tal caso, sin una mínima base fáctica que les dé soporte bastante estaremos ante el nudo vituperio, que nuestra Constitución —casi huelga decirlo— no ampara en modo alguno. Al menos desde la antes citada STC 85/1992, FJ 4, venimos señalando que la norma fundamental, en efecto, no reconoce ni admite un supuesto "derecho al insulto", que sería inconciliable, de modo radical, con la dignidad de la persona (art. 10.1 CE). No pueden, en definitiva, buscar amparo en el derecho *ex* art. 20.1 a) CE "las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad, sean ofensivas o ultrajantes y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate" (STC 216/2013, FJ 5, y jurisprudencia allí citada). Es preciso también reiterar, de otro lado, que siendo muy cierto, también conforme a jurisprudencia constante, que, tratándose de asuntos públicos, las personas con esa misma condición quedan expuestas a inquisiciones y críticas especialmente intensas e incisivas y superiores, en todo caso, a las que suelen resultar tolerables entre los ciudadanos del común —críticas que, en principio, debieran soportar esas personas involucradas en

la vida pública—, no lo es menos que incluso los personajes y los servidores públicos no pierden en modo alguno, por serlo, su derecho al honor (STC 148/2001, de 27 de junio, FJ 6), so pena de admitir —lo que en modo alguno puede hacerse— que quien actúe en el escenario público quede a merced, sin límite, de cualesquiera invectivas o ultrajes que menoscaben su reputación o su buen nombre. Es de relieve advertir, en relación con esto, y ya por lo que importa al presente caso, que los titulares de órganos judiciales se encuentran, por lo que se refiere al ejercicio de su función, en una "singular posición" (STC 46/1998, FFJJ 3 y 5) respecto de otras autoridades públicas y, desde luego, de los actores políticos, entre otras razones porque el posible descrédito sin fundamento que pudieran llegar a sufrir dañaría, eventualmente, no sólo su honor personal, sino también, de modo inseparable, la confianza de todos en la justicia, que es condición basilar del Estado de Derecho (art. 1.1 CE). Esta última consideración, sobre la que de inmediato volveremos, es también una constante en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencia de 24 de septiembre de 2013, caso *Belpietro c. Italia*, párrafo 48, por todas).

Es ya posible, a partir de lo anterior, entrar en el examen de la concreta queja constitucional promovida por los recurrentes y considerar, por tanto, si las manifestaciones por las que sufrieron condena penal estaban sin embargo amparadas por el legítimo ejercicio de su derecho de libertad de expresión o, por el contrario, resultaron lesivas, como apreciaron los juzgadores *a quo*, para el honor de la magistrada a la que dirigieron su carta pública. El enjuiciamiento a la luz de nuestra doctrina de las resoluciones judiciales impugnadas y, junto a ello, la consideración en su conjunto del texto de aquella carta y, dentro de ella, de determinadas expresiones vertidas entonces por los demandantes es, de la mano de criterios como los expuestos, el objeto exclusivo de nuestro juicio. No resultan relevantes a estos efectos, por tanto, las consideraciones expuestas por el Ministerio Fiscal en sus alegaciones a propósito de la no expresa motivación por los juzgadores penales —en su criterio— de la "gravedad" de las injurias aquí castigadas penalmente o, en relación con esta observación, respecto del carácter extremo que tiene el proceso penal por delito respecto de otras posibles vías (juicio por faltas o juicio civil) a las que cabe también acudir en defensa del honor. Con independencia de que las Sentencias aquí impugnadas se extendieron sobre la intensidad del daño al honor del que juzgaban (el "peor oprobio que se puede predicar de quien está ejercien-

do funciones judiciales", por ejemplo, en palabras de la Sentencia dictada en apelación), lo determinante es que si este Tribunal llegara a apreciar aquí una infracción del art. 20.1 a) CE ello no sería por la conculcación de lo dispuesto en los preceptos penales aplicados a los recurrentes —lo que, en hipótesis, sólo resultaría relevante, en su caso, a los efectos del art. 25.1 CE, no invocado en estos recursos—, sino por la aplicación de tales tipos penales en contra del contenido constitucionalmente protegido de la libertad de expresión (por todas las resoluciones en este sentido, STC 174/2006, FJ 2). Sólo, en definitiva, si esta libertad se ejerció sin exceso (sin daño —en lo que ahora importa— del honor ajeno) sería la misma reconocible y procedería, también sólo entonces, la estimación de estos recursos de amparo.

4. No cabe, desde luego, censurar las Sentencias aquí impugnadas por haberse omitido en ellas toda consideración de la libertad de expresión de los entonces acusados por injurias. (...) No basta, sin embargo, con constatar que dicha ponderación se realizó para dar por cumplido, sólo con ello, el deber que, en supuestos como el presente, impone la Constitución a los órganos judiciales. La concreta acomodación entre derechos así llevada a cabo ha de ser además, como antes recordamos, conforme al ámbito respectivo, atendidas las circunstancias del caso, de unos derechos y otros. Si lo fue o no es lo que aquí hemos de resolver.

Para fundamentar debidamente nuestro juicio se ha de partir, sobre lo ya dicho, de las siguientes consideraciones:

a) La carta en la que se contuvieron las expresiones valoradas como injuriosas por los juzgadores *a quo* pretendió hacer pública la posición crítica de la asociación de la que los actores fueron portavoces sobre una determinada sentencia judicial que, por su posible alcance medioambiental, afectaba, cierto es, al propio fin estatutario de dicha asociación, así como a un ámbito territorial en el que la asociación Plataforma Aguilar Natural desenvuelve su actividad. La hipotética incidencia sobre el medio ambiente de una determinada actividad empresarial es, sin duda, cosa de interés general y de interés también, cualificadamente, para una asociación ecologista. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no ha dejado de destacar la importante posición, pareja a la de la prensa escrita, que cabe reconocer, a estos efectos, a las asociaciones ciudadanas

(por todas, Sentencia de 17 de febrero de 2015, caso *Guseva c. Bulgaria*, párrafo 38, y jurisprudencia allí citada).

b) Las actuaciones y resoluciones judiciales pueden ser objeto de pública crítica por los ciudadanos y la libertad para hacerlo tiene, sin duda alguna, la firme garantía de lo dispuesto en el art. 20.1 a) CE. Así hemos tenido ya ocasión de declararlo (STC 46/1998, FFJJ 3 y siguientes) y así lo ha señalado también, con reiteración, el Tribunal de Estrasburgo (por todas, Sentencias de 18 de septiembre de 2012, caso *Falter Zeitschriften GmbH c. Austria*, párrafo 38). Esta crítica no dejará, en general, de ser legítima por su eventual aspereza de tono o de lenguaje, pues la Constitución ampara como libertad de expresión, en según qué circunstancias, también las manifestaciones desabridas o que puedan molestar, herir, inquietar o disgustar [por todas, STC 41/2011, FJ 5 d)]. No es obviamente la complacencia ajena lo perseguido aquí como valioso por la norma fundamental, sino la afirmación individual y de los grupos, junto a la formación de una opinión pública libre y celosa en la defensa de los derechos e intereses de todos.

c) La libertad de palabra para la crítica y, en su caso, censura públicas de las resoluciones judiciales no es, desde luego, irrestricta, sujeta como está a los límites y condiciones que, con carácter general, hemos recordado en el fundamento jurídico que antecede. Para juzgar de su ejercicio legítimo se ha de tener presente, además, la singular posición del Poder Judicial en el Estado constitucional, posición que —todavía sin descender al caso actual— puede llevar a reprobar *ex Constitutione* manifestaciones y expresiones que resultarían acaso tolerables si hubieran sido dirigidas a los titulares de otros cargos públicos. A diferencia, en primer lugar, de otras autoridades y, desde luego, de los actores políticos en general, el Juez —que como tal se expresa sólo a través de sus resoluciones— carece, por obvias razones de reserva, prudencia y contención, de la misma capacidad de réplica personal con la que aquéllos cuentan para salir al paso de censuras al ejercicio de su función que estime injustas, falsas o atentatorias a su honor profesional [SSTC 46/1998, FJ 5; y 162/1999, de 27 de septiembre, FJ 9; sobre la obligación, en general, de discreción judicial en relación con la imagen de imparcialidad, STC 69/2001, de 17 de marzo, FJ 14 b); asimismo, Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

de 26 de abril de 1995, caso *Prager y Oberschlick c. Austria*, párrafo 34 y, entre otras, la ya citada en el caso *Falter Zeitschriften GmbH*, párrafo 39]. De otro lado, las censuras a un determinado juez cuya actuación se califique de parcial o de deliberadamente injusta son percibidas por la ciudadanía —como evidencia la experiencia común— con un alcance e intensidad reprobatorios muy superiores al que deparan las diatribas o invectivas que, a veces al límite mismo del exceso, pueden llegar a desatarse o intercambiarse al socaire de lo que en alguna ocasión hemos descrito como un "vivo y ardiente debate político" (STC 148/2001, de 27 de junio, FJ 7), pues "el modo normal en que tales polémicas discurren" (STC 39/2005, de 28 de febrero, FJ 5) puede relativizar, en cierta medida, la carga peyorativa de eventuales dicterios que recobrarían, sin embargo, toda su gravedad semántica si tuvieran como destinatarios a los titulares del Poder Judicial. No cabe desconocer en fin, y en relación con lo dicho, que las críticas desmedidas y carentes de todo fundamento al Juez en ejercicio de sus funciones pueden llegar a afectar no ya sólo a su honorabilidad profesional —como se planteó en el proceso *a quo*—, sino también, según quedó ya antes apuntado, a la confianza misma en la justicia (por todas, Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 11 de julio de 2013, caso *Morice c. Francia*, párrafo 107), que es uno de los pilares existenciales del Estado de Derecho. Todo ello no desdice, desde luego, de lo antes afirmado en orden a la plena exposición a la crítica pública de las resoluciones judiciales, pero sí debe ser tenido en cuenta para no trasladar sin matices a casos como el actual, por las razones dichas, nuestra doctrina general [expuesta, por ejemplo, en la STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 8 c)] sobre los límites más amplios o menos taxativos —pero existentes, con todo— de la libertad de expresión cuando se emplea no con el resultado de hacer cuestión del honor de ciudadanos comunes, sino con el de poner en entredicho, al calor del debate cívico y político y con su dialéctica propia, la plena honorabilidad o probidad de personajes públicos o de titulares de cargos públicos que también lo son.

5. Sobre la base de cuanto antecede y a la vista de las circunstancias del caso no cabe, en modo alguno, apreciar que las Sentencias impugnadas ante nosotros violaran el derecho fundamental de los demandantes a expresarse en libertad [art. 20.1 a) CE].

No estamos, en efecto, ante una crítica genérica, por acre que hubiera sido, al funcionamiento del Poder Judicial (STC 107/1988, FJ 3), sino ante una carta pública en la que se reprueba, a una magistrada individualizada en la cabecera del texto. Tampoco ante comentarios o valoraciones sobre la orientación o tendencias de juicio, en general, de un miembro de aquel Poder, ni —ya por lo que hace al actual caso— ante la sola discrepancia, por enfática que su expresión fuera, con la actuación del juzgador, discrepancia que puede llegar a poner en duda o a negar incluso, como aquí en parte se hizo, su competencia profesional. Todo ello queda, en general y de principio, amparado por la libertad de expresión. No habilita este derecho fundamental, sin embargo, para formular, sin pertinencia argumental ni fundamento bastante, las inequívocas acusaciones de parcialidad o falta de probidad que aquí se dirigieron también al juzgador en un determinado proceso. (...) Los recurrentes, esto es lo determinante para nuestro enjuiciamiento suscribieron *coram populo* un escrito en el que, si bien dijeron acatar la Sentencia dictada, tildaron inmediatamente, de modo expreso, apodíctico y reiterado, de parcial el proceder de la Magistrada mediante expresiones tales como "ha demostrado parcialidad", "acepta por incuestionables los argumentos de un testigo... que para más escarnio mintió en la vista oral, de lo cual tiene usted pruebas documentales", "se ha lavado escandalosamente las manos porque ha tenido en su poder pruebas de contradicción documental en su peritaje, y no ha hecho nada" o "da la impresión de haber sentenciado primero y construido la argumentación después". Censura ésta de parcialidad que, a no dudarlo, constituye siempre una de las más graves que pueden dirigirse a quien ejerce jurisdicción y que se formuló entonces, esto es lo que ahora importa, con plena impertinencia respecto del debate, sin duda legítimo, sobre la corrección técnica de un determinado peritaje y sin la más mínima base fáctica en la que pudieran haberse apoyado, siquiera de modo precario o indiciario, afirmaciones tan denigratorias (sobre la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en punto a la "suficiente base fáctica" de determinados juicios de valor, Sentencia, entre otras, de 13 de enero de 2015, en el caso *Lozowska c. Polonia*, párrafo 83; asimismo, STC 79/2014, FJ 5). La imparcialidad judicial es soporte estructural del proceso —sin ella, hemos dicho, no lo hay en verdad (SSTC 11/2000, FJ 4; y 178/2014, de 3 de noviembre, FJ 2)— y se integra, por tanto, en el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE; entre otras muchas, STC 240/2005, de 10 de octubre, FJ 3). Negarla abiertamente en público,

al margen de los cauces procesales, respecto de un concreto juzgador y un determinado proceso y hacerlo sin aportar razón pertinente alguna, sino aventurando simples presunciones, entraña un grave menosprecio del honor profesional de quien sufra tal afrenta, a quien el Ordenamiento ampara, como aquí ocurrió, para defender su probidad. En modo alguno queda empañada la apreciación que ahora hacemos —coincidente en este extremo con la de los juzgadores *a quo*— por la circunstancia, que los demandantes hacen valer en sus recursos, de que el dictamen del perito judicial del que disienten, y al que se refirieron también en su carta abierta, fuera, una vez dictada ya la Sentencia contenciosa, y a denuncia de la asociación Plataforma Aguilar Natural, sometido a investigación por la Fiscalía y objeto de un informe crítico en esas mismas diligencias, pues es evidente que el debate técnico, o incluso jurídico, sobre la regularidad de la pericia que se valoró en el proceso no autoriza, sin más, a negar la imparcialidad del juez que basó su decisión en tal prueba. Las manifestaciones que aquí consideramos se habrían de seguir viendo como un uso desviado de la libertad de expresión, en lo que encierran de denigración gratuita, incluso en la hipótesis, por tanto, de que aquellas diligencias de investigación de la Fiscalía no se hubieran finalmente archivado (como se desprende de las actuaciones que lo fueron), pues, insistimos, la discusión en torno a la corrección técnica de una prueba de este género no es, en lo absoluto, razón bastante para afirmar, como se hizo, la parcialidad del juzgador que la tomó en su día en cuenta.

Impertinente como fue a efectos de discutir la repetida pericia y carente como estuvo de una mínima y coherente base fáctica, la repetida, contundente y pública denostación de la Magistrada como parcial no constituyó, en el caso, legítimo ejercicio de la libertad de expresión para la que hoy se busca amparo. Las resoluciones judiciales son, reiteramos, plenamente susceptibles de crítica por la ciudadanía, pues en nuestra democracia pluralista la jurisdicción se ejerce no sólo en el seno del debate procesal, sino también, dictada la resolución que proceda, ante el foro de la opinión pública libre. Pero lo que la Constitución no protege es la censura a esas resoluciones o a sus autores que parta exclusivamente, como aquí fue el caso, ya de la reprobación *ad personam*, sin razón atendible, de quienes las dictaron, ya de premisas argumentales (la aducida incorrección de la pericia, sobre todo) que no consienten, en manera alguna, concluir en reproche tan severo como el de parcialidad. Son dicterios, no criterios, los que así se difunden entonces, con daño tanto para el honor

profesional del juez al que se dirigen como para la confianza en la justicia, esto es, en una imparcialidad judicial que se presume siempre y que no puede ponerse en público entredicho sin datos o argumentos aptos para justificar acusaciones tan graves, cuya entidad, obvio es, no viene a menos por la circunstancia de que censuras infundadas de tal alcance no sean, como es de lamentar, enteramente insólitas, pues la mayor o menor frecuencia con que se llegue a abusar de determinado derecho no legitima la conducta de quien incurra en ese ejercicio excesivo de la libertad constitucional. No habiendo ejercido de este modo responsable su libertad de expresión, los demandantes —frente a lo que observa el Ministerio Fiscal— no contribuyeron mediante la carta abierta de la que aquí se trata a formar opinión pública, pues para ser ésta, como es, un valor constitucional y de cultura digno de protección debe basarse en casos como el presente, y por intensa que sea la crítica en la que se concluya, en un principio de argumentación que estuvo ausente, sin embargo, en la tacha de parcialidad que los demandantes dirigieron en público a la juzgadora.

VOTOS PARTICULARES

Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, en relación con la Sentencia dictada en los recursos de amparo acumulados núm. 1485-2013 y 1486-2013

Con el máximo respeto a la posición mayoritaria en la Sala, y en ejercicio de la facultad conferida por el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, formulo Voto particular respecto de la Sentencia citada en el encabezamiento.

Mi discrepancia afecta tanto al fallo como a la fundamentación en que se apoya. Esta habría de abordar la posible inexistencia de ilícito penal si una conducta ha sido realizada en ejercicio de un derecho fundamental. Para constatarlo, habría que tener en cuenta los cánones de constitucionalidad consolidados en la doctrina del Tribunal. Considero que no se deslindan adecuadamente los elementos del primer problema, ni se respetan los cánones establecidos.

La libertad de expresión reconocida en el art. 20 CE es un derecho fundamental que goza de especial protección por este Tribunal, al servir de fundamento al pluralismo político generador de una opinión pública libre (por todas, SSTC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3, y 50/2010, de 4 de octubre, FJ 5). No se trata, sin embargo, de un derecho ilimitado; en su obliga-

da ponderación con el derecho al honor del aludido ha de considerarse como extralimitación ajena al derecho fundamental el recurso a "vejaciones innecesarias" o "expresiones insultantes" (entre otras muchas, SSTC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 10; 40/1992, de 30 de marzo, FJ 3, y 56/2008, de 14 de abril, FJ 7). Como consecuencia, para constatar si la carta publicada criticando a una Magistrada ha respetado tal límite, en cuyo caso quedaría excluida la entrada en juego de todo enjuiciamiento penal, hemos de proyectar sobre la conducta de sus autores los cánones de constitucionalidad consolidados en la doctrina del Tribunal.

Además del ya señalado, es preciso tener en cuenta otro canon de constitucionalidad establecido, de acuerdo con el cual el honor de los aludidos a los que quepa considerar como "personajes públicos" (SSTC 172/1990, de 12 de noviembre, FJ 2 y 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, por todas) goza de menor protección, al estar sometidos a crítica más intensa en el control al que ha de someterlos la pública opinión en una sociedad democrática; habría pues que determinar si ha de considerarse a la Magistrada criticada como uno de tales personajes. Por idéntica razón, las circunstancias en que la crítica se realice pueden generar, por el contrario, una protección reforzada. No será idéntica la que merezca lo expresado por un ciudadano oralmente que la reflejada en hojas volanderas (STC 165/1987, de 27 de octubre, FJ 10) o incluso la plasmada en medios de comunicación (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 8, y 197/2006, de 3 de julio, FJ 4); como tampoco merece idéntica protección la opinión expresada individualmente a título personal que las realizadas en representación de un colectivo afectado por los hechos sometidos a crítica (así, SSTC 90/1999, de 26 de mayo, FJ 4, y 198/2004, de 15 de noviembre, FJ 7).

La Sentencia de la que discrepo parece insinuar la existencia de un novedoso canon de constitucionalidad adicional, que convertiría a los jueces y magistrados en peculiares ciudadanos que, lejos de gozar de menor protección (como miembros de un poder público), contarían con un amparo más exhaustivo. Esta postura contradice frontalmente la doctrina fijada por el Tribunal sobre la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales, "que no difiere sustancialmente, en cuanto tal, de la que pueda dirigirse a los actos propios de otros profesionales, incluso los constituidos en autoridad, siempre que por su contexto, expresión y finalidad merezca aquella calificación, puesto que, aun reconociendo la posición de algún modo singular de los titulares de los órganos jurisdiccionales, sus actuaciones, en cuanto personas públicas, no pueden permanecer

inmunes al ejercicio del derecho a la crítica que ampara la libertad de expresión" (STC 46/1998, de 2 de marzo, FJ 3). Coherente con este planteamiento ha sido el legislador, al eliminar la figura penal del desacato.

En cualquier caso, para ser coherente con la fundamentación de su fallo, el enjuiciamiento del que discrepo debería haber llevado, si acaso, al Tribunal a cuestionar el tenor del Código penal por apreciar una inconstitucionalidad por omisión, antes que a dar por bueno que quepa amparar en grado tal a los miembros del Poder Judicial. Al argumento esbozado de que estos no están en condiciones de defenderse (como ocurre a no pocos personajes públicos) no faltaría quien contrapusiera, sin incurrir en teórico desacato, que la entrada en juego del Ministerio Fiscal, en una circunscripción no muy amplia, planteando ante otro órgano nada alejado la posible injuria contenida en la crítica formulada, no constituiría precisamente un homenaje a la exigible imparcialidad objetiva, que excluye toda apariencia de corporativismo.

Es preciso pues determinar, ante todo, si en la carta publicada cabe detectar "vejaciones innecesarias". Ciertamente, en su primer párrafo, se afirma que la Magistrada "ha demostrado parcialidad y falta de competencia". Indudablemente no cabe exigir, a quien critica una resolución judicial que le afecta negativamente, grandes loas a la competencia de la autora. Por otra parte, todos los pormenores que a continuación se critican en la carta, encajarían sin esfuerzo en el presunto déficit de competencia atribuible a la Magistrada. La alusión, sin duda más grave, a su presunta parcialidad queda así aislada; aunque la situación no es equiparable al cuestionamiento de la imparcialidad del juzgador presente en buena parte de las recusaciones legalmente reguladas (STC 178/2014, de 3 de noviembre FJ 2, entre otras), difícilmente podría por sí sola servir de fundamento para considerarla como extralimitación vejatoria, salvo que a los jueces y magistrados se concediera esa peculiar protección ya descartada. Consideramos pues que los recurrentes críticos con la Magistrada, que no dudan en la línea anterior en expresar que acatan la Sentencia "emitida por su Juzgado", lo que no deja de despersonalizar relativamente su crítica, no han incurrido en su carta en "vejaciones innecesarias" ni han empleado tampoco "expresiones insultantes".

No habiendo incurrido los recurrentes en una rechazable extralimitación, gozan de la especial protección que el art. 20 CE confiere a quienes ejercen la libertad de expresión, sin que los jueces y magistrados gocen

de una privilegiada protección como miembros del Poder Judicial, sino más bien de la más liviana atribuida a los personajes públicos. Por todo ello, el legítimo ejercicio de su libertad de expresión descarta la posible aplicación de tipos penales referidos a comportamientos ilícitos.

Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 1485-2013

Con el máximo respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros de Sala en la que se sustenta la Sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo. Considero que hubiera debido estimarse el recurso de amparo por vulneración del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

La reacción penal frente a la libertad de expresión.

Ante todo, creo oportuno subrayar una cuestión que estimo capital.

La opinión mayoritaria en que se sustenta la Sentencia considera que el presente recurso de amparo plantea únicamente una controversia entre el derecho fundamental al honor y el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, cuando la vía judicial previa trae causa del ejercicio de una acción penal por injurias u otros delitos cometidos con ocasión de actos que pueden resultar amparados en la libertad de expresión, el análisis constitucional no puede limitarse a la ponderación entre los derechos subjetivos en conflicto, pues entran en juego los presupuestos para el ejercicio del ius puniendi del Estado, los cuales determinan que no siempre la protección del derecho al honor puede ser articulada mediante una sanción penal.

Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la naturaleza y la gravedad de las penas infligidas son elementos que deben tomarse en consideración cuando se trata de valorar la proporcionalidad de la injerencia en la libertad de expresión, especialmente si se trata de una sanción penal (entre otras, STEDH de 22 de enero de 2015, caso Pinto Pinheiro Marques c. Portugal, § 46).

En supuestos como el presente, pues, no basta ponderar los derechos al honor y a la libertad de expresión de la víctima y el condenado, respectivamente, sino que también debe escrutarse la legitimidad constitucional de la reacción penal del Estado para la protección del derecho al honor.

La opinión mayoritaria en que se sustenta la Sentencia admite que el derecho a la libertad de expresión es algo más que un derecho fundamental subjetivo, pues tiene una dimensión objetiva vinculada al hecho de que hace posible la formación de la opinión pública libre. Así, el derecho a la libertad de expresión es consustancial con la democracia, hasta el punto de que una democracia no sería reconocida como tal en una situación de ausencia o quiebras graves en la protección de ese derecho.

Pero la opinión de la que discrepo no repara suficientemente, a mi juicio, en las consecuencias que este principio impone sobre el hecho de que lo enjuiciado en este caso es una condena penal. Según la jurisprudencia constitucional "la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico, impone a los órganos judiciales al aplicar una norma penal la obligación de tener presente el contenido constitucional de los derechos fundamentales, impidiendo reacciones punitivas que supongan un sacrificio innecesario o desproporcionado de los mismos o tengan un efecto disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales" (STC 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3, y, entre otras, STEDH de 29 de mayo de 2012, caso Tanasoaica c. Rumania, §56).

La idea de una restricción de la intervención penal en el contexto del ejercicio de derechos fundamentales se ha reflejado de manera profusa en la jurisprudencia constitucional. Así, este tribunal ha declarado que "los tipos penales no pueden interpretarse y aplicarse de forma contraria a los derechos fundamentales" y que "los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito" (STC 108/2008, FJ 3).

"También se ha cuestionado la aplicación de los tipos penales en aquellos supuestos en los que, pese a que puedan apreciarse excesos en el ejercicio del derecho fundamental, éstos no alcanzan a desnaturalizarlo o desfigurarlo. Con ello no nos referimos, como es obvio, a los supuestos en los que la invocación del derecho fundamental se convierte en un mero pretexto o subterfugio para, a su pretendido amparo, cometer actos antijurídicos, sino a aquellos casos en los que, a pesar de que el comportamiento no resulte plena y escrupulosamente ajustado a las condiciones y límites del derecho fundamental, se aprecie inequívocamente que el acto se encuadra en su contenido y finalidad y, por tanto, en la razón de ser de

su consagración constitucional. En este último escenario, sin perjuicio de otras consecuencias que el exceso en que se incurrió pudiera eventualmente comportar, la gravedad que representa la sanción penal supondría una vulneración del derecho, al implicar un sacrificio desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría tener un efecto disuasorio o desalentador de su ejercicio" (STC 104/2011, de 20 de junio, FJ 6).

En suma, la respuesta penal en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión comporta un juicio constitucional de necesidad y de proporcionalidad. Debe ponderarse no solo si resulta prevalente el derecho al honor frente a la libertad de expresión; sino también si un eventual exceso o abuso en su ejercicio es de tal magnitud y la lesión correlativa del derecho al honor de tal importancia que resulta justificada una respuesta penal.

Valoración del caso enjuiciado

Este juicio de necesidad y de proporcionalidad, a mi parecer, ha sido omitido en la formación de la opinión mayoritaria. Pero no es esto solo; creo, en conjunto, que el contexto y el contenido de la carta que motivó la condena ponen de manifiesto (i) que la conducta enjuiciada estaba dentro del ámbito objetivo de protección del derecho a la libertad de expresión, por lo que resultaba prevalente sobre el derecho al honor; y (ii) que, en cualquier caso, al encuadrarse esa conducta en el contenido y finalidad del ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la apreciación de un eventual exceso en su ejercicio, puesto en relación con la incidencia en el derecho al honor, no hacía necesaria ni justificaba una respuesta penal, pues las circunstancias del caso hacen que una condena de esta naturaleza resulte disuasoria para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión.

Prevalencia de la libertad de expresión

La opinión mayoritaria concluye que el contenido de la carta que dio lugar a la condena no es una manifestación genuina del derecho a la libertad de expresión y resulta prevalente el derecho al honor. Se funda en dos argumentos: (i) que la crítica se dirige a un miembro del poder judicial; y (ii) que las expresiones proferidas carecen de una base fáctica que las justifiquen.

Discrepo de la comprensión realizada por la opinión de la mayoría en ambos aspectos.

La opinión mayoritaria, haciéndose eco de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostiene que los jueces requieren una superior protección a la de otros cargos públicos frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de la ciudadanía por carecer de capacidad de réplica (STEDH de 24 de febrero de 1997, caso *De Haes y Gijsels c. Bélgica*). Esta opinión, a mi juicio, prescinde de las matizaciones que acompañan a esa doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal, por una parte, en la Sentencia citada restringe la protección de que deben ser objeto los tribunales a los ataques destructivos carentes de cualquier base fáctica. Por otra parte, en definitiva, admite que la operación de ponderación que debe hacerse respecto del honor de los jueces es idéntica a la de los demás cargos públicos, cosa que conduce a estimar lesionado el derecho a la libertad de expresión en el caso que examina, por versar sobre un asunto de interés público, cual es la imparcialidad y competencia de los tribunales (véase Monica Macover, *Freedom of expression, Human rights handbooks,* No. 2, Consejo de Europa, pp. 57 a 59). Considero, pues, que la labor de administrar la justicia desarrollada por jueces y magistrados, en tanto que integrantes del poder judicial (art. 117.1 CE), es una manifestación más del ejercicio de un poder del Estado y, como tal, está sometida a crítica y escrutinio por parte de la ciudadanía. La tolerancia a la crítica de la actuación de jueces y magistrados en el desempeño de su función pública, habida cuenta del carácter no electivo y, por tanto, no sometido a ningún otro tipo de control por parte de la ciudadanía, no puede restringirse en relación con la crítica que cabe desarrollar respecto de otro tipo de servidores públicos. Cualquier poder del Estado, también el poder judicial, en tanto que emanado de la soberanía popular (art. 1.2 CE), debe soportar la crítica con un idéntico nivel de tolerancia incluyendo las críticas ofensivas, lacerantes o perturbadoras (entre otras, STEDH de 21 de octubre de 2014, caso *Murat Mural c. Turquía*, § 61), las cuales pueden incluir una determinada dosis de exageración o incluso de provocación (entre otras, SSTEDH de 1 de junio de 2010, caso *Gutiérrez Suárez c. España,* § 61, y de 15 de marzo de 2011, caso *Otegi Mondragon c. España*, § 54).

En este caso, por lo demás, resulta evidente el interés público de la cuestión, relacionada con la protección del medio ambiente (entre otras, STEDH de 29 de mayo de 2012, caso *Tanasoaica c. Rumania*, § 48); la dedicación de la asociación a la que pertenecen los recurrentes a promoverla; y el interés público que reviste la imparcialidad y competencia de los

tribunales (STEDH de 24 de febrero de 1997 citada, caso *De Haes y Gijsels c. Bélgica)*.

La eventual dificultad de réplica que institucionalmente tienen los integrantes del poder judicial debe, ciertamente, ser tenida en consideración al valorar las circunstancias del caso; pero no puede erigirse como valladar general a toda crítica, incluso cuando sea acerba. En nuestro sistema la facultad de defensa o réplica está garantizada mediante la facultad reconocida a los jueces por el art. 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de instar el amparo del Consejo General del Poder Judicial cuando se sientan inquietados o perturbados en su independencia por declaraciones o manifestaciones hechas en público y recogidas en medios de comunicación que objetivamente supongan un ataque a la independencia judicial y sean susceptibles de influir en la libre capacidad de resolución del juez o magistrado.

En la carta publicada por los recurrentes se imputa falta de parcialidad y de competencia al titular del órgano judicial. Pero esta crítica no se formula con carácter general como una imputación contra la personalidad o actividad del juez en conjunto, sino (citando elementos fácticos extraídos del desarrollo de un procedimiento judicial) en relación estrecha y pormenorizada con un determinado acto de valoración de la prueba pericial. Este acto se estima desacertado por unos motivos que se exponen con detalle, consistentes, en la opinión de los autores de la carta, en el error cometido, a la vista de datos que se suponen a disposición del juez, sobre el distinto peso y crédito que debía reconocerse a uno y otro dictamen pericial. Junto a la crítica a este acto judicial, existe una crítica, de tono aparentemente más duro, contra la actitud de uno de los peritos. Esto es, la crítica de parcialidad, por mucho que pueda resultar peyorativa para un juez, no se hace descontextualizada ni desvinculada de unos concretos datos objetivos. Al contrario, estos se exponen en la carta publicada y, por tanto, en el marco de la formación de una opinión pública libre permiten e invitan al lector a extraer sus propias conclusiones. La carta no contiene en absoluto descalificaciones groseras y gratuitas respecto de las que la opinión pública no pueda tomar una posición informada.

Es, por lo demás, evidente que no puede formularse una crítica a una decisión judicial sin presuponer de un modo u otro que su autor ha incurrido en falta de parcialidad o de competencia. De esto se sigue que entender que la imputación de falta de parcialidad o de competencia a un

juez justifica por sí sola una condena penal hace imposible, en la práctica, la crítica libre de las decisiones judiciales, tanto en sede doctrinal como en otros foros de formación de la opinión pública, como son los medios de comunicación. En suma, se produce un efecto disuasorio incompatible con el ejercicio de la libertad de expresión en este ámbito.

Desproporción de la condena penal

En cualquier caso, incluso aceptando a efectos dialécticos la conclusión sustentada por la posición de la mayoría de que hubo un ejercicio abusivo de la libertad de expresión y que prevalecía el derecho al honor, me resisto a pensar que este es un supuesto en que resulte justificado y proporcionado acudir al derecho penal para reprimir esta conducta. De imponerse visiones como las que sustenta la posición de la mayoría es más que probable que el efecto disuasorio que se vaya generando respecto de la posibilidad de crítica a las resoluciones judiciales convierta las decisiones de jueces y magistrados en un objeto excluido del debate público. Ni que decir tiene que este no es el panorama más deseable para el mercado de las ideas ni para la democracia misma, ni tampoco para los miembros del poder judicial, que deben ver en la crítica un medio de acentuar su imparcialidad y competencia y en la tolerancia para con ella una cualidad inherente a la importancia constitucional de su función.

Sentencia 177/2015, de 22 de julio de 2015

Recurso de amparo 956-2009. Promovido por don Jaume Roura Capellera y don Enric Stern Taulats respecto de las Sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central Penal que les condenaron por un delito de injurias a la Corona.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. (…)

2. Como ha quedado expuesto con más detalle en los antecedentes, los recurrentes denuncian formalmente y por separado la vulneración de sus libertades ideológica (art. 16.1 CE) y de expresión [art. 20.1 a) CE]. Por razones metodológicas se estima conveniente abordar en primer lugar la denuncia atinente a la lesión del segundo de los derechos enunciados. Sobre el contenido de la libertad de expresión y sus límites existe una

consolidada doctrina constitucional que puede resumirse del siguiente modo:

a) Conforme a una jurisprudencia unánime que arranca de las tempranas SSTC 6/1981, de 16 de marzo, y 12/1982, de 31 de marzo, y recuerdan, entre otras, las más recientes SSTC 41/2001, de 11 de abril, FJ 4, y 50/2010, de 4 de octubre, se ha subrayado repetidamente la "peculiar dimensión institucional de la libertad de expresión", en cuanto que garantía para "la formación y existencia de una opinión pública libre", que la convierte "en uno de los pilares de una sociedad libre y democrática". De modo congruente, hemos insistido también en la necesidad de que dicha libertad "goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones", que ha de ser "lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez y sin temor" (SSTC 9/2007, de 15 de enero, FJ 4, y 50/2010, FJ 7).

b) También hemos sostenido que la libertad de expresión comprende la libertad de crítica "aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática" (SSTC 174/2006, de 5 de junio, FJ 4, y 77/2009, de 23 de marzo, FJ 4). De modo que, como subraya la STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4, la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones "acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población" (STEDH caso *De Haes y Gijsels c.* Bélgica, de 24 de febrero de 1997, § 49). En fin, en esta última Sentencia hemos recordado también que en nuestro sistema "no tiene cabida un modelo de 'democracia militante', esto es, un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución... El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas".

En ese contexto, tanto este Tribunal como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han insistido en el significado central del discurso político desde el ámbito de protección de los arts. 20 CE y 10 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), particularmente amparable cuando se ejerce por un representante político. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entiende que la libertad de expresión adquiere unos márgenes especialmente valiosos cuando se ejerce por una persona elegida por el pueblo (STEDH de 15 de marzo de 2011, caso *Otegi c. España,* §50), que representa a sus electores, señala sus preocupaciones y defiende sus intereses, estándole "permitido recurrir a una cierta dosis de exageración, o incluso de provocación, es decir, de ser un tanto inmoderado en sus observaciones" (caso *Otegi c. España*, § 54), por lo que en ese contexto el control debe ser más estricto (STEDH de 23 de abril de 1992, caso *Castells c. España*, § 42). Sin perjuicio de lo cual, el sujeto interviniente en el debate público de interés general debe tener en consideración ciertos límites y, singularmente, respetar la dignidad, la reputación y los derechos de terceros.

c) La libertad de expresión no es, en suma, un derecho fundamental absoluto e ilimitado, sino que tiene lógicamente, como todos los demás, sus límites, de manera que cualquier expresión no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional, toda vez que el art. 20.1 a) CE "no reconoce un pretendido derecho al insulto" (SSTC 29/2009, de 26 de enero; 77/2009, de 23 de marzo, y 50/2010, de 4 de octubre). En consecuencia, este Tribunal ha declarado repetidamente que quedan fuera de la protección constitucional del art. 20.1 a) CE "las expresiones indudablemente injuriosas o sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la exposición de las mismas". Es decir, las que, "en las concretas circunstancias del caso sean ofensivas u oprobiosas".

   Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que "[l]a tolerancia y el respeto de la igual dignidad de todos los seres humanos constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, sancionar e incluso prevenir todas las formas de expre-

sión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia" (STEDH de 16 de julio de 2009, caso *Féret c. Bélgica*, § 64), del mismo modo que la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la violencia para imponer criterios propios.

d) Estos límites deben ser, no obstante, ponderados siempre con exquisito rigor. Esta regla, que es de obligada atención con carácter general, habida cuenta de la posición preferente que ocupa la libertad de expresión, lo es todavía más cuando dicha libertad entra en conflicto con otros derechos fundamentales, en particular el derecho al honor (art. 18 CE), y señaladamente con otros intereses de significada importancia social y política respaldados por la legislación penal. Cuando esto último sucede, como es el presente caso, esas limitaciones siempre han de ser "interpretadas de tal modo que el derecho fundamental [del art. 20.1 a) CE] no resulte desnaturalizado" (STC 20/1990, de 15 de febrero; FJ 4). Lo que, obliga entre otras consecuencias, "a modificar profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor en los que se halla implicado el ejercicio de la libertad de expresión", pues su posición preferente impone "la necesidad de dej[ar] un amplio espacio al disfrute de [dicha] libertad (SSTC 39/2005, de 28 de febrero, FJ 4, y 278/2005, de 7 de noviembre; FJ 4), y "convierte en insuficiente el criterio subjetivo del *animus iniuriandi*", tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos (SSTC 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3, y 29/2009, de 26 de enero, FJ 3). En definitiva, el Juez penal ha de tener siempre presente su contenido constitucional para "no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en el Estado democrático" (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 4 y 8; 287/2000, de 11 de diciembre, FJ 4; 127/2004, de 19 de julio, FJ 4, y 253/2007, de 7 de noviembre, FJ 6, y STEDH, caso *Castells*, 23 de abril de 1992, § 46).

e) Así las cosas, el órgano judicial debe valorar, como cuestión previa a la aplicación del tipo penal y atendiendo siempre a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, si la conducta que enjuicia constituye un ejercicio lícito del derecho fundamental a la libertad de expresión y, en consecuencia, se justifica por el valor predominante de la libertad de expresión. Pues "es obvio que los hechos

probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito" (por todas, últimamente, STC 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 3). Por ese motivo, como también hemos repetido en múltiples ocasiones, "la ausencia de ese examen previo al que está obligado el Juez penal o su realización sin incluir en él la conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los derechos fundamentales y de las libertades públicas no es constitucionalmente admisible" (STC 29/2009, de 26 enero, FJ 3), y, por lo mismo, "constituye en sí misma una vulneración de los derechos fundamentales no tomados en consideración" (SSTC 299/2006, de 23 de octubre, FJ 3, y 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3). En suma, en casos como el presente, "no estamos en el ámbito de los límites al ejercicio del derecho, sino en el previo de la delimitación de su contenido" (SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 2, y 127/2004, de 19 de julio).

f) Por lo demás, en supuestos como el actual la tarea que corresponde a este Tribunal no se "circunscribe a examinar la razonabilidad de la motivación de la resolución judicial, ya que no se trata aquí de comprobar si dicha resolución ha infringido o no el art. 24.1 CE, sino de resolver un eventual conflicto entre los derechos afectados, determinando si, efectivamente, aquéllos se han vulnerado atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos, aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados por los órganos judiciales, ya que sus razones no vinculan a este Tribunal ni reducen su jurisdicción a la simple revisión de la motivación de las resoluciones judiciales" (por todas, STC 158/2009, de 25 de junio).

3. Con arreglo a estos presupuestos nos corresponde dilucidar si, como defienden los demandantes de amparo, el hecho de quemar, en las circunstancias descritas, una fotografía de SS.MM. los Reyes es una conducta penalmente no reprochable por constituir un legítimo ejercicio de la libertad de expresión que garantiza la Constitución [art. 20.1 a) CE] o si, por el contrario, como declararon las Sentencias judiciales ahora recurridas y, a su vez, ha opinado también en el presente proceso constitucional el Ministerio Fiscal, dicha conducta tiene un contenido intrínsecamente injurioso y vejatorio que desborda los límites constitucionales de la libertad de expresión. Para ello será preciso analizar la concreta acción eje-

cutada por los recurrentes, atendiendo particularmente a los siguientes criterios:

a) En primer lugar, conviene subrayar la singular y reforzada protección jurídica que el legislador penal otorga a la Corona, al igual que hace con otras altas Instituciones del Estado, para defender el propio Estado Constitucional, pues así lo corrobora el hecho de que el delito de injurias a la Corona no figure en el título XI del Código Penal, relativo a los delitos contra el honor, sino en el título XXI, dedicado precisamente a los delitos contra la Constitución. Por consiguiente, en lo que ahora exclusivamente nos importa, el art. 490.3 del Código Penal (CP) tipifica un delito de naturaleza pública, a cuyo través se protege el mantenimiento del propio orden político que sanciona la Constitución, en atención a lo que la figura del Rey representa. No obstante, el honor y la dignidad del monarca también forman parte del bien jurídico protegido por el precepto, siempre que la ofensa tenga que ver con el ejercicio de sus funciones o se produzca con ocasión de dicho ejercicio. Ahora bien, la protección penal que ofrece el art. 490.3 CP no implica que el Rey, como máximo representante del Estado y símbolo de su unidad, quede excluido de la crítica especialmente por parte de aquéllos que rechazan legítimamente las estructuras constitucionales del Estado, incluido el régimen monárquico. (...)

b) En segundo lugar, debe destacarse que la destrucción de un retrato oficial posee un innegable y señalado componente simbólico. Aunque las más genuinas formas de expresión consisten en manifestaciones orales o escritas, las personas pueden igualmente comunicar o expresar sus ideas y opiniones mediante conductas, hechos o comportamientos no verbales que, en tal consideración, son también manifestaciones de la libertad de expresión. (...)

   Por ello, las personas también pueden manifestar sus ideas y opiniones mediante un lenguaje simbólico (*symbolic speech*), o bien mediante otras conductas expresivas (*expressive conduct*). El componente significativo o expresivamente inocuo de determinados símbolos, actitudes o conductas dependerá, pues, del contexto que integre las circunstancias del caso.

c) Por último interesa remarcar que, desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, la formulación de críticas hacia los

> representantes de una institución o titulares de un cargo público, por desabridas, acres o inquietantes que puedan resultar no son más que reflejo de la participación política de los ciudadanos y son inmunes a restricciones por parte del poder público. Sin embargo, esa inmunidad no resulta predicable cuando lo expresado, aun de forma simbólica, solamente trasluce ultraje o vejación. (...)

4. Teniendo en cuenta estos criterios y la doctrina constitucional que hemos expuesto más arriba debemos enjuiciar la constitucionalidad de la condena penal de los demandantes de amparo por un delito de injurias a la Corona del art. 490.3 CP, a la luz de los hechos declarados probados en la vía judicial. Tal y como hemos recordado en los antecedentes de esta resolución, las Sentencias recurridas declaran probado que los recurrentes irrumpieron con el rostro tapado —uno encapuchado y otro embozado— en la concentración que siguió a la manifestación precedente celebrada en protesta de la visita real y, previa deliberada colocación boca abajo de una fotografía de gran tamaño de los Reyes, procedieron a quemarla mientras eran jaleados por varios de los concentrados para, seguidamente, retirarse e intentar confundirse con el resto de los asistentes. De las circunstancias relatadas, los órganos judiciales coligieron el carácter delictivo de los hechos, dada la expresión simbólica de desprecio y destrucción que en el contexto en que se produjo comportó el uso del fuego, amén de la colocación del retrato de los Reyes en posición claudicante (boca abajo). Dichos órganos también escindieron nítidamente la transcendencia jurídica de la precedente manifestación antimonárquica, que consideraron amparada por el legítimo ejercicio del derecho a la libertad de expresión, del subsiguiente episodio sometido a enjuiciamiento, el cual, además de ser considerado formalmente injurioso, se reputó innecesario para exteriorizar una posición crítica hacia la Monarquía. (...)

Desde la perspectiva que nos corresponde debemos dilucidar si los hechos acaecidos son expresión de una opción política legítima, que pudieran estimular el debate tendente a transformar el sistema político, o si, por el contrario, persiguen desencadenar un reflejo emocional de hostilidad, incitando y promoviendo el odio y la intolerancia incompatibles con el sistema de valores de la democracia.

Cuando una idea u opinión se manifiesta, como en el caso enjuiciado, mediante la destrucción de elementos con un valor simbólico, la conducta ha de ser examinada con arreglo a un canon de enjuiciamiento par-

ticularmente atento a las concretas circunstancias del caso. Un acto de destrucción puede sugerir una acción violenta y, en consecuencia, ser susceptible de albergar mensajes que no merecen protección constitucional. Pues, como es obvio, no es jurídicamente indiferente manifestar la protesta o el sentimiento crítico utilizando medios o instrumentos inocuos para la seguridad y dignidad de las personas, que hacerlo incitando a la violencia o al menosprecio de las personas que integran la institución simbolizada o sirviéndose del lenguaje del odio.

En la STC 136/1999, de 20 de julio, afirmamos que "no cabe considerar ejercicio legítimo de las libertades de expresión e información a los mensajes que incorporen amenazas o intimidaciones a los ciudadanos o a los electores, ya que como es evidente con ellos ni se respeta la libertad de los demás, ni se contribuye a la formación de una opinión pública que merezca el calificativo de libre" (FJ 15). Del mismo modo, la utilización de símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la exclusión política, social o cultural, deja de ser una simple manifestación ideológica para convertirse en un acto cooperador con la intolerancia excluyente, por lo que no puede encontrar cobertura en la libertad de expresión, cuya finalidad es contribuir a la formación de una opinión pública libre.

Es obvio que las manifestaciones más toscas del denominado "discurso del odio" son las que se proyectan sobre las condiciones étnicas, religiosas, culturales o sexuales de las personas. Pero lo cierto es que el discurso fóbico ofrece también otras vertientes, siendo una de ellas, indudablemente, la que persigue fomentar el rechazo y la exclusión de la vida política, y aun la eliminación física, de quienes no compartan el ideario de los intolerantes.

(...)

La escenificación de este acto simbólico traslada a quien visiona la grabación videográfica la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados, sin que deba dejar de advertirse además que el lóbrego acto provoca un mayor impacto en una sociedad democrática, como la española, que de forma expresa excluye en su Constitución la pena de muerte (art. 15 CE).

Quemar en público, en las circunstancias descritas, la fotografía o la imagen de una persona comporta una incitación a la violencia contra la persona y la institución que representa, fomenta sentimientos de agre-

sividad contra la misma y expresa una amenaza. En definitiva, quemar públicamente el retrato de los Monarcas es un acto no sólo ofensivo sino también incitador al odio, en la medida en que la cremación de su imagen física expresa, de un modo difícilmente superable, que son merecedores de exclusión y odio.

(...) La ausencia de espontaneidad en el comportamiento de los demandantes es patente, puesto que la quema de la fotografía no surge de forma instantánea en el contexto de la manifestación y al hilo de la crítica sobre el modelo constitucional de Estado o como expresión de la ideología antimonárquica e independentista de los recurrentes. Dicho acto fue, por el contrario, fruto de una actividad diseñada de antemano y orientada a mostrar el mayor grado de hostilidad frente a la institución de la Corona.

Los hechos así expuestos avalan categóricamente el significado netamente incitador al odio, pues en el relato histórico de la Sentencia recaída en la instancia, expresamente aceptado por el Tribunal de apelación, no figura dato alguno que sustente la tesis que los demandantes esgrimen en pro del legítimo ejercicio del derecho de crítica hacia la institución monárquica. (...)

Importa subrayar estas circunstancias porque las mismas cualifican el presente asunto, alejándolo significativamente del supuesto recientemente resuelto por la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 15 de marzo de 2011 (caso *Otegui c. España*), en el que el referido Tribunal consideró que la conducta del recurrente estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión (art. 10 CEDH). Los ahora recurrentes no eran representantes electos, ni formaban parte de ningún grupo parlamentario. Tampoco concurren, en el presente caso, las singulares circunstancias especialmente valoradas en la Sentencia citada, acerca del contexto en que se produjeron las declaraciones del entonces demandante (sospecha de torturas con motivo del cierre del diario "Egunkaria"). Pero —y esto es lo más importante— en aquel supuesto el recurrente expresó su opinión sobre un asunto sujeto al debate político, y sus manifestaciones, en palabras del propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, venían referidas a una cuestión de interés público en el País Vasco aunque fueran expuestas de manera provocativa y exagerada. Sin embargo, en el presente caso no concurre ninguna de las circunstancias indicadas, ni nin-

guna otra de similar naturaleza que permita reconducir la quema de los retratos al contexto de crítica política que los demandantes invocan. (...)

5. A continuación, pasamos a dar respuesta a la primera de las lesiones denunciadas en la demanda que, en síntesis, se funda en el siguiente alegato: la condena impuesta por los órganos judiciales constituye un castigo por la expresión pública de unas convicciones antimonárquicas, lo que vulnera el derecho a la libertad ideológica de los demandantes (arts. 16.1 CE). Este Tribunal ha tenido ocasión de destacar la importancia del derecho consagrado en el art. 16.1 CE. Como afirmamos en la STC 20/1990, de 20 de febrero, FJ 3: "hay que tener presente que sin la libertad ideológica consagrada en el art. 16.1 CE, no serían posibles los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico que se propugnan en el art. 1.1 de la misma para constituir el Estado social y democrático de derecho que en dicho precepto se instaura. Para que la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político sean una realidad efectiva y no la enunciación teórica de unos principios ideales, es preciso que a la hora de regular conductas y, por tanto, de enjuiciarlas, se respeten aquellos valores superiores sin los cuales no se puede desarrollar el régimen democrático que nos hemos dado en la Constitución de 1978. Interpretar las leyes según la Constitución conforme dispone el art. 5.1 LOPJ, exige el máximo respeto a los valores superiores que en ella se proclaman".

Asimismo, en la STC 120/1992, de 27 de junio, FJ 8, enmarcamos el alcance y contenido de la faceta externa de ese derecho en los siguientes términos: "[c]iertamente, la libertad ideológica, como así viene a latir en el planteamiento de los recurrentes, no se agota en una dimensión interna del derecho a adoptar una determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne y a representar o enjuiciar la realidad según personales convicciones. Comprende, además, una dimensión externa de *agere licere*, con arreglo a las propias ideas sin sufrir por ello sanción o demérito ni padecer la compulsión o la injerencia de los poderes públicos. El art. 16.1 CE garantiza la libertad ideológica sin más limitaciones en sus manifestaciones que las necesarias para el mantenimiento del orden público protegido por la ley (STC 20/1990, fundamento jurídico 3). En este sentido no hay inconveniente en reconocer, para dar respuesta a la cita que en la demanda se hace de la libertad de expresión —ausente, sin embargo, de la relación de violaciones constitucionales que se pretende declare este Tribunal—, que entre tales manifestaciones, y muy principalmente, figura la de expresar libremente lo que se piense. A la

libertad ideológica que consagra el art. 16.1 CE le corresponde "el correlativo derecho a expresarla que garantiza el art. 20.1 a)' (STC 20/1990, fundamento jurídico 5), aun cuando ello no signifique que toda expresión de ideología quede desvinculada del ámbito de protección del art. 16.1, pues el derecho que éste reconoce no puede entenderse 'simplemente absorbido" por las libertades del art. 20 (STC 20/1990, fundamento jurídico 3), o que toda expresión libremente emitida al amparo del art. 20 sea manifestación de la libertad ideológica del art. 16.1".

Por último, este Tribunal ha tenido ocasión de delimitar bajo qué premisas la actuación de los poderes públicos atenta contra dicho derecho: "[a]hora bien, para que los actos de los poderes públicos puedan ser anulados por violaciones de la libertad ideológica es cuando menos preciso, de una parte, que aquéllos perturben o impidan de algún modo la adopción o el mantenimiento en libertad de una determinada ideología o pensamiento, y no simplemente que se incida en la expresión de determinados criterios. De otra, se exige que entre el contenido y sostenimiento de éstos y lo dispuesto en los actos que se combatan quepa apreciar una relación de causalidad" (STC 137/1990, de 19 de julio, FJ 8; y ATC 19/1992, de 27 de enero, FJ 2).

Una vez sintetizada nuestra doctrina, hemos de afirmar que las penas impuestas a los demandantes no vulneran el derecho fundamental a la libertad ideológica (art. 16.1 CE), pues sin perjuicio del trasfondo antimonárquico de su comportamiento, de todo punto evidente, el reproche penal que realizan las Sentencias impugnadas no se fundamenta en el posicionamiento ideológico de los recurrentes, sino en el contenido de un acto episódico de naturaleza simbólica. En el ordenamiento español no existe ninguna prohibición o limitación para constituir partidos políticos que acojan idearios de naturaleza republicana o separatista, ni para su expresión pública, como evidencia la celebración de la manifestación que tuvo lugar inmediatamente antes de la comisión de los hechos sancionados. (...)

Por último, resulta oportuno abordar otros dos aspectos cuya importancia no es baladí. En primer lugar debe advertirse sobre el riesgo evidente de que el público presente percibiera la conducta de los recurrentes como una incitación a la violencia y el odio hacia la Monarquía y hacia quienes la representan. Aunque no consta que se produjeran incidentes de orden público, la connotación destructiva que comporta la

quema de la fotografía de los Reyes es innegable y, por ello, tal acción pudo suscitar entre los presentes reacciones violentas e "incompatibles con un clima social sereno y minar la confianza en las instituciones democráticas" (STEDH de 16 de julio de 2009, caso *Feret c. Bélgica* § 77), o, en fin, avivar el sentimiento de desprecio o incluso de odio hacia los Reyes y la institución que representan, exponiendo a SS.MM. "a un posible riesgo de violencia" (STEDH de 8 de julio de 1999, caso *Sürek c. Turquía* § 62), pues, como ha advertido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "la incitación al odio no requiere necesariamente el llamamiento a tal o cual acto de violencia ni a otro acto delictivo" (STEDH de 16 de julio de 2009, caso *Feret c. Bélgica* § 73).

Por otra parte, según doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la imposición de penas de prisión por infracciones cometidas en el ámbito del discurso político sólo es compatible con la libertad de expresión garantizada por el art. 10 del Convenio en circunstancias excepcionales, especialmente cuando se han lesionado gravemente otros derechos fundamentales, como en el supuesto de que se difunda un discurso de odio o de incitación a la violencia, como es el caso (STEDH de 15 de marzo de 2011, caso *Otegi c. España*, §§ 58 a 60, por remisión a los casos *Bingöl c. Turquía*, núm. 36141/2004, ap. 41, de 22 de junio de 2010, y, *mutatis mutandis*, *Cumpănă y Mazăre Rumanía* [GS], núm. 33348/1996, ap. 115, TEDH 2004-XI). En cualquier caso, en el presente supuesto la inicial pena de prisión fijada en aplicación de lo previsto en el art. 490.3 CP ha sido sustituida por multa de treinta meses a razón de una cuota diaria de 3 euros, por lo que la cuantía final sería de 2.700 euros. Esta modalidad de sanción se estima proporcionada a la entidad del hecho y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos no la ha considerado contraria al Convenio (STEDH en el caso *Otegi c. España*, §§ 58 a 60), pues aunque la multa no elimina la inscripción de la condena penal en el Registro de antecedentes penales (*mutatis mutandis*, SSTEDH de 26 de junio de 2007, caso *Artun y Guvener c. Turquía*, § 33, y de 19 de febrero de 2009, caso *Martchenko c. Ucrania*, § 52), sí mitiga notablemente sus efectos. Al margen de tal dato, no puede olvidarse que la cuantía de la pena resultante no deriva exclusivamente de la subsunción en el tipo penal de los hechos, sino también a la apreciación de la circunstancia agravante de ejecutar el hecho mediante disfraz (art. 22.2 CP), que obliga a imponer una pena superior por razones diversas a la calificación de la quema de la fotografía de los Reyes como un delito de injurias, en concreto, en tanto

es una circunstancia que favorece la ejecución del delito y la impunidad de sus autores.

En conclusión, por las razones ya expuestas debemos proclamar que la conducta que determinó la condena de los demandantes no está amparada constitucionalmente por los derechos invocados en la demanda a la libertad de expresión o de creencias, por lo que no merece la protección dimanante de los arts. 16.1 y 20.1 a) CE.

VOTOS PARTICULARES

Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 956-2009

Con respeto a la opinión mayoritaria de mis compañeros del Tribunal en la que se sustenta la Sentencia, manifiesto mi discrepancia con la fundamentación jurídica y con el fallo. Considero que hubiera debido ser estimatoria por vulneración del derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].

1. Los derechos a la libertad de expresión e información están íntimamente ligados a la democracia. La sensibilidad y la forma con que los poderes de un Estado abordan y tratan estos derechos son un indicador de la calidad de su democracia; por eso me alarma la tendencia restrictiva de estos derechos en la más reciente jurisprudencia constitucional. Es una deriva de la que no se libran ni las empresas de telecomunicaciones (STC 73/2014, de 4 de junio), ni los profesionales de la información (SSTC 176/2013, de 21 de octubre, 19/2014, de 10 de febrero, o 18/2015, de 16 de febrero), ni los miembros de organizaciones sociales (STC 65/2015, de 13 de abril). Por ese motivo, he hecho pública mi discrepancia con diversas resoluciones de este Tribunal en esa materia (así, SSTC 73/2014 y 65/2015). De nuevo, me veo en la obligación de acudir a la posibilidad legal que me brinda el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para mostrar mi disidencia con otro ejemplo de esa tendencia. En esta ocasión los afectados son dos ciudadanos condenados penalmente por la utilización de una forma de expresión —la destrucción o quema de fotos de representantes políticos o de símbolos políticos— que es ampliamente aceptada en los estándares internacionales de derechos humanos como una inocua manifestación del derecho a la libertad de expresión.

2. La opinión mayoritaria en que se sustenta la Sentencia considera que la sanción penal impuesta a los recurrentes —privativa de libertad

y sustituida por una sanción económica— por la comisión de un delito de injurias al Rey y a sus familiares (art. 490.3 del Código Penal: CP, en la redacción dada por la Ley Orgánica 10/1995), con motivo de haber quemado la foto institucional del Jefe del Estado y su consorte tras una manifestación antimonárquica e independentista en Cataluña, no vulnera sus derechos a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión [art. 20.1 a) CE]. El argumento para sustentar esta afirmación, separándose por completo de cuál fue la línea de razonamiento en la vía judicial para fundamentar la condena de los recurrentes, es que esa conducta simbólica no supone el "legítimo" ejercicio de esos derechos, al ser una manifestación del denominado "discurso del odio", que es uno de los límites intrínsecos a ese ejercicio.

No me voy a extender en este Voto particular sobre dos aspectos que comparto con la opinión mayoritaria, como son (i) que el lenguaje simbólico, incluyendo la destrucción mediante el fuego de fotos y otros emblemas, es un acto comunicativo que implica el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; y (ii) que el discurso del odio, en cualquiera de sus manifestaciones, incluyendo su expresión a través del lenguaje simbólico, supone una legítima restricción del derecho a la libertad de expresión. Mi discrepancia radica en que, a mi juicio, (i) la concreta conducta de destrucción mediante el fuego de una foto institucional del Jefe del Estado y su consorte como la realizada por los recurrentes y en el contexto en que fue desarrollada no es una manifestación del "discurso del odio" que suponga un ejercicio incurso en extralimitación o abusivo y, por tanto, "ilegítimo" del derecho a la libertad de expresión; (ii) que esa concreta extralimitación y por esa causa, hipotéticamente, no justifica la respuesta penal por aplicación del delito de injurias al Rey y a sus familiares que fue establecida en la vía judicial previa; y (iii) que esa concreta respuesta penal, además, no resulta necesaria y proporcionada ponderando los derechos, valores e intereses constitucionales en conflicto.

I. LA BANALIZACIÓN DEL DISCURSO DEL ODIO

3. La opinión de la mayoría, al argumentar que la conducta de los recurrentes supuso un ejercicio de la libertad de expresión incurso en extralimitación por incitar al odio contra el Jefe del Estado, banaliza el discurso del odio y su significación como restricción legítima de la libertad de expresión.

La jurisprudencia constitucional y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) han establecido dos notas distintivas para poder calificar un acto comunicativo como "discurso del odio": (i) que suponga una incitación directa a la violencia y (ii) que se dirija contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas, creencias o actitudes vitales en particular. Así, en la STC 235/2007, de 7 de noviembre, se afirmó, "que la libertad de expresión no puede ofrecer cobertura al llamado "discurso del odio", esto es, a aquel desarrollado en términos que supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas o creencias en particular. En este punto, sirve de referencia interpretativa del Convenio la Recomendación núm. R (97) 20 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 30 de octubre de 1997, que insta a los Estados a actuar contra todas las formas de expresión que propagan, incitan o promueven el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia (SSTEDH caso *Gündüz c. Turquía*, de 4 de diciembre de 2003, § 41; caso *Erbakan c. Turquía*, de 6 de julio de 2006)" (FJ 5).

En coherencia con ello, el análisis que ha proyectado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el discurso del odio, sea tomando como enfoque el abuso del derecho del art. 17 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH) —por ser una manifestación "tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el convenio"— o las propias limitaciones que a la libertad de expresión se establecen en el art. 10.2 CEDH, aparece siempre referido a supuestos de actos comunicativos que pudieran ser interpretados como de incitación a la violencia contra grupos y colectivos basados en consideraciones étnicas, religiosas, nacionales, raciales, de orientación sexual, etc., o justificativos de tratamientos discriminatorios y limitativos del disfrute de los derechos humanos por parte de estos grupos y los individuos que los integran. En ese contexto, cuando se ha pretendido aplicar la doctrina del discurso del odio a supuestos de una eventual incitación u hostilidad contra personas singulares no integradas en grupos vulnerables se ha negado que se trate de manifestaciones del discurso del odio (STEDH caso *Otegi Mondragón c. España*, de 15 de marzo de 2011, § 54); o se ha contrapuesto, precisamente, a otras restricciones legítimas de la libertad de expresión para la protección de intereses individuales, como son la difamación o la incitación a ejercer violencia

contra personas individuales y determinadas (STEDH caso *Delfi As c. Estonia,* de 16 de junio de 2015).

Por otra parte, en lo que se refiere a que el acto suponga por sí mismo una incitación directa al ejercicio de la violencia como resultado del discurso del odio —solo por citar supuestos de actos simbólicos que pueden servir de parámetro de enjuiciamiento en este caso— la STEDH caso *Fáber c. Hungría*, de 24 de julio de 2012, estimó que no podía ser calificado como una manifestación del discurso del odio el hecho de mostrar una bandera de polémicas connotaciones al paso de una manifestación antirracista. E, igualmente, la STEDH caso *Murat Vural c Turquía*, de 21 de octubre de 2014, tampoco consideró que fuera un ejercicio ilegítimo de la libertad de expresión la conducta de cubrir de pintura efigies o estatuas de personajes representativos del Estado. Esa misma conclusión ha sido defendida por la STEDH caso *Christian Democratic People´s Party c Moldavia* (núm. 2), de 2 de febrero de 2010, § 27, en relación con la destrucción mediante el fuego de retratos de representantes políticos institucionales y banderas. Esta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no hace sino entroncar con la visión más extendida de que este tipo de actos comunicativos son comportamientos socialmente conocidos que han sido considerados como manifestación de la libertad de expresión por otros Tribunales Constitucionales, señaladamente el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América [Sentencias dictadas en el caso *United States v. O'Brien*, 391 U.S. 367 (1968), en relación con cartilla militar; en el caso *Texas v. Johnson*, 491 U.S. 397 (1989), y en el caso *United States v. Eichman*, 496 U.S. 310 (1990), en relación con la bandera nacional].

Por tanto, no puedo compartir que la conducta que dio lugar a la condena penal de los recurrentes pueda ser considerada ni calificada como una genuina manifestación del discurso del odio. No reúne las notas esenciales de que (i) estuviera dirigida contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas, creencias o actitudes vitales en particular; ni de que, como se argumentará más extensamente a continuación, (ii) supusiera una incitación directa a la violencia.

4. La argumentación de la opinión mayoritaria en la que se sustenta la Sentencia, acerca de que la conducta de los recurrentes suponía una incitación a la violencia y expresaba una amenaza a las personas de los Reyes no resulta aceptable, ya que (i) se basa en una reconstrucción de

los hechos declarados probados en la vía judicial previa, vedada por el art. 44.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), mediante la cual se pretende, recurriendo a la escenificación y al lenguaje emotivo, dotar al acto enjuiciado de una significación que está muy alejada de una comprensión normal de este tipo de conductas; y (ii) utiliza argumentos justificativos totalmente descontextualizados y desconectados de una normal interpretación del acto desarrollado por los recurrentes, pues se basa en exacerbar determinados elementos de carácter meramente simbólico.

La exacta descripción del relato de hechos probados ha sido reproducida en el antecedente 2 b). Los elementos fácticos que fueron considerados relevantes por el órgano judicial —el cual, con la inmediación constitucionalmente exigible, tenía la competencia de enjuiciamiento— son: (i) desde el punto de vista del contexto, que la conducta de los recurrentes se produjo —entrecomillo palabras del propio relato de hechos probados de la sentencia de instancia— "con motivo de la visita institucional de S.M. el Rey a la ciudad de Gerona" y "en el curso de una concentración en la Plaza de Vino de esa capital. A dicha concentración le había precedido una manifestación encabezada por una pancarta que decía '300 años de Borbones, 300 años combatiendo la ocupación española'"; (ii) desde el punto de vista de la apariencia de los recurrentes, que "iban con el rostro tapado para no ser identificados"; (iii) desde el punto de vista de la dinámica del acto, que "quemaron previa colocación boca abajo... una fotografía de SS.MM. los Reyes de España" y que "tras colocar la citada fotografía de gran tamaño de SS.MM. los Reyes en la forma expuesta, en el centro de la plaza se procedió por Enric Stern a rociarla con un líquido inflamable y por Jaume Roura a prenderle fuego con una antorcha procediendo a su quema"; y (iv) desde el punto de vista de las consecuencias, que dicha conducta se desarrolló "mientras eran jaleados con diferentes gritos por las varias decenas de personas que se habían reunido en la citada plaza".

Frente a estos elementos del relato de hechos probados —a los que, insisto, por mandato del art. 44.1 b) LOTC está sujeto este Tribunal— la opinión de la mayoría opone que dos recurrentes desarrollaron esa conducta —vuelvo a citas entrecomilladas de la sentencia que se funda en dicha opinión— "tras haber situado en la plaza mayor de la ciudad de Gerona una estructura metálica en la que se sujeta una fotografía de las efigies de tamaño real de los Monarcas, puesta «boca abajo»" (FJ 4, párrafo

sexto). A partir de ello se hace también referencia a que "la escenificación de este acto simbólico traslada a quien visiona la grabación videográfica la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados" (FJ 4, párrafo séptimo).

Desde luego, ni la referencia a un supuesto traslado por los recurrentes de esa estructura metálica aparece en las resoluciones impugnadas ni, en lo que a mí se me alcanza, ha sido objeto de visionado por este Tribunal ningún tipo de grabación videográfica de los hechos ni ningún otro medio de prueba a partir del cual se puedan extraer consecuencias constitucionales de tal relevancia como son las relativas a la existencia de una incitación directa a la violencia, que, hay que recordarlo e insistir en ello, no fue apreciada ni mencionada en la vía judicial previa.

5.Esta reconstrucción de los hechos probados es la que sirve a la opinión de la mayoría para concluir la existencia de una incitación directa a la violencia contra el Rey, expresiva de una amenaza, tomando como fundamento los siguientes argumentos: (i) la escenificación del acto simbólico de la quema boca debajo de la fotografía; (ii) la premeditación y falta de espontaneidad de la conducta que se desarrolló con una preparación previa y con la cara oculta; y (iii) la inexistencia de ningún tipo de declaración o manifestación verbal posterior de la que se pudiese inferir que se trataba de una mera oposición política a la monarquía.

Con este razonamiento, la opinión mayoritaria exacerba determinados elementos simbólicos, muy repetidos en este tipo de manifestaciones de protesta, hasta elevarlos a la categoría de incitación personal al odio y calificarlos como expresión de una amenaza. Así, el hecho de que los recurrentes colocaran la fotografía boca abajo, una posición que la sentencia de apelación califica expresamente de "claudicante", y por tanto, aun sin decirlo expresamente, ofensiva o denigrante, no resulta concluyente. Esta circunstancia aparece directamente conectada con una expresión de la reivindicación política de los recurrentes en favor del derrumbamiento o de la caída del sistema monárquico vigente en España y, en consecuencia, es una manifestación de su opinión hostil a la institución monárquica que simboliza la fotografía de sus majestades los Reyes y está en la línea del activismo político que anima toda la conducta de los recurrentes, según afirma la sentencia de primera instancia, confirmada en apelación. Teniendo en cuenta esta opinión u opción ideológica de los recurrentes, abiertamente contraria a la Corona —opinión legítima en el

marco que garantiza la Constitución— no aparece circunstancia alguna en las Sentencias recurridas que permita apreciar que la colocación de la fotografía en posición invertida busque otra cosa que manifestar una posición de rechazo de la institución como órgano constitucional. Invertir una fotografía, como una bandera, es una reiterada forma de manifestar el disgusto que acompaña estos actos reivindicativos, ajeno a la pretensión de que en conexión con ello se desarrollen actos de violencia personal.

El hecho de que los demandantes de amparo actuaran encapuchados es, en el criterio de la opinión mayoritaria, otro elemento relevante que prueba, se dice, hasta qué punto los propios recurrentes eran conscientes del carácter ilícito de su acción y premeditaron su conducta. Esta conclusión carece, sin embargo, de significación concluyente. La aplicación de los tipos penales, con carácter general, no depende de la percepción subjetiva que tengan los protagonistas sobre el grado de ilicitud de su conducta. Por otra parte, como testimonian las resoluciones judiciales que cita la Sentencia de primera instancia, existen en la jurisprudencia ordinaria casos de condena penal por hechos similares que podían explicar la percepción de quienes así actuaban, por lo que atribuir valor decisivo a aquella circunstancia equivaldría a dar valor concluyente a esos precedentes judiciales, claudicando del enjuiciamiento constitucional que nos corresponde.

Del mismo modo, tampoco resulta definitivo el argumento de que junto con la quema de la foto no se pronunciara ninguna expresión o mensaje del que cupiera inferir la oposición política a la institución monárquica por parte de los recurrentes. No creo que sea necesario insistir en el activismo político de estos ni en que el acto se realizó —como se infiere de la Sentencia de primera instancia y admite expresamente la Sentencia de apelación— sin solución de continuidad con una manifestación antimonárquica e independentista, en que se identificaba a la dinastía borbónica con la ocupación española del territorio catalán, ni en la suficiencia comunicativa, al margen de cualquier tipo de expresión verbal, de este tipo de actos simbólicos.

Por último, no me parece adecuado ni suficientemente ponderado en el contexto de la proliferación internacional de actos muy semejantes al protagonizado por los recurrentes —y que son ampliamente difundidos por los medios de comunicación hasta hacer de ellos una imagen coti-

diana— que la opinión de la mayoría sustente que este acto simbólico traslada "la idea de que los Monarcas merecen ser ajusticiados" y que ello "provoca un mayor impacto en una sociedad democrática, como la española, que de forma expresa excluye en su Constitución la pena de muerte (art. 15 CE)" (fundamento jurídico 4, párrafo séptimo, de la Sentencia). Me resulta penoso que a la banalización del odio se le una ahora una banalización de la pena de muerte. Ninguna de ellas es necesaria ni contribuye a justificar una desestimación de este recurso de amparo. Extraer del hecho de la quema de unas fotografías la conclusión de que los recurrentes estaban pretendiendo la muerte de los Reyes es un paralogismo que desborda más allá de lo imaginable la comprensión que un espectador neutral puede formarse en el ámbito del discurso racional.

6. Frente a esta forma extrema de razonamiento, considero, de manera más ponderada, que, ciertamente, un acto de destrucción puede sugerir una acción violenta y, en consecuencia, susceptible en hipótesis de albergar mensajes que no merecen protección constitucional. Pero, como es obvio, no es jurídicamente indiferente manifestar la protesta o el sentimiento crítico utilizando medios o instrumentos inocuos para la seguridad y dignidad de las personas o hacerlo incitando a la violencia o atentando contra la dignidad de las personas que integran la institución simbolizada. No cabe controvertir que el tipo de conductas como las desarrolladas por los recurrentes tiene una carga negativa evidente; pero en el caso concreto no fue acompañada de una invitación a la violencia ni suscitó reacciones de esta naturaleza ni desembocó en perturbaciones del orden público, pues ninguna consecuencia de ese tipo fue reflejada o valorada por los órganos judiciales para justificar su condena, sino solo la existencia de manifestaciones ruidosas de adhesión por parte de personas concurrentes. La Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recurrida refiere que los dos demandantes de amparo, después de quemar la fotografía, "seguidamente [se] retiran e intenta[n] confundirse con el resto de los asistentes".

Es relevante también que la acción de los recurrentes se desenvolvió en el marco y con ocasión de una concentración ciudadana convocada en protesta por la visita de los Reyes a la ciudad de Girona encabezada por una pancarta con el lema "300 años de Borbones, 300 años de ocupación española" y, por tanto, en un contexto de activismo político. En ese marco, el derecho a la libertad de expresión alcanza una mayor amplitud y resulta especialmente resistente a las restricciones que en otras circuns-

tancias habrían de operar. El contexto de actuación de los recurrentes se relaciona, además, con cuestiones de relevancia general sobre la forma política del Estado y la vigencia de los órganos constitucionales como elementos definidores de nuestro sistema constitucional. Esta circunstancia también debe ser objeto de consideración al ponderar los intereses en juego, al igual que el hecho de que no aparece que la conducta enjuiciada implicase una crítica directa sobre aspectos personales o íntimos de los Reyes, sino que todos los datos recogidos en las sentencias de primera instancia y de apelación ponen de manifiesto que se trataba de una manifestación de hostilidad al órgano constitucional que encarnan. Estos elementos atestiguan y acentúan el carácter de crítica institucional y política de la conducta de los recurrentes ajena al núcleo de la dignidad de las personas y desde luego a su integridad física o seguridad personal. En este marco resultan ampliados los límites de la crítica constitucionalmente protegida, pues no es la misma la posición constitucional que ocupa el honor de las personas que la que ocupa la dignidad o el prestigio de las instituciones. Así, como se afirma en la STEDH caso *Morice c. Francia*, de 23 de abril de 2015, "en términos generales, si bien es legítimo que las instituciones del Estado, como garantes del orden público institucional, sean protegidas por las autoridades competentes, la posición dominante ocupada por esas instituciones requiere que las autoridades muestren una moderación en recurrir a procesos penales (véase SSTEDH caso *Castells v. España*, 23 de abril de 1992, § 46, serie A no. 236; caso *InCal v. Turkey* [GC], 9 de junio de 1998, § 54, informes 1998-IV; caso *Lehideux e Isorni c. Francia*, 23 de septiembre de 1998, § 57, informes 1998-VII; caso Öztürk *v. Turquía* [GC], 28 de septiembre de 1999, § 66, ECHR 1999-VI; y caso *Otegi Mondragón c. España*, Nº 2034/07, § 58, TEDH 2011)" (§ 127).

A esos efectos, tampoco cabe olvidar, como es reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no puede establecerse una protección privilegiada de los jefes de Estado frente al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión e información (así, SSTEDH caso *Colombani c Francia*, de 25 de junio de 2002; caso *Artun y Güvener c Turquía*, de 26 de junio de 2007; caso *Gutiérrez Suárez c España*, de 1 de junio de 2010; caso *Eon c Francia*, de 14 de marzo de 2013; caso *Couderc Et Hachette Filipacchi Associés c Francia*, de 12 de junio de 2014). Creo que, en este sentido, es paradigmática la siguiente cita de la STEDH caso *Couderc Et Hachette Filipacchi Associés c Francia*, de 12 de junio de 2014: "El Tribunal concluye igualmente que el interés de un Estado por

proteger la reputación de su propio Jefe de Estado o del de un Estado extranjero no puede justificar conferir a este último un privilegio o una protección especiales frente al derecho a informar y a expresar opiniones sobre ellos. Pensar otra cosa no se conciliaría con la práctica y la concepción política actual" (§ 58).

(…)

En conclusión, una valoración intelectiva de los hechos declarados probados en la vía judicial previa solo permite concluir que la finalidad predominantemente política del mensaje que se lanzaba con la conducta desarrollada por los recurrentes no comportó, a pesar de su hostilidad a la institución monárquica, la difusión de un discurso de incitación a la violencia contra la Corona o sus titulares ni expresó amenaza alguna contra ellos. Y, en esa medida, al tratarse de un mero acto de rechazo hacia la institución monárquica, constitucionalmente protegido, no puede legitimar por sí solo ninguna restricción del ejercicio de la libertad de expresión mediante la imposición de una sanción penal.

II. UNA CONDENA FRENTE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN INCOHERENTE CON EL INTERÉS PROTEGIDO POR EL TIPO PENAL

7. El discurso del odio, en los términos expuestos y ya criticados, ha sido el argumento utilizado por la opinión mayoritaria para justificar que la conducta de los recurrentes supuso un ejercicio del derecho a la libertad de expresión incurso en extralimitación y, por tanto, que resultaba legítima la restricción de este derecho.

Pues bien, al margen de mi discrepancia ampliamente desarrollada respecto de esa conclusión, todavía debo incidir en una segunda cuestión sobre la que disiento de la opinión mayoritaria. Estimo que en esta posición no se ha ponderado adecuadamente que lo enjuiciado en este proceso constitucional no era la conducta de los recurrentes, sino la reacción estatal frente a ella, lo que ha desfigurado, hasta hacerlo irreconocible, el juicio de constitucionalidad que hubiera sido preciso realizar. Por tanto, debo detenerme en unas breves reflexiones sobre lo que supone la reacción penal frente al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el alcance revisor de un tribunal de garantías ante este tipo de supuestos y las disfunciones que genera la resolución de este Tribunal.

8. La opinión mayoritaria, siguiendo una doctrina jurisprudencial que comparto plenamente, acepta que el análisis de constitucionalidad que

debe realizar este Tribunal bajo la invocación de derecho a la libertad de expresión no se circunscribe a examinar la razonabilidad de la motivación de la resolución judicial. Debe resolver, con plena autonomía, el eventual conflicto entre los derechos e intereses constitucionales afectados atendiendo al contenido que corresponde a cada uno de ellos, aunque para este propósito sea preciso utilizar criterios distintos a los aplicados por los órganos judiciales.

Esta autonomía —respetando los hechos declarados probados, tal como exige el art. 44.1 b) LOTC— está, sin embargo, limitada también por la propia naturaleza de la resolución judicial que da lugar al recurso de amparo. A esos efectos, no puede obviarse que el objeto de impugnación en este recurso es una condena penal por injurias al Rey y a sus familiares. En el Voto particular que formulé a la STC 65/2015, de 13 de abril, expuse con amplitud que en los supuestos en que el Estado reacciona recurriendo al derecho penal frente a conductas que considera un ejercicio de la libertad de expresión abusivo o incurso en extralimitación, el análisis constitucional no puede limitarse a una mera ponderación del eventual conflicto entre el contenido de este derecho fundamental y el de los valores o intereses constitucionales que legitiman su restricción. En tales casos, es necesario que se escrute la legitimidad constitucional de la reacción penal del Estado para la protección de esos valores o intereses que se pretenden salvaguardar con la restricción de la libertad de expresión.

En aquel supuesto, puse en relación la legitimidad constitucional de la reacción penal con la exigencia de efectuar un juicio de necesidad y de proporcionalidad en que se ponderara si el eventual exceso o abuso en el ejercicio de la libertad de expresión era de tal magnitud —y la lesión correlativa que generaba en ese otro valor o interés constitucional era de tal importancia— que resultaba justificado acudir a la imposición de penas privativas de libertad o multas penales. Ahora debo añadir que, dentro de esa labor de escrutinio de la legitimidad constitucional de la respuesta penal que compete a este Tribunal, debe incluirse también la exigencia de que exista una línea de coherencia entre el concreto límite que este Tribunal considera que justifica la restricción de la libertad de expresión y el precepto penal por el que se ha sido condenado. Considero que esta elemental exigencia no ha sido respetada en este caso.

Me explico. El art. 20.4 CE establece diversos límites constitucionales a los derechos a la libertad de expresión y de información. Unos tienen

que ver con intereses o derechos subjetivos —derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen— y otros con intereses colectivos —la protección a la juventud y a la infancia—. Cabe también fundamentar una legítima restricción del derecho a la libertad de expresión en otros intereses constitucionales, incluyendo el previsto en el art. 16.1 CE para la libertad ideológica —el mantenimiento del orden público protegido por la ley— y el que se aprecia en la opinión mayoritaria referido al "discurso del odio". La eventual lesión de esos derechos subjetivos o intereses constitucionales legitimadores de la restricción del derecho a la libertad de expresión puede dar lugar a una reacción punitiva con los límites y en la medida en que esté previsto en la legislación sancionadora de referencia. Ahora bien, por tratarse de una respuesta punitiva, no resulta indiferente cuál sea el concreto límite que se afirma que ha traspasado la conducta enjuiciada. Es evidente que no es lo mismo entender justificada una restricción de la libertad de expresión mediante la reacción penal por lesionarse un derecho de la personalidad de una concreta persona que por resultar vulnerado un interés colectivo. Tampoco lo es cuando esa lesión se refiere al derecho al honor o la dignidad personal o cuando se refiere a su seguridad personal. En cada uno de esos supuestos los tipos sancionadores son, lógicamente, diferentes y es obligado que exista una correspondencia o conexión de coherencia entre el interés constitucional cuya protección justifica la restricción de la libertad de expresión y el que está protegido en el concreto tipo penal en que se fundamenta la reacción punitiva del Estado. A cualquiera se le alcanza que este Tribunal no puede considerar constitucionalmente aceptable una condena penal basada en que se ha lesionado el honor de un sujeto o la dignidad de una institución, cuando viene a concluir que no es el honor de ese sujeto o la dignidad de esa institución el interés constitucional que legitima la injerencia en la libertad de expresión del sujeto activo, sino su integridad física por haber sido sujeto pasivo de una incitación a que se ejerzan actos violentos contra él.

9. Este principio de coherencia no ha sido respetado por la opinión mayoritaria y la consecuencia, a todas luces anómica y disfuncional, ha sido que se ha acabado justificando constitucionalmente una sanción penal basada en el art. 490.3 CP —por haberse lesionado un interés institucional como es el prestigio de la institución monárquica—, cuando, por el contrario, el fundamento que dicha opinión defiende como legitimador de la injerencia en el ámbito de la libertad de expresión es la incitación directa a la violencia y la expresión de una amenaza contra el Rey, lo que,

en su caso, tiene su ámbito específico de protección penal en el art. 490.2 CP que regula las amenazas contra el Rey y sus familiares.

Insisto en ello: como el objeto directo de nuestro enjuiciamiento criminal no era la conducta de los recurrentes, sino la reacción penal consistente en su condena por un delito de injurias del art. 490.3 CP, incluso aceptando que esa conducta fuera una manifestación del discurso del odio, solo se podría estar de acuerdo con la premisa de que el acto de los recurrentes supuso un ejercicio de la libertad de expresión incurso en

extralimitación, pero no con la conclusión de que está justificada la concreta reacción penal que era el objeto de nuestro análisis de constitucionalidad.

Por tanto, una posición como la defendida por la opinión mayoritaria y reflejada en la sentencia, que alteraba de manera sustancial el razonamiento en virtud del cual se justificaba la restricción de la libertad de expresión y la condena en vía judicial, hubiera debido llevar, en su caso, a la anulación de las resoluciones judiciales impugnadas.

III. UNA RESPUESTA SANCIONADORA DESPROPORCIONADA EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO DE UN DERECHO FUNDAMENTAL

10. El último de los aspectos respecto de los que discrepo de la posición de la mayoría consiste en que mantengo que, en el caso en que estuviera justificada una restricción de la libertad de expresión frente a este tipo de conducta, la respuesta estatal consistente en una reacción punitiva con una pena privativa de libertad (quince meses de prisión) sustituida por una sanción pecuniaria de 2.700 euros, no resulta proporcionada. En efecto, este Tribunal ha establecido una serie de reglas que deben ser tomadas en consideración por los órganos judiciales penales a la hora de enjuiciar este tipo de conductas para efectuar el adecuado juicio de ponderación. Entre ellas cabe destacar que:

(I) El eventual conflicto entre las libertades reconocidas en el art. 20 CE, de expresión e información, y otros derechos y bienes jurídicamente protegidos, no puede resolverse mediante la consideración de que sean absolutos los derechos y libertades contenidos en la Constitución, pero tampoco puede atribuirse ese carácter absoluto a las limitaciones a que han de someterse esos derechos y libertades. De ese modo, en la aplicación de los tipos penales que suponen un límite al ejercicio de las libertades de expresión

e información, no cabe estimar preponderante en todo caso uno de los derechos en cuestión, protegiendo siempre la buena fama afectada, o el derecho a informar o a expresarse libremente, sino que, tomando en consideración todas las circunstancias, deberá ponderarse si la conducta enjuiciada se ha llevado a cabo dentro del ámbito protegido constitucionalmente o, por el contrario, si se ha transgredido ese ámbito, pero valorando que mientras la conducta se atenga a los fines y objetivos constitucionalmente previstos no podrá considerarse que ha afectado ilegítimamente la buena fama o el honor de una persona, o el prestigio de una institución, de modo que quepa una sanción penal al respecto (STC 105/1990, de 6 de junio, FJ 3).

(II) La determinación de que una conducta se ha desarrollado dentro del ámbito protegido constitucionalmente por la libertad de expresión ha de realizarse teniendo presente el haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que otorga, de modo tal que no puede incluirse entre los supuestos sancionables aquellos que son un legítimo ejercicio de la libertad de expresión, ya que los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito (STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 3).

(III) Incluso en el caso en que se concluyera que la conducta no constituye el legítimo ejercicio del derecho fundamental y aun cuando esté prevista legítimamente como delito en un precepto penal, no puede reaccionarse sancionando penalmente esa conducta sin realizar un previo juicio de proporcionalidad (STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5). El enjuiciamiento que debe desarrollar el juzgador penal en relación con este tipo de delitos debe tener también muy presente el criterio de la proporcionalidad, que tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o constricciones, procedan estas de normas o de resoluciones singulares. Conforme a este principio, debe negarse legitimidad constitucional a las limitaciones o sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible de acuerdo con una ponderación razonada y proporcionada de los mismos y exigir que toda acción penalmente deslegitimadora del ejercicio de un

derecho fundamental, adoptada en protección de otro derecho fundamental que se enfrente a él, sea equilibradora de ambos derechos y proporcionada con el contenido y finalidad de cada uno de ellos (STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4). La dimensión objetiva de los derechos fundamentales y su carácter de elementos esenciales del ordenamiento jurídico permiten afirmar que no basta con la constatación de que la conducta enjuiciada sobrepasa las fronteras de la expresión constitucionalmente protegida, sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación no pueda producir por su severidad un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto disuasorio o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada (SSTC 2/2001, de 15 de enero, FJ 3; o 108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3). En última instancia, atendiendo al carácter especialmente aflictivo de una sanción penal, tampoco cabe concebir un sistema en que solo conviva el terreno de lo constitucionalmente protegido y el de lo punible penalmente (STC 104/2011, de 20 de junio, FJ 6).

(IV) El instrumento penal solo será constitucionalmente lícito cuando, tras realizar de una manera adecuada los juicios de ponderación y proporcionalidad anteriormente señalados, pueda concluirse que la conducta enjuiciada se desarrolló bajo la sola apariencia del ejercicio de un derecho fundamental, habida cuenta de que, por su contenido, por la finalidad a la que se orienta o por los medios empleados, suponía desnaturalizar el ejercicio del derecho y se situaba, objetivamente, al margen del contenido propio del mismo (STC 185/2003, de 27 de octubre, FJ 5).

El hecho de que la sanción privativa de libertad fuera sustituida por una multa penal de 2.700 euros no resulta significativo a los efectos del necesario juicio de necesidad y proporcionalidad, ya que, como ha reiterado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo relevante es que la utilización y el recurso a la máxima expresión del poder punitivo del Estado determina un efecto disuasorio en el ejercicio de estos derechos fundamentales (así, STEDH caso *Morice c Francia*, de 23 de abril de 2015, § 127).

11. No voy a volver a insistir en que la conducta de los demandantes se desarrolló en el contexto de las libertades ideológicas y de expresión y

en que con ella no se incidió de manera directa en ningún derecho constitucional subjetivo del titular de la jefatura del Estado o en el prestigio de la institución. En ese sentido, recurrir al derecho penal para sancionar el contenido comunicativo del acto simbólico desarrollado es una medida innecesaria y desproporcionada en una sociedad democrática. Entre las posibles limitaciones constitucionales que pueden imponerse al ejercicio de unos derechos tan vinculados al sistema democrático como son las libertades ideológica y de expresión no cabe colocar la mera y simple defensa de las instituciones, aunque sean básicas en la actual concepción constitucional del Estado, frente a las más aceradas críticas, máxime tomando en consideración, como ya se ha afirmado, que nuestra Constitución no se configura como una democracia militante (STC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 4).

De ese modo, la única y eventual limitación oponible al ejercicio de estos derechos por parte de los recurrentes no podría venir derivada del hecho de la idea u opinión que se manifestaba, sino solo de la forma en que se hizo. A ese respecto, como ya se ha expuesto, una de las limitaciones constitucionales a cualquier manifestación de las libertades ideológica y de expresión es la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Desde esa perspectiva, el relato de hechos probados recogido en las resoluciones impugnadas recoge determinados elementos que, con independencia del inocuo contenido del mensaje que se pretendía transmitir por los demandantes con su conducta, hipotéticamente podrían haber sido valorados como susceptibles de poner en riesgo la seguridad de bienes ajenos y personas, como son las circunstancia de que se portara líquido inflamable y una antorcha encendida y que se prendiera fuego en el marco de una alta concentración de personas a una foto que se dice de grandes dimensiones. Todas estas circunstancias sobre el modo en que se desarrolló el acto comunicativo hubieran quizá servido, hablando en términos hipotéticos, para su eventual subsunción en algún tipo sancionador penal o administrativo de gravedad y naturaleza muy distinta.

Ahora bien, como ya se ha expuesto, la función que debe desarrollar un tribunal de garantías constitucionales en este tipo de supuestos de reacción penal ante el ejercicio supuestamente incurso en extralimitación del derecho a la libertad de expresión no puede ser la búsqueda imaginativa de cualquier límite hipotéticamente concurrente que no haya sido el que concretamente justificaba la reacción penal y fue objeto

de contradicción en el proceso de instancia. Por tanto, al igual que antes ha sucedido con el discurso del odio, no merece la pena insistir en una opción o posibilidad ajena al proceso penal seguido, a los principios de contradicción y defensa a los que este está sujeto, y, por lo tanto, a nuestro enjuiciamiento.

12. En conclusión, al no constar la demostración de la concurrencia de circunstancias aptas para probar el exceso en la conducta expresiva de los recurrentes ni desde la perspectiva del honor o prestigio de la Corona o su titular —como ha sido sostenido en vía judicial— ni desde la perspectiva del "discurso del odio" —como sostiene la posición de la mayoría en que se funda la Sentencia— debe concluirse que la condena penal de los recurrentes por la conducta enjuiciada supuso una decisión judicial ilegítimamente restrictiva del ejercicio de las libertades ideológica y de expresión, por innecesaria y desproporcionada. Y, por tanto, lo procedente hubiera sido otorgar el amparo solicitado y la anulación de las resoluciones judiciales recurridas.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA

Sentencia 151/2014, de 25 de septiembre de 2014[6]

Recurso de inconstitucionalidad 825-2011. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con la Ley Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. (...)

Los Diputados recurrentes argumentan que la inconstitucionalidad de la Ley Foral impugnada se fundamenta en dos motivos. El primero se refiere a la falta de competencia de la Comunidad Foral de Navarra para regular por medio de una ley el procedimiento de declaración de objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, así como para crear un registro

6 BOE núm. 261 de 28 de octubre de 2014.

de profesionales sanitarios objetores de conciencia a dicha práctica. En segundo término, los recurrentes aducen que los preceptos anteriormente citados limitan de forma desproporcionada el ejercicio de la libertad ideológica y de la intimidad, al exigir, a quienes deciden ejercer el derecho a la objeción de conciencia, el cumplimiento de unas obligaciones que, a su juicio, exceden los términos de la normativa estatal.

Por su parte, el Letrado del Parlamento de Navarra, en la representación que legalmente ostenta y con los argumentos que han quedado expuestos con detalle en los antecedentes, solicita la desestimación del recurso, al entender que no concurre ninguna de las tachas de inconstitucionalidad alegadas.

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. Sentado cuanto antecede, estamos en condiciones de analizar el contenido de la Ley Foral 16/2010 para determinar si ha invadido el ámbito competencial reservado a la ley estatal, como aducen los recurrentes, o si, como indica la exposición de motivos de la Ley impugnada y argumenta el Letrado del Parlamento de Navarra, se limita a regular aspectos organizativos y procedimentales en el marco de las competencias autonómicas en materia de sanidad.

Asimismo examinaremos, en los casos en que proceda, el segundo de los motivos de inconstitucionalidad alegado por los recurrentes, quienes consideran que los requisitos exigidos por la Ley Foral para el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, recogidos en los arts. 1, 3, 4, 5 y 6 son contrarios al principio de proporcionalidad y al principio de favor libertatis, en relación con los derechos a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y a la intimidad (art. 18.1 CE), al entender que suponen un sacrificio excesivo e innecesario en el ejercicio del mismo. En todo caso, hemos de recordar que, si bien este Tribunal ha afirmado en múltiples ocasiones que el principio de proporcionalidad constituye un canon de constitucionalidad que tiene especial aplicación cuando se trata de proteger derechos fundamentales frente a limitaciones o constricciones, procedan estas de normas o de resoluciones singulares, el principio de favor libertatis opera no tanto como canon de constitucionalidad de la norma, sino como criterio hermenéutico a tener en cuenta en su aplicación.

Pues bien, la Ley Foral, recurrida en su totalidad, consta de seis artículos que vamos a agrupar según el orden lógico que impone su enjuiciamiento desde la perspectiva constitucional, sin atenernos a una correlación puramente numérica.

Así, los recurrentes impugnan los arts. 1 b) y 4 de la Ley 16/2010 en los que se fija, entre otros extremos, que la Ley tiene por objeto "crear y regular el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la interrupción voluntaria del embarazo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea" [art. 1 b)], concretando que en dicho registro se inscribirán "las declaraciones de objeción de conciencia a realizar la interrupción voluntaria del embarazo, así como las revocaciones de las mismas" [art. 4.3 a)], y que tiene como fin "facilitar la necesaria información a la Administración Sanitaria de Navarra para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de dicha prestación sanitaria" [art. 3.3 b)].

Para los Diputados recurrentes la Comunidad Foral carece de competencia para crear dicho registro, argumentando que nada al respecto establece la legislación básica del Estado, y añadiendo que su creación afecta al contenido esencial de un derecho fundamental y ha de regularse mediante ley orgánica. Asimismo, desde un punto de vista sustantivo, aducen que para gestionar adecuadamente la prestación relativa a la interrupción voluntaria del embarazo no resulta necesario saber el nombre de los médicos y sanitarios objetores, y que la existencia de un registro puede convertirse en un elemento de coacción que puede llegar a impedir, por el temor a represalias o discriminaciones, el libre ejercicio del derecho a la libertad ideológica y religiosa que reconoce el art. 16.1 CE. Para dar respuesta a estas alegaciones debemos comenzar recordando que no resulta inconstitucional que una ley autonómica disponga la creación de un registro, incluso aunque vinculara al ejercicio de un derecho fundamental, siempre y cuando las disposiciones dirigidas al establecimiento y regulación del mismo no sobrepasen las competencias autonómicas y no afecten al contenido esencial del derecho en cuestión. Por otro lado, si bien es cierto, como indican los demandantes, que el art. 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 no dispone expresamente la creación de registros de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, sí exige que la declaración del objetor se haga por antelación y por escrito. El cumplimiento de dichos requisitos ha de quedar acreditado, como es lógico, en algún tipo de documento que debido a los datos de carácter personal que contiene,

constituye per se un fichero a los efectos previstos en el art. 3 b) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), toda vez que se trata de un conjunto organizado de datos de carácter personal susceptibles de tratamiento.

Partiendo de lo expuesto, que dicho fichero adopte la forma y la naturaleza de un registro es una opción legislativa derivada de la obligación de que la declaración de objeción de conciencia se realice con antelación y por escrito, todo ello en el marco del art. 53 LORAFNA, que otorga a la Comunidad Foral de Navarra, en materia de sanidad, el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, así como la competencia para organizar y administrar todos los servicios sanitarios en su territorio, por lo que no puede afirmarse que la Ley Foral contradiga o vaya más allá de lo permitido por el art. 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 por la creación de un registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo que, lejos de constituir un límite al ejercicio del derecho, como aducen los recurrentes, establece, por un lado, una prueba de que el objetor ha realizado la declaración cumpliendo los requisitos legalmente previstos y, por otro, ayuda a garantizar, como se verá más adelante, la seguridad y confidencialidad de unos datos a los que necesariamente deben tener acceso los responsables pertinentes del servicio público de salud, a fin de que tengan conocimiento de las disponibilidad del personal sanitario y puedan organizar en la debida forma la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo con medios propios, si ello es posible, o mediante contratación de personal externo o concierto con entidades privadas, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2010.

Por otro lado, la creación de un registro no se contradice con la doctrina constitucional dictada hasta la fecha en materia de objeción de conciencia, concretamente en relación con el derecho a la objeción de conciencia como exención al servicio militar obligatorio, según la cual el ejercicio de este derecho no puede, por definición, permanecer en la esfera íntima del sujeto, pues trae causa en la exención del cumplimiento de un deber y, en consecuencia, el objetor "ha de prestar la necesaria colaboración si quiere que su derecho sea efectivo para facilitar la tarea de los poderes públicos en ese sentido (art. 9.2 CE), colaboración que ya comienza, en principio, por la renuncia del titular del derecho a mantenerlo —frente a la coacción externa— en la intimidad personal, en cuan-

do nadie está obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (art. 16.2 CE)" (STC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 4).

La creación de un registro autonómico de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo con la finalidad de que la Administración autonómica conozca, a efectos organizativos y para una adecuada gestión de dicha prestación sanitaria, quienes en ejercicio de su derecho a la objeción de conciencia rechazan realizar tal práctica, no está sometida a reserva de ley orgánica, no invade las bases estatales en materia de sanidad, no afecta a las condiciones básicas que han de garantizar la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, y su existencia no implica, per se, un límite al ejercicio del derecho a la objeción de conciencia recogido en el art. 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010, ni un sacrificio desproporcionado e injustificado de los derechos a la libertad ideológica e intimidad, sin que pueda afirmarse, como hacen los Diputados recurrentes, que con el mismo se persigue disponer de una lista de objetores con la finalidad de discriminarlos y represaliarlos, pues esta es una afirmación sin base jurídica alguna y en la que no se puede fundar una queja de inconstitucionalidad, por lo que debemos declarar que los arts. 1 y 4 de la Ley Foral 16/2010, no incurren en ningún vicio de inconstitucionalidad.

6. (...)

7. En relación con el art. 5 de la Ley Foral, los Diputados recurrentes alegan que prevé una legitimación muy amplia para acceder a la información contenida en el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, pues dicho precepto dispone que "podrán acceder al Registro, en el ámbito de sus competencias, las personas titulares de la Dirección del Centro, de las direcciones médicas y de las direcciones de enfermería de los hospitales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Asimismo, podrán acceder aquellas personas que autorice expresamente la persona titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en ejercicio legítimo de sus funciones y, por otra parte, el propio interesado o su representante en lo que se refiere en este caso, a sus propios datos".

Para los recurrentes el citado art. 5 autoriza el acceso al registro a personas inconcretas con el único requisito de que así lo "autorice expresamente la persona titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea", lo que implica, a su juicio, una indeterminación que lleva-

ría aparejada la vulneración del art. 18.1 CE. Por su parte, el Letrado del Parlamento de Navarra en su escrito de alegaciones defiende la constitucionalidad del precepto aduciendo que los recurrentes presumen la existencia de autorizaciones de acceso no justificadas por razones organizativas, lo que no deja de ser una mera hipótesis de futuro que no sirve para fundamentar jurídicamente una vulneración de los derechos invocados, teniendo en cuenta que el uso indebido de tal facultad acarrearía la correspondiente responsabilidad administrativa.

Entrando en el examen de la queja formulada, debemos recordar que el Tribunal Constitucional ha perfilado las singularidades del derecho a la protección de datos indicando expresamente que "su objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad" (SSTC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6; y 96/2012, de 7 de mayo, FJ 6), puesto que "el derecho fundamental a la protección de datos amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o tengan incidencia en el ejercicio de cualesquiera derechos de la persona, sean o no derechos constitucionales y sean o no relativos al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar o cualquier otro bien constitucionalmente amparado" (SSTC 292/2000, FJ 6; y 96/2012, FJ 6). Por tanto, si bien es cierto que el derecho a la objeción de conciencia no se ejerce en el estricto ámbito de la esfera íntima del sujeto pues implica la exención de un deber jurídico y, como ya hemos indicado, no es un derecho que se satisfaga con el mero dato de conciencia, no lo es menos que los datos recogidos en el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo que crea la Ley Foral 16/2010 están protegidos por el art. 18.4 CE que "consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona" (SSTC 11/1998, de 13 de enero, FJ 5, y 96/2012, FJ 6), y que otorga a su titular, entre otras facultades, "la de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo" (STC 292/2000, FJ 7, y 96/2012, FJ 7).

De acuerdo con lo expuesto, resulta razonable que la Ley Foral prevea que pueden acceder al registro las personas titulares de la dirección del centro, de las direcciones médicas y de las direcciones de enfermería de los hospitales del Servicio Navarro de Salud, pues es a ellas a quienes corresponde velar por la debida organización y gestión de la prestación sanitaria que debe resultar garantizada y que da sentido al registro, quedando dicho acceso perfectamente especificado y acotado en el art. 5 de la Ley impugnada. Sin embargo, no podemos afirmar lo mismo respecto

de la previsión según la cual también pueden acceder a los datos del registro aquellas personas "que autorice expresamente la persona titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en ejercicio legítimo de sus funciones", pues tal previsión faculta un nuevo acceso, posesión y uso de los datos personales que contiene el registro en unos términos tan abiertos e indeterminados que supone un límite injustificado en el contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE) de acuerdo con la doctrina anteriormente expuesta, y ello, con independencia de que las personas que accedan a los datos recogidos en el registro estén obligadas al secreto profesional previsto en el art. 10 LOPD, y de que el uso indebido de la facultad de acceso pueda acarrear la correspondiente responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal, razones que nos llevan a declarar la inconstitucionalidad del inciso del art. 5 de la Ley Foral de Navarra 16/2010 en el que se prevé que pueden acceder a los datos del registro aquellas personas "que autorice expresamente la persona titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en ejercicio legítimo de sus funciones".

Y ello, porque el derecho a la protección de los datos de carácter personal, que se deriva del art. 18.4 CE, garantiza a los individuos un poder de disposición sobre sus datos personales "que impone a los poderes públicos la prohibición de que se conviertan en fuentes de esa información sin las debidas garantías; y también el deber de prevenir los riesgos que puedan derivarse del acceso o divulgación indebidas de dicha información" (STC 292/2000, FJ 6), siendo elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos, "y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios (STC 292/2000, FJ 6).

Así, la inconstitucionalidad del párrafo señalado trae causa en que el interesado debe ser informado, tanto de la posibilidad de cesión de sus datos personales, como del concreto destino de estos, "pues solo así será eficaz su derecho a consentir, en cuanto facultad esencial de su derecho a controlar y disponer de sus datos personales. Para lo que no basta que conozca que tal cesión es posible según la disposición que ha creado o modificado el fichero, sino también las circunstancias de cada cesión concreta. Pues en otro caso sería fácil al responsable del fichero soslayar el consentimiento del interesado mediante la genérica información de que sus datos pueden ser cedidos" (STC 292/2000, FJ 13), quedando así frustrado el derecho del interesado a controlar y disponer de sus datos personales que deriva del art. 18.4 CE y que concreta el art. 11.1 LOPD cuando prevé que los datos de carácter personal objeto del tratamiento "sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado", consentimiento que no será preciso cuando la cesión esté autorizada por una ley [art. 11.2 a) LOPD].

8. (...)

9. Los razonamientos expuestos conducen a la estimación parcial del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por los Diputados recurrentes y, en consecuencia, a declarar inconstitucional y nulo, por las razones vertidas en el fundamento jurídico séptimo, el inciso del art. 5 de la Ley Foral de Navarra 16/2010 que señala que podrán acceder al registro "aquellas personas que autorice expresamente la persona titular de la Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en ejercicio legítimo de sus funciones", y a declarar que el resto de la Ley Foral de Navarra 16/2010 no es inconstitucional, toda vez que su contenido se ajusta al marco de las competencias asumidas por la Comunidad Foral de Navarra en materia de sanidad, respeta las bases establecidas en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del embarazo, y sus exigencias no limitan desproporcionadamente el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia, sino que son acordes con la conciliación que debe concurrir entre el ejercicio de este derecho y la obligación de la Administración pública autonómica de garantizar la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legalmente previstos.

VOTO PARTICULAR

Voto particular que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, respecto a la Sentencia del Pleno de fecha 25 de septiembre de 2014 dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 825-2011

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) y con el máximo respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, dejo constancia de mi opinión discrepante, puesta ya de manifiesto durante su deliberación, de la Sentencia que ha resuelto el recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo.

1. Estando de acuerdo con la inconstitucionalidad del inciso del art. 5 de la citada Ley que la Sentencia dictamina, por dar vía libre a un extralimitado acceso a los datos recogidos en el previsto registro, me veo obligado a discrepar de la desestimación relativa a la inconstitucionalidad suscitada por la existencia del mismo registro.

2. La objeción de conciencia ha sido repetidamente reconocida como derecho constitucional en la doctrina de este Tribunal.

Ya en la Sentencia 15/1982, de 23 de abril, FJ 6, se afirmó que "puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16, puede afirmarse que la objeción de conciencia [sin mayores restricciones a su alcance] es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español, sin que contra la argumentación expuesta tenga valor alguno el hecho de que el art. 30.2 emplee la expresión 'la Ley regulará', la cual no significa otra cosa que la necesidad de la interpositio legislatoris no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para 'regular' el derecho en términos que permitan su plena aplicabilidad y eficacia". En el fundamento jurídico 8 se añade que de ello "no se deriva, sin embargo, que el derecho del objetor esté por entero subordinado a la actuación del legislador. El que la objeción de conciencia sea un derecho que para su desarrollo y plena eficacia requiera la interpositio legislatoris no significa que sea exigible tan solo cuando el legislador lo haya desarrollado, de modo que su reconocimiento constitucional no tendría otra consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí mismo pretensiones individuales. Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, los principios constitucionales

y los derechos y libertades fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (arts. 9.1 y 53.1 de la Constitución) y son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos; el hecho mismo de que nuestra norma fundamental en su art. 53.2 prevea un sistema especial de tutela a través del recurso de amparo, que se extiende a la objeción de conciencia, no es sino una confirmación del principio de su aplicabilidad inmediata". Reafirma que este "principio general no tendrá más excepciones que aquellos casos en que así lo imponga la propia Constitución o en que la naturaleza misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable, supuestos que no se dan en el derecho a la objeción de conciencia". Aun sin regulación legal el derecho conserva un "mínimo contenido", que "ha de ser protegido, ya que de otro modo el amparo previsto en el art. 53.2 de la Constitución carecería de efectividad y se produciría la negación radical de un derecho que goza de la máxima protección constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. La dilación en el cumplimiento del deber que la Constitución impone al legislador no puede lesionar el derecho reconocido en ella".

En lo que respecta a la formulada en relación al aborto, no expresamente contemplada en el art. 30 CE, la Sentencia 53/1985, de 11 de abril, FJ 14, reiteró que el "derecho a la objeción de conciencia" citado "existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales".

La Sentencia 160/1987, de 27 de octubre, FJ 3, reitera lo ya expuesto por la citada 15/1982, en la que "se dice que la objeción de conciencia, dada la interpretación conjunta de los arts. 30.2 y 53.2, es un derecho constitucionalmente reconocido, al que el segundo de los artículos citados otorga la protección del recurso de amparo, lo que le equipara, a los solos efectos de dicho recurso en su tratamiento jurídico constitucional, con ese núcleo especialmente protegido que son los derechos fundamentales y libertades públicas, y es la Constitución, pues, la que reconoce el derecho de manera implícita y explícita, no significando otra cosa la expresión 'la Ley regulará' del art. 30.2 que la necesidad de la 'interpositio legislatoris', no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para 'regular' el derecho en términos que permitan su plena aplicabili-

dad y eficacia". El Fundamento siguiente, relativo a los ya reconocidos como objetores que se niegan a cumplir la "prestación social sustitutoria" exigida por la ponderación realizada por el propio texto constitucional (incurriendo así en realidad en desobediencia civil, más allá de toda objeción) rechaza tal actitud (aunque sin distinguir entre objeción, como derecho no ilimitado y necesitado de ponderación, y desobediencia civil al resultado de la ponderación ya realizada) argumentando que no cabe "liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o 'subconstitucionales' por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos. Es justamente su naturaleza excepcional —derecho a una exención de norma general, a un deber constitucional, como es de la defensa de España—, lo que le caracteriza como derecho constitucional autónomo, pero no fundamental, y lo que legitima al legislador para regularlo por Ley ordinaria 'con las debidas garantías', que, si por un lado son debidas al objetor, vienen asimismo determinadas por las exigencias defensivas de la Comunidad como bien constitucional".

3. Es doctrina de este Tribunal que los derechos constitucionales, entre los que —como queda dicho— se incluye la objeción de conciencia, no pueden ser objeto de otros límites que los estrictamente necesarios para la garantía de otras legítimas exigencias; así, entre otras, las Sentencias 159/1986, de 16 de diciembre, 20/1990, de 15 de febrero, 81/1998, de 2 de abril, y 141/2000, de 29 de mayo. A su vez, con cita de otras anteriores, la Sentencia 141/2000, de 29 de mayo, FJ 3, afirma que "como ya ha dicho este Tribunal, los límites a la libertad de creencias están sometidos a una interpretación estricta y restricta". Esto puede explicar que el propio Parlamento de Navarra planteara al Consejo de Navarra "si la exigencia a los profesionales sanitarios de la formulación anticipada de su actitud personal a que se refiere el dictamen de 25 de mayo de 2010 del Consejo de Navarra debe efectuarse mediante la fórmula del registro público". En su dictamen 54/2010, de 18 de octubre, el Consejo respondió que "resulta obvio que la falta de un registro público no impide el ejercicio del derecho, razón por la cual, la formulación anticipada de la objeción de conciencia no ha de efectuarse, necesariamente, mediante la fórmula del registro"; así lo reitera en la conclusión con que cierra su dictamen: "La formulación de la objeción de conciencia no ha de efectuarse, necesariamente, mediante la fórmula del registro". Igualmente el Colegio Oficial de Médicos de Navarra se opuso a su creación, por entender que bastaría con que en cada centro sanitario se contara con fichero que recogiera, en

los términos legalmente previstos, la posible condición de objetor de los profesionales vinculados al correspondiente servicio.

Aun en el caso de que ello estimara necesario, entraría en juego el principio de proporcionalidad, como señala la Ley Orgánica 15/1999, que establece que únicamente deben ser objeto de tratamiento los datos necesarios para poner de manifiesto la condición de objetor del profesional, sin que puedan ser tratados datos que aparezcan vinculados a la motivación religiosa o de otra índole que fundase su decisión. De ahí deriva que la Agencia de Protección de Datos, en su informe 0272/2010 en respuesta a la consulta que le fue planteada con ocasión de esta Ley, recordara que "el tratamiento debería limitarse a los datos identificativos del profesional, tales como su nombre, apellidos y número de colegiado, en su caso, así como el mero hecho de su condición de objetor" (todo ello suficientemente realizable con la existencia de ficheros en los centros sanitarios en cumplimiento de lo exigido por la Ley).

4. Es obligado pues dilucidar si la existencia de un innecesario registro general para toda una Comunidad constituye un límite para el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia. Debemos para ello recordar la doctrina de este Tribunal, que considera inconstitucional cualquier medida que genere un "efecto desalentador" o "disuasorio" del ejercicio de derechos constitucionales. Así lo ha afirmado en relación al ejercicio de la libertad de expresión; entre otras, en las Sentencias 110/2000, de 5 de mayo, 2/2001, de 15 de enero, y 174/2006, de 5 de junio. Igualmente en lo relativo al derecho de reunión —en las Sentencias 196/2002, de 28 de octubre, y 110/2006, de 3 de abril—; a la libertad sindical —en las Sentencias 70/200, de 13 de marzo, 265/2000, de 13 de noviembre, 88/2003, de 19 de mayo, 185/2003, de 27 de octubre, 241/2005, de 10 de octubre, 151/2006, de 22 de mayo, o 108/2008, de 22 de septiembre—; al derecho a la huelga —en la Sentencia 104/2011, de 20 de junio—; o a la intimidad personal —en la Sentencia 196/2006, de 3 de julio—. Son al respecto igualmente abundantes los fallos del Tribunal Europeo de Derecho Humanos; entre ellos el de 29 de febrero de 2000 en el caso Fuentes Bobo contra España.

Es obvio que la existencia de un registro de este innecesario alcance, no imprescindible para garantizar las prestaciones legalmente previstas, genera en los profesionales objetores un fundado temor a que de ello derive un riesgo de discriminación que afecte a su carrera profesional.

La figura del registro va habitualmente vinculada a la publicidad de los datos. Pese a la confidencialidad en este caso prevista, puede valer como anécdota que un medio de comunicación haya alabado la existencia del registro por entender que la objeción es una "opción que no debería escudarse en el anonimato". No se trataría pues tanto de garantizar una prestación sino de conocer quién objeta y por qué.

No cabe olvidar que este Tribunal no tiene como tarea asumir funciones preventivas; pero no es menos cierto que tampoco puede ignorar la realidad social, como se exige a la jurisdicción ordinaria; so pena de incurrir en posturas que han sido objeto de mayoritaria y fundada crítica, como las que ha merecido la difícilmente superable Sentencia 108/1986, de 29 de julio.

Por si fuera poco, respalda dichos temores la orden foral 116/2011, de 3 de octubre, por la que el Gobierno de la Comunidad —que ejerció la iniciativa legislativa— realiza en la práctica una interpretación auténtica al desarrollar la Ley. Mientras que el formulario previsto exigía a los objetores rellenarlo aportando sus datos personales, su función y los aspectos de la legislación respecto a los que objeta, la orden foral, al indicar los aspectos que incluirá el registro, añade a ellos un significativo apartado bajo la rúbrica "creencias". Es obvio que el objetor no las expresó en el aludido formulario, por lo que no cabe derivar existencia de consentimiento; será por otras vías no consentidas como lleguen al registro esas informaciones notoriamente inconstitucionales en este contexto, que generarían fácilmente el trato discriminatorio expresamente vedado por el art. 14 CE e implícito en el 16.2 CE.

Se vulnera así el art. 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que establece que "sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias". Igualmente el artículo 12.3 del reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que dispone que "corresponderá al responsable del tratamiento la prueba de la existencia del consentimiento del afectado".

Se ignora a la vez el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a su libre circulación que dispone como principio general que "los

Estados miembros prohibirán el tratamiento de datos personales que revelen el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de datos relativos a la salud o a la sexualidad".

5. (...)

6. En resumen, considero que la creación del registro de profesionales sanitarios en relación con la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra no supera el juicio de proporcionalidad constitucionalmente exigible sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. En efecto, la creación de un registro no es necesaria para garantizar a las usuarias del Sistema Navarro de Salud la prestación sanitaria de interrupción del embarazo, que parece ser la finalidad pretendida por el legislador navarro, según se infiere de la exposición de motivos de la Ley Foral. Ese objetivo puede ser cumplido con igual eficacia sin necesidad de crear un registro; así lo prueba el hecho mismo de que no haya sido creado en otras Comunidades Autónomas con un sistema sanitario más complejo, o la propia inoperancia del registro navarro. El resultado producido por una medida tal, pese a su temporal fracaso en Navarra, denuncia que implica un sacrificio injustificado del derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios del sistema público de salud navarro, dado el efecto desalentador del ejercicio del derecho, ante el explicable temor de los profesionales a sufrir represalias y perjuicios en sus legítimas expectativas profesionales.

Insistir, a la vista de todo ello, en que el registro es tan necesario como para limitar un derecho constitucional me parece sin sentido.

Sentencia 145/2015, de 25 de junio de 2015[7]

Recurso de amparo 412-2012. Promovido por don Joaquín Herrera Dávila en relación con las sanciones impuestas a la oficina de farmacia que regenta, por la Junta de Andalucía y confirmadas por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. Vulneración del derecho a la objeción de conciencia, vinculado al derecho a la libertad ideológica.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

---

7 BOE núm. 182 de 31 de julio de 2015.

1. El demandante de amparo considera que la sanción pecuniaria que le fue impuesta por la Administración sanitaria de la Junta de Andalucía, confirmada por la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 13 de Sevilla de 2 de noviembre de 2011, por no disponer del medicamento con el principio activo levonorgestrel 0,750 mg (coloquialmente conocido como "píldora del día después") en la oficina de farmacia de la que es titular, ha vulnerado su derecho a la objeción de conciencia, que forma parte del contenido del derecho a la libertad ideológica (art. 16.1 CE). Además, el demandante imputa a la Sentencia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por incurrir en incongruencia omisiva y motivación arbitraria e irrazonable.

Tanto el Letrado de la Junta de Andalucía como el Ministerio Fiscal se han opuesto al otorgamiento del amparo, interesando su inadmisión, o subsidiariamente su desestimación, por las razones que han quedado reflejadas en el relato de antecedentes.

Antes de entrar en el examen de las vulneraciones de derechos fundamentales aducidas por el demandante es preciso dilucidar algunas cuestiones previas, suscitadas por el Letrado de la Junta de Andalucía y por el Ministerio Fiscal, que afectan al carácter del presente recurso de amparo y a la eventual concurrencia de diversas causas de inadmisión del mismo.

2. (...)

3. (...)

4. Una vez descartados los óbices procesales aducidos, procede abordar el motivo principal de fondo. El demandante sostiene, invocando en apoyo de su planteamiento la doctrina estatuida en la STC 53/1985, de 11 abril, que las resoluciones impugnadas han vulnerado su derecho a la objeción de conciencia, como manifestación de la libertad ideológica reconocida en el art. 16.1 CE, al haber sido sancionado por actuar en el ejercicio de su profesión de farmacéutico siguiendo sus convicciones éticas sobre el derecho a la vida. Tales convicciones, afirma, son contrarias a la dispensación del medicamento con el principio activo levonorgestrel 0,750 mg, debido a sus posibles efectos abortivos si se administra a una mujer embarazada. El planteamiento del demandante, sintetizado en los términos expuestos, permite colegir que la exención del deber, que para sí reclama, de disponer y expedir el referido medicamento se anuda al efecto que atribuye al indicado principio activo, lo que colisiona frontalmente con sus convicciones sobre la protección del derecho a la vida.

Hasta el momento presente, este Tribunal no había tenido ocasión de resolver sobre la problemática constitucional que suscita el demandante; esto es, el juicio de ponderación entre el invocado derecho a la objeción de conciencia, como manifestación del derecho fundamental a la libertad ideológica reconocida en el art. 16.1 CE, y la obligación de disponer del mínimo de existencias del citado medicamento que le impone la normativa sectorial, para así poderlo dispensar a quienes lo soliciten. Desde ese prisma abordaremos la resolución del presente recurso.

Ciertamente, en el fundamento jurídico 14 de la Sentencia objeto de cita rechazamos que cupiera considerar inconstitucional una regulación del aborto que no incluyera de modo expreso la del derecho a la objeción de conciencia, pues a ese respecto afirmamos que tal derecho "existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 CE y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales". En relación con la doctrina expuesta debe destacarse la singularidad del pronunciamiento traído a colación, en tanto que el reconocimiento de la objeción de conciencia transcendió del ámbito que es consustancial al art. 30.2 CE (el servicio militar obligatorio), dadas las particulares circunstancias del supuesto analizado por este Tribunal; por un lado, la significativa intervención de los médicos en los casos de interrupción voluntaria del embarazo y, por otro, la relevancia constitucional que reconocimos a la protección del nasciturus.

Sentadas las anteriores consideraciones, cumple afirmar que para la resolución del presente recurso resulta prioritario dilucidar si la doctrina enunciada en el fundamento jurídico 14 de la STC 53/1985 es también aplicable al caso que nos ocupa. Para despejar esa cuestión es preciso esclarecer, previamente, si los motivos invocados para no disponer de la "píldora del día después" guardan el suficiente paralelismo con los que justificaron el reconocimiento de la objeción de conciencia en el supuesto analizado por la Sentencia citada, al objeto de precisar si la admisión de dicha objeción, entendida como derivación del derecho fundamental consagrado en el art. 16.1 CE, resulta también extensible a un supuesto como el actual, en el que el demandante opone, frente a la obligación legal de dispensar el principio activo levonorgestrel 0,750 mg, sus convicciones sobre el derecho a la vida.

Con relación a esta cuestión, este Tribunal no desconoce la falta de unanimidad científica respecto a los posibles efectos abortivos de la denominada "píldora del día después". Sin perjuicio de ello, y a los meros fines de este procedimiento, la presencia en ese debate de posiciones científicas que avalan tal planteamiento nos lleva a partir en nuestro enjuiciamiento de la existencia de una duda razonable sobre la producción de dichos efectos, presupuesto este que, a su vez, dota al conflicto de conciencia alegado por el recurrente de suficiente consistencia y relevancia constitucional. En consecuencia, sin desconocer las diferencias de índole cuantitativa y cualitativa existentes entre la participación de los médicos en la interrupción voluntaria del embarazo y la dispensación, por parte de un farmacéutico, del medicamento anteriormente mencionado, cabe concluir que, dentro de los parámetros indicados, la base conflictual que late en ambos supuestos se anuda a una misma finalidad, toda vez que en este caso se plantea asimismo una colisión con la concepción que profesa el demandante sobre el derecho a la vida. Además, la actuación de este último, en su condición de expendedor autorizado de la referida sustancia, resulta particularmente relevante desde la perspectiva enunciada. En suma, pues, hemos de colegir que los aspectos determinantes del singular reconocimiento de la objeción de conciencia que fijamos en la STC 53/1985, FJ 14, también concurren, en los términos indicados, cuando la referida objeción se proyecta sobre el deber de dispensación de la denominada "píldora del día después" por parte de los farmacéuticos, en base a las consideraciones expuestas.

5. Ahora bien, las conclusiones alcanzadas no nos dispensan de ponderar la incidencia del derecho invocado por el demandante en la legítima protección de otros derechos, bienes jurídicos o intereses dignos de tutela. Hemos de partir de la concreta intervención que el sistema público sanitario impone al profesional que ejerce su actividad en una oficina de farmacia, a saber la disposición para su ulterior dispensación a los consumidores de aquellas especialidades farmacéuticas que la Administración haya incluido dentro de una relación obligatoria. Al profesional farmacéutico le incumbe, pues, el deber normativo de facilitar la prestación de dicho servicio y, como señalan el Ministerio Fiscal y el Letrado de la Junta de Andalucía, en el presente caso dicho deber garantiza el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva, del que dimana el derecho a las prestaciones sanitarias y farmacéuticas establecidas por el ordenamiento jurídico vigente, que incluye el acceso a la prestación sanitaria

de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos legalmente previstos, así como a los medicamentos anticonceptivos autorizados en España.

Pues bien, sobre ese particular cumple decir que la imposición de la sanción a que fue acreedor el demandante no derivó de su negativa a dispensar el medicamento a un tercero que se lo hubiera solicitado, sino del incumplimiento del deber de contar con el mínimo de existencias establecido normativamente. En segundo término, hemos de añadir que en las actuaciones no figura dato alguno a través del cual se infiera el riesgo de que la dispensación "de la píldora del día después" se viera obstaculizada, pues amén de que la farmacia regentada por el demandante se ubica en el centro urbano de la ciudad de Sevilla, dato este del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas, ninguna otra circunstancia permite colegir que el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente fuera puesto en peligro.

Por último, no resulta ocioso recordar que el demandante estaba inscrito como objetor de conciencia, como así lo refleja certificación expedida por el secretario del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. Respecto del ámbito farmacéutico, hemos de señalar que la Comunidad Autónoma de Andalucía carece de una regulación específica de rango legal sobre el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales farmacéuticos, a diferencia de otras Comunidades Autónomas que sí reconocen en su legislación sobre ordenación farmacéutica el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos. Ahora bien, esa ausencia de reconocimiento legal no se extiende a la totalidad de las normas que disciplinan el ejercicio de la profesión farmacéutica en el ámbito territorial en el que ejerce su profesión el demandante. El derecho a la objeción de conciencia está expresamente reconocido como "derecho básico de los farmacéuticos colegiados en el ejercicio de su actividad profesional" en el art. 8.5 de los estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla (corporación profesional a la que pertenece el recurrente), aprobados definitivamente por Orden de 30 de diciembre de 2005, de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, a cuyo tenor "el colegiado al que se impidiese o perturbase el ejercicio de este derecho conforme a los postulados de la ética y deontología profesionales se le amparará por el Colegio ante las instancias correspondientes"; asimismo se reconoce en los arts. 28 y 33 del Código de ética farmacéutica y deon-

tología de la profesión farmacéutica, invocados también por el recurrente, que "la responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia respetando la libertad y el derecho a la vida y a la salud del paciente" (art. 28) y que "el farmacéutico podrá comunicar al Colegio de Farmacéuticos su condición de objetor de conciencia a los efectos que considere procedentes. El Colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria" (art. 33).

Este reconocimiento por los estatutos colegiales del derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos no carece de relevancia pues, según reza el apartado 1 del art. 22 de la Ley andaluza 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los colegios profesionales de Andalucía "aprobados los estatutos por el colegio profesional y previo informe del consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si estuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para su aprobación definitiva mediante orden de su titular, previa calificación de su legalidad"; y el apartado 2 del mismo art. 22 establece que "Si los estatutos no se ajustaran a la legalidad vigente, o presentaran defectos formales, se ordenará su devolución a la corporación profesional para la correspondiente subsanación, de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente". A la vista de lo expuesto, hemos de afirmar que el demandante actuó bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho, cuyo reconocimiento estatutario no fue objetado por la Administración.

En suma, a la vista de la ponderación efectuada sobre los derechos e intereses en conflicto y de las restantes consideraciones expuestas, hemos de proclamar que la sanción impuesta por carecer de las existencias mínimas de la conocida como "píldora del día después" vulnera el derecho demandante a la libertad ideológica garantizado por el art. 16.1 CE, en atención la concurrencia de especiales circunstancias reflejadas en el fundamento jurídico 4 de esta resolución.

6. El demandante también fue sancionado por no disponer (y, en consecuencia, no dispensar) de preservativos en la oficina de farmacia que regenta. Vistas las razones que nos han conducido a considerar que la falta de existencias, en el establecimiento citado, del principio activo levonorgestrel 0,750 mg queda amparada por el art. 16.1 CE, es patente que el incumplimiento de la obligación relativa a las existencias de preservativos queda extramuros de la protección que brinda el precepto constitucional

indicado. La renuencia del demandante a disponer de profilácticos en su oficina de farmacia no queda amparada por la dimensión constitucional de la objeción de conciencia que dimana de la libertad de creencias reconocida en el art. 16.1 CE. Ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional puede darse en este supuesto.

En consecuencia, el otorgamiento del amparo al demandante por vulneración de su derecho a la objeción de conciencia, vinculado al derecho a la libertad ideológica (art. 16.1 CE), debe comportar (art. 55.1 LOTC) el reconocimiento del derecho fundamental vulnerado, exclusivamente en lo que concierne a la falta de existencias mínimas del medicamento con el principio activo levonorgestrel 0,750 mg. Asimismo, procede declarar la nulidad de las resoluciones (administrativas y judicial) impugnadas, con retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la resolución por la Junta de Andalucía en el expediente sancionador incoado al demandante; ello a efectos de que la Junta resuelva, conforme a lo previsto en la legislación de farmacia que resulte aplicable, sobre la concreta sanción que corresponda imponer al demandante en lo que se refiere a la infracción grave que se le imputa por negarse a disponer de (y por ello a dispensar) preservativos en la oficina de farmacia de la que es cotitular.

VOTOS PARTICULARES

Voto particular que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado por el Pleno núm. 412-2012

En ejercicio de la facultad que me confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y con pleno respeto a la opinión de la mayoría del Pleno, expreso mi discrepancia con la fundamentación jurídica de la Sentencia y, en consecuencia, con el fallo.

Debo manifestar, como expresé en el debate en el Pleno, mi preocupación y consternación por la aprobación de este Sentencia cuya factura técnica se separa de la exigencia de motivación congruente conforme a las reglas básicas del método jurídico-constitucional. En lugar de afrontar la problemática a examen desde la perspectiva estrictamente jurídica propia de la jurisdicción constitucional, parece responder a un posicionamiento previo que no logra ocultar la sombra ideológica que le guía.

A continuación expongo las razones de mi profunda discrepancia.

1. La Sentencia parte de una discutible premisa: que la objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica del art. 16.1 CE, con un alcance tal que puede conducir a relativizar muy diversos mandatos constitucionales y deberes legales que garantizan el ejercicio de derechos fundamentales de otras personas. La premisa es, a mi juicio, errónea porque se sustenta como único argumento en la afirmación contenida en un obiter dictum de la STC 53/1985, de 11 de abril, FJ 14, referida a la constitucionalidad de la Ley que introdujo el sistema de plazos en la despenalización parcial en la interrupción del embarazo, en el que se afirmaba escuetamente que "[l]a objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales". Tal pronunciamiento se vierte tras señalar expresamente que la cuestión de la objeción de conciencia, al igual que otras cuestiones, era ajena al objeto de enjuiciamiento. Por ello, resulta poco consistente extraer de tal escueta y retórica referencia la conclusión de que el derecho a la objeción de conciencia forme parte del contenido del derecho fundamental reseñado, pues, como se desprende de Sentencias posteriores a las que me referiré más adelante, para ello es preciso un reconocimiento a nivel constitucional —como es el caso del art. 30.2 CE— o, en su caso, un reconocimiento legal que lo conecte a un derecho fundamental, lo que no ha tenido lugar. En efecto, la STC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 3 (que en la Sentencia se ignora, al igual que cualesquiera otras que puedan contradecir la postura que defiende), señaló que la objeción de conciencia es "un derecho constitucional reconocido por la Norma suprema en su art. 30.2, protegido, sí, por el recurso de amparo (art. 53.2), pero cuya relación con el art. 16 (libertad ideológica) no autoriza ni permite calificarlo de fundamental. A ello obsta la consideración de que su núcleo o contenido esencial —aquí su finalidad concreta— consiste en constituir un derecho a ser declarado exento del deber general de prestar el servicio militar (no simplemente a no prestarlo), sustituyéndolo, en su caso, por una prestación social sustitutoria. Constituye, en ese sentido, una excepción al cumplimiento de un deber general, solamente permitida por el art. 30.2, en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el derecho, ni siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia (art. 16 CE) que, por sí mismo, no sería suficiente para liberar

a los ciudadanos de deberes constitucionales o "subconstitucionales" por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos. Es justamente su naturaleza excepcional... lo que le caracteriza como derecho constitucional autónomo, pero no fundamental, y lo que legitima al legislador para regularlo por Ley ordinaria "con las debidas garantías", que, si por un lado son debidas al objetor, vienen asimismo determinadas por las exigencias defensivas de la Comunidad como bien constitucional". En suma, nuestra doctrina constitucional desmiente la premisa de la que parte la Sentencia, pues el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho autónomo no fundamental y de naturaleza excepcional, reconocido en el art. 30.2 CE y no en el art. 16 CE. Mientras que el derecho a la libertad ideológica o de conciencia (art. 16 CE) no es por sí "suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o 'subconstitucionales' por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos".

2. Por otra parte, al final del fundamento jurídico 4 la Sentencia desliza sibilinamente una comparación entre el supuesto objeto del presente recurso de amparo y el abordado por la STC 53/1985, al anudar al conflicto que late en ambos casos la "misma finalidad", de manera que concurrirían —siempre a su juicio— los aspectos determinantes del pretendido reconocimiento de la objeción de conciencia fijados en la STC 53/1985. Ciertamente la Sentencia se cuida mucho de atribuir abiertamente efectos abortivos a la "píldora del día después", pero pretende equiparar ambas situaciones amparándose en el subterfugio de la "falta de unanimidad científica" y de la "duda razonable". Así, afirma que "este Tribunal no desconoce la falta de unanimidad científica respecto a los posibles efectos abortivos" y que "la presencia en ese debate de posiciones científicas que avalan tal planteamiento nos lleva a partir en nuestro enjuiciamiento de la existencia de una duda razonable sobre la producción de dichos efectos, presupuesto este que, a su vez, dota al conflicto de conciencia alegado por el recurrente de suficiente consistencia y relevancia constitucional".

Esa pretendida "falta de unanimidad" constituye una apreciación científica enteramente libre y subjetiva de la Sentencia, no basada en prueba pericial alguna, y que resulta desmentida por la consideración de "medicamento anticonceptivo de emergencia" que la Agencia Española del Medicamento le ha asignado. La "píldora del día después" tiene la finalidad de evitar un posible embarazo mediante su administración in-

mediata tras la práctica de relaciones sexuales, pero no terminar con un embarazo ya comenzado. Y, una vez más, la Sentencia de la que discrepo ni siquiera tiene en cuenta a este respecto nuestra STC 116/1999, de 17 de junio, en cuyo fundamento jurídico 9 se trata la cuestión relativa a los preembriones no viables (que no pueden siquiera ser considerados nasciturі), como sería el caso, en la hipótesis más generosa, después de la administración de la "píldora del día después".

Más tarde, en el fundamento jurídico 6, la Sentencia dará, sorprendentemente, un giro de ciento ochenta grados y señalará, sin que se explicite el porqué de tal brusco cambio de criterio, que "es patente que el incumplimiento de la obligación relativa a las existencias de preservativos queda extramuros de la protección que brinda el precepto constitucional indicado", ya que no queda amparada por la dimensión constitucional de la objeción de conciencia que dimana de la libertad de creencia reconocida en el art, 16.1 CE, para concluir que "[n]ingún conflicto de relevancia constitucional puede darse en este supuesto". Siendo igualmente métodos anticonceptivos, no se entiende por qué la negativa a dispensar la píldora entra en "colisión con la concepción que profesa el demandante sobre el derecho a la vida" y no, en cambio, la negativa a dispensar preservativos.

3. Debe subrayarse que la objeción de conciencia tampoco ha sido reconocida, con el alcance que pretende la Sentencia, en el ámbito internacional. De nuevo es significativa la absoluta ausencia, en la Sentencia de la que discrepo, de referencias al nivel de protección que en esta materia pudiera provenir del Derecho internacional de los derechos humanos y, en su caso, del Derecho de la Unión Europea (DTC 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 6), toda vez que el art. 10.2 CE nos obliga a acudir a tales auxilios interpretativos.

Así, el art. 10.2 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia, añade, sin embargo, una muy significativa precisión, pues ese derecho se reconoce "de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio". Si se examinan las explicaciones elaboradas para guiar la interpretación de la Carta y que resultan hermenéuticamente relevantes de acuerdo con el art. 52.7 de la Carta, se comprueba que el de objeción de conciencia es el único derecho de la Carta respecto al cual las explicaciones no aluden a una fuente adicional de reconocimiento, como, por ejemplo, el Conve-

nio Europeo (a continuación aludiré a las razones de fondo de ese significativo silencio). Lo que evidencia el reenvío a "las leyes nacionales" que contiene el art. 10.2 de la Carta es, en primer lugar, la inexistencia de una "tradición constitucional común" a la que las instituciones de la Unión pudieran acudir sin más y, en segundo lugar, la necesidad de que haya un reconocimiento del correspondiente legislador nacional acerca de la posibilidad de objetar por razones de conciencia en los distintos ámbitos de la actividad que afecten a los derechos de los ciudadanos. En otras palabras, fuera de la Constitución y de la Ley, ningún ciudadano puede elevar su conciencia a norma suprema y objetar cuándo y cómo le dé la gana.

Por lo que se refiere al sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos, resulta llamativo —de nuevo— que la Sentencia omita la consideración de la muy relevante decisión de 2 de octubre de 2001 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Pichon y Sajous c. Francia, que inadmite a trámite el recurso interpuesto sobre la base del art. 9 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (CEDH), libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, por dos farmacéuticos franceses sancionados por negarse a dispensar en sus oficinas de farmacia píldoras anticonceptivas, y eso que la mencionada decisión había sido invocada tanto por el Ministerio Fiscal como por el Letrado de la Junta de Andalucía. En dicha decisión, el Tribunal Europeo recuerda que el art. 9 CEDH no garantiza en todo caso el derecho a comportarse en el ámbito público de la manera que dicten las convicciones personales, y con relación al caso concreto estima que, en cuanto que la venta de las píldoras anticonceptivas es legal y se realiza única y obligatoriamente en las oficinas de farmacia, los recurrente no pueden hacer prevaler e imponer a un tercero sus convicciones religiosas para justificar la denegación de la venta de este producto: en consecuencia, concluyó que la sanción de los recurrentes por negarse a su venta no interfirió en el ejercicio de los derechos garantizados por el art. 9 del Convenio.

Ciertamente, el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales es un instrumento vivo y debe interpretarse a la luz de las condiciones actuales. Así, el Tribunal Europeo, en formación de Gran Sala, revisando la doctrina previa de los órganos de supervisión del Convenio, ha incluido recientemente la objeción de conciencia al servicio militar en el ámbito del derecho contemplado por el art. 9 CEDH, al considerar que la oposición al servicio militar moti-

vada por un serio e insuperable conflicto entre la obligación de servir en el ejército y la conciencia de una persona o sus convicciones profundas y genuinas religiosas o de otro tipo, constituye una convicción o una creencia de suficiente solidez, seriedad e importancia como para atraer las garantías del art. 9 CEDH (STEDH de 7 de julio de 2011, Bayatyan c. Armenia, § 110). Ese ámbito de protección se aloja en nuestra Constitución, según quedó dicho, en el art. 30.2 y no el art. 16. Del citado pronunciamiento del Tribunal Europeo, por tanto, no puede deducirse que, fuera del supuesto específico del servicio militar, el art. 9 CEDH garantice un pretendido derecho de objeción de conciencia de contenidos difusos y de ejercicio incondicionado frente a cualesquiera deberes legales. En definitiva, no hay necesidad alguna de modificar nuestra interpretación del ámbito de protección contemplado por el art. 16 CE.

4. La Sentencia asume una segunda premisa que, a mi juicio, resulta también errónea: que la libertad consagrada en el art. 16.1 CE permite objetar por motivos de conciencia sin necesidad de una previa regulación por parte del legislador del ejercicio de ese pretendido derecho a la objeción de conciencia. Tal entendimiento conduciría directamente a santificar cualquier tipo de objeción de conciencia, como si la conciencia de cada uno pudiera imperar legítimamente frente a la colectividad y frente al Estado Constitucional de Derecho, del que la Ley es precisamente su expresión más acendrada. La referida construcción prescinde totalmente de cualquier referencia a las consideraciones de la doctrina de este Tribunal de las últimas décadas, doctrina que ha negado de manera expresa la posibilidad de oponer libremente la objeción de conciencia en diversos pronunciamientos y ha sujetado su reconocimiento a la interpositio legislatoris.

Así, en cuanto al primer aspecto, en la STC 321/1994, de 28 de noviembre, FJ 4, se dijo que "el derecho a la libertad ideológica reconocido en el art. 16 CE no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos, con el riesgo aparejado de relativizar los mandatos legales", y que no se puede justificar la negativa al cumplimiento de alguno de esos mandatos (en aquel caso se trataba de la prestación social sustitutoria) "ni apelando a la libertad ideológica, ni mediante el ejercicio de la objeción de conciencia, derecho que la Constitución refiere única y exclusivamente al servicio militar". En esta misma línea, la STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 5, señaló, en cuanto a los objetores de conciencia al servicio militar, que

tienen reconocido el derecho a que se les exima del deber de prestar ese servicio, pero precisó que "la Constitución no les reconoce ningún derecho a negarse a realizar la prestación social sustitutoria como medio para imponer sus particulares opciones políticas acerca de la organización de las Fuerzas Armadas o de su radical supresión", para concluir que "salvo que se pretenda diluir la eficacia de las normas y menoscabar el orden jurídico y social que conforman legítimamente, no puede negarse la punibilidad de un comportamiento por el mero hecho de su coherencia con las convicciones de su autor".

Más rotunda aún es la STC 161/1987, de 27 de octubre, al afirmar en su fundamento jurídico 3 que, a pesar de la relación de la objeción de conciencia con la libertad ideológica reconocida en el art. 16 CE, "de ello no puede deducirse que nos encontremos ante una pura y simple aplicación de dicha libertad. La objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las propias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro Derecho o en Derecho alguno, pues significaría la negación misma de la idea del Estado".

Y en cuanto al otro aspecto, esto es, la necesidad de reconocimiento y regulación del derecho por la Ley, la STC 15/1982, de 23 de abril, FJ 7, ya precisó en su día que "el criterio de la conformidad a los dictados de la conciencia es extremadamente genérico y no sirve para delimitar de modo satisfactorio el contenido del derecho en cuestión y resolver los potenciales conflictos originados por la existencia de otros bienes igualmente constitucionales. Por todo ello, la objeción de conciencia exige para su realización la delimitación de su contenido y la existencia de un procedimiento regulado por el legislador... "con las debidas garantías", ya que sólo si existe tal regulación puede producirse la declaración en la que el derecho a la objeción de conciencia encuentra su plenitud". Y es que la comunidad no puede quedar satisfecha con la simple alegación de una convicción personal, que, por excepcional, ha de ser contrastada para la satisfacción del interés común (STC 160/1987, FJ 4).

5. Tampoco resulta admisible el banal ejercicio de ponderación de los intereses en presencia que dice realizar la Sentencia.

La Sentencia señala correctamente en su fundamento jurídico 5 que la sanción administrativa no se impuso a un farmacéutico determinado

por su negativa a dispensar el medicamento a un tercero, sino a los dos cotitulares de la oficina de farmacia por el incumplimiento del deber de contar con el mínimo de existencias establecido normativamente. Pero no extrae la consecuencia obligada: la ausencia de la pretendida "base conflictual" entre la obligación legal de disponer las existencias mínimas de medicamentos, por un lado, y el derecho a la objeción de conciencia del farmacéutico que ha recurrido en amparo, por otro lado. En efecto, no se concibe —y no explica la Sentencia— cómo la obligación de la oficina de farmacia de disponer existencias mínimas de un medicamento puede entrar en "colisión con la concepción que profesa el demandante sobre el derecho a la vida". Ello debía haber conducido inmediatamente a la desestimación del recurso de amparo.

Sin embargo, la Sentencia de la que discrepo analiza el conflicto desde la hipótesis de un eventual acceso a la dispensación (supuesto que no se ha planteado en ningún momento en el caso concreto) y, desde esa perspectiva, reduce todo su ejercicio de ponderación a señalar que "en las actuaciones no figura dato alguno a través del cual se infiera el riesgo de que la dispensación "de la píldora del día después" se viera obstaculizada, pues amén de que la farmacia regentada por el demandante se ubica en el centro urbano de la ciudad de Sevilla, dato éste del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas, ninguna otra circunstancia permite colegir que el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos y contraceptivos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente fuera puesto en peligro".

Argumentos que resultan irrelevantes para lograr que prevalezca el pretendido derecho a la objeción de conciencia del recurrente sobre el deber legal del profesional farmacéutico de disponer las existencias mínimas de medicamentos establecidas por las Administraciones competentes. En primer lugar, el hecho de no contar con existencias del medicamento por razones de conciencia supone ya en sí mismo una negativa incondicional y absoluta a dispensarlo a cualquier persona que pudiera solicitarlo, en cualquier circunstancia; además, supone la creación de un impedimento para que el otro cotitular de la oficina de farmacia y sus empleados puedan dispensar tales medicamentos. Con tal actitud se impide de raíz cualquier forma de conciliación con los intereses constitucionalmente protegidos de terceros. Y, en segundo lugar, el argumento de la pretendida disponibilidad de otras farmacias en la misma zona no puede suspender la vigencia territorial de los derechos fundamentales a la vida,

a la integridad física y psíquica y a la salud de la mujer que solicite el medicamento (arts. 15 y 43 CE). La Sentencia realiza tales afirmaciones sin ofrecer dato objetivo alguno acerca de cuáles y cuántas farmacias se encuentran en la proximidad del establecimiento del actor, y a qué distancia, conformándose con la presunción de que, al encontrarse la farmacia en pleno centro urbano de Sevilla, es lógico que existan muchas otras en las proximidades.

Al realizar la ponderación, la Sentencia de la que disiento minimiza la debida consideración acerca de los derechos a la vida y a la integridad física y moral y a la salud de las personas que puedan requerir la utilización del medicamento en cuestión, acerca de la naturaleza jurídica de las oficinas de farmacia en nuestro ordenamiento y acerca de la regulación legal sobre la dispensación de medicamentos establecida como exigencia para la debida atención a las necesidades de la comunidad; cuestiones todas ellas que han sido profusamente glosadas y analizadas por este Tribunal. De esta forma se ignoran los intereses generales y privados afectados por la negativa a disponer del medicamento.

Este Tribunal ha recordado recientemente que "la oficina de farmacia es un agente imprescindible en la realización de la asistencia farmacéutica que sirve a la garantía de la protección de la salud pública (arts. 43.2 y 51.1, ambos de la Constitución), considerándose como un establecimiento sanitario privado de interés público que participa de la planificación sanitaria (arts. 103.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y 84.6 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios)" (STC 83/2014, de 29 de mayo, FJ 3). Todo ello implica, como se detalla en la misma Sentencia y fundamento jurídico, un amplísimo abanico de obligaciones y limitaciones de las oficinas de farmacia y de sus titulares en el ejercicio de su actividad. Así pues, no podemos olvidar que la obligación de dispensar medicamentos en las oficinas de farmacia responde a las previsiones del art. 43 CE, que reconoce el derecho a la protección de la salud, correspondiendo a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, siendo la ley la que establezca los derechos y deberes de todos al respecto.

En el ámbito de la prestación farmacéutica, la mencionada previsión constitucional se ha plasmado, entre otras normas, en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y produc-

tos sanitarios, que regula, entre otros aspectos, la actuación de las personas físicas o jurídicas en cuanto intervienen en la circulación industrial o comercial y en la prescripción o dispensación de los medicamentos y productos sanitarios (art. 1.2). Dicha Ley establece expresamente la obligación de los farmacéuticos, entre otros profesionales, de dispensar los medicamentos y productos sanitarios que se les soliciten en las condiciones legal y reglamentariamente establecidas, con respeto del principio de continuidad en la prestación del servicio a la comunidad (art. 2.1 y 2). Más específicamente, el art. 84 prevé que las Administraciones sanitarias realizarán la ordenación de las oficinas de farmacia, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las exigencias mínimas materiales, técnicas y de medios que establezca el Gobierno con carácter básico para asegurar la prestación de una correcta asistencia sanitaria, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia [apartado 2 c)], mientras que su apartado 3 establece terminantemente que "[l]as oficinas de farmacia vienen obligadas a dispensar los medicamentos que se les demanden tanto por los particulares como por el Sistema Nacional de Salud en las condiciones reglamentarias establecidas", sin contemplar excepciones a estas obligaciones por objeción de conciencia.

En cuanto a este deber básico, anteriormente establecido en idénticos términos en el art. 88.1 d) de la Ley 25/1990, afirmó este Tribunal en la STC 137/2013, de 6 de junio, FJ 5, que la normativa de desarrollo del mismo "deviene así imprescindible para colmar la garantía de la asistencia farmacéutica que deriva del derecho de todos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio nacional y, en última instancia, del derecho a la protección de la salud que, como principio rector, reconoce el art. 43.1 CE, que obliga a los poderes públicos 'no sólo al despliegue de la correspondiente acción administrativa prestacional, sino además a desarrollar la acción normativa que resulte necesaria para asegurar el cumplimiento de esos mandatos constitucionales' (STC 113/1989, de 22 de junio, FJ 3). En este sentido, es necesario resaltar que el art. 43.2 CE llama a los poderes públicos a organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, debiendo ser la ley la que establezca los derechos y deberes de todos al respecto. Incumbe por tanto a los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptar las medidas necesarias para que no se produzca un déficit normativo que deje reducido el deber de dispensación del art. 88.1 d) de la Ley 25/1990 a una proclamación legal

vacía de contenido efectivo". Por esta razón, en dicha Sentencia se declaró inconstitucional la previsión de una norma foral que dejaba el deber legal de dispensación al arbitrio de la libre y voluntaria decisión de los propietarios-titulares de las oficinas de farmacia, en abierta contradicción con lo previsto en el citado art. 88.1 d) de la Ley 25/1990.

En suma, la conclusión que se puede alcanzar es que el legislador, a la luz de las exigencias del art. 43.2 CE, no ha previsto que la obligación de dispensar medicamentos que recae sobre los titulares de las oficinas de farmacia pueda verse exceptuada en ningún supuesto, ni siquiera por cuestiones ideológicas, en la medida en que ello supondría una quiebra en la continuidad del servicio que afecta negativamente al conjunto de la comunidad, con independencia de la situación y del número de farmacias que haya en la localidad de que se trate. De manera que una oposición a las exigencias de la Ley, aunque sea por motivos ideológicos, que lleve a incumplir la obligación de dispensación, no es admisible y merece ser sancionada, como de hecho lo fue en el caso del que trae causa el presente recurso de amparo.

6. El argumento de mayor intensidad que la Sentencia aduce para justificar la objeción de conciencia del actor reside en su inscripción como objetor de conciencia en su colegio profesional y en las previsiones que al respecto se contienen en los estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y en el código de ética farmacéutica y deontología de la profesión farmacéutica, que se elevan poco menos que al rango de normas constitucionales, pues se afirma que el dato de la inscripción como objetor "no resulta ocioso" y el reconocimiento por los estatutos colegiales del derecho a la objeción de conciencia "no carece de relevancia", habida cuenta de su posterior aprobación por la Administración. Todo lo cual es utilizado por la Sentencia para extraer inmediatamente la conclusión, en una especie de salto acrobático carente de toda lógica argumentativa, de que la sanción impuesta vulnera el derecho del demandante a la libertad ideológica garantizado por el art. 16.1 CE.

Resulta penoso, por elemental, tener que recordar que unos estatutos colegiales no pueden crear ex novo derechos fundamentales ni regular su ejercicio al margen de la Ley. Las previsiones de los estatutos colegiales se deben desarrollar en los términos que establezcan la Constitución, las leyes que se dicten en la materia y el resto del ordenamiento jurídico, y lo cierto es que ni la Constitución reconoce ese derecho —como ya se ha

dejado razonado— ni existe Ley estatal o Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía que reconozca el pretendido derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos o que regule de algún modo su ejercicio ante la colisión con el cumplimiento de deberes jurídicamente exigibles. El Decreto andaluz 104/2001, de 30 de abril, es la única normativa a la que podemos acudir en tanto que regula la obligación de las existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de distribución en Andalucía, existencias entre las que se encuentra la "píldora del día después". Decreto que no contempla excepción alguna por razones de conciencia a la referida obligación.

El hecho mismo de que la Sentencia tenga que apoyarse especialmente en las mencionadas previsiones de los Estatutos colegiales, a las que otorga "especial relevancia", o que aluda a que el demandante actuó "bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho, cuyo reconocimiento estatutario no fue objetado por la Administración", evidencia la carencia de fundamento constitucional de la argumentación que desarrolla. Pone de relieve, en suma, que no existe un asidero válido e inequívoco en el art. 16.1 CE o en Ley alguna aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía que permita justificar la conducta del actor y descalificar la sanción administrativa que le fue impuesta como consecuencia de la misma.

7. En efecto, no está de más recordar que la norma cuyo incumplimiento se achaca al actor se aprueba en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma y de acuerdo con las previsiones de la legislación básica estatal. En efecto, el art. 55.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía le otorga a esa Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación farmacéutica, en el marco del art. 149.1.16 CE. En ejercicio de esa competencia se dictó la Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de farmacia de Andalucía, dentro de cuya regulación destaca, en primer lugar, el art. 14.5, que reitera la norma básica estatal, en el sentido de que "las oficinas de farmacia están obligadas a la dispensación de los medicamentos siempre que les sean solicitados en las condiciones legales y reglamentariamente establecidas". Y en cuanto a los derechos y deberes de los farmacéuticos, dispone la Ley que sólo pueden negarse a dispensar medicamentos cuando no sean solicitados de acuerdo con las normas vigentes o cuando sea evidente una finalidad extraterapéutica de los mismos [art. 22.1 b)], mientras que tienen la obli-

gación de "[t]ener los medicamentos y productos sanitarios de existencia mínima obligatoria, de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente" [art. 22.2 d)]. La precisión de este último aspecto se encuentra, como ya se dijo, en el Decreto 104/2001, de 30 de abril, por el que se regulan las existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios en las oficinas de farmacia y almacenes farmacéuticos de distribución. Pues bien, el actor incumplió por su propia y exclusiva voluntad esa prescripción de existencias mínimas. En lugar de optar unilateralmente por la desobediencia a una norma que está adoptada por la Administración competente de conformidad con la legislación básica estatal, el demandante debió haber manifestado su discrepancia por la vía legal correspondiente, que no era otra que la impugnación de aquella disposición ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

8. Una vez expuestas las anteriores razones, se entenderá el estupor que me causa la limitada argumentación de la Sentencia de la mayoría, construida sobre apriorismos, sonoros silencios y omisiones, junto con sorprendentes saltos de la lógica argumentativa. Difícilmente puede asumirse la omisión de referencias a numerosos y muy relevantes pronunciamientos de nuestra doctrina constitucional así como de resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no solo fueron alegados por quienes han comparecido en este proceso constitucional sino que también fueron utilizados en las deliberaciones previas a la aprobación de esta resolución, por varios componentes del Pleno entre los que me incluyo. Omisión, por lo tanto, consciente para los Magistrados de la mayoría que han dado su apoyo a esta Sentencia. En ella se lleva a cabo, de forma encubierta, un drástico overruling de la doctrina constitucional pergeñada durante décadas en plena sintonía con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. Este drástico cambio doctrinal puede tener consecuencias aciagas para nuestro Estado Constitucional de Derecho y, en definitiva, para el equilibrio de nuestra convivencia. Hoy es la dispensación de la píldora anticonceptiva, mañana podrán ser la vacunación obligatoria, o la obligación tributaria, o un largo etcétera, los supuestos afectados por la negativa a cumplir el correspondiente deber jurídico apelando al derecho a la objeción de conciencia, conformado a voluntad de quien esgrime la objeción, sin necesidad de una previsión legal al respecto.

Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Andrés Ollero Tassara en relación con la Sentencia del Pleno de 25 de junio de 2015 dictada en el recurso de amparo avocado núm. 412-2012

Ha sido para mí un honor expresar, como Ponente, el parecer del Tribunal. No obstante, con el máximo respeto a la posición de los restantes Magistrados, y en ejercicio de la facultad conferida por el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, formulo Voto concurrente respecto de la Sentencia citada en el encabezamiento. Suscribiendo el amparo otorgado, no comparto —como expresaré a continuación— ni la totalidad del fallo ni buena parte de su fundamentación.

1. Nos encontramos ante un recurso de amparo que, tras someterse —como es habitual— al parecer de una Sala, fue luego avocado al Pleno. Sin duda ha influido en ello el reconocimiento de la conveniencia de "perfilar y aclarar algunos aspectos de la doctrina constitucional en relación con la naturaleza del derecho a la objeción de conciencia" (FJ 3 in fine). Desgraciadamente tal intención se ha visto, a mi modo de ver, frustrada. El tratamiento del derecho a la objeción de conciencia surge tempranamente en las resoluciones del Tribunal. Ya la STC 15/1982, de 23 de abril, estableció en su FJ 6 que "la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16", por lo que "puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español, sin que contra la argumentación expuesta tenga valor alguno el hecho de que el art. 30.2 emplee la expresión 'la Ley regulará', la cual no significa otra cosa que la necesidad de la interpositio legislatoris no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para 'regular' el derecho en términos que permitan su plena aplicabilidad y eficacia".

En esa misma línea precisó, en el fundamento jurídico 8, que de ello "no se deriva, sin embargo, que el derecho del objetor esté por entero subordinado a la actuación del legislador. El que la objeción de conciencia sea un derecho que para su desarrollo y plena eficacia requiera la interpositio legislatoris no significa que sea exigible tan sólo cuando el legislador lo haya desarrollado, de modo que su reconocimiento constitucional no tendría otra consecuencia que la de establecer un mandato dirigido al legislador sin virtualidad para amparar por sí mismo pretensiones individuales. Como ha señalado reiteradamente este Tribunal, los principios constitucionales y los derechos y libertades fundamentales vinculan a to-

dos los poderes públicos (arts. 9.1 y 53.1 de la Constitución) y son origen inmediato de derechos y obligaciones y no meros principios programáticos; el hecho mismo de que nuestra norma fundamental en su art. 53.2 prevea un sistema especial de tutela a través del recurso de amparo, que se extiende a la objeción de conciencia, no es sino una confirmación del principio de su aplicabilidad inmediata".

"Este principio general" —se añadía— "no tendrá más excepciones que aquellos casos en que así lo imponga la propia Constitución o en que la naturaleza misma de la norma impida considerarla inmediatamente aplicable; supuestos que no se dan en el derecho a la objeción de conciencia".

"Es cierto que cuando se opera con esa reserva de configuración legal el mandato constitucional puede no tener, hasta que la regulación se produzca, más que un mínimo contenido... pero ese mínimo contenido ha de ser protegido, ya que de otro modo el amparo previsto en el art. 53.2 de la Constitución carecería de efectividad y se produciría la negación radical de un derecho que goza de la máxima protección constitucional en nuestro ordenamiento jurídico. La dilación en el cumplimiento del deber que la Constitución impone al legislador no puede lesionar el derecho reconocido en ella".

Cinco años después, sin embargo, la STC 160/1987, de 27 de octubre, generará una notable confusión; no porque se aparte de las anteriores, sino por ser en sí misma contradictoria. En efecto, en su fundamento jurídico 3 reitera, con cita expresa, lo establecido por la STC 15/1982, aun considerando —con matices no irrelevantes— que la objeción de conciencia "es un derecho constitucionalmente reconocido", al que se "otorga la protección del recurso de amparo, lo que le equipara, a los solos efectos de dicho recurso en su tratamiento jurídico constitucional, con ese núcleo especialmente protegido que son los derechos fundamentales y libertades públicas, y es la Constitución, pues, la que reconoce el derecho de manera implícita y explícita, no significando otra cosa la expresión 'la Ley regulará' del art. 30.2 que la necesidad de la interpositio legislatoris, no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para "regular" el derecho en términos que permitan su plena aplicabilidad y eficacia". Plantea pues la curiosa figura de un derecho "constitucional" que solo tendría de "fundamental" su protección por recurso de amparo...

Eso no es nada, si se tiene en cuenta que —sin salir del fundamento jurídico 3— pasamos a encontrarnos ante "un derecho a ser declarado exento del deber general de prestar el servicio militar". Se trataría pues de una excepción al cumplimiento de un deber "solamente permitida por el art. 30.2, en cuanto que sin ese reconocimiento constitucional no podría ejercerse el derecho, ni siquiera al amparo del de libertad ideológica o de conciencia (art. 16 CE) que, por sí mismo, no sería suficiente para liberar a los ciudadanos de deberes constitucionales o 'subconstitucionales' por motivos de conciencia, con el riesgo anejo de relativizar los mandatos jurídicos. Es justamente su naturaleza excepcional —derecho a una exención de norma general, a un deber constitucional, como es de la defensa de España—, lo que le caracteriza como derecho constitucional autónomo, pero no fundamental".

El problema se complica cuando la STC 321/1994, de 28 de noviembre, en su fundamento jurídico 4, al pretender enlazar con las anteriores —incluyendo a la STC 15/1982 que, como hemos visto, dice todo lo contrario— afirma que "el derecho a la libertad ideológica reconocido en el art. 16 CE no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos, con el riesgo aparejado de relativizar los mandatos legales". La realidad es que solo cuando existen deberes legales puede entrar en juego el derecho a la objeción, que de lo contrario carecería de objeto.

Añadirá que "el derecho a ser declarado exento del servicio militar no deviene directamente del ejercicio de la libertad ideológica, por más que se encuentre conectado con el mismo, sino tan sólo de que la Constitución en su art. 30.2 expresamente ha reconocido el derecho a la objeción de conciencia, referido únicamente al servicio militar y cuyo ejercicio supone el nacimiento del deber de cumplir la prestación social sustitutoria, sistema que permite al objetor cumplir los objetivos de la norma de servir a la comunidad salvaguardando sus íntimas convicciones (STC 160/1987). No puede, por lo tanto, el recurrente justificar su negativa al cumplimiento de la prestación social sustitutoria ni apelando a la libertad ideológica, ni mediante el ejercicio de la objeción de conciencia, derecho que la Constitución refiere única y exclusivamente al servicio militar".

Ciertamente, aun siendo la objeción de conciencia un derecho fundamental, no lo es con un alcance ilimitado. Es preciso ponderarlo con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos. Será el legislador en

principio el encargado de hacerlo, sin perjuicio de que tal labor la lleve en caso contrario a cabo el órgano judicial competente. Lo que se sale de lo ordinario es que —como ocurre en el citado art, 30 CE— sea la propia Constitución la que asuma esa tarea, estableciendo como resultado la aceptación de la objeción al servicio militar, pero contrapesada con el cumplimiento de una prestación social sustitutoria. El contexto peculiar del trabajo constituyente, con unas fuerzas armadas muy sensibilizadas ante el creciente número de objetores, explica esa anomalía; al igual que las vicisitudes del pacto en la ponencia constitucional llevaron a ignorar enmiendas relativas a los derechos fundamentales en la segunda lectura, encomendada al Senado. Esto explica que no prosperaran enmiendas que proponían añadir al art. 16 CE un epígrafe 4 destinado a la objeción de conciencia. La posterior supresión del servicio militar obligatorio acabó convirtiendo en fantasmal su única presencia explícita en el art. 30 CE.

Es lógico pues que, ante situación tan contradictoria, se avocara al Pleno el recurso de amparo. Ello brindaba la oportunidad de aclarar la confusión entre objeción de conciencia y desobediencia civil que latía en las SSTC 160/1987 y 321/1994. El objetor de conciencia no pretende cuestionar la norma sino que plantea una excepción (que confirma la regla), al entrar en conflicto la conducta impuesta por ella con sus convicciones personales. Surge, sin embargo, una figura bien distinta: el insumiso, al que ya se había satisfecho su derecho a la objeción, pero optaba por una inconstitucional desobediencia civil negándose a cumplir la prestación sustitutoria. Como consecuencia, pronunciamientos de este Tribunal referidos a esta nueva situación han llegado a malinterpretarse, como si afectaran al derecho constitucional a la objeción de conciencia. Los insumisos, recurrentes en estas dos últimas sentencias, ya habían visto satisfecha su condición de objetores al servicio militar. Pasan sin embargo a ejercer una actitud de desobediencia civil, impensable como derecho, porque no pretendían una mera excepción. Cuestionaban la norma con carácter general y aspiraban a que la sanción por su conducta (y su impacto mediático) removieran la conciencia social socavando la legitimidad del precepto. Al ignorarse en las citadas sentencias esta distinción entre objeción y desobediencia civil, el propio Tribunal se creía así obligado a trasladar a la objeción el reproche que la desobediencia civil merece. Distinguiendo adecuadamente entre objeción de conciencia y la desobediencia civil que la insumisión implica, desaparece por el contrario todo indicio de incoherencia en las sentencias citadas.

Todo ello ha quedado pues sin aclarar. Al afirmarse, como hemos visto, en la STC 160/1987, que el derecho a la "libertad ideológica reconocido en el art. 16 CE no resulta suficiente para eximir a los ciudadanos por motivos de conciencia del cumplimiento de deberes legalmente establecidos", la objeción pasa de ser un curioso derecho constitucional no fundamental a verse reducida a la mínima expresión: se la conceptúa más bien como eventual objeto de una benévola tolerancia, ajena a imperativos de justicia. La significativa alusión al "riesgo aparejado de relativizar los mandatos legales" parece traslucir otra de las confusiones que dificultan un normal reconocimiento del derecho a objetar. Deriva de la tendencia a identificar conciencia con moral, con lo que la objeción expresaría un conflicto entre moral y derecho que se pretendería fallar en beneficio de la primera. En realidad el conflicto se da entre la delimitación legal del mínimo ético característico del derecho, fruto de un respaldo mayoritario, y la discrepante concepción de ese mínimo ético jurídico suscrita por un ciudadano en minoría. No nos encontramos pues ante un conflicto entre el mínimo ético que da sentido a lo jurídico y maximalismos morales que puedan repercutir sobre la conciencia individual. Pretender que la obediencia al derecho pueda depender del código moral de cada cual es una torpe caricatura del derecho a la objeción de conciencia. Este refleja en realidad un conflicto jurídico y no el imaginado entre derecho y moral. Se trata del derecho de la minoría a poder acogerse excepcionalmente a su visión del mínimo ético que el derecho ha de avalar, en relación al impuesto mayoritariamente por cauces democráticos. Todo un síntoma elocuente del respeto del Estado a los derechos de los ciudadanos; de modo especial a su libertad ideológica, no ajena en ocasiones a referencias religiosas.

Una democracia avanzada aspira a evitar dictaduras mayoritarias, dando espacio —siempre que resulte viable— a excepciones que salvaguarden convicciones jurídicas discrepantes. Cuando se olvida que el ciudadano tiene conciencia jurídica, sin perjuicio de tenerla también moral ni de las previsibles conexiones entre ambas, el falso panorama de una subordinación de la obediencia a la norma a los postulados morales de cada cual genera un explicable vértigo.

2. Se ha optado en la Sentencia, sin embargo, por declinar la posibilidad (por no decir deber) de resolver esta confusa situación. Dado que el recurrente centra su argumentación en los eventuales efectos abortivos de la conocida como píldora del día después, se ha preferido abordar el

problema como una mera continuación de la STC 53/1985, de 11 de abril, relativa al recurso previo sobre la entonces recién aprobada primera despenalización del aborto en determinados supuestos. En su fundamento jurídico 14, se descarta que el legislador haya vulnerado la Constitución al no regular la objeción de conciencia del personal sanitario. Recordó el Tribunal al respecto que el derecho a la objeción de conciencia "existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art. 16.1 de la Constitución y, como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones, la Constitución es directamente aplicable, especialmente en materia de derechos fundamentales". Con esa remisión se actualiza ahora la doctrina, a veces ignorada, que descarta que la objeción de conciencia precise de una específica interpositio legislatoris para ser ejercida. Se actualiza igualmente la consideración de la objeción de conciencia como derecho fundamental, reforzada por lo demás por su explícita inclusión en la posterior Carta Europea de Derechos Fundamentales. Se mantiene, sin embargo, abierta la confusión generada por la STC 160/1987; perdura como posible fundamento alternativo tanto para quienes afirman como para los que niegan el derecho a la objeción, al ofrecerle dos párrafos consecutivos del mismo fundamento que afirman una cosa y su contraria. Queda pues como aspecto positivo la actualización del alcance limitado de la interpositio legislatoris, vinculado a la eficacia del derecho y no a su fundamento, así como al carácter de derecho fundamental de la objeción.

3. La distinción, en el fundamento jurídico 5, entre la conducta sancionada por la Administración (no disponer de determinados medicamentos o productos sanitarios en la oficina de farmacia) y la negativa del farmacéutico a dispensarlos, puede llevar a debates bizantinos, si no se profundiza en el sentido de la norma. La presencia de determinados productos en la trastienda de las oficinas de farmacia no contribuye a mejora alguna de la salud. Si la Junta de Andalucía ha preferido tipificar como sancionable su no disposición en vez de su no dispensación es, obviamente, para evitar que el farmacéutico desatienda la solicitud del ciudadano argumentando que ha agotado las existencias de determinados productos; tendrá pues que disponer siempre de ellos, aunque ningún ciudadano se los reclame.

4. La sanción impuesta al farmacéutico es consecuencia de una conducta tipificada: no disponer de los medicamentos y productos incluidos en la relación legalmente establecida; sin perjuicio de que se trate de uno solo o de varios. Aun tratándose en este caso de dos (píldora del día después y preservativos) han generado solo una sanción, inescindible, sobre la que recaería el dictamen de nulidad incluido en el fallo. Sorprendentemente, sin embargo, se ha optado en el fallo por hacer compatible la anulación de la sanción, en lo relativo a la píldora, con una retroacción tras casi siete años para que la Administración vuelva a dictaminar las consecuencias de la no disposición de preservativos. Al margen de los problemas de prescripción que ello pueda suscitar, resulta problemático que la Administración llegue a cumplir los imperativos de proporcionalidad propios de una medida sancionadora. Respecto a la píldora se señala (en el FJ 5) que la acumulación de oficinas de farmacia en pleno centro urbano de una ciudad lleva a descartar una eventual imposibilidad de acceso a los medicamentos por el ciudadano. En el caso de los preservativos habría que añadir que, al no tratarse de un medicamento sino de un producto higiénico, suele hallarse disponible en máquinas tragaperras instaladas en lugares públicos, sin obligada intervención de farmacéutico alguno. Sugerir que ello pueda dar paso a una sanción grave al mismo farmacéutico cuyo derecho a la objeción se ha visto reconocido por el Tribunal cobra visos de argumento ad absurdum.

En todo caso, lo que dista de resultar irrelevante es la presunta fundamentación (FJ 6) de este llamativo dictamen. En modo alguno puedo compartir la afirmación de que "es patente que el incumplimiento de la obligación relativa a las existencias de preservativos queda extramuros de la protección que brinda el precepto constitucional indicado. La renuencia del demandante a disponer de profilácticos en su oficina de farmacia no queda amparada por la dimensión constitucional de la objeción de conciencia que dimana de la libertad de creencias reconocida en el art. 16.1 CE". Todo parece indicar que se está incurriendo en la ya criticada identificación de conciencia con moralidad, o incluso con "creencias". Dejando aparte la dimensión de "laicidad positiva" que aquí no entra en juego, las exigencias del artículo 16 CE giran en torno a la neutralidad de los poderes públicos y su no injerencia en la conciencia —jurídica o moral— del ciudadano. No parece compatible con ello que los Magistrados del Tribunal puedan considerarse llamados a erigirse en directores espirituales de los ciudadanos, aleccionándolos sobre qué exigencias de su

conciencia gozan de la protección de un derecho fundamental y cuáles han de verse descartadas por tratarse de retorcidos escrúpulos. No se me ocurre ningún argumento, ni la Sentencia los ofrece, para poder afirmar sobre la disposición de preservativos que ningún "conflicto de conciencia con relevancia constitucional puede darse en este supuesto". Tampoco los ofrece el recurrente, que solo alude a los preservativos para hacer notar que el incidente de nulidad de actuaciones que suscita no era improcedente, al no coincidir con el contenido de la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Pichon y Sajous.

No es inusual que cuando se suscitan problemas de objeción de conciencia el que ha de juzgarlo tienda a ponerse en el lugar del objetor para dictaminar si merece o no protección. Es obvio que, de tratarse de instancias públicas, la neutralidad y no injerencia solo permite calibrar la "seriedad" de la actitud del objetor (avalada en este caso por el fundamento jurídico 5, sin distinción alguna entre los productos afectados por ella), su coherencia de conducta y la inexistencia de circunstancias que pudieran llevar a detectar intención alguna de obtener algún beneficio personal más propio de la picaresca. De lo contrario, surgiría el riesgo adicional de que la tolerancia sustituya a la justicia. Así, cuando trata de exigencias vinculadas a doctrinas minoritarias (rechazo de trasfusiones de sangre, negativa a incinerar cadáveres...) se tendería tolerantemente a conceder la excepción; cuando se trata, por el contrario, de planteamientos doctrinales más extendidos cualquiera podría considerarse llamado a distinguir entre libertad de espíritu y exceso fundamentalista. Me temo que así ha ocurrido en la Sentencia. El problema es que la conciencia relevante a la hora de reconocer el derecho a la objeción es la del objetor; no la de quien emite el veredicto. Su contrapeso en la ponderación no ha de ser nunca la conciencia de éste sino la repercusión sobre derechos de terceros.

Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Del-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 412-2012, y al que se adhiere el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos

1. Como tuve oportunidad de manifestar a lo largo de las deliberaciones del presente proceso constitucional, disiento de la decisión mayoritariamente adoptada por el Pleno de este Tribunal. Antes de enunciar mi acusado e intenso disentimiento ante el presente pronunciamiento, quiero empezar por manifestar mi respeto a la decisión de la mayoría, alcanzada tras largas sesiones de debate en el plenario. Podré así, desde

esa convicción y afirmación institucional, sin ofender su legitimidad y sin abandonar la cortesía, subrayar mi inquietud al asistir a un pronunciamiento de tendencia ideológica marcada, pero que termina banalizando la solución del conflicto que sustancia; en otras palabras, mi preocupación ante un buen ejemplo de cómo una decisión de este Tribunal no habría de razonar y de lo que no debería nunca erigirse en jurisprudencia constitucional. Tengo para mí que con resoluciones como la presente nuestro modelo de tutela mediante la vía del amparo se enfrenta a una regresión creciente y manifiesta, poniendo entre paréntesis el equilibrio necesario que sustenta la respetada reputación institucional de este órgano constitucional.

Por las razones que de inmediato se expondrán, entiendo que el fallo debió de desestimar la pretensión de amparo por no existir conflicto constitucional alguno que pueda vincular el derecho fundamental invocado con la sanción impuesta al recurrente. Y es que la Sentencia de la que me aparto, en lugar de afrontar el asunto desde la aplicación de las premisas invariables y constantes de nuestra doctrina constitucional sobre el objeto posible de un recurso de amparo, ha optado de manera bien poco razonable por elevar a categoría constitucional una posición ideológica de acusada tendencia, prescindiendo de elaborar un discurso dotado del obligado fundamento de constitucionalidad. Lamentablemente, esta Sentencia es eso; poco más que eso. La debilidad de sus argumentos, como muestra la exánime ponderación que efectúa, llamará la atención y activará las alarmas de los estudiosos de una doctrina, como la construida por este Tribunal en materia de derechos fundamentales, que goza de un tan reconocido como merecido prestigio.

2. Una más exacta comprensión de las razones de mi abierta discrepancia con la Sentencia de la mayoría hace aconsejable comenzar por resumir los hechos que concurren en el presente proceso constitucional.

El demandante de amparo, cotitular de una oficina de farmacia en la ciudad de Sevilla, fue sancionado con multa de 3.300 euros como consecuencia de que el establecimiento carecía de existencias de preservativos y del medicamento con el principio activo levonorgestrel 0'750 mg (coloquialmente conocido como "píldora del día después"). Tales datos resultan del acta levantada por la Inspección Provincial de Servicios Sanitarios de la Junta de Andalucía a raíz de la denuncia presentada por el ciudadano que pretendió adquirir, sin éxito, un paquete de preservativos.

Esta denuncia, por tanto y se trata de un hecho relevante, no tuvo origen en una previa denegación del recurrente a dispensar la píldora, sino en la negativa a la venta de preservativos en dicha farmacia. El expediente sancionador no trajo causa, ni directa ni indirecta, en una resistencia a la dispensación de la píldora reseñada; o, lo que es igual, la sanción no derivó de un rechazo a expender medicamentos de esta naturaleza, sino de la falta de disposición de las existencias de aquellos productos que la normativa aplicable exige, según acreditó la inspección derivada de la denuncia descrita. Prueba definitiva de ello radica en que fueran sancionados los dos farmacéuticos titulares de la farmacia, pese a que sólo consta que uno de ellos, el recurrente en amparo, manifestase no disponer de dichos productos y medicamentos por razones de conciencia. Tampoco consta que hayan invocado objeción de conciencia ni el cotitular de la farmacia ni alguno de sus empleados; que los había, pues uno de ellos, según deja acreditado la resolución administrativa, fue el que se relacionó con el ciudadano que pretendía adquirir preservativos y formuló la denuncia. En suma, no hubo omisión de dispensación ni sanción por una resistencia activa y singular a dispensar la "píldora del día después". Ni tan siquiera hubo participación directa y personal del recurrente de amparo en los hechos denunciados que dieron lugar a la apertura del expediente sancionador.

En resumen, si no hubo negativa a la dispensación de la conocida como "píldora del día después", ni sanción por esa causa, no pudo haber lugar al conflicto personal que trata de ampararse en la objeción de conciencia. Los hechos lo demuestran con toda claridad: lo reconoce la misma Sentencia en sus antecedentes y se verifica en las actuaciones.

3. El análisis de los datos del presente recurso de amparo evidencia que el debate constitucional sobre la cuestión planteada resultaba de todo punto artificial ya que no aparecía la obligada premisa para su activación; esto es, la concurrencia de un conflicto constitucional. Pese a que, como se razonó con reiteración en los debates del Pleno, tal circunstancia inhabilitaba por completo el conocer y resolver sobre el derecho alegado como violado, el pronunciamiento mayoritario no se molesta en dedicar reflexión alguna a tan decisiva carencia. Desde luego, la mayoría de nuestro Tribunal puede defender y plasmar las tesis constitucionales que estime pertinentes en cada pronunciamiento; pero no es dable que soslaye las reglas más canónicas y ortodoxas de la interpretación consti-

tucional o que las aplique de manera selectiva, como en mi opinión sucede en el presente caso.

Por esa razón me veo obligado a recordar que no existe el amparo cautelar y, por consiguiente, cuando no existe lesión a derecho constitucional alguno, no hay posibilidad de su reparación. En relación con tan elemental pero crucial tema radica mi preocupación mayor: en que se da de lado la idea que sustenta la jurisdicción de amparo. Esta, en efecto, no ha sido reconocida y regulada para reparar infracciones de preceptos sino vulneraciones de derechos, de modo que no resulta viable constitucionalmente la tutela en abstracto de supuestas lesiones no causadas, ya que en esta vía, en la del recurso de amparo, ni cabe un enjuiciamiento sobre si se acomodaría o no a un derecho fundamental un acto de un poder público que no se ha llegado a producir, ni tal proceso es un medio de depuración abstracta de disposiciones normativas. Y en el caso enjuiciado, insisto de nuevo, no hay ni norma aplicada ni acto sancionador vinculado a la objeción de conciencia que se invoca en el recurso, ya que no llegó a existir conflicto alguno en el supuesto de hecho. El conflicto que está en la base de la objeción de conciencia sólo hubiera podido materializarse en el momento de la dispensación, porque sólo poniendo en manos de un cliente ese medicamento hubiera nacido el pretendido riesgo "abortivo" que el objetor aprecia y quiere evitar. Mientras ese acto no hubiera acaecido —y no ha llegado a acaecer—, y la sanción no hubiera respondido a ello —y no ha sido de ello consecuencia—, no puede estar concernida, ni siquiera potencialmente, la objeción de conciencia, más allá de lo que quepa decir sobre ella, sus contenidos y su encuadramiento constitucional.

En este contexto, a nadie extrañará que de inmediato me formule en términos dialécticos una serie de preguntas, todas ellas dotadas del obligado anclaje constitucional, tales como dónde está el debate sobre el conflicto entre derechos, dónde la lesión causada a derechos del demandante o, en fin, cómo pueden vincularse los hechos acaecidos con la libertad ideológica (art. 16 CE) y la objeción de conciencia, nacida ésta, por enunciar la idea con el lenguaje utilizado por la Sentencia de la mayoría, de la colisión entre la concepción que profesa el demandante sobre el derecho a la vida y la duda razonable existente sobre la producción de efectos abortivos por el referido principio activo levonorgestrel 0,750 mg, como probaría la falta de unanimidad científica al respecto.

Para eludir la anterior, obligada e ineludible comprensión del recurso de amparo, no resulta en modo alguno razonable alegar que la tenencia de las existencias de medicamentos legalmente exigidas tiene una dimensión o vertiente finalista: "disposición para dispensar". Y no cabe ese argumento, digo, entre otras variadas razones y sin entrar en los márgenes del derecho que se invoca, porque olvida que la objeción de conciencia pretendida no puede extenderse sobre el establecimiento farmacéutico, en su conjunto, como si se tratara de una unidad personal. Así lo pide la propia configuración de la libertad ideológica y de la objeción de conciencia como derechos personales e intransferibles. Y en el presente caso, vuelvo a reiterarlo, ni quedó acreditado el conflicto de conciencia, ni tampoco que, de haber existido el mismo por intervención directa y personal del recurrente en una omisión de dispensación, el cumplimiento normativo no pudiera haberse llevado a cabo por quienes nunca opusieron razones de conciencia (el cotitular de la farmacia o un empleado).

Esa circunstancia ya excluía toda dimensión constitucional del caso sometido a nuestro enjuiciamiento, por más que se haya insistido en soslayarla a fin de elevar a categoría constitucional una línea de pensamiento, con una finalidad profundamente ideológica que se revela en el iter argumental que desemboca en la conclusión alcanzada. Me parece manifiestamente contrario a nuestra doctrina reiterada, invariable y constante sobre el proceso constitucional de amparo, que se sienten ciertas conclusiones y se tome postura en un conflicto ideológico que no se ha producido ad casum.

4. El ficticio conflicto ideológico, de haber existido, hubiera requerido un debate jurídico complejo que, desde luego, no plasma el texto aprobado. No puedo dialogar en divergencia con una construcción doctrinal omitida, pero tampoco puedo dejar de aspirar a que ese debate se celebre, en su momento, bajo premisas de naturaleza rigurosamente jurídico-constitucional. A pesar de ello, y a efectos puramente dialécticos, no me resisto a dejar constancia de mi abierto disentimiento con el juicio de ponderación que realiza la presente Sentencia sobre los intereses en presencia.

La resolución mayoritaria, en efecto, señala en primer lugar que en "en las actuaciones no figura dato alguno a través del cual se infiera el riesgo de que la dispensación 'de la píldora del día después' se viera obstaculizada, pues amén de que la farmacia regentada por el demandante

se ubica en el centro urbano de la ciudad de Sevilla, dato éste del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas, ninguna otra circunstancia permite colegir que el derecho de la mujer a acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente fuera puesto en peligro". Al margen de que tal situación, como se ha razonado, no llegó a producirse en lo que atañe al menos al expediente sancionatorio de origen, y con independencia del efecto discriminatorio que late en el peregrinaje que se deriva de esa lógica y de la minusvaloración del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la salud de la mujer que lleva aparejada (arts. 14, 15 y 43 CE), la Sentencia de mi divergencia ni siquiera se toma la molestia de verificar el argumento que emplea mediante el expediente de ofrecer datos objetivos sobre el particular en el que intenta sustentarse. Siguiendo su quebradiza lógica, para que el argumento pudiera poseer una mínima solvencia, tendría que haber efectuado una valoración sobre otras hipótesis —por cierto, tan carentes de verificación como la que se enuncia—, señaladamente la existencia de una cadena o suma de resistencias a la dispensación. Si se construye la constitucionalidad desde meras hipótesis, se deberían contemplar todas las posibles, incluso la negativa generalizada a la dispensación, pues de otro modo se arriesga a que el razonamiento pierda no sólo su precario soporte jurídico sino incluso otro previo de carácter fáctico.

Por otra parte, me importa también destacar que, al realizar la labor de ponderación, la Sentencia de la mayoría prescinde abiertamente de toda consideración acerca de la regulación legal sobre la dispensación de medicamentos, como exigencia para la debida atención a las necesidades de la comunidad; es éste un factor que simplemente se ignora.

Pero no cabe olvidar que la obligación de dispensar medicamentos en las oficinas de farmacia responde a las previsiones del art. 43 CE, que reconoce el derecho a la protección de la salud, correspondiendo a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de las medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, siendo la ley la que establece los derechos y deberes de todos al respecto. Una previsión constitucional, la del art. 43 CE, que en no pocas ocasiones hemos vinculado al derecho fundamental consagrado en el art. 15 CE.

El argumento final de la Sentencia para justificar la objeción de conciencia del actor reside en las previsiones que al respecto contienen los

estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y el código de ética farmacéutica y deontología de la profesión farmacéutica, que se elevan poco menos que al rango de normas constitucionales. A pesar de ser consciente de la banalidad jurídica que enuncio de seguido, debo recordar que esos estatutos y códigos podrán establecer lo que las respectivas corporaciones tengan por conveniente, pero que sus previsiones se habrán de desarrollar de conformidad con lo que establezcan la Constitución, las leyes que se dicten en la materia y el resto del ordenamiento jurídico. Pero la única norma aquí invocable, digna de atención, es un decreto del gobierno de Andalucía que regula las existencias mínimas con las que deben contar en Andalucía las oficinas de farmacia, entre las que se encuentra la "píldora del día después", y que el actor incumplió por su propia y exclusiva voluntad.

DERECHO MATRIMONIAL

Sentencia 194/2014, de 1 de diciembre de 2014[8]

Recurso de amparo 6654-2012. Promovido por don Bassirou Sene Sene en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y las resoluciones administrativas que desestimaron su petición de pensión de viudedad de clases pasivas. Supuesta vulneración del derecho a la igualdad: matrimonio contraído por el rito islámico carente de validez y eficacia para el ordenamiento jurídico español.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1. (...)

La queja del demandante de amparo se ciñe a la vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) por parte de la Administración, que le denegó la pensión de viudedad, y por el órgano judicial, que no corrigió la desigualdad sufrida, todo ello como consecuencia de las resoluciones administrativas que exigieron la inscripción del matrimonio en el registro civil para tener derecho a obtener una pensión de viudedad. La desigualdad resultaría injustificada porque se equipara la situación de un

8 BOE núm. 11 de 13 de enero de 2015.

matrimonio islámico no inscrito, cuya existencia ha sido reconocida por la Administración, con una pareja de hecho y no con el resto de los matrimonios, tanto inscritos como no inscritos. En apoyo de su pretensión cita, por un lado, la STC 199/2004, de 15 de noviembre, en la que el Tribunal Constitucional concluyó que existía vulneración del derecho a la igualdad por haberse denegado una pensión al viudo de un matrimonio canónico no registrado; y, por otro, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH), de 8 de diciembre de 2009, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entendió que se había vulnerado el derecho a la igualdad de la señora Muñoz Díaz, casada por el rito gitano, y a la que también le fue denegada una pensión de viudedad.

Esta opinión no es compartida por Abogado del Estado ni por el Ministerio Fiscal, que proponen la desestimación del recurso por inexistencia de la vulneración del derecho invocado.

2. Con carácter general es necesario recordar que "el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, por tanto, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una fundamentación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no venir fundadas en criterios objetivos y razonables según criterios o juicios de valor generalmente aceptados. También es necesario para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, 'que las consecuencias jurídicas que deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos' (STC 176/1993, fundamento jurídico 2)" (STC 90/1995, de 9 de junio, FJ 4). Y "solo ante iguales supuestos de hecho actúa la prohibición de utilizar 'elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable' (STC 39/2002, de 14 de febrero, FJ 4), razón por la cual toda alegación del derecho fundamental a la igualdad precisa para su verificación un *tertium comparationis* frente al que la desigualdad se produzca, elemento de contraste que ha de consistir en 'una situación jurídica concreta en la que se encuentren otros ciudadanos u otros grupos de ciudadanos' (ATC 209/1985, de 20 de marzo, FJ 2)" (STC 156/2014, de 25 de septiembre, FJ 4). Resultará necesario, por ello, examinar si los supuestos de hecho aportados por el recurrente como término de comparación guardan la identidad que todo juicio de igualdad requiere.

3. Entrando ya en el análisis sobre el fondo del único motivo de impugnación aducido en la demanda, es decir, la vulneración del derecho a la igualdad del art. 14 CE, con carácter previo hemos de hacer una precisión referida a un dato relevante en este asunto y en el que no concuerda lo expresado en la demanda de amparo con la documentación obrante en las actuaciones. En concreto, afirma el recurrente, en varias ocasiones, que la administración reconoció la existencia de su matrimonio islámico y que no se cuestiona la existencia o validez del vínculo, de modo que el único motivo por el que le fue denegada la pensión de viudedad fue la falta de inscripción de su matrimonio legítimo en el registro civil. Precisamente por esta circunstancia compara su matrimonio islámico no inscrito con la situación analizada en el recurso de amparo resuelto por en la STC 199/2004, de 15 de noviembre.

Procede pues examinar si nos encontramos ante dos supuestos idénticos como paso previo para poder confirmar la lesión del derecho fundamental invocado por el recurrente. Dijimos en el fundamento jurídico 5 de la STC 199/2004, de 15 de noviembre que el problema novedoso en el caso allí enjuiciado era el diferente trato otorgado al recurrente como consecuencia de no haber inscrito su matrimonio canónico en el registro civil, y para su resolución partimos de dos realidades fácticas:

"La primera de ellas es que el art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de clases pasivas del Estado, dispone de forma textual que 'tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos'. Como se comprueba, en puridad, la norma aplicada no contiene de modo expreso el requisito de la inscripción registral y aunque diferencia entre situaciones matrimoniales y convivencia de hecho, no lo hace de modo expreso entre matrimonios registrados y no registrados. La desigualdad que se denuncia en la demanda de amparo es por ello exclusiva consecuencia de una determinada interpretación de la Ley por parte de la Administración, que se considera razonable en vía judicial al dar por bueno el resultado que se tacha de discriminatorio o contrario al art. 14 CE.

La segunda es que tanto en las resoluciones administrativas como en la Sentencia impugnada se deja expresa y palmaria constancia de la existencia de un matrimonio celebrado válidamente, pero se afirma que

para ostentar la condición de 'cónyuge legítimo' es precisa la inscripción registral".

Pues bien, en contra de lo que afirma la demanda de amparo, en el caso examinado ni la Administración, ni las resoluciones judiciales admitieron en ningún momento la legitimidad del matrimonio celebrado por el rito islámico entre el recurrente y la causante de la prestación, de modo que la cuestión que ahora se suscita, a diferencia de la enjuiciada en la citada STC 199/2004, de 15 de noviembre, no se refiere a si un matrimonio válidamente celebrado pero no inscrito es equiparable a una pareja de hecho o si por el contrario lo es al matrimonio inscrito, ello a los exclusivos efectos de la aplicación del art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, sino que se trata de resolver si un matrimonio celebrado por el rito islámico, sin cumplir los requisitos exigidos por el legislador para otorgarle validez, debe equiparase a matrimonio legítimo, que es lo que propugna el actor.

De nuevo volvemos a recordar que, si bien el art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de Ley de clases pasivas del Estado, en la redacción aplicable en el proceso *a quo*, no contenía de modo expreso el requisito de la inscripción registral y, por tanto, no diferenciaba entre matrimonios registrados y no registrados, sí exige para el otorgamiento de la pensión tener la condición de cónyuge legítimo. Así expresamente dispone que "tendrán derecho a la pensión de viudedad quienes sean o hayan sido cónyuges legítimos del causante de los derechos pasivos".

Tampoco resulta ocioso añadir que en aquélla ocasión explicamos que "la norma que ha sido ahora objeto de interpretación judicial al vincular la prestación a la condición de 'cónyuge legítimo' contempla, en efecto, dos situaciones diferentes —personas con vínculo matrimonial frente a las situaciones de convivencia extramatrimonial— a las que vincula dos efectos jurídicos diferentes: el otorgamiento o no de la pensión, sobre la base de que, además, se cumpla el resto de condicionantes legales. Diferenciación que también aquí resulta ajustada a las exigencias constitucionales al ser trasladable sin dificultad la doctrina contenida en la STC 184/1990, de 15 de noviembre, según la cual 'no serán necesariamente incompatibles con el art. 39.1 CE, ni tampoco con el principio de igualdad, las medidas de los poderes públicos que otorgan un trato distinto y más favorable a la unión familiar que a otras unidades convivenciales, ni aque-

llas otras medidas que favorezcan el ejercicio del derecho constitucional a contraer matrimonio (art. 32.1 CE), siempre, claro es, que con ello no se coarte ni se dificulte irrazonablemente al hombre y la mujer que decidan convivir *more uxorio*' (FJ 2). Y ello porque 'siendo el derecho a contraer matrimonio un derecho constitucional, cabe concluir que el legislador puede, en principio, establecer diferencias de tratamiento entre la unión matrimonial y la puramente fáctica y que, en concreto, la diferencia de trato en la pensión de viudedad entre cónyuges y quienes conviven de hecho sin que nada les impida contraer matrimonio no es arbitraria o carente de fundamento' (FJ 3)" (STC 199/2004, de 15 de noviembre, FJ 4).

4. Ciertamente, el matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución, y el derecho a contraerlo es un derecho constitucional (art. 32.1), cuyo régimen jurídico corresponde a la Ley por mandato constitucional (art. 32.2). El vínculo matrimonial genera *ope legis* en los cónyuges una pluralidad de derechos y deberes que no se produce de modo jurídicamente necesario entre la pareja que mantiene una unidad de convivencia estable no basada en el matrimonio. Tales diferencias constitucionales entre matrimonio y unión de hecho pueden ser legítimamente tomadas en consideración por el legislador a la hora de regular las pensiones de supervivencia (STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3).

"En consecuencia, siendo el derecho a contraer matrimonio un derecho constitucional, cabe concluir que el legislador puede, en principio, establecer diferencias de tratamiento entre la unión matrimonial y la puramente fáctica y que, en concreto, la diferencia de trato en la pensión de viudedad entre los cónyuges y quienes conviven de hecho sin que nada les impida contraer matrimonio no es arbitraria o carente de fundamento. Además de las arriba señaladas, que por sí solas justifican tal diferencia de tratamiento normativo, razones de certidumbre y seguridad jurídica, y la propia coherencia con la decisión libremente adoptada en la unión de hecho de excluir la relación matrimonial y los deberes y derechos que de la misma dimanan, abundan en la consideración de que no pueda entenderse caprichoso o irrazonable que el legislador no incluya a los unidos por vía de hecho de una pensión como la de viudedad que ha sido prevista en función de la existencia de un vínculo matrimonial entre causante y beneficiario. Y por lo mismo no cabe reprochar como arbitraria ni discriminatoria la exigencia de que el núcleo de convivencia institucionalizada entre hombre y mujer como casados le conste formalmente al Estado para que este conceda la pensión de viudedad" (STC 184/1990,

de 15 de noviembre, FJ 3). Causalmente enlazado con esta consideración de respeto al ejercicio del art. 32 CE, hemos de afirmar que no cabe imputar arbitrariedad o discriminación a la exigencia establecida por el legislador de que el vínculo matrimonial, cualquiera que sea el rito por el que se haya contraído, conste formalmente y garantice la concurrencia de los requisitos formales y materiales para contraerlo.

En este sentido no es impertinente subrayar que el art. 32 CE reconoce el derecho a contraer matrimonio, y de su dicción literal "se deduce que ambos cónyuges se encuentran en régimen de plena igualdad jurídica en el seno de la institución jurídica del matrimonio, 'regla que supone una manifestación específica del principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (art. 14 CE)' (SSTC 159/1989, de 6 de octubre, FJ 5; 39/2002, de 14 de febrero, FJ 5; y 51/2011, de 14 de abril, FJ 8). Junto a lo anterior, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que el derecho al matrimonio, aunque es un derecho de titularidad individual, no lo es de ejercicio individual, pues, tal y como dispone el art. 45 CC, no hay matrimonio sin consentimiento mutuo (SSTC 222/1992, de 11 de diciembre, FJ 5; 47/1993, de 8 de febrero, FJ 4; 51/2011, de 14 de abril, FJ 9), y que el vínculo matrimonial 'genera *ope legis* en la mujer y el marido una pluralidad de derechos y deberes' (STC 184/1990, de 15 de noviembre, FJ 3)" (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 10). Ahora bien, establecido lo anterior, hemos de recordar que esta interpretación del contenido esencial del art. 32 CE "deja un amplio margen al legislador para configurar las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos —configuración de la que se ha ocupado el legislador estatal en virtud de la competencia exclusiva que le confiere el art. 149.1.8 CE para regular las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio—" (STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 10).

Por tanto, son las normas estatales las que regulan los requisitos y la forma de los matrimonios válidos, de modo que solo los celebrados con respeto a las mismas tendrán plena eficacia para el ordenamiento jurídico español.

5. Es casi ocioso recordar que es el Código civil la Ley que desarrolla el mandato del art. 32 CE y que lo hace permitiendo, entre otras cosas, contraer matrimonio en forma civil o en la forma religiosa legalmente prevista (art. 49), lo que nos remite necesariamente a las leyes que aprobaron

los acuerdos con las distintas confesiones religiosas, y, en concreto, a la Ley 26/1992, de 10 de diciembre, por la que se aprueba el acuerdo de cooperación del Estado con la Comunidad islámica de España.

Respecto del supuesto contemplado en este procedimiento constitucional, hay que dejar sentado, desde ahora, que no todo matrimonio contraído bajo el rito islámico, es decir, cumpliendo los requisitos de la ley Islámica, tiene validez en España, sino solo aquéllos que cumplan las exigencias que fueron acordadas por el Estado español y la Comunidad islámica, reguladas en la citada Ley 26/1992, de 10 de diciembre.

De la lectura de tales normas se desprende que establecen dos vías para el reconocimiento del matrimonio celebrado bajo del rito islámico.

En primer lugar la regla general es que la celebración del matrimonio requiere, con carácter previo, la instrucción de un expediente, para que el instructor del mismo se cerciore de que ambos solicitantes pueden contraerlo, y expida así el certificado de capacidad matrimonial cuando reúnan los requisitos señalados en el Código civil. La capacidad para contraer matrimonio tiene una importancia y complejidad añadidas cuando uno de los contrayentes es extranjero y la instrucción de este expediente previo garantiza en la generalidad de los casos que solo contraerán matrimonio, ya sea de forma civil o religiosa, aquéllos que cumplan los requisitos legales.

En segundo término se establece una regla especial en el caso del matrimonio celebrado por el rito islámico, a diferencia de lo que sucede con otro tipo de matrimonios, consistente en que se permite excepcionalmente a los contrayentes celebrar la ceremonia religiosa sin la previa instrucción del expediente y, por tanto, sin que se haya comprobado la concurrencia de los requisitos civiles, aunque puedan cumplirse los establecidos por la ley islámica, pues no olvidemos que las normas civiles y religiosas difieren en lo que a la capacidad para contraer matrimonio se refiere, y, desde luego, lo es en esta forma de matrimonio islámico. En este caso excepcional en que se contrae matrimonio islámico sin previa instrucción de expediente, la inscripción registral adquiere una especial importancia dado que la misma trasciende de la mera formalidad registral, al encomendar al Juez encargado del Registro Civil la función de comprobar que los contrayentes de un matrimonio islámico ya celebrado reunían los requisitos de capacidad y validez exigidos por el Código civil, así como por las normas de derecho internacional privado cuando los contrayentes

sean extranjeros. Y a estos efectos el art. 7.3 de la Ley 26/1992 establece que "[u]na vez celebrado el matrimonio, el representante de la Comunidad Islámica en que se hubiera contraído aquél enviará al Registro Civil, para su inscripción, certificación acreditativa de la celebración del matrimonio, en la que deberán expresarse las circunstancias exigidas por la legislación del Registro Civil" y esta certificación diligenciada permite la inscripción del matrimonio celebrado conforme al rito islámico, una vez realizada la obligada comprobación por el encargado del registro civil.

La Ley 26/1992, de 10 de noviembre, atribuye efectos civiles al matrimonio islámico solo cuando este se celebre en una comunidad islámica perteneciente a la Comisión Islámica de España, que esté inscrita en el registro de entidades religiosas, ante un dirigente religioso islámico o imán y al menos dos testigos (art. 7.1). Otorga además una especial importancia a la constatación de la concurrencia de los requisitos de capacidad y, por ello, señala el art. 7.1 que "[s]e atribuye efectos civiles al matrimonio celebrado según la forma religiosa establecida en la Ley islámica, desde el momento de su celebración, si los contrayentes reúnen los requisitos de capacidad exigidos por el Código Civil" y, como claramente razona la exposición de motivos de la instrucción de febrero de 1993, de la Dirección General de los Registros y el Notariado, sobre la inscripción en el Registro de determinados matrimonios celebrados en forma religiosa, "habrá de extremarse el celo para asegurarse de la inexistencia de impedimento de ligamen".

En aplicación de los razonamientos anteriores hemos de concluir que en el caso examinado en el proceso *a quo* los contrayentes en ningún momento han cumplido los mencionados requisitos de capacidad, ni con carácter previo, ni con posterioridad a la celebración de su matrimonio, motivo por el cual no puede, de conformidad con la ley española, ser considerado válido y en consecuencia producir efectos jurídicos.

El matrimonio del recurrente se celebró mediante el rito islámico sin la previa instrucción del expediente matrimonial, y aunque pudo haberse inscrito con posterioridad, acogiéndose para ello a la regla excepcional que hemos descrito con anterioridad, lo cierto es que el representante de la Comunidad Islámica que acreditó su celebración, sin embargo, no hizo constar expresamente las circunstancias exigidas por la legislación del registro civil. Conviene recordar que el demandante de amparo intentó sin éxito la inscripción de su matrimonio así como la rectificación del

estado civil en el acta de defunción, siéndole denegada por los Autos de 26 de marzo de 2009 y 13 de mayo de 2009 a cuyo contenido se refieren los antecedentes, debido a que no se cumplieron los requisitos legales de capacidad para realizar la inscripción del matrimonio. Todo ello conduce a afirmar que el matrimonio por el rito islámico contraído por el recurrente carece de validez y eficacia para el ordenamiento jurídico español.

La conclusión a la que ha de llegarse a los efectos de dar respuesta a la lesión del principio de igualdad del art. 14 CE, en los términos aducidos en la demanda de amparo, es que no resulta posible comparar la situación del recurrente ni con los matrimonios inscritos ni tampoco con los matrimonios no inscritos válidamente contraídos, por una razón clara, que no se cumple la exigencia de aportar un *tertium comparitionis* válido. Su matrimonio no fue un matrimonio legítimo en los términos empleados por el art. 38 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

(...)

TRIBUNAL SUPREMO

FESTIVIDADES RELIGIOSAS

STS de 6 de julio de 2015. Roj: STS 3533/2015

Visto por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 1851/2014, interpuesto por doña Ramona, representada por la procuradora doña María José Rodríguez Teijeiro, contra la sentencia nº 183, dictada el 19 de marzo de 2014 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y recaída en el recurso nº 369/2012, sobre resolución de 15 de junio de 2011 de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia por la que se desestimó la petición formulada por la recurrente para que se modificase el día de celebración de la prueba de acreditación de conocimiento de gallego en el proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 8 de abril de 2011.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.– (...)

Las bases de la convocatoria exigían que los participantes acreditaran el conocimiento de la lengua gallega [2.1 g)]. (...)

Por resolución de 30 de mayo de 2011 de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos se convocó la prueba de conocimiento del gallego para el sábado 18 de junio de 2011 a las 10:00 horas en el Instituto de Enseñanza Secundaria As Fontiñas.

La Sra. Ramona que, al presentar su solicitud para participar en el proceso selectivo hizo constar su condición de miembro comulgante de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día y que el sábado era día de precepto religioso para ella, solicitó el 13 de junio de 2011 que se le realizara en otra fecha la prueba de conocimiento de la lengua gallega. Entonces recordó su anterior escrito e invocó el artículo 12.3 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. La Dirección General de Centros y Recursos Humanos desestimó, en resolución de 15 de junio de 2011, la petición de la Sra. Ramona argumentando que, conforme a las bases, se trataba de una prueba de llamamiento único a realizar en unidad de acto. En este sentido, se debe tener presente que fueron llamadas otras cuarenta y ocho personas a la misma.

La Sra. Ramona no concurrió a la realización de esta prueba y, en consecuencia, fue excluida del proceso selectivo. Por eso, interpuso el recurso contencioso-administrativo desestimado por la sentencia objeto de este recurso de casación.

Su demanda sostenía que la resolución recurrida restringió injustificadamente su derecho a la libertad religiosa. Además de invocar los artículos 16.1, 9.2 y 53.1 de la Constitución, alegó también el artículo 2. apartado b) de la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa y el citado artículo 12.2 3 de la Ley 24/1992 y reprochó a la Administración haberse limitado a responder negativamente a su petición sin ofrecerle alternativas ni buscar compatibilizar todos los intereses en conflicto, por ejemplo ofreciéndole realizar la misma prueba que el resto de los participantes a partir de la puesta del sol el mismo sábado, aislándola hasta ese momento. Asimismo, recordó, apoyándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de octubre de 1976, que había advertido de su condición con suficiente antelación para que la Administración adoptase las oportunas medidas para que pudiera realizar el ejercicio de forma compatible con sus convicciones religiosas.

SEGUNDO.– La sentencia ahora recurrida rechazó que, como sostenía la Junta de Galicia, la pretensión de la Sra. Ramona no afectara al derecho fundamental a la libertad religiosa por fundarse, no en la Ley 7/1980, de Libertad Religiosa, sino en el artículo 12 de la Ley 24/1992, y porque había una causa que impedía examinarla de gallego en otro momento: la unidad del acto y el llamamiento único, a su vez medios para asegurar el principio de igualdad en el acceso a la función pública. (...)

Despejado este extremo, la sentencia identifica el núcleo del pleito: determinar si al negar la Administración a la recurrente la posibilidad de realizar la prueba de conocimiento del gallego un día distinto del sábado vulneró su derecho a conducirse externamente con arreglo a su convicción religiosa o si, por el contrario, resulta correcta por resultar fundada razonablemente. A tal efecto, transcribe el artículo 12 de la Ley 24/1992. También deja constancia de que en la fase de prueba la Sra. Ramona acreditó que la Universidad de Educación a Distancia (UNED) permite realizar los exámenes en una fecha distinta a la prevista con carácter general y que, pese a que esa posibilidad está prevista para los supuestos en que coincida la de dos asignaturas, pueden acogerse a ella quienes profesan alguna confesión religiosa que les impida su realización en los días marcados. Asimismo, tuvo por probado que el Ministerio de Sanidad, en unas pruebas selectivas de formación sanitaria especializada, admitió que los interesados se examinaran fuera del horario religioso del sábado y les exigió para ello que acudieran a la hora de la convocatoria general —15,30 del sábado— a la sede del Ministerio, donde permanecieron incomunicados hasta la puesta del sol, momento en que se les hizo el mismo examen que ya habían realizado los demás aspirantes.

No obstante, la Sala de La Coruña falla en contra de las pretensiones de la recurrente por las siguientes razones: (i) el derecho de libertad religiosa (...) "no puede alcanzar la obligación de que la Administración, en un Estado laico y aconfesional, se abstenga de realizar la convocatoria en esos días porque, como señala el TC no incluye el que el Estado venga obligado a otorgar prestaciones facilitadoras del cumplimiento de los preceptos de una confesión religiosa"; (ii) el artículo 12.3 de la Ley 24/1992 condiciona el señalamiento de una fecha alternativa a que no concurra causa que lo impida y la Administración señaló que la convocatoria y realización del ejercicio en unidad de acto, así como la garantía de transparencia del proceso, impedían acceder a la petición, decisión ésta motivada y conforme a las bases; (iii) el derecho a la libertad religiosa no

sólo está limitado por razones de orden público sino también por el debido respeto a derechos de terceros y también por otros bienes jurídicos protegidos constitucionalmente (STC 154/2002) y en este caso, a la prueba de acreditación de conocimiento del idioma estaban convocados, al menos, otros 48 participantes, de manera que si se les realizaran exámenes separados y/o distintos se vería afectado el derecho a la igualdad en la realización de la prueba y en el acceso a los cargos públicos garantizado en el artículo 23 de la Constitución y podría empañar la transparencia del proceso e incrementar el riesgo de filtraciones; (iv) ni el ejemplo de la UNED ni el del Ministerio de Sanidad llevan a una conclusión diferente porque, al margen de que proceden de Administraciones públicas diferentes, resulta que:

"a) por lo que hace a la UNED los estudiantes se acogen a una previsión de la propia normativa de realización de los ejercicios presenciales, cual es el turno de exámenes de reserva, aunque están previstos para otro supuesto, con lo cual no existe excepcionalidad alguna, porque los alumnos pueden acogerse a ellos al margen de sus confesiones; b) por lo que hace al criterio del Ministerio de Sanidad resulta, por una parte, que el mismo fue adoptado con ocasión de unas pruebas de acceso a una especialidad y, por otra, que los solicitantes interesaron la realización de la prueba el mismo día aunque después de la puesta del sol, accediendo a ser aislados desde la hora de la convocatoria hasta su terminación. En tanto que en el presente caso la solicitud de la recurrente era que el ejercicio se realizara en distinto día y, a diferencia de las pruebas del Ministerio de Sanidad, la prueba no estaba prevista para las 15,30 horas de un sábado sino para las 10:00 por lo que el período de voluntario aislamiento resultaría considerablemente más largo".

TERCERO.– El escrito de interposición contiene un único motivo de casación contra esta sentencia en el que, conforme al apartado d) del artículo 88.1 de la Ley de la Jurisdicción, le reprocha la infracción de los artículos 9.2 y 16.1 de la Constitución, así como de la legislación que los desarrolla y, en particular, del artículo 12.3 de la Ley 24/1992, al que, dice, vacía de contenido.

En su desarrollo la Sra. Ramona repasa la doctrina del Tribunal Constitucional a propósito de cada una de las razones esgrimidas por la sentencia para desestimar el recurso contencioso-administrativo.

Así, al argumento de esta última de que no corresponde a un Estado laico y aconfesional otorgar prestaciones facilitadoras del cumplimiento

de los preceptos religiosas, reprocha que la STC 166/1996, que lo acoge, se estaba refiriendo a prestaciones médicas en un contexto absolutamente distinto a éste y que ella no solicitó ninguna prestación específica mientras que la Administración sí debe facilitar la práctica efectiva de las creencias religiosas (STC 207/2013) y la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de octubre de 1976 (asunto 130/75), de la que nada dice la Sala de La Coruña, llama a evitar que se realicen exámenes en días de fiesta religiosa.

Además, subraya, la Administración conocía con más de dos meses de antelación el posible conflicto ético o moral que podía producirse y no siguió el camino que le marca el artículo 9.2 de la Constitución al que apuntan las STC 207/2013 y 154/2002. A este respecto, sostiene que en la ponderación de los derechos en conflicto no puede prevalecer "la comodidad de la Administración (...) que n(o) se (ha) molestado en buscar (...) la fórmula para compatibilizar el respeto y ejercicio de todos los derechos y bienes jurídicos en conflicto". (...)

CUARTO.– La Junta de Galicia se ha opuesto a este recurso de casación y nos pide que lo inadmitamos o, subsidiariamente, lo desestimemos.

Su inadmisibilidad la afirma porque considera que la recurrente ha desviado el debate original ya que sus peticiones anteriores a la convocatoria de la prueba de gallego no pueden ser objeto de examen ahora ya que no fueron impugnadas. (...)

QUINTO.– Debemos entrar en el examen del motivo y de la oposición que se le ha hecho porque no concurre la causa de inadmisibilidad alegada por la Administración gallega. (...)

SEXTO.– La Sala de La Coruña explica bien la relación que existe entre la pretensión de no realizar la prueba de conocimiento de la lengua gallega y el derecho fundamental a la libertad religiosa. Desde este punto de vista, puede decirse que ya no hay controversia pues la Junta de Galicia no ha vuelto sobre la posición negativa que mantuvo en la instancia sobre esa cuestión. En consecuencia, no es necesario que insistamos al respecto, pues se ha de dar por establecida esa conexión.

El problema afrontado y resuelto en los términos conocidos por la sentencia impugnada es si esa particular manifestación del derecho fundamental a la libertad religiosa debe ceder o no ante las causas hechas valer por la Junta de Galicia: el llamamiento único, la unidad de acto y

la garantía del principio de igualdad. Se trata de una cuestión que no se plantea en abstracto sino en el concreto marco jurídico establecido.

Tenemos, por tanto, un derecho fundamental, el reconocido por el artículo 16.1 de la Constitución, que ha sido objeto de la atención del legislador, tanto para desarrollarlo —Ley Orgánica 7/1980— cuanto para regular su ejercicio (artículo 53.1 de la Constitución) respecto de los miembros de determinadas confesiones en virtud de acuerdos con ellas recogidos legalmente. Exactamente lo que ha sucedido con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y con la Ley 24/1992 que, conforme a lo previsto en el artículo 7 de la Ley Orgánica 7/1980, ha aprobado el acuerdo alcanzado con ella.

El artículo 12 de esa Ley 24/1992 dice:

"Artículo 12.

El descanso laboral semanal, para los fieles de la Unión de Iglesias Adventistas del Séptimo Día y de otras Iglesias evangélicas, pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, cuyo día de precepto sea el sábado, podrá comprender, siempre que medie acuerdo entre las partes, la tarde del viernes y el día completo del sábado, en sustitución del que establece el artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores como regla general.

Los alumnos de las Iglesias mencionadas en el número 1 de este artículo, que cursen estudios en centros de enseñanza públicos y privados concertados, estarán dispensados de la asistencia a clase y de la celebración de exámenes desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, a petición propia o de quienes ejerzan la patria potestad o tutela.

Los exámenes, oposiciones o pruebas selectivas convocadas para el ingreso en las Administraciones Públicas, que hayan de celebrarse dentro del período de tiempo expresado en el número anterior, serán señalados en una fecha alternativa para los fieles de las Iglesias a que se refiere el número 1 de este artículo, cuando no haya causa motivada que lo impida".

Por tanto, tenemos que, siendo la Sra Ramona miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, puede acogerse a lo previsto en este precepto. También observamos que su apartado 3 contempla exactamente el supuesto que se ha dado: la convocatoria para la celebración de una prueba, parte de un proceso selectivo para el ingreso en las Administraciones Públicas, en un período comprendido entre la puesta de sol del viernes y la puesta del sol del sábado. Y, además, resulta que la Ley, para ese caso

ordena —"serán señalados", dice— que esos exámenes o pruebas selectivas se hagan para los fieles de las iglesias concernidas en una fecha alternativa "cuando no haya causa motivada que lo impida".

Los criterios de interpretación admitidos en Derecho nos ayudan a concluir que la regla en estos casos debe ser el uso de una fecha alternativa y la excepción la negativa a ello y que, como todas las reglas excepcionales, ha de ser objeto de un entendimiento restrictivo. Asimismo, sabiendo que la doctrina del Tribunal Constitucional ha reiteradamente afirmado el mayor valor de los derechos fundamentales y llamado a interpretar el ordenamiento jurídico de la manera más favorable a su efectividad, postulados estos tan consolidados que excusan de la cita de sentencias que los proclamen, esa anterior conclusión se ve reforzada y converge con las razones anteriores hacia la ulterior afirmación de que la causa que impida celebrar en fecha alternativa la prueba o examen ha de tener entidad suficiente y que la Administración la ha de poner de relieve con precisión.

Llegados a este punto, no cabe sino decir que, en este singular caso, la Junta de Galicia no ha identificado una causa que posea la entidad necesaria para imponer la solución que el legislador ha considerado como excepción. No lo ha hecho porque, tal como resulta de los elementos presentes en el proceso, es evidente que existen soluciones alternativas que permiten conciliar los derechos en conflicto: la práctica seguida por la UNED de ofrecer la posibilidad de examinarse en fechas distintas y con exámenes diferentes, muestra que pueden evaluarse los conocimientos aun con pruebas distintas del mismo nivel de exigencia, práctica que es técnicamente viable y una realidad admitida legalmente y utilizada en todos aquellos procesos selectivos en los que, por ejemplo, se prevén pruebas orales consistentes en la respuesta a temas elegidos. O la observada por el Ministerio de Sanidad.

(...)

Por tanto, el motivo de casación debe prosperar porque la sentencia de instancia debió discurrir en el sentido que acabamos de indicar en vez de limitarse a aceptar la justificación dada por la Junta de Galicia, en realidad meramente formal y, ciertamente, como dice la recurrente, tendente en la práctica a dejar sin contenido el artículo 12.3 de la Ley 24/1992.

SÉPTIMO.– La estimación del motivo comporta la anulación de la sentencia recurrida y, conforme al artículo 95.2 d) de la Ley de la Jurisdic-

ción, nos obliga a resolver la controversia en los términos en que apareciera planteado el debate.

Pues bien, las consideraciones precedentes imponen la estimación del recurso contencioso-administrativo, la anulación de la resolución de 15 de junio de 2011 por ser contraria al artículo 12.3 de la Ley 24/1992 y al derecho fundamental a la libertad religiosa. Y, asimismo, implica reconocer a la Sra. Ramona el derecho a que se siga respecto de ella el proceso selectivo y a que, de superarlo, se proceda a su nombramiento con efectos desde que se produjeron para los demás aspirantes nombrados en su momento.

OCTAVO.– (...)

FALLAMOS

(1º) Que ha lugar al recurso de casación nº 1851/2014, interpuesto por doña Ramona contra la sentencia nº 183, dictada el 19 de marzo de 2014, por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que anulamos.

(2º) Que estimamos en el recurso contencioso-administrativo nº 369/2012 y anulamos la resolución de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de Galicia de 15 de junio de 2011 desestimatoria de la petición de la recurrente de realizar la prueba de acreditación del conocimiento de lengua gallega en horario distinto al sábado religioso por ser contraria al artículo 12.3 de la Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, e infringir el derecho fundamental de la recurrente a la libertad religiosa.

(3º) Que reconocemos a la recurrente el derecho a proseguir el proceso selectivo y a que de superarlo con una puntuación igual o superior a la del último de los aspirantes que lograron plaza, a que se le nombre funcionaria del Cuerpo de Maestros en la especialidad de Educación Infantil con efectos desde que se produjeron para los demás nombrados.

(...)

SÍMBOLOS RELIGIOSOS

STS de 2 de diciembre de 2014. Roj: STS 5166/2014

(…)

Se dirige contra la sentencia dictada el 6 de septiembre de 2011 por la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana; recayó dicha sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 550/2010 interpuesto, por la vía especial de protección antes citada, contra la desestimación presunta de su solicitud formulada el 22 de febrero de 2010, acerca de la retirada de la "*Cruz de la Muela"* del Monte de La Muela, en el término municipal de Orihuela (Alicante).

Se mantiene la línea jurisprudencial establecida en la STS de 4 de marzo de 2013[9].

9 Cfr. Laicidad y Libertades. Escritos jurídicos. Nº 13, Vol. II, pp. 444 y ss.

IRLANDA

SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA RELACIÓN QUE VINCULA A UN CAPELLÁN/ PROFESOR DE RELIGIÓN CON EL CENTRO DOCENTE EN QUE PRESTA SERVICIOS[1]: Caso Conroy —v— Board of Management of Gorey Community School[2]

Mercedes Vidal Gallardo
Profesora Titular de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad de Valladolid

SUMARIO: 1. RÉGIMEN ESTATUTARIO DE LOS COLEGIOS RELIGIOSOS EN IRLANDA. 2. CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN EL CASO. 3.POSIBLE REVISIÓN JUDICIAL DE LA DECISIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO. 4. INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EDUCACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONCIERTO EDUCATIVO CON EL CENTRO PRIVADO. 5. INCOMPETENCIA DEL MINISTERIO EN RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DEL CAPELLÁN. 6. PROPUESTA DE READMISIÓN COMO PROFESOR DE RELIGIÓN DEL CAPELLÁN DESPEDIDO.ANEXO.

La cuestión objeto de controversia en esta resolución judicial gira entorno a la vinculación que existe entre el capellán de un colegio católico que, tras ser objeto de un expediente disciplinario, es destituido en el desempeño de sus funciones y readmitido en el centro como profesor de religión, circunstancia que representa una modificación sustancial en

[1] Trabajo realizado en el marco del Proyecto de Investigación I+D DER2013-42261-P, del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, bajo el título "Solidaridad, participación y convivencia en la diversidad".

[2] Sentencia de La Corte Suprema de Irlanda del Norte de 23 de enero de 2015, Número de Citación [2015] IEHC 103. URL: http://www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2015/H103.html.

la situación jurídica del profesor y que da lugar a la interposición de un recurso de revisión de la inicial decisión judicial.

1. RÉGIMEN ESTATUTARIO DE LOS COLEGIOS RELIGIOSOS EN IRLANDA

El demandante, sacerdote ordenado en la Iglesia Católica Romana, fue propuesto por el Obispo de Ferns para realizar funciones de capellán en el Gorey Community School. Las funciones que ha desempeñado en tal concepto han ido evolucionando con el tiempo, de manera que, aunque el demandante se involucró en tareas de pastoral y de enseñanza en la escuela, contractualmente se trataba de un auténtico capellán. El régimen jurídico vigente en Irlanda en esta materia, no exige que la persona que desempeñe las funciones de capellán tenga que ser necesariamente un sacerdote ordenado.

La reclamación se plantea contra el Consejo de Dirección del centro docente privado concertado que, como ocurre en la mayoría de los casos en Irlanda, adopta la forma de fideicomiso constituido entre el Ministerio de Educación y las personas que actúan en nombre de la Junta del centro. En el marco de este modelo de concierto, el objetivo último declarado por este centro católico es proporcionar un sistema integral de educación post-primaria, abierta a todos los niños de la comunidad, de manera que, en la escritura del fideicomiso se recoge la organización de este tipo de educación que obliga a la Dirección del centro a llevar a cabo y a ejecutar las obligaciones previamente convenidas, conforme a una programación cuya observancia es vigilada a través de unos instrumentos de control internos.

El Consejo de Dirección se encarga de la gestión y dirección del centro, funciones que comparte con la Junta de centro, órgano que asume la competencia de seleccionar y nombrar al personal docente. La Junta también puede contratar a profesores a tiempo parcial y a personal no docente. El contrato suscrito con el personal docente se ajusta a un formulario aprobado por el Ministerio, pero corresponde a los Estatutos del centro especificar la instrucción religiosa que se va a impartir en él, pudiendo destinar a un profesor a tiempo parcial a cumplir este cometido, sin perjuicio de que también un capellán pueda ser nombrado a propuesta de la autoridad religiosa competente.

2. CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES EN EL CASO

I.– En virtud de un auto dictado en enero de 2014, se admite a trámite el recurso presentado por el demandante contra la decisión tomada por la Junta del centro en octubre de 2013, en cuya virtud se acuerda retirar al solicitante de su cargo de capellán, así como prohibir que tenga contacto con los estudiantes de la escuela fuera del horario escolar, sin el consentimiento del director del centro. Por el presente recurso, el demandante solicita la revisión de esta decisión y la restitución en su condición de capellán de la escuela.

II.– La adopción de esta decisión por parte de la Junta del centro obedece a la demanda presentada por una ex-alumna que, en el año 2013, a través de sus padres, denunció haber mantenido relaciones íntimas con el demandado en los años 2006 y 2007. Debido a la gravedad de los hechos que se le imputan, el centro abre una investigación que determina la imposición de una sanción disciplinaria al ahora demandante, considerando que "ciertos aspectos de su conducta fueron inapropiados". El informe elaborado por un psicólogo cualificado recomienda que el demandante no desempeñe funciones de asesoramiento o de atención pastoral a los alumnos en la escuela.

III.– Tras la conclusión del proceso de evaluación de riesgos, el demandante solicitó ser readmitido en el centro. Sin embargo, al haber sido cesado en sus funciones de capellán, esta readmisión sólo podía tener lugar en condición de profesor de religión, lo cual exigía un registro previo en el Consejo de Enseñanza. A raíz de esta inscripción, la Junta del centro le comunica su readmisión como profesor de educación religiosa, si bien, sujeto a las condiciones y recomendaciones contenidas en el informe de evaluación emitido por el psicólogo.

IV.– El demandante recurre la decisión de la Junta de centro por la que se acuerda el cese de sus funciones como capellán y su readmisión como profesor de religión, teniendo en cuenta, además, que las condiciones que se le imponen son consideradas por éste como arbitrarias, irrazonables y desproporcionadas. Lo que se ventila en este proceso, con carácter previo, es si la decisión de esta Junta del centro es susceptible de revisión jurisdiccional.

3. POSIBLE REVISIÓN JUDICIAL DE LA DECISIÓN DE LA JUNTA DE CENTRO

I.– La relación jurídica que vincula al centro docente con su personal es compleja debido al hecho de que históricamente algunas de estos centros han estado gestionados por congregaciones religiosas, junto al protagonismo que asumen determinadas Iglesias, particularmente la Iglesia de Irlanda y de Iglesia Católica Romana en el nombramiento de algunos miembros del personal que prestan servicios para estos centros. Complejidad que se agrava en el caso de las personas que desempeñan las funciones de capellanes, teniendo en cuenta que su nombramiento para desempeñar este puesto ha sido realizado por el Obispo competente y, en consecuencia, se rige por el derecho canónico, pues las actividades que éste realiza tienen un carácter estrictamente pastoral.

II.– Hay dos factores que influyen en la naturaleza contractual de la relación que vincula al capellán con el centro. En primer lugar, en virtud de la escritura de fideicomiso, el capellán ha sido designado como personal del centro, a pesar de que la propuesta inicial de su nombramiento ha sido efectuada por las autoridades religiosas. Es decir, el capellán ha sido nombrado por la Junta Directiva y se le emplea en el centro como personal trabajador a tiempo completo, por lo que se puede decir que es contratado por la escuela. En segundo término hay que estar a lo dispuesto en la Ley de Educación de 1998, cuyo art. 24 reconoce a la Junta de centro la potestad para designar tanto al personal docente del centro como a "otro personal". En ambos casos, se trata de personas que deben ser retribuidas con fondos públicos del Estado, que pueden ser suspendidas de sus funciones o cesadas en sus puestos, sólo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24, nº 3, es decir, de conformidad con los procedimientos convenidos entre el Ministerio de Educación, el titular del centro y los representantes sindicales del personal docente y no docente que preste servicios en el centro.

III.– Desde este punto de vista, el capellán que presta servicios en un centro docente debe ser considerado como miembro del personal de la escuela y su despido o destitución deben ajustarse al procedimiento establecido por el Ministerio. En este mismo sentido se han pronunciado, entre otras, la Sentencia *O'Malley J.* in *Kelly v. Board of Management of St. Joseph's National School* [2013] IEHC 392. T. Ese caso se refería al Director de una escuela al que se le aplican determinadas disposiciones obliga-

torias relativas a la destitución o al régimen disciplinario de un Director, ajustándose a los procedimientos legalmente establecidos, por entender que la decisión de despedir, degradar o nombrar a un Director son decisiones que manifiestamente tienen un componente de carácter público. En otras palabras, todos los trámites procedimentales que deben observarse derivan de la ley y no del contrato.

4. INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO EDUCACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONCIERTO EDUCATIVO CON EL CENTRO PRIVADO

I.– El Ministerio de Educación suscribe un concierto con la escuela con el objeto de proporcionar un sistema integral de educación post-primaria abierta a todos los niños de la comunidad, que combina la instrucción y los aspectos académicos y prácticos junto a la educación de las personas que integran la comunidad escolar y en general, con el propósito de contribuir al desarrollo espiritual, moral, así como al bienestar físico y mental de las mismas.

II.– En consecuencia, la intervención del Ministerio en la organización del centro se extiende a los siguientes aspectos:

a) Aprobar anualmente los presupuestos del centro
b) Destinar un fondo anual para el mantenimiento del centro
c) Retribuir al profesorado
d) Asumir la responsabilidad en relación con la construcción de los edificios y el normal funcionamiento de las instalaciones escolares
e) Abastecer al centro de equipamiento, muebles y libros
f) En materia de profesorado, el número y la clasificación del personal docente está sujeto a la aprobación previa del Ministerio y, lo más importante, la estipulación de los requisitos para el nombramiento del personal es competencia suya. Decide, en última instancia, si el candidato reúne los requisitos para acceder al puesto de trabajo. Además, el Ministerio juega un papel decisivo a través del servicio de Inspección educativa, en el nombramiento de los profesores para la provisión de una plaza vacante.

g) La organización y la planificación de los estudios también implican al Ministerio, sin perjuicio del poder de dirección que tiene el Consejo escolar, siempre subordinado a las disposiciones normativas dictadas por el Ministerio en aras a garantizar la enseñanza en general, así como el carácter de la escuela.

III.– Precisamente, la cláusula 10.4 del concierto celebrado con este centro docente establece que "el reconocimiento a tiempo completo o de carácter temporal a media jornada de los profesores de religión se concederá a los sacerdotes o a cualquier otra persona cualificada". De manera que la Junta del centro está facultada para designar a los profesores de religión con la aprobación formal del Ministerio a partir de la propuesta de nombramiento de la autoridad religiosa respectiva. No obstante, la Junta es competente para dar por terminado este nombramiento, siempre y cuando esté debidamente justificado el cese, de acuerdo con la autoridad religiosa y el Ministerio de Educación, que desempeña un papel protector de los intereses públicos.

5. INCOMPETENCIA DEL MINISTERIO EN RELACIÓN CON LAS FUNCIONES DEL CAPELLÁN

I.– El nombramiento de un capellán es diferente. Es el Consejo del centro el que designa al capellán nombrado por la autoridad religiosa competente. Se trata de un miembro de la comunidad escolar empleado a tiempo completo que recibe una retribución equivalente a la del resto de profesorado, pero realmente no estamos en presencia de un profesor vinculado del centro. No existe ninguna disposición específica que atribuya al Ministerio función alguna en relación al nombramiento de un capellán. Tampoco juega ningún papel respecto a su selección o destitución. Ejerce sus funciones a tiempo completo como un miembro más del centro, pero sin aprobación o supervisión alguna del Ministerio, aunque sea éste quien le retribuye como al resto del personal docente.

II.– La propuesta del capellán es realizada por la autoridad religiosa competente y el nombramiento es efectuado por el centro. El papel del capellán en la escuela, a diferencia del profesor de religión, es muy residual. No interviene en el plan de estudios ni forma parte de la Junta de centro. Desempeña meramente funciones religiosas, así como de atención espiritual, pero en ningún caso se identifican con la función edu-

cativa de la institución. No se puede considerar que intervenga ningún elemento de derecho público en el nombramiento o en la destitución del capellán. El hecho de que el Estado le retribuya, no es por sí mismo elemento suficiente para considerarlo integrado dentro del sistema público, dependiente del Ministerio de Educación.

III.– Reiterada jurisprudencia en este sentido aprecia que la vinculación del capellán con la escuela es privada, de carácter contractual, y no deriva de la ley (Vid., Sentencia Peart J in *Becker v The Board of Management St. Dominick's Secondary School Cabra* [2005] 4 JIC 140). Por eso se desestima la pretensión del demandante de interponer recurso de revisión judicial de su despido, debido a que la rescisión de la relación que le vincula al centro donde prestaba servicios como capellán deriva de un contrato de carácter privado entre las partes.

6. PROPUESTA DE READMISIÓN COMO PROFESOR DE RELIGIÓN DEL CAPELLÁN DESPEDIDO

I.– El centro propone al religioso volver a prestar allí sus servicios, pero en este caso como profesor de educación religiosa en lugar de capellán. Éste solicita la revocación de las condiciones que le impone el centro para integrarse en él, por considerar que se extralimitan de las atribuciones que tiene el Consejo. De manera que, como consecuencia de una sanción disciplinaria, se le propone al religioso reingresar en el centro como profesor de religión *ex novo,* para la cual sería imprescindible ajustarse a los procedimientos de contratación previstos en la legislación educativa y en los Estatutos del centro.

II.– En definitiva, mientras que la naturaleza de la relación estrictamente contractual que vincula al capellán con el centro docente donde presta sus servicios no es susceptible de control jurisdiccional por las razones expuestas, sí que lo es, en cambio, la decisión de readmitir al demandante como profesor de religión en la escuela, pues intervienen en este caso elementos de derecho público en la vinculación jurídica entre el centro y el profesorado de religión que hace posible la revisión de la decisión impugnada.

ANEXO

THE HIGH COURT JUDICIAL REVIEW BETWEEN TOMMY CONROY APPLICANT AND BOARD OF MANAGEMENT OF GOREY COMMUNITY SCHOOL

Title:	Conroy -v- Board of Management of Gorey Community School
Neutral Citation:	[2015] IEHC 103
High Court Record Number:	2014 40 JR
Date of Delivery:	23/01/2015
Court:	High Court

JUDGMENT of Ms. Justice Baker delivered on the 23rd day of January, 2015

1. The applicant is a priest ordained in the Roman Catholic Church and some 21 years ago he was nominated by the then Bishop of Ferns to act as chaplain to Gorey Community School. His role evolved over time and although it did involve the applicant in both pastoral and teaching duties in the school, he was contractually a chaplain *simpliciter*. A chaplain in a Roman Catholic school is not required to be an ordained priest, or to have any other ministry of religion.

2. The respondents are the Board of Management of the school established, as are most community schools, under the model deed of trust for community schools made between the Minister for Education and identified persons who act as the Board and others who are trustees of the school. The school buildings themselves are held by the trustees under lease from the Minister, and the State pays some or all of the building costs of the school buildings themselves.

3. Under the model trust the trustees hold the property on trust for the purposes of the school with the declared object of providing a comprehensive system of post primary education open to all children of the community. The model trust deed incorporates a scheme for such education and the trustees covenant to perform and execute the obligations contained in the scheme set out in the two schedules to the deed, the first such schedule being the Instrument of Management and the second schedule being the Articles of Management.

4. Under the Instrument of Management there is established a Board of Management which is responsible for the governance and direction of the school subject to the provisions of the two schedules. The members of the

Board are those nominated by the patron, usually a religious body, two parents of children who are pupils in the school, two members who are serving teachers in the school, and the Board in total comprises 10 members as well as the principal of the school.

5. Under the Articles of Management the Board has a power to select and appoint teaching staff, the number of such staff to be subject to the prior approval of the Minister. The Board may also employ part-time teachers and non teaching staff. The contract of employment with teaching staff is to be in the official form supplied by the Minister. The Articles specifically provide for religious instruction to be given at the school and for the attendance of pupils thereat. A whole time or part-time teacher of religion may be appointed for that purpose. A chaplain may be appointed on the nomination of the relevant religious authority.

6. By order made on the 20th January, 2014 the applicant was granted leave to seek by way of judicial review an order of *certiorari* quashing a decision made by the Board on the 22nd October, 2013 insofar as the decision purports to:-

1) Remove the applicant from his position as chaplain of the school.
2) Assert that the applicant is not chaplain of the school.
3) Forbid the applicant from having contact with students of the school outside school hours without the consent of the school's principal.
4) Forbid the applicant from having a lead role in any school group activity and from participating in any trips with pupils.
5) Require the applicant to see his personal counsellor on a regular basis.

The applicant also obtained leave to seek by way of judicial review a declaration that the applicant is and remains chaplain of the school and ancillary injunctive relief prohibiting the respondent from removing the applicant as chaplain.

7. Sometime in 2011 a former pupil of the school made an allegation against the applicant through her parents that the applicant had had a sexual relationship with her in 2006 and 2007. The applicant was placed on administrative leave while this allegation was investigated by the respondent and, following the mandatory reporting to the HSE, by the HSE. The applicant has always denied and continues to deny all allegations of sexual impropriety, and ultimately the HSE determined that the complainant in question was not one within its remit, as the complainant was not under the relevant age of consent. The HSE, however, did advise the principal of the school that the allegations made by the former pupil were "very serious in nature" and in that context the Board conducted its investigation and inquiry.

8. The Board having determined to conduct its own investigation communicated its disciplinary complaint against the applicant by a letter of the 5th september, 2012 the relevant extract from which states the following (...).A disciplinary hearing was then convened on the 11th October, 2012 at which the applicant was legally represented. The complainant did not attend. The decision of the disciplinary hearing was communicated to the applicant's solicitor by a letter of the 5th December, 2012 which contained a finding that "on balance the Board believes that there was no sexual impropriety on the part of your client with the Complainant".

9. The letter however stated that the Board did believe "that certain aspects of your client's conduct were inappropriate", although it did not set out details of those matters or how it was suggested they were inappropriate.

10. Following this finding the applicant was requested and did in fact undergo a risk assessment through an assessor, a qualified psychologist, one Kieran McGrath. The process took a number of months and involved an independent consultation process with the applicant following which a report was prepared by Mr McGrath at the end of February 2013. He was asked in particular to assess whether the applicant posed any risk to students at the school and his finding in his written report was that the applicant posed a "low risk", the possibility of there being a "no risk" classification not being open to the assessor as the applicant was not in a sexual relationship because of his vow of celibacy. The assessor went on to recommend that the applicant not engage in counselling pupils in the school, that he refer students seeking pastoral care to the "school chaplain", that he not have any lead role in group activities, and that he not participate in any trips with students.

11. I accept the argument made on his behalf, and this flows indeed from the report of Mr McGrath himself, that in truth the applicant did not pose any risk to students, but having regard to the fact that he had taken a vow of celibacy and was not in a sexual relationship the finding that he was at low risk was the only one open to Mr McGrath, who explained that the vow of celibacy could itself in certain circumstances create a risk.

12. Following the conclusion of the risk assessment process the applicant sought through his solicitors to be restored to his duties at the school. To take up a role as teacher one is required to be registered with the Teaching Council, a statutory body established pursuant to the Teaching Council Acts 1996 to 2001, and the applicant applied and ultimately came to be registered in september 2013, following an appeal. The conditional registration of the applicant as a teacher by the Teaching Council is the subject of other judicial review proceedings not yet determined.

13. Following communication by the applicant to the Board that he had secured registration with the Teaching Council, the Board wrote to him by a

letter of the 22nd October, 2013 informing him that he could "return" to the school as a religious education teacher subject to certain conditions and the recommendations contained in Mr McGrath's risk assessment report.

14. The applicant asserts that by this letter the respondent has in effect removed him as chaplain at the school and the first ground of judicial review is that the applicant acted *ultra vires* and in breach of fair procedures in so doing. The second ground of judicial review is that the conditions imposed by the respondent were also not within the competence of the respondent and are harsh, arbitrary, unreasonable and disproportionate.

15. The respondent makes a preliminary objection that the issues arising in the proceedings are not matters of public law. It denies that there was any breach of fair procedure or natural justice and that the imposition of conditions was in excess of jurisdiction. By way of a separate argument the respondent asserts that what the applicant is in truth seeking to do is quash by way of judicial review the decision of the Board made on the 25th October, 2012, and that the applicant is well out of time for seeking such relief. I deal first with this question.

16. The applicant asserts that the true import of the decision made on the 22nd October, 2013 is to remove him as chaplain and seeks a declaration that such removal is unlawful, for the reasons outlined above. The respondent says that if a decision was made to remove the applicant as chaplain it was done some 11 months earlier following the disciplinary hearing on the 11th October, 2012 and the decision made by the Board following that hearing was communicated on the 5th December, 2012.

17. It has to be said that neither the letter of the 5th December, 2012 nor that of the 22nd October, 2013 expressly removes the applicant as chaplain of the school, but by implication the letter of 22nd October, 2013 which offers the "reinstatement" of the applicant as teacher of religious education has the practical effect that the applicant was offered a return to the school as a teacher but not as chaplain, albeit that he was to be a teacher of religious education.

18. The letter of 22nd October, 2013, was written by the secretary of the Board of Management of the school. The procedures that had occurred leading up to this letter were lengthy and conducted in a formal or relatively formal matter and the applicant had the benefit of legal advice and legal assistance throughout some or all of those procedures. The letter of the 22nd October, 2013 must be seen as a letter written by a lay person albeit, a person with an important role in the school, as a follow up from previous correspondence and events that occurred, and specifically it reports the decision of the Board following a meeting which took place to "consider the risk assessment report prepared by Kieran McGrath" and the fact that the applicant had by

then been registered as a teacher by the Teaching Council on the 10th October, 2013 (....).

20. In addition the letter required the applicant to accept and adhere to the recommendations made by Mr McGrath in his report.

21. Nowhere in the letter is the applicant's role as chaplain mentioned, but the letter undoubtedly expresses an offer by the school to "allow" the applicant to return to the school as a teacher of religious education. The use of the expression "return as a teacher of religious education" imports some degree of substitution of roles, and I accept that the letter by implication identifies a decision by the Board that the applicant would not be permitted to return as a chaplain (...).

24. I consider that on any reasonable interpretation the letter of the 5th December 2012, itself also contained an implicit dismissal of the applicant from his role as chaplain of the school. Indeed while it can be fairly said that there is no express removal of the applicant from that role, it is clear that the purpose of the risk assessment was not to restore the applicant as chaplain, but rather to consider whether he might "possibly" return to the school in a different capacity, namely as religious education teacher. It was with that possible return to the school on that basis and with that exact role in mind that the risk assessment was conducted.

25. Thus it seems to me that the applicant was dismissed as chaplain by the letter of 5th December 2012, and he is out of time to seek review of that decision. No reason has been advanced to support an extension of time and indeed as the applicant engaged fully with the process commenced after the letter of the 2nd December 2012, I regard that he has approbated the process to the extent that would disentitle him to seek an extension of time.

26. If I am incorrect in this conclusion, I also consider that the decision to remove the applicant is not amenable to judicial review for the reasons I now set out.

27. A relationship between a school and its staff members is complicated by the fact that some schools have historically been run by or through religious congregations, and by the direct role in the appointment of certain school staff that is taken by the churches, primarily the Church of Ireland and the Roman Catholic Church. The relationship is particularly complex in the case of a person employed as chaplain to a school and it might appear, having regard to the fact that the initial appointment of the applicant to the school as chaplain was made by the Bishop of Ferns, that the relationship was one governed by private law, or perhaps even by canon law, and that the role was entirely pastoral.

28. However matters are not so simple and two primary factors are relevant to understand the contractual nature of the relationship between the school and the applicant. The first arises from the deed of trust contained in the demise of the school lands by which the school chaplain is designated as a member of staff of the school notwithstanding that the initial nomination of him as chaplain may have come through the religious authorities. It may be doubted whether the Board of Management of the school has a power to appoint as chaplain someone other than the person nominated by the competent religious authority, but it cannot be doubted that the chaplain is appointed by the Board and is employed following his appointment as a full-time member of staff, by which must be meant that he is employed by the school. Some assistance is also to be gleaned from an analysis of s. 24 (1) of the Education Act 1998 which provides that a board of a school may appoint persons both as teachers and "other staff", and that such teachers and "other staff" so appointed are to be paid from monies provided by the Oireachtas but may be suspended or dismissed only in accordance with the provisions of s.24 (3) which I recite in full (...).

29. A chaplain must in that context be seen as a member of staff, properly characterised as "other staff of a school" and under s. 24 (3) suspension and dismissal of him by the Board must be done in accordance with the procedures set out or agreed from time to time by the Minister, if such have been agreed.

30. That this can in certain circumstances import a statutory and public law element to the relationship is clear from the very comprehensive analysis of the law in this area contained in the judgment of O'Malley J. in *Kelly v. Board of Management of St. Joseph's National School* [2013] IEHC 392. That case involved a principal of a school and certain mandated provisions relating to the removal or disciplining of a principal, but her judgment is of wider application. She identified in particular what she described as the *"statutory source for procedures within the sector"*, and held that the decision to dismiss or demote a principal as well as the decision to appoint a principal are *"decisions which manifestly have a public element"*.

31. I adopt the analysis of O'Malley J. in *Kelly v. Board of Management of St. Joseph's National School* and in particular note that the combination of the provisions in the trust deed and the statutory provision has the effect, as she described it, of incorporating the procedures from the Act into any disciplinary process engaged in by the school (...).

"With the object of providing a comprehensive system of post primary education open to all the children of the community, combining instruction and academic and practical subjects and ongoing education for persons living at or near aforesaid and generally for the purpose of contributing a spi-

ritual, moral, mental and physical well- being and development of the said community".

37. There is a provision that should it come to be considered at any time that it is impracticable to continue the school as a community school that the lease will be surrendered.

38. The Articles of Management bind the Board to these objects which are repeated in clause 2 and the provisions of the lease are recited almost in identical form, save that the establishment of the school is recited as being for the education of persons living in or near an identified town land in the relevant county, making the recitals in the Articles location specific. The Minister's involvement with the school is quite extensive: estimates for expenditure must be submitted to her every year; she maintains and establishes a school fund; she pays the salaries of teachers; she is responsible for the erection of the buildings and development of school premises and the provision of equipment, furniture, books etc. The number and classification of the teaching staff is subject to the prior approval of the Minister, and more importantly the qualifications for appointment of staff are stipulated from time to time by the Minister, who has a residual discretion to determine whether the validity of the qualifications of a candidate for appointment are within her requirements. She plays a role in the appointment of individual teachers, as the selection committee for the filling of a vacant post must at all times include an inspector of the Department nominated by the Minister. The organisation and curriculum also involve the Minister, and although the Board has what is described as the "general direction" of the conduct and curriculum of the school, this power is subject to the "provisions" of the Minister as protector of the general educational character of the school and its place in the educational system, as provided in clause 10(i). (...).

40. Clause 10(ix) provides that recognition as temporary full-time or part-time teachers of religion may be accorded to priests or to any other suitably qualified person and the Board is authorised to appoint such teachers of religion with the formal approval of the Minister on the nomination of the appropriate religious authority. While the Board is also authorised to terminate this appointment if and when necessary and in accordance with the wishes of that religious authority, the Minister plays a role as protector of the public interest.

41. The appointment of a chaplain is different however, and clause 10(x) provides that the Board will appoint a chaplain nominated by the competent religious authority who is to be employed outside the normal quota of the school. The chaplain is a full time member of staff and is paid a salary equivalent to that of a teacher in the school, but is not characterised as a teacher.

42. There is a specific provision with regard to teachers of religious instruction, and the appointment of such a teacher is subject to the formal approval of the Minister. There is however no such provision with regard to the appointment of the chaplain, and the Board of Management has power to appoint a chaplain subject only to the fact that the chaplain must be nominated by the relevant competent religious authority. The Minister has no role in the selection criteria, appointment or dismissal. The appointment of a chaplain is one which the Board can exercise without the approval of the Minister, albeit the chaplain is a full-time member of staff and is to be paid by the Minster a salary equivalent to that of the teacher in the school.

43. The Minister thus has no role in the appointment of the chaplain nor does the Board covenant with the Minister to, for example, seek the Minister's approval for the appointment of a chaplain, such as is found in regard to the appointment of a teacher, and in particular the chaplain is not appointed following a decision by a selection committee which I have noted includes an inspector of the Department nominated by the Minister. The appointment of the chaplain is outside that framework and the nomination of the chaplain is done by the relevant religious authority. The qualifications for the role of chaplain are not fixed by the Minister, unlike in the case of the qualifications for appointment of the teacher.

44. I note also that the Minister has a general role to oversee the general organisation and curriculum of the school and that the advisory committee which assists the Board in the running of the school consists of the principal, the vice principal and not more than five representatives of the teaching staff. The chaplain plays no role in this.

45. The Board, in clause 11, covenants with the Minister to ensure that there is religious worship and religious instruction for pupils, save where the parents of those pupils request that the pupils be withdrawn from religious worship or religious instruction and the Minister has a role in the provision of teachers of religious instruction who are appointed by a selection committee and whose appointment is subject to formal approval by the Minister. That role can be seen in the context of the recital of the spiritual purpose and trust to which one of the recited purposes for which the school is established and of which the Minister is protector.

46. No such provisions are contained with regard to the appointment of a chaplain and the chaplain is not for the purposes of his or her role as chaplain, deemed to be a teacher of religious education. The appointment of the chaplain, the role of the chaplain in the school, the selection of the chaplain, the position of the chaplain in the curriculum while they each have Board involvement, do not have any Ministerial involvement. The role of chaplain, then, is not subject to any covenant with the Minister and is not identified in

the context of the community and education purpose. The role of chaplain can to that extent be seen as residual and religious rather than a community role. There is accordingly no public law element in the appointment and dismissal of a chaplain.

47. I do not consider that the fact that the State pays the salary of a chaplain as importing a sufficient public law element and this is clear form the judgements noted above where the schools were wholly private, and from the judgment of Peart J in *Becker v The Board of Management St. Dominick's Secondary School Cabra* [2005] 4 JIC 1405 where he held that the grievance procedures were wholly contractual and did not arise from statute or mandatory regulation.

48. I have already held that the decision of the respondent to remove the applicant as chaplain occurred in October 2012 and that the applicant is out if time to bring an application for judicial review. Even if I am wrong in that I also hold that the applicant may not avail of the remedy of judicial review with regard to the removal of him as chaplain as that removal arose from the wholly private contract between the parties and does not arise from any covenant of the Board with the Minister, nor from any statutory provisions or public law purpose by which the Minister performed a role of protector of the community or public interests.

49. The letter of the 22nd October 2013 proposes a return by the applicant to the school as a teacher of religious education subject to his written acceptance of and adherence to the conditions which I have outlined above. The applicant also seeks an order of *certiorari* quashing the decision to impose these conditions, as having been imposed in breach of fair procedures, or outside the powers of the Board.

50. On one reading of the letter, and looking at it purely from the point of view of contract, what the Board did was offer the applicant the position of teacher of religion in lieu of his role as chaplain and the offer contained these conditions. I have already noted that the Board's communications are not, nor could one expect them to be, couched in legal language, and while to some extent the letter has the appearance of being an offer I cannot read it as being such in substance. This is primarily because what the letter does is identify a decision of the Board to "allow" the applicant to return to the school as a religious education teacher. It was a substitution of role, not the offer to the applicant of a new position, but permitting the applicant to continue to be employed at the school. (...).

52. I consider that the agreed procedures in the "Towards 2016" document apply. That document provides a very extensive mandatory scheme and provides a formula for procedures to deal with various types of disciplinary issues and in particular for the purpose of the argument of the applicant iden-

tifies a range of penalties that can be imposed and the penalty identified includes the deferral of an increment, withdrawal of an increment, demotion, suspension with or without pay or "other disciplinary action short of suspension or dismissal". There is a specific provision that:- *"The nature of the disciplinary action should be proportionate to the nature of the issue of work or conduct issue that is resulted in the sanction being imposed". (...)*.

61. I reject then the argument that the applicant was not fully informed before the disciplinary hearing of the matters in issue at that hearing, and that the finding that there had been a degree of inappropriate behaviour was not one in respect of which he had an opportunity to respond. Thus the offer to him of the new role as teacher of religious was not a decision made without giving him an opportunity to respond and was made within acceptable procedures. (...).

69. The decision to remove the applicant as chaplain is not one amenable to judicial review, but the decision to employ the applicant as teacher of religion in the school is one with a sufficient public law element to attract review. I reject the argument that the applicant was denied fair procedure in the way in which certain conditions were imposed upon him. He was well aware of the possible inclusion of these conditions either as a result of Mr McGrath's findings or as a result of the recommendations made by the Board. He cooperated with the risk assessment. There was no denial of his rights to fair procedure or constitutional justice in the process. I also find that the conditions imposed upon him were not harsh, arbitrary, disproportionate or irrational and are not ultra vires the Board.

ITALIA

Paulino César Pardo Prieto
Universidad de León

En 2008, los Sres. Oliari y A., que estaban conviviendo de forma estable, declararon su intención de contraer matrimonio, solicitándolo a la Oficina de Estado Civil del Ayuntamiento de Trento. El 25 de julio de 2008, cuando su solicitud fue rechazada, los dos demandantes acudieron en vía de recurso ante el Tribunal de Trento, argumentando que la legislación italiana no prohíbe explícitamente el matrimonio entre dos personas del mismo sexo y, de otro lado, si así fuera, esa prohibición debería considerarse inconstitucional.

Mediante decisión de 24 de febrero de 2009, el Tribunal de Trento rechazó su demanda al considerar que la Constitución italiana no establece los requisitos para contraer matrimonio pero el Código civil sí y de manera precisa determina que uno de esos requisitos es justamente que los esposos sean de distinto sexo.

Habiendo llegado el caso ante la Corte Constitucional italiana, ésta dictó sentencia el 15 de abril de 2010. En ella recordaba que el artículo 2 de la Constitución italiana reconoce y garantiza los derechos inviolables del Hombre, ya sea como individuo o como integrante de las formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social. Considerando, además, que por grupo social ha de entenderse cualquier forma de comunidad, simple o compleja, dirigida a facilitar y promover el libre desarrollo de los individuos a través de sus interrelaciones, concluyó que tal definición permitía considerar incluidas en ella a las uniones homosexuales, entendidas como la convivencia estable de dos personas del mismo sexo que disponen del derecho fundamental a expresar libremente su personalidad a través de su relación de pareja, recibiendo —en el tiempo, en la forma y con los límites dispuestos por las leyes— reconocimiento jurídico con los consiguientes derechos y obligaciones.

La Corte Constitucional puntualizaba, sin embargo, que para este reconocimiento se hace necesario contar con una regulación legal gene-

ral que contenga los derechos y obligaciones de los convivientes, la cual puede ser dispuesta mediante fórmulas distintas de la institución del matrimonio, como muestran los diferentes sistemas ensayados en Europa. Corresponde al legislador ordinario definir cuál sea el modelo de reconocimiento más apropiado dentro del ejercicio discrecional de sus competencias siempre dentro del respeto al principio de igualdad en aquellos aspectos comunes a las parejas homosexuales y heterosexuales y, en todo caso, en lo atinente a los derechos fundamentales individuales. Por último, la Corte Constitucional añadía que esa obligación no significaba que las parejas homosexuales debieran recibir un tratamiento equivalente al dispensado al matrimonio.

Sobre la cuestión volvió el pasado año la Corte Constitucional en su sentencia 170/2014[1], al resolver acerca de un "divorcio forzado", señalando que el legislador tenía la obligación de ofrecer a las parejas de hecho un estatuto jurídico alternativo al matrimonial, considerando inconstitucional que, a consecuencia de la reasignación de sexo de uno de los miembros de la pareja, pudiera pasarse de un estadio de máxima protección a otro de absoluta incerteza. Al efecto, la Corte reclamaba del legislador una inmediata intervención normativa que acabara con un vacío legal del que se deduce una inaceptable falta de protección para la pareja.

En el proceso del que trae causa la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos analizada, se acumularon a la anterior las demandas de otras dos parejas, las formadas por los Sres. Felicetti y Mr. Zappa y los Sres. Perelli Cippo y Zacheo. Ambas habían solicitado que se dispusieran amonestaciones en orden a celebrar matrimonio y, en ambos casos, tales solicitudes fueron rechazadas.

El fallo de la sentencia concluye que la inacción del Estado italiano supone una violación del artículo 8 del Convenio y, en la línea de lo indicado precedentemente por la *Corte Costituzionale*, declara que existe una obligación positiva por parte del legislador de aquel país de poner en marcha una regulación de las parejas extramatrimoniales que proteja los derechos fundamentales de sus integrantes.

No obstante, tres jueces (los magistrados Mahoney, Tsotsoria y Vehabovic) suscriben una opinión particular para señalar su disconformidad

---

[1] Véase PARDO PRIETO, P. C., *Italia, Crónica jurisprudencial*, nº. 14, 2, 2014, pp. 479-503.

con la posibilidad de que el Tribunal pueda imponer en este caso ese tipo de obligación.

ANEXO I

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Sentencia Oliari y otros c. Italia, 21 de julio de 2015

"II. NORMATIVA INTERNA RELEVANTE Y DERECHO INTERNACIONAL

(...)

3. Otros casos relevantes relacionados con las parejas del mismo sexo.

(...)

37. En un caso seguido ante el Tribunal de Reggio Emilia, los demandantes (una pareja del mismo sexo) solicitó, no el reconocimiento de su matrimonio celebrado en España sino el de su derecho a vivir en familia en Italia. El Tribunal, mediante decisión de 13 de febrero de 2012, a la luz de las directivas de la Unión Europea traspuestas por el ordenamiento jurídico italiano así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Consideró que tal matrimonio era válido al menos a fin de obtener un permiso de residencia en Italia.

38. En sentencia de 3 de abril de 2014, el Tribunal de Grosseto resolvió que el rechazo por el registro civil de la inscripción de un matrimonio celebrado en el extranjero habría de considerarse ilegal. Presentado por el Estado recurso ante la Corte de Apelación de Florencia, casó la decisión al apreciar un defecto de procedimiento.

(...)

4. Acuerdos de cohabitación.

39. La normativa italiana no prevé los acuerdos de cohabitación.

40. La protección de las parejas convivientes *more uxorio* ha venido deduciéndose del artículo 2 de la Constitución italiana, conforme a una doctrina jurisprudencial iniciada a partir de 1988. Desde 2012, además, esa doctrina jurisprudencial ha sido progresivamente hecha extensiva a las parejas homosexuales, al considerarlas merecedoras de una misma protección.

41. En orden a cubrir la laguna existente en la legislación, con efectos desde 2 de diciembre de 2013, es posible realizar 'acuerdos de cohabitación', a título privado y sin una forma predeterminada por la ley, aptos no ya para parejas estables si no para todo tipo de convivientes: con relación de parentesco, compañeros, amigos, simples compañeros de piso... Tales con-

tratos regulan principalmente los aspectos económicos de la relación durante la convivencia y cuando esta cesa, así como la asistencia al otro en caso de enfermedad o incapacidad.

(...)

5.– Uniones civiles.

42. La legislación italiana no facilita ninguna alternativa a la unión matrimonial, ni a las parejas heterosexuales ni a las homosexuales.

43. En un informe elaborado en 2013 por el Prof. Franco Gallo (Presidente entonces de la Corte Costituzionale), dirigido a las máximas autoridades italianas señalaba "(...) *las parejas del mismo sexo tienen el derecho fundamental a obtener reconocimiento legal de su unión, con los consiguientes derechos y obligaciones. Corresponde al Parlamento propiciar tal regulación en los términos y dentro de los límites que considere apropiados*".

(...)

44. No obstante, algunas ciudades han establecido registros de uniones civiles entre personas no casadas del mismo o distinto sexo, así lo han hecho, entre otras, Empoli, Pisa Milán, Florencia o Nápoles. En todo caso, el registro de estas uniones civiles tiene un valor meramente simbólico.

(...)

45. Del mismo modo, la Corte Costituzionale, en sus sentencias 276/2010, de 7 de julio (...) ha reiterado que el reconocimiento jurídico de las uniones homosexuales no exige el establecimiento de una unión igual al matrimonio, como muestran las diferentes regulaciones adoptadas en los distintos países y que conforme al artículo 2 de la Constitución ha de ser el Parlamento quien, en el ejercicio de su discrecionalidad, regule el reconocimiento y habilite las garantías jurídicas adecuadas a esas uniones.

Más recientemente, en un caso concerniente al rechazo de la práctica de amonestaciones respecto de una pareja del mismo sexo que las había solicitado, la Corte de Casazione, en sentencia número 2400/15, de 9 de febrero de 2015, rechaza la solicitud de los demandantes. Considerando los casos recientes ofrecidos por la jurisprudencia italiana e internacional, concluye que así como las parejas del mismo sexo han de ser protegidas según el artículo 2 de la Constitución italiana, correspondiendo al legislativo tomar las medidas adecuadas para asegurar el reconocimiento de tales uniones, la carencia de un matrimonio homosexual no es incompatible con el sistema de protección de los derechos humanos nacional e internacional. Consecuentemente, la falta de un matrimonio para personas del mismo sexo podría no ser considerada como tratamiento discriminatorio: el problema que plantea el sistema actual radica en el hecho de que no ha sido reconocida otra unión, fuera del matrimonio, ya sea para parejas del mismo o de distinto sexo.

(...)

B Derecho europeo y comparado.

1. Derecho comparado

55. Son a día de hoy 24 de 47 los países miembros del Consejo de Europa que han implementado una legislación que permite a las parejas del mismo sexo obtener un reconocimiento legal como matrimonio o bien como pareja registrada (...)

(...)

DECISIÓN DE LA CORTE.

a) Artículo 8

(1) Principios generales.

159. Dado que el objeto del artículo 8 es proteger a los individuos contra cualquier interferencia arbitraria de los poderes públicos, esto conlleva para el Estado ciertas obligaciones positivas que aseguren el efectivo respeto de los derechos protegidos por el artículo 8 (ver, entre otros, X e Y c. Países Bajos, 26 de marzo de 1985, §23, Serie A, nº. 91; Maumousseau y Washington c. Francia, nº. 39388/05, §83, 6 de diciembre de 2007; Söderman c. Suecia [GC], nº. 5786/08, §78, ECHR 2013; y Hämäläinen c. Finlandia [GC], Nº. 37359/09, § 62, ECHR 2014). Estas obligaciones pueden incluir la adopción de medidas dirigidas a asegurar el respeto hacia la vida privada o familiar también en la esfera de las relaciones de los individuos entre sí (véase, entre otros, SH y otros c. Austria [GC], nº. 57813/00, §87, ECHR 2011, así como Söderman, precitada, § 78).

160. Los principios aplicables para valorar conforme a la Convención cuáles son las obligaciones positivas y negativas de los Estados son similares para todos ellos. A este respecto, debe sopesarse cuidadosamente cuál es el lugar que corresponde a los derechos e intereses individuales y cuál el que corresponde a la comunidad en su conjunto (véase Gaskin c. Reino Unido, 7 de julio de 1989, § 42, Serie A, nº. 160, y Roche c. Reino Unido [GC], nº. 32555/96, § 157, ECHR 2005-X).

161. La noción de respeto no es clara, especialmente en cuanto se refiere a la extensión de las obligaciones positivas; según cuáles sean las prácticas adoptadas y las situaciones alcanzadas en cada uno de los Estados Parte, los contenidos de la noción pueden llegar a variar considerablemente de un lugar a otro. (véase Christine Goodwin c. United Kingdom [GC], nº. 28957/95, §72, ECHR 2002-VI). Sin embargo, algunos elementos han de considerarse relevantes a la hora de valorar cuál ha de ser el contenido de las obligaciones positivas de los Estados (Hämäläinen, precitada, §66). Particularmente relevante es en el presente caso el impacto en los demandantes de una situación en la que se produce una discordancia entre la realidad social y la ley pues

la coherencia de las prácticas legales y administrativas con el sistema jurídico interno es un factor fundamental en la valoración requerida por el artículo 8 (véase, *mutandis mutandi*, Christine Goodwin, precitada, §§ 77-78; I. c. Reino Unido [GC], nº. 25680/94, § 58, de 11 de julio de 2002, y Hämäläinen, precitada, §66).

(...)

La cuestión es también si la obligación alegada es sucinta y precisa o amplia e indeterminada (véase Botta c. Italia, de 24 de febrero de 1998, §35, Reports 1998-I) y cuál pueda ser la extensión de la obligación que puede imponerse a un Estado (Christine Goodwin, precitada, §§ 86-88).

162. Al implementar su obligación positiva conforme al artículo 8, el Estado dispone de un cierto margen de apreciación. Un amplio número de factores ha de ser tenido en cuenta al momento de precisar la amplitud de dicho margen. En el marco de la 'vida privada', la Corte ha considerado que allí donde se encuentra una faceta particularmente importante para la vida o la identidad de los individuos, se encuentra también un límite al margen permitido a los Estados (véanse, por ejemplo, X and Y, precitada, §§ 24 y 27; Christine Goodwin, precitada, §90; véase también Pretty c. Reino Unido, nº. 2346/02, §71, ECHR 2002-III). En lo que, sin embargo, no existe consenso entre todos los Estados miembros del Consejo de Europa es en lo relativo a la importancia del interés que determina el límite o cuáles son los mejores medios para protegerlo, especialmente si el caso afecta a sensibilidades morales o cuestiones éticas (véanse X, I y Z c. Reino Unido, de 22 de abril de 1997, §44, Reports 1997-II; Freettè c. Francia, nº. 36515/97, §41. ECHR 2002; y Christine Goodwin, precitada, § 85). Allí se encontrará normalmente un amplio margen si el Estado es requerido para realizar un balance entre intereses privados y públicos o entre distintos derechos de la Convención que se encuentren en pugna (véase Fretté, precitado, § 42; Odièvre c. Francia [GC], nº. 42326/98, §§ 44-49, ECHR 2003-III; Evans c. Reino Unido [GC], nº. 6339/05, § 77, ECHR 2007-I; Dickson c. Reino Unido [GC], nº. 44362/04, § 78, ECHR 2007-V; S.H. y Otros, precitada, § 94).

(...)

164. En el presente caso, los demandantes aún hoy carecen de la oportunidad de formar una unión civil o una pareja registrada en Italia. Así es que corresponde a este Tribunal determinar si Italia, en este momento, está dejando de cumplir con la obligación positiva de asegurar el respeto hacia la vida privada de los demandantes, en particular por razón de la provisión de un cuerpo normativo que les permita disponer de reconocimiento y protección en el ordenamiento interno.

165. El Tribunal ha reiterado que resulta incontestable que las parejas del mismo sexo están en las mismas condiciones que las parejas de diferente

sexo en orden a mantener una relación estable entre sus miembros y que están en una muy similar situación también en cuanto a su necesidad de ser reconocidas y protegidas (véase Schalk y Kopf, § 99, y Vallianatos, §§ 78 y 81, precitados). De donde se sigue que el Tribunal ya conoce que las parejas del mismo sexo se encuentran en la necesidad de obtener reconocimiento y protección para su relación (véase Schalk and Kopf, § 99, y Vallianatos, §§ 78 y 81, ambos precitados).

(...)

167. El Tribunal aprecia que los demandantes, los cuales no pueden casarse, han visto cerrado el acceso a un marco legal específico (como el de las uniones civiles o las parejas registradas) capaz de proveerles del reconocimiento de un estatuto y de garantizarles ciertos derechos de importancia para una pareja que mantiene una relación de compromiso estable.

(...)

169. La actual situación de los denunciantes en el ámbito jurídico interno puede ser considerada solo como una unión 'de facto' que debe ser regulada mediante cierto tipo de acuerdos de carácter contractual cuyos efectos son limitados. Con respecto a los mencionados acuerdos de cohabitación, el Tribunal aprecia (véanse los parágrafos 41 a 129) que tales acuerdos privados fallan cuando se trata de proveer ciertas necesidades básicas que son fundamentales para la regulación de una relación de pareja comprometida y estable como, por ejemplo, los derechos y obligaciones de cada uno respecto del otro, incluidos el apoyo moral y material, observación de las obligaciones o derechos hereditarios (véanse Vallianatos, § 81, in fine, y Schalk y Kopf, § 109, ambas precitadas).

170. Más aún, no ha quedado probado que los tribunales estatales pudieran fijar un estatuto de reconocimiento formal, ni ha explicado el Gobierno cuál sería la extensión de dicho estatuto (véase el parágrafo 82). Por el contrario, los tribunales nacionales han recordado repetidamente la necesidad de asegurar la protección de las uniones del mismo sexo y evitar un trato discriminatorio (...). De las sentencias sometidas a la atención del Tribunal, se deduce que el reconocimiento de ciertos derechos ha sido rigurosamente solicitado por los tribunales.

(...)

El Gobierno admite, incluso, que la protección de las uniones del mismo sexo está más asentada en algunos aspectos que en otros (pár. 131) y es notorio que el Gobierno continuamente ejerce su derecho a objetar cada una de las peticiones (véase, por ejemplo, la apelación contra el Tribunal de Grosseto).

(...)

173. En cuanto a los principios generales mencionados en el parágrafo 161, el Tribunal observa que se sigue del examen del derecho interno que existe un conflicto entre la realidad social de los demandantes —los cuales viven la mayor parte de su relación abiertamente en Italia— y la ley, que no les otorga reconocimiento oficial en ese territorio. Desde el punto de vista del Tribunal, la obligación de proveer al reconocimiento y protección de las uniones del mismo sexo, permitiendo de este modo que la ley sea reflejo de la realidad en que viven los demandantes, no comportaría un coste especial para el Estado italiano. Más aún, dicha normativa cubriría una importante necesidad socia pues, como ha observado ARCD, las estadísticas oficiales muestran que hay 1.000.000 de homosexuales (o bisexuales), solo en la zona central de Italia.

(...)

174. A la luz de las anteriores consideraciones, el Tribunal considera que en ausencia de una regulación del matrimonio, para las personas del mismo sexo, como los demandantes, resulta de particular importancia contar con la posibilidad de acceder a alguna forma de unión civil o pareja registrada, éste sería el modo más apropiado para que pudieran ver reconocida legalmente su relación y para encontrar garantizada su protección —al menos en cuanto a los derechos básicos relevantes para una relación de compromiso estable— sin obstáculos innecesarios. Más aún, el Tribunal está en condición de sostener que tales relaciones civiles tienen un valor intrínseco para personas que se hallan en la situación de los demandantes, independientemente de sus efectos jurídicos, ya sean limitados o extensos, que pudieran comportar (véase Vallianatos, precitado, § 81). Este reconocimiento podría incluso producir una cierta sensación de legitimidad para las parejas del mismo sexo.

(...)

175. El Tribunal reitera que cuando se trata de valorar las obligaciones positivas de un Estado deben ser delicadamente sopesados los intereses correspondientes a los individuos y los de la comunidad en su conjunto. Habiendo identificado previamente los intereses individuales en juego, el Tribunal ha de proceder a compararlos con los intereses de la comunidad en su conjunto.

176. El Tribunal ha de señalar que el Gobierno italiano no ha conseguido explicar con claridad cuáles serian esos intereses de la comunidad.

(...)

177. Con respecto al alcance del margen de apreciación, el Tribunal ha de señalar que se encuentra en conexión con varios factores. Si bien puede aceptarse que en este caso la cuestión central estaría vinculada a la sensibilidad moral o ética, la cual permite conceder un mayor margen de apreciación en caso de ausencia de consenso entre los estados miembros, ha de consi-

derarse que este caso no afecta a unos determinados derechos especiales y complementarios (en el sentido de opuestos a básicos) que pudieran o no estar afectados por tales uniones y que pudieran ser objeto de radicales controversias justamente por la sensibilidad de su alcance.

En conexión con esto, el Tribunal ha sostenido que los Estados disponen de un cierto margen de apreciación con respecto al estatuto preciso conferido a través de varias fórmulas de reconocimiento (véase Schalk and Kopf, precitada, §§ 108-09).

De hecho, el presente caso concierne únicamente a la genérica necesidad de reconocimiento legal y la más esencial protección de los demandantes como parejas del mismo sexo. El Tribunal considera que esto último es un aspecto de la existencia y de la identidad individual que el margen relevante de apreciación debería respetar.

(...)

179. Volviendo a la situación de Italia, el Tribunal observa que si bien los gobiernos suelen ser los mejor situados para valorar los intereses de la comunidad, en el presente caso, el legislador italiano parece no haber concedido suficiente importancia a las indicaciones hechas por su comunidad, teniendo por tal tanto a la población italiana en general como a las más altas autoridades judiciales.

180. El Tribunal ha constatado que en Italia la necesidad de reconocer y proteger tales relaciones ha adquirido una gran trascendencia para las más altas autoridades judiciales, incluida la Corte Constitucional y la Corte de Casación. Mención especial debe hacerse de la sentencia de la Corte Constitucional nº. 138/10; en el caso de los dos primeros demandantes, cuyas conclusiones fueron reiteradas en toda una serie de sucesivas sentencias que tuvieron lugar en los años siguientes (véanse algunos ejemplos en el anterior parágrafo 45). En tales casos, la Corte Constitucional, notoria y repetidamente, ha reclamado un reconocimiento jurídico de derechos y deberes para las uniones homosexuales (véase, entre otros, el parágrafo 16), una posibilidad que podría solo ser llevada a cabo por el Parlamento.

181. El Tribunal observa que tal expresión refleja los sentimientos de una mayoría de la población italiana, como muestran las encuestas oficiales (véase parágrafo 144). Las estadísticas ofrecidas indican que hay entre la población italiana una general aceptación tanto de las parejas homosexuales como de su reconocimiento y protección.

(...)

185. En conclusión, no existiendo ese interés preferente de la comunidad al que se había referido el Gobierno italiano, con el que habría que confrontar el interés de los demandantes antes identificado, y a la luz de las conclu-

siones adoptadas en la materia por los Tribunales estatales y que han sido desatendidas, el Tribunal encuentra que el Gobierno italiano ha sobrepasado su margen de apreciación y dejado de cumplir su obligación positiva de asegurar que los demandantes dispongan de un marco jurídico que salvaguarde el reconocimiento y la protección de las uniones del mismo sexo.

186. El Tribunal constata que el Gobierno se muestra poco dispuesto a tomar nota de los cambios en las condiciones en Italia y reacio a aplicar la Convención en un sentido pragmático y eficaz.

187. Se ha producido, por tanto, una violación del artículo 8 de la Convención

188. Teniendo a la vista su conclusión respecto del artículo 8, el Tribunal considera que no es necesario examinar si en este caso habría también una violación del artículo 14 en relación al artículo 8.

(...)

200. Por último, en conexión con la solicitud de los demandantes, el Tribunal constata que, se han violado sus derechos de conformidad con el artículo 8, al observarse la ausencia de un marco legal que permita el reconocimiento y protección de su relación. De acuerdo con el artículo 46 de la Convención, corresponde al Estado demandado implementar, bajo la supervisión del Comité de Ministros, medidas generales y/o individuales para cumplir su obligación de asegurar el derecho a la vida privada y familiar de los demandantes y de las demás personas en su situación (véase Scozzari y Giunta c. Italia [GC], n. 39221/98 y n. 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII, Christine Goodwin, precitada, § 120, ECHR 2002-VI; y S. y Marper c. Reino Unido [GC], n. 30562/04 y n. 30566/04, § 134, ECHR 2008).

(..)

Por estas razones, el Tribunal unánimemente,

1. Declara admisibles las demandas conforme al artículo 8 y al artículo 14 (...).

2. Concluye que se ha producido una violación del artículo 8 de la Convención".

REINO UNIDO
CRÓNICA JURISPRUDENCIAL*

Mª Cruz Llamazares Calzadilla
Profesora Titular de la Universidad Carlos III de Madrid
Catedrática habilitada

DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN SEXUAL: BULL AND ANOTHER V HALL AND ANOTHER**

27 de noviembre de 2013

SUMARIO: la apelación, resuelta por el Tribunal Supremo el 27 de noviembre de 2013, establece que el derecho a la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual no puede ser limitado en la vida civil por el mandato doctrinal religioso con el que cada uno se identifique.

a. Antecedentes

Los apelantes, Sr. y Sra. Hall, propietarios de un hotel de naturaleza completamente privada, son cristianos practicantes y seriamente comprometidos con la ortodoxia doctrinal que entiende las relaciones sexuales fuera del matrimonio como pecado y el matrimonio en sentido clásico, como la unión de hombre y mujer. En consecuencia, sólo alquilan habitaciones dobles a "parejas heterosexuales casadas", según consta en su política de admisiones cuando tienen lugar los hechos. Enfrente, los Sres. Bull y Preddy, pareja homosexual establecida como unión de hecho conforme a la Ley de Uniones Civiles de 2004[1] (que permite a las parejas del mismo sexo disfrutar de un estatuto jurídico que, sin constituir un matrimonio, atribuye prácticamente los mismo derechos y deberes

---

* Cualquier traducción es mía.

** [2013] UKSC 73, on appeal from [2012] EWCA Civ 83 (Texto completo en inglés en: http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/73.html).

[1] Civil Partnership Act 2004 (c. 33).

que éste), reservaron telefónicamente en 2008 una habitación doble en el hotel de los Hall, sin ser informados en ese momento de la política de admisiones. Al registrarse y comprobar su condición de pareja del mismo sexo se les comunicó que no podían compartir una habitación doble, ante lo que, tras intentar defender sus derechos sin éxito, decidieron buscar otro alojamiento.

En 2009 Bull y Preddy procedieron judicialmente contra los Hall por entender que su negativa a proveerles de una habitación doble constituyó una vulneración del Reglamento de la Ley de Igualdad (Orientación Sexual) de 2007[2]. Dicha norma establece que es contraria a Derecho la discriminación, tanto directa como indirecta (si bien en este caso sólo si es injustificada), con base en la orientación sexual:

- hay discriminación directa cuando una persona se le trata de un modo negativo y perjudicial en relación a otras, por su orientación sexual (art. 3.1)[3];
- hay discriminación indirecta cuando se aplica a varias personas una práctica o política que pone a una de ellas en situación de desventaja frente a las otras por razón de su orientación sexual, y esa política o práctica no está razonablemente justificada por otras razones que nada tengan que ver con la orientación sexual del afectado (art. 3.3)[4];

---

2 Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007 (SI 2007/1263).

3 "For the purposes of these Regulations, a person ("A") discriminates against another ("B") if, on grounds of the sexual orientation of B or any other person except A, A treats B less favourably than he treats or would treat others (in cases where there is no material difference in the relevant circumstances)".

4 "For the purposes of these Regulations, a person ("A") discriminates against another ("B") if A applies to B a provision, criterion or practice
(a) which he applies or would apply equally to persons not of B's sexual orientation,
(b) which puts persons of B's sexual orientation at a disadvantage compared to some or all others (where there is no material difference in the relevant circumstances),
(c) which puts B at a disadvantage compared to some or all persons who are not of his sexual orientation (where there is no material difference in the relevant circumstances), and
(d) which A cannot reasonably justify by reference to matters other than B's sexual orientation.

– en lo referido a las arts. 3.1 y 3.3, la unión de hecho y el matrimonio deben ser tratados por igual (art. 4)[5].

En primera instancia, el Tribunal entendió que efectivamente existía una discriminación directa, y así lo estimó también el Tribunal de Apelación. Contra esta resolución, los Hall acuden al Tribunal Supremo. Basan su recurso en los siguientes argumentos:

– nunca existió discriminación directa;
– si bien su política de admisiones supone una discriminación indirecta, ésta está justificada porque no se basa en la orientación sexual sino en el estado civil, con lo que no le es aplicable el Reglamento de la Ley de Igualdad referido más arriba; y
– que en todo caso el Reglamento debe ser interpretado de manera compatible con el artículo 9 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (derecho a manifestar libremente la propia religión).

b. Fundamentos jurídicos

Sobre la discriminación directa o indirecta

– Entiende la mayoría del Tribunal que ha existido discriminación directa desde el momento en que, al estar basada la política de admisiones de los recurrentes en un concepto cristiano del matrimonio que implica la unión de un hombre y una mujer (§ 25), se excluye a las uniones civiles que, en la práctica, y más allá de dar protección a las parejas del mismo sexo, no se distinguen del estatuto matrimonial más que por el nombre (§ 26). La política de admisiones implica por tanto una clara vulneración del art. 4 del Reglamento, que impide la discriminación entre parejas casadas y de hecho.
– Sin embargo, al menos un juez matiza que, si el caso se apoya en discriminación por orientación sexual, la discriminación no es directa sino indirecta: la unión civil está concebida sólo para las parejas del mismo sexo (art. 3.1 de la Ley de Uniones Civiles), a las que

[5] "For the purposes of paragraphs (1) and (3), the fact that one of the persons (whether or not B) is a civil partner while the other is married shall not be treated as a material difference in the relevant circumstances".

la ley impide acudir a la institución clásica del matrimonio[6], pero no se distingue de éste más que por la condición homosexual de sus miembros; por tanto, la fórmula de la unión civil es indisociable de la orientación sexual de la pareja, que es la razón última por la que se les niega la habitación; esto convierte la discriminación que parte del artículo 4 en discriminación indirecta por orientación sexual (§§ 57-60). O, como matizan otros dos jueces, en discriminación indirecta de la recogida en el artículo 3.3 del Reglamento, sin necesidad de pasar primero por la discriminación contraria al artículo 4 (§§ 74-78 y 90-92).

Sobre la necesaria justificación, en caso de ser discriminación indirecta

Incluso si, como estos últimos jueces sostienen, la discriminación fuera indirecta, esta no estaría justificada por razones distintas de la orientación sexual: dado que matrimonio y unión civil son equiparables, es difícil interpretar que la consideración de pecado de las relaciones sexuales en el seno de una unión civil no tenga nada que ver con la condición homosexual de sus miembros (§§ 33-36). Si la Ley de Igualdad y su correspondiente Reglamento hubieran querido establecer excepciones por motivos religiosos a su mandato de plena equiparación entre matrimonios y uniones civiles, lo hubieran hecho, como de hecho contienen excepciones ejercitables por las organizaciones religiosas, naturaleza que los apelantes no reúnen (§§ 37 y 38).

Sobre la interpretación del Reglamento conforme al CEDH

Es cierto que algunas de las previsiones del Reglamento de la Ley de Igualdad (Orientación Sexual) de 2007 pueden suponer limitaciones de la libertad de religión protegida por artículo 9.1 del CEDH (§ 41), pero se trata en todo caso de una interferencia prevista en la ley, necesaria en una sociedad democrática, proporcionada al fin perseguido y justificada por pretender un fin legítimo: la protección de los derechos y libertades

---

6 En el momento de producirse los hechos aún no se ha aprobado la Ley reguladora del matrimonio entre personas del mismo sexo, Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (c. 30).

de otros ciudadanos (§§ 44-51) ya que la orientación sexual es un componente esencial de la identidad de una persona, cuya satisfacción sólo es posible a través del establecimiento de relaciones con otros que sean de la misma orientación (§ 52).

c. Fallo

Consecuente con lo expuesto, el Tribunal Supremo desestima por unanimidad la apelación de los Hall.

CALIFICACIÓN DE LUGARES DE CULTO: R (ON THE APPLICATION OF HODKIN AND ANOTHER) V REGISTRAR GENERAL OF BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES[7]

11 de diciembre de 2013

SUMARIO: el fallo determina que, en Inglaterra y Gales, un edificio puede registrarse como "lugar de reunión para el culto religioso" según el artículo 2 de la Ley de Registro de los Lugares de Culto de 1855[8], independientemente de si en los servicios allí celebrados hay o no involucrada una deidad (lo que supone que el Supremo opta por una concepción amplia del término "religión"). En consecuencia, serán válidas aquellas ceremonias matrimoniales celebradas en ellos. La sentencia, dictada el 11 de diciembre de 2013, confirma a la Iglesia de la Cienciología como una religión a todos los efectos jurídicos.

a. Antecedentes

Louisa Hodkin y su prometido desean casarse en la iglesia a la que asisten regularmente en Londres como miembros de la Iglesia de la Cienciología. El ministro de culto está dispuesto a oficiar la ceremonia pero topan con un obstáculo legal: en 1970, en un caso similar (asunto *Seger-*

---

7 [2013] UKSC 77 On appeal from [2012] EWHC 3635 (texto completo en inglés en http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2013/77.html).

8 Places of Worship Registration Act 1855 (c. 81) (18 and19 Vict).

dal[9]) referido a otro local también perteneciente a la Iglesia de la Cienciología, el Tribunal de Apelación le negó el registro por entender que no era un "lugar de reunión para el culto religioso" en el sentido del artículo 2 de la Ley de Registro de los Lugares de Culto, ya que la expresión "lugar de reunión para el culto religioso" (*place of meeting for religious worship*) sugiere un lugar cuyo uso principal es que las personas se unan como una congregación para reverenciar a una deidad; no incluye, por tanto, un edificio utilizado en gran medida para la instrucción en una filosofía relativa a la vida humana como es la Cienciología. Resultado de esa negativa es que los matrimonios allí celebrados no son válidos por no cumplir uno de los requisitos formales exigidos por el artículo 41 de la Ley reguladora del Matrimonio de 1949[10]: el lugar de celebración del matrimonio debe haber sido registrado como apto para su formalización solemne, y para ello es requisito previo que esté registrado como lugar de culto.

En el caso que nos ocupa, un miembro del Consejo de la Iglesia había solicitado en nombre de la Congregación, el 31 de mayo de 2011, el registro de la capilla como lugar de reunión para el culto religioso al amparo de la Ley de Registro de Lugares de Culto, y como local apto para la formalización de matrimonios al amparo de la Ley reguladora del Matrimonio. Tras recibir respuesta negativa, la decisión es recurrida y el juez competente en primera instancia, sintiéndose obligado por el precedente establecido en *Segerdal*, de nuevo niega el derecho a la inscripción por no contar la Cienciología con prácticas que impliquen la adoración de un dios, pese a considerarla religión. Sin embargo, hace constar en su resolución que el asunto involucra una cuestión jurídica de importancia pública general que cumple los requisitos para una "apelación-salto" (*leapfrog appeal*[11]) al Tribunal Supremo, a fin de que éste se pronuncie sobre el significado y la aplicación de la sección 2 de la Ley de Registro de Lugares de Culto a las creencias y prácticas de la Iglesia de la Cienciología y de otras "religiones o filosofías" que pueden practicar de manera similar.

---

9 *R v Registro General, Ex p Segerdal* [1970] 2 QB 697.

10 Marriage Act 1949 (c. 76) (12,13 and 14 Geo VI).

11 Forma excepcional de apelación que en Inglaterra y Gales permite, si se dan las circunstancias requeridas (la principal de ellas que el asunto involucre una cuestión jurídica de importancia pública general), recurrir directamente al Tribunal Supremo saltándose el paso del Tribunal de Apelación.

b. Fundamentos jurídicos

Sobre la función del Registrador General: tiene capacidad de decisión sobre qué lugares son susceptibles de inscripción como lugares de culto y cuáles no. Dicho de otro modo, la inscripción en el Registro de Lugares de Culto no es una mera auto-certificación

El elemento fundamental en la toma de esa decisión es la calificación de los inmuebles como "lugares de reunión para el culto" (§§ 26 y 66f). Originalmente la exigencia de registro tenía unos efectos de carácter puramente administrativo: permitía a las *non-conformist churches*[12] (y luego también a las confesiones católica y judía) inscribir determinados lugares como propios para la oración, a fin de no sufrir los castigos previstos para quienes practicaban el culto fuera de los ritos de la Iglesia anglicana en los tiempos del post-reformismo (§§ 70-71).

Sin embargo, hoy día ha cambiado significativamente el propósito de la Ley, y la inscripción ya no sólo protege frente a la acusación criminal, sino que además otorga una serie de privilegios (§§ 79-82). Eso, unido al significado natural de los términos utilizados por la Ley, y al hecho de que no es la de inscribir la única función decisoria que otorga al Registrador General (§§ 77-79), lleva a los jueces a entender que estamos ante una inscripción no puramente declarativa, lo que excluye la auto-certificación y afirma la tesis de que la Ley de Registro otorga al Registrador General la competencia de aprobar o no la inscripción (§76).

Sobre el concepto de religión y la naturaleza religiosa de la Iglesia de la Cienciología

En *Segerdal,* el Tribunal de Apelación utilizó una concepción teísta de la religión, que exige la reverencia a un dios (§ 31). Sin embargo, y dado que en el Derecho inglés no existe un concepto general de religión, a efectos de la Ley de Registro habrá que interpretar ese concepto de manera contemporánea, huyendo de los peligros que entraña ceñirlo al significado más estricto del término. De hecho, en otros países de tradi-

[12] Iglesias protestantes que se negaron a asumir las doctrinas y solemnidades de la Iglesia establecida, la Iglesia de Inglaterra.

ción jurídica anglosajona (EEUU y Australia) los tribunales ya utilizan esta concepción moderna y amplia de lo religioso (§§ 32-35).

El Juez de Primera Instancia acertó calificando la Cienciología como religión. Cosa distinta es que, pese a ello, pudiera seguir siendo ajustada a Derecho la decisión del Registrador General de no inscribir sus inmuebles como lugares de culto por entender que sus ceremonias y prácticas no equivalen a la adoración religiosa exigida por el Tribunal de Apelación en *Segerdal* (§ 50).

Sin embago, ese concepto estrecho traslada al Registrador General y a los tribunales a un territorio meramente teológico y no exento de dificultad: determinar qué es un "dios supremo" —así por ejemplo, la Iglesia de la Cienciología sí cree en un ser superior que haría las veces de deidad, sólo que es de carácter abstracto e impersonal— (§ 52). Así, no es apropiado que el Registrador General o los tribunales se sumerjan en la tarea teológica de determinar qué creencias son religión y cuáles no, o qué inmueble es lugar de culto religioso y cuál no (§ 53).

Además, el concepto de religión no debe confinarse a aquellas fes que incluyen la creencia en un ser supremo, pues eso excluiría religiones tradicionales y comúnmente aceptadas como tales: budismo, jainismo, teosofía... (§ 51). De hecho, en un contexto diferente, la propia legislación británica opta ya por un concepto amplio de religión. Así, el artículo 3.2.a. de la Ley de Organizaciones Benéficas de 2011[13] establece que el concepto de "religión" incluye también las religiones que impliquen la creencia en más de un dios y las religiones que no defienden a creencia en dios alguno (§§ 54-55).

Sin intentar que sea una fórmula definitiva, sino sólo una descripción, un concepto de religión acorde a los propósitos de la Ley de Registro de Lugares de Culto podría ser el siguiente: sistema de creencias "espirituales o no seculares"[14], compartido por un grupo de adeptos, que trata de explicar el lugar de la humanidad en el universo y su relación con el infinito, y de enseñar a sus seguidores cómo vivir sus vidas de acuerdo con

---

13 Charities Act 2011 (c. 25).

14 En el sentido, aclara la sentencia, de un sistema de creencias que va más allá de aquello que puede ser percibido por los sentidos o verificado por la ciencia ("...belief system which goes beyond that which can be perceived by the senses or ascertained by the application of science").

esa comprensión espiritual asociada al sistema de creencias[15]. Tal sistema de creencias puede, o no, incluir la creencia en un ser supremo, pero sí incluye en todo caso la creencia de que hay más que comprender sobre la naturaleza de la humanidad y su relación con el Universo que aquello que puede ser conocido simplemente a través de los sentidos o la ciencia (§ 57).

En el sentido más arriba expresado, la Cienciología es claramente una religión (§ 60).

Sobre el concepto de "lugar de reunión destinado al culto religioso" ("place of meeting for religious worship")

El culto religioso incluye los oficios religiosos además de la adoración o veneración de una deidad a que el estrecho "concepto *Segerdal*" parece querer reducirlo (§ 62). Esta interpretación más amplia permite a los miembros de una congregación que cuentan con un lugar de reunión destinado al culto religioso llevar a cabo ceremonias matrimoniales allí. Y eso debe aplicarse también a la Iglesia de la Cienciología (§ 63).

Es más, si la Cienciología es una religión, pero sus iglesias, capillas y locales de encuentro no pueden ser registrados como lugares de culto porque en sus oficios religiosos no está presente el elemento de la adoración a la divinidad considerado esencial en *Segerdal*, el resultado es que se impide a sus fieles contraer matrimonio válido para el Estado si quieren hacerlo bajo las formalidades religiosas correspondientes. Podrían celebrarlo en otras instalaciones aprobadas (Ley reguladora del Matrimonio, art. 26.1.bb), pero no podrían introducir en la celebración elementos religiosos (Ley reguladora del Matrimonio, art. 46.B.4). Algo que no les sucede a los ateos, a los agnósticos ni a los seguidores de otros grupos religiosos. Sería ilógico, discriminatorio e injusto permitir que esa interpretación se mantuviera (§ 64).

---

15 "...a spiritual or non-secular belief system, held by a group of adherents, which claims to explain mankind's place in the universe and relationship with the infinite, and to teach its adherents how they are to live their lives in conformity with the spiritual understanding associated with the belief system".

c. Fallo

- Revocar la decisión adoptada en el asunto *Segerdal*.
- Declarar la capilla en cuestión lugar de reunión para el culto religioso en los términos del artículo 2 de la Ley de Registro de Lugares de Culto.
- Ordenar al Registrador General la inscripción de la capilla como lugar para la formalización de matrimonios en los términos del artículo 41.1 de la Ley reguladora del Matrimonio.

COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA PARA CONOCER DE ASUNTOS RELATIVOS A LA DOCTRINA RELIGIOSA:

SHERGILL AND OTHERS (APPELLANTS) V KHAIRA AND OTHERS (RESPONDENTS)[16]

11 de junio de 2014

SUMARIO: los tribunales de justicia pueden entrar en asuntos internos de las confesiones religiosas, incluso si en la disputa entran en juego asuntos doctrinales en la medida en que sean susceptibles de valoración objetiva, cuando sea necesario para decidir sobre los derechos y obligaciones de Derecho privado, o sobre los intereses públicos implicados en el asunto[17].

a. Antecedentes

La apelación se refiere a los conflictos surgidos en la rama Nirmal Kutia Johal de la religión sij establecida en el Punjab. El problema surge entorno a la propiedad y administración de dos templos (*gurdwaras*) en Birmingham y High Wycombe, gestionados mediante fideicomiso.

---

16 [2014] UKSC 33, on appeal from [2012] EWCA Civ 983 (texto completo en inglés en http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2014/33.html).

17 Limito el análisis de la sentencia a los aspectos del caso relacionados con la competencia de los tribunales civiles en asuntos religiosos, sin entrar en los asuntos de Derecho Privado que en él se dilucidan.

Muy resumidamente, el problema aflora tras morir el "Segundo Santo Sagrado" (*Second Holy Saint*), sucesor del Primer Santo Sagrado, a su vez cabeza original de la confesión y fundador de los templos señalados. El Segundo Santo muere en 2002 sin testar y, por tanto, sin haber designado heredero ni para el puesto, ni para sus propiedades. Es sustituido por el que se definió como su "adjunto", Sant Baba Jeet Singh Ji Maharaj Jeet, instituido como 'Tercer Santo Sagrado". En 2003 éste modifica la escritura de constitución de los fideicomisos sobre los *gurdwaras* ingleses y sustituye a los fideicomisarios alegando que, en cuanto sucesor del Primer Santo Sagrado, tiene la facultad de contratar y despedir a los fideicomisarios que los dirigen. Sin embargo, su legitimidad es puesta en duda por no haber sido designado por el Segundo Santo, y los fideicomisarios "cesados" impugnan la modificación de las escrituras y consiguen mantener el control sobre los *gurdwaras*.

A la vista de tales acontecimientos, los partidarios del Tercer Santo acuden en primera instancia al Alto Tribunal de Inglaterra y Gales solicitando la modificación de las escrituras y el consecuente cese de los fideicomisarios rebeldes, lo que les es concedido en 2011. Los demandados intentan entonces abatir esa decisión con el argumento de que se trata de un asunto interno de la confesión no susceptible de ser sometido a juicio por parte de los tribunales estatales ya que involucra un elemento religioso o doctrinal: la solución al caso bascula sobre la condición de verdadero *Holy Saint* del fideicomitente. Al rechazar el Alto Tribunal tal pretensión, los demandados acuden al Tribunal de Apelación. Este da la razón a los demandados en el sentido de que las creencias religiosas no son enjuiciables por los tribunales ingleses, y por tanto este asunto no es de su competencia. Frente a esa decisión, los demandantes recurren al Tribunal Supremo que dicta la sentencia que nos ocupa.

b. Fundamentos

La sentencia rectifica la resolución del Tribunal de Apelación que había declarado el asunto fuera de la competencia de los tribunales ingleses. Comienza por recordar que es cierto que normalmente los Tribunales no tienen competencia sobre el grado de verdad de las creencias religiosas o la validez de determinados ritos religiosos. No tienen, en definitiva y como regla general, competencia en asuntos internos de las confesiones

y por ese motivo se han apartado siempre en las disputas internas de las comunidades religiosas o con una base religiosa.

Sin embargo, cuando las reclamaciones interpuestas ante esos tribunales pretenden proteger derechos y obligaciones de Derecho privado que dependen de asuntos religiosos, el juez sí deberá conocer de esos asuntos religiosos en la medida en que sean susceptibles de valoración objetiva (§ 45). Así pues, los tribunales sí tienen jurisdicción para resolver disputas sobre la propiedad, posesión y el control de los bienes y fondos pertenecientes a las confesiones o entidades dependientes y destinados a fines religiosos, siempre que para su gestión se hayan adoptado fórmulas propias del Derecho civil, como la del fideicomiso (*trust*) (§ 45 y 49). Y para eso, en ocasiones, el tribunal puede tener que entrar a conocer de cuestiones religiosas. Y lo mismo si lo que se pone en juego son intereses de Derecho público (§ 46).

Se niega, por tanto, la idea de que un tribunal deba declararse incompetente ante cualquier caso que someta a su jurisdicción una disputa religiosa (§ 53), sino que habrá que determinar su competencia atendiendo al caso concreto. Es este, además, un principio que rige para todas las religiones por igual (§ 54-55).

c. Fallo

En lo referente a la reclamación frente a la declaración de incompetencia del Tribunal de Apelación, el Supremo decide por unanimidad estimar la apelación.

SUICIDIO ASISTIDO: R (ON THE APPLICATION OF NICKLINSON AND ANOTHER) (APPELLANTS) V MINISTRY OF JUSTICE (RESPONDENT); R (ON THE APPLICATION OF AM) (AP) (RESPONDENT) V THE DIRECTOR OF PUBLIC PROSECUTIONS (APPELLANT)[18]

25 de junio de 2014

SUMARIO: la sentencia resuelve tres recursos distintos aunque de similar contenido y afirma que la previsión del artículo 2.1 de la Ley del Suicidio de 1961[19], que convierte el auxilio al suicidio en un delito penado con prisión, no es incompatible con el derecho a la vida privada y familiar protegido el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ni siquiera cuando el titular de ese derecho haya sufrido lesiones catastróficas que le mantengan inmóvil y por tanto, aun deseándolo, no sea capaz de acabar con su vida sin la ayuda de un tercero. Ello no obstante, en coherencia con el principio constitucional de soberanía parlamentaria, remite al Parlamento la decisión de un posible cambio en la legislación sobre el suicidio asistido por entender que la solución contraria también sería compatible con el Convenio.
Afirma, así mismo, que es competencia del Director del Ministerio Público decidir cuándo procede la persecución y procesamiento por suicidio asistido, en función de las circunstancias concurrentes en cada caso individual, según se prevee en el artículo 2.4 de la misma Ley. En consecuencia, el Tribunal declara conforme a Derecho la política dictada por el Director del Ministerio Público en 2010 en casos de auxilio al suicidio[20], como también lo sería su modificación en el sentido contrario, pero se declara incompetente para obligar a esa modificación.

---

18 [2014] UKSC 38, on appeal from [2013] EWCA Civ 961 (texto completo en inglés en http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2014/38.html).

19 Suicide Act 1961 (c.60): 2(1). "A person who aids, abets, counsels or procures the suicide of another, or an attempt by another to commit suicide, shall be liable on conviction on indictment to imprisonment for a term not exceeding fourteen years".

20 Dicha política establece, en lo que aquí interesa, que haber actuado como empleado o gestor de una organización o grupo entre cuyos fines esté proporcionar a otros un entorno adecuado para la comisión de suicidio (gratuitamente o a cambio de precio), es una de las causas que contribuyen al procesamiento del sospechoso de auxilio al suicidio. Puede consultarse en https://www.cps.gov.uk/publications/prosecution/assisted_suicide_policy.html.

a. Antecedentes

Como consecuencia de un derrame cerebral sufrido en 2005, Tony Nicklinson quedó casi completamente paralizado, pudiendo mover sólo cabeza y ojos. Ello le limitaba incluso al punto de no poder comunicarse más que mediante códigos relacionados con el parpadeo y el movimiento ocular interpretados por un ordenador. En 2007 tomó la decisión consciente, racional y razonada de acabar con su padecimiento quitándose la vida mediante la inyección de un medicamento que resultara letal, lo cual exigía la participación de un tercero, ya le aplicara la inyección personalmente, ya lo hiciera facilitándole una máquina ideada por un doctor australiano que permitiría al señor Nicklinson activarla electrónicamente a través de una orden dada al ordenador. A tal fin solicitó ante las sala de lo administrativo del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales una declaración de que sería lícito que un médico acabara con su vida o le ayudara a hacerlo, o, en su defecto, una declaración de que el artículo 2.1 de la Ley de 1961 era incompatible con sus derechos en virtud del artículo 8 de la Convención. El Alto Tribunal denegó ambas peticiones[21] y finalmente el señor Nicklinson murió de neumonía el 22 de agosto de 2012, tras un penoso proceso voluntario de muerte por inanición.

La señora Nicklinson se subrogó en la posición de su marido ante el Tribunal de Apelación además de actuar como apelante en nombre propio[22], y a la apelación se añadió además Paul Lamb a fin de evitar que, dado que el objeto de la apelación era la solicitud del señor Nicklinson de ser auxiliado para morir y había muerto durante el proceso, la apelación quedara en punto muerto por carecer de fin práctico. El señor Lamb había quedado completamente paralizado, salvo por el movimiento limitado de su mano derecha, tras sufrir un accidente de tráfico en 1990. Su condición era irreversible y necesitaba morfina diariamente para so-

---

21 [2012] EWHC 2381 (Admin), que puede consultarse en inglés en http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2012/2381.html.

22 En *Koch v Alemania* (2012), el TEDH sostuvo que los derechos del cónyuge o pareja de quien desee morir pueden resultar lesionados por el Estado en virtud del artículo 8 del Convenio de Roma como resultado de negar una solución a la parte que desea morir, siempre y cuando exista una relación estrecha entre ellos, y el cónyuge o pareja haya participado activamente en pasos llevados a cabo por aquel para poner fin a su vida (puede consultarse en inglés en http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112282).

portar el dolor, razones que le hacían la vida insoportable y le llevaron a tomar consciente y libremente la decisión de morir.

El último recurrente (en su caso la apelación se cruza con la apelación en sentido contrario del Ministerio Público), señalado en el procedimiento como Martin, sufrió en 2008 un derrame cerebral que le dejó en condiciones muy similares a las de Nicklinson, con el mismo tipo de limitaciones y las mismas dificultades de comunicación y también en una situación irreversible. Como él, pese al cariño de su familia considera que la suya es una vida indigna, angustiosa e intolerable. Desea morir, pero para ello necesita, como Nicklinson, la intervención de un tercero. Tras negarle ese derecho el Alto Tribunal, intentó morir de inanición pero fracasó. Tomó entonces la decisión de viajar a Suiza para hacer uso de los servicios de Dignitas en Zurich. Pero ello exige una serie de gestiones previas en las que su esposa, pese a respetar su autonomía y por tanto su decisión, y pese a querer acompañarle en el momento de su muerte, no estuvo dispuesta a participar por razones comprensibles. Martin tampoco deseaba pedir algo así a su padre o hermanos, lo que le avocaba a requerir en todo caso la ayuda de un extraño sensible a sus necesidades.

b. Fundamentos jurídicos

1. R (on the application of Nicklinson and another) (Appellants) v Ministry of Justice (Respondent)

> Frente al primer recurso, el Tribunal Supremo sostiene unánimemente que la regulación del suicidio asistido reúne las condiciones necesarias para para serle aplicada la doctrina del margen de libre apreciación de los Estados, en este caso Reino Unido, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (§§ 66, 70, 154, 218, 229, 267 o 339). Por tanto, la compatibilidad del artículo 2.1 de la Ley del Suicidio con el artículo 8 del CEDH debe ser juzgada por los Tribunales del Reino Unido a la luz de la Ley de Derechos Humanos de 1998[23]. También hay unanimidad en cuanto al hecho de que el artículo 2.1 podría a priori entrar en conflicto con el artículo 8 CEDH, dado que impide decidir cómo y cuándo morir a quienes no pueden causarse la muerte por sí mismos. En consecuencia,

[23] Human Rights Act 1998 (c. 42). Su artículo 4 prevé la posibilidad de que el Tribunal Supremo realice una declaración de incompatibilidad con el Convenio Europeo de Derechos Humanos en caso de estimar que una previsión normativa incurre en ella.

para que el artículo 2.1 de la Ley del Suicidio sea compatible con el CEDH deberá cumplir con las exigencias de su artículo 8.2[24].

La posición mayoritaria argumenta, aunque con diferencias de matiz entre los jueces, que la del suicidio asistido es una cuestión controvertida y polémica, que implica innegables elementos valorativos, éticos o morales. Presenta además problemas de delimitación, ya que su frontera con la eutanasia es tan porosa que en la práctica podría cruzarse a menudo (§ 226). Exige, por tanto, una delicada reflexión que dé solución al conflicto entre el derecho a decidir cuándo y cómo morir, y el derecho de las personas vulnerables, especialmente ancianos y enfermos, a ser protegidos de cualquier presión directa o indirecta que les conduzca a esa decisión por considerarse una carga para los suyos o para la sociedad, incluida la que la Comisión sobre Muerte Asistida ha denominado "presión social indirecta[25] (§§ 81, 171, 228 o 229). Dado que es improbable que el riesgo de tal presión pueda ser totalmente eliminado, la solución del conflicto se traduce en la respuesta a la pregunta de qué cantidad de ese riesgo es aceptable a cambio de posibilitar el derecho a acabar con su vida a quienes están libres de ella. Esa reflexión implica la toma en consideración de elementos de política social y un análisis ético que convierten al Parlamento, en cuanto órgano representativo de la Constitución, en el adecuado para decidir sobre este tema en uso de su libre margen de apreciación, por las siguientes razones:

– la cuestión implica la elección entre dos valores éticos y jurídicos fundamentales (el derecho a la vida y el derecho a la autonomía personal, ambos protegidos por el CEDH), y no existe consenso social sobre cuál de ellos deba primar en caso de conflicto (§ 228 y 230);
– siendo eso así, se trata de una elección de naturaleza eminentemente legislativa, dado que el Parlamento representa a la comunidad en su conjunto, mientras que una decisión judicial se tornaría en la imposición por parte de los jueces de su opinión personal, lo que dada la materia de que se trata incurriría una clara falta de legitimidad constitucional (§ 230);

---

24 "No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás".

25 Se refiere al problema generado por la baja autoestima de algunos ancianos o enfermos severamente dependientes cuyas percepciones negativas los sitúan en una posición de alta vulnerabilidad en este terreno.

- el procedimiento parlamentario es la manera más adecuada de resolver este tipo de cuestiones complejas y controvertidas que implican un dilema social, dado que permite que puedan expresarse y tomarse en consideración todas las opiniones e intereses implicados (§ 232);
- de hecho, el Parlamento ya ha decidido otras veces cuál era su opción en esta misma materia: aprobó la Ley de Suicidio en 1961 y la modificó en 2009 sin tocar el precepto cuestionado. Y ha rechazado las diferentes propuestas de Leyes de despenalización introducidas (§ 231).

En consecuencia, no consideran pertinente admitir la apelación de los Sres. Nicklinson y el Sr. Lamb.

Las dos posiciones disidentes defienden, en cambio, la declaración de incompatibilidad del artículo 2.1 de la Ley de Suicidio con el artículo 8 CEDH por entender que supone una injustificada restricción del derecho a decidir cuándo y cómo poner fin a la propia vida (incluido en el derecho a la vida privada) de aquellos que no tienen autonomía física suficiente para llevar a cabo su decisión consciente y libremente adoptada (§§ 300, 326).

2. R (on the application of AM) (AP) (Respondent) v The Director of Public Prosecutions (Appellant)

El artículo 2.4 de la Ley de Suicidio de 1961 exige el consentimiento del Director del Ministerio Público para perseguir a quien contravenga el artículo 2.1 (§ 39). La competencia de la Fiscalía para valorar los factores concurrentes en cada caso individual y decidir perseguir la conducta en función de esos factores es perfectamente legítima y cumple con las exigencias del interés general en el sistema procesal penal. (§§ 249 y 271). El Tribunal puede obligar al Ministerio Público a hacer pública su política en este tema, pero no puede dictar cuál deba ser su contenido (§ 141) siempre que, como es el caso, se mueva dentro de los márgenes legales. Si bien durante el proceso la Fiscalía indicó que en virtud de la política dictada en 2010, es muy poco probable el procesamiento de un tercero que, sin buscar beneficio propio, facilite servicios que no conducirían a procesamiento de haberse proporcionado por un pariente cercano, la decisión de una modificación de la Política de 2010 que así lo declare expresamente corresponde, únicamente, al Director del Ministerio Público sin que el Tribunal pueda obligarle a tal cosa (§§ 146, 193, 251 y 323).

b. Fallo

- En el caso de Nicklinson y Lamb el Tribunal desestima la apelación por siete votos contra dos, declarando el artículo 2.1 de la Ley del Suicidio ajustado a Derecho.

– En el caso de Martin, decide estimar por unanimidad la apelación del Ministerio Fiscal y, en consecuencia, desestimar, también por unanimidad, la interpuesta por el Sr. Martin.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA A LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO: ALCANCE DEL DERECHO

GREATER GLASGOW HEALTH BOARD (APPELLANT) V DOOGAN AND ANOTHER (RESPONDENTS) (SCOTLAND)[26]

17 de diciembre de 2014

SUMARIO: la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo sólo puede alegarse frente a actividades que conlleven la participación directa en dicha interrupción, pero no frente a actividades de administrativas y de gestión del servicio, ni a los cuidados médicos posteriores que la mujer tratada pudiera requerir.

a. Antecedentes

La actual redacción de la Ley del Aborto de 1967[27] establece las circunstancias bajo las cuales la interrupción voluntaria del embarazo es legal y puede practicarse en un hospital del Servicio Público de Salud o en una clínica autorizada. Junto a eso, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, que sólo cede cuando sea necesario para salvar la vida o evitar lesiones graves y permanente a la salud de una mujer embarazada[28].

Las demandadas son dos comadronas que trabajan como coordinadoras de la sala de partos de un hospital escocés. Ambas son católicas practicantes que han informado a su empleador de su objeción de conciencia a participar en la interrupción voluntaria de embarazos, deseando

---

26 [2014] UKSC 68, on appeal from [2013] CSIH 36 (texto completo en inglés en http://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2014/68.html).

27 Abortion Act 1967 (c. 87).

28 Artículo 4.1: "No person shall be under any duty, whether by contract or by any statutory or other legal requirement, to participate in any treatment authorised by this Act to which he has a conscientious objection' unless, pursuant to subsection (2), it is 'necessary to save the life or prevent grave permanent injury to the physical or mental health of a pregnant woman".

no tener el menor contacto con pacientes y tratamientos involucrados en tales intervenciones. Aunque los abortos se realizan normalmente en la sala de ginecología, con lo cual no entran entre sus labores cotidianas, en ocasiones tienen lugar en la sala de partos. Como coordinadoras de la misma, su labor es de carácter administrativo y supervisor, sin participación directa en los procedimientos médicos. Descontentas con las medidas adoptadas por su empleador para satisfacer su demanda por parecerles insuficientes, presentaron una queja formal que fue rechazada por considerar que la coordinación y supervisión en que consiste su trabajo no implican participación directa en el tratamiento.

Acudieron entonces a los tribunales alegando la lesión de su libertad religiosa, derecho protegido por el artículo 9 del CEDH. Estos les dieron la razón en segunda instancia[29], por entender el Tribunal que para personas con fuertes convicciones religiosas el aborto voluntario puede ser vivido como algo moralmente repugnante y que, en consecuencia, debe considerarse legítima la negativa a participar en cualquier actividad relacionada con el mismo por estar protegida por el derecho a la objeción de conciencia. Los empleadores recurrieron esa sentencia a ante el Tribunal Supremo.

b. Fundamentos jurídicos

La cuestión central a despejar en el caso es el significado y alcance de la expresión "participar en cualquier tratamiento autorizado por esta Ley al que se plantee objeción de conciencia" (§ 11), y si la negativa de las matronas a delegar, supervisar y/o apoyar al personal que participa en el procedimiento médico de interrupción del embarazo está protegida por ella.

La sentencia defiende que una interpretación restrictiva de la expresión es la más acorde con lo que el Parlamento pretendía cuando aprobó la Ley. "Participar", en el sentido de la Ley, significa tomar parte directa en el tratamiento, y no incluye las actividades administrativas y de gestión relacionadas con el mismo, ni las actividades de cuidado médico y apoyo emocional o pastoral que se presta a las mujeres después del par-

---

[29] [2013] CSIH 36 on appeal from [2012] CSOH 32 (texto completo en inglés: para la primera, http://www.bailii.org/scot/cases/ScotCS/2013/2013CSIH36.html; y para la segunda, http://www.bailii.org/scot/cases/ScotCS/2012/2012CSOH32.html).

to. De hecho, estas actividades no estaban prohibidas antes de la promulgación de la Ley de 1967, y ésta reconoce la objeción de conciencia a participar en cualquier tratamiento "autorizado por esta ley", lo que hay que entender que excluye cualquier práctica que ya estuviera autorizada antes (§§ 37 y 38). La sentencia hace, además, un desglose de las tareas propias de las matronas señalando cuáles están cubiertas por el derecho a la cláusula y cuáles no (§ 39).

El Tribunal recuerda, por último, que en todo caso, y tratándose de la profesión sanitaria, como consecuencia del deber de cuidado debido a los pacientes, el profesional sanitario objetor deberá remitir al paciente a otro profesional no objetor dispuesto a aplicarle el tratamiento que necesite (§ 40).

c. Fallo

El Tribunal acuerda por unanimidad admitir la apelación y revocar la sentencia apelada.

USA
LA SECULARIZACIÓN DEL MATRIMONIO Y EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL MATRIMONIO A LAS PAREJAS DEL MISMO SEXO

Óscar Celador Angón
Universidad Carlos III de Madrid

La sentencia del Tribunal Supremo federal que resolvió el asunto Obergefell et al. v. Hodges, Director, Ohio Department of Health[1], está llamada a desempeñar un papel central en el desarrollo del derecho de familia estadounidense, ya que, por una parte, reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio; y por otra, rompe con la ausencia de uniformidad que existía en este terreno, ya que los Estados habían regulado de forma dispar esta temática.

Hasta la decisión del tribunal Supremo el matrimonio entre parejas del mismo sexo era factible en 37 Estados, en 26 de ellos por decisión judicial[2], en 8 porque así lo prevé la legislación expresamente[3] y en 3 Estados la decisión se adoptó mediante referéndum[4]; de forma opuesta, 13 Estados prohibían expresamente en sus respectivos textos constitucio-

---

1 El texto de la sentencia puede obtener en la página web del Tribunal Supremo federal, http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.

2 Alabama (2015), Alaska (2014), Arizona (2014), California (2013), Colorado (2014), Connecticut (2008), Florida (2015), Idaho (2014), Indiana (2014), Iowa (2009), Kansas (2014), Massachusetts (2004), Montana (2014), Nevada (2014), New Jersey (2013), New México (2013), North Carolina (2014), Oklahoma (2014), Oregón (2014), Pennsylvania (2014), South Carolina (2014), Utah (2014), Virginia (2014), West Virginia (2014), Wisconsin (2014), Wyoming (2014). Un excelente compendio de información estadística en este terreno puede encontrarse en http://gaymarriage.procon.org/view.resource.php?resourceID=004857.

3 Delaware (2013), Hawaii (Dic. 2, 2013), Illinois (2014), Minnesota (2013), New Hampshire (2010), New York (2011), Rhode Island (2013), Vermont (2009).

4 Maine (2012), Maryland (2013), Washington (2012).

nales la celebración de matrimonios entre parejas del mismo sexo, y en 12 de estos se prohibía adicionalmente en su regulación matrimonial[5]. La decisión del Tribunal Supremo anula las disposiciones, bien constitucionales, bien legales, vigentes en 13, y configura al matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho de alcance y garantía federal.

El supuesto de hecho fue el siguiente. Los ordenamientos jurídicos de los Estados de Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee, definían el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Antes estos hechos, 14 parejas del mismo sexo y 2 varones cuyas parejas del mismo sexo habían fallecido denunciaron que la regulación mencionada lesionaba su derecho al debido proceso garantizado en las enmiendas quinta y decimocuarta a la Constitución federal, pues, por una parte, no les permitía contraer matrimonio con sus respectivas parejas, y por otra, impedía reconocer validez jurídica a los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros Estados.

El derecho al debido proceso está protegido en la quinta enmienda de forma que "nadie puede ser forzado a declarar contra sí mismo en ningún juicio criminal; ni se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal"; por su parte la sección primera de la decimocuarta enmienda, señala que: "[...] Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrá ningún Estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad, sin un debido proceso legal; ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes"[6].

---

5 Arkansas (2004, 1997), Georgia (2004, 1996), Kentucky (2004, 1998), Louisiana (2004, 1999), Michigan (2004, 1996), Mississippi (2004, 1997), Missouri (2004, 1996), North Dakota (2004, 1997), Ohio (2004, 2004), South Dakota (2006, 1996), Tennessee (2006, 1996), Texas (2005, 1997). En el caso de Nebraska (2000) sólo se prohibía a nivel constitucional.

6 Esta enmienda fue aprobada después de la Guerra civil estadounidense, y ha sido utilizada tradicionalmente por el Tribunal Supremo federal para exigir a los Estados miembros el cumplimiento y garantía de los derechos contenidos en las ocho primeras enmiendas a la Constitución federal. Vid. Palomino, R., Las objeciones de Conciencia, Montecorvo, Madrid, 1994, p. 28. Choper, J., The Free Exercise Clause: A Structural Overview and an Appraisal of Recent Developments, en William and Mary Law Review, Vol. 27 (1986), pp. 943-61. Laycock, D., Waelbroeck, S. E., Academic Freedom and Free Exercise of Religion, en Texas Law Review, Vol. 66, (1988), pp. 1455-75. Pepper, S., Taking the Free Exercise Clause Seriously, en Brigham Young University Law Review, Vol. 1986, (1986) pp. 299-336.

La competencia para conceder licencias matrimoniales es exclusiva de los Estados, con independencia del sexo o la orientación sexual de los contrayentes. Desde esta perspectiva, cuando un Estado no concede a una pareja del mismo sexo una licencia matrimonial está impidiendo que los miembros de la pareja puedan ejercer el derecho al matrimonio de acuerdo con su orientación sexual y, según los demandantes lesionando su derecho al debido proceso.

Desde la perspectiva histórica, la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal en este terreno se ha caracterizado por garantizar y ampliar el ejercicio del derecho al matrimonio a colectivos que en determinados momentos históricos se han visto privados del mismo. Por ejemplo, en el asunto Loving v. Virginia[7] el tribunal estableció que la prohibición de celebrar matrimonios interraciales, contenida en los ordenamientos jurídicos de algunos Estados, eran contrarias a la Constitución federal. Asimismo, el tribunal estimó en el asunto Richard John Baker v. Gerald R. Nelson que la normativa penitenciaria que prohibía a las personas privadas de libertad en instituciones penitenciarias contraer matrimonio era inconstitucional[8]. En las decisiones señaladas, el Tribunal Supremo ha venido definiendo el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, e incluso en el asunto Baker v. Nelson el Tribunal Supremo no entró a valorar una decisión del Tribunal Supremo del Estado de Minnesota, que reconducía el matrimonio a las parejas de diferente sexo, al entender que esta competencia no era federal[9].

La primera vez que el Tribunal Supremo federal se pronunció de forma expresa sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, fue con ocasión del recurso presentado con el Acta en Defensa del Matrimonio, aprobada durante la administración Clinton en 1996. El tribunal estimó en el asunto United States v. Windsor[10] que la sección tercera de la ley, que definía el matrimonio en el ámbito federal como una unión legal entre un hombre y una mujer, era discriminatoria y contraria al derecho al

---

7 388 U.S. 1 (1967).

8 Turner v. Safley, 482 U.S. 78 (1987).

9 Richard John Baker v. Gerald R. Nelson, 291 Minn. 310, 191 N.W.2d 185 (1971), 409 U.S. 810 (1972).

10 United States v. Windsor, 570 U.S. - (2013). El texto de la sentencia puede obtener en la página web del Tribunal Supremo federal, http://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-307_6j37.pdf.

debido proceso legal garantizado en la quinta enmienda a la Constitución federal.

El Tribunal estableció que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho garantizado por las enmiendas quinta y decimocuarta, y que por lo tanto las leyes estatales que impidan o prohíban el ejercicio de este derecho son inconstitucionales.

El tribunal soportó su decisión en los siguientes argumentos:

En primer lugar, el tribunal estimó que el derecho de las personas a desarrollar su personalidad en el contexto de las relaciones personales de pareja se deriva de su derecho a la autonomía individual. En concreto, el tribunal recordó su posición en el asunto Loving[11], donde anuló las legislaciones de los Estados que prohibían el matrimonio entre personas de diferente raza al amparo del principio de libertad contenido en la decimocuarta enmienda, y estableció que los Estados no pueden aprobar normas que limiten arbitrariamente la libertad de las personas, toda vez que la decisión sobre con quién contraer matrimonio es una de las decisiones más personales e íntimas que existen.

El segundo argumento utilizado por el tribunal fue la configuración del derecho al matrimonio como un derecho fundamental "inherente a la libertad del ser humano"[12], que debe respetar y garantizar una decisión íntima y personalísima de dos individuos que está llamada a tener un papel central en el libre desarrollo de su personalidad. La conceptuación del derecho al matrimonio como un derecho fundamental ha sido una constante en la jurisprudencia del tribunal, y esto ha permitido reconocer primero derechos a las parejas de diferente sexo, y posteriormente ampliar dicho reconocimiento a las parejas del mismo sexo. En este sentido, destacan las decisiones del tribunal en el asunto Griswold v. Connecticut, donde estableció que la constitución garantiza el derecho de las parejas casadas a utilizar medios anticonceptivos[13]; y en el asunto Lawrence v. Texas, donde estableció que el alcance y contenido del derecho a la intimidad y a no ser objeto de persecución penal por razón de la orientación

---

11 388 U.S. 1 (1967).

12 Syllabus, p. 4. En este sentido Vid. Celador Angón, Oscar, El matrimonio entre personas del mismo sexo en el estado de California, o de cómo el activismo judicial puede suplantar el papel del legislador. Análisis comparativo con el modelo matrimonial español, en Laicidad y libertades: escritos jurídicos, Nº. 8, 2008, pp. 8-52.

13 Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).

sexual debe ser el mismo para las parejas del mismo sexo que para las parejas de diferente sexo[14]. Por este motivo, según el tribunal, cuando un Estado impide expresa o tácitamente que un colectivo pueda ejercer el derecho al matrimonio, o cuando no reconoce efectos jurídicos a los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados válidamente en otros Estados, está vulnerando la decimocuarta enmienda[15].

En tercer lugar, el tribunal estimó que el reconocimiento del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo permitiría mejorar la protección de los menores que en muchos supuestos conviven con estas parejas, y evitaría en muchos supuestos que los menores sean discriminados, ya sea por interpretar que sus relaciones de parentesco y familiares son de peor calidad que las que tienen los menores que conviven con matrimonios, ya sea porque jurídicamente se equipara en derechos y obligaciones a los miembros de la unidad familiar. Asimismo, se mantiene la línea jurisprudencial del tribunal de disociar matrimonio y procreación, en el sentido de que las parejas no pueden ser tratadas de forma diferente atendiendo a su capacidad para tener hijos.

El cuarto argumento utilizado por el tribunal fue la contribución de la institución matrimonial al mantenimiento del orden social, con independencia de que los titulares del derecho al matrimonio sean las parejas del mismo o de diferente sexo. Según el tribunal, "el hecho de que el ordenamiento jurídico pueda denegar a las parejas del mismo sexo los beneficios previstos para los matrimonios es algo simplemente intolerable. Sería degradante sacar a las parejas del mismo sexo de una institución tan relevante para la sociedad [...] la limitación del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo podía parecer algo natural y justo hace algunos años, pero en la actualidad es incongruente con el contenido del derecho fundamental al matrimonio"[16].

---

14 Lawrence v. Texas 539 U.S. 567 (2003).

15 En palabras del tribunal, "The Fourteenth Amendment requires States to recognize same-sex marriages validly performed out of State. Since same-sex couples may now exercise the fundamental right to marry in all States, there is no lawful basis for a State to refuse to recognize a lawful same-sex marriage performed in another State on the ground of its same-sex character", pp. 27-28.

16 P. 17 del voto mayoritario. Asimismo, el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo debe interpretarse de acuerdo con los derechos a la igual protección de las leyes y al debido proceso, contenidos en la decimocuarta enmienda a la Constitución federal y fuertemente conectados en la tradición constitucional estadounidense

Por último, pero de forma central en su argumentación, el tribunal analizó el problema desde la perspectiva del principio, contenido en la decimocuarta enmienda, de que el Estado no puede "negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección igual de las leyes". La legislación de los Estados de Michigan, Kentucky, Ohio y Tennessee, preveía la concesión de una serie de beneficios exclusivamente para los matrimonios, lo cual suponía una doble discriminación para las parejas del mismo sexo pues, primero la legislación de los Estados mencionados les impedía ejercer un derecho fundamental debido a la orientación sexual de los integrantes de la pareja, y después, pero consecuencia de lo anterior, las parejas del mismo sexo no podían disfrutar de los mismos beneficios que las parejas de diferente sexo.

Por lo que respecta al derecho de libertad religiosa, el tribunal fue consciente de que para numerosos grupos religiosos el matrimonio solo puede celebrarse entre un hombre y una mujer. Sin embargo, el tribunal interpretó que su decisión no afecta a la libertad religiosa de aquellos que quieran celebrar su matrimonio de acuerdo con sus creencias o convicciones, pues se limita a reconocer un derecho a un colectivo históricamente excluido de esta realidad sin mermar los derechos de otros colectivos. Desde esta perspectiva, el derecho a la libertad religiosa permite a las confesiones religiosas explicar a sus fieles cuáles es la opción matrimonial acorde con sus principios religiosos, pero este derecho debe armonizarse con el de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y a no ser discriminados en ese contexto[17].

La decisión del tribunal se adoptó por una ajustada mayoría de 5 votos contra 4, en la que Kennedy, Ginsburg, Breyer, Sotomayor y Kagan representaron a la mayoría. Roberts, Scalia, Thomas y Alito votaron en contra de la decisión y firmaron votos particulares a los que a continuación vamos a referimos.

El juez Roberts criticó el hecho de que fuera el activismo judicial del tribunal, y no un proceso democrático en el que los ciudadanos de los Estados se pronunciasen al respecto, el que ha permitido adoptar una de-

---

pues su interpretación conjunta supone el reconocimiento a la igualdad en el ejercicio y titularidad de los derechos contenidos en la Constitución federal Vid. Zablocki v. Redhail 434 U.S. 374 (1978).

17 P. 27.

cisión tan relevante para la sociedad estadounidense. De hecho, la decisión del tribunal era contraria a lo que habían decidido los ciudadanos de varios Estados a través de los cauces democráticos tradicionales, bien directa y expresamente vía referéndum manifestando su opinión contraria a que las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio, o bien indirectamente en los procesos electorales estatales[18]. Por los motivos señalados, Roberts estimó que la mayoría del tribunal había creado un derecho en contra de la tradición histórica, el sentir y la opinión de la mayoría de la población estadounidense.

En esta línea, el juez Scalia calificó al voto de la mayoría como una "amenaza al modelo democrático americano", en la medida en la que supone que "la mayoría de los nueve miembros del Tribunal Supremo se conviertan en el legislador de 320 millones de americanos [...] La revisión constitucional realizada por un comité que no ha sido elegido directamente por el pueblo compuesto por nueve personas, siempre acompañado por alabanzas extravagantes a la libertad, ha robado al Pueblo la libertad más importante que ganó en la Revolución de 1776 y que garantizó la Declaración de la Independencia: la libertad de autogobernarse"[19].

El Juez Alito señaló en su voto particular que la Constitución federal no establece nada en el terreno matrimonial, con el objeto de que sean los Estados los que regulen esta materia tal y como establece la décima enmienda, según la cual "Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados o al pueblo". La incorporación de derechos al ámbito federal a través de la decimocuarta enmienda es factible cuando se trata de

---

18 En palabras de Roberts "Federal courts are blunt instruments when it comes to creating rights. They have constitutional power only to resolve concrete cases or controversies; they do not have the flexibility of legislatures to address concerns of parties not before the court or to anticipate problems that may arise from the exercise of a new right [...]That view is more modest and restrained. It is more skeptical that the legal abilities of judges also reflect insight into moral and philosophical issues. It is more sensitive to the fact that judges are unelected and unaccountable, and that the legitimacy of their power depends on confining it to the exercise of legal judgment. It is more attuned to the lessons of history, and what it has meant for the country and Court when Justices have exceeded their proper bounds. And it is less pretentious than to suppose that while people around the world have viewed an institution in a particular way for thousands of years, the present generation and the present Court are the ones chosen to burst the bonds of that history and tradition", pp. 27, 29.

19 P. 1. del voto particular.

libertades públicas "fuertemente enraizadas en la historia y la tradición norteamericana", lo cual no es el caso de la libertad individual para contraer matrimonio entre personas del mismo sexo, pues el debate judicial es relativamente novedoso al comenzar en 2003 cuando el Tribunal Supremo del Estado de Massachusetts se pronunció favorablemente en ese sentido[20]. En otras palabras, según Alito, la mayoría de los miembros del tribunal decidieron configurar el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio como un derecho protegido por la Constitución federal debido a su carácter de derecho fundamental, pero distorsionando el alcance y contenido de la decimocuarta enmienda.

El juez Thomas también denunció que el voto mayoritario realizó una interpretación atípica de la decimocuarta enmienda, al ordenar a los Estados que emitan licencias matrimoniales para las parejas del mismo sexo que lo soliciten, y reconozcan validez y eficacia jurídica a los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros Estados. En palabras de Thomas: "los demandantes han solicitado algo anti democrático. Han pedido a los nueve jueces que componen este tribunal que adopten una definición de matrimonio en el contexto federal, y que impongan la misma a toda la nación ignorando los procesos democráticos de toma de decisiones. El hecho de que la mayoría de los miembros de este tribunal pueda acceder a la petición mencionada, eliminando con un golpe de teclado los resultados de los procesos democráticos desarrollados en más de 30 Estados, ilustra lo peligrosa que es dicha cláusula constitucional"[21].

---

[20] P. 2 del voto particular, en referencia al asunto Washington v. Glucksberg, 521 U. S. 701, 720-721 (1997).

[21] P. 3 del voto particular.

REVISTA "LAICIDAD Y LIBERTADES ESCRITOS JURÍDICOS"

FICHA DE SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA "LAICIDAD Y LIBERTADES. ESCRITOS JURÍDICOS"

Fecha de solicitud:

DATOS DEL SUSCRIPTOR:

Entidad:
Dirección:
Código Postal Población y Provincia:
Teléfono: Fax: Dirección de E-mail:
NIF:

Cuota anual: 50 Euros

DATOS BANCARIOS:

Entidad.				Sucursal.				D. C.		Cuenta corriente/Libreta de Ahorro.									

Nombre de la Entidad:
Dirección de la Sucursal:
Código Postal: Población y Provincia:

(Estos datos aparecen en los talones y libretas de ahorro. Las solicitudes con datos incompletos o incorrectos no serán atendidas)

AUTORIZACIÓN BANCARIA:

Ruego tengan la amabilidad de atender los recibos que les presente a mi nombre la Revista: *Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos,* con cargo a la cuenta en esa sucursal cuyo número indico más arriba.

Firma:

Nota: Envíe el original de esta solicitud, debidamente cumplimentado y firmado a su Banco o Caja y a:

Revista Laicidad y Libertades. Escritos Jurídicos.
SERVICIO DE PUBLICACIONES DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
Facultad de Derecho.
Ciudad Universitaria s/n.
28040 Madrid

ASOCIACIÓN "DERECHO, LAICIDAD Y LIBERTADES"

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Fecha de solicitud:

DATOS DEL SOCIO:

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Código Postal Población y Provincia:
Teléfono: Fax: Dirección de E-mail:
NIF:

Cuota anual: 72 Euros.

DATOS BANCARIOS:

Entidad.				Sucursal.				D. C.		Cuenta corriente/Libreta de Ahorro.									

Nombre de la Entidad:
Dirección de la Sucursal:
Código Postal: Población y Provincia:

(Estos datos aparecen en los talones y libretas de ahorro. Las solicitudes con datos incompletos o incorrectos no serán atendidas)

AUTORIZACIÓN BANCARIA:

Ruego tengan la amabilidad de atender los recibos que les presente a mi nombre la Asociación: *Derecho Laicidad y Libertades,* con cargo a la cuenta en esa sucursal cuyo número indico más arriba.

Firma:

Nota: Envíe el original de esta solicitud, debidamente cumplimentado y firmado a su Banco o Caja y a:

Profª. Mª Cruz Llamazares Calzadilla
E-mail: mllamaza@der-pu.uc3m.es Tel.: 91 624 98 19
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas.
Universidad Carlos III de Madrid.
C/ Madrid 126.
28903 Getafe. Madrid.